

Conflicto Social

Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social
Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales - UBA



24

Dossier:

“Culturas y tradiciones de lucha”

Coordinado por Jorge Castro Rubel y Matías Artese

Año 13 – Número 24 – Julio a Diciembre de 2020 – ISSN 1852-2262
<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS>



Propósitos

La revista Conflicto Social es una publicación electrónica de periodicidad semestral del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social, con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Tiene como objetivo constituirse en un ámbito de producción, reflexión y debate en el vasto campo de la problemática del conflicto y el cambio social, que incluyen tanto las relaciones de explotación y dominación como las resistencias y luchas sociales y políticas que aquellas generan, ya sea en procesos nacionales como internacionales. Con el propósito de aportar a una perspectiva crítica y analítica amplia, está abierta a la recepción de artículos basados en diversas corrientes o enfoques teóricos, epistemológicos y metodológicos. La revista está dirigida al conjunto de la comunidad académica, investigadores, docentes y estudiantes de grado y de postgrado.

Conflicto Social

ISSN 1852-2262

Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social

Instituto de Investigaciones Gino Germani

Presidente J. E. Uriburu 950, 6to. Piso, of.18

(C1114AAD) Buenos Aires, Argentina

Tel.: (54) (11) 4508-3815 int 211

Fax: (54) (11) 4508-3822

E-Mail: programaconflicto@mail.fsoc.uba.ar

Se permite y alienta la copia y utilización de todos los contenidos de esta revista bajo los términos de una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)

Cuerpo Editorial

Dirección

Matías Artese

Consejo de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), UBA. Argentina

In memoriam Inés Izaguirre (2008-2019)

Coordinación General

Marta Danieletto

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Comité Editorial

Jorge Castro Rubel

CONICET - Universidad de Buenos Aires, Argentina

Iván Montes de Oca

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Georgina Perrone

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Gabriela Roffinelli

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Guadalupe Seia

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires (UBA) - Instituto de Altos Estudios Sociales - Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM)

Comité Académico Asesor*

Perla Aronson

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Pablo Bonavena

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Alberto Bonnet

Universidad Nacional de Quilmes

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Lisandro Braga

Universidade Federal do Paraná/UFPR, Curitiba, Brasil.

Alcira Daroqui

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

Nélida Diburzi

Universidad Nacional del Litoral, Argentina.

Rodolfo Elbert

Universidad de Buenos Aires, Argentina.

* Formaron parte del Comité Académico hasta su fallecimiento: Demetrio Taranda, Alberto José Fernández y Juan Carlos Marín.

Carlos Figueroa Ibarra	Universidad Autónoma de Puebla, México
Guido Galaffasi	Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Marcelo Gómez	Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
Felipe Gómez Isa	Universidad De Deusto. Bilbao. España.
Gustavo Guevara	Universidad Nacional de Rosario y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Gabriel Hetland	Latin American, Caribbean and U.S. Latino Studies, Sociology Department, University at Albany, SUNY, EE.UU.
Nicolás Iñigo Carrera	Universidad de Buenos Aires. Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina.
Pablo Lapegna	Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Universidad de Georgia (Georgia, EEUU).
Flabián Nievas	Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Enrique Pastor Seller	Universidad de Murcia, España.
Adrián Piva	Universidad Nacional de Quilmes / Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Adriana Pons	Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
Martín Retamozo	Universidad Nacional de la Plata, Argentina.
Francisco Rivera Tobar	Universidad de Santiago de Chile (USACH) y Universidad de Chile, Chile.
Adriana Rodríguez	Universidad Nacional del Sur, Argentina.
Robinson Salazar	Universidad Autónoma de Sinaloa. México.
Alejandro Schneider	Universidad de Buenos Aires, Argentina. Universidad Nacional de La Plata, Argentina.
Aníbal Viguera	Universidad Nacional de La Plata, Argentina.

Diseño

Marcelo Garbarino

Conflicto Social

ISSN 1852-2262

Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Presidente J. E. Uriburu 950, 6to. Piso, of.18 (C1114AAD) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54) (11) 4508-3815 int 211 Fax: (54) (11) 4508-3822
E-Mail: programaconflicto@mail.fsoc.uba.ar

Conflicto Social

Revista del Programa de Investigaciones sobre Conflicto Social
ISSN 1852-2262 - Vol. 13, N° 23 - Enero a Junio 2020 - pp. 2-3
<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS>

Sumario

Dossier: “Culturas y tradiciones de lucha”

Presentación

Jorge Castro Rubel y Matías Artese 8-13

Experiencia y poder. Una hipótesis acerca de la configuración de repertorios de acción colectiva en sistemas socio-económicos.

Experience and power. A hypothesis about setting up collective action repertoires in socio-economic systems.

Candela Hernandez, Julián Rebón y Agustina Súnico 14-53

Experiencias de lucha y lucha cultural en Francia (1968).

Experiences of struggle and cultural struggle in France (1968).

Lisandro Braga 54-73

Criminalización de luchas territoriales en el norte de la Patagonia (2009-2015).

Criminalization of territorial struggles in northern Patagonia (2009-2015).

Mariana Giaretto 74-106

Estudios sociales, tradiciones de lucha y movimientos de desocupados en Argentina: reflexiones teórico-metodológicas.

Social studies, traditions of struggle, and unemployed movements in Argentina: theoretical-methodological considerations.

José Benclowicz 107-131

Paro Internacional de Mujeres: ¿nueva tradición de lucha del movimiento feminista?

International Women's Strike: a new tradition of struggle for the feminist movement?

Paula Varela 132-161

- Los propietarios en la calle. Argentina 2008-2020.
The proprietors in the street. Argentina 2008-2020.
María Celia Cotarelo 162-180
- Luchas campesinas en Argentina: la supervivencia de un sujeto incómodo en los albores del Siglo XX.
Peasant struggles in Argentina: the survival of an uncomfortable subject at the beginning of the 21st century.
Juan Wahren y Luciana García Guerreiro 181-215

Espacio Abierto

- De la dignidad. Reflexiones sobre la racionalidad de las acciones insurreccionales.
On dignity. Reflections on rationality of insurrectional actions
Alberto Bonnet 216-237
- “De cada fábrica una fortaleza”: el PRT-ERP en Talleres Electromecánicos Norte S.A (TENSA), 1973-1976.
"From each factory one fortress": PRT-ERP in Talleres Electromecánicos Norte S.A (TENSA), 1973-1976.
Santiago Stavale 238-265
- El fin de la lucha armada en la Argentina. Montoneros y su segunda Contraofensiva (1980)
The end of the armed struggle in Argentina. Montoneros and their second Counter offensive (1980)
Hernán Eduardo Confino 266-297

Formas excepcionales de la violencia en el cautiverio clandestino: el trabajo forzado de prisioneras de la ESMA en la Cancillería argentina <i>Exceptional forms of violence in clandestine captivity: the forced labor of ESMA prisoners in the Argentine Foreign Ministry</i> Facundo Fernández Barrio	298-324
Teoría económica del conflicto: un análisis crítico desde la reincorporación de las FARC <i>Economic theory of conflict: critical analysis since the FARC reincorporation</i> Jorge Armando Cañón Niño	325-357
Aproximación crítica al estudio de la lucha de clases en el territorio correntino a fines del siglo XX: "Crisis de acumulación y hegemonía". Las estrategias de los sujetos del conflicto <i>Critical approach to the study of the class struggle in the territory of Corrientes at the end of the 20th century: "Crisis of accumulation and hegemony". The strategies of the subjects of the conflict</i> Marcelo Graciosi	358-389
El '68 checoslovaco y la intervención militar soviética: el debate en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario <i>The Czechoslovak '68 and the soviet military intervention: the debate in the origins of the Revolutionary Communist Party</i> Juan Manuel Cisilino	390-419
Vestigios del archivo audiovisual. La Cinemateca del Tercer Mundo en la Universidad de Buenos Aires (1973-1974) <i>Vestiges of the audiovisual archive. The Third World Cinematheque at the University of Buenos Aires (1973-1974)</i> Jorge Laplace	420-443

Reseñas

María Laura Ortiz (2019) *Con los vientos del Cordobazo. Los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión*. Córdoba: Ed. de la UNC. 460 págs.
Por Francisco Caamaño 444-447

Política editorial e instrucciones para los autores 448

Enlaces institucionales 449

Presentación del dossier: "Culturas y tradiciones de lucha"

Jorge Castro Rubel y Matías Artese*

La invitación al Dossier que aquí compartimos tuvo por objetivo sumar diversas miradas sobre el acontecer actual e histórico del conflicto social, centrándonos en un aspecto en particular: "las tradiciones de lucha". Y, con ese objetivo general, conocer a través de distintas propuestas dichas tradiciones en las dinámicas mismas de los enfrentamientos, sus legados, las implicancias políticas subyacentes y sus elementos novedosos, entre otras cuestiones.

Las "tradiciones de lucha" pueden ser pensadas como formas más o menos estables de enfrentamiento, de cuestiones en disputa y de modalidades organizativas (las huelgas de las clases trabajadoras, por ejemplo). Formas, cuestiones en disputa y modalidades organizativas, entre otros elementos, que se mantienen en el tiempo. No obstante, no en todos los lugares y momentos la conflictividad social se expresa bajo los mismos formatos, se manifiesta alrededor de iguales objetivos y se da a partir de las mismas modalidades de organización. Si bien es cierto que los cambios en estas dimensiones no se dan necesariamente de modo continuo y acelerado, una mirada de largo plazo da cuenta de que existen modificaciones en las mismas. Es decir, las tradiciones de lucha así como se sostienen en el tiempo pueden también sufrir cambios y renovarse.

Desde nuestro punto de vista, la cuestión de las tradiciones de lucha implica una problemática fundamental del análisis del conflicto, por lo que creemos relevante profundizar en su investigación y reflexión.

En tal sentido, presentamos en este número a diversos investigadores e investigadoras que han trabajado temáticas disímiles pero que conforman, como unidad, un más que interesante aporte investigativo acerca de esta problemática.

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG-UBA), Revista Conflicto Social.

Hernández, Rebón y Súnico realizan un aporte de índole teórico, al presentar un modelo analítico para el estudio de los repertorios de acción contenciosa en diversos escenarios. En esta dirección, el artículo que se presenta propone un modelo teórico en el que se identifican cuáles son las variables que intervienen en la selección e implementación de determinadas *performances* confrontativas en los conflictos que se suscitan en diversos sistemas socioprodutivos y, también, como señalan los autores, "en otros pares de confrontación anclados en relaciones de dependencia" y en conflictos de "otro tipo". En la perspectiva de estos autores, las formas que asume la acción colectiva contenciosa se encuentra condicionada por dos variables: "la experiencia de lucha" de los actores involucrados y "los recursos de poder" que tienen estos a su disposición. Dicha propuesta teórica, que retoma aportes teóricos de Charles Tilly y de autores neomarxistas como Erik Olin Wright y Beverly Silver, se fundamenta en el estudio de dos casos de luchas particulares, los que tuvieron lugar en el sistema de trenes de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y en la empresa YPF, en la cuenca neuquina, entre los años 2003 y 2015.

Lisandro Braga, investigador de la Universidad Federal de Goiás, Brasil, nos presenta una relectura sobre los hechos acontecidos del ya visitado Mayo Francés de 1968, a partir de la hipótesis de la ruptura con lo que el autor denomina "régimen de acumulación conjugado"; es decir, el avance de la acumulación de tipo fordista del capital en conjunto con las formas burocráticas que las burguesías implementaron para organizar la sociedad. Como proceso iniciado y trunco, el autor retoma las tradiciones de lucha –que además de las luchas de calles incluyeron una verdadera batalla cultural-ideológica– del estudiantado y proletariado industrial francés contra las fuerzas de seguridad del régimen y las direcciones estudiantiles y sindicales.

En su estudio sobre las luchas por la tierra en la Patagonia, Mariana Giarretto retoma un debate fundamental entre diversas corrientes teóricas referidas al conflicto y la protesta social: las lecturas fragmentarias -que incluyen ciertas pretensiones de novedad, quizás basadas en esa frag-





mentación teórica-, frente a las lecturas que colocan a los conflictos como expresiones particulares de una totalidad compleja de la lucha de clases, en el inmanente marco depredatorio (fracking, megaminería) del capitalismo extractivista. La tierra constituida como mercancía y la criminalización y estigmatización de quienes cuestionan esa relación serán los ejes principales de la investigación. En tal sentido, y como menciona Giaretto: "los territorios no son sólo los territorios de las comunidades indígenas, los barrios también son territorios en donde se despliegan las contradicciones de la sociedad de clases".

Con una amplia apoyatura de investigaciones teórico-empíricas, tanto de autores clásicos como más circunscritos al problema que motora el artículo, la autora indaga en la relación conflictiva que implica el uso de la tierra como mercancía, con una propuesta metodológica cualitativa, que incluye el trabajo de campo a través de entrevistas y observación participante que grafican elocuentemente el conflicto en cuestión.

En un tono similar, el trabajo de José Benclowicz abreva en una discusión teórica acerca de las tradiciones de lucha de los trabajadores desocupados: sus caracterizaciones recientes en las ciencias sociales locales son discutidas como parte de un debate que está lejos de cerrarse. Benclowicz demuestra, tomando el caso del movimiento piquetero desarrollado en la provincia de Salta a comienzos de este siglo, que la incidencia de categorías novedosas para caracterizar la lucha de los trabajadores desocupados por momentos resulta forzada e, incluso, derivan en resultados ficticios. Con una serie de investigaciones ya desarrolladas, el autor aporta datos y aspectos relevantes de corte historiográfico -con la trascendencia de los hechos del pasado que se enlazan con los del presente- y también sociológico, que dan cuenta de experiencias y tradiciones de lucha que nada tienen de recientes o de nuevas en el caso de la organización de los trabajadores desocupados.

Paula Varela realiza un análisis del Paro Internacional de Mujeres (PIM), evento que se llevó adelante por primera vez el 8 de marzo de 2017 y que da cuenta de la vitalidad y madurez organizativa del movimiento fe-

minista en los últimos años, tanto en la Argentina como en una gran parte del mundo.

En una primera parte de su artículo, Varela realiza un breve recorrido histórico que le permite interpretar el surgimiento del PIM como un punto de llegada de una serie de luchas feministas desarrolladas en distintos lugares del mundo. De esta manera, el PIM es pensado como continuación y novedad del ya histórico movimiento feminista. También, presenta los distintos recursos organizativos que se emplearon para que dicho evento se pudiera llevar a cabo y las consignas por las que se protestó, entre las que destacaron demandas de las mujeres en general y otros reclamos propios de las mujeres trabajadoras.

En una segunda parte del artículo, la autora se propone reflexionar sobre las causas por las que la articulación del movimiento feminista en el plano internacional se da en la actualidad bajo el formato de PIM. En esta línea, Varela señala que una de las razones es que la nueva ola feminista, cuya principal expresión es el PIM, tiene lugar en un contexto de crisis capitalista global que tiene como una de sus principales personificaciones afectadas a "las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares". En segundo lugar, esto se explica por la existencia de una "crisis de la reproducción social" producto de la ofensiva neoliberal, que impone peores condiciones de vida a la clase trabajadora, especialmente a las mujeres de esta clase. Una última cuestión que explica la centralidad del PIM es "el carácter transversal del trabajo de las mujeres que las coloca en una ubicación anfibia entre producción y reproducción".

María Celia Cotarelo, por su parte, estudia la acción callejera de protesta de los "sectores reaccionarios y conservadores" de la Argentina entre 2008 y 2020; movilizaciones que fueron impulsadas por la fracción directriz de la clase dominante, "la oligarquía financiera", si bien en su interés se movilizaron otras fracciones burguesas y asalariados. Su trabajo aborda, en tal sentido, un objeto de análisis que no suele ser muy visitado en las ciencias sociales argentinas.

En su trabajo, Cotarelo formula (y responde a) un conjunto de pre-





guntas sumamente interesantes acerca de este tipo de movimientos: ¿Por qué la dirección de la clase dominante apela a la lucha callejera durante el período 2008-2020? ¿En qué momento lo hace? ¿Qué fines persigue? ¿Estas movilizaciones implican fortaleza o debilidad?

Para responder a estas preguntas, y poder pensar entonces la estrategia de confrontación de la dirección de la clase dominante, Cotarelo apela al estudio de "hechos de protesta y lucha protagonizados por sectores reaccionarios y conservadores", que se encuentran registrados en la base de datos del PIMSA, confeccionada a partir de la información de los diarios Página 12, Clarín, La Nación y Crónica. Se trata, de esta manera, de un trabajo fuertemente empírico pero que, al mismo tiempo, dicho registro se inscribe en un marco teórico orientado a interpretar la lucha de clases en la Argentina.

Juan Wahren y Luciana García Guerreiro proponen un abordaje que contempla el largo plazo, desde comienzos del siglo XX a inicios del XXI, sobre las luchas de una personificación social que denominan "incómoda", el campesinado argentino. En tal sentido, los autores analizan el Grito de Alcorta, de 1912, los procesos de luchas de trabajadores rurales en la Patagonia en las primeras décadas del siglo XX, la conformación y el accionar de las Ligas agrarias, durante las décadas del 60 y 70, "los procesos de (re)organización de movimientos campesinos que se abren durante la década del ochenta y noventa" y, en última instancia, el despliegue de los movimientos campesinos durante los comienzos del siglo XXI.

En este recorrido que contempla un siglo, los autores analizan e identifican continuidades y rupturas en las luchas de esta personificación social particular, teniendo en consideración el repertorio de lucha, sus demandas, los procesos de reconstrucción identitaria, de territorialización y su relación con el Estado y otras personificaciones no campesinas. Para todo esto, Wahren y García Guerreiro se basan en la bibliografía existente, tanto propia como de otros autores.

Agradecemos el aporte de los y las colegas a este llamado de **Revista Conflicto Social** y esperamos que el dossier aporte al debate y a

la acumulación de experiencias investigativas en la sociología contemporánea.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Experiencia y poder. Una hipótesis acerca de la configuración de repertorios de acción colectiva en sistemas socio-económicos

Experience and power. A hypothesis about setting up collective action repertoires in socio-economic systems

Candela Hernandez*, Julián Rebón** y Agustina Súnico**

Recibido: 3 de agosto de 2020

Aceptado: 19 de octubre de 2020

Resumen: En este artículo presentamos un modelo teórico analítico para estudiar los repertorios de la acción colectiva contenciosa en sistemas socioproductivos. Nos centramos en identificar cuáles son las variables que intervienen en la selección e instrumentación de performances de acción por parte de los actores en conflicto. La hipótesis de trabajo sostiene que la experiencia de lucha que tienen quienes entran en confrontación junto con los recursos de poder de los que disponen condiciona las modalidades que asume la acción colectiva. Con vistas a poner a prueba el modelo construido, abordamos dos casos de estudio: los trenes urbanos de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y la empresa hidrocarburífera YPF en la cuenca Neuquina. El análisis de la dimensión contenciosa se sostiene sobre catálogos de eventos de elaboración propia construidos con base al relevamiento sistemático de la prensa nacional y local que permitió reconocer los principales ejes de confrontación y las formas de expresión colectiva.

Palabras clave: Poder, experiencia, repertorio de acción colectiva, conflicto social, forma de lucha.

Abstract: In this article we present a theoretical analytical model to study the contentious repertoires in socio-productive systems. We are focused on identifying the variables involved in the selection and implementation of action's performances by the actors in conflict. The working hypothesis holds that the experience of struggle of those who come into confronta-

* Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina. candeher@gmail.com

** Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas- Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina. julianrebon@gmail.com

*** Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Buenos Aires, Argentina. agustinasunico@gmail.com

tion along with the power resources available, determines the modalities that collective action assumes. In order to test the built model, we address two case studies: the urban passenger trains of the Metropolitan Region of Buenos Aires (RMBA) and the oil company YPF in the Neuquena basin. The analysis of the contentious dimension is based on catalogues of own-made events built based on the systematic survey of the national and local press that allowed to recognize the main axes of confrontation and forms of collective expression.

Keywords: Power; experience; contentious repertoires; social conflict, form of struggle.

Introducción

La pregunta por el ¿cómo? representa un elemento central para la producción de conocimiento científico y la investigación en ciencias sociales. Este tipo de interrogante nutrió el desarrollo de los estudios de la acción colectiva y el conflicto social, al producir distintos aportes para entender las formas de acción empleadas por los actores en confrontación. En este artículo nos proponemos elaborar y poner a prueba un modelo teórico-analítico para el estudio de los repertorios de acción en sistemas socio-productivos. Nuestra pregunta está centrada en dar cuenta de cuáles son las variables que intervienen en la selección e instrumentación de distintas formas de acción por parte de los contendientes en conflicto.

Con este propósito, partimos de una lectura crítica de la obra de Charles Tilly, *Contentious Performances* (2008). Ésta nos brinda, como elementos a considerar, la relevancia que tiene el régimen político institucional y la experiencia adquirida por los actores en confrontación que configuran el marco cultural en el que se desenvuelven las luchas bajo repertorios de acción específicos. En este escrito retomamos los aportes de Tilly (2008), pero los complementamos con otras herramientas teóricas que refinan el alcance analítico de nuestro modelo. Recuperamos los desarrollos provenientes del neo-marxismo a partir de las obras de Erik Olin





Wright (2000, 2013), Beverly Silver (2005) y Stefan Schmalz (2017). Esta perspectiva permite caracterizar a los actores de acuerdo con los recursos de poder de los que disponen (estructural, asociativo e institucional) y el modo en que su combinación incide en las formas que adquiere el conflicto. Nuestra hipótesis postula la relevancia tanto de la experiencia de lucha, como de los recursos de poder y sus respectivas interacciones en la configuración de los repertorios de confrontación.

Con esta orientación ponemos a prueba esta integración teórica de modo que podamos medir los alcances explicativos de la misma, a partir de dos casos de estudio abordados en el período 2003-2015: el servicio de trenes urbanos de la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) y la empresa hidrocarburífera YPF en la cuenca Neuquina (CN). Éstos fueron seleccionados siguiendo criterios de factibilidad y teóricos. Debemos destacar la existencia previa de registros sistemáticos por parte de nuestro equipo de investigación (Pérez, 2013; Rebón y Hernandez, 2016; Hernandez, 2017; Pérez y Rebón, 2017, Súnico, 2019, 2020). Además, a excepción de las particularidades que cada uno presenta, ambos tienen una función estratégica en los entramados sociales más amplios y representan sistemas socioeconómicos complejos de alcance intermedio al producir un conjunto específico de bienes y servicios vía la articulación de diversas unidades productivas. En ambos, la presencia del Estado ganó relevancia durante el período en estudio. En su conjunto estos elementos jerarquizan los conflictos que se desenvuelven en estos espacios sociales. Estas características promueven que en torno a ellos se desplieguen heterogéneas formas de conflictividad y acción colectiva protagonizadas por distintos tipos de actores. Esta diversidad permite contrastar nuestro marco analítico.

La metodología empleada se basa en una técnica con amplio uso en la temática; el catálogo de eventos contenciosos o de lucha (Marín, 2007; Tilly, 2000, 2008). Estos fueron confeccionados a partir de registros de la prensa nacional y local.¹ Los episodios son observados en torno a

las dimensiones que definen: ¿Quién los protagoniza? ¿Contra quién es el reclamo? y ¿Cuál es la demanda que se postula? En dichas bases registramos todos los episodios de disconformidad colectiva desarrollados en el marco del servicio de trenes urbanos metropolitanos (197 casos) y la empresa YPF en la cuenca en estudio (130 casos) y/o que refieran a los mismos en sus demandas o metas. Mediante el procesamiento estadístico, procuramos identificar las formas más recurrentes y luego buscar sus correspondencias con los ejes del conflicto detectando repertorios. Finalmente, estos fueron articulados con recursos de poder e historia de los actores que los protagonizan. Con el objeto de minimizar diferencias en sus condiciones de contorno, ambos casos fueron analizados durante el mismo período histórico marcado en términos políticos por el ciclo de gobiernos kirchneristas (Rebón, 2018).

El artículo se estructura en cuatro apartados. En el primero, desarrollamos el modelo teórico elaborado. En los dos subsiguientes, presentamos su aplicación a los casos. Finalizamos exponiendo los alcances del modelo.

Modelo para armar

Las formas de acción o *performances*² cambian entre épocas históricas, entre sociedades contemporáneas o a su interior. Esta variación no es plenamente azarosa ni infinita. Charles Tilly (2008) —en sus estudios

¹ Las mismas fueron elaboradas en el marco de los proyectos UBACyT: “Transporte público y conflicto social” y “El cambio social en la producción”, ambos con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

² Una forma de acción o *performance* representa un conjunto de prácticas que tienden a compartir ciertos atributos, así como formas de denominación y representación social (Tilly, 2008; Fillieule y Tartakowsky, 2015).





de la contienda política- afirma que los grupos no emplean todos los formatos de acción teóricamente posibles sino los disponibles. La acción colectiva tiende a caer dentro de *repertorios* delimitados y definidos en torno a un conjunto finito de *performances* que lo componen y que son particulares a tiempos históricos, actores y objetivos. Los repertorios son patrones de acción que expresan y constituyen las relaciones de confrontación entre grupos sociales. Que cada uno de éstos lleve adelante su demanda mediante un conjunto de formas y no de otras, depende principalmente, según este autor de su instalación cultural.

El desarrollo analítico en torno a la dimensión simbólica de las formas de lucha, si bien cuenta con antecedentes en la tradición marxista (Thompson, 1979; Marín, 2007) adquiere un despliegue más sistemático en la obra de Tilly, especialmente en uno de sus últimos libros, *Contentious Performances* (2008). Desde una perspectiva constructivista y relacional, el concepto de repertorio le permite dar cuenta del conjunto acotado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas. Con este término, no sólo refiere a los libretos históricos, sino que también instala la posibilidad de que los actores en conflicto innoven e improvisen, abriendo el espacio al cambio social. La cultura funge como una “caja de herramientas” de esquemas de acción disponibles para viabilizar sus reclamos que habilitan y potencian la acción colectiva (Rebón y Hernández, 2016). Éstos forman parte de un proceso de elección relativamente deliberado que le permite a un determinado grupo instrumentalizarlo en la confrontación con otro. Así, la evolución del repertorio de acción responde a un complejo proceso de selección y construcción social. El éxito real o atribuido a las formas de acción guía dicha evolución, sedimentando culturalmente ciertas formas y excluyendo otras, configurando tradiciones de lucha.

Tilly (2008) analiza las variaciones que los repertorios presentan entre sociedades, planteando un esquema de doble condicionamiento: descendente y ascendente. En el primero, las características de los regí-

menes políticos configuran y regulan las formas que asume la acción colectiva al establecer prescripciones, tolerancias y proscripciones (Tarrow, 2008). En el segundo, las contiendas previas condicionan a las posteriores por vía de proveer modelos de acción a ser emulados por los disconformes. Éstos pueden provenir de la experiencia directa del propio grupo o de modo indirecto por los agrupamientos con los que se está en relación³, en ambos casos sedimentando como repertorio de confrontación.

En este punto nos queda abierta la pregunta de si más allá del condicionamiento cultural, esta experiencia es azarosa: ¿por qué unos grupos configuran sus repertorios sobre ciertas *performances* y otros sobre otras?

Este tema no asume mayor desarrollo en la propuesta de Tilly (2000, 2008), porque está más preocupado en observar cómo los repertorios varían entre sociedades o épocas históricas, y no a su interior. El énfasis lo pone en el régimen político y deja explícitamente de lado otros factores que, aunque reconoce como influyentes, no les brinda mayor tratamiento. Por ejemplo, a las características del “régimen económico”.

En nuestra perspectiva, la variación de los repertorios en torno a sistemas socio-productivos de nivel meso social requiere la construcción de un abordaje que retome el aporte de la hipótesis de Tilly (2008), pero que la integre con otros elementos. En este camino, encontramos un conjunto de sugerencias provenientes de distintas aproximaciones neo-marxistas a los recursos de poder en la estrategia sindical y de los trabajadores (Silver, 2005; Wright, 2013; Schmalz, 2017).

De acuerdo con Wright (2000, 2013), entendemos al poder como la capacidad de producir efectos en la acción de otros en función de un determinado objetivo en el marco de condiciones socio-estructurales que

³ En la actualidad es necesario considerar que no es sólo la cercanía física o espacial la que permite la emulación sino también que la misma puede realizarse a partir de los medios de comunicación de masas y redes sociales.





delinean los límites y potencialidades de la acción. En su desarrollo identifica dos recursos de poder con relación a su fuente: el estructural y el asociativo. En complemento –trabajos posteriores como los de Schmalz (2017)– nos proveen de una conceptualización específica referida al recurso institucional de poder.

El estructural refiere a aquel que deviene de la posición que se ocupa en un sistema de relaciones de interdependencia.⁴ Su magnitud es observable en la capacidad que determinado actor tiene de dislocarlo a partir de una acción de no cooperación. En el caso de los trabajadores asalariados, las dimensiones de análisis pueden subdividirse de acuerdo con la capacidad que poseen de negociar en función de su posición en el mercado y en el lugar de trabajo.

En el primer caso, hay que considerar el tipo de funcionamiento del mercado laboral que se evidencia en las tasas de desempleo, segmentación de mercado y acceso a formas desmercantilizadas de reproducción social (Silver, 2005). La existencia de barreras sociales e institucionales para despedir e incorporar trabajadores (derecho de indemnización, bolsas de trabajo sindicales), también influye sobre su posición en el mercado y por ende sobre su capacidad de acción. Cuando existe relación indirecta con la empresa como el caso de la tercerización, la posibilidad de prescindir de la fuerza de trabajo por el capital es mayor, disminuyendo el poder estructural de los trabajadores. Como veremos en este artículo, esta pérdida puede ser potenciada o atenuada por el rol que ocupe el grupo de trabajadores en el sistema socio-productivo. En el segundo caso, las variables a considerar refieren a la forma de organizar la producción de acuerdo con las jerarquías dadas por la división social del trabajo y la

⁴ En el ámbito económico encontramos las principales relaciones de interdependencia en las relaciones empleado y empleador, acreedor y deudor, comerciante y consumidor (Wiley, 1967). Las relaciones de interdependencia en ciertos casos representan relaciones de explotación en la medida que constituyan asimetrías fundadas en la apropiación del esfuerzo laboral- material (excedente) (Wright, 2000).

centralidad que tengan las actividades ocupacionales en el entramado productivo. También es de relevancia el rol que la actividad de la unidad productiva o empresa tiene respecto del conjunto social. Una posición estratégica de la misma dota a los actores de mayores grados de poder por las posibilidades de generar una afectación que trascienda al sistema productivo en cuestión. En términos generales, una mayor dependencia del sistema del grupo social incrementa el poder estructural de este.

El poder asociativo refiere a la capacidad organizativa de un agrupamiento para expresar sus demandas, y está vinculado con su configuración colectiva. Es observable en la existencia de expresiones asociativas que pueden asumir diversas formas. Puede estudiárselo en función de dos grandes dimensiones: una relativa al grado de estructuración organizativa y otra a los tipos de relación que los colectivos mantienen con otros actores. La primera se observa en la cantidad de miembros de una organización, en los recursos materiales y humanos y en la eficacia de sus estructuras organizativas para desarrollar estrategias orientadas a la consecución de objetivos comunes (Wright, 2000; Schmalz, 2017). También en la relación que el núcleo activo de la organización mantiene con su base de sustentación respecto a su capacidad de representar intereses compartidos e incentivar a la movilización. La segunda dimensión se sostiene en las probabilidades de generar vínculos de cooperación con otros que potencien las instancias de la acción colectiva. Esto puede ocurrir a partir de generar articulaciones para la obtención de recursos específicos y/o vía la transversalización de objetivos que aúnen voluntades activadas con base a compromisos mutuos. En suma, el poder asociativo será mayor en la medida en que se dispongan de más recursos organizativos y de movilización.

El poder institucional refiere al conjunto de regulaciones que delimitan los compromisos sociales básicos. Éste establece parámetros relativamente perdurables en el tiempo, los cuales delimitan el horizonte de los comportamientos y expectativas. Asume un carácter doble al conceder





derechos y habilitaciones e imponer límites a la capacidad de acción (Schmalz, 2017). Es observable en las características de los diseños institucionales intervinientes en el ordenamiento social en sus distintos niveles y ámbitos específicos. Los esquemas cristalizados ordenan los recursos de poder: en el campo de la producción regulan las dinámicas de relación sean directas o indirectas y, en el ámbito asociativo, las expresiones organizativas formalmente reconocidas. El grado de poder institucional que los distintos actores detentan será mayor al ganar en derechos y habilitaciones.

A continuación, la Tabla I presenta sistematizadas el conjunto de dimensiones y variables referidas.

Tabla I. Operacionalización de recursos de poder.

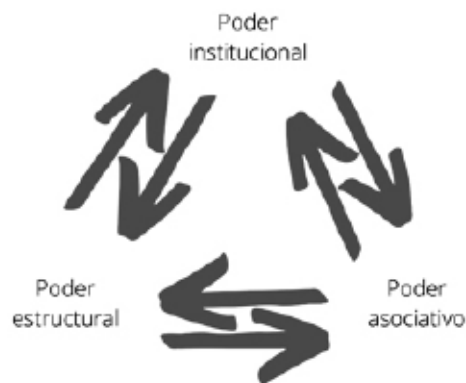
Dimensiones	Variables	
<p>Estructural</p> <p>↳ Capacidad de dislocar la trama de relaciones</p> <p>+ A mayor dependencia mayor poder estructural</p>	<p>En el mercado de trabajo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nivel de empleo - Desmercantilización de relaciones sociales - Segmentación - Barreras sociales que dificultan entrada y salida 	<p>En el ámbito de la producción</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Organización del proceso de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> - Jerarquía: control vs. operación - Centralidad: nodal vs. periférica b) Lugar en la dinámica de la producción <ul style="list-style-type: none"> - Relevancia estratégica de la actividad en formación social
<p>Asociativo</p> <p>↳ Configuración colectiva</p> <p>+ A mayores recursos organizativos y de movilización mayor poder asociativo</p>	<p>Externa</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Articulación con otros actores (obtención recursos/lobby) b) Transversalización de objetivos (movilización de otros por mi demanda) 	<p>Interna</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Configuración organizativa. <ul style="list-style-type: none"> - Tipo de figura organizativa. - Grado de estructuración de la figura organizativa - Magnitud (ej. Cantidad de afiliados) b) Relación con base de sustentación. <ul style="list-style-type: none"> - Capacidad de representación. - Capacidad de movilizar a propios
<p>Institucional</p> <p>↳ Conjunto de regulaciones</p> <p>+ A mayores derechos mayor poder institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Regulaciones formales de la relación de grupos de referencia (derechos obligaciones generales) b) Regulación de la dimensión asociativa (reconocimiento de figuras asociativas – derecho a la organización colectiva – reconocimiento de formas de protesta. 	

Fuente: Elaboración propia con base a Wright, 2000; Silver, 2005, Schmalz, 2017

Existen una serie de consideraciones adicionales para el uso de este modelo teórico analítico.

Las dimensiones presentadas no son independientes entre sí. En el Esquema I mostramos sintéticamente la relación referida. El poder estructural crea condiciones favorables para la construcción del asociativo. A la vez, las luchas y conquistas realizadas en el marco de determinadas configuraciones de poder estructural y asociativo inciden en la estructuración del poder institucional (Schmalz, 2017). Este último influye sobre el estructural vía la regulación de los ordenamientos sociales que definen las posiciones que tienen los distintos actores en las tramas de relaciones. También lo hace sobre el asociativo, a través de la legislación que legitima o dificulta la asociación y el rol representativo de las organizaciones conformadas (Silver, 2005).⁵

Esquema I. Recursos de poder según dinámica de interacción.



Fuente: elaboración propia con base a Wright, 2000; Silver, 2005, Schmalz, 2017.

⁵ Cabe aclarar que la forma en que los recursos de poder son percibidos y evaluados por los grupos es también una dimensión para considerar. Una percepción negativa del propio poder puede llevar a la pasividad mientras que la valoración positiva motiva hacia la acción (Silver, 2005). En los extremos, la subvaloración o la sobrevaloración del poder puede inhibir o favorecer la movilización con consecuencias probablemente negativas para la propia consolidación del poder y la efectividad de la acción.



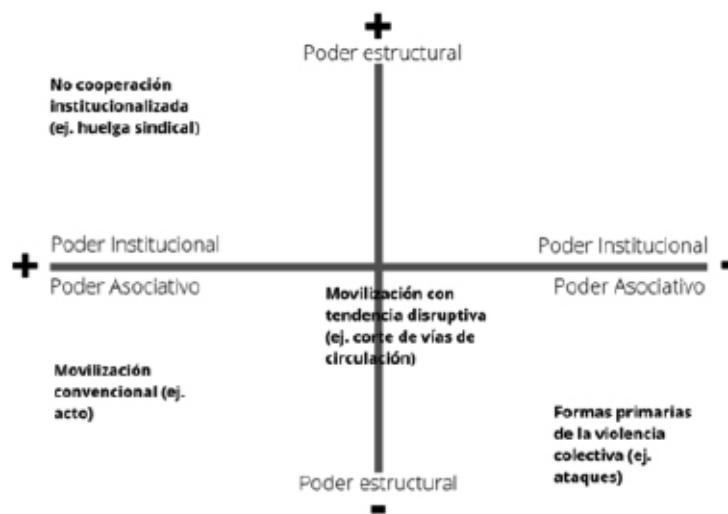


Según las teorías de los recursos de poder éstos representan elementos significativos para toda estrategia de acción. Las *performances* empleadas por los actores son una parte de ésta por lo que también están condicionadas por los recursos de poder (Rebón y Hernández, 2016). La magnitud y las combinaciones de los mismos hacen que algunas formas de acción sean privilegiadas respecto a otras.

El poder estructural habilita las formas de la no cooperación –la huelga es el ejemplo paradigmático-. Cuando este poder se complementa con niveles altos de poder asociativo e institucional, la negociación mediante mecanismos formales y la amenaza de la no cooperación tienden a reemplazar el uso de dicha herramienta. Su mero planteo instala las posibles consecuencias que tendría su efectiva realización, delineando los términos de la confrontación. Esto es más marcado cuando el poder asociativo está basado más en los recursos materiales e institucionales (burocratización) que en la movilización activa de las bases (Offe y Wiesenhal, 1992). Por otra parte, aquellos agrupamientos con mayor organización formal poseen más incentivos para utilizar los canales institucionales promoviendo acciones de conflicto más recurrentes dado que tienen recursos para hacerlo, pero también porque las acciones transgresoras pueden tener sanciones sobre la organización institucionalizada (Taylor y Van Dyke, 2004; Medel y Somma, 2016). La combinación de alto poder asociativo y fuerte poder institucional pero bajos o nulos niveles de poder estructural, promueve formas convencionales de movilización en el espacio público que no implican la no cooperación. Por último, bajos niveles de recursos de poder en todas sus formas tienden a producir conflictos más esporádicos en el tiempo, pero con mayor capacidad disruptiva en sus formas. Tipos de violencia colectiva, como los ataques y estallidos, suelen ser la expresión de la disconformidad de aquellos que no tienen medios legitimados para expresarla (Cosser, 1970; Rebón y Hernández, 2016).

Como mostramos en el esquema siguiente, es posible establecer teóricamente diversas combinaciones elaboradas según la disponibilidad de los recursos de poder. En función de la configuración resultante indicamos el tipo de acción predominante.

Esquema II. Combinación teórica de recursos de poder y tipos de acción predominantes.



Fuente: elaboración propia.

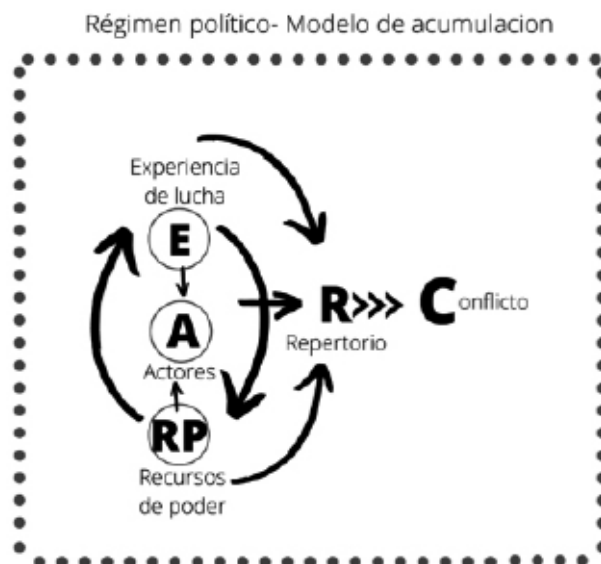
En suma, nuestro modelo teórico, graficado en el Esquema III, propone una articulación de ambos enfoques expuestos. En el caso de un sistema socio-productivo concreto, las formas de acción de un actor en torno a un eje de confrontación –trabajo y capital, por ejemplo–, están condicionadas por elementos que se localizan más allá del sistema mismo. El régimen político y el modelo de acumulación condicionan externamente los repertorios de confrontación. En nuestra propuesta, ambos tienen una importante y similar relevancia. En el caso concreto de cada actor sus repertorios se encuentran condicionados por experiencias de lucha adquiridas de modo directo y/o indirecto que les proveen libretos





para actuar. Por otra parte, los recursos de poder en sus combinaciones específicas inciden en la selección de las *performances* pasadas y presentes. Los actores con su experiencia de lucha y los recursos de poder no forman un complejo cerrado, sino que éste está en constante interacción con las condiciones de contorno del sistema e incluso pueden trascenderlo. La línea punteada del Esquema III subraya este elemento. Por ejemplo, las organizaciones sindicales, junto a sus experiencias y recursos, suelen exceder los límites de la empresa o unidad socio-productiva.

Esquema III. Modelo teórico para el estudio de los repertorios de acción colectiva en un sistema socio-productivo.



Fuente: elaboración propia.

En el análisis de las situaciones contenciosas concretas este esquema debe ser aplicado dinámicamente. Por ejemplo, cambios en el poder estructural o cierre de las vías institucionales para el procesamiento del conflicto pueden derivar en formas más disruptivas, como muestran los estudios de las empresas recuperadas por sus trabajadores (Rebón,

2007). Además, las *performances* tienden a estar ordenadas y graduadas en la caja de herramientas de lucha, según atribuciones de radicalidad o de intensidad. De acuerdo con la dinámica del conflicto y las tendencias a intensificarlo o no, los actores seleccionan con base a este criterio las formas de actuar más o menos estratégicamente y más o menos emotivamente. Todo conflicto es una relación social y, como tal, depende también de la dinámica de los intercambios con el otro actor en confrontación, en el curso de los cuales los recursos de poder y experiencias también pueden alterarse o transformarse.

En nuestra perspectiva, este esquema analítico es fecundo no sólo para situaciones laborales, sino que puede ser utilizado para otros pares de confrontación anclados en relaciones de dependencia, pero también de otro tipo. En este artículo pretendemos poner a prueba el marco analítico planteado, haciendo un análisis estático de los repertorios de acción colectiva en torno a diferentes sistemas socio-productivos con énfasis en los recursos de poder en combinación con la dimensión de la experiencia que fuera explorada por los estudiosos de la acción colectiva.

Trenes urbanos

Los trenes urbanos de la RMBA cuentan con siete líneas de servicio que tienen una función social nodal en la estructuración de los viajes que se realizan en transporte público colectivo que alcanzan poco más de un millón de boletos pagos diarios (CNRT, 2019). Esto ocurre especialmente en los principales corredores que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con los partidos del conurbano bonaerense, patrón de movilidad donde el ferrocarril cobra peso relativo frente a la ausencia de al-





ternativas modales equivalentes (Kralich, 2001; Gutiérrez, *et al.*, 2020). La porción mayoritaria de este tipo de movilidad está basada en el hogar y el principal motivo de los desplazamientos es el trabajo (ENMODO 2009-2010). Por esta razón, los ferrocarriles tienen una importancia vital para sus usuarios, al habilitarles el acceso a otro conjunto de derechos con jerarquía en la reproducción de la vida.

Entre los años 2003-2015, los ferrocarriles metropolitanos fueron foco de la atención pública, convocada por la intensa conflictividad desplegada en este espacio social que actuó como catalizador de un conjunto de transformaciones que modificaron al sistema en distintos aspectos. Podemos señalar cambios en la forma de organizar socialmente la prestación que pasó progresivamente de un modelo concesionado a empresas privadas a uno con dominancia estatal, donde la Operadora Ferroviaria S.E. (SOF.SE) recuperó la explotación de cinco de las siete líneas de servicio y la gestión de la infraestructura ferroviaria quedó a cargo de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E (ADIF.SE) (Ley 26.352/2008). Ambas integradas desde el año 2015 en la empresa estatal Trenes Argentinos S.E (Ley 27.132/2015) (Pérez y Rebón, 2017).

También se produjo una relativa recuperación de las profundas fallencias en materia de calidad que afectaban las condiciones de viaje por las reiteradas alteraciones en la programación, el degradado estado de los servicios y los accidentes –entre los que se destaca– la conocida como “Tragedia de Once 22/2”.⁶ En este marco, la modernización de los trenes fue promovida a través de inversiones que permitieron la renovación del material rodante y de la infraestructura operativa (Ministerio de Transporte, 2015).

⁶ El 22 de febrero del año 2012 una formación del ferrocarril Sarmiento chocó al ingresar a la estación terminal de Once contra el sistema de amortiguación del andén. Este acontecimiento dejó un saldo de 789 heridos y 52 víctimas fatales (Hernandez, 2020).

Delineada en grandes trazos la contextualización del caso, nos corremos de los cambios producidos en el sistema para situarnos en los distintos tipos de conflictos sucedidos a lo largo de los años en estudio. De acuerdo con la información de nuestra base de datos, identificamos cuatro protagonistas según la proporción que representan del conjunto de los eventos contenciosos registrados que superan el 10% de los casos: sindicatos (40%), pasajeros (17%), familiares de víctimas de Once 22/2 (16%) y trabajadores tercerizados (14%) (Base Trenes-IIIGG, 2020).

Centrando el análisis en los actores podemos identificar por su personificación social aquellos conflictos que ocurren en el ámbito del trabajo. Éstos son expresados vía los sindicatos como su actor característico y vía los denominados tercerizados que pertenecen a las empresas contratistas con funciones auxiliares al servicio ferroviario. También están los conflictos no laborales en los que podemos situar a los pasajeros y a los familiares de víctimas de Once que encarnan de modo directo o indirecto la función de consumo del servicio. Con base en esta división, nos proponemos avanzar en reconocer cuáles son los principales ejes del conflicto que se traman para cada uno de los casos.

En el ámbito de la producción, las asociaciones gremiales conformadas son La Fraternidad (maquinistas), la Unión Ferroviaria (cambistas, vías y obras, talleres, depósitos y administrativos), la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos (jerárquicos) y la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos. Los dos primeros son relevantes en la historia sindical de los trenes urbanos como pioneros en la organización gremial de los trabajadores del sector y en la articulación del movimiento obrero al momento de su surgimiento (Bauni, 2017). En el período analizado, ambos sindicatos protagonizaron la mayor cantidad de acciones de conflicto de tipo laboral.

La trama de la confrontación estuvo situada en oposición a las em-





presas prestatarias y al Poder Ejecutivo Nacional. Este último cobró especial relevancia como destinatario por su incidencia en la mediación de los conflictos y en la determinación de los niveles salariales vía los subsidios entregados a las empresas operadoras. Desde el año 2003, en adelante, éstos adquirieron un peso progresivo en la ecuación económica que los tornó en una condición imprescindible para el sostenimiento del sistema ferroviario (Bertranou y Serafinoff, 2018). Más aún –en los últimos años de nuestro recorte temporal– donde SOF.SE quedó como encargada directa de prestar servicio en una porción sustantiva de la red. Las principales demandas identificadas refieren a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo. Destacan los reclamos por recomposición o incremento salarial (47% de los eventos) y por mayor seguridad para los trabajadores (20%). Varios son los elementos que se conjugan en configurar el poder del que disponen los sindicatos ferroviarios para avanzar en las disputas construidas sobre este eje de la contienda.

En los primeros años de nuestro recorte temporal, este actor encuentra como telón de fondo de su accionar colectivo, una caída relativa de los niveles de desempleo redundante en una mejor posición de los asalariados en el mercado de trabajo (Etchemendy y Collier, 2008). La condición asalariada hace también que –al estar formalmente reconocidos– gocen de derechos sociales que refuerzan tanto su poder institucional como su poder estructural, al incrementar el costo de un potencial cese de la relación laboral. El grado de calificación que suponen ciertas tareas juegan a favor de este sentido. Como observable, podemos citar el caso de La Fraternidad que es conocida como la “aristocracia ferroviaria” por el nivel de capacitación que requiere conducir una formación respecto de otras involucradas en la prestación del servicio. Otro componente adicional refuerza la posición de los trabajadores agremiados, pero en el lugar de trabajo. Éstos desarrollan un conjunto de actividades productivas que no se escinden de su consumo. Es por esta razón que una acción de

no cooperación tiene consecuencias inmediatas sobre la prestación del servicio, magnificadas por el rol nodal que tiene el transporte ferroviario.

Como señalamos con anterioridad, La Fraternidad y la Unión Ferroviaria, cuentan con una larga historia como sindicatos con monopolio institucional de representación laboral y con creciente capacidad de ganar en recursos organizativos y de movilización. Esta condición hace que dispongan de altos niveles tanto de poder asociativo como de poder institucional.

Durante buena parte del período analizado, esta configuración del poder de los actores sindicales fue observable en la ocupación de puestos claves en el entramado estatal-empresarial del servicio por parte de distintos referentes de las gremiales.⁷ Este posicionamiento les dio un rol significativo con responsabilidad sobre el funcionamiento del sistema, potestad para manejar el ingreso y egreso del personal y en la promoción de mejoras de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores con pertenencia sindical. En particular, esta última acción consolidó la relación con su base de sustentación que se mantuvo a expensas de excluir de los beneficios a otros colectivos de trabajadores como los tercerizados ferroviarios (Basualdo *et al.*, 2014; Bauni, 2017).

De acuerdo con nuestro análisis de la base de datos, éstos últimos tienen trazado su eje de confrontación contra las empresas prestatarias, el Poder Ejecutivo Nacional y los sindicatos. Las principales demandas están orientadas a reclamar por las condiciones de trabajo. El pase a planta permanente (83% de los eventos) y la reincorporación contra despidos (39%) son las metas dominantes (Base Trenes-IIGG, 2020).

⁷ En el año 2006 Antonio Luna de La Fraternidad fue nombrado Subsecretario de Transporte Ferroviario de la Nación. Otro dirigente de este gremio asumió la gerencia de Recursos Humanos de las unidades de emergencia que operaron los servicios entre los años 2007 y 2015. En el año 2008 otro hombre de la Fraternidad quedó al frente de SOF.SE mientras que la ADIF.SE en manos de uno de los dirigentes de la Unión Ferroviaria (Pérez y Rebón, 2017).





Respecto de la configuración del poder del que disponen los trabajadores tercerizados, éstos se ubican en las antípodas del actor sindical. Un primer elemento por señalar es que –aunque comparten un contexto general positivo en el mercado de trabajo– el hecho de no estar reconocidos como empleados de las empresas prestatarias, les otorga vulnerabilidad en la relación laboral. Esto encuentra condiciones extremas para el caso de los trabajadores conformados en cooperativas fraudulentas que carecen de todo tipo de derechos que regulen el ingreso y el egreso al mercado de trabajo en el sector, como ocurrió en la línea Roca (CELS, 2012). Adicionalmente, al interior de la unidad productiva, las tareas de las que se encargan los trabajadores tercerizados son secundarias a la prestación del servicio (desmalezamiento, limpieza, seguridad, entre otras) (Bauni, 2017). Las características señaladas hacen que cuenten con bajos niveles de poder estructural e institucional tanto en el mercado como en el lugar del trabajo.

En términos de poder asociativo tienden a ser excluidos de la representación sindical. Esto es observable en el fomento a la precarización laboral como política propia de los sindicatos con una posición estratégica en la gestión de los recursos humanos. En estos términos de mandar por mejoras en las condiciones de trabajo no sólo suponía no contar con la herramienta gremial sino también encontrar en los sindicatos un abierto opositor (CELS, 2012; Basualdo *et al.*, 2014). En este sentido, según nos permiten observar nuestros datos, la clave de la dimensión organizativa de los tercerizados estuvo en la articulación con actores periféricos del sistema político y sindical. Destaca en esta trama el Partido Obrero que tiene una cultura de movilización activa y disruptiva, cualidad que les permite a los trabajadores tercerizados dar potencia a sus reivindicaciones en la acción colectiva. El caso emblemático de esta transversalización de objetivos fue el de Mariano Ferreyra que el 20 de octubre del año 2010 fue asesinado en el marco de un conflicto entre los tercerizados y los sin-

dicatos⁸ (Bauni, 2017). La fragmentación existente entre estos trabajadores –distribuidos en distintas empresas– y el miedo al despido dificulta la masividad de las medidas de fuerza (Rebón y Hernandez, 2016).

Nos resta –para el caso de los conflictos laborales– avanzar sobre el nudo clave de nuestro interrogante ¿cómo se articulan la experiencia de lucha y los recursos de poder disponibles en las *performances* de confrontación de cada actor estudiado?

Como muestra la Tabla II los sindicatos tienden a consolidar un repertorio fuerte (Tilly, 2008) al estar una porción sustantiva de las acciones realizadas por vía de la huelga (44% de los eventos) junto con otras que son derivaciones de esta misma forma de expresión (anuncio de huelga 31% y quite de colaboración 10%). Todas con la potencialidad de representar una significativa alteración del orden en el ámbito productivo. Este tipo de acciones caen dentro de las toleradas y contempladas en los esquemas institucionales, al constituir un derecho inscripto en el campo jurídico. Estos atributos del repertorio de los trabajadores sindicalizados refuerzan una de las hipótesis subyacentes a nuestro modelo que nos permite tipificarlo como de *no cooperación institucionalizada*.

En sentido inverso nuestro esquema resulta productivo para aquellos actores que cuentan con bajos niveles de poder en todos sus tipos. Como vemos en la Tabla II, el repertorio de los trabajadores tercerizados presenta acciones con un fuerte componente disruptivo asimilable a experiencias de lucha de organizaciones sociales y del gremialismo combativo: corte de vías (44% de los eventos); bloqueo de boleterías/ liberación de molinetes (26%) y corte de calles (26%). La primera forma de acción es una herramienta de lucha poco generalizada que al tener

⁸ Ese día un grupo de choque de la Unión Ferroviaria atacó a los trabajadores tercerizados que se estaban manifestando acompañados por militantes del Partido Obrero. En este episodio un disparo de arma de fuego terminó con la vida de Ferreyra (Bauni, 2017).





por objeto obstaculizar el funcionamiento del servicio, presupone un desborde institucional al contravenir normas jurídicas. El carácter estratégico que tiene el servicio en la movilidad urbana da potencia a la capacidad de la acción para visibilizar las demandas e incrementar los costos políticos y empresarios que acarrea la suspensión del servicio. El carácter guiado de los trenes urbanos facilita el despliegue de este tipo de acciones puesto que con poca cantidad de personas pueden obstruirse las vías y garantizar la efectividad de la acción. Lo mismo ocurre con las otras formas instrumentadas por este actor. En todas sus variantes asumen un carácter directo que desbordan los canales dominantes para el procesamiento de la conflictividad establecidos por el Estado (Pérez y Rebón, 2012). Estos atributos permiten tipificarlas dentro de los repertorios anclados a bajos niveles de poder que en nuestro modelo denominamos *movilización con tendencia disruptiva*.

Avancemos en analizar qué ocurre con las formas de expresión de la disconformidad que tienen los actores reconocidos como protagonistas de una parte sustantiva de los conflictos de carácter no laboral.

Respecto de los pasajeros, el eje de confrontación establecido tiene como principal destinatario a las empresas prestatarias, los trabajadores ferroviarios y a las fuerzas de seguridad. Aunque no formuladas en una consigna colectivamente elaborada –el motivo de reclamo que puede atribuirse a las demandas de los pasajeros– está relacionado a mejoras en las condiciones de prestación del servicio (97% de los eventos). Existen elementos adicionales que permiten clarificar estos atributos.

En la prestación del servicio los pasajeros son un eslabón central puesto que no hay realización sin demanda efectiva. No obstante, su posición formal atravesada por un tipo de poder institucional como usuarios/consumidores no les permite necesariamente disponer de poder estructural. Como indicamos previamente, durante todo el período estudiado,

los subsidios al transporte ferroviario fueron el recurso clave para la reproducción del sistema no así el pago de la tarifa. Este componente, sumado a los laxos controles y los altos niveles de evasión, quitaron capacidad a una potencial acción de no cooperación por parte de este actor (boicot de uso o no pago de servicio). Respecto de su poder asociativo varios son los obstáculos que se presentan para su consolidación. Los pasajeros como agrupamiento genérico no conforman identidad con base a esta función en el sistema. Más bien tienen relaciones sincrónicas en tiempo y espacio con un sesgo hacia la competencia por el uso del servicio o –mismo de cooperación– pero que no se traducen en organizaciones que ganen en niveles de coordinación (Hernandez, 2019). Existen también colectivos como las asociaciones de consumidores y usuarios que encarnan de manera institucionalizada la representación de los pasajeros. No obstante, no son por éstos conocidas ni el transporte es su principal ámbito de intervención entre los servicios públicos sobre los que tienen injerencia (Hernandez, 2019). Adicionalmente, encontramos organizaciones específicamente conformadas para intervenir en este espacio social que nacen vinculadas a partidos periféricos del sistema político y que tampoco son conocidas por la porción mayoritaria de los usuarios, cayendo así sus niveles de legitimidad y capacidad de movilización (Hernandez, 2019). Los pasajeros del servicio son entonces una personificación social que cuenta con bajos niveles de poder estructural y asociativo y relativo poder institucional.

El movimiento de familiares de las víctimas de Once 22/2 traza su eje de confrontación abiertamente con el Poder Ejecutivo Nacional, percibido como el principal responsable de lo ocurrido; el Poder Judicial como interviniente en el esclarecimiento del caso y con la empresa prestataria también responsable por las condiciones de explotación del servicio (en este caso Trenes de Buenos de Aires, de la línea Sarmiento). Dos son sus principales demandas: reclamo de justicia para las víctimas (97% de





los eventos) y mejoras en la calidad de la prestación (43%) (Base Trenes-IIGG, 2020).

Aunque los familiares son un actor externo a la organización social de la prestación su accionar tiene impactos directos sobre el mismo. Estas coordinadas hacen que el movimiento tenga un nulo poder estructural en la trama de relaciones que configuran el servicio, pero paradójicamente, una fuerte incidencia que deviene de su alto poder asociativo. Los familiares lograron configurarse como un movimiento social que encarnó en la esfera pública una Campaña en demanda de justicia potenciada por su fuerte reconocimiento simbólico. Aunque en el sentido estricto de su definición, carecen de poder institucional, el hecho de estar su movilización anudada a la figura de las víctimas permitió que rápidamente lograran activar los sentidos socialmente construidos en torno a ésta, ganando en legitimidad. Nuestro contexto local con una fuerte tradición de lucha de familiares de víctimas –iniciada con el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar–, colabora a que sus acciones en pos de terceros ausentes les permitan ganar en solidaridad afectiva y recursos de diversa índole (Pita y Pereyra, 2020 y Hernandez, 2020).

En coherencia con el hilvanado que venimos tramando en el abordaje del caso de los trenes urbanos, nos queda como ítem final establecer cómo las formas en que se configura el poder de quienes protagonizan los conflictos no laborales inciden sobre sus repertorios de acción.

Como vemos en la Tabla II los pasajeros protagonizan acciones de violencia colectiva con un fuerte componente disruptivo. Los ataques (79% de los eventos) son acontecimientos descoordinados sin una demanda clara donde apedrean, queman y destruyen el material rodante y la infraestructura, canalizando en los objetos de la empresa su disconformidad con las condiciones de prestación (Pérez, 2013). En sus versiones más álgidas el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad (18% de los even-

tos) y el saqueo a comercios aledaños a la estación (12%), integran las *performances* de su repertorio. En esta caracterización vemos que nuestro modelo nuevamente se refuerza al observar que los pasajeros que disponen de bajos niveles de poder consolidan un repertorio en torno a *formas primarias de la violencia colectiva*.

Alejado de estas características los familiares de las víctimas de Once presentan un repertorio fuerte, consolidado en una forma de acción dominante que es la concentración o acto (87% de los eventos). Esta forma de expresión colectiva convencional (Tarrow, 1999) está encuadrada dentro de los mecanismos habilitados institucionalmente para la protesta social. El recurso simbólico que se surge con su poder asociativo dota a su acción de una fuerza moral que conduce a que no requieran apelar a formas que alteren el orden del sistema y que desborden los mecanismos formales para expresar sus reclamos. Sumado a que, como analizamos en otro trabajo, las relaciones sociales de algunos de los conductores del movimiento, junto al contexto político también colaboraron en la facilitación de recursos brindados por los medios de comunicación masiva y partidos políticos opositores (Hernández, 2020). Por estos atributos en nuestra tipología podemos encuadrarlos dentro de la *movilización convencional*.





Tabla II. Principales *performances* de los actores laborales y no laborales. Trenes urbanos de pasajeros. RMBA. 2002 -2015. (Respuesta múltiple con base en el total de eventos)

Laborales	Sindicato (40%)	Huelga 44% Anuncio de huelga 31% Quite de colaboración 10%
	Tercerizados (14%)	Corte de vías 44% Bloqueo de boleterías/liberación de molinetes 26% Corte de calles 26%
No laborales	Pasajeros (17%)	Ataques 79% Enfrentamiento 18% Saqueos 12% Cortes de vías 12%
	Familiares (16%)	Concentración/acto 87%

Fuente: elaboración en base a datos propios (IIGG-UBA). Nota: Se presentan sólo las *performances* que superan el 10% de los episodios de cada actor. N: 197

YPF

El segundo caso que abordamos refiere a YPF. Ésta es la principal empresa hidrocarburífera del país con fuerte presencia en los distintos segmentos de la cadena de valor del sector. Con primacía en la explotación de petróleo y gas representa el 47% y el 30% de la producción total de ambos hidrocarburos, respectivamente (Secretaría de Energía de la Nación, 2019). Como productora de un bien estratégico y de carácter central en la matriz energética nacional, incide notoriamente en la reproducción socioeconómica y productiva del país.

YPF despliega su actividad a lo largo del territorio nacional, dentro del cual, la cuenca Neuquina⁹ –en la que focalizamos nuestro análisis– es la principal del país al aportar el 62% de gas y el 45% de petróleo a nivel nacional. YPF es la operadora con mayor peso en la cuenca. En los últimos años, esta región fue territorio de desarrollo de los denominados hidrocarburos no convencionales, especialmente a partir de la explotación de la formación "Vaca Muerta", en la cual YPF destacó mediante la concesión del yacimiento Loma Campana (Pérez Roig, 2018). Durante el período abordado en este artículo, YPF fue objeto de transformaciones en cuanto a sus características socio-productivas al ser re-estatizada parcialmente en el año 2012 cuando el Estado Nacional, mediante la Ley de Soberanía Hidrocarburífera N° 26.741, expropió el 51% de las acciones de la empresa.

Con relación a la conflictividad en torno a YPF, podemos reconocer tres protagonistas que superan el 10% de los eventos: los sindicatos petroleros (57%), los trabajadores desocupados (18%) y las comunidades de pueblos originarios (16%). Con acuerdo a los atributos de los actores podemos identificar distintos tipos de conflictos. Aquellos relacionados a las disputas laborales, relativas a las condiciones de acceso, consumo y contratación de la fuerza de trabajo asalariada. En este tipo se ubican los sindicatos. También existen conflictos laborales no asalariados. Estos son protagonizados por colectivos de trabajadores desocupados que se encuentran por fuera de toda relación contractual. Por otro lado, se registran conflictos no laborales relativos a la acción colectiva de las comunidades de pueblos originarios que se localizan en el territorio en el cual la empresa lleva adelante la actividad.

⁹Esta cuenca cubre más de 120.000 km² y comprende áreas del este de la provincia de Neuquén, del noroeste de Río Negro y del sur de La Pampa y Mendoza.





Respecto del ámbito laboral, la organización del proceso de trabajo en YPF se sustenta en la descentralización de tareas, a partir de la implementación de formas de tercerización y subcontratación. El esquema configurado involucra una articulación de diversas empresas que realizan actividades complementarias en el desarrollo del proceso productivo. YPF, en su carácter de operadora y concesionaria de los yacimientos y las empresas contratistas como prestadoras de servicios.

Dentro de este entramado, los sindicatos petroleros privados de la actividad, representantes de los trabajadores de las contratistas, son los que protagonizan la mayor cantidad de episodios de acción colectiva (56% de los eventos).¹⁰ Estos se dividen en aquellos que agrupan al personal operario y aquellos que encuadran al personal jerárquico (siendo los mayoritarios para ambos casos los sindicatos correspondientes a los trabajadores de Río Negro, Neuquén y La Pampa). Los primeros representan una mayor participación en la conflictividad (47% de los eventos) frente a los segundos (9%).

El eje de confrontación trazado por este actor se sitúa en YPF, otras operadoras, contratistas y en el Estado Nacional. Para los trabajadores de las contratistas, YPF emerge como destinataria por una serie de razones. Como se mencionó, las tareas que estos cumplen se realizan en un mismo espacio productivo, correspondiente a la concesión de YPF. Además, es decisivo el rol de la empresa en el nivel de actividad, a la vez que la negociación salarial la involucra. Por último, de acuerdo con la legislación laboral es responsable en la supervisión de obligaciones de las contratistas. En relación con el Estado Nacional, si bien éste mantuvo a lo

¹⁰ El sindicato que agrupa a personal de YPF, Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarbúferos sólo participó en el 1% de los episodios. Tanto en la cuenca como en la empresa en particular, su base de representación es minoritaria en comparación a los sindicatos petroleros privados que concentran una mayor proporción del colectivo laboral (Giuliani, 2013). En adición, el proceso de privatización de la empresa disminuyó la capacidad de negociación e injerencia que detentaba este sindicato respecto a las condiciones laborales de los trabajadores en la empresa (Muñiz Terra, 2006).

largo de los años en estudio un involucramiento importante como mediador de las disputas entre el capital y el trabajo, a partir de la reestatización parcial su rol en el conflicto pasó a ser directo, al ser ahora parte de la empresa. Las demandas esgrimidas por estos trabajadores refieren a las disputas características de la relación laboral como incrementos salariales (46% de los eventos); continuación del empleo, ante despidos y suspensiones (35%) y ambiente laboral y condiciones de trabajo (22%).

La configuración de poder para este actor comparte atributos similares a la correspondiente a los sindicatos que representan al colectivo laboral en los trenes urbanos, con altos grados de recursos de poder. Además de compartir el contexto general de las características del mercado laboral en el período, las tareas realizadas por estos trabajadores también requieren grados de calificación y especialización, más aún para el caso de los trabajadores jerárquicos y profesionales. Si nos situamos en el lugar de trabajo, la posición de este actor se ve fortalecida. Esto se relaciona con el tipo de tercerización que es implementado en YPF, que le otorga una diferencia significativa respecto al caso de los trenes urbanos. En este esquema, los trabajadores encuadrados en los sindicatos petroleros privados realizan tareas que corresponden a las actividades centrales del proceso productivo con grados de control sobre su funcionamiento, lo que los posiciona con mayor poder para realizar una acción de no cooperación. Adicionalmente, como se mencionó, el sector hidrocarburífero e YPF en particular son de suma relevancia para el desarrollo de distintas actividades productivas, para el consumo de la población y para las cuentas fiscales. De modo tal, que la interrupción del proceso productivo conlleva efectos disruptivos que trascienden a las pérdidas económicas de la empresa, trasladándose al conjunto social, lo que además implica costos en el ámbito político que llevan a la intervención estatal en las confrontaciones.

Los sindicatos petroleros privados también cuentan con un fuerte poder asociativo. Afilian de manera mayoritaria a los trabajadores hidro-





carburíferos, al poseer el poder institucional de revistar el monopolio legal de la representación laboral para la actividad en el territorio. En adición, luego de la expropiación del paquete accionario mayoritario de YPF, cuentan con representación de los trabajadores en el consejo de accionistas de la empresa, puesto ocupado de manera alternada entre los secretarios generales de los mencionados sindicatos privados operarios y jerárquicos. Además, los sindicatos tienen injerencia en el acceso al empleo y a puestos claves. Las dirigencias gremiales poseen capacidad de movilización de sus representados y alcanzan una gran adhesión a las medidas propuestas, como se observa en la asistencia mayoritaria a paros y asambleas.

Por último, como mencionamos con anterioridad, el reconocimiento formal dado por su condición de trabajadores asalariados, amparados por la legislación laboral, fortalece su poder institucional. Aspecto potenciado por la tramitación institucional de la puja distributiva a partir de la mediación estatal vía la negociación colectiva.

El esquema de análisis propuesto se muestra productivo para dar cuenta del repertorio de acción de los sindicatos petroleros privados, que presenta características similares al de los trenes urbanos. Como mostramos en la Tabla III, las formas de acción se consolidan en torno a la suspensión de la producción mediante la huelga o la retención de servicios (55% de los eventos), el anuncio de medidas de fuerza (54%) y las acciones declarativas que agrupan comunicados, petitorios y conferencias de prensa (11%). Nuevamente observamos formas de expresión de la disconformidad que asumen una capacidad de alteración de la producción –real en el caso de la efectivización de una huelga o potencial en cuanto al anuncio de una posible medida– y que se enmarcan en los canales institucionales previstos para el procesamiento de los conflictos. De igual modo, nos es posible conceptualizar el repertorio para este caso como de no cooperación institucionalizada. En el mismo se conjuga la articulación de altos niveles de poder con el peso de la experiencia de lucha sin-

dical de los trabajadores. Medidas como la huelga son una herramienta clásica empleada por los asalariados a lo largo de la historia para la expresión de sus reivindicaciones.

Continuamos dentro del universo de trabajadores con aquellos que no se encuentran enmarcados en la relación laboral asalariada. Se trata de agrupamientos de desocupados que poseen distinto nivel de organización, abarcando desde conjuntos conformados coyunturalmente a colectivos más organizados en el tiempo. Los principales destinatarios de su accionar radican en la empresa en estudio, los gobiernos locales y otras operadoras. Estos trabajadores centran sus demandas en la solicitud de puestos de trabajo (83% de los eventos).

Respecto de la configuración de poder, los trabajadores desocupados presentan bajos niveles en todos los tipos. Se encuentran por fuera de toda relación contractual y no están vinculados a la empresa, lo que obtura las posibilidades de realización de una acción de no cooperación. En cuanto a su capacidad asociativa, la situación de desempleo tiende a aglutinarlos en un determinado momento, pero su unión no alcanza una temporalidad de largo plazo. Esto representa dificultades para la generación de recursos organizativos, tanto materiales como simbólicos, que les permitan consolidar un colectivo, así como también obstaculizan las acciones que requieran grados de organización y logística. Por último, respecto de su poder institucional, los trabajadores desocupados no cuentan con canales formales para el procesamiento de sus demandas, sino que estos suelen generarse, en ocasiones, luego de realizarse la acción colectiva cuando ésta le otorga grados de visibilidad pública a su reclamo o genera perturbaciones en la cotidianidad laboral.

En cuanto a su repertorio de acción, éste se caracteriza por asumir dentro de la tipología construida la denominación de movilización con tendencia disruptiva, que confirma la aplicación del modelo para los casos sustentados en bajos niveles de poder en todos sus tipos. Como se puede





observar en la Tabla III, estos trabajadores excluidos de la relación laboral emplean en las confrontaciones formas disruptivas (74% de los eventos), a partir del bloqueo de vehículos petroleros (48%) y de instalaciones productivas (26%). Esto es combinado con concentraciones (22%). La experiencia de lucha permea las formas que asume el accionar colectivo. En la memoria cultural de los trabajadores del sector se encuentra fuertemente inscripto el bloqueo de rutas e instalaciones, al ser característico de los procesos de resistencia a las consecuencias regresivas de la privatización de la empresa durante la década de los noventa, que asumieron gran notoriedad en la región (Svampa, 2002; Bonifacio, Mases, Taranda, 2003).

Por último, resta caracterizar a las comunidades de pueblos originarios. En los años abordados se han desatado diversas tensiones y confrontaciones con relación al desarrollo y avance de la actividad hidrocarburífera en el territorio de la cuenca, donde las comunidades se encuentran localizadas. El eje de confrontación por éstas establecido asume como principales destinatarios a YPF, junto a las administraciones provinciales y municipales, seguidas por las nacionales. Las demandas expresadas en los episodios conflictivos se concentran en las denuncias por afectación ambiental y pedidos de remediación (71% de los eventos), seguidas por el incumplimiento del derecho de consulta previa (33%) y el rechazo al avance o instalación de la actividad de la empresa en su territorio (24%).

En cuanto a la configuración de poder respecto de este actor, si bien no participan del proceso productivo, su localización en el terreno en el cual éste se realiza le concede cierta ascendencia sobre el mismo, otorgándole relativa capacidad de obstaculizarlo.¹¹ En adición, otro elemento

¹¹ De acuerdo con la Ley N.º 17.319 y sus modificatorias, las empresas deben abonar el pago de servidumbre, cuyos montos son fijados por resolución.

que tiende a reforzar este aspecto radica en la ubicación en su territorio de proyectos considerados estratégicos por los gobiernos nacionales y locales –tal es el caso de la explotación de la formación Vaca Muerta– cobrando mayor relevancia un accionar que ponga en tensión las posibilidades de desarrollo de los mismos.

En cuanto a su poder asociativo, este actor generó procesos de agregación de larga data que fortalecieron su capacidad organizativa a partir de la creación de instituciones propias, tal como la Confederación Mapuche de Neuquén, cuyos orígenes se remontan a la década del setenta. Esto se combina con la articulación con distintas asociaciones, colectivos y organizaciones de la sociedad civil, que en ocasiones lograron consolidar una transversalización de objetivos, alcanzando configuraciones de mayor agregación tales como la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y la Multisectorial contra la Hidrofractura. Esto también se vio impulsado por un contexto de creciente preocupación y movilización pública por problemáticas vinculadas con el uso, consumo y apropiación de los recursos naturales, que les otorga mayor legitimidad moral a sus reclamos.

Por último, existen ciertos reconocimientos institucionales. La Constitución Nacional (CN) habilita la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitarias. La Ley Nacional N.º 26.160/2006 suspende la ejecución de desalojos de tierras y ordena un relevamiento de las comunidades que las ocupan de manera actual, tradicional y pública, aunque no con el propósito de otorgar titularidad de propiedad sobre la tierra. El derecho a consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas, reconocido en la CN y enmarcado en tratados y derechos internacionales, contribuye a sostener grados de poder estructural y la capacidad de control sobre las actividades en su territorio. No obstante, se destacan inconsistencias en el efectivo cumplimiento de estas normativas (Riffo, 2019; Acacio y Wyczykier, 2020).





Como se observa en la Tabla III, el repertorio de acción de este actor combina acciones de carácter convencional que buscan apelar a la visibilización y adhesión pública a sus reclamos, a través de las acciones declarativas (comunicados, petitorios, conferencias de prensa) (52% de los eventos) con acciones de carácter disruptivo a partir del bloqueo al acceso de instalaciones productivas (43%) y en menor medida concentraciones y movilizaciones (14%). Observamos en la configuración resultante un tipo de repertorio que denominamos de *movilización con tendencia disruptiva*. Este se sustenta especialmente en su poder asociativo y en grados relativos de poder estructural e institucional en articulación con la tradición de lucha de los movimientos y organizaciones vinculadas a la problemática ambiental que tienden a emplear la movilización en el espacio público.

Tabla III. Principales *performances* de los actores laborales y no laborales.
 YPF.Cuenca Neuquina. 2003 -2015
 (Respuesta múltiple con base en el total de eventos).

Laboral	Sindicatos petroleros privados (56%)	Suspensión de la producción 55% Anuncio de medida de fuerza 54% Acciones declarativas 11%
	Desocupados (18%)	Bloqueo de vehículos petroleros (48%) Bloqueo de instalaciones productivas (26%) Concentraciones (22%)
No laboral	Comunidades de pueblos originarios (16%)	Acciones declarativas (52%) Bloqueo a instalaciones productivas (43%) Concentraciones (14%)

Fuente: Elaboración en base a datos propios (IIGG-UBA). Nota: Se presentan sólo las performances que superan el 10% de los episodios de cada actor. N: 130

Conclusiones

En el campo de la acción colectiva, como en muchos otros, las formas instrumentalizadas en la confrontación son menores a las teóricamente posibles. Esta delimitación constituye un indicador de que la acción no es una expresión espasmódica de tensiones o de intereses. Como argumentamos, la experiencia de lucha previa junto con los recursos de poder disponibles sedimentan en repertorios.

Los casos analizados nos resultaron pertinentes para poner a prueba el modelo propuesto. En ellos encontramos una heterogeneidad de actores con historias diversas, distintas combinaciones de recursos de poder y diferentes repertorios de acción. Analizarlos nos permitió sostener con mayor énfasis uno de los componentes centrales de nuestro planteo inicial: los recursos de poder importan. Pudimos ver que, al producirse una articulación sistemática de estos recursos con fuerte presencia en sus tres tipos, la acción colectiva tiende a recaer en la amenaza de la no cooperación y la canalización institucional de las demandas. En el otro extremo, las bajas concentraciones de poder tienden a estar asociadas a las prácticas disruptivas. Donde prácticamente no existen recursos de poder disponibles, los repertorios pueden derivar en formas embrionarias y esporádicas de violencia colectiva. En el medio se presentan amplias variaciones. El análisis nos muestra también que es necesario tener una perspectiva del conjunto de los recursos que están en juego. Una ejemplificación de lo dicho resulta del estudio de las diferentes prácticas de lucha de los trabajadores tercerizados según nos situemos en los trenes urbanos o en YPF. Que apliquen un repertorio disruptivo y no convencional, o el clásico repertorio sindical, no depende de la tercerización en sí – poder en el mercado de trabajo- sino de la forma de la misma y las funciones desarrolladas –poder en el lugar de trabajo–. Cuando la terce-





rización no es pauperizante y se registra en actividades centrales del proceso productivo y sus trabajadores están amparados por instituciones gremiales, el repertorio de acción sindical clásico es posible. Este ejemplo también muestra cómo la experiencia previa y los recursos no pueden ser escindidos en la explicación de los repertorios. Los tercerizados ferroviarios apelan a una tradición de lucha anclada en la cultura de izquierda y de los movimientos de desocupados, organizaciones con las cuales tienen lazos de cooperación y comparten elementos análogos en los recursos de poder. Los petroleros privados apelan a una tradición sindical dada la organización que los aglutina con todo lo que esta implica en recursos de poder y experiencia de lucha. Futuros trabajos que aborden en una perspectiva diacrónica una mayor cantidad de casos podrán proveernos una mayor comprensión de cómo operan en su génesis la interacción y actuación conjunta entre experiencia y recursos.

Nuestra escala y localización de análisis nos permitió abordar ejes de conflicto en torno a relaciones de interdependencia de distinto tipo e intensidad (trabajo-capital o empresa-pasajeros o comunidades de pueblos originarios-empresa) junto a otras relaciones que no presuponían intercambios económicos (familiares de víctimas- empresa y gobierno, empresa-desocupados). Vimos que el modelo es operativo para el análisis de ambos tipos de relaciones. Nos queda pendiente estudiar aquellas que no presentan vínculos de interdependencia. También ampliar el análisis de la variación de los repertorios en diversas escalas –empresas, regiones, país–. Esperamos que nuevos trabajos nos permitan enriquecer el esquema analítico elaborado.

Como la literatura especializada enseña, el conflicto social expresado por vía de la acción colectiva es una realidad persistente de los entramados sociales actuales. La historia contemporánea muestra que –más allá de sus variaciones– “la lucha continúa”. Esperamos con estas páginas haber aportado al conocimiento del cómo esta persistencia sucede y se transforma.

Bibliografía

Acacio, J. y Wyczykier, W. (2020). "Expectativas públicas y conflictos sociales en torno a los hidrocarburos no convencionales en Argentina: algunos apuntes sobre Vaca Muerta", en *Izquierdas*, 49, abril 2020: 457-477

Bauni, N. (2017). La lucha contra la tercerización precarizante de los trabajadores ferroviarios. En Verónica Pérez y Julián Rebón (comps). *La perturbación como motor de la historia. Los ferrocarriles metropolitanos durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Biblos-Clacso.

Basualdo V., Morales, D. y Cabello, A. (2014). El caso del asesinato de Mariano Ferreyra y la problemática de la tercerización. En Basualdo, V. Y Morales, D., *La tercerización laboral. Orígenes, impacto y claves para su análisis en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores

Bertranou, J. y Serafinof, V. (2018). El policy making 'presentista' del kirchnerismo. Elementos de juicio a partir del análisis del sector Transporte. Documentos de Trabajo Instituto del Transporte. Universidad Nacional de San Martín.

Bonifacio, J. L., Mases, E. y Taranda, D. (2003). "Procesos de constitución de los movimientos piqueteros en la Provincia de Neuquén". *Estudios sociales*, 25 (1), 169-187.

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) (2012). Derechos Humanos en Argentina: Informe 2012. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Coser, L. (1970). *Nuevos aportes a la teoría del conflicto social*. Buenos Aires: Amorrortu editores.

Etchemendy, S. y R. Collier (2008). "Golpeados pero de pie. Resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado". *Postdata. Revista de reflexión y análisis político*, 13, pp. 145-192.

Fillieule, O. y D. Tartakowsky (2015). *La manifestación. Cuando la acción colectiva toma las calles*. Buenos Aires: Siglo XXI





Giuliani, A. (2013). *Gas y petróleo en la economía de Neuquén*. 1a ed. Neuquén: EDUCO. Universidad Nacional del Comahue. 212 p; 23x16 cm

Gutiérrez, A., et al (2020). Transporte urbano de pasajeros. Diagnóstico para la planificación. Programa de la Universidad de Buenos Aires sobre Transporte, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Hernandez, C. (2017). Entre conflictos y accidentes. La construcción de los ferrocarriles metropolitanos como problema público (2002-2015) (Tesis de maestría en Investigación en Ciencias Sociales). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

_____ (2019). Las vías del poder social. Límites y potencialidades a la capacidad asociativa de los usuarios/pasajeros del sistema metropolitano de transporte público colectivo (2002-2017). (Tesis de doctorado en Cs. Sociales). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

_____ (2020). Familiares en acción. La tragedia de Once y la cuestión ferroviaria metropolitana en la escena pública. En Pita, M. V. y Pereyra S. (Eds.), *Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Teseo.

Kralich, S. (2001). Incidencia de los gastos de transporte sobre el bolsillo del asalariado. El caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires. Trabajo presentado en 5to Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Organizado por Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, Argentina.

Marín, J. C. (2007). *El ocaso de una ilusión: Chile 1967/1973*. Buenos Aires: Ediciones PICASO.

Medel M. y Somma N. (2016). “¿Marchas, ocupaciones o barricadas? Explorando los determinantes de las tácticas de la protesta en Chile”, en *Política y gobierno*, Vol. XXIII, núm. 1: 163-199.

Muñiz Terra, L. (2006). “La erosión del poder sindical en un escenario

de privatización: el caso del Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE)", en *Question*, 1(12).

Offe, C. y Wiesensthal, H. (1992). *Dos lógicas de la acción colectiva. La gestión política*. Madrid: MTySS.

Pérez, V. (2013). Estallidos de hostilidad en el transporte ferroviario de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires. 2002-2010 (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales). Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.

Pérez, V. y Rebón, J. (2012) *Las vías de la acción directa*. Buenos Aires: Aurelia Rivera libros.

_____ (2017). *La perturbación como motor de la historia. Los ferrocarriles metropolitanos durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Biblos- Clacso.

Pérez Roig, D. (2018). Políticas de promoción de 'formas extremas' de energía en la Argentina postconvertibilidad (2002-2015). (Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

Pita, M. V. y Pereyra S. (Eds.). *Movilización de víctimas y demandas de justicia en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Teseo.

Rebón, J. (2007). *La empresa de la autonomía. Trabajadores recuperando la producción*. Buenos Aires: Colectivo Ediciones/PICASO.

_____ (2018). "La política en las calles. Aproximaciones desde la Argentina reciente". *Revista de Ciencias Sociales*. Udelar, Montevideo.

Rebón, J. y Hernandez, C. (2016). Las formas de la acción colectiva en el sistema ferroviario de pasajeros de la Región Metropolitana de Buenos Aires. *Revista Transporte y Territorio*, 16, 201-219. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.

Riffo, L. (2019). Hidrocarburos no convencionales, hegemonía y relación sociedad-naturaleza. Análisis de las relaciones entre el Estado, las industrias culturales y los conflictos sociales en el avance de la frontera





hidrocarburífera, entre 2009 y 2014, en Neuquén. (Tesis de Maestría en Ciencias Sociales y Humanidades). Universidad Nacional de Quilmes, Bernal, Argentina.

Schmalz, S. (2017). “Los recursos de poder para la transformación sindical”, en *Nueva sociedad*, 272, 19-41.

Secretaría de Transporte de la Nación (2009-2010). Encuesta de Movilidad Domiciliaria. Movilidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (ENMODO). Buenos Aires: Secretaría de Transporte de la Nación. Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Silver, B. (2005). *Fuerzas del trabajo. Los movimientos obreros y la globalización desde 1880*. Madrid: Akal.

Súnico, A. (2019). El conflicto de los trabajadores en YPF. Actores, demandas y formas de acción. Anuario del Centro Cultural de la Cooperación. Centro Cultural de la Cooperación.

_____ (2020). La conflictividad de los trabajadores en torno a la empresa hidrocarburífera YPF. (2003-2019). (Trabajo Final de Especialización en Metodologías de Investigación en Cs. Sociales). Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires.

Svampa, M. (2002). *Movimientos sociales en la Argentina de Hoy. Piquetes y Asambleas*. CEDES.

Tarrow, S. (1999) *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza Editorial.

_____ (2008) “Charles Tilly and the Practice of Contentious Politics”, en *Social Movement Studies*. Vol. 7, No. 3: 225–246.

Taylor, V. y Van Dyke, N. (2004) “Get up, Stand up: Tactical Repertoires of Social Movements”, en *The Blackwell companion to Social Movements*: 262-293.

Thompson, E. P. (1979) La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII. En *Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase*, 62-134. Barcelona: Crítica.

Tilly, C. (2000). "Acción colectiva", en *Apuntes de Investigación del CECyP*, 6, 9-32.

_____ (2008). *Contentious performances*. NY: Cambridge University Press.

Wiley, N. (1967) "America's unique class politics: The interplay of the labor, credit, and commodity markets", en *American Sociological Review*, 32(4): 529-541.

Wright, E. O. (2000). "Workers power, Capitalist Interests and class compromise", en *American Journal of Sociology*.

_____ (2013). *Envisioning real utopias*. New York: Verso.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Experiencias de lucha y lucha cultural en Francia (1968)

Experiences of struggle and cultural struggle in France (1968)

Lisandro Braga*

*Recibido: 20 de octubre de 2020
Aceptado: 28 de noviembre de 2020*

Resumen: El trabajo analiza las experiencias de las luchas estudiantiles y obreras en Francia en la década de 1960, especialmente en mayo-junio de 1968, demostrando la importancia de las luchas culturales estudiantiles y su fusión parcial con el movimiento obrero en el avance de las luchas, la conciencia de clase, la radicalización política durante mayo de 1968 y su herencia revolucionaria. Para eso, analizaremos este evento dentro de una totalidad: el régimen de acumulación conjugado.

Palabras clave: Acumulacion conjugada, crisis de acumulación, lucha de clases, movimiento estudiantil, movimiento obrero.

Abstract: The work discusses the experiences of student and worker struggles in France in the 1960s, especially in May-June 1968, demonstrating the importance of student cultural struggles and their partial fusion with the workers' movement in the advancement of struggles, of conscience class, political radicalization during May 1968 and its revolutionary heritage. For that, we will analyze this event within a totality: the combined accumulation regime.

Key words: Conjugated accumulation, accumulation crisis, class struggle, student movement, labor movement.

* Doctor en Sociología/ Universidade Federal de Goiás y profesor del Departamento de Sociología en la Universidade Federal do Paraná, Brasil. lisandrobraga@ufpr.br

Introducción

Las experiencias de las luchas proletarias y estudiantiles en el Mayo Francés no deben entenderse de manera aislada, sino dentro de una totalidad: el *régimen de acumulación conjugado* mundial y francés (Braga y Viana, 2019). La historia del capitalismo está marcada por una diversidad de cambios en sus *formas de valorización*, *formas sociales* (estatal, judicial, política, cultural) y formas de explotación internacional/ relaciones internacionales (colonialismo, imperialismo, imperialismo oligopolista, etc.) pero estos cambios apuntan a garantizar la continuidad del modo de producción capitalista. La sucesión de las formas de valorización, del conjunto de las formas sociales, de las relaciones internacionales por otras, caracteriza la sucesión de un régimen de acumulación por otro y tiene como determinación fundamental la lucha de clases. Y todo eso se pasa en un proceso histórico más o menos largo a depender del caso concreto.

El régimen de acumulación conjugado

Después de la II Guerra Mundial (1939-1945) y su destrucción masiva de las fuerzas productivas, el capitalismo necesitó reconstruir, simultáneamente, las sociedades capitalistas destruidas y reanudar la acumulación de capital, así como evitar otros procesos sociales similares como el nazi-fascismo, la guerra y, principalmente, otras experiencias de revolución proletaria. Para ello se creó el régimen de acumulación conjugado que se basó esencialmente en un trípode: fordismo (forma de valorización), estado integracionista (forma estatal) e imperialismo oligopolista transnacional (forma de explotación internacional).

Todas estas formas sociales ya existían antes, pero a partir de 1945 se presentan hegemónicas en la mayoría de los países imperialistas que vuelven a experimentar otro período de estabilidad. Concretamente el fordismo no significó ninguna gran diferencia del taylorismo, pero si una so-





cialización de la proposición de F. Taylor (Neto, 1991; Harvey, 2008; Viana, 2009, 2019).

El uso de la tecnología se expande en el capitalismo oligopolista transnacional y ocupa un rol central en el proceso de valorización del capital (extracción de plusvalor relativo) generando una mayor producción de bienes de consumo, una producción en masa y, por consiguiente, un consumo en masa. Nace la “sociedad del consumo” y para que se reproduzca se debe realizar una serie de acciones marcadas por la imposición del estado integracionista y sus políticas sociales de reproducción del consumo en masa, distintas políticas de integración social de las clases inferiores (proletariado, lumpemproletariado, trabajadores de los servicios), política de expansión crediticia, desarrollo de la obsolescencia programada, mercantilización de la recreación y el ocio, burocratización (control social) de las relaciones sociales, etc. (Viana, 2019; Ório, 2019).

El fordismo buscó incrementar la producción/ extracción de plusvalor relativo¹ del proletariado mediante el desarrollo tecnológico, maquinarias y técnicas avanzadas, incluso para el control social del proletariado y otras clases sociales, dentro y fuera del lugar de trabajo. Podemos decir que

durante el período del régimen de acumulación conjugado, el proceso de burocratización de las relaciones sociales creció al intensificar el control sobre los trabajadores, extendiéndose a su tiempo fuera del trabajo. Los intereses de las organizaciones internacionales, la iglesia, los sindicatos patronales, así como la televisión, fueron importantes para la imputación de prácticas de ocio “funcionales”, en lo que respecta a la preservación de las condiciones físicas para el trabajo. El ocio se consolida entonces como valor de cambio y el proceso de comercialización del ocio se entrelaza con su proceso de burocratización y, en consecuencia, su control. Si, entonces, el trabajo y las obligaciones sociales eran un espacio de control, también se controla el tiempo fuera del trabajo, a través del ocio. Por tanto, la red

¹ La plusvalía relativa es la que se obtiene aumentando la productividad en un período de tiempo determinado. La burguesía ha encontrado algunas formas de hacerlo: mediante un mayor control del tiempo de trabajo de los trabajadores, una estricta disciplina del proletariado, que implica la formación de especialistas en el control y vigilancia del trabajo y con el desarrollo tecnológico (equipos y maquinarias más dinámicas en la producción de mercancías).

de control sobre los trabajadores en el modo de producción capitalista se amplía y los espacios para la creatividad y la búsqueda de la autorrealización se vuelven aún más limitados (Ório, 2019: 126).

Aquí es posible visualizar dos procesos centrales que constituyen la sociabilidad capitalista en el régimen de acumulación conjugado: el proceso de burocratización y mercantilización de las relaciones sociales capitalistas.

La burocracia como *clase social* y como *forma organizativa* son realidades propias de las sociedades capitalistas. Son las relaciones capitalistas de producción las que constituyen las clases sociales y que generan la división social del trabajo que por supuesto genera otras tareas permanentes para un conjunto de personas, generando un modo de vida común, intereses comunes y alianzas/oposiciones comunes a otras clases sociales² (Marx y Engels, 1984).

La clase social responsable por dirigir las instituciones burguesas es la burocracia y sus fracciones de clase (empresarial, estatal, sindical, partidaria, universitaria). Esta nace y avanza con el capitalismo, dirigiendo las empresas capitalistas, manteniendo el proletariado bajo su control y dominación, así como las instituciones estatales y de la sociedad civil (universidad, sindicatos, partidos políticos y otras) ejercen dominio sobre otras clases y grupos sociales (estudiantes, por ejemplo). Lo hace de forma (organizativa) burocrática, es decirse caracteriza por la relación social entre dirigentes y dirigidos, instituida y legitimada por normas legales (estatutos y leyes), marcada fuertemente por la jerarquía de puestos en el cual el dirigente detiene los medios de dirigir y el poder de decidir, controlar y dominar bajo la determinación del modo de producción capitalista, es decir de los intereses de la burguesía³ (Motta, 1985; Viana, 2012; Braga, 2016).

² Así resulta que en el capitalismo el proletariado es la clase productora de plusvalor, la burguesía la propietaria de los medios de producción, la intelectualidad la responsable por asistir a la burguesía mediante la actividad cultural, el lumpem proletariado como clase marginal (población sobrante) del capitalismo etcétera.

³ La autonomía de la clase burocrática (estatal) es relativa, ya que está predeterminada por la necesidad de reproducir el capitalismo del que no puede escapar. En este sentido, entendemos a la burocracia como una clase asistente de la burguesía.





El desarrollo de la burocracia es determinado por la dinámica de los regímenes de acumulación y sus *ondas de burocratización* y la dinámica de la acumulación conjugada fue determinada por la *tercera onda de burocratización*.⁴

en la época del régimen de acumulación conjugado, hay una intensificación de ese proceso, tanto por seguir el proceso de mercantilización, como también por la necesidad de la burguesía de mayor control social y el mayor intervencionismo estatal, ampliación de instituciones estatales, control y exigencia de burocracia por el Estado, etc.o (Viana, 2019: 183-184).

Una de las principales determinaciones de la burocratización es el proceso de mercantilización de las relaciones sociales en el capitalismo, marcado, también, por *ondas de mercantilización*. La acumulación conjugada crea la *cuarta onda de mercantilización* con la llegada de la televisión y el automóvil, los utensilios y electrodomésticos que crean una vasta mercantilización de la vida social, generalizada y propagada por el radio, teléfono y televisión que intensifican la mercantilización de la cultura (Viana, 2018; Ório, 2019).

La reproducción de la acumulación conjugada y sus formas sociales inevitablemente dependían de las relaciones de explotación internacional (imperialismo) para que existan. Los altos costos para mantener el Estado integracionista e sus políticas sociales, así como la necesidad de buscar mercados de consumo para la producción en masa, pedían una intensificación del imperialismo que pasó a caracterizarse por el predominio de la exportación de capitales productivos y la instalación de empresas capitalistas transnacionales en los países subordinados (Ório, 2020).

De esa manera la acumulación conjugada fue marcada por la extracción de plusvalor relativo en los países imperialistas (EE.UU., países

⁴ La burocratización es el proceso de expandir el control en la sociedad, lo que puede significar expandir las organizaciones burocráticas, transformar las organizaciones en burocráticas, intensificar y expandir el control social a través de la burocracia, etc. Las cargas burocráticas anteriores se refieren a todas estas formas de burocratización. Acompaña el desarrollo capitalista y la sucesión de regímenes de acumulación" (Viana, 2015: 278).

Europeos) y por la extracción de plusvalor absoluto en los países subordinados (africanos, latinoamericanos, asiáticos); es decir, los países imperialistas conjugaban acumulación intensiva y extensiva a través de la transferencia de plusvalor (absoluto) de los países subordinados a los imperialistas.

Finalmente, la política cultural (forma social) de la acumulación conjugada fue dominada por el re-productivismo que se vuelve hegemónico. Los cambios sociales son acompañados por cambios culturales en la formación de los regímenes de acumulación (Viana, 2019). El bloque dominante⁵ (burguesía, burguesía comunicacional,⁶ intelectualidad, burocracia y otras clases y sus fracciones) efectúa así una política cultural que cuenta con una estrategia de clase: la dominación cultural (Lefebvre, 2020). Su tarea esencial fue contener el movimiento proletario (integracionismo) y asegurar una nueva hegemonía que fue expresa por el reproductivismo:

la idea de reproducción (e integración) se complementa con las ideas de sistema, modelo, estructura etcétera, y todas convergen en el punto fundamental del paradigma reproductivista: el rechazo a la historia [...] el paradigma reproductivista no solo funcionó perfectamente para garantizar la realización de tareas económicas y políticas, bien como culturales, de la burguesía en el régimen de acumulación conjugado, así como ha completado un proceso que comenzó con el paradigma positivista, a saber: ahistorismo consolidado, además de dar nueva forma al reduccionismo y antinomismo. Lo hizo de muchas maneras, pero con énfasis en la ideología de la "integración de la clase obrera" (la reproducción) y las ideas de estructura y sistema de carácter ahistóricos [...] reforzando los procesos sociales llevados a cabo por otras instancias de la sociedad capitalista para promover la reproducción y evitar la revolución [...] no hay más espacio para revoluciones. El proletariado estaría integrado en el capitalismo. Este discurso, que tomó la posición de verdad absoluta durante casi dos décadas, reforzó la tendencia a la conservación histórica del capitalismo y del régimen conjugado (Viana, 2019: 232).

⁵ Los sectores más conscientes, organizados y atuantes de laburguesía (clase dominante) que se aglutinan y actúan en bloque. Por eso podemos hablar de un conjunto de clases auxiliares de la burguesía y que componen este bloque: la intelectualidad y la burocracia (estatal, partidaria, sindical).

⁶ La clase burguesa propietaria de las empresas capitalistas de comunicación (rádio, TV, diarios etc.).





Sin embargo, esta es la mirada burguesa basada en paradigmas e ideologías ilusorias (keynesianismo, funcionalismo, estructuralismo y otras más). La crisis de la acumulación conjugada, es decir, la lucha de clases en la década de los '60/'70, desnudará aquel relato "sin historia".

Lucha de clases y luchas culturales (1960-1968)

A pesar de la propaganda generalizada sobre la supuesta "integración del proletariado", solamente una fracción de esa clase disfrutaba del "Estado de bienestar" francés. Parte de la clase obrera –formada por las mujeres y los inmigrantes africanos- estaban completamente excluidos de la negociación fordista, sometidos en actividades de alto riesgo, salarios bajos, poca estabilidad laboral y ninguno beneficio fordista. Una fórmula segura para producir descontento social:

las desigualdades resultantes produjeron serias tensiones sociales y fuertes movimientos sociales por parte de los excluidos, movimientos que giraban en torno a la forma en que la raza, el género y el origen étnico determinaban quién tenía o no acceso al empleo privilegiado. Estas desigualdades fueron particularmente difíciles de mantener frente a las crecientes expectativas, alimentadas en parte por todos los dispositivos aplicados a la creación de necesidades y la producción de un nuevo tipo de sociedad de consumo. Sin acceso al trabajo privilegiado de la producción en masa, grandes segmentos de la fuerza laboral también carecían de acceso a los muy elogiados placeres del consumo masivo [...] El movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos se ha convertido en una furia revolucionaria que ha sacudido a las grandes ciudades. El surgimiento de las mujeres como asalariadas mal pagadas fue acompañado por un movimiento feminista igualmente vigoroso. Y el impacto de descubrir una pobreza terrible en medio de una creciente opulencia [...] generó fuertes contra-movimientos de descontento con los supuestos beneficios del fordismo (Harvey, 2008: 132).

Junto con el crecimiento del descontento social de una franja cada vez más amplia del proletariado (francés e inmigrante) y otros grupos sociales (estudiantes) en la década de 1960, la acumulación capitalista mundial comienza desacelerar y su tasa de ganancia comienza a caer (Beaud, 1987). Y eso refuerza y hace aumentar aún más el descontento social porque las contra tendencias burguesas a la crisis generan más explotación, opresión y represión estatal (Marx, 1988).

Otra determinación importante de la radicalización de las luchas sociales y avance de la conciencia proletaria y estudiantil en Francia/1968 –pero poco mencionada en la historiografía–⁷ fue las consecuencias sociales de las memorias de la Guerra de Argelia (1954-1962), la represión estatal (toques de queda en los barrios argelinos), y la brutalidad policial contra las manifestaciones anti-imperialistas realizadas mayoritariamente por estudiantes franceses y franco-argelinos a principios de los '60.⁸

Más allá del papel del imperialismo y su violencia en Argelia (y Vietnam), otras determinaciones explican el avance de la conciencia y del movimiento estudiantil en Francia: la violencia y terrorismo del Estado democrático francés, el rol conservador y reaccionario de la burocracia (incluso de izquierda como el PCF y la CGT), las ideologías reproductivistas dominantes (funcionalismo, estructuralismo, keynesianismo) en la educación burguesa, la lucha por los derechos civiles de los movimientos negros estadounidenses, el totalitarismo ruso, las luchas contra las dictaduras burguesas en Latinoamérica y otras más. Sin dudas, elementos condicionantes en el camino hacia una intensa politización y el malestar social.

⁷ Incluso por historiadores pseudomarxistas, para quienes el Mayo del 68 se reduce a una “cuestión de sexualidad” (Hobsbawm, 2016).

⁸ El día 17 de octubre de 1961, una represión policial conformada por distintas corporaciones militares (policía, Compañías Republicanas de Seguridad –CRS–, gendarmería), armada con largos bastones, avanza contra una marcha masiva organizada por el Frente de Liberación Nacional (FLN) para protestar contra el toque de queda y la guerra de Argelia. Las fuerzas represivas actuaron indiscriminadamente contra todos y cada uno de los argelinos y estudiantes con extrema violencia, muchas veces letal. El 8 de febrero de 1962, en una protesta contra las acciones terroristas de la OAS (Organización del Ejército Secreto, en francés “Organisation de l'Armée Secrète”), la policía acorraló a los manifestantes en la entrada de la estación de metro y los atacó con palos y patadas hasta la muerte de 9 personas (*La Masacre de Charonne*).





En este contexto, os detendremos en las experiencias de las luchas estudiantiles y obreras en los '60, especialmente en mayo-junio de 1968; si bien la historia de la conciencia de clase obrera, es la historia de las experiencias de luchas de clases en Francia.

Siguiendo el análisis de Ross (2018) se puede afirmar que ya en 1961 emerge un movimiento estudiantil espontáneo (Comité Anticolonialista y Frente Universitaria Antifascista/FUA) como respuesta a la brutal represión del día 17/10/1961, y de la necesidad de enfrentar las fuerzas de la OAS y de los grupos (paraestatales) en el Quartier Latin (barrio estudiantil) en París. El descontento con las prácticas represivas toma forma en la movilización y organización espontánea de los estudiantes y revela un avance de la conciencia y necesidad de contribuir con el avance de la lucha operaria:

los estudiantes adquirirán su propia tradición de lucha, forjada independientemente de los aparatos y partidos existentes. Ellos formaran sus propias organizaciones y, al hacerlo, toda una nueva concepción de movimiento de masa empezó a surgir: una acción política organizada alrededor de un objetivo claro – la independencia argelina – y el uso del combate físico duro o “directo” [...] la lucha contra la guerra podría y debería , en su visión, ser el punto de partida para el establecimiento de un combate revolucionario totalmente nuevo, o, al menos, para el regreso de un movimiento obrero que sería agresivo y no defensivo (Ross, 2018: 83-84).

Con el avance de la crisis capitalista en la segunda mitad de los '60, el Estado buscó construir medidas paliativas, recibidas por el movimiento estudiantil con gran descontento y mayor sistematización de la protesta. La década experimentó una expansión masiva de la educación superior en Francia, demandada especialmente por las necesidades de mano de obra especializada propia del fordismo y su avance tecnológico. Para eso, era necesario incrementar también las inversiones estatales en educación.

Como resultado, hubo una gran multiplicación del número de uni-

versitarios en el país: de 170 mil en 1950 saltó a 600 mil en 1968,⁹ pero con pocas posibilidades de ingresar al mercado laboral y disfrutar de la “integración”. Las inversiones no alcanzaron a mejorar la condición estudiantil, por el contrario, era cada vez más precarizada. Y para empeorar las cosas, el Estado francés propuso varias reformas universitarias (Plan Fouchet, V Plan y su reforma técnico-burocrática) que aceleraron la protesta estudiantil (Braga y Viana, 2019).

Las primeras protestas espontáneas estudiantiles del año ‘68 ocurrieron en sus primeros meses contra la guerra de Vietnam, en la ciudad de Nanterre, donde su universidad se ubicaba en los barrios pobres de inmigrantes argelinos, rodeados por grandes complejos industriales, y fue una de las primeras a sufrir con los ajustes presupuestarios. La protesta fue recibida con extrema brutalidad policial, lo que alimentó a que haya más protestas (Brinton, 2003; Ross, 2018). Nuevamente el descontento con la represión generó la conciencia de la necesidad de una fuerte organización estudiantil para enfrentarla.

Poco después de la ocupación de la Facultad de Psicología y Sociología de la Universidad de Nanterre por parte de los estudiantes, se ocuparon varias otras facultades con el apoyo masivo del profesorado y otros estudiantes. La burocracia universitaria (rectorado) reaccionó cerrando la universidad, una medida que acabó dando mayor visibilidad a las luchas estudiantiles.

En mayo, el proceso de ocupación de las universidades se extendió hasta llegar a la conocida y secular Sorbona. El día 3, las CRS invadieron la universidad reprimiendo violentamente el movimiento estudiantil: detenciones, golpizas, condenas sumarias, etc. (Teles, 2019). A partir de ese momento, la lucha estudiantil generó una tendencia: desde la etapa de luchas institucionales hegemónicas, pasando por las luchas autónomas, hasta llegar a la etapa de luchas autogestionarias (revolucionarias):

⁹ Solo en París había 182.000 estudiantes universitarios.





en este contexto se desarrolla la famosa Noche de las Barricadas, donde estudiantes y simpatizantes enfrentan la represión policial durante toda la noche del 10 al 11 de mayo [...] A pesar de la brutal represión, no lograron sacar a los estudiantes de las calles que se defendieron en decenas de barricadas en el Barrio Latino. Días después, más de un millón de personas salieron a las calles en solidaridad con los estudiantes y contra el gobierno. Entre los estudiantes había una clara conciencia de la necesidad de que sus luchas se extendieran más allá del ámbito universitario y más allá de las demandas de los estudiantes [...] Conscientemente, sectores estudiantiles radicalizados que, en ese momento, tenían hegemonía entre los estudiantes en general, llamaron y establecieron que sus luchas debían combinarse con las luchas históricas del movimiento obrero. Se inició una lucha cultural para que la alianza entre estudiantes y obreros se hiciera efectiva (Teles, 2019: 58-59).

El malestar con el reproductivismo dominante aumentó, y una conciencia estudiantil radicalizada llevó a una protesta total:

en otras palabras, es un rechazo a seguir aceptando la cultura de la sociedad establecida, no solo con las condiciones económicas, no solo con las instituciones políticas, sino con todo el sistema de valores que sienten que está podrido en el núcleo. Creo que en este sentido también se puede hablar de revolución cultural. Revolución cultural porque va dirigido contra todo el stablishment cultural, incluyendo la moralidad de la sociedad vigente (Marcuse, 1999: 64).

La radicalización de las protestas estudiantiles condujo a un cuestionamiento de la totalidad de la vida social, lo que se tradujo en una intensa lucha cultural estudiantil.

Toda una cultura contestataria existente en Francia fue rescatada para ayudar a explicar la lucha de clases: desde los elementos críticos de la Escuela de Frankfurt (la crítica a la industria cultural y la razón instrumental), crítica a la vida cotidiana (Lefebvre, 1991), las reflexiones existencialistas de un Sartre (1994) cada vez más cercano al marxismo, la

mayor radicalidad de la Internacional Situacionista y su crítica a la sociedad del espectáculo y su alienación cotidiana (Debord, 1997), las críticas a los valores capitalistas y sus modelos de consumo (Gorz, 1968), las concepciones revolucionarias de Marx (2008), Rosa Luxemburgo (1979), comunistas de consejos (Pannekoek, 1977) y muchos otros.

Pero más allá de ese rescate, era esencial difundir toda esta cultura contestataria, muchas veces revolucionaria (marxismo, anarquismo, comunismo de consejos), para contribuir con el avance de la lucha radical. Se llevaron a cabo varias acciones con este objetivo: intervenciones orales en las clases de profesores conservadores y reaccionarios para desenmascararlos, experiencias de autogestión pedagógica, militancia permanente en los barrios obreros con distribución de folletos, grafitis, carteles, diarios, historietas, dibujos animados, fotografía, etc.

Inevitablemente la lucha cultural estudiantil y su intento de fusionar con el movimiento obrero y radicalizar sus acciones va a chocar con los intereses de la burocracia sindical¹⁰ (Confederación General del Trabajo-CGT) y de la burocracia partidaria (Partido Comunista Francés-PCF).¹¹ El conjunto de prácticas y símbolos de los contestadores sociales con actos masivos, miles de banderas negras, las barricadas, asambleas, ocupación

¹⁰ "El principal objetivo del sindicato era evitar que las fábricas ocupadas se transformaran en espacios donde los trabajadores pudieran expresarse creativamente. Esto debe hacerse, si es posible, sin la intervención de la policía, ya que un ataque inoportuno por parte de la policía durante la huelga general podría llevar a los trabajadores a comenzar a auto organizarse en defensa propia. El sindicato dirigió esta operación poco después de que comenzara la huelga. Los dirigentes sindicales se pusieron a la cabeza del "movimiento"; controlaron todos los micrófonos e iniciaron la ocupación de la fábrica; la burocracia sindical procedió entonces a ocupar la fábrica en lugar de los trabajadores. En el interior de la fábrica ocupada por el sindicato, nadie podía expresarse: los dirigentes sindicales leían en los micrófonos discursos preparados para una audiencia compuesta mayoritariamente por delegados sindicales [...] El siguiente gran objetivo del sindicato era evitar los contactos entre trabajadores y estudiantes, para evitar que la conciencia del poder colectivo fluyera hacia las fábricas. Esto se logró mediante una combinación de propaganda y fuerza" (Gregoire y Perlman, 2017: 60-61).

¹¹ "Lo plantea explícitamente Georges Marchais, el vocero del partido, el 3 de mayo en un artículo que aparece en la portada de L'Humanité: 'Como siempre cuando avanza la unión de las fuerzas obreras y democráticas, los grupúsculos 'gauchistes' (izquierdistas) se agitan. Se encuentran particularmente activos entre el estudiantado. En la Universidad de Nanterre por ejemplo se encuentran los maoístas, las Juventudes Comunistas Revolucionarias que agrupan a una parte de los trotskistas, mayoritariamente trotskista, los anarquistas, distintos grupos más o menos folclóricos. A pesar de sus contradicciones, aquellos grupúsculos, algunos centenares de estudiantes, se unificaron en lo que llaman "el Movimiento de 22 de marzo de Nanterre" dirigido por el anarquista alemán Cohn-Bendit [...] Es preciso desenmascarar a esos falsos revolucionarios ya que objetivamente sirven a los intereses del poder gaullista y de los grandes monopolios capitalistas". (Thomas, 2008: 51-52).





y autogestión de universidades se refiere a las prácticas obreras revolucionarias y tenía como objetivo establecer una comunicación directa con el movimiento obrero sin pasar por la burocracia cegeteana y PCF (Ross, 2018).

Entre los días 13 y 14 de mayo la CGT, coaccionada por el estallido social, convoca una huelga general de 24 horas, sin embargo, el control sobre los huelguistas se le escapa de las manos y las huelgas y ocupaciones de fábricas se generalizan autónomamente por todo el país:

Se calcula que el 17 por la noche 200.000 trabajadores están en huelga. Son un millón al día siguiente al mediodía, el doble por la noche, 4 millones el lunes 20 y más de cinco millones a partir del martes. A pesar de todo la patronal sigue haciendo oídos sordos ante la masividad del movimiento, en parte porque cree poder ganar la pulseada con el proletariado que recién empieza a despertarse masivamente luego de largos años de letargo de sus batallones más concentrados, en parte también porque se encuentra desorientada ante el carácter no directamente material de las reivindicaciones del movimiento obrero y su carácter eminentemente político que se impuso masivamente desde el primer día, en las movilizaciones del 13 de mayo. Mientras tanto va creciendo la oleada obrera y popular a medida en que, en sus márgenes, los sectores más determinados van radicalizando su actuación. Si durante los días sucesivos sigue ampliándose el movimiento huelguístico, las ocupaciones prosiguen en todo el país (Thomas, 2008: 56-57).

En este contexto se conforma un bloque revolucionario, integrado por sectores radicalizados del movimiento estudiantil y grupos revolucionarios (marxistas, situacionistas, maoístas y trotskistas radicales y otros), del movimiento obrero, de fracciones del lumpemproletariado¹² (desocu-

¹² Quizás aquí aparezca la primera experiencia de protesta social de fracciones de clase del lumpemproletariado en el siglo XX. Lo que Pierre Bourdieu (1998) llamó un *milagro social*, exactamente 30 años después de mayo del '68. Esto confirma que el lumpemproletariado, como advirtió Marx –aunque no lo ven muchos de sus "intérpretes"–, tiene la posibilidad de contribuir a las luchas revolucionarias, a pesar de la tendencia más fuerte, por sus condiciones de existencia, a dejarse llevar por complots reaccionarios.

pados) y de algunos intelectuales. La intensa politización hizo que el movimiento estudiantil radical buscara una alianza con el proletariado en pos de propagar la revolución (autogestión) social.

Como lo demuestra la teoría marxista, los individuos actúan a partir de sus necesidades e intereses en el interior de un cuadro mental marcado por un conjunto de valores. Lo hacen a partir de determinada cultura que tienen como referencia para entender, explicar y movilizarse por su condición social. Lo que impulsa –o no- a grupos y clases sociales, es la conciencia que tienen para interpretar, explicar y actuar sobre la realidad que los rodea. En este sentido, fue el movimiento estudiantil, especialmente sus sectores más radicalizados y conscientes, el que dio cuenta de la necesidad de rescatar toda una cultura de protesta y ponerla al servicio de la revolución social. Fue en ese momento que los estudiantes y militantes revolucionarios descubrieron que no pueden hacer la revolución por sí mismos y por eso buscaron acercarse del proletariado, incentivando su auto-organización como camino para la lucha autogestionaria.

Por consiguiente, la izquierda partidaria/ sindical (la burocracia) y sus tradiciones en dirigir toda y cualquier lucha obrera pierde espacio y gana fuerza la perspectiva proletaria autogestionaria; es decir, crece la conciencia de que la emancipación de la clase trabajadora es obra de los propios trabajadores:

en el interior de las ocupaciones universitarias, la palabra de orden va a ser autogestión. Incluso es en este período que esta palabra gana otro significado para expresar el contenido revolucionario del proletariado y alejarlo del carácter burocrático de los partidos ‘comunistas’ y del leninismo” (Teles, 2019: 61).

No en vano, una de las frases más famosas y pintadas del Mayo de ‘68 fue “la humanidad sólo será libre cuando el último capitalista sea ahorcado con las tripas del último burócrata”.

Incluso frente una crisis de hegemonía burguesa y rápido avance de la lucha y conciencia estudiantil /obrera, estas no fueron suficientes





para hegemonizarla sociedad civil. La lucha cultural todavía no fue suficiente para la construcción de un objetivo y estrategia revolucionaria:

a medida que se prolonga, el movimiento pierde fuerza y radicalidad. Hay que promover la radicalidad y en sentido revolucionario, trayendo la necesidad de generalizar tanto la formación intelectual en el sentido de la conciencia revolucionaria y la formación de organizaciones autárquicas, como la necesidad de establecer un objetivo final (revolución y autogestión) y una estrategia que apunta a su realización (articulación de organizaciones autárquicas y generalización de la autogestión, que presupone una conciencia revolucionaria generalizada). Esto, en el contexto de mayo de 1968 en Francia, señalaría la necesidad de la abolición inmediata del Estado y del capital y su sustitución por la autogestión generalizada y, al mismo tiempo, fortalecer y contribuir a la realización de esta en toda la sociedad, especialmente en las fábricas y empresas. Sin embargo, el bloque revolucionario no lo ha logrado, a pesar de que algunos grupos han avanzado en este proceso, pero otros se quedaron estancados en ambigüedades, contradicciones, doctrinarismos (Viana, 2019: 39-40).

La demora e insuficiencia cultural del bloque revolucionario en la elaboración de una estrategia de avance y generalización de la autogestión en las fábricas permitió a la burocracia preparar la contraofensiva burguesa, marcada por la mayor división del movimiento obrero, aislamiento del movimiento estudiantil y brutal represión a los sectores más radicales. Empezaba una implacable venganza de clase (Marx, 2008).

El mes de junio todavía iba a vivir episodios de guerra civil en las calles y fábricas ocupadas y controladas por los trabajadores. La dura resistencia de ellos volvió a ocupar las fábricas varias veces y solo fue derrotada con un verdadero aparato de guerra: rifles, granadas, gases lacrimógenos y balas de goma. Una vez más la burocracia salvaría a la burguesía. Se estima un saldo represivo de 2 manifestantes asesinados por la policía, 1.500 detenidos, 40 heridos y 150 extranjeros deportados. A partir de entonces la lucha obrera y estudiantil entraría en reflujo (Thomas, 2008; Teles, 2019).

El *Mayo de '68* marcó profundamente la sociedad capitalista francesa y mundial. Después de los *espectros* (las experiencias revolucionarias) que aterrorizaron a la burguesía europea en fin de la década de 1910 y comienzo de la década de 1920, bien como otras experiencias revolucionarias inacabadas, esta clase social logró imponer otro período de estabilidad social en el período post guerra, creyendo que la era de las revoluciones había llegado a su fin. Pero en la década de 1960 los fantasmas de la burguesía insistieron: las luchas estudiantiles y obreras se radicalizaron y ganaron fuerza en Italia, Alemania, Francia y en otros continentes, la cultura de la protesta fue recuperada. Y otra vez la burguesía (mediada por la burocracia) debió conjurar sus fantasmas (Viana, 2019).

Como reacción al *Mayo de '68* y su cultura de protesta radical, especialmente la que deriva del marxismo auténtico (y no sus deformaciones ideológicas), la burguesía promovió una contrarrevolución cultural preventiva, expresada especialmente por el post-estructuralismo y el postmodernismo. Sin embargo, varias otras reflexiones fueron desarrolladas de manera más profunda y mejor sistematizada que garantizó el regreso del marxismo y la crítica de sus deformaciones socialdemócratas y leninistas.¹³

Por fin, vale la pena decir que en estas experiencias de lucha no todo es derrota. A pesar de toda ofensiva burguesa que, por fin, dio inicio a un nuevo régimen de acumulación integral en los '80, es decir un cambio estructural en la forma de producir y reproducir el capital y su sociabilidad (neoliberalismo, paradigma subjetivista y sus ideologías, híper imperialismo, etc.), queda también una herencia en forma de teoría revolucionaria, el marxismo autogestionario. Éste expresa la forma contemporánea del marxismo.

Sin dudas su principal característica es el rechazo al capitalismo estatal ruso (1917-1985) y su expresión ideológica, el leninismo. Tal rechazo fue realizado mediante una renovación lingüística que reemplaza el término "comunismo" (completamente deformado por intelectuales conser-

¹³ Consultar: Teles, G., Silva, R. V. (2018). *Crítica marxista al leninismo*. Curitiba: CRV; Viana, N. (2008). *Manifiesto autogestionario*. Rio de Janeiro: Achiamé.





vadores y leninistas) por el concepto autogestión social (Guillerm, Bourdet, 1976) o asociación (Berger, 1977).

Palabras finales

Las protestas y luchas sociales en el capitalismo son respuestas a la vida alienada, a la explotación del trabajo y condiciones de vida y trabajo precarias, a la desocupación y vida marginal, a la dominación cultural. Revela el descontento social y la necesidad colectiva de cambiar las cosas, revela la conciencia de necesidades. Sin embargo, para que haya un verdadero cambio en este cuadro es necesario conocer sus determinaciones y su determinación fundamental (producción capitalista). Es decir, la cuestión de la conciencia es fundamental.

Las experiencias revolucionarias siempre son acompañadas por grandes luchas culturales y tal vez no haya un lugar que reúna estas dos cosas tan bien como Francia. La existencia de experiencias revolucionarias implica la existencia de alguna consciencia revolucionaria, entendiendo que la conciencia no es nada más que el *ser consciente* (Marx y Engels, 1984).

Viendo a la lucha de clases como motor de la historia, para la clase revolucionaria y sus militantes (incluso los intelectuales comprometidos) ésta debe ser consciente, desarrollada en la complejidad de los enfrentamientos con otras clases, que emerge espontáneamente generando formas de auto-organización y consciencia revolucionaria. Sin embargo, esas complejas instancias no alcanzan simultáneamente a todo el proletariado, ni a todo el estudiantado, y por eso la lucha cultural y su propaganda es fundamental para articular y generalizar las formas de auto organización.

La lucha de clases francesa en los '60/68 surgió espontáneamente en el rechazo cotidiana (absentismo, sabotaje, "operación-tortuga", *turnovers* etc.) del capital fordista, avanzó mediante una ola de luchas obre-

ras autónomas cuestionando la brutalidad de la explotación del trabajo, los términos del compromiso fordista, identificó sus verdaderos enemigos: la burguesía y sus clases auxiliares como la intelectualidad, burocracia estatal, partidaria y sindical, independiente de sus banderas y colores (derecha o izquierda), bien como sus prácticas reformistas y vanguardistas.

El bloque revolucionario conformado por proletarios, estudiantes, sectores del lumpemproletariado (desocupados) e intelectuales trazó un proyecto revolucionario expresado por la autogestión social, sin embargo, la correlación de fuerzas no fue suficiente para generalizar todo este proceso en la sociedad civil francesa. La lucha cultural aún no fue suficiente para garantizar la transición a un movimiento revolucionario.

Pero dejó un caldo cultural revolucionario importantísimo que puede y debe ayudar a la elaboración de otros proyectos y luchas revolucionarias en la sociedad contemporánea.

Bibliografía

Beaud, M. (1987). *História do capitalismo – de 1500 aos nossos dias*. São Paulo: Brasiliense.

Berger, C. (1977). *Marx frente a Lenin – asociación obrera o socialismo de Estado*. Madrid: Zero.

Bourdieu, P. (1998). *Contrafogos – táticas para enfrentar a invasão neoliberal*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Braga, L. y Viana, N. (2019). *Maio de 1968 – luta de classes e projeto autogestionário*. Curitiba: CRV.

Braga, L. (2016). *Breve introdução à teoria marxista das classes sociais e do Estado*. Revista Enfrentamento. Ano 11, número 19, pp. 19-36. Goiânia.

Brinton, M. (2003). *Paris: maio de 68*. São Paulo: Conrad Livros.

Gorz, A. (1968). *Estratégia operária e neocapitalismo*. Rio de Janeiro: Zahar Editores.





Gregoire, R. y Perlman, F. (2017). *Comitês de ação dos trabalhadores e estudantes. França, maio de 1968*. Disponible: <https://libcom.org/library/comit%C3%AA-de-a%C3%A7%C3%A3o-de-trabalhadores-e-estudantes> Accedido em: 16/10/2020.

Guillerm, A. y Bourdet, Y. (1976). *Autogestão: uma mudança radical*. Rio de Janeiro: Zahar Editores.

Harvey, D. (2008). *Condição pós-moderna*. São Paulo: Edições Loyola.

Hobsbawm, E. (2016). *Pessoas extraordinárias: resistência, rebelião e jazz*. São Paulo: Paz e Terra.

Lefebvre, H. (1991). *A vida cotidiana no mundo moderno*. São Paulo: Ática Editora.

_____ (2020). *A reprodução das relações de produção*. Goiânia: Edições Redelp.

Luxemburgo, R. (1979). *Greve de massas, partido e sindicatos*. Rio de Janeiro: Editora Kairós.

Marcuse, H. (1999). *A grande recusa*. Petrópolis, RJ: Vozes.

Marx, K., Engels, F. (1984). *A ideologia alemã*. São Paulo: Centauro.

Marx, K. (1988). *O capital*. Vol. IV. São Paulo: Abril Cultural.

_____ (2008). *A guerra civil na França*. São Paulo: Expressão Popular.

Motta, F. C. (1985). *O que é burocracia*. São Paulo: Brasiliense.

Neto, B. (1991). *Marx, Taylor, Ford – as forças produtivas em discussão*. São Paulo: Brasiliense.

Ório, M. (2019). *Capital recreativo – a apropriação capitalista do lazer*. Curitiba: CRV.

Pannekoek, A. (1977). *Los consejos obreiros*. Madrid: Editora Zero.

Ross, K. (2018). *Maio de 68 e suas repercussões*. São Paulo: Edições SESC.

Sartre, J. P. (1994). *Em defesa dos intelectuais*. São Paulo: Ática Ed.

Teles, G. (2020). *Dominação e controle: a burocracia no maio de*

1968. Em: Braga L. e Viana, N. (Comps.) *Maio de 68 - luta de classes e projeto autogestionário*. Curitiba: CRV Editora.

Thomas, J. B. (2008). *Ce n'est qu'un début continuons le combat!*
Em: Vigna, X. et al. (2008). *Mayo Francés: cuando obrero y estudiantes desafiaron al poder*. Buenos Aires: Ediciones IPS.

Viana, N. (2012). *A teoria das classes sociais em Karl Marx*. São Paulo: Editora Chiado.

_____ (2015). *Burocracia – forma organizacional e classe social*.
Revista Marxismo e Autogestão. Ano 02, número 03, pp. 265-285. Goiânia.

_____ (2018). *A mercantilização das relações sociais – modo de produção capitalista e formas sociais burguesas*. Curitiba: Appris.

_____ (2019). *Hegemonia burguesa e renovações hegemônicas*.
Curitiba: CRV.





Criminalización de luchas territoriales en el norte de la Patagonia (2009-2015)

Criminalization of territorial struggles in northern Patagonia (2009-2015)

Mariana Giaretto*

Recibido: 30 de septiembre de 2020

Aceptado: 2 de noviembre de 2020

Resumen: En este artículo presentamos algunos aspectos de una investigación más amplia acerca de la relación entre luchas territoriales y Estado, en el norte de la Patagonia en el periodo 2009-2015. Desde una perspectiva teórica crítica, proponemos ciertos ejes de análisis que nos permiten reconstruir los modos de intervención estatal en los conflictos territoriales, focalizando en los procesos de criminalización de experiencias de resistencia vinculadas a tomas de tierras, conflictos socioambientales y derechos territoriales indígenas. A partir de entrevistas y diversas fuentes documentales se reconstruyen experiencias de lucha concretas contra la criminalización, que despliegan procesos de contra-información, disputa político-jurídica y control territorial.

Palabras clave: Luchas territoriales; Estado; criminalización; experiencias de resistencia; Patagonia.

Abstract: In this article we present some aspects of a broader investigation about the relationship between territorial struggles and the State, in the north of Patagonia in the period 2009-2015. From a critical theoretical perspective, we propose certain axes of analysis that allow us to reconstruct the modes of state intervention in territorial conflicts, focusing on the processes of criminalization of experiences of resistance linked to takes of lands, socio-environmental conflicts and indigenous territorial rights. Based on interviews and various documentary sources, concrete experiences of the struggle against criminalization are reconstructed, which unfold counter-information processes, political-legal dispute and territorial control.

Key words: Territorial struggles; State; criminalization; resistance experiences; Patagonia.

* Docente e investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, Río Negro, Argentina. Directora del Proyecto de Investigación: "Estado y violencias: problemas y perspectivas sobre conflictos sociales y políticas públicas en territorios norpatagónicos (2009-2019)." marianatt3010@yahoo.com.ar

Introducción

¿Por qué la rebelión
es siempre a la vez
tan increíblemente fácil y
tan increíblemente rara?

Pascal Quignard, *La barca silenciosa*



A partir de la propuesta de este dossier vinculada a la cultura y tradiciones de lucha como problemática fundamental del análisis del conflicto social, en este artículo presentamos de manera acotada algunos aspectos de un trabajo de investigación más amplio,¹ centrado en el análisis crítico de las relaciones entre luchas territoriales y Estado. Cuando nos referimos a luchas territoriales incluimos experiencias que abarcan luchas por tierra y vivienda, luchas por derechos territoriales indígenas y conflictos socio-ambientales. Estas experiencias tienen en común que definen al territorio como límite inexorable ante la avanzada del capital y que sufren modos de intervención estatal basados en la criminalización de los conflictos.

El contexto histórico y geográfico de las experiencias analizadas abarca los territorios del norte de la Patagonia (Prov. de Río Negro y Neuquén) en el período 2009-2015, signado por las condiciones de crisis económica y por el impacto de la explotación de Vaca Muerta, una de las reservas mundiales más importantes de shale-oil y shale-gas (Pérez Roig, 2014). En esta región los conflictos territoriales se profundizaron en los últimos años del kirchnerismo, en la medida que se agudizó el impacto de la ofensiva extractivista del capital (Seoane, 2012) vinculado particularmente a la actividad hidrocarburífera y a la megaminería, y a un Estado que promovió, garantizó y participó activamente dichas actividades. El ejemplo más claro fue la firma del convenio YPF-Chevron para avanzar

¹ En el marco de la tesis de Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del Proyecto de investigación "Estado y violencias: problemas y perspectivas sobre conflictos sociales y política públicas en territorios norpatagónicos (2009-2019)" de la Universidad Nacional del Comahue.



con la hidrofractura de Vaca Muerta. Detrás del anuncio de estatización, YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales) se convirtió en sociedad anónima con participación mayoritaria estatal, lo que posibilitó un acuerdo con cláusulas secretas que, sumadas a los antecedentes destructivos de la empresa estadounidense, generaron un fuerte rechazo, la movilización y resistencia de diversos sectores.²

Durante el período 2009-2015 ciertos procesos económicos y políticos redefinieron el carácter del Estado bajo el signo político kirchnerista y las posibilidades de intervención de los gobiernos locales y provinciales. La crisis financiera internacional, el conflicto con el campo y luego la crisis energética impactaron en la disponibilidad de recursos para sostener el carácter redistribucionista de la intervención política, revelando y marcando los límites del arbitraje estatal en los conflictos sociales (Bonnet, 2018), y agudizando la tensión entre la compensación económica y la criminalización como políticas de Estado.

Mientras que parte de la renta petrolera se volcó al mercado de la construcción bajo una lógica de especulación inmobiliaria, el déficit habitacional y las dificultades de acceso al hábitat se agudizaron, operando como condiciones para el surgimiento y expansión de tomas de tierras. Una de ellas fue la toma que dio origen al B° Obrero de Cipolletti, Río Negro, el 9 de abril de 2009, y que luego de tres órdenes de desalojo logró su regularización en 2019.³ Al mismo tiempo, emergieron conflictos vin-

² Ante la falta de publicidad del acuerdo y el mandato de firmarlo a como diera lugar, el 28 de agosto de 2013 confluyeron en una gran movilización diversos sectores políticos y sociales: organizaciones y partidos políticos de izquierda y centro izquierda, organizaciones mapuches, docentes y estudiantes secundarios, terciarios y universitarios. Dada la imposibilidad de acceder a una legislatura vallada que operaba como una gran fortaleza, los manifestantes avanzaron y la policía provincial comenzó a disparar gases y armas antidisturbios. La represión duró 8 horas sin interrupción, mientras en el interior de la legislatura, tras un acalorado debate se lograba la firma del acuerdo.

³ El Barrio Obrero surge de una toma de tierras ubicada en tierras ociosas de propiedad privada al norte de la ciudad. Las denuncias penales contra la referente del barrio fueron en su totalidad desestimadas, el sistema judicial penal resolvió correrse del proceso de criminalización para dar lugar a la intervención del poder judicial en su fuero civil. Allí avanzó bajo la forma de interdicto de recobrar, incluso el Juez Cabral y Vedia arremetió con órdenes de desalojo que fueron apeladas hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, máxima instancia de ese mismo poder judicial, que en su fallo reinscribió el problema del acceso a la vivienda a un problema político, que debía aguardar la resolución del pedido de expropiación. Mientras tanto, los vecinos presentaron proyecto de declaración de utilidad pública y expropiación, que fue rechazado varias veces durante la gestión kirchnerista en el gobierno local, aludiendo a la ilegalidad de la toma y la judicialización en curso. Recién con la llegada del PRO al gobierno local, la promesa electoral de regularizar las tomas comenzaría el recorrido institucional logrando en la actualidad la expropiación de cinco de las casi 40 tomas de la ciudad, entre ellas el Barrio Obrero.

culados a derechos territoriales indígenas que resistían la avanzada del capital, uno de ellos es el que protagonizó la comunidad Winkul Newen en Portezuelo Chico, cercano a Zapala en el centro de la provincia de Neuquén en 2013 y que derivó en la judicialización de algunxs de sus integrantes durante 2015.⁴

Son escasas las investigaciones que abordan alguna de estas experiencias e inexistentes aquellas que las analizan de manera conjunta, entendiéndolas como modos de desenvolvimiento de la lucha de clases en los territorios. Y este punto es central, porque en general estos conflictos son presentados de manera aislada, como expresiones particulares de la acción colectiva de movimientos sociales que se organizan para enfrentar las consecuencias del “extractivismo” (Alonso y Trpin, 2018; García Gualda, 2017; Gutiérrez Ríos, 2015).

En este sentido, este trabajo, propone revisar y discutir esta manera hegemónica de analizar los conflictos territoriales, restituyendo el carácter de clase a las luchas vinculadas a la desposesión de los medios de vida y reinscribiendo estos procesos como modos de existencia de las relaciones sociales capitalistas, es decir, reconociendo el carácter extractivo del capital pero sin desplazar la acumulación por reproducción ampliada, reestableciendo la complejidad histórica de la acumulación de capital y la lucha de clases en los territorios.

Las preguntas que configuraron nuestro problema de investigación fueron: ¿cómo se caracterizan las experiencias de lucha en las que la territorialidad deviene en arena predominante de los conflictos socio-políticos durante la última etapa del Estado kirchnerista? ¿Cómo incide la ofensiva extractivista en la relevancia política adquirida por estos conflictos? ¿Qué características adoptan los procesos de formación de subjetividades políticas en estas experiencias de lucha?

⁴ En el caso de criminalización de la comunidad Winkul Newen, es evidente que el poder judicial contradujo el freno a los desalojos estipulado por la Ley N° 26.160 y avanzó en hostigar a la comunidad, al punto que en un episodio de resistencia territorial una oficial de justicia es herida en el rostro con una piedra. Este episodio sirvió para poner en marcha la maquinaria penal que en 2015 llevó a juicio a tres integrantes de la comunidad, con la grave acusación de tentativa de homicidio sobre Relmu Nanku. Según el propio abogado de la comunidad, cuando la resistencia aumentó, la estrategia de compensación pasó a la de criminalización (Giaretto, Zapata y Naffa, 2018).





El enfoque de esta investigación se enmarcó en una concepción integral de la teoría y el método, en la medida que el proceso de investigación fue abordado como una unidad en la que se amalgaman momentos teóricos y técnicas de construcción de datos. Desde esta perspectiva teórico-metodológica, las luchas territoriales son manifestaciones del proceso histórico y permanente de lucha de clases, y el Estado es expresión de relaciones sociales de producción capitalistas y de las relaciones de fuerzas entre grupos sociales antagónicos (Gramsci, 2004).

En esta dirección, nuestra estrategia metodológica cualitativa combinó técnicas de tipo documental y de tipo vivencial. Entre las primeras fue fundamental rastrear y recopilar aportes de investigaciones previas, documentación oficial tales como expedientes y sentencias judiciales, y artículos en medios de comunicación acerca de la temática planteada o de alguna de sus dimensiones. Entre las técnicas de tipo vivencial, consideramos que la observación participante en instancias colectivas como reuniones o asambleas barriales, o encuentros multisectoriales, resultaron centrales para recuperar la historicidad de las luchas y conocer su estado actual. Al mismo tiempo, a través de entrevistas en profundidad completamos la reconstrucción narrativo-histórica de los procesos sociales (Sautu et. al., 2005), así como recuperamos las interpretaciones de los sujetos protagonistas de las luchas. En el caso de funcionarios estatales y empresarios del sector inmobiliario se realizaron entrevistas semi-estructuradas, que de un modo flexible permitieron recuperar la perspectiva de los sujetos en un marco de reinterpretación y repregunta (Idem).

Este trabajo presenta una versión preliminar y acotada de toda la investigación, focalizando en algunos de los principales ejes de discusión. Se encuentra estructurado en dos grandes apartados: en el primero esbozamos ciertas coordenadas epistemológicas vinculadas a una perspectiva teórica social crítica, recuperando y problematizando las implicancias de analizar las relaciones entre luchas y Estado desde la totalidad social, reconstruyendo su historicidad y desplegando cierta criticidad. Y en el segundo, compartimos algunas implicancias políticas del análisis de experiencias de criminalización de las luchas territoriales.

Experiencias de lucha desde una perspectiva social crítica

En este trabajo analizamos las experiencias de lucha como expresiones de una sociedad capitalista en términos de totalidad, como emergentes permanentes de una historicidad a reconstruir y como focos de conocimientos y prácticas atravesados por cierta criticidad. En este sentido, la escisión entre teoría y método, entre conceptos y técnicas investigación, entre marco teórico y estrategia metodológica es en esta investigación una imposición formal constantemente cuestionada y subvertida. Desde esta perspectiva, no reconstruimos los hechos tal cual como sucedieron, tampoco duplicamos lo real para asimilarlo en el pensamiento y reproducirlo sin más.

Acerca de la sociedad como totalidad

Lejos de aquella “sociología sin sociedad” criticada por Adorno y Horkheimer (1969), aquí nos preocupa reestablecer la relevancia del concepto de sociedad, en tanto concepto que “abarca precisamente la unidad de lo general y lo particular en la correlación total y autorreproductiva de los hombres” (p.37). Por lo que las experiencias que constituyen el núcleo de nuestro problema, lejos de la lógica del caso, de la fetichización de lo particular, de la atomización clasificatoria, son abordadas como expresiones de una micrología social, de esa sociedad que está en todas partes, pero no por eso accesible sin mediación.⁵

Entonces, cuando referimos a la sociedad, no lo hacemos en sentido general, ni abstracto; estamos refiriendo a la sociedad como proceso que está siendo en las experiencias, en los conflictos, en las relaciones. La

⁵En relación a la micrología y la mediación: “lo concreto singular es mucho más importante para la concepción dialéctica que para la científica, que lo fetichiza teórico-cognoscitivamente tratándolo en la práctica del conocimiento simplemente como materia prima o ejemplo. La visión dialéctica de la sociedad está más a favor de la micrología que la positivista (...) Precisamente por acoger dentro de sí el fenómeno individual a la sociedad entera, la micrología y la mediación se sirven mutuamente de contrapunto a través de la totalidad” (Adorno, 1972: 50).





dialéctica no hace más que mostrar que en los hechos aparece algo que no son ellos mismos, es decir, torna evidente el problema de la mediación.⁶ Los procesos de criminalización de la toma de tierras del Barrio Obrero, de la comunidad Winkul Newen y de la movilización contra el acuerdo YPF-Chevron, aparecen como eventos disgregados e inconexos que poco tienen que ver entre sí, porque requieren de esa mediación.

La sociedad adopta la forma de una estructura total por la cual todos, se someten al principio del intercambio de mercancías para no sucumbir, y lo hacen más allá de que su acción se encuentre o no regida por la búsqueda de beneficio, porque su existencia depende de ese intercambio y del entramado de relaciones que lo sostienen (Adorno, 2004). En este sentido, un referente de la actividad inmobiliaria explica claramente cómo funciona concretamente ese principio del intercambio, cómo las personas existen en tanto poseedores de mercancías, y fundamentalmente, cómo funciona el mercado en tanto propietarios privados que personifican relaciones económicas en las que su voluntad reside en las mercancías que intercambian y, al apropiarse de la mercancía ajena, enajenan su propia voluntad:

Y a partir de ahí se arma, digamos, el valor de tierra a urbanizar, y después ya en los lotes urbanizados, mucho por lo que se vendió, también, ¿no? O sea, la referencia es muy importante. O sea, para nosotros un lote vendido en determinado número es que hubo alguien dispuesto a pagar ese número, y a partir de ahí, bueno, ves el mercado. ¿El mercado está tranquilo? Seguís con los mismos valores. ¿El mercado está acelerando? Uno pega un saltito y el mercado responde... y te lo compra, quiere decir que está... que hay resto... así es el mercado. O sea, vos vendiste un lote en 10, después vendiste un lote en 12... un lote en 14, un lote en 16 (...) Obviamente que el que tiene la tierra y no puede hacer otra cosa... pero hay un segmento que está fuera de todo, de todo... las tomas de tierra

⁶ Recordemos en este punto que, para Adorno, "lo concreto" necesita situar lo particular en su relación dialéctica y mediada con la totalidad, por eso el objeto es más que el objeto mismo, su conocimiento no se ajusta al principio de identidad de $A=A$ y esa relación al no estar dada de forma inmediata en la experiencia debe ser mediada por la reflexión conceptual (Buck Morss. 1977: 160).

impactan primero directamente en la calidad de la ciudad... lo hacen de manera desesperada por tener una solución de techo... (Referente de la actividad inmobiliaria en Cipolletti, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017).

En el mercado se despliegan esas relaciones económicas en las que los propietarios privados intercambian mercancías y también quienes quedando “afuera de todo”, quedando afuera de ese principio de intercambio, siguen estando adentro por la propia lucha de clases. Las tomas de tierras impactan en el funcionamiento de ese mercado, aunque ese no sea el fin buscado, al especular con los precios, pegando “saltitos” para que el mercado responda, se generan las condiciones de exclusión que impulsan esas tomas de tierras. La idea de inevitabilidad implícita en la expresión “el que tiene la tierra no puede hacer otra cosa”, es propia de una sociedad espectral, y “su secreto no consiste en una mano invisible que regula el progreso económico de la sociedad como por arte de magia.⁷ Más bien lo que se manifiesta “a espaldas de los sujetos que actúan ... es su propia obra, y es su obra lo que les condena como “personificación de categorías económicas” (Bonefeld, 2016: 9).

¿Qué significa que la sociedad adopta una forma de estructura total por la cual todxs nos vemos sometidxs al principio del intercambio? Significa que la sociedad capitalista, la sociedad de clases, la sociedad en la que la riqueza se acumula bajo la forma mercancía, es una objetividad social, es un proceso de socialización total, o más bien, una totalidad concreta. La configuración de la relación de intercambio por las relaciones de clases, movilizándolo el intercambio de equivalentes, pero desde una disposición desigual de los medios de producción, es central para reconstruir la historicidad de las luchas territoriales.

⁷ En relación a la magia del dinero: “estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. De ahí la magia del dinero. El comportamiento puramente atomístico de los hombres en su proceso *social* de producción, y por consiguiente la figura *de cosa* que revisten sus propias relaciones de producción –figura que no depende de su control, de sus acciones individuales conscientes– se manifieste ante todo en que los productos de su trabajo adoptan en general la forma de mercancías. El *enigma* que encierra el fetiche del dinero no es más pues, que el enigma, ahora visible y deslumbrante en encierra el fetiche de la mercancía” (Marx, 2002: 113, énfasis del original).





El proceso de socialización no se realiza más allá de los conflictos y los antagonismos o pese a éstos. Su elemento propio lo constituyen los mismos antagonismos que desgarran la sociedad. Es la misma relación social de cambio la que introduce y reproduce el antagonismo que en todo momento amenaza a la organización social con la catástrofe total. Sólo a través de la búsqueda del beneficio y de la fractura inmanente al conjunto de la sociedad sigue funcionando hasta hoy, rechinante, quejumbrosa, con indescriptibles sacrificios, la máquina social. Toda sociedad sigue siendo todavía sociedad de clases. (Adorno, 2004: 14).

¿Acaso no está hablando de esa relación social de cambio el referente del capital inmobiliario, cuando describe la dinámica de su actividad y las relaciones involucradas? ¿No es evidente en su relato que es esa relación social de cambio la que introduce y reproduce el antagonismo, que incluso amenaza a la organización social con la catástrofe? En este sentido, las luchas territoriales criminalizadas son algunas de esas experiencias puntuales que proponemos analizar en sus mediaciones con la totalidad social porque expresan los conflictos y los antagonismos que desgarran a esta sociedad. Así lo explica una de nuestras entrevistadas:

entonces digo, todo bien, ahora decimos que va a cambiar todo, no va a cambiar, van a cambiar las leyes, van a cambiar un montón de cosas pero el pueblo va a seguir padeciendo, más los pueblos originarios, porque las comunidades pueden llegar, pueden asistir, pueden hacer un montón de cosas, pero nuestros hermanos la van a empezar a pasar feo, porque van a ir por sus territorios, porque las leyes que están haciendo es para eso, fortaleciendo Vaca Muerta, fortaleciendo la megaminería, la explotación a cielo abierto, el fracking, lo que hacen es ir por los que están organizados en los territorios y sacarle lo que es de ellos. Nosotros que vivimos en las ciudades... nos están sacando todos los recursos que nos pertenecen a todo el pueblo (...) yo también considero que no puede haber ningún pibe sin comer, también considero que no puede haber nadie sin casa, considero que las poblaciones no son barrios son territorios. (Militante social, referente de Barrio Obrero, comunicación personal, 20 de diciembre de 2019).

Los capitales vienen por los territorios, y los territorios no son sólo los territorios de las comunidades indígenas, los barrios también son territorios en donde se despliegan las contradicciones de la sociedad de clases. Los conflictos y antagonismos que constituyen a la totalidad social se expresan en los territorios bajo la ofensiva del capital en sus múltiples formas de despojo y explotación de la naturaleza y de los seres humanos, desdibujando los propios límites de las luchas entre la ruralidad y la urbanidad, entre la defensa de los derechos territoriales indígenas y las luchas por tierra y vivienda, revelando también su vinculación con las luchas socioambientales.

la situación actual de las luchas territoriales en nuestra región creo que tiene que ver con la resistencia al extractivismo en sus diversas maneras, petroleras, empresas hidroeléctricas, empresas mega mineras, por lo menos en lo que voy viendo de Neuquén y Río Negro. Los actores no son solo las comunidades mapuches, ahora en este tiempo son también las asambleas socioambientales o la unión de asambleas socioambientales, o las asambleas por el agua por ejemplo que existen en el norte de la provincia, y hay como un margen muy difuso. (Comunicadora mapuche, comunicación personal, 4 de julio de 2020).

Si bien no podemos detenernos a discutir cierto desplazamiento teórico-político del capitalismo por el extractivismo, sí nos parece relevante reestablecer la complejidad de la acumulación de capital ante la idea de mera extracción y saqueo, comprendiéndola relación histórica y dinámica entre acumulación originaria o primitiva y acumulación por reproducción ampliada (Harvey, 2004; Roux, 2008). Coincidimos en que además de ser el fundamento histórico de la acumulación específicamente capitalista (Marx, 2004), “la acumulación primitiva es una acumulación reproducida en forma constante, ya sea en términos de renovada separación de nuevas poblaciones de sus medios de producción y subsistencia, o en términos de la reproducción de la relación salarial en las relaciones ‘establecidas’ del capital” (Bonefeld, 2012: 10).





La clave en el abordaje de Marx es el concepto de separación entre productores y medios de producción (en lo que sigue, me referiré a esto simplemente como separación). Esta definición, implícita en las lógicas contrastantes de la acumulación ilimitada de capital *vis á vis* las luchas sociales por libertad y dignidad, no sólo nos ayuda a describir la naturaleza recurrente de la “acumulación primitiva”, sino también a señalar la cuestión política central de cualquier alternativa al capitalismo: el acceso directo a los medios de existencia. (De Angelis, 2012: 5).

Es imprescindible para nuestro análisis que retengamos el significado político que tiene esta relación entre la acumulación originaria y la acumulación por reproducción ampliada en base a la separación de productores y medios de producción, y, por lo tanto, el potencial político que adquieren, una y otra vez, las experiencias que implican el acceso directo a los medios de existencia. Esa separación es resistida bajo la forma de tomas de tierras y de recuperación de territorios. El acceso directo a los medios de existencia subvierte esa escisión continua. En palabras de una de nuestras entrevistadas:

creo que la resistencia territorial significa hoy uno de los grandes bastiones de la lucha histórica. En estos territorios, hay muchas formas de hacer la resistencia territorial. Para mí cuando nombramos ejercemos resistencias territoriales, la forma de nombrar la manera en la que hablamos, cuando hablamos el mapudungun, como nos planteamos dentro y fuera de las instituciones y creo que la más radical y que se visibiliza es cuando existen por lo menos en las localidades de aquí del sur, tomas de tierras o levantamientos de asentamientos irregulares en la urbanidad, y en la ruralidad, cuando se recupera territorio o se reivindica territorio o se reafirma territorio, porque bueno esas son las maneras también en las que iremos siendo y nombrando esas acciones concretas. (Comunicadora mapuche, comunicación personal, 4 de julio de 2020).

Por estos motivos, aquí las luchas territoriales son abordadas en clave de antagonismos constitutivos de una totalidad social que en la actualidad refuerza su carácter extractivo en una ofensiva del capital hacia

quienes estén dispuestos a resistir sus embates de violencia y despojo. Esos embates no son nuevos, responden a una historicidad de esas luchas en clave de genocidio, de un genocidio como condición de posibilidad de las relaciones de producción capitalistas, esas relaciones de explotación y dominación que se despliegan en los territorios particulares.

De la historia impropia a la historicidad de las resistencias

En este punto, nos interesa reconstruir la materialidad de ciertas experiencias históricas recientes en tanto procesos de mediación de esa totalidad concreta. Pero insistamos en que esos procesos de mediación no operan desde un principio de identidad entre sujeto y objeto, entre lo racional y lo real, entre la historia y la naturaleza, sino por el contrario, operan desde un principio de no identidad (Buck Morss, 1981: 109), desde la negatividad que subyace a las contradicciones de la sociedad capitalista, la negatividad como contenido de las relaciones de clases.

Cuando Marx expone el secreto de la acumulación originaria, realiza una reconstrucción de los mecanismos históricos de expropiación de tierras basados en el despojo y la violencia que dan cuenta del proceso de creación de la relación del capital, es decir, del proceso de escisión entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo, que en un mismo y continuo acto convierte a los productores directos en trabajadores asalariados y a los medios de producción y de subsistencia sociales en capital. No sólo enfatiza que el fundamento de todo el proceso es la expropiación que despoja de la tierra al trabajador, sino que, al acrecentar la masa de la miseria, de la opresión, de la explotación, también acrecienta la rebeldía de los sectores despojados, impulsando la negación de su negación (Marx, 2002: 893-954), es decir, la negación como acción revolucionaria.⁸

⁸En relación a este punto, Gunn (2018) coincide con Cleaver en sostener que Marx es un teórico de la contradicción, en la medida que reconoce dos contradicciones y que de ellas deriva la posibilidad de transforma-





Cuando rastreamos ese devenir de las luchas territoriales en nuestra región, encontramos procesos de violencia y despojo que detrás de las visiones oficiales, detrás de los monumentos, los relatos y las prácticas genocidas, emergen como experiencias de esa rebeldía, como experiencias de sufrimiento y resistencia. Por eso “el materialismo histórico viene a decir que si la lucha de clases parece repetirse es justamente porque, puesto que hay praxis y experiencia colectiva, nada está decidido de antemano” (Grüner, 2012: 36 y 37).

En este punto nos interesa detenernos en el ejercicio crítico de relativizar los acontecimientos pasados al calor de las experiencias presentes. No se trata de enfocar la historia hacia adelante sino hacia atrás, de cepillarla a contrapelo como sugería Benjamin.⁹ En nuestro contexto esa ruptura y esa comprensión crítica, implica desautorizar el tiempo y la historia colonizadas por la experiencia de lo histórico eurocéntrico y recuperar esa historia impropia cargada experiencias de despojo y resistencia.

Desde 1492, bien lo sabemos los “latinoamericanos” (y los africanos, cuya historia tan diferente es sin embargo tan solidaria con la nuestra), *las* experiencias históricas están configuradas y narrativizadas por *una* experiencia histórica –por una imagen elevada a nueva condición de Todo-Uno– que pasa por ser *la* experiencia de lo histórico como tal, la de Europa occidental. (...) En el contexto de esa lógica dominante, la inmensa mayoría de las civilizaciones humanas –a partir de una colonización que no fue sólo territorial, política, económica o cultural: que fue una colonización, también, del *tiempo* y de la *experiencia* de la(s) historia(s)–, no es que hayan *perdido*, estrictamente hablando, su historia; lo que les (nos) ha sucedido es que su

ción de la sociedad capitalista. La primera negación, la primera contradicción es la generación de un trabajador doblemente libre a partir de la separación del productor de los medios de subsistencia y de producción, y la segunda contradicción o la negación de la negación se refiere a la negación del sistema social basado en esa separación y cristalizado en el régimen de propiedad privada capitalista, es decir la acción revolucionaria.

⁹ En sus tesis sobre la historia, plantea que: “Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre la costumbre, el botín de guerra es conducido también en el cortejo triunfal. El nombre que recibe habla de bienes culturales, los mismos que van a encontrar en el materialista histórico un observador que toma distancia. Porque todos los bienes culturales que abarca su mirada, sin excepción, tienen para él una procedencia en la cual no puede pensar sin horror... No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. ...Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible. Mira como tarea suya la de cepillar la historia a contrapelo (Benjamin, 2008: 23).

(nuestra) historia se ha vuelto *impropia*: fueron arrojadas, de la manera más violenta posible en la historia del Otro. (Grüner, 2012: 30 y 31).

En el sur de Argentina, esta historia impropia arrojada violentamente a la historia del Otro tiene como trasfondo del proceso de configuración de una narrativa hegemónica que presenta a la denominada “Campaña al Desierto” del General Julio Argentino Roca y las sucesivas campañas militares a partir de 1880 como el origen de una sociedad “civilizada”, que logra universalizar los intereses de un bloque de poder articulador de los intereses de clase de las elites provinciales y porteña, y de la consolidación de un Estado moderno capaz de establecer las bases materiales e ideológicas para la expropiación de los pueblos originarios (Delrio, 2012). En palabras de una de nuestras entrevistadas: “al Estado lo entiendo como un Estado mal parido, como un estado que se funda en base a un genocidio, que cumple normas que son, no solamente coloniales, sino también patriarcales, y completamente racistas en términos de políticas públicas” (Comunicadora mapuche, comunicación personal, 4 de julio de 2020).

Por estos motivos, es necesario desautorizar esa narrativa hegemónica y contraponer críticamente aquellas experiencias de violencia y despojo, de resistencia y sufrimiento. Como plantea Izaguirre (2003), reconstruir la historicidad de los procesos sociales como eje teórico-metodológico del estudio del conflicto social, no como mero telón de fondo de un escenario en el que ocurren los hechos, sino como tendencias, como procesos, como experiencias. La historicidad se trata de “una dimensión epistemológica del conocimiento de lo social y de la producción y reproducción de lo social que supone distintos tipos de análisis”, que incluye el análisis de la estructura social objetiva y subjetiva que constituyó a las distintas fracciones sociales y sujetos que luchan en la actualidad, y también la consideración de esas subjetividades diferentes que de acuerdo a ese proceso social, pueden encontrarse en distintos estadios de constitución de su autonomía (p.136). En este sentido, resulta claro el relato de una de nuestras entrevistadas:





yo que conozco la historia ahora de la tierra y digo no, no hay que pagarle nada al tipo porque estas tierras les pertenecían a los hermanos mapuches, se las roban a los mapuches, se las expropiaban, se las quedan, y después las donan a la familia tal que termina quedándose. Cada personaje de la familia Alias, tenía casi 80, 90 años, o sea estamos hablando de la historia para atrás, y en los papeles vos miras los papeles de compra y venta de la propiedad, los Alias no compraron, es una donación: ¡tremendo!!... Entonces ahí yo empecé a ver que recuperamos un territorio... (Militante social, referente de Barrio Obrero, comunicación personal, 20 de diciembre de 2019).

En ese “estamos hablando de la historia para atrás” de quien ha protagonizado una toma de tierra urbana y que luego de años de lucha reconoce las conexiones de sentido entre la desposesión actual de un lugar para vivir y el despojo violento de las comunidades mapuches, se reconstruye esa historicidad de los procesos sociales. Y esa reconstrucción es necesaria porque sabemos que “la historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica” (Gramsci, 2004: 493). Acaso podemos abordar a las experiencias de luchas territoriales como episodios de esa historia de levantamiento y rebeldía de los grupos subalternos que sufren continuamente la iniciativa de los grupos dirigentes.

Tal vez no todas las luchas logren esa articulación con el pasado desde el presente, no todas ellas conserven su eficacia y logren cuestionar los triunfos de los vencedores. Tal vez solo baste con que alguna de ellas logre recuperar aquel instante de peligro y logre hacerlo relampaguear en el presente (Benjamin, 2008), para que sepan esos eufóricos vencedores que este “orden”, el orden social capitalista que periódicamente exige ser mantenido con carnicerías sangrientas, sepan que ese orden en cada derrota de los vencidos marcha ineluctablemente hacia su fin (Luxemburg, 1919).

De la crítica immanente como criticidad

¿Cómo avanzar en la crítica de ese orden desde las propias experiencias de lucha? Para Marx se trata de criticar a la sociedad capitalista según sus propias pretensiones, midiendo lo que es en relación a lo que ella misma pretende ser y no es (Adorno, 2013). Esta criticidad, más que una precondition analítica impuesta por quien investiga, se impone desde los propios relatos de quienes protagonizan las experiencias de luchas territoriales.

Las luchas territoriales o la lucha territorial en singular, es el eje de la lucha de los pueblos indígenas. Porque no hablamos de tierras, sino que hablamos de territorio ¿no? Que hay una diferencia, porque de eso depende el futuro y la desaparición de los pueblos indígenas en Argentina. Hay más de treinta pueblos indígenas en Argentina, con una plataforma de derechos impresionantes, constitucional, pacto internacional, jurisprudencial, la Corte Interamericana. Tenemos derechos a patadas para aplastar a cualquier juez ...vemos a un Estado, a un poder ejecutivo, judicial y legislativo, que son conscientes sobre ello, pero buscan de todas las formas posibles evitar aplicarlo, para no modificar el estado de situación de un modelo capitalista que necesita los recursos naturales para sobrevivir. La sangre de este sistema son los recursos naturales y eso está en los territorios indígenas. (Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

En relación a la cuestión territorial y su vínculo con la forma de vida misma de los pueblos indígenas, nos interesa detenernos en cómo aparece el Estado, por un lado, en su complejidad de escalas y poderes y, al mismo tiempo, como forma jurídica, como esa “inmensa plataforma de derechos impresionantes” que son el espejo escrito de la “permanente práctica de eludir” y evitar la aplicación de esos derechos, violándolos sistemáticamente.

Lo que nos interesa señalar, es cómo esta sociedad bajo el modo de producción capitalista no cumple siquiera con sus propias pretensiones





de existencia. Asumiendo el carácter antagónico de la realidad y, a través de la contradicción mediada, intentacierta coherencia y unidad en la discontinuidad, en la separación. Entonces, cuando en la crítica nos referimos a la contradicción, no la adoptamos como categoría central para hipostasiarla y convertirla en el lugar común donde todo es explicado –o más bien- nada es explicado. Aquí la contradicción es recuperada como una forma de relación en la que se rompe la logicidad, se quiebra el principio de identidad, y se asume el principio de no identidad, porque el mundo no es un mundo lógico, sino contradictorio (Adorno, 2013: 149). Sin embargo, aclaremos que “la dialéctica negativa consiste en conservar en el pensamiento esa tensión entre identidad y no-identidad, en rastrear las huellas de la no-identidad en la identidad y de la identidad en la no-identidad, nada más, y nada menos” (Bonnet, 2005: 7).

La tensión entre lo universal y lo particular adopta la forma de una unidad en la contradicción, lo que le confiere unidad es esa contradicción, de allí que Marx identificara a lo concreto como síntesis de múltiples determinaciones, como unidad en lo diverso (2007: 21), como punto de partida de la intuición y la representación, y, fundamentalmente, del pensamiento crítico.

De la experiencia social como mediación

El concepto en el que se materializan estos núcleos de sentido acerca de la totalidad, historicidad y criticidad es el de experiencia. Por eso nuestro problema son experiencias de luchas territoriales. Ya vimos que el anclaje objetivo de estas experiencias no es cualquier sociedad, es la sociedad capitalista, en un contexto histórico y geográfico determinado, es una totalidad social concreta atravesada por contradicciones objetivas y constituida por conflictos y antagonismos de clases. Por lo tanto, el punto de partida de nuestro análisis es la experiencia de ese carácter contradictorio de la realidad social (Adorno, 1972), es una experiencia que lidia con un mundo en sí mismo contradictorio, que emerge de ese resto,

de aquello que desborda las formas que adoptan las relaciones sociales de producción capitalista, es una experiencia del desgarramiento, de la negación, del padecer el mundo, del sufrimiento social.

Las luchas territoriales son modos emergentes de lo inaceptable: no se puede aceptar el despojo violento, tampoco el desgaste silencioso de las estructuras estatales que niegan espacios vitales y los ponen a disposición del capital. Aquí nos interesan las experiencias que a partir de ese sufrimiento devienen en experiencias de negación de la negación, en acciones de rebeldía, en formas de resistencia que desbordan las formas sociales impuestas por el principio del intercambio, que revelan el sustrato expropiatorio de las relaciones de explotación y dominación capitalista. En este sentido, recuperamos el carácter mediador que nos aporta el concepto de experiencia, particularmente, de la categoría de experiencia de lucha.

Recuperamos la conceptualización de experiencia vinculada a la lucha de clases planteada por E. P. Thompson, mediada ya por la defensa que realiza Ellen Meiksins Wood frente a las críticas de Stuart Hall y Perry Anderson.¹⁰ No vamos a entrar aquí directamente en los detalles de estas críticas ni en los alcances de dicha defensa, pero sí nos interesa dejar claras las implicancias teórico-políticas de recuperar la conceptualización de Thompson bajo la defensa de Meiksins Wood, porque es ella quien enfatiza en el carácter mediador del concepto de experiencia.

Thompson tomando seriamente los principios del materialismo histórico y su concepción de los procesos históricos estructurados materialmente, trata el proceso de formación de clases como proceso histórico moldeado por la "lógica" de las determinaciones materiales. (...) El concepto de clase como relación y proceso enfatiza que las relaciones objetivas con los medios de producción son significativas en la medida en que establecen antagonismos y generan conflictos y luchas; que estos

¹⁰ Sintéticamente, las críticas de Hall y Anderson apuntan al sesgo "voluntarista" y "subjetivista" que tendría el concepto de clase en la perspectiva de E.P. Thompson, por sumergir los determinantes objetivos o las condiciones estructurales de la clase en una noción esencialmente "subjetiva" e históricamente contingente de "experiencia". De manera contundente, Meiksins Wood contra-argumenta que en realidad es el concepto de experiencia el que posibilita explicar cómo se relacionan los procesos históricos de formación de las clases con las determinantes objetivas (Meiksins Wood, 1983).





conflictos y luchas moldean la experiencia social "en formas de clase", incluso cuando no se expresan en conciencia de clase y formaciones claramente visibles; y que a través del tiempo podemos discernir cómo estas relaciones imponen su lógica, su esquema, en los procesos sociales (...) El énfasis en la clase como relación y proceso es especialmente importante precisamente al tratar de casos donde no se dispone de expresiones bien definidas de conciencia de clase para proporcionar evidencia incontestable de la clase. (Meiksins Wood, 1983: 90-91).

De este modo, la noción de experiencia social es la que media entre las relaciones objetivas con los medios de producción y la formación de las clases, porque son esas relaciones las que establecen antagonismos y generan conflictos y luchas, y porque las clases no existen ni antes ni por afuera de la lucha de clases. Nos interesa particularmente la disponibilidad del concepto de clase como relación y como proceso, para tratar las experiencias donde la conciencia de clase no presenta contornos bien definidos, lo que es habitual en las luchas territoriales por la falta de anclaje directo en el proceso de producción capitalista. Por eso la tarea es dar cuenta de esas experiencias que, si bien son determinadas objetivamente, su proceso de formación y sus alcances dependen de la lucha misma.

El carácter de mediación de la noción de "experiencia", deriva de la experiencia común, o más bien, compartida por sujetos en una misma situación de clase, y puede entenderse como "una experiencia vivida de las relaciones de producción, las divisiones entre los productores y los apropiadores y, más particularmente, de los conflictos y luchas inherentes a las relaciones de explotación" (Meiksins Wood, 1983: 99). Esta experiencia común vinculada a la lucha compartida frente a los procesos de criminalización, es explicada por una de nuestras entrevistadas de la siguiente manera:

a lo largo de la historia esa primera experiencia de criminalización y judicialización va a tener en el conjunto de esas comunidades por lo menos un análisis interesante de cómo se empieza a generar una resistencia activa, tanto en la represión

directa como en la represión a través de la judicialización del conflicto y también dar un ejemplo de cómo uno debería actuar ante todo los casos de criminalización. (Activista antirrepresiva, comunicación personal, 02 de julio de 2019).

Cuando hablamos de experiencia social entonces estamos refiriendo a la experiencia del carácter contradictorio de la realidad social, por lo tanto, a una experiencia de desgarramiento cuyas determinantes son las relaciones de explotación y dominación capitalistas, cuyas modalidades y procesos de formación son históricas e inciertas. Intentamos comprender experiencias de luchas territoriales que son determinadas por las relaciones de explotación y dominación capitalistas y, al mismo tiempo, son expresiones del desborde de las formas que adquieren esas relaciones. Son el remanente que no encaja y se rebela, son la negación de la negación.

Criminalización de luchas territoriales

Cuando analizamos contra quién luchan lxs sujetxs que resisten la ofensiva del capital en los territorios, generalmente aparece el Estado como principal interlocutor de demandas y como generador de intervenciones en los conflictos. Por eso, conceptualizamos al Estado como el modo de organización de la dominación política del capital (Jessop, 1980), como un modo de existencia de las relaciones sociales capitalistas, visibilizando su carácter represivo (Hirsch, 2017), reconociendo a la violencia como fundadora y conservadora de derecho (Benjamin, 2001), y entendiendo a la selectividad de ilegalismos (Foucault, 1989) como puntapié para la configuración de una cadena punitiva criminalizadora de la subalternidad (Daroqui, 2012; López, 2015).¹¹

Abordamos a la criminalización desde una perspectiva amplia que la entiende como una *estrategia política* que convierte a las luchas en crí-

¹¹ Esta línea de argumentación la hemos desarrollado en trabajos anteriores colectivos compilados en Giaretto (2018).





menes y a quienes luchan en criminales. Es una estrategia compleja que suele incluir procesos de *estigmatización* de lxs sujetxs, de *judicialización* de los conflictos y/o de *militarización* de los territorios en los que se despliegan las luchas (Korol y Longo, 2009). Asimismo, es posible distinguir dos momentos: el de la *criminalización primaria* que implica la elaboración de las reglas de penalización y despenalización, y el de *criminalización secundaria* que consiste en los procesos de aplicación de dichas reglas (Baratta, 2004: 95). Desde esta perspectiva, el carácter selectivo del sistema penal abstracto es acentuado por los procesos de criminalización secundaria, es decir que la selectividad de quienes legislan es agudizada por quienes ejercen el poder policíaco.

En los últimos años en Argentina, esa selectividad se orientó a los conflictos territoriales, con un fuerte impacto en la región norte de la Patagonia: mientras que el 42% del total de los conflictos criminalizados involucran cuestiones territoriales, las provincias norpatagónicas de Río Negro y Neuquén son las provincias que más criminalizan luego de Buenos Aires y CABA.¹²

Lejos de la perspectiva de estudios de caso, proponemos una lectura oblicua de estas experiencias reconstruyendo la tensión entre modos de resistencia y procesos de criminalización. Nos interesa detenernos y acercarnos a procesos de subjetivación política que manifiestan un rasgo antagonista de la acción política, asumiéndolo en tanto rasgo distintivo y decisivo de la lucha y la experiencia de insubordinación (Modonosi, 2016: 12). Se trata entonces, de acercarnos a procesos de formación de subjetividades socio-políticas al calor de experiencias de resistencia que sufren la criminalización como política de Estado.

Analizamos experiencias de criminalización de resistencias en una doble clave: en tanto *resistencias subalternas* caracterizadas por la fragmentación de demandas, de sujetos y de modos de accionar que tienden a la subordinación de las luchas al modo de dominación política hegemónico del capital, y en tanto *resistencias antagonistas* criminalizadas, ca-

¹² Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia (2012) *Informe sobre la Criminalización de la Protesta*.

racterizadas por una articulación ofensiva de las diversas luchas territoriales orientadas a trastocar la correlación de fuerzas dominante a través de ciertas estrategias: la *producción de contra-información* que contrarreste la estigmatización, la *disputa jurídica-política* en los procesos de judicialización y el bloqueo y control territorial en las situaciones de militarización.

Producción de contra-información frente a la estigmatización

La criminalización opera estigmatizando a quienes luchan, etiquetándolos de criminales por su “peligrosidad”, que apunta a la virtualidad de lo que son capaces de hacer. Frente a la estigmatización que activan y sostienen medios de comunicación y funcionarios públicos, las experiencias de luchas anteponen prácticas de contra-información que intentan desactivar y neutralizar esos estigmas.

Nosotros nos definimos como un espacio antirrepresivo y nuestra tarea principal es acompañarnos y pensar en conjunto respuestas frente a la represión estatal... empezamos a implementar la herramienta de la transmisión radial de determinadas instancias judiciales que nos permiten a través de las redes sociales difundir lo que transcurre en un juicio, pero también poder expresar un montón de voces, de lo que pasa alrededor de un juicio... empiezan a tomar un valor en ese micrófono, cuando te querés dar cuenta empieza formar parte de la prueba que juega en una decisión... la experiencia humilde nuestra es que cuando uno se dispone a dar la discusión en esto ámbitos, tiene todas las posibilidades de ganarla. (Activista antirrepresiva, comunicación personal, 2 de julio de 2019).

De este modo, producir contra-información para desactivar procesos de estigmatización, se inscribe como una práctica política que habilita la construcción de aquellos núcleos de buen sentido (Gramsci, 2004) que contrarrestan al sentido común en la reproducción reaccionaria de la cri-





minalización, incluso incidiendo políticamente en el devenir del proceso judicial.

Disputa jurídico-política ante la judicialización

En cuanto a la judicialización de los conflictos, claramente es un mecanismo a través del que el Estado deslocaliza el conflicto para diseccionarlo a través de la maquinaria burocrático-judicial. Uno de sus primeros efectos es la pérdida del control espacial y temporal del conflicto por parte de lxs sujetxs que luchan, que ahora requieren de una mediación experta para acceder parcialmente al expediente en el que se diseña la individuación y la ejemplaridad del caso.

La judicialización lo que implica no es sólo la posibilidad de ir preso, sino también la necesidad de tener que dar la pelea en un ámbito que es totalmente ajeno y que incluso para poder darla necesitas una herramienta que es un abogado porque no la podés dar vos por tus propios medios. No es una mesa de diálogo política, sino que necesitás un técnico que sea el abogado para que te tenga que representar (...) Lamentablemente la experiencia de los pobres con los abogados es bastante triste, porque son causas que llevan muchos años (...) es una pelea muy larga política que si no se sostiene desde lo jurídico con alguien que no transe ni se venda es una pelea perdida. (Activista antirrepresiva, comunicación personal, 2 de julio de 2019).

En 2013 en la provincia de Neuquén se encontraban vigentes 42 causas penales que involucraban a 241 mapuches en conflictos por territorios afectados por actividades petroleras (Pérez Roig, 2014). Sin lugar a dudas, a partir del impacto de Vaca Muerta estos conflictos se multiplicaron y con ellos también la intervención estatal a través de la judicialización.

ellos entienden que los mapuches están pasando el límite

siempre y ponen en riesgo un modelo basado en la explotación de recursos naturales, buscan escarmentarlos y la manera es judicializar y criminalizar la demanda mapuche. Nosotros decimos, no hay problema criminalizan, judicializan y nos veremos en los tribunales, pero nos damos cuenta de que el poder judicial tampoco está a la altura, entonces estamos en un problema porque el Estado en vez de resolver políticamente la cuestión mapuche la criminaliza y dice esto es un problema judicial no un problema político. Cuando vamos a la justicia, vemos que los jueces responden a otros intereses, dejan de lado la Constitución, dejan de lado las leyes y te condenan, entonces ahí está el problema realmente. (Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

En la criminalización de las luchas territoriales, el Estado queda expuesto como una estructura concreta que se constituye en tanto una fuerza general de coerción separada de las clases, que incluso está dispuesta a confrontar con los intereses particulares en pos de garantizar al derecho como forma de existencia de las relaciones sociales capitalistas (Blanke, Jürgens y Kastendiek, 2017). Cuando a través del derecho, un conflicto territorial es transformado en delito, el carácter represivo del Estado en tanto fuerza de clase queda al descubierto arriesgando su propia legitimidad, riesgo intrínseco e inevitable de la función coercitiva del Estado en una sociedad capitalista.

Particularmente, la experiencia de criminalización y resistencia de la comunidad Winkul Newen logró politizar el mecanismo de judicialización, cuestionando la habitual clausura y opacidad del ámbito judicial.

planteamos la necesidad de intérprete en todas las audiencias, no por una cuestión de comprensión sino de derecho no solo de ellos sino de todas las comunidades (...) el planteo fue parte de la estrategia, para politizar el caso. El caso estaba siendo tratado como una tentativa de homicidio, como un delito común. Nosotros veíamos la necesidad de plantear el caso desde otro lugar, no desde la defensa estrictamente técnica, sino técnica política. (Abogado de la comunidad Winkul Newen, comunicación personal, 9 de mayo de 2018).





Una defensa técnica que además de lograr la absolución de lxs referentes acusadxs, desplegó una disputa jurídico-política en base a la socialización del conflicto, logrando el apoyo de diversos sectores sociales y políticos.

Bloqueo y control territorial ante la militarización

La militarización de los territorios generalmente es protagonizada por fuerzas represivas, ante la amenaza de perder el control territorial, quienes luchan despliegan estrategias de bloqueo y recuperación territorial. En la experiencia de la toma de tierras del B° Obrero, en varias oportunidades se cerró el barrio a través de la organización de piquetes en los que lxs vecinxs rotaban en diferentes turnos para mantener bajo su control el perímetro del barrio impidiendo el ingreso de la policía.

lo que hicimos nosotros en ese momento fue como que no le dábamos mucha bola a lo que tenía que ver con lo judicial pero sí a la resistencia, hicimos la asamblea nuestra y resolvimos cerrar el barrio, que no pudiera entrar nadie de ningún lugar. Entonces pusimos como piquetes en todas las entradas del barrio y cercamos el barrio para nosotros solos, todo cerrado, barrio cerrado por todos lados y desde adentro, (...) en la primera orden de desalojo, habían traído muchas fuerzas de seguridad y el equipo especial BORA... Se declaró que era imposible llevar adelante un desalojo con la población que había acá en el barrio, no porque no lo pudieran hacer si no por la cantidad de gente y por la forma en que estábamos organizados. (Militante social, referente de Barrio Obrero, comunicación personal, 20 de diciembre de 2019).

Asimismo, durante la firma del acuerdo YPF-CHEVRON, la legislatura de la provincia de Neuquén y sus intermediaciones también devinieron en un territorio en disputa. En ese momento, el Estado acorazó de coerción la falta de consenso y, por lo tanto, de legitimidad de aquel acuerdo con cláusulas secretas, que no solamente inauguraba la explotación con-

taminante de los territorios vinculados a Vaca Muerta, sino que también profundizaba una política represiva abierta hacia quienes se atrevieran a resistir la ofensiva del capital.

había una decisión política del gobierno de Neuquén de aprobar a lo que fuera este pacto y estaba medido que iba a haber resistencia popular, por eso se militarizó toda la legislatura ¿no? Creo que el gobierno también fue sorprendido por la masividad de la protesta, yo te cuento porque estaba ahí adelante, cuando estábamos delante de la policía (...) cuando nos dimos cuenta de que estaban todos listos para sesionar fue donde se desbordó la barrera ... se ve que los perros no estaban adiestrados para semejante muchedumbre... ahí se dieron cuenta y tuvieron que meterse con perro y todo, y empezaron a disparar... La reflexión que les generó a ellos fue que no hay que legislar contra el pueblo, la lección que les dejó a ellos es que el paredón tiene que ser más alto para evitar de que ingrese, y ponerle canales, y faltaban los cocodrilos nomas ¿viste? (Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, comunicación personal, 26 de agosto de 2019).

Desde julio de 2013 el acuerdo YPF-Chevron ya estaba definido a nivel del Estado nacional en manos del kirchnerismo, en esta instancia requería la aprobación de la Legislatura provincial para garantizar la seguridad jurídica de los inversores. El nivel de tensión durante la sesión queda expuesto en la siguiente intervención:

Lo dijimos cuando entró por primera vez el Proyecto, esto ya entró torcido, entra a como dé lugar y entra con balazos, con gases lacrimógenos. Volvimos a la época del sobichismo donde tenemos heridos con balas de plomo en las movilizaciones. La misma Policía que asesinó a Carlos Fuentealba, la misma Policía asesina de Teresa Rodríguez, la misma Policía que le metió sesenta y cuatro perdigones de bala de goma a un compañero de Zanon, como es Pepe Alveal, esa misma Policía es la que nos estuvo disparando hoy durante todo el día." (Diputado por el FIT, Diario de sesión, 28/08/2013).

Esa misma policía neuquina capaz de cargar con municiones de





plomo sus armas anti-tumultos y una vez más disparar contra estudiantes, docentes y trabajadores. El punto de inflexión de la jornada fue que nuevamente hirieran a un docente en el marco de una protesta social. Sin embargo, los relatos plantean que había más heridos y que la represión solo cesó cuando se logró aprobar el acuerdo.

crucé la calle para saludar a un par de gente, y vuela ahí en el medio de la gente, vuela un gas lacrimógeno, así que te imaginas... entonces yo cuando les digo a dos amigos míos, vamos a ir a donde están los mapuches, que parece que estamos más resguardados, subimos a la lomita, y ahí fue donde estábamos... me acuerdo que yo estaba con el termo y de repente sentí un golpe y digo uh estos me tienen..., una sensación rara, me quedé como un poco sin aire y cuando veo así sangre digo uh una bala de goma... siento sabor a sangre... (Docente herido en represión Acuerdo YPF-Chevron, comunicación personal, 27 de agosto de 2019)

A modo de conclusiones

En este artículo presentamos algunos ejes de análisis abordados en el proceso de investigación sobre las relaciones entre luchas territoriales y Estado en el norte de la Patagonia entre 2009-2015. A partir de experiencias de lucha concretas vinculadas a tomas de tierras, conflictos socio-ambientales y derechos territoriales indígenas, identificamos que el principal modo de intervención estatal es la criminalización.

Una primera conclusión de nuestro análisis, es que estas luchas no han sido abordadas de manera unificada como luchas territoriales porque desde ciertos marcos de referencias vinculados a las teorizaciones de los movimientos sociales y del extractivismo existe una tendencia a reproducir su particularización, en tanto modos de conocimiento que tienden a la duplicación de lo real, más que a su crítica y transformación. Al desplazar como foco de análisis y de crítica a la acumulación de capital y sustantivar su carácter extractivista, estos conflictos suelen presentarse de manera

aislada, vinculados a las acciones colectivas de ciertos movimientos sociales, y no como expresiones de la sociedad capitalista en tanto proceso de socialización total constituido por antagonismos y conflictos de clases.

Una segunda conclusión y derivada de la primera, es que estos conflictos más que casos particulares de la acumulación por despojo, son experiencias vividas de las relaciones de producción capitalistas, cuya historicidad se vincula tanto al despojo originario como a su continua reproducción en la acumulación de capital basada en la explotación territorios y seres humanos. Quienes luchan por tierra y vivienda, quienes defienden y recuperan territorios indígenas, quienes libran conflictos socio-ambientales, son protagonistas de experiencias de lucha que posibilitan comprender las relaciones entre los procesos históricos de formación de las clases con las determinantes objetivas en un contexto determinado.

Una tercera conclusión y que abre la necesidad de profundizar el análisis expuesto en este artículo, es que estas experiencias de lucha sufren un mismo modo de intervención estatal, que más allá de sus especificidades y complejidad, revela el carácter represivo del Estado capitalista. A través de la criminalización de las luchas territoriales, el Estado despliega una serie de contradicciones que posibilitan cierta articulación de estas luchas en diversas experiencias de resistencia que pueden reforzar la subalternidad o su carácter antagónico. En tanto luchas que implican el acceso directo a medios de existencia resistiendo la negación del régimen de propiedad privada impuesto por la relación capital, estas luchas pueden contener, al menos de manera embrionaria, la negación de la negación, el potencial político de la acción revolucionaria.

Bibliografía

- Adorno, T. W. (2004). *Escritos Sociológicos I*. Madrid: Ed. Akal.
_____ (2013). *Introducción a la dialéctica*. Buenos Aires: Eterna Cadencia Editora.





Adorno, T. W. y Horkheimer, M. (1969). *Sociedad. Lecciones de Sociología*. Buenos Aires: Editorial Proteo.

Adorno, T. W. y otros (1972). *La disputa del positivismo en la sociología alemana*. Barcelona: Ediciones Grijalbo.

Alonso, G. y Trpin, V. (2018). "Territorios y cuerpos en el norte de la Patagonia: desafíos teóricos y metodológicos en tiempos de extractivismo." En *Revista de Estudios Marítimos y Sociales* [En línea], publicado el 27 de julio de 2018, consultado el 28 de julio del 2020. URL: <https://estudiosmaritimossociales.org/archivo/rem-s-13/dossier-alonso-trpin/>

Baratta, A. (2004). *Criminología crítica y crítica del derecho penal: introducción a la sociología jurídico pena*. Buenos Aires: Siglo XXI Ed.

Benjamin, W. (2008). *Tesis sobre la historia y otros fragmentos*. Traducción a cargo de Bolívar Echeverría. México: Editorial Itaca.

_____ (2001). *Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV*. España: Ed. Taurus.

Blanke, B., Jürgens, U. y Kastendiek H. (2017). "Acerca de la reciente discusión marxista sobre el análisis de la forma y función del Estado burgués. Reflexiones sobre la relación entre política y economía." En Bonnet, Alberto y Adrián Piva (eds.) *Estado y capital. El debate alemán de la derivación del Estado*. Buenos Aires: Herramienta, pp. 589-655. Disponible en <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>.

Bonfeld, W. (2016). "Objetividad económica y dialéctica negativa: sobre la lucha." En *Constelaciones. Revista de Teoría Crítica* N° 8/9, 2016-2017. Pág. 3-27.

Bonfeld, W. (2012). "La permanencia de la acumulación primitiva: fetichismo de la mercancía y constitución social." En *Theomai* N° 26, Universidad Nacional de Quilmes.

Bonnet, A. (2005) "Sobre la Dialéctica Negativa." En *Revista Topos y Tropos* N°4, Córdoba.

Bonnet, A. (2018). "Notas sobre la economía y la política en la Argentina reciente." En Giaretto, M. (comp.) *Luchas territoriales y estado*.

Criminalización y resistencias en el sur (pp. 13-35). Fiske Menuco: Ed. Publifadecs.

Buck Morss, S. (1981). *Origen de la dialéctica negativa*. México: Ed. Siglo XXI.

Daroqui, A. et al., (2012) Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil, Rosario: Homo Sapiens.

De Angelis, M. (2012). "Marx y la acumulación primitiva. El carácter continuo de los 'cercamientos' capitalistas." En Revista *Theomai* N° 26, Universidad Nacional de Quilmes.

Delrio, W. (2012). "El relato histórico y la criminalización de la agencia de los pueblos originarios." En Agosto, P. (comp.) *Patagonia: criminalización, militarización y violación de derechos humanos en territorio ancestral mapuche*. Buenos Aires: Ed. América Libre.

Foucault, M. (1989). *Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

García Gualda, S. M., (2017). "Tejedoras de futuro: la participación política de las mujeres mapuce en el conflicto territorial de Neuquén (1995-2015)." (Tesis de Doctorado). Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Dirección URL del informe: <https://bdigital.uncu.edu.ar/10690>. Fecha de consulta del artículo: 21/07/20

Giaretto, M., Zapata Y. y Naffa Prieto V. (2018). "Problemas, discusiones y aportes en torno a las luchas territoriales." En Giaretto, M. (comp.) *Luchas territoriales y estado. Criminalización y resistencias en el sur* (pp.149-176). Fiske Menuco: Ed. Publifadecs.

Gramsci, A. (2004). *Antología*. Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI.

Grüner, E. (2012). "Estudio introductorio. Marx, historiador de la praxis." En Marx, Karl, *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850*. Buenos Aires: Ed. Luxemburg.

Gunn, R. (2018). *La negación de la negación*. Consultado en: <http://comunizar.com.ar/la-negacion-la-negacion/>





Gutiérrez Ríos, F. (2015). "Acuerdo YPF-Chevron: Violencia física y simbólica en el contexto extractivista petrolero en la Argentina." En *Revista Anuario del Conflicto Social*, N° 4. Consultado en: <https://revistes.ub.edu/index.php/ACS/article/view/12274>

Harvey, D. (2004). "El nuevo imperialismo: acumulación por desposesión." Recuperado en Socialist Register, <bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf>.

Hirsch, J. (2017). "El aparato de Estado y la reproducción social: elementos de una teoría del Estado burgués." En Bonnet, A. y Piva, A. (comp.) *Estado y capital. El debate alemán sobre la derivación del Estado* (pp. 509-588). Buenos Aires: Ediciones Herramienta. Recuperado en: <<http://www.herramienta.com.ar/ediciones-herramienta/estado-y-capital-el-debate-aleman-sobre-la-derivacion-del-estado>>.

Izaguirre, I. (2003). "Algunos ejes teórico-metodológicos en el estudio del conflicto social." En Seoane, José (comp.) *Movimientos sociales y conflicto en América Latina*. Buenos Aires: CLACSO.

Jessop B. (1980). "Teorías recientes sobre el estado capitalista", en *Críticas de la economía política 16/17*, México: El Caballito.

Korol, C. y Longo, R. (2009) "Criminalización de los movimientos sociales de la Argentina. Informe general." En Korol, C. (Coord.) *Criminalización de la pobreza y la protesta social*. Bs. As.: Ed. El Colectivo y América Libre.

López, A. L. (2015). "Investigar el sistema penal y las prácticas de violencia punitiva estatal." En *Revista Puente y puerta. Apuntes críticos de Sociología*. Recuperado en: <http://puenteypuerta.sociales.uba.ar/2015/12/14/investigar-el-sistema-penal-y-las-practicas-de-violencia-punitiva-estatal/>

Luxemburg, R. (1919). *El orden reina en Berlín*. Consultado en: https://www.marxists.org/espanol/luxem/01_19.htm

Marx, K. (2001). *Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política*. Consultado en: <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/criteconpol.htm>

Marx, K. (2002). *El Capital*. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI. Tomo I.

Marx, K. (2007) *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858I*. México: Ed. Siglo XXI.

Meiksins Wood, E. (1983). "El concepto de clase en E.P. Thompson." En Revista *Cuadernos Políticos*, N° 36. México, D.F.: Ediciones Era. Pp.87-105.

Modonesi, M. (2016). *El principio antagonista. Marxismo y acción política*. México: Ed. Itaca.

Pérez Roig, D. (2014). "Fracturando Argentina. Promoción y resistencias al avance de los "hidrocarburos no convencionales". En Composto y Navarro (comp). *Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina* (pp. 149-166). México: Bajo Tierra Ediciones.

Roux, R. (2008). "Marx y la cuestión del despojo. Claves teóricas para iluminar un cambio de época." Revista *Herramienta* N° 38, Buenos Aires.

Sautu, R., et. al. (2005). *Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología*. Buenos Aires. CLACSO.

Seoane, J. (2012). "Neoliberalismo y ofensiva extractivista. Actualidad de la acumulación por despojo, desafíos de Nuestra América." En *Revista Theomai* N° 26.

Entrevistas

Referente de la actividad inmobiliaria en Cipolletti, comunicación personal, 25 de septiembre de 2017.

Militante social, referente de Barrio Obrero, comunicación personal, 20 de diciembre de 2019.

Comunicadora mapuche, comunicación personal, 4 de julio de 2020.

Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, comunicación personal, 26 de agosto de 2019.





Activista antirrepresiva, comunicación personal, 02 de julio de 2019.
Abogado de la comunidad Winkul Newen, comunicación personal,
9 de mayo de 2018.

Docente herido en la represión del Acuerdo YPF-Chevron, comuni-
cación personal, 27 de agosto de 2019.

Fuentes documentales

Corte Suprema de Justicia, 243/2014 (50-R/CS1) Recurso de Hecho
Romero, Carlos Adolfo y otros/Interdicto de recobrar con fecha 10 de no-
viembre de 2015.

Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia (2012) *Informe sobre la Cri-
minalización de la Protesta*.

Legislatura de la Provincia de Neuquén (2013) *Diario de sesiones*,
XLII Período Legislativo, 17a. Sesión Ordinaria Reunión N° 19, 28 de
agosto de 2013.



Estudios sociales, tradiciones de lucha y movimientos de desocupados en Argentina: reflexiones teórico-metodológicas

Social studies, traditions of struggle, and unemployed movements in Argentina: theoretical-methodological considerations

José Benclowicz*

Recibido: 2 de octubre de 2020

Aceptado: 30 de octubre de 2020

Resumen: En este trabajo reflexiono sobre el lugar de las tradiciones de lucha en los estudios sociales, considerando los modos en que fue pensada la organización de los desocupados en general y atendiendo al caso de Tartagal y Mosconi (Argentina) en particular. ¿Por qué pareció novedoso el desocupado organizado? ¿Por qué los primeros estudios sobre esas localidades pasaron por alto las tradiciones de lucha de la zona? Abordo aquí estas y otras preguntas conexas y reflexiono sobre la necesidad teórico-metodológica de abandonar esquemas y supuestas leyes para poder acceder a la compleja red de interacciones que interviene para producir los acontecimientos sociales.

Palabras clave: Tradiciones de lucha; Movimientos de desocupados; Problemas teórico metodológicos; Redes de interacciones; Tartagal y Mosconi, Argentina.

Abstract: In this paper I consider the place of traditions of struggle in social studies, considering the ways in which the organization of the unemployed was thought in general, and taking into account the case of Tartagal and Mosconi (Argentina) in particular. Why did organized unemployed seem new? Why did the first studies on those localities overlook the struggle traditions in the area? I address here these and other related questions and reflect on the theoretical-methodological need to abandon schemes and supposed laws in order to access the complex network of interactions that intervenes to produce social events.

Key words: Traditions of struggle; Unemployed movements; Theoretical-methodological problems; Interaction networks; Tartagal and Mosconi, Argentina.

* IIDyPCa Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas/Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Correo electrónico: jd.benclowicz@gmail.com.



Introducción¹

El fin de siglo le obsequió al mundo académico un oxímoron argentino: los desempleados se organizaban primero en el interior del país, luego en el conurbano bonaerense, dando lugar a lo que poco después sería identificado como dos vertientes diferenciadas del movimiento de desocupados. Investigadores y tesistas de distintas regiones se acercaron a mirar de cerca ese inesperado fenómeno, en función del cual los expulsados del mundo del trabajo, los por definición desorganizados, quienes ocupan un no-lugar, etcétera, se organizaban. Al poco tiempo empezamos a contar con una variada literatura sobre el impacto del neoliberalismo y el ciclo de protestas vinculado a este último. Para el caso del Gran Buenos Aires se reconocieron tempranamente las evidentes continuidades del fenómeno con tradiciones organizativas previas, que hoy nos siguen conectando con prácticas diversas, disruptivas o no, como las tomas colectivas de tierras y las iniciativas de las agrupaciones de la denominada economía popular, entre otras. A partir del reconocimiento de la existencia de esas continuidades organizativas y de lucha, se criticó repetidamente la llamada visión espasmódica de la historia popular (Thompson, 1995). Los desocupados no reaccionaban mecánicamente ante la falta de trabajo y el incremento de la pobreza, lo hacían en base –y gracias a– esas tradiciones, ligadas a la gestión de las necesidades insatisfechas en el espacio barrial.

Pero lo ocurrido en las localidades petroleras del interior del país, donde se habían registrado las acciones de lucha más radicalizadas, fue pensado en general en clave de ruptura. Las asambleas populares masivas, los cortes de ruta y las puebladas aparecían como formas nuevas de organización y protesta, asociadas a unas necesidades también nuevas: las provocadas por el impacto de las medidas neoliberales, especialmente la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

¹ Agradezco a Fernando Aiziczon por sus comentarios críticos que me ayudaron a mejorar el texto (enfoque, planteos, yerros, etc., son de mi exclusiva responsabilidad).

El caso de Tartagal y Mosconi resulta particularmente interesante por la persistencia de los movimientos y la repetición de rebeliones populares masivas que ponían en cuestión el orden político vigente. Algo radicalmente nuevo parecía irrumpir en el escenario político y social. La asunción, a veces implícita y otras explícita, de la inexistencia de una tradición de luchas significativa en la zona, se asoció a una doble creencia: por un lado, se aceptaba contra la evidencia, disponible para quien quisiera relevarla, la idea de la existencia de un Estado benefactor que, basado en los recursos y la política de YPF, habría garantizado –al contrario de lo ocurrido en el gran Buenos Aires– la satisfacción de las necesidades de la población hasta su privatización. No había pues condiciones “necesarias” para el desarrollo de tradiciones de lucha. Esto, sumado a la identificación de la cultura política salteña como esencialmente conservadora, reforzaba el carácter novedoso del fenómeno piquetero en Tartagal y Mosconi.

Y el fenómeno efectivamente fue novedoso, aunque no exactamente por los motivos esgrimidos, ya que no existió un Estado de bienestar en la zona –¿acaso existió a nivel nacional?–, ni la sociedad salteña era o es esencialmente conservadora y no lo son –ni lo fueron– las comunidades del norte de la provincia.²

Esta doble creencia, repetida una y otra vez en la literatura política y académica, fue aceptada omitiendo la indagación sobre unas tradiciones de lucha que, contra todas las suposiciones, encuentran expresiones múltiples y tempranas en la historia de la zona. De ahí que el caso resulte particularmente pertinente para reflexionar sobre el lugar de las tradiciones de lucha en los estudios sociales. Desde la perspectiva que adopto aquí, las tradiciones de lucha pueden constituir una pieza relevante en la explicación de los acontecimientos de masas y su examen incluye aunque excede ampliamente la identificación de reivindicaciones que persisten

² En el presente ensayo recorro a los resultados de la investigación que desarrollé en su momento sobre Tartagal, Mosconi y la emergencia del movimiento de desocupados, reflejados ampliamente en formato de libro (Benclowicz, 2013); asimismo, parte importante de las explicaciones e indagaciones pueden encontrarse también en Benclowicz (2011a y 2011b), entre otras publicaciones.





en el tiempo y de continuidades –sujetas a adaptaciones y transformaciones– en las formas de organización y confrontación. Éstas son más bien expresiones de ese entramado cultural complejo y dinámico que son las tradiciones de lucha.

Lo dicho hasta aquí invita a pensar críticamente la forma en que historiadores, sociólogos y el resto de los científicos sociales llevamos adelante nuestras investigaciones. ¿Por qué pareció tan novedoso el sujeto desocupado organizado? ¿Por qué los primeros trabajos sobre el tema pasaron por alto las tradiciones de lucha presentes en esa “cuna” del movimiento piquetero que fueron las localidades de Tartagal y Mosconi? ¿De qué tradiciones se trata y de qué manera conectan con el pasado reciente? ¿Cómo se vincula lo anterior con la creencia en la existencia de un Estado benefactor? ¿Qué aspectos de los fenómenos sociales habría que considerar especialmente a fin de construir una aproximación adecuada de la realidad que se pretende comprender? Estas preguntas, que oscilan entre lo general y lo particular en un intento por trascender lo puntual sin caer en la pura especulación, son las que pretendo abordar en estas líneas. Lejos de proponer un abordaje teórico-metodológico determinado, planteo la necesidad de abstenerse de reducir la inabarcable complejidad de lo real a unos cuantos esquemas más o menos sofisticados. Sigo aquí a Feyerabend (1984), cuando señala que

podemos enumerar métodos empíricos, aducir ejemplos históricos; usando estudios de caso podemos intentar demostrar la inherente complejidad de la investigación y preparar así al científico para la ciénaga en que va a penetrar. Tal procedimiento le dará una idea general de la riqueza del proceso histórico en que él quiere influir; le animará a dejar atrás cosas infantiles, como la lógica y los sistemas epistemológicos; le ayudará a pensar en derroteros más complejos, y esto es todo lo que podemos hacer, dada la naturaleza del material (p. 21).

En esa línea, reflexiono sobre la necesidad teórico-metodológica de abandonar esquemas y supuestas leyes para poder acceder a esa com-

pleja red de interacciones que interviene para producir los acontecimientos sociales. Veremos pues, que nos puede decir el caso de Tartagal y Mosconi sobre esto. Pero antes, conviene revisar el lugar que han ocupado tradicionalmente en los estudios sociales aquellos protagonistas de las puebladas y cortes de ruta, los desocupados.

Las luchas de los desocupados en la historia del siglo XX

La representación de los desocupados como sujetos pasivos ha sido tan influyente en los estudios académicos como resistente a la evidencia empírica. Pensados en el mejor de los casos como víctimas de las injusticias del capitalismo a quienes debía ampararse o bien como un peligro para el movimiento obrero que era preciso conjurar, los desocupados en tanto tales han tendido a ser negados como partícipes activos en el escenario contemporáneo, excepto para ser vestidos con las poco ilustres prendas del lumpenproletariado. Fuera de este tipo de agencias de carácter negativo, puede decirse que para finales del siglo XX existía algún consenso en las ciencias sociales a propósito de la representación pasiva del desocupado. Tan sólo un año antes de la rebelión popular que terminaría considerándose partera del movimiento piquetero en la Argentina —me refiero a la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul de 1996—, Pierre Rosanvallon (1995) refrendaba desde el campo historiográfico aquella creencia según la cual la organización de los desocupados es imposible.³

Algo después, también Pierre Bourdieu (1999) consideró el fenómeno como un acontecimiento excepcional y extraordinario; mientras tanto, localidades como General Mosconi o La Matanza empezaban a recibir a los primeros contingentes de turismo político-social-académico.

³ Hace algunos años atrás, en el contexto de una conferencia que brindó Rosanvallon en la ciudad de Bariloche, tuve la suerte de ser invitado para comentar su obra a modo de presentación y me tomé el atrevimiento de preguntarle qué pensaba de aquella afirmación a la luz de los acontecimientos posteriores. Lamentablemente, Pierre no respondió.





Y sin embargo, aunque menos frecuentes, los movimientos de desocupados no son novedosos en la historia contemporánea. La crisis del '30 los vio desarrollarse en buena parte de Europa y en Estados Unidos; e incluso antes, tras la Gran Guerra, el *National Unemployed Workers Movement* daba sus primeros pasos en Inglaterra. Su importancia no fue menor en cuanto a perdurabilidad ni en cuanto a influencia: casi dos décadas de luchas le aseguraron un lugar entre la clase obrera británica, que transmitió su solidaridad con las legendarias *Hunger marches* más allá de la condición de ocupación y de lealtades políticas. En Argentina, de hecho, como es conocido aunque pocas veces recordado, las primeras grandes movilizaciones de la historia del movimiento obrero giraron en torno a los desocupados. Aún antes de la creación de la Federación Obrera Argentina (FOA), las protestas de desempleados que poblaban el escenario de la época quedaron tempranamente retratadas en el famoso óleo de Ernesto de la Cárcova *Sin pan y sin trabajo*, de 1894. De manera similar a lo que ocurriría un siglo después, incluso cuando las primeras luchas gremiales retrocedían al calor del incremento del desempleo, se organizaban asambleas y movilizaciones de miles de desocupados (Oved, 1978: 77, 126, 238). Impulsadas por anarquistas y socialistas, las acciones de los desocupados ocuparon un lugar destacado en los prolegómenos la fundación de la FOA y la primera huelga general en 1902, entre otros hechos organizativos centrales en la historia del movimiento obrero argentino.

Podría argumentarse sobre el carácter transitorio de la condición de desocupado y la corta duración de las organizaciones que lo tienen por protagonista, lo cual es sólo parcialmente correcto. Es cierto que en la mayoría de los casos las acciones de los sin trabajo no dan como resultado la emergencia de organizaciones duraderas, ¿pero acaso no ocurre lo mismo con las acciones obreras en general? ¿Cuántos fracasos organizativos pueden registrarse hasta que alcanzamos a observar una agrupación con cierta estabilidad a lo largo del tiempo? Obviamente, así como para que exista un sindicato se requiere de trabajadores que desarrollen

cierta actividad de forma continuada, para la existencia de las agrupaciones de desocupados deben registrarse ciertos niveles de desocupación persistentes a lo largo de un período determinado. En la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, el carácter estacional del trabajo rural, que ocupaba un lugar destacado, las fluctuaciones en la demanda de productos primarios en el mercado mundial y su impacto diferido en los movimientos migratorios provocaban la alternancia de períodos de alta y baja ocupación de la mano de obra, que gravitaban negativamente sobre las posibilidades de creación de organizaciones de desocupados, además de condicionar la propia acción de los gremios (Pianetto, 1984). En la Inglaterra de postguerra, en cambio, donde surgieron los primeros movimientos de desocupados, la persistencia de una tasa elevada de desocupación se había transformado en un fenómeno permanente. Se trata, con todo, sólo de parte de las condiciones necesarias. Las tradiciones de lucha constituyen otro elemento significativo sin el cual este tipo de movimientos difícilmente tendría lugar. Éstas aportan no sólo un saber-hacer dinámico indispensable, ofrecen también identificaciones e identidades. Y sin embargo, no son armaduras disponibles para actores dispuestos a luchar; caballeros sin trabajo no aparecen en cualquier momento ni en cualquier lugar. Pero cuando aparecen, nos plantean el doble desafío de aproximarnos a la compleja trama que hizo lugar a su irrupción y de revisar los supuestos que arrojaban a la penumbra las experiencias de lucha y organización previas.

Los desocupados más allá de la teoría

Acaso invisible en las miradas sociológicas sincrónicas y en la historiografía centrada en las instituciones, las experiencias de organización de los desocupados también fueron desatendidas por los historiadores y sociólogos interesados por el mundo del trabajo. Influenciados en buena medida por la tradición marxista, aquellos actores que se suponía no for-





maban parte del sujeto revolucionario –el proletariado, si puede ser industrial, mejor– quedaron frecuentemente fuera del campo de interés académico. Invisibles en la sincronía cuando no se manifestaban explícitamente, y en la diacronía cuando no eran considerados relevantes, los desocupados organizados expulsados de la historia irrumpieron irreverentemente en la Argentina de finales de los años '90 para constituirse en un actor político clave, que contribuyó fuertemente en un acontecimiento sin precedentes en el país: a la vuelta del siglo, un gobierno electo poco antes por amplia mayoría era expulsado en el contexto de una rebelión popular incontenible. Nadie que repase la evidencia empírica podrá negar que la contribución del movimiento piquetero fue relevante en ese marco. Y sin embargo, no se trataba de trabajadores que ocuparan posiciones “estratégicas” (Womack, 2007). Acaso ningún sector ubicado en esas posiciones contribuyó sustancialmente a la crisis de hegemonía que se desarrolló por entonces.

Las organizaciones de desocupados conquistaron posiciones estratégicas al menos provisoriamente mientras conservaron la capacidad de interrumpir la circulación de mercancías y paralizar el país de manera mucho más efectiva que el movimiento obrero tradicional. Lo hicieron en un contexto de “oportunidades políticas” que explican sólo en parte el crecimiento de los movimientos, otra parte, acaso la más compleja de reconstruir, es la de las tradiciones de lucha que intervinieron aportando al saber hacer y a la identidad de éstos. La complejidad se asocia, en primer lugar, a la necesidad de recurrir a la imaginación, lo cual resulta muy difícil cuando se trabaja dentro de los rígidos esquemas de cualquier marco teórico. Es que el marco teórico habilitará un campo de visión donde los hechos podrán reconstruirse con nitidez, a expensas de desdibujar, ignorar o pasar por alto otros aspectos detectables capaces de alterar el fresco que elabora el investigador. El problema no es nuevo, claro está. Ya a fines del siglo XIX, Engels intentó resolverlo sumariamente asimilando las relaciones que aparecían como remotas o que resultaban difíciles de probar como casuales o accidentales, para luego pasar a considerarlas como

inexistentes (Engels, 1890).⁴ Más que resolver el problema, alentaba un doble salto al vacío, alimentado por esa fe positivista tan propia de época. En el primero, se asume que lo complejo de explicar o probar es producto de azar, de esa manera, los estudiosos pueden reposar en categorías de análisis conocidas, capaces de iluminar relaciones reconocibles en todo tiempo y lugar. En el segundo se termina de asentar el conocimiento sobre el pantano de la certeza apriorística: sin mayor justificación, se asegura que podemos hacer de cuenta que lo azaroso no está allí, nunca ocurrió, no forma parte de la realidad. El investigador obtiene así un manual para distinguir los “verdaderos” hechos históricos de los incontables datos existentes, sin advertir que el texto se basa en la fe antes que en la evidencia. En este sentido, Carr (1984: 14), consideraba que la “creencia en un núcleo óseo de hechos históricos existentes objetivamente y con independencia de la interpretación del historiador es una falacia absurda, pero difícilísima de desarraigar”.

Claramente, las tradiciones de lucha no forman parte de ese núcleo óseo ni se comportan como una ley natural, sin embargo están allí. El propio Engels admitía que la tradición “merodea como un duende en las cabezas de los hombres” y desempeña un papel, aunque no la considerara decisiva y eventualmente optara por expulsarla de la realidad (Engels, 1890). Y si las luchas de los desocupados han tendido a ser igualmente expulsadas, es justamente porque desentonan con las teorías diseñadas para explicar las luchas sociales bajo el capitalismo. La cantidad de variables que intervienen en la generación de los fenómenos sociales es tan grande que parece necesario adoptar un esquema que ordene el caos de datos disponibles. Y tal es la necesidad, que no es extraño que el esquema termine prevaleciendo sobre los datos. El desafío del investigador pasa a ser cómo encajar los hechos considerados relevantes en ese marco preestablecido, sólo que por entonces ya no hay ninguna investi-

⁴De acuerdo a Omar Acha (2013), fue en esta carta dirigida a Joseph Bloch que apareció por primera vez el término “materialismo histórico”, que condensa la idea de una teoría general de la historia, válida para todo tiempo y lugar.





gación que merezca ese nombre, sólo manipulación de datos al servicio del esquema adoptado, que nos indica en qué y cómo se debe pensar. Aceptamos por ejemplo que existe una “contradicción principal” entre capital y trabajo, y es en torno a ella que buscaremos/encontraremos datos. En cambio, si no privilegiamos de antemano el proceso de producción, muchos otros datos, antes inadvertidos o ignorados, emergerán. Incluso si el curso de una investigación específica sobre luchas sociales en América Latina indica que esa relación juega un papel central, sus dinámicas y sus actores pueden diferir de los que acostumbramos considerar en unas miradas cargadas implícitamente de un enfoque eurocéntrico. Así, las acciones de los sindicatos tradicionales rara vez son las únicas relevantes –y no son necesariamente las más efectivas– y los trabajadores informales y marginalizados pueden jugar un rol significativo en determinados contextos capitalistas (Van der Linden, 2019). El problema heurístico radica en que los datos que se presuponen relevantes terminan circunscribiendo los estudios sociales en torno a determinadas fuentes conocidas, lo cual conduce a los investigadores a confundirlas primero con todas las disponibles, luego a estas con las que fueron generadas, e incluso a las últimas con la propia realidad que las produjo (Ginzburg, 2007).

Así las cosas, parece ineludible “reensamblar lo social” (Latour, 2008), lo que implica dar cuenta de las múltiples conexiones de la realidad prescindiendo de la comodidad de relaciones previamente establecidas en la mente del investigador y de fuerzas sociales que se supone actúan siempre. El *assemblage* resultante debería ofrecernos una aproximación específica al problema que intentamos abordar, que no excluye ni asigna de antemano prevalencias de ninguna especie. De hecho, la cantidad y cualidad de las agencias que interactúan no puede determinarse por fuera de la propia investigación; se trata justamente de descubrir esas agencias, examinar las mediaciones que las asocian y delinear la red de interacciones resultante. Uno de los hilos de la red que propone Latour nos conecta con Deleuze; otro, grueso aunque no declarado, nos conduce hacia But-

terfield, quien ya en 1931, usando como ejemplo los enfrentamientos en torno a la Reforma en el siglo XVI, apuntaba que es

mediante un laberíntico fragmento de una red que uno debería hacer el diagrama del curso a través del cual la libertad religiosa llegó hasta nosotros, dado que esa libertad llega a través de tortuosos caminos y nace de extrañas coyunturas, representa propósitos malogrados acaso en mayor medida que exitosos, y debe mucho más de lo que podemos saber a muchas agencias que tienen poco que ver con la religión o la libertad (1965: 26-27, traducción propia).

En esa línea, al abordar la cuestión de las tradiciones de lucha en un caso en particular conviene tener presente que ellas mismas forman parte de una intrincada red de elementos que se combinan casualmente o no. Todo lo relacionado con el asunto en cuestión debería verse con una mirada fresca capaz de atender no sólo a las relaciones sino también a los objetos inanimados cuya presencia o ausencia podría alterar la resultante. Aspectos que resultan triviales en una mirada condicionada por esquemas preestablecidos, pueden pasar a jugar un papel central. Latour plantea la necesidad de atender a cualquier mediación que pueda intervenir, igualmente, para Butterfield la historia “es un proceso que se mueve a través de mediaciones y esas mediaciones podrían ser aportadas por cualquier cosa en el mundo” (1965: 28, traducción propia).

En el caso de Tartagal y Mosconi no es menor, por ejemplo, que estas localidades se encuentren a la vera de una ruta internacional, la única que conecta en esta zona a la Argentina con Bolivia. Tampoco lo es la presencia de grandes depósitos de petróleo en las inmediaciones de las localidades. Estos objetos contribuyeron a que unos trabajadores desocupados ocuparan una posición estratégica que posiblemente no hubieran podido ocupar de otro modo, y que definitivamente no se puede deducir del papel que desempeñaban en las relaciones de producción. Claro que esa contribución no hubiese sido tal si esos actores no hubieran tenido la disposición a llevar adelante las acciones que llevaron adelante.





Tal disposición, ya sabemos, no nace automáticamente del deterioro de las condiciones materiales. Es en este punto en el que cobran relevancia las tradiciones de lucha. No unas tradiciones genéricas sino unas basadas en experiencias específicas de organización y enfrentamiento y asociadas a disputas repetidas e identificables.

El estudio de esas tradiciones contribuirá a construir aproximaciones plausibles sobre el desarrollo de los fenómenos de masas en cuestión, y no podrá avanzar más allá de eso. Y es que por más reensamble de lo social que hagamos, por más adecuada que parezca la reconstrucción que hacemos *ad hoc*, es preciso tener todo el tiempo presente que se tratará de una interpretación necesariamente incompleta e incapaz de dar cuenta de la realidad en toda su complejidad. No se trata de adoptar una mirada postmoderna, sino de terminar de asumir que “La historia [...] es siempre más rica en contenido, más variada de forma y aspectos, más viva y más ‘astuta’ de lo que se imaginan los mejores partidos, las vanguardias más conscientes” (Lenin, 1987: 414), y por si fuera necesario agregar, que los mejores académicos. La cuestión es que si no hacemos un esfuerzo por detectar contenidos singulares que permanecen ocultos ante una mirada estandarizada, los resultados obtenidos serán presumiblemente pobres. En esta línea, se requiere de una mirada atenta a indicios en apariencia menores que pueden resultar reveladores de fenómenos más amplios (Ginzburg, 1999). En particular, interesan aquellos elementos discordantes con el cuadro general, que siempre es un cuadro construido por el discurso académico y político. Si en lugar de considerarlos intrascendentes y descartarlos de modo que no incomoden estamos dispuestos a la tal vez menos eficiente pero mucho más interesante tarea de seguirlos, acaso encontremos algo verdaderamente significativo. Teniendo esto en cuenta, en el siguiente apartado abordo el tema del movimiento de desocupados y las puebladas en el norte de Salta atendiendo en especial a la cuestión de las tradiciones de lucha.

Las viejas tradiciones en el norte de Salta

¿Hasta dónde deberíamos remontarnos para comprender las luchas que se desarrollaron entre 1997 y 2001 en Tartagal y Mosconi? No se trata de minimizar aquí la incidencia del particular contexto de los años 90 en la Argentina, que incluye tanto el impacto de las políticas neoliberales como el ciclo de protestas que alentó. Pero estos factores irrumpieron sobre un terreno curtido de experiencias, y es en función de éstas últimas que asumieron una significación capaz de producir los acontecimientos de masas que tanta atención política y académica despertaron. En este sentido, podría invertirse la conocida fórmula sobre las “condiciones necesarias”. Puede pensarse que lo necesario aunque no suficiente son las tradiciones de lucha y lo que termina de aportar la química para la explosión es el contexto. Visto así, las tradiciones de lucha tienen, en todo caso, el mismo estatus de necesidad que los demás elementos, aún cuando no sean variables cuantificables ni fuerzas objetivas.

Tartagal y Mosconi son dos localidades petroleras ubicadas en el norte de Salta, fuertemente afectadas por la privatización de YPF, que sorprendieron a la opinión pública en general y también a la académica y política al irrumpir en la tapa de los diarios nacionales. Esto ocurrió en diversas oportunidades entre 1997 y 2001, cuando se convirtieron en escenarios de duraderos y masivos cortes de rutas, represiones cruentas seguidas de grandes puebladas y asambleas que improvisaron mecanismos de democracia directa, imponiendo diversas condiciones, incluyendo el desplazamiento de las autoridades electas bajo intachables mecanismos de la democracia representativa. Una hipótesis plausible sobre estos acontecimientos, planteada en los primeros trabajos sobre el tema, fue que se trataba de la irrupción de formas de organización y lucha novedosas para unas localidades y una provincia básicamente conservadoras, impactadas por los efectos del desmantelamiento de ese “Estado de bienestar” operante especialmente en regiones donde YPF jugaba un papel central.





Plausible, razonable y coherente, aunque falaz. La primera evidencia que encontré en este último sentido está relacionada justamente con la existencia de un proceso de luchas y organización en rechazo de la privatización de la petrolera estatal que alcanzó, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país, un desarrollo significativo. En el marco de ese proceso, ya se habían desplegado las formas organizativas y de lucha consideradas posteriormente novedosas. Así, en 1991 en Tartagal se registró la primera pueblada a nivel nacional con corte de ruta y asambleas populares en contra de la privatización de YPF. Las acciones de lucha quedaron aisladas en la zona y la cuestión pasó al olvido, pero su existencia refutaba la supuesta novedad y ponía en cuestión el carácter social conservador indiscutido hasta ese momento. Los efectos socioeconómicos de las políticas neoliberales aún no se habían desencadenado, y la privatización de YPF era impulsada por el gobierno nacional y apoyada por el provincial y por la dirección sindical, todos peronistas. Así las cosas, parece difícil explicar cómo esos trabajadores conservadores habían protagonizado una pueblada en 1991.

Cuando E. P. Thompson (1989) nos invita a mirar más allá de los últimos años del siglo XIX para comprender la formación de la clase obrera en Inglaterra, no es para minimizar la conocida influencia de la doble revolución, –la Francesa y la Industrial– sino para examinar elementos pre-existentes ineludibles que se activaron y resignificaron entre los trabajadores ingleses que les tocó vivir en ese nuevo contexto. No se trata de tradiciones que se puedan deducir de las relaciones de explotación a las que se encontraban sometidos los sectores populares urbanos en general, se trata de tradiciones específicas del pueblo inglés, rastreables hacia atrás por más de un siglo. Entre ellas, Thompson destaca tres: la tradición de disidencia religiosa, la asociada a la idea del “derecho por nacimiento” y la de la multitud, vinculada a una “economía moral”. Aunque ésta última pueda pensarse como clasista –y conservadora– las tres nos remiten a pensamientos y acciones compartidas a nivel comunitario por diversos sectores sociales, que persistieron subterráneamente y contri-

buyeron a la posterior capacidad de organización, lucha, radicalización, y al democratismo obreros.

En el norte de Salta, si miramos más allá de la segunda mitad de los años '90, encontramos un conjunto de experiencias que, desarrolladas al calor de sus propios contextos y pasados, permiten identificar una dilatada tradición de luchas que convive y se enfrenta a los rasgos conservadores más conocidos de la sociedad salteña en general, incluyendo al peronismo tradicional predominante entre los trabajadores. Así, las luchas de 1991 contra la privatización de YPF pueden pensarse como un mojón que nos conduce a sendas confrontaciones antes y después del restablecimiento de la democracia en 1983, rastreables con bastante precisión porque se manifiestan las mismas identidades políticas asociadas a la izquierda e incluso intervienen los mismos actores. Se trata de una trama identitaria y política que puede considerarse una tradición subterránea integrante de ese fragmento de la red que interesa iluminar, que atraviesa también las radicalizadas décadas del '60 y '70, e incluso la del '50. En ese medio siglo que precedió a la emergencia del movimiento de trabajadores desocupados y de las puebladas célebres en Tartagal y Mosconi, se ensayan y despliegan los formatos de protesta y organización que fueron considerados novedosos en los '90s. La trama es lo suficientemente vigorosa como para que hacia 1968 la mayor parte del movimiento obrero regional adhiriese a la combativa CGT de los Argentinos, e incluye antes y después de eso tomas de edificios públicos, ollas populares, cortes de vías de circulación y hasta la toma o corte de la pista de aterrizaje del aeropuerto local –bajo el gobierno de Alfonsín, en el marco de la lucha contra el plan Houston de concesiones hidrocarburíferas– entre otras acciones. Antes de eso, se registra la participación activa en la lucha contra el Plan Larkin de racionalización ferroviaria bajo el gobierno de Frondizi, donde aparecen las mismas prácticas recientes de virtual pase a la clandestinidad de activistas perseguidos que se refugian en el monte, amenazados en ese entonces por la militarización del servicio y en los '90s por la figura penal de “subversión”. ¿Cómo acceder a estas tradicio-





nes de lucha si se decidió de antemano que se trata de comunidades conservadoras y satisfechas por un Estado de bienestar? Si evitamos esto último, salen a la luz prácticas y tradiciones obreras significativas que nutrieron al movimiento de trabajadores de desocupados local, vivas en la memoria, como pude constatar –y en la acción–, de diversos protagonistas de las luchas recientes.

Ahora bien: las puebladas que se registraron entre 1997 y 2001 tuvieron una configuración policlasista. La primera evidenció ese carácter desde el inicio movilizando al conjunto de las comunidades; en las otras se destaca el modo en que la población en general reaccionó frente a la represión de los desocupados que cortaban la ruta. No es tan frecuente registrar respuestas de tamaña envergadura, en donde existe un sólido consenso general capaz de habilitar a que miles de personas desafíen a tropas armadas nacionales y provinciales que habían desalojado a los piqueteros y las fuercen, después de chocar con ellas, a retirarse. Esto se explica en parte por la extensión de la crisis socioeconómica y por el hecho de que en estas comunidades relativamente pequeñas el desocupado frecuentemente es un familiar o un conocido. Pero hay más.

Algo que puede verse en las declaraciones de los manifestantes y en los pliegos de reivindicaciones es la presencia de un componente identitario regional, en tensión con las referencias nacional y especialmente, provincial. Tartagal y Mosconi concentran la mitad de la población del departamento San Martín. Con Tartagal como cabecera desde su creación formal en 1948, se trata de la mayor zona petrolera de Salta. En las principales protestas, a las que se sumaron el resto de las localidades del distrito, aparece una defensa cerrada del departamento; se lo percibe perjudicado de conjunto por las políticas impulsadas desde la nación y la provincia y se exigen soluciones para la región, que no llegan. Así las cosas, en el contexto de la pueblada de mayo de 2000, se llegó a plantear la independencia del departamento de la provincia de Salta. El punto alcanzó a figurar en el borrador del pliego de reivindicaciones elaborado por una asamblea popular con representantes de todas las localidades

de la zona, que afortunadamente llegó a mis manos. En la versión final del petitorio el punto se omitió, tal vez por considerar que el reclamo no era factible, pero la cuestión llegó a tener consenso, como pude corroborar en distintas entrevistas. ¿De dónde provenía ese componente identitario tan potente, capaz de llegar a plantear la separación política de la provincia? El análisis de las reivindicaciones de una pueblada a otra reveló que los reclamos de reparación histórica de la zona eran tan reiterados como su falta de implementación. Resulta que a pesar de ser el mayor productor hidrocarburífero de Salta, el departamento San Martín presentaba elevados índices de carencias sociales y de infraestructura, mayores a las medias provinciales. Estas carencias diferenciales no estaban relacionadas con las políticas de los años '90, sino que, como mostraron los datos censales, eran preexistentes. En efecto, antes de las contrarreformas neoliberales, la población con insatisfacción de las necesidades básicas se ubicaba en torno al 50% y las viviendas consideradas oficialmente deficitarias alcanzaban el 60%. El análisis de las estadísticas previas al impacto de la privatización de YPF, cruzado con la información obtenida en diversas entrevistas, revelaba que la idea de un estado benefactor en la zona era un mito, que en el contexto abierto por las consecuencias sociales del neoliberalismo encontró tierra fértil para crecer.

Más allá del mito, el departamento San Martín mostraba –muestra– un subdesarrollo histórico con respecto a la provincia, hecho que se asocia al particular manejo de los recursos por parte de la oligarquía salteña y que puede considerarse un verdadero colonialismo interno regional. Teniendo esto en cuenta, la fuerte identidad local construida en oposición al poder político provincial que se apropiaba de los recursos de la zona empieza a entenderse mejor.

¿Pero bajo qué circunstancias se forjó este particular componente identitario que operó favoreciendo la identificación de la explotación y la consiguiente confrontación? El estudio que llevé adelante llegó a mostrar que tanto ese colonialismo interno como el particular componente identitario local se remontan a la configuración misma de la zona como un en-





clave petrolero y maderero entre la segunda mitad de los años '20 y mediados de los '30. Es más, los reclamos y las luchas que se desarrollaron en ese período formativo guardan un sorprendente paralelismo con los formulados al calor de las puebladas y asambleas de la historia reciente. Las reivindicaciones asociadas a falta de infraestructura, salud, educación, derechos laborales y condiciones comerciales, reiteradas en las últimas grandes protestas, aparecen ya hacia mediados de la década del '30 impulsadas por el Centro Comercial de la época, cuando un proceso de luchas, que incluyó la Asamblea Popular como formato organizativo, derivó en la formulación de un planteo independentista similar al de los últimos tiempos. A esta altura, resulta claro que la idea de que se trató de pueblos tranquilos y conservadores hasta los '90s, debe ser desechada de plano, también la que supuso que las asambleas populares constituyeron nuevas formas de organización y protesta. El formato ha sido promocionado hasta el hartazgo por las diversas vertientes de la izquierda, por lo que el investigador debería intuir la posibilidad de su desarrollo si hay indicios de la presencia de un activismo cuya propia razón de ser es la extensión de la lucha social y política. Siguiendo estas pistas, logré dar con un periódico bastante singular, publicado durante los primeros años '30 en Tartagal. Los problemas regionales ocupaban un lugar central en las páginas de *La Frontera*, que sin embargo reservaba espacio para la reivindicar el 1° de mayo como día de lucha de los trabajadores, promocionar el esperanto y alternar alusiones positivas a la Unión Soviética con otras del mismo signo referidas a figuras como Mikhail Bakunin. La cuestión es que este semanario presumiblemente anarco-bolchevique —una rareza para la época y el lugar, supuestamente—, a la sazón el único medio de comunicación local, alentó y jugó un papel relevante en el proceso de luchas que derivó en la convocatoria de la que parece haber sido la primera asamblea popular de Tartagal en 1936.

El entramado del fragmento de la red que intentamos reconstruir ya se muestra más denso —e interesante—. En las grandes protestas del norte de Salta se hicieron presentes al menos dos grandes tradiciones de lucha,

que contribuyeron decididamente a su radicalidad y a la extensión. Una, con un carácter de clase bastante definido, nos remite a distintos dirigentes obreros combativos con experiencias sindicales y políticas previas asociadas a la izquierda, que en el contexto del desempleo masivo de los años 90 volcaron su “capital militante” (Poupeau, 2007) a la organización de unos desocupados que mayormente estaban sometidos a esa condición o a formas precarias de contratación antes de la implementación del programa neoliberal. Aquí puede vislumbrarse una auténtica novedad de estas confrontaciones protagonizadas por los desocupados que llamaron la atención del mundo académico: la incorporación a la lucha de amplios contingentes excluidos de los derechos que habían conquistado los trabajadores de YPF y de las demás empresas y organismos estatales, que en la zona incluyen a los ferroviarios, a los trabajadores de la empresa de energía, a los municipales. Conducidos por antiguos activistas combativos, trabajadores informales y subocupados de larga data, que constituyeron alrededor de la mitad de la población económicamente activa aún en los tiempos de oro de YPF, tuvieron sus primeras experiencias de lucha social y política activa. Y esto mismo podría pensarse para buena parte del movimiento de desocupados a nivel nacional.

Pero ese núcleo obrero conformado por estos dos componentes disímiles actuó con el telón de fondo de una dilatada tradición de luchas comunitaria, que se remonta a los primeros tiempos de la conformación moderna de las localidades. Si los desocupados jugaron un papel protagónico se debió probablemente a que su propia condición llevada al extremo en el contexto de los 90s condensaba las postergaciones históricas de la zona. Éstas se vieron compensadas parcialmente y disimuladas por el accionar de YPF, que aseguró sobre todo a partir del peronismo la circulación de recursos a nivel local a través de la erogación de salarios y prestaciones, al punto que se llegó a imaginar la existencia de un Estado de bienestar aunque sólo se garantizaba realmente la satisfacción de las necesidades de la mitad de la población. La otra mitad, sometida por el contrario a un “estado de malestar”, saltó a la palestra junto con las ca-





rencias y postergaciones históricas de la región cuando las compensaciones parciales que habían operado hasta el momento se esfumaron. Lo que muestran una y otra vez los petitorios de los manifestantes, son reclamos específicos de los desocupados entre otros que actualizaban las reivindicaciones históricas de la zona, ignoradas largamente por el poder político provincial y nacional. Las tradiciones de lucha se entrelazan y manifiestan continuidades no sólo en el nivel discursivo sino también en el plano de la trayectoria de los sujetos, dando forma a una verdadera red histórica de interacciones y experiencias.

Un ejemplo específico servirá para ilustrar lo anterior. En última pueblada que se produjo en la zona, la de Mosconi de junio de 2001, se registraron fuertes choques entre los manifestantes y las tropas de Gendarmería, enviadas por el gobierno nacional para terminar con el corte de la ruta n° 34, de la mano de una campaña que pretendía instalar la idea de un brote subversivo en el norte de Salta. Los gendarmes desataron una represión descontrolada que terminó con numerosos heridos entre ellos mismos y los manifestantes, además de matar a dos pobladores que no participaban directamente en las protestas, lo que contribuyó a generalizar el repudio de la población. Hasta aquí, una escena repetida en diversas confrontaciones de este tipo. Todos los heridos iban a ser derivados lógicamente al principal hospital de la zona. Y en este punto la cuestión asume un rumbo singular. Según la información disponible, en solidaridad con los manifestantes, el personal del Hospital de Tartagal se negó a atender a los gendarmes, que fueron derivados a Orán, a unos 130 km de distancia. El jefe de Gendarmería denunció al subdirector a cargo del Hospital por el incidente; éste rechazó la acusación argumentando que la propia Gendarmería no había recurrido al Hospital por el previsible repudio que su presencia hubiese generado. La actitud del personal sanitario en general puede explicarse recurriendo al componente identitario local, los gendarmes habían atacado a quienes defendían los intereses comunitarios, por lo tanto eran visualizados como enemigos o al menos enviados de éstos. Sin embargo, las conexiones que se pueden

establecer no se detienen aquí. El subdirector había sido dos años antes candidato a intendente por el Partido Obrero (PO), agrupación que impulsaba enérgicamente los reclamos de la zona y las luchas de los desocupados, de hecho, una de las primeras organizaciones de desocupados de Tartagal, la CTD, estuvo asociada al PO. Su principal dirigente fue un militante formado previamente en el Partido Comunista (PC), corriente que tuvo una intervención continuada y relevante en distintos conflictos de la zona desde la década de 1950, al punto que la actuación de sus referentes es reivindicada por activistas recientes y pobladores nunca vinculados a esa tendencia política. Pero además, el subdirector del Hospital resultó ser nieto del fundador del periódico *La Frontera*, asociado al anarquismo en los años 30 y promotor de las luchas comunitarias de entonces, incluyendo las de obreros, comerciantes y pobladores en general.

La red que emerge de las conexiones establecidas arriba ilustra la puesta en movimiento por parte de los actores de unas tradiciones de lucha que en otro escenario podían desempeñar otro papel o tal vez ninguno. En este sentido, además de los elementos sincrónicos y/o estructurales, no basta con establecer la existencia de tradiciones de lucha para explicar la producción de eventos de masas. Es preciso que determinados sujetos las encarnen, las hagan suyas, las pongan en movimiento. Y esto último no puede suponerse sólo porque han existido en el pasado, es su propia actualización la que las hace existir como tales en el presente. Tenemos que considerar pues, esta mediación adicional. Antes de conceder lo que le toque a la novedad en el caso de los eventos de masas, la cuestión que sigue planteando, como señaló Thompson (1989), es la de establecer cuáles son los elementos del pasado que se precipitan en los nuevos contextos. Allí nos aguardan, siempre que los actores del presente las pongan en movimiento, las tradiciones de lucha.



Palabras finales

Si atendemos a las luchas sociales no con el cristal de una teoría en particular, sino con verdadera atención, puede apreciarse la justeza de aquella famosa observación de Marx, según la cual el cerebro de los vivos se encuentra oprimido por la tradición de todas las generaciones pasadas. Las tradiciones de lucha se manifiestan como un pasado presente; de modo inverso, el historiador o el científico social procura seguir hacia el pasado y desentrañar esas tradiciones a partir de sus inquietudes, que florecen en su propio tiempo. Así, el cerebro del estudioso también está oprimido, en este caso por los problemas del presente (y por sus obsesiones particulares). De ahí la famosa sentencia de Croce a propósito de que toda historia es historia contemporánea. Aun así, puede pensarse que existen distintos niveles de opresión, que resultan inversamente proporcionales a los grados de riqueza y complejidad de la realidad a los que se puede acceder. Cuando los niveles de opresión son elevados, el investigador encontrará –como se sabe ocurre en incontables casos– los resultados que ya esperaba y que estaban determinados por su estrecho ángulo de visión. Y cuanto más desprejuiciada y libre sea la mirada, más rica, mediada y sutil será la realidad que se descubre en la indagación. Sobre esta base es posible hurgar y eventualmente descubrir datos relevantes inadvertidos, capaces de conectar los discursos y acciones de los actores no sólo con la realidad que los rodea, sino también con la realidad pasada que los alimenta.

¿En torno a qué tradiciones debemos indagar para dar cuenta de la emergencia del movimiento piquetero y las rebeliones populares en historia argentina reciente? Vale la pena recordar que una pregunta semejante sólo puede responderse a partir de los avances de la propia investigación; si me detuve en un caso aquí, fue para intentar mostrar las complejidades inherentes y esbozar la riqueza del proceso histórico involucrado. Claramente, es preciso conocer qué características tienen los sujetos que intervinieron, no qué características estructurales, de modo de

poder asignarles la tradición que les correspondería teóricamente, sino qué características concretas, específicas. Indagar en torno a las trayectorias de los protagonistas nos da una pista –un indicio, diría Ginzburg– para iniciar ese viaje al pasado. Semejante viaje no está exento de riesgos, posiblemente más de los que no dejan de presentarse, a pesar de todo, en una investigación predominantemente sincrónica. Los lazos que conectan a los acontecimientos contemporáneos entre sí parecen más evidentes, aunque muchas veces se basan en las deducciones que realizamos los investigadores a partir de determinado marco teórico más que en conexiones realmente existentes. En este sentido, antes que privilegiar *a priori* el ángulo de las oportunidades políticas, de la identidad, de la estructura o de la agencia, sería saludable asumir la perspectiva del anarquismo epistemológico de plantea Feyerabend: cualquier combinación de métodos y enfoques puede resultar fructífera y no es posible saber de antemano cuál será la más pertinente para hacer avanzar la investigación. Y es así como la red de interacciones pasadas y presentes que rodea a unos actores tradicionalmente desdibujados como los desocupados, puede vislumbrarse mejor.

En esta fascinante encrucijada que son las tradiciones de lucha, donde convergen pasado y presente –también en cualquier otra–, es preciso terminar de asumir los estudios sociales como un discurso incompleto sobre los hechos, sabiendo que la multitud de elementos que interactuaron para producir los acontecimientos es tan inabarcable como necesaria para que el resultado haya sido el que fue. Se trata de renunciar a la imagen, tan tranquilizadora como falsa, de infinitos paralelogramos de fuerzas que se anulan entre sí y habilitan el descarte de las variables poco conocidas, de las que se supone no juegan un papel relevante y de las desconocidas, cual mano invisible que garantiza el equilibrio del desarrollo social. Es que justamente las tres últimas no son sólo las más interesantes, sino también las que nos pueden dar las mejores pistas de las novedades que al introducirse en las tradiciones de lucha –y en el proceso histórico en general– las modifican y las siguen produciendo.



Bibliografía

Benclowicz, J. (2011a). "Repensando los orígenes del movimiento piquetero. Miseria y experiencias de lucha antes de las contrarreformas de la década de 1990 en el norte argentino". *Latin American Research Review* 46 (2), pp. 79-103.

_____ (2011b). "Continuities, scope and limitations of the Argentine picket movement", *Latin American Perspectives*, 38 (1), pp. 74-87.

_____ (2013). *Estado de malestar y tradiciones de lucha. Genealogía del movimiento piquetero de Tartagal-Mosconi*. Buenos Aires: Biblos.

Bourdieu, P. (1999). *Contrafuegos*. Barcelona: Anagrama.

Butterfield, H. (1965), *The Whig interpretation of History*, Norton, Nueva York.

Carr, E. (1984). *¿Qué es la historia?* Barcelona: Ariel.

Engels, F. "Carta a José Bloch" (1890), en Carlos Marx y Federico Engels, *Obras Escogidas*, Progreso, Moscú, 1974, T. III.

Feyerabend, P. (1984). *Adiós a la razón*, Madrid, Tecnos.

Ginzburg, C. (1999). *Mitos emblemas e indicios*. Barcelona: Gedisa.

_____ (2007). "Reflexiones sobre una hipótesis: el paradigma indiciario, veinticinco años después". *Contrahistorias* 7, pp. 7-18.

Latour, B. (2008). *Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red*. Buenos Aires: Manantial

Lenin, V. (1987). "La enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo" (1920) en *Obras escogidas*, Progreso, Moscú.

Oved, I. (1978). *El anarquismo y el movimiento obrero en Argentina*. México: Siglo XXI.

Pianetto, O. (1984). "Mercado de trabajo y acción sindical en la Argentina, 1890-1922". *Desarrollo Económico* 94 (24), pp. 297-307.

Poupeau, F. (2007). "El capital militante: intento de definición". En *Dominación y movilizaciones*. Córdoba: Ferreyra Editor.



Rosanvallon, P. (1995). *La nueva cuestión social. Repensar el Estado providencia*. Buenos Aires: Manantial.

Thompson, E. P. (1981). *Miseria de la teoría*. Barcelona: Crítica

_____ (1989). *La formación de la clase obrera en Inglaterra*. Barcelona: Crítica.

_____ (1995). "La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII". En *Costumbres en común* (pp. 213-293) Barcelona: Crítica.

Van der Linden, M. (2019). *Trabajadores y trabajadoras del mundo. Ensayos para una historia global del trabajo*. Buenos Aires: Imago Mundi/CEHTI.

Womack, J. (2007). *Posición Estratégica y Fuerza obrera. Hacia una nueva historia de los movimientos obreros*. México: Fondo de Cultura Económica.





Paro Internacional de Mujeres: ¿nueva tradición de lucha del movimiento feminista?

International Women's Strike: a new tradition of struggle for the feminist movement?

Paula Varela*

Recibido: 24 de noviembre de 2020

Aceptado: 10 de diciembre de 2020

Resumen: En este artículo analizamos el Paro Internacional de Mujeres (PIM) como tradición de lucha propia de la Nueva Ola Feminista. Para ello dividimos el artículo en dos partes. En la primera, realizamos una recuperación de la gestación del #8M de 2017 a nivel internacional, prestando especial atención al proceso en Argentina. En la segunda, analizamos la relación entre el paro como instancia de articulación a nivel global y el contexto de crisis capitalista en que surge la Nueva Ola Feminista, atendiendo tres elementos: a) la inscripción del movimiento de mujeres en el conjunto de movimientos sociales surgidos al calor de la crisis desde 2008; b) la crisis de la reproducción social como aspecto específico de la crisis capitalista que coloca en el centro de la escena "el trabajo de las mujeres"; c) la centralidad de las mujeres en la clase que vive del trabajo y su carácter de puentes entre la producción y la reproducción.

Palabras clave: Paro Internacional de Mujeres, Movimientos Sociales, Crisis de Reproducción Social, Clase Trabajadora, Feminismo.

Abstract: This article analyzes the International Women's Strike (IWS) as a struggle tradition peculiar to the New Feminist Wave. In order to do so, the article is divided in two parts. In the first one, we review #8M 2017 building at an international level, paying special attention to the process in Argentina. In the second part, we analyze the relationship between the strike as an articulation instance at a global level and the context of capitalist crisis in which the New Feminist Wave arises, taking into account three elements: a) the inscription of the women's movement in the group of social movements that have emerged in the heat of the crisis since 2008; b) the crisis of social reproduction as a specific aspect of the capitalist crisis that places "women's work" in the center of the scene; c) the centrality of women in "the class that lives from work" and their character as bridges between production and reproduction.

* Docente de la Universidad de Buenos Aires, Investigadora del CEIL-CONICET. paula.varela.ips@gmail.com

Key words: International Women`s Strike, Social Movements, Social Reproduction Crisis, Working Class, Feminism.

Introducción

Hablar de huelga de mujeres requiere, antes que nada, diferenciar lo nuevo de lo que no lo es. Huelgas de mujeres ha habido muchas y de mucha importancia social y política desde el siglo XIX en adelante. Sin ir más lejos, el 8 de marzo (como Día Internacional de las Mujeres) tiene sus orígenes en huelgas realizadas por mujeres de la clase trabajadora desde hace más de 150 años. En 1853, trabajadoras del algodón de los talleres Preston, en Manchester, declaran una huelga de 8 meses en la que, dos tercios de las huelguistas, eran niñas menores de 15 años. Cuatro años después (1857), del otro lado del atlántico, las obreras textiles de una fábrica de Nueva York se declaran en huelga y salen a marchar contra las jornadas de 12 horas. Diez años después, en 1867, también en Nueva York, las obreras textiles realizan una huelga de tres meses reclamando la formación de un sindicato y aumento salarial. 40 años después, el 8 de marzo de 1908, se produce la histórica huelga de las obreras de la textil en Nueva York en reclamo de la igualdad salarial, la reducción de la jornada laboral de 12 horas y un tiempo para la lactancia. La huelga culmina con 129 trabajadoras calcinadas dentro de la planta fabril, luego de que el dueño decidiera prenderla fuego para liquidar la protesta. Al año siguiente, en 1909, las mujeres del Partido Socialista Norteamericano (Socialist Party of America) impulsan el Día Nacional de la Mujer (Woman`s Day) en homenaje a las huelguistas de 1908 y como campaña por el derecho al voto.

En 1910, en Copenhague, Dinamarca, se realiza la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas donde, a instancias de las feministas socialistas alemanas Luise Zietz y Clara Zetkin, se propone establecer el 8 de marzo como “Día internacional de la Mujer Trabajadora”. En 1912, en Massachusetts (Estados Unidos), las obreras de la textil La-





wrence iniciaron una lucha histórica al grito de "queremos el pan pero también las rosas". Durante la huelga sus trabajadoras pusieron en pie comités de huelga, montaron comedores comunitarios para los hijos e hijas de los trabajadores. La protesta, conocida como la huelga de Pan y Rosas conquistaría el reconocimiento de los sindicatos, el aumento de salarios y la reducción de la jornada laboral. En 1913 las mujeres rusas celebraron por primera vez el Día Internacional de la Mujer con una manifestación que es fuertemente reprimida por la policía zarista. Cuatro años más tarde, en 1917, en una fábrica textil de San Petersburgo las trabajadoras deciden conmemorar el Día Internacional de las Mujeres organizando una huelga con la consigna "¡Pan, Paz y Abajo la autocracia!". Estamos en los prolegómenos de la Revolución Rusa.

En nuestra región pueden encontrarse ejemplos desde inicios del siglo XX, como la "huelga de las cocinas apagadas" en 1904, en Chile, y la histórica "huelga de los inquilinos" en 1907, en Argentina, protagonizada por las mujeres de las familias trabajadoras, tanto las que estaban asalariadas como las que no. Esto sin contar las decenas de ejemplos en que trabajadoras de distintas ramas protagonizaron paros de su sector o fueron parte, junto con sus compañeros varones, de jornadas huelguísticas desarrollados en las primeras décadas del siglo XX. Más aquí en el tiempo, y en el marco de la Segunda Ola Feminista a nivel internacional, está la referencia directa de la huelga del 24 de octubre de 1975 en Islandia, conocida como "viernes largo", en el que las mujeres decidieron no concurrir a sus trabajos remunerados (logrando que cerraran fábricas, bancos, negocios, escuelas, guarderías, etc.) y no realizar trabajo doméstico ni de cuidados para hacer visible la importancia social y económica del trabajo de las mujeres, importancia no reconocida por el Estado, ni las empresas, ni las instituciones, ni los varones. Una multitud de 25000 mil personas (en una isla de 220000 habitantes) salieron a las calles en demanda de igualdad salarial y el fin de la discriminación sexual en los lugares de trabajo. Se lo considera *el Primer Paro Nacional de Mujeres*.

En síntesis, las huelgas de mujeres trabajadoras (asalariadas y no

asalariadas) acompañan al movimiento feminista desde su mismo surgimiento expresando, entre otras cosas, la articulación (no exenta de tensiones) entre feminismo y movimiento obrero, entre demandas de género y demandas de clase. Es en esa tradición de largo plazo en la que hay que inscribir el actual Paro Internacional de Mujeres para poder identificar lo que hay de novedoso y específico en este proceso. Veamos.

La gestación del Paro Internacional de Mujeres

Podemos situar el origen del Paro Internacional de Mujeres (PIM) en dos países: Polonia y Argentina en el año 2016. El 3 de octubre de 2016 se organiza un masivo Paro de Mujeres en Polonia contra un proyecto de ley que proponía prohibir completamente el aborto y penalizar con cárcel a quienes lo practiquen. El proyecto¹, que cobró estado parlamentario gracias al apoyo del partido de derecha católico Pis (Ley y Justicia) que gobierna Polonia, implicaba un enorme retroceso respecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 1993, la cual es una de las más restrictivas de Europa.² Con el *hashtag* #CzarnyProtest y recordado como “lunes negro” (por el color elegido por los colectivos feministas que convocaron al paro), las calles de las principales ciudades de Polonia se llenaron de mujeres vestidas de luto desde el mediodía hasta el atardecer. En Varsovia, la manifestación congregó alrededor de 25000 personas que marcharon bajo la lluvia. El paro y las movilizaciones

¹ Elaborado por el grupo cristiano conservador Ordo Iuris (<https://en.ordoiuris.pl/>) y presentado bajo la forma de “iniciativa ciudadana” luego de haber recolectado 100.000 firmas bajo la campaña Stop Aborcji (Paren el Aborto), el proyecto incluía también la prohibición de congelamiento de embriones y reducía la posibilidad de fecundación a un solo embrión, acotando el alcance de la reproducción in vitro. Según datos oficiales, en Polonia se realizan 2000 abortos por año. Según datos de las organizaciones de mujeres, esa cifra es de entre 80.000 y 100.000 abortos al año y 150.000 si se tiene en cuenta a las mujeres (y cuerpos gestantes) que viajan a otros países de Europa (Eslovaquia, República Checa, Austria o Alemania) para abortar.

² La ley vigente permite la realización del aborto solo en caso de violación o incesto, cuando representa un riesgo para la salud de la mujer y cuando el feto tiene malformaciones graves. Según una encuesta realizada por IPSOS para OKOpress (<https://oko.press/>) en septiembre de 2016, el 47% de la población consideraba que la ley debía mantenerse como estaba mientras el 37% consideraba que el aborto debía ser legal, seguro y de fácil acceso para quien lo requiriera. Bielinska-Kowalewska, Katarzyna (2017).





tuvieron gran repercusión mediática y por redes sociales. Hubo manifestaciones también en distintas ciudades de Europa, incluyendo Bruselas frente al edificio de la Comisión Europea. El parlamento polaco rechazó el proyecto de ley.³

Apenas dos semanas después, el 19 de octubre, se llevó a cabo el primer Paro Nacional de Mujeres en Argentina para reclamar por el cese de los femicidios y de la violencia machista. Como hemos señalado en otro artículo (Varela, 2020) la realización del paro marcó un giro importante en la dinámica del movimiento de mujeres que adoptó carácter multitudinario en 2015 con el *Ni una menos*. Retomemos brevemente la historia que va desde el #Niunamenos hasta el Paro de Mujeres de 2016 para comprender su contexto de surgimiento. Como es sabido, el #Niunamenos⁴ no es la fecha del nacimiento del movimiento de mujeres en el país, tampoco indica el momento en que este movimiento comienza a tener peso político: ambos procesos tienen larga data en Argentina y tienen también dos “instituciones” de vital importancia que se sostienen en el tiempo: los Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM)⁵ y la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito.⁶ Sin embargo, ninguna periodización sobre las luchas del movimiento feminista en Argentina y su importancia para la construcción de la PIM puede evitar la fecha, ya histórica, del 3 de junio de 2015, como comienzo de un *profundo proceso de masivisa-*

³ En octubre de este año (2020), el Tribunal Constitucional de Polonia declaró inconstitucional uno de los casos en que el aborto está permitido en Polonia: malformación del feto o cuando tiene muy pocas posibilidades de que nazca vivo. El mismo día del fallo, el movimiento de mujeres polaco recorrió las calles nuevamente para protestar contra el fallo en una masiva movilización que congregó decenas de miles de personas en Varsovia. Una de las principales organizadoras de la movilización fue la plataforma Huelga de Mujeres creada en 2016.

⁴ El colectivo *Ni una Menos* fue fundado en marzo de 2015 y su primera acción pública fue una maratón de posesía contra los femicidios que reunió a un grupo de artistas y periodistas entre las que se encontraba María Moreno, Marta Dillon, Virginia Canon, Vanina Escales, Ingrid Beck, Mariana Carbajal, Valeria Sampedro, Hinde Pomeraniec, las poetas de “Máquina de Lavar”, la Colectiva de Antropólogas Feminista, entre otras. Del encuentro, participaron familiares de víctimas de femicidios como Adriana Belmonte, madre de Lola Chomnalez y Jorge Taddei, padre de Wanda Taddei.

⁵ El ENM nace en 1986 como parte del florecimiento de movimientos sociales post dictadura en el país y se realiza desde hace 34 años en forma ininterrumpida convocando miles de personas. Para un recorrido histórico, véase Alma y Lorenzo (2009), para un análisis de la relación entre los ENM y las organizaciones sindicales, véase Arriaga y Medina (2020).

⁶ La Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito tuvo sus orígenes en el ENM de Rosario en 2003 y en 2005 se conformó oficialmente, presentando por primera vez su proyecto de ley para la legalización del aborto en Argentina. De allí en adelante, dicho proyecto (con modificaciones) fue presentado por La Campaña, todos los años ininterrumpidamente. Para 2018 había sido presentado 13 veces.

ción y reivindicación de la identificación con el feminismo que impacta a nivel nacional, con fuerte epicentro en los centros urbanos y que tiene como protagonistas, principalmente (pero no únicamente), a las jóvenes. Ese día alrededor de 250.000 personas marcharon al Congreso de la Nación y otras 150.000 lo hicieron en otros puntos del país, configurando una movilización que convocó alrededor de 400.000 en total (Laudano, 2017). El detonante fue el asesinato de Chiara Páez, una joven de 14 años embarazada, cuyo novio mató y enterró en el patio de su casa. Como señala Cecilia Palmeiro (2019), la consigna “Ni una menos” surge de la combinación entre “Ni un pibe menos” (histórica consigna del movimiento contra la violencia institucional y el gatillo fácil en Argentina surgida en los ‘90) y “Ni una muerta más” acuñada por Susana Chávez, una de las primeras activistas contra los femicidios en Ciudad Juárez, México (también a mediados de los ‘90), quien fue a su vez asesinada en 2011. Esto es importante porque permite visualizar una doble inscripción del #Niunamenos: por un lado, en la fuerte tradición del movimiento por los DDHH en Argentina;⁷ por otra, en la tradición de los movimientos que, a nivel internacional, reclaman contra la naturalización de las “vidas que no importan”. Las luchas contra los femicidios, que tiene como referencia ineludible Ciudad Juárez, es un ejemplo paradigmático de este tipo de movimientos (como veremos más adelante, el *Black Lives Matter* también).

A nivel nacional, la movilización del 3 de junio (que se replicó en otros países como Uruguay y Chile) es seguida, en octubre, por el ENMN³⁰ que bate el récord de convocatoria (hasta el momento) con la participación de más de 60.000 personas en la ciudad de Mar del Plata. A nivel internacional, el 7 de noviembre de 2015 se realiza la convocatoria “Ni una Menos” en el Estado Español, donde participaron cien mil perso-

⁷ Ese vínculo puede verse también en ciertas expresiones artísticas que evocaron la performance del “Siluetazo” llevada a cabo en 1983, “una iconografía de fuertes resonancias políticas para la Argentina, puesto que es utilizada por los movimientos de derechos humanos para simbolizar a las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar y eclesiástica (1976-1983). La propuesta había sido reapropiada y escenificada por grupos y activistas feministas en marzo de 2015 como una protesta contundente ante los femicidios (Laudano, 2017), previo a la movilización nacional Ni Una Menos, que continuó durante varios meses de ese año” (Laudano y Kraje, 2018: 384).





nas. Es importante señalar que el movimiento feminista en el Estado Español venía cobrando peso desde 2011 con el surgimiento del 15M, movimiento de los indignados. En 2014, se había realizado la denominada *Vaga de Totes* (huelga de todas) en Catalunya, con epicentro en Barcelona, cuya una de sus principales denuncias era el ajuste del gobierno del Partido Popular (en ese momento al frente del estado nacional) y la reivindicación del trabajo (productivo y reproductivo) llevado a cabo por las mujeres.

El año 2016 está marcado por una serie de protestas de mujeres en distintos países de Latinoamérica que prefigura las bases regionales sobre las que se montará la organización del primer Paro Internacional de Mujeres en 2017. El epicentro de todas ellas es la violencia machista. El 24 de abril de 2016, cientos de miles de mujeres salieron a las calles de México con la consigna “Vivas nos queremos”, que deriva del grito “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, en referencia a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. El 1 de junio de 2016 se realiza en todo Brasil una marcha federal de las mujeres contra la cultura de la violación bajo el eslogan “Por todas ellas”. El 13 de agosto de 2016 se realizará la movilización “Ni Una Menos” de Perú, 150000 personas salieron a la calle en lo que es considerada la mayor marcha por los derechos de las mujeres en la historia de ese país.

El 3 de junio de 2016 en Argentina vuelve a realizarse la marcha del #Niunamenos pero en esta oportunidad la consigna pasa a ser “Ni una menos. Vivas nos queremos” (tomando la frase del movimiento mexicano). La convocatoria es organizada por un amplio espectro de agrupamientos y colectivas feministas y de mujeres, organizaciones de DDHH, sociales, barriales, sindicales, estudiantiles y partidos políticos. El 7, 8 y 9 de octubre se realiza, como todos los años, el 31^a ENM en la ciudad de Rosario con una asistencia de 70.000 personas. Al regreso, el 12 de octubre (a poco más de una semana del Paro de Mujeres en Polonia), se conoce la noticia del brutal femicidio de Lucía Pérez⁸, una joven de 16

⁸ El 25 de noviembre de 2018 se conoció la sentencia que absolvió a sus feminicidas, lo cual impulsó un masivo

años oriunda de Mar del Plata. Inmediatamente, comienza a circular la idea de realizar un paro nacional de mujeres inspirándose en el reciente “lunes negro” polaco. El 13 de octubre, el colectivo *Ni una menos* organiza una asamblea en un local de la CTEP en el barrio de Constitución en la que participan alrededor de 300 personas y 50 organizaciones, entre agrupamientos feministas, movimientos sociales y organizaciones sindicales.⁹ Allí se resuelve convocar a un paro nacional (y ruidazo) de una hora (de 13 a 14hs) y a una marcha desde el Obelisco a Plaza de Mayo para las 17hs con el *hashtag* #Nosotrasparamos. La CTA comunicó públicamente el apoyo a la medida, mientras la CGT evitó sacar un pronunciamiento oficial. Un dato relevante: el texto de convocatoria refería, además de a la violencia machista, a la situación de mayor precarización y desempleo sufrido por las mujeres en Argentina, al trabajo doméstico no remunerado, la brecha salarial, la desjerarquización de las profesiones feminizadas y fundamentales como las maestras y las enfermeras, y la caída de la tasa de actividad en el mercado laboral para las mujeres con hijos, debido a la sobrecarga de trabajo de cuidados, la ausencia de guarderías y la escasez de licencias por maternidad. Es decir que, a poco más de un año del 3 de junio de 2015, el abanico de demandas se había ampliado incorporando reclamos históricos del movimiento feminista y también demandas referidas a la situación de precarización y pauperización de las y los trabajadores (incluso, una fuerte crítica a la CGT por su alianza con el gobierno de Mauricio Macri).¹⁰

repudio, asambleas y una convocatoria de paro en todo el país para el 5 de diciembre de ese año. Los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Pablo Viñas, titulares del Tribunal Oral de Mar del Plata, argumentaron que Lucía murió por intoxicación. El fallo fue apelado ante la Cámara provincial. También en 2018, en el Estado Español, se conoció la sentencia sobre el caso conocido como “La manada”, una violación a una joven durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, los cinco acusados salieron en libertad. Decenas de miles de personas tomaron las calles de distintas ciudades del Estado Español en protesta.

⁹ Entre otras organizaciones, participaron (además del colectivo *Ni una menos*): el movimiento Evita, Pan y Rosas, trabajadoras liberadas del penal de Ezeiza, Mala Junta, Frente Darío Santillán, Sipleba, Mumalá, Ammar, CTA Autónoma, ATE, Izquierda Unida, CTEP, UTE (Kremer Hernández, 2018).

¹⁰ Como hemos señalado en otro artículo, tres elementos de diversa envergadura están relacionados con este giro a nivel nacional: a) el cambio de gobierno y la instauración de una clara política de ajuste que profundizó, en forma acelerada, los rasgos de crisis que venían del último período del gobierno de Cristina Fernández; b) el hecho de que, el carácter masivo del movimiento de mujeres emergido en 2015 había colocado en el debate público una serie de tópicos propios de una agenda progresista (como la sexualidad, las disidencias, el aborto, la mercantilización de los cuerpos feminizados, la desvalorización del trabajo reproductivo, etc) que se enfrentaban ahora a un gobierno de derecha que, si bien presentaba rasgos de una “derecha moderna”, fortalecía





He aquí un elemento importante que tiene repercusión en la configuración del primer Paro Internacional de Mujeres al año siguiente: si en el 2015 la clave fue la instalación masiva de las mujeres como víctimas de violencia machista, aquí la clave comenzará a girar hacia una valoración de las mujeres como sujetos que trabajan y que producen, valoración a partir de la cual la figura del paro cobra sentido y aparecen consignas que se transformarán en emblemáticas, como “si nuestros cuerpos no valen, produzcan sin nosotras”. Esta consigna enlaza los dos tópicos que recorren la Nueva Ola Feminista a nivel internacional: la lucha contra la violencia machista y su materialización en la transformación de los cuerpos de las mujeres en cuerpos que no valen (materialización cuyo extremo es el femicidio, pero que incluye la violación y el acoso sistemático y la negación del derecho de los cuerpos gestantes a decidir sobre la gestación) y la construcción de las mujeres como “sujeto contencioso”, en últimas, como posible “sujeto peligroso”. Esta construcción de las mujeres como “sujeto que amenaza” se sostiene en las mujeres como “sujetos que producen”, es decir, como trabajadoras. Es en ese punto, y no en otro, en el que se basa la amenaza (de dejar de trabajar) y, con ella, la transformación de las mujeres de víctimas y peligrosas. Por supuesto, este desplazamiento de víctimas a trabajadoras que amenazan con parar trae consigo una serie de elementos nuevos entre los que es central la pregunta por la efectivización de la amenaza, es decir, la performatividad del paro (volveremos sobre esto en el segundo apartado).

Aunque el paro fue más bien simbólico, con la adhesión activa de algunos sectores de la CTA (UTE, CTERA, SUTEBA, ATE), y la realización de actividades en aquellos lugares de trabajo con Comisiones Internas combativas que se pusieron al frente de la organización (independientemente del posicionamiento de sus direcciones sindicales), lo que fue re-

las instituciones clásicas conservadoras como la Iglesia Católica y las posiciones anti derechos de las mal llamadas minorías (allí comienza un proceso de polarización que hará eclosión en 2018 con la aparición de un sector fuertemente militante contra el derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito); c) la actuación de las direcciones sindicales, particularmente la CGT, que tuvo una expresa política de pasividad ante la implementación del ajuste. Véase Varela, 2020.

almente masivo fue la movilización vespertina. El 19 de octubre centenas de miles de manifestantes salen a la calle (bajo una lluvia persistente) en *el primer paro nacional de mujeres de la historia del país*. Las manifestaciones se llevaron a cabo en varias ciudades y solamente en Buenos Aires convocaron a un total de 300.000 personas (medio millón aproximadamente a nivel nacional). Hubo muestras de solidaridad en varios países como Bolivia, Chile, México, Uruguay, Honduras, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Estado Español y Francia.

Apenas unos días después, el 23 de octubre de 2016 se realiza un segundo paro de mujeres en Polonia con eje en la violencia machista y con el objetivo de combatir la invisibilización, por parte del Estado, de las demandas de las mujeres. Luego de este segundo paro, los colectivos feministas polacos al frente de la organización comenzaron a tomar contacto con colectivos de otros países que les habían expresado su solidaridad con la idea de coordinar alguna acción a nivel internacional. Allí comienza a gestarse la red (conectada a través de internet) que dará origen al primer Paro Internacional de Mujeres en marzo de 2017. La primera consigna levantada por las polacas es “Solidaridad es nuestra arma”. A fines de octubre se contactan con el colectivo Ni una menos de Argentina y se define la realización de una acción internacional para el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. La acción implicó la realización de asambleas feministas bajo el *hashtag* #Nosotrasnosorganizamos en 22 países de América Latina, Europa y también ciudades norteamericanas como Nueva York y Miami.

Al día siguiente de la primera acción internacional, el 26 de noviembre de 2016, en Italia se llevó a cabo la marcha “Non una di meno”,¹¹ movilizando una multitud de 200.000 personas en Roma. En la convocatoria podía leerse una enumeración de las violencias sufridas por las mujeres entre las que estaban (además del femicidio como expresión más ex-

¹¹ La marcha fue convocada por tres organizaciones feministas: la red IoDecido, Donne in Rete contro la violenza (D.i.Re – Mujeres en red contra la violencia) y la UnionedelleDonne in Italia (UDI – Unión de las mujeres en Italia). <https://nonunadimeno.wordpress.com/2016/12/14/nonunadimeno-la-fuerza-del-movimiento-feminista-internacional/>





trema) la violencia generada por las medidas de austeridad y su reducción de la asistencia en salud, educación y otras políticas sociales; la violencia de la precarización laboral sufrida por trabajadoras y trabajadores (como la Jobs act aprobada el año anterior por el gobierno de Renzi); y la violencia de la denegación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en hospitales públicos debido a la “objeción de conciencia”. Luego de la marcha, el 27 de noviembre, se conformó la asamblea feminista “Non una de meno” que agrupa organizaciones, colectivos, redes y activistas de distintos lugares del país. En la primera asamblea feminista italiana, que reunió más de 1000 personas, se decidió, entre otras cosas, la participación en el PIM 2017.

El sábado 21 de enero de 2017, al día siguiente de la asunción de la presidencia de Estados Unidos por parte de Donald Trump, se realizó la Women’s March (Marcha de Mujeres) en todo el país (con réplicas en Londres, París y Roma): medio millón de personas marcharon en Washington DC. La página de facebook de la “Women’s March On Washington” publicó un comunicado en el que afirma que la movilización quiere dar un “mensaje a nuestro nuevo gobierno en su primer día de mandato para que recuerden que los derechos de las mujeres son derechos humanos (...) Estamos juntas, reconociendo que defender a los más marginados entre nosotras es defendernos a todas”. Esta marcha fue particularmente importante para el PIM 2017 porque sirvió como vidriera mundial para anunciar la realización del paro con apoyos de personalidades como la histórica referente del feminismo negro, Angela Davis, quien suscribió (junto con decenas de activistas y académicas) la carta titulada “Mujeres de América” en la que convocan a “construir una huelga general contra la violencia machista y en defensa de los derechos reproductivos” mientras afirmaban que el objetivo era “movilizar a las mujeres, incluyendo transgénero” y poner en pie “un nuevo movimiento feminista internacional ampliado: antirracista, antiimperialista, antineoliberal y anti-heteronormativo.”¹²

¹² Al respecto ver <https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/women-strike-trump-resistance-power>).

Para febrero de 2017, la red de países que formaban parte de la organización del PI Mera de alrededor de 35 incluyendo Polonia, Argentina, Alemania, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, la República Checa, Ecuador, España, Inglaterra, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Irlanda del Norte, la República de Irlanda, Israel, Italia, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Rusia, Salvador, Escocia, Suecia, Togo, Turquía, Uruguay y Estados Unidos. Al momento de la realización del paro el 8 de marzo los países que se sumaron a las manifestaciones eran alrededor de 55 incluyendo Irán, Colombia, China, Australia, Bosnia y Herzegovina, Hungría, Noruega, Pakistán, etc. En América Latina, por primera vez en la historia, todos los países participaron de la acción (con excepción de Cuba).

En Argentina, la organización del PIM implicó la realización de asambleas en alrededor de 60 localidades del país, la discusión entre distintos colectivos feministas (con la participación de dirigentes y activistas tanto del campo sindical como de las organizaciones territoriales de trabajadores) y la difusión por medios tradicionales y redes sociales de los materiales elaborados. Los documentos consensuados convocaban a un paro de todas las actividades laborales remuneradas y no remuneradas contra la violencia machista, por el aborto legal seguro y gratuito, y contra los ataques del gobierno de Mauricio Macri. Las consignas que se multiplicaron fueron “Si nosotras paramos, paramos el mundo”, “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, “Nosotras movemos al mundo”, entre otras. Al igual que había sucedido en el Primer Paro Nacional de Mujeres, el paro articulaba demandas contra la violencia machista y por los derechos reproductivos de las mujeres, con demandas que incluían al conjunto de la clase trabajadora contra el ajuste y la precarización.

La coyuntura nacional en la que se desarrolla el PIM 2017 presenta una serie de particularidades que es importante resaltar. La segunda semana de marzo de 2017, la agenda política se vio sacudida con un *rally* de movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y otros centros urbanos del país: la del lunes 6 que reunió a decenas de miles de docen-





tes que ese día comenzaban un paro de 48 hs.; la del martes 7, convocada por la CGT, resultó superar las expectativas pero, sobre todo, superó la propia política de los organizadores a quienes les corearon “poné la fecha, la puta que te parió”, como exigencia de fijar un día para la realización de un paro general que el triunvirato cegetista eludía establecer desde hacía tiempo; y la del miércoles 8 de marzo, inscripta en el primer Paro Internacional de las Mujeres. El denominador común de esas marchas, además de su masividad, fue el malestar generalizado que expresaron y la demanda, exigida públicamente en las tres movilizaciones, de “paro, paro, paro general”. Esto resulta importante, porque este contexto transformó el Día Internacional de las Mujeres de 2017 en parte de las movilizaciones y protestas en repudio del plan de ajuste del gobierno nacional (que, para ese momento, ya había profundizado el aumento del desempleo, la caída del salario real y el aumento de los niveles de pobreza), y terminó de situar al movimiento de mujeres dentro del conjunto de movimientos sociales que exigían a las organizaciones obreras que estuvieran a la altura de las circunstancias. La consigna que había sido coreada unos meses antes “mientras la CGT toma el té con el gobierno, nosotras tomamos las calles” adquiría aquí nueva vigencia. En ese sentido, la marcha del 8M de 2017 en Argentina tuvo una doble inscripción que redobló las intersecciones entre movimiento de mujeres y movimiento obrero: a nivel nacional, en el rally de marchas consecutivas que iniciaron el año lectivo y cuyo eje central era repudiar el ajuste macrista y exigir acción a las centrales obreras; a nivel internacional, en el Primer Paro Internacional de Mujeres.

La adhesión al PIM de los gremios estatales (encuadrados en las CTA) fue amplia y, en el sector privado (casi completamente perteneciente a la CGT), algunos sindicatos promovieron la liberación de tareas por la tarde (para que las trabajadoras pudieran participar de la movilización) y, en aquellos lugares de trabajo con organizaciones de base militantes, se realizaron acciones (más allá de la posición de las direcciones) con el fin de volver efectivo el paro desde la mañana (Varela, 2020).

El 8M de 2017 fue cubierto por los principales medios a nivel internacional desde Estados Unidos hasta Turquía, desde Tailandia hasta Polonia, desde Australia hasta Chile. Hubo movilizaciones multitudinarias en decenas de ciudades del mundo, en las que podía verse un abanico de demandas que imprimieron un cariz local a la acción internacional: los tres núcleos de reclamos que recorrieron el camino hasta llegar al PIM de 2017 (el fin de los femicidios y la violencia machista, los derechos reproductivos y las demandas por el reconocimiento del trabajo –asalariado y no asalariado- y el fin del ajuste) adoptaron distinto peso relativo según el país, e incluso, la ciudad. El impacto fue tal que el segundo Paro Internacional de Mujeres, en 2018, fue aún más importante logrando la adhesión de alrededor de 170 países y aumentando la masividad en buena parte de ellos. El PIM se reiteró en 2019 y en 2020, aunque su preparación se vio interceptada por la expansión de la COVID-19 en buena parte del mundo. Cuatro años después de su aparición en 2017, todo hace pensar que el PIM ha llegado para dejar huella en el movimiento feminista.

¿Por qué el paro articula la nueva ola feminista a nivel mundial?

El enorme impacto del #8M a nivel internacional y el hecho de que se haya vuelto una medida expansiva obliga a preguntarse por qué es el paro (y no otra medida o forma de articulación) lo que se constituye como instancia de coordinación a nivel global. He aquí tres factores que consideramos centrales. El primero es el contexto de crisis del capitalismo neoliberal que comienza en 2008 y continúa hasta la actualidad a nivel mundial. Pero no en un sentido abstracto o general sino en lo referido a rasgos específicos de dicha crisis que afectan directamente a las mujeres de la clase trabajadora y los sectores populares: planes de ajuste con recorte de servicios públicos relacionados con la reproducción social como salud, educación, vivienda, etc.; aumento de la precarización laboral y los trabajos “basura” con la caída del salario real que eso implica y su afec-





tación en las condiciones de vida; incremento de la informalidad, el desempleo y la pobreza; y surgimiento de los llamados “populismos de derecha” y gobiernos conservadores que ganan popularidad en el contexto de la crisis y que atentan contra derechos conquistados por las mujeres y las personas LGBTQ (entre otros).

La Nueva Ola Feminista se inscribe en el marco del surgimiento de una serie de movimientos sociales que protestan (con distintas características y ritmos según el país) contra los “efectos” de la crisis y contra las medidas gubernamentales adoptadas para salir de ella. Como señala Cinzia Arruzza, “la explosión del movimiento feminista fue precedida por otras movilizaciones, como el ciclo de luchas de 2011-2013 que tuvieron visibilidad internacional (en particular Occupy, los Indignados y Plaza Taksim), con el cual presenta elementos de continuidad” (Arruzza, 2018).

Estos movimientos, que Göran Therborn (2014) llamó “nuevas masas” (new masses), y dentro de los cuales puede incluirse también a las protestas del *Passe Livre* en Brasil, el #Yosoy132 en México, el movimiento estudiantil en Chile, las movilizaciones de la *Geração à Rasca* en Portugal y el *Black Lives Matter* en Estados Unidos, presentan dos rasgos que se expresan también en la Nueva Ola Feminista: una gran heterogeneidad de demandas que combinan reclamos de redistribución y de reconocimiento (que van desde la defensa de la vida hasta el fin de la precarización laboral, pasando por la lucha contra el aumento de tarifas) y una fuerte impronta juvenil. Estos movimientos, que en algunos casos han sido analizados en una oposición forzada con las protestas más “clásicas” de los trabajadores, son contemporáneos (e incluso a veces se articulan) con procesos huelguísticos o luchas laborales configurando lo que varios analizan como un ascenso de la conflictividad a nivel internacional. Como señala Aaron Benanav

después de los más de diez años transcurridos desde la crisis de 2008, el inmovilismo político parece estar agrietándose. Las luchas sociales se han desarrollado a una escala que no se había visto durante décadas. Ha habido oleadas de huelgas y movimientos sociales a lo largo de los cinco continentes, desde China al Norte de África, desde Argentina a Grecia y desde In-

donesia a Estados Unidos. Masas de gente están uniéndose de nuevo en paros laborales, ocupaciones, bloqueos, disturbios y manifestaciones, protestando contra los síntomas patológicos de un largo declive de la demanda de mano de obra, contra la desigualdad, la inseguridad en el empleo, la corrupción gubernamental y las medidas de austeridad, así como contra las subidas de los precios de los alimentos, la energía y el transporte. Los manifestantes han salido *en masse* en respuesta a asesinatos policiales que desataron la ira de aquellos que ya no aguantaban su falta de reconocimiento social. Sin duda estos movimientos explosivos han carecido hasta ahora de la perseverancia necesaria para obligar a unos gobiernos recalcitrantes a emprender la retirada y han sufrido retrocesos y derrotas. Pero, no obstante, han ampliado y radicalizado los horizontes políticos de una nueva generación de militantes. (Benanav, 2020: 155-156).

Esta inscripción de la Nueva Ola Feminista en el conjunto de movimientos sociales surgidos al calor de la crisis capitalista le otorga uno de sus rasgos característicos: su tendencia a exceder su carácter sectorial y transformarse, rápidamente, en un fenómeno político cuyos objetivos se entrelazan con los de la pléyade de fenómenos de protesta contra el ajuste, contra las políticas que atacan derechos conquistados y contra la derecha. Allí reside, también, una de las claves de su masividad: con protagonismo indiscutido de las mujeres (y particularmente de “las pibas”), convoca sin embargo a otros sectores *de la población que se ven interpelados por las demandas y los reclamos que el movimiento levanta, los cuales los incluyen como destinatarios*. Las demandas históricas del movimiento feminista (como el derecho al aborto) se intercalan con demandas que no son visualizadas como “exclusivas de mujeres” como las que refieren al fin de la precarización laboral, la denuncia del endeudamiento y su impacto en las familias trabajadoras, o la denominada “crisis de los cuidados”. Estas demandas afectan al conjunto de las y los trabajadores y sectores pauperizados de la sociedad, aunque colocan en el centro de la escena a las mujeres de esa clase trabajadora.

Pero esta tendencia a la universalización se explica, también, por la





ligazón de la Nueva Ola Feminista con los movimientos de DDHH, particularmente el tipo de movimientos que se levantan contra la naturalización de que hay vidas que no importan o vidas descartables. La denuncia de los femicidios como práctica sistemática ejercida contra las mujeres y los cuerpos feminizados es una pariente cercana de la denuncia del Black Lives Matter respecto a la brutalidad policial y la “política del descarte” a la que se ve sometida la comunidad afroamericana en Estados Unidos (y más allá de sus fronteras también). #Niunamenos es una consigna que, si bien refiere a un sector específico de la población (las mujeres y los cuerpos feminizados), se erige como denuncia del carácter sistémico de las vidas que no importan, como defensa del “valor de la vida” y como exigencia, al Estado, de que haga respetar y garantice esas vidas. Es esa ubicación política la que refuerza los rasgos de universalización del movimiento y refuerza, también, su tendencia a masivizarse. Por último, y en estrecha relación con lo anterior, esta inscripción de la Nueva Ola Feminista en los movimientos de resistencia a los efectos de la crisis y de defensa de las vidas que sí importan, la coloca en contradicción con la perspectiva de un feminismo liberal o feminismo corporativo (hegemónico en muchos de los países centrales) del tipo del que levantan Hillary Clinton o Sheryl Sandberg¹³ en Estados Unidos.

La contradicción reside en que el feminismo liberal no sólo niega la relación intrínseca que el capitalismo establece entre opresión de género y explotación de clase, sino que propone un feminismo “para ganadoras” en un mundo que desde antes de la crisis, pero más aún desde la crisis, está plagado de “perdedoras”. Como señalan Arruzza, Bhattacharya y Fraser (2019):

¹³ CEO de Facebook, puesto número doce en la lista de las mujeres más ricas de EE. UU. en 2019 y dentro de las 100 mujeres más poderosas del mundo en el ranking de la revista *Forbes* (junto con Angela Merkel, Theresa May, Christine Lagarde del FMI, entre otras) es autora del best seller *Lean in: Women, Work, and the Will to lead* (2013), traducido al español como *Vayamos adelante. Las mujeres, el trabajo y la voluntad de liderar*.

Sandberg y las de su calaña ven al feminismo como una mu-
cama del capitalismo. Ellas quieren un mundo en el que la
tarea de liderar la explotación laboral y la opresión social se re-
parta de forma equitativa, dentro de la clase dirigente, entre
hombres y mujeres. Se trata de una notable visión de una *igual-
dad de oportunidades en la dominación*: una que, en nombre
del feminismo, les pide a las personas que se muestren agra-
decidas de que sea una mujer, y no un hombre, quien aplasta
sus sindicatos, manda un dron a matar a sus padres, o encierra
a sus hijos en una jaula en la frontera (p. 13).

El contexto de crisis capitalista de la Nueva Ola Feminista y su ins-
cripción en el conjunto de movimientos sociales que salen a la lucha con-
tra sus consecuencias, implica (en los hechos y muchas veces en los
discursos también) un enfrentamiento abierto con el feminismo liberal,
cuya exaltación del capitalismo y de la frontera entre género y clase, se
vuelve contradictoria con la experiencia de articulación entre opresión y
explotación.

El *segundo factor* que resulta importante a la hora de explicar la cen-
tralidad que asume el PIM en el nuevo movimiento feminista está relacio-
nado con lo que Nancy Fraser denomina “crisis de la reproducción social”.
Preferimos hablar de “crisis de reproducción social” y no de “crisis de los
cuidados” (término que se ha expandido más masivamente en los medios
y también en la academia) porque la diferencia entre ambos es impor-
tante. La crisis de la reproducción social es *un aspecto específico de la
crisis capitalista* que emana de la contradicción, inherente al capitalismo,
entre el imperativo de la acumulación y las necesidades de la reproduc-
ción de fuerza de trabajo. Fraser señala que en realidad prefiere

hablar de una crisis de reproducción social, en lugar de una
crisis del cuidado. Creo que podemos hablar de una crisis del
cuidado, siempre que desempaquemos y expliquemos lo que
queremos decir con eso, y siempre que no nos limitemos a
ideas sentimentales y naturalizadas de lo que es una familia.
De hecho, una gran parte de la reproducción social, como la
provisión de educación, la organización de la atención de la





salud, y el suministro de agua potable (entre otras cosas), se sitúa en instituciones públicas y en la sociedad civil, fuera de los límites del hogar privado. Como yo lo entiendo, el término reproducción social es más amplio que el de cuidado, ya que incluye no solo el trabajo afectivo y emocional, como criar niños y cuidar a los ancianos, sino también un trabajo más material como bañar, cambiar pañales, limpiar una casa y, en algunos casos, acarrear agua varias millas desde un río hasta el hogar. Todas estas son formas de asegurar que un hogar, un pueblo, o una familia, puedan desarrollar su vida” (González, 2018: 224).

La noción de reproducción social, más amplia que la de cuidados, coloca en el centro del debate toda la serie de tareas (tanto asalariadas como no remuneradas) que son llevadas a cabo mayoritariamente por mujeres para la reproducción de las personas, particularmente de la fuerza de trabajo.¹⁴ Pero, además, como hemos señalado en otro artículo, coloca en el centro del debate el carácter necesario de ese trabajo para el funcionamiento del capitalismo como un todo y, por ende, la relación indisociable entre el ámbito de la reproducción social y el de la producción de mercancías, en tanto ámbitos diferenciados pero indisociables (Varela, 2020b) ¿Qué significa que estamos ante una crisis de reproducción social? Que la reproducción social se ve amenazada por *un triple proceso*: por una parte, por las políticas de ajuste que atacan las instituciones públicas encargadas de dicho trabajo como los hospitales, escuelas, jardines maternos, geriátricos y otras instituciones de formación y cuidado. La política de privatización y transformación de esos ámbitos en nuevos ni-

¹⁴ Si bien pueden encontrarse acepciones más amplias de “reproducción social”, como aquellas que refieren a la reproducción del capitalismo como un todo, tomamos aquí una acepción estrecha del término, tal como lo define Lise Vogel (2013) y es retomada por autoras como Bhattacharya, Arruzza y Ferguson, véase Arruzza y Bhattacharya, 2020 y Ferguson, 2020. Nos referimos específicamente “al proceso de creación y reproducción de la fuerza de trabajo, sin el cual la reproducción de la sociedad capitalista como un todo se vuelve imposible. Esta noción de Reproducción Social en términos de *reproducción generacional* de la fuerza de trabajo envuelve dos aspectos. El primero, la reproducción biológica dependiente de las mujeres y los cuerpos gestantes a través del parto. El segundo, toda la serie de trabajos necesarios para que esa fuerza de trabajo llegue al “punto de la producción”, los cuales van desde las llamadas tareas del cuidado, el trabajo doméstico (cocinar, limpiar, hacer las compras, etc.) y también el trabajo que se lleva a cabo por fuera del ámbito doméstico (sistema de educación, de salud, de cuidado de adultos mayores, etc.)” (Varela, 2019: 9).

chos de mercantilización y producción de ganancias han modificado la reproducción de la fuerza de trabajo acotando las posibilidades de las familias trabajadoras y haciendo que lo que antes estaba garantizado por dichas instituciones, sea ahora cubierto o bien a través del mercado (ya sea en servicios personales directos como niñeras, cuidadoras, acompañantes terapéuticas, apoyo escolar, etc. o a través de empresas capitalistas dedicadas a la prestación de dichos servicios); o bien a través del trabajo no pago de miembros de la familia trabajadora o de sus redes (vecinales, comunitarias, de “familia ampliada”) lo que implica, en la gran mayoría de los casos, una sobrecarga extra de trabajo para las mujeres de las familias obreras. Por otra parte, la precarización del trabajo (que afecta especialmente a las mujeres) y su consecuente caída del salario real impiden a la mayoría de las trabajadoras la posibilidad de adquirir estos servicios en el mercado, al tiempo que empujan al alargamiento de la jornada de trabajo o a la búsqueda de múltiples empleos y changas, profundizando la dificultad para llevar a cabo el trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar. En muchas ocasiones estos empleos y changas son, a su vez, trabajo doméstico o de cuidados realizados para otros hogares, sector de la actividad fuertemente feminizado, informalizado, racializado y de composición migrante. Por último, la crisis de reproducción social también involucra el ajuste y privatización de los servicios públicos como el agua, la luz, el transporte, la vivienda, etc. que aumentan el costo de reproducción de las familias trabajadoras, costo que se cubre con más horas de trabajo asalariado, con más horas de trabajo no remunerado o con toma de deuda (como demuestra el aumento del sistema de créditos usurarios en los sectores populares).

Como es obvio, esta crisis de reproducción social si bien afecta al conjunto de la clase trabajadora, incide particularmente en la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras, colocando la figura “del trabajo que hacemos las mujeres” en el centro del debate. He allí otra de las claves para entender el PIM como herramienta de articulación de la Nueva Ola Feminista: “si paramos nosotras, se para el mundo” es una gran síntesis





de la importancia que asume “el trabajo que hacemos las mujeres” en este nuevo movimiento feminista y marca la centralidad de este elemento de clase en el movimiento de mujeres, al mismo tiempo que la centralidad de las mujeres en la clase que mueve el mundo.

Esto abre la puerta al tercer factor que queremos señalar como explicación del Paro Internacional de Mujeres en tanto articulador del movimiento: el carácter transversal del trabajo de las mujeres que las coloca en una ubicación anfibia entre producción y reproducción. ¿Quién para en un Paro de Mujeres? En algunas ocasiones, el Paro de Mujeres ha sido presentado como una suerte de “paro de las cocinas” cuyo sujeto serían “las amas de casa”. Sin embargo, esa interpretación es sumamente reduccionista en la medida en que desconoce el lugar central de las mujeres en ciertos nichos del mercado de trabajo asalariado pero, además, evita una discusión central que abre el Paro de Mujeres: la que refiere a la relación entre el movimiento de mujeres y el movimiento obrero: ¿Qué papel juegan (y deben jugar) las organizaciones obreras en un Paro de Mujeres? ¿Cómo se articulan las demandas del PIM con la agenda fuertemente corporativa y acotada de los sindicatos?

Quisiéramos diferenciar tres sectores de mujeres que paran en un Paro de Mujeres porque eso nos permite entenderla centralidad de las mujeres en lo que Ricardo Antunes (2005) llamó la clase-que-vive-del-trabajo, pero también la centralidad de las organizaciones obreras para que la amenaza de “si paramos nosotras, se para el mundo” se vuelva realidad. El *primer sector* es el constituido por aquellos nichos del mercado de trabajo fuertemente feminizados y, dentro de ellos, particularmente los relacionados con la reproducción social. Como señala Antunes, la feminización del mercado de trabajo es uno de los rasgos salientes de la nueva morfología obrera configurada en el neoliberalismo a partir de cambios organizativos, tecnológicos y de gestión, los cuales implicaron derrotas específicas en el terreno de la lucha de clases. *Dicha feminización no ha sido aleatoria sino que ha estado marcada por su relación con el ámbito de la reproducción social* en dos aspectos particulares: en lo que hace a

la jornada de trabajo (la jornada de trabajo asalariada de las mujeres es más corta que la de los varones) y lo que hace al tipo de trabajo ligado, fuertemente (aunque no exclusivamente), a los saberes y las cualificaciones adquiridas por las mujeres en el ámbito del hogar a través de la realización de tareas domésticas y de cuidados. Como señalaba Pietro Basso ya a fines de la década del noventa, "se dice que las mujeres eligen trabajos a tiempo parcial.

Este lugar común de la literatura socioeconómica comprometida con la exaltación del trabajo a tiempo parcial como genuina cura social entra completamente en cuestionamiento por una lectura crítica de las cifras oficiales. Vamos a suponer, sin embargo, que muchas mujeres realmente "eligen" un trabajo a tiempo parcial. No es difícil de entender que tal "preferencia" por un trabajo de "segunda clase" responde a la falta de alternativas disponibles para ellas y al hecho de que la reproducción de la fuerza de trabajo, una necesidad social básica, es asignada al género femenino como una tarea "privada" (y más aún, dada la crisis cada vez más profunda del estado de bienestar). Dadas estas condiciones, estas mujeres "eligen" lo que no pueden no elegir y terminan teniendo que hacer frente a un doble trabajo que, tomado integralmente, ciertamente no representa una reducción de tiempo de trabajo de las mujeres en particular y del trabajo asalariado en general. El aumento de la feminización de la fuerza de trabajo en las sociedades del capitalismo tardío proviene, del lado del capital, de la misma necesidad que alimentó el uso generalizado de la mano de obra femenina en el protocapitalismo o durante los dos las guerras mundiales: la necesidad de comprimir el valor integral de la fuerza de trabajo." (1998: 49-50, traducción propia).

La crisis de 2008 no ha hecho más que profundizar esta situación generando lo que denominamos "crisis de reproducción social", pero generando también (como efecto no deseado) una fuerte concentración de mujeres asalariadas en determinados sectores como los de la salud y la educación, algunos de los cuales están también, fuertemente organizados y/o sindicalizados. La combinación entre el "carácter esencial" de estos





trabajos, su importancia al interior de las grandes ciudades y la gran concentración obrera que significan ha hecho que Kim Moody (2017), en su lectura de la reconfiguración de la clase obrera norteamericana, coloque al sector servicios de la reproducción social como parte del “corazón” de la clase obrera norteamericana destacando el alto poder de fuego de que disponen (siempre que haya voluntad de disparar, claro). De hecho, la oleada de huelgas docentes conocida como *Teachers’ Spring* de 2018 es una muestra de este poder de fuego y de las particularidades de este sector asalariado de la reproducción social protagonizado indiscutiblemente por mujeres. Este sector tiene la posibilidad de tener un papel protagónico en un Paro de Mujeres, no sólo por su importancia relativa en el conjunto de asalariados sino por el doble carácter que tienen estas instituciones: como lugar de trabajo asalariado y como espacio fundamental de la reproducción social, lo que le otorga una relación con la comunidad que no tienen otros espacios laborales. Estas instituciones de enlace “entre la fábrica y el barrio” pueden tener un rol clave en la organización de un Paro Internacional de Mujeres que involucre el trabajo asalariado y el no asalariado.

El *segundo sector* que queremos identificar está compuesto por las asalariadas que pertenecen a ramas que, si bien no están particularmente feminizadas, no pueden funcionar sin las trabajadoras mujeres haciendo que un paro de una parte del colectivo obrero pueda transformarse en una paralización total. Pongamos como ejemplo el sector fabril y déjenme traer a colación con el caso de una huelga por acoso sexual que hemos analizado en otra oportunidad y que, comenzada por las mujeres, se extendió a toda la planta logrando la paralización total de las actividades. Me refiero a la huelga en la fábrica Kraft Foods de Pacheco (Buenos Aires), ocurrida en la noche del 11 de septiembre de 2011. El caso es pertinente¹⁵ porque permite observar que las claves de la huelga y de su efectividad para lograr sus demandas (el apartamiento de su cargo del

¹⁵ Para un análisis véase Varela 2020b y Cambiasso y Chavez, 2017.

supervisor que había llevado a cabo el acoso reiterado a una operaria) deben buscarse (además de en la voluntad de lucha de las operarias) en la capacidad de la organización fabril de base para articular demandas de género y demandas de clase, incluso contra la política de la dirección del sindicato de la alimentación (STIA).

Esa articulación, a partir de una asamblea obrera convocada en el comedor de la planta fabril para explicar la importancia que tenía para el conjunto del colectivo obrero el hecho de que una compañera mujer fuera acosada por un supervisor es la que logra que una medida que comenzó en el sector de empaclado (sector feminizado de la planta) se traslade al sector de producción, haciendo que, finalmente, la planta quede completamente paralizada volviéndose una amenaza para la patronal (y un problema para el sindicato). El papel de la organización obrera para incorporar las demandas del movimiento de mujeres no como demandas “externas” con las que ser solidarios sino como demandas propias del movimiento obrero (como lo es claramente el fin de acoso sexual, gran mecanismo de disciplinamiento de las trabajadoras mujeres y de los cuerpos feminizados) resulta fundamental, particularmente en aquellos sectores de trabajadores en los que las mujeres no son mayoría, pero que detentan posiciones estratégicas en la producción o el transporte.

Por último, el *tercer sector* que queremos identificar es el de las mujeres que realizan tareas de reproducción social no remunerada en el hogar o en sus comunidades, es decir, el conjunto de las mujeres trabajadoras. El paro de este sector es el que aparece con mayor fuerza simbólica y el más contradictorio. Su fuerza simbólica reside, justamente, en que celebrar un paro de trabajo reproductivo no pago es, en sí mismo, visibilizar ese trabajo invisible, esa morada oculta del capital. Y esa visibilización ha sido parte de las decenas de sentidos dislocados por la Nueva Ola Feminista, de los que se debate en las escuelas, fábricas, lugares de trabajo, hospitales, universidades y manifestaciones callejeras, acuñando (o retomando) consignas como “eso que llaman amor es trabajo no pago”.

La politización del trabajo no remunerado y su transformación en de-





bate político es uno de los saldos indudables del movimiento. Su carácter contradictorio reside, justamente, en que la propia naturaleza de dicho trabajo (del que depende la reproducción de la fuerza de trabajo) hace que “no pueda dejar de llevarse a cabo”¹⁶ abriendo la pregunta: ¿quién reemplaza a las mujeres cuando éstas están de paro en los hogares y los barrios? Si esta pregunta intenta resolverse en el ámbito privado, a través de la tercerización de esas tareas en otras mujeres o incluso de la realización de esas tareas por parte de los varones como solución temporaria (y extraordinaria) para poder ir al paro, el carácter revulsivo del Paro de Mujeres se evapora quitándole buena parte de la performatividad a la amenaza y, por ende, buena parte de la peligrosidad al sujeto que la enuncia.

Si esta pregunta intenta resolverse en el ámbito público y de la movilización, obliga a un debate que dispara en el corazón del capitalismo: el de las condiciones concretas en que se reproduce la vida en este sistema y su subordinación a la lógica de acumulación del capital. Esto, como es obvio, abre la puerta a la disputa política sobre las formas de resolver la contradicción sistémica entre búsqueda de ganancia y reproducción de la vida.

Pero dicho debate involucra, ya no sólo a las mujeres y al movimiento feminista, sino al conjunto de las y los trabajadores y sus múltiples organizaciones. De allí que el Paro Internacional de Mujeres como instancia de articulación y de lucha de la Nueva Ola Feminista a nivel internacional abra la posibilidad (nunca la certeza) de un feminismo de clase y anticapitalista que, convocando a estos tres sectores de mujeres trabajadoras, articule las demandas de la producción y la reproducción.

¹⁶ Esta característica es la que hace que, cuando este trabajo está asalariado, sea denominado “servicio esencial”, justamente, para quedar por fuera del derecho de huelga.

Palabras finales

En este artículo nos propusimos un análisis sobre el Paro Internacional de Mujeres como tradición de lucha del movimiento de mujeres en la actualidad, a través de la recuperación del proceso de gestación del #8M 2017 y de la reflexión sobre su relación con las características específicas de la Nueva Ola Feminista. Señalaremos aquí las principales conclusiones a modo de cierre. En primer lugar, que si bien las huelgas de mujeres son parte de la historia del feminismo y, particularmente, de su inextricable relación con el movimiento obrero desde el siglo XIX en adelante, el PIM tiene dos características propias que lo distinguen de lo previo y lo instalan como tradición específica del feminismo contemporáneo.

Me refiero a su carácter global, involucrando colectivos, activistas, organizaciones, movimientos y mujeres de decenas de países de los 5 continentes; y su carácter de articulador de tres tipos de demandas que se reiteran (de modo desigual) en los movimientos feministas a nivel local: las demandas contra la violencia machista (cuya expresión brutal son los femicidios); las demandas por los derechos reproductivos (con el derecho al aborto en el centro de la escena) y las demandas por el reconocimiento (social, político y económico) del “trabajo que hacemos las mujeres” en las sociedades contemporáneas (trabajo asalariado y no remunerado).

El paro opera como articulador de estas demandas en la medida en que implica un desplazamiento desde las mujeres como víctimas (de todo tipo de violencias) a las mujeres como sujetos contenciosos y con capacidad de amenaza. Ese desplazamiento está basado en el reconocimiento de las mujeres como sujetos que trabajan, que producen, allí reside su capacidad de amenaza y su peligrosidad.

En segundo lugar, que este carácter global y basado en el reconocimiento de las mujeres como sujetos que trabajan y producen está directamente relacionado con el contexto de surgimiento de la Nueva Ola Feminista, la crisis capitalista de 2008 en adelante, particularmente con





tres de sus rasgos. El surgimiento de movimientos sociales que vienen saliendo a luchar (desde Chile a Turquía, desde el Estado Español hasta Brasil) contra los efectos de la crisis y las medidas gubernamentales para hacerle frente: ajustes fiscales, precarización laboral y de la vida, y cercenamiento de derechos conquistados de la mano de gobiernos conservadores.

El actual movimiento de mujeres a nivel internacional se inscribe dentro de la pléyade de estos movimientos sociales y comparte con ellos rasgos y demandas. Esto hace que, lejos de reforzarse sus elementos sectoriales o particulares, tenga una tendencia a la politización y universalización interpelando amplios sectores sociales. Pero además, la crisis capitalista ha puesto sobre la mesa una “crisis de la reproducción social” que tiene a las mujeres trabajadoras como sus principales afectadas. Crisis que se juega en un triple terreno: el del recorte y ataque a las instituciones públicas encargadas del trabajo de reproducción social (escuelas, hospitales, jardines, geriátricos, etc.) que obliga a las familias trabajadoras a cubrir esas deficiencias o bien adquiriendo esos servicios en el mercado o bien incrementado las horas de trabajo no remuneradas; el de la caída del salario real y la precarización de los empleos que hace que haya que trabajar más para ganar menos, lo que refuerza la dificultad para llevar a cabo el trabajo de reproducción social en el hogar y las comunidades; y el de la privatización de la provisión de servicios públicos (agua, luz, transporte, vivienda) lo que aumenta de forma directa los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Esta crisis de reproducción social (que es más amplia y profunda que una “crisis de los cuidados”) coloca a las mujeres de la clase trabajadora en el centro de los “perdedores” del capitalismo contemporáneo. Por último, las transformaciones operadas en los últimos 30 años en el mundo del trabajo, uno de cuyos rasgos es la feminización del mercado de trabajo, ha colocado a las mujeres en un lugar fundamental dentro de la-clase-que-vive-del-trabajo a partir de su presencia ineludible en tres sectores diferenciados: el de los nichos de servicios fuertemente femeni-

zados y que concentran millones de trabajadoras en “trabajos esenciales” (como los servicios de reproducción social donde viene observándose un ascenso en la conflictividad); el de los sectores que, si bien no están fuertemente feminizados, no pueden funcionar sin el trabajo de las mujeres (ramas fabriles y de transporte); el del trabajo de reproducción social no remunerado en el hogar y los barrios o comunidades, completamente protagonizado por las mujeres. Este protagonismo de las mujeres en la-clase-que-vive-del-trabajo y que enlaza producción y reproducción, se expresa de diversos modos en la Nueva Ola Feminista, sentando las bases para una articulación entre demandas de género y demandas de clase y otorgándole al movimiento rasgos de clase.

El Paro Internacional de Mujeres condensa estas características específicas de la Nueva Ola Feminista, colocando en el centro la discusión sobre la articulación entre género y clase en el terreno de la organización y la lucha, pero también colocando sobre la mesa la fundamental discusión (que excede al feminismo) sobre la forma específica en que el capitalismo anuda (de modo indisociable) la opresión y la explotación. La profundidad y masividad de sus demandas, su relación directa con luchas propias de las organizaciones de trabajadores (sindicales y territoriales) y su inscripción en la pléyade de movimientos sociales que emergieron en la última década, colocan al Paro Internacional de Mujeres en un lugar destacado (y potencialmente disruptivo) en el escenario de nuevas tradiciones de lucha surgidas al calor de la crisis capitalista.

Bibliografía

Alma, A. y Lorenzo, P. (2009). *Mujeres que se encuentran. Una recuperación histórica de los Encuentros Nacionales de Mujeres en Argentina (1986-2005)*, Buenos Aires: Feminaria Editora.

Antunes, R. (2005). *Los sentidos del trabajo. Ensayo sobre la afirmación y la negación del trabajo*. Buenos Aires: TEL-Herramienta.





Arriaga, A. y Medina, E. (2020). "Activismo de género en las organizaciones sindicales. Reivindicaciones y estrategias emergentes en los Encuentros Nacionales de Mujeres", *Trabajo y Sociedad* N°34, Santiago del Estero: UNSE.

Arruzza, C. y Bhattacharya, T. (2020). "Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista" en revista *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda* N°16, marzo, 2020.

Arruzza, C., Bhattacharya, T. y Fraser, N. (2019). *Feminismo para el 99%. Un manifiesto*. Buenos Aires: Rara Avis.

Arruzza, C. (2018). "From Women's Strikes to a New Class Movement: The Third Feminist Wave", *Viewpoint*, December 3.

Basso, P. (1998). *Modern Times, Ancient Hours: workinghours at the end of the century*. Milán: FrancoAngeli.

Bielińska Kowalewska, K. (2017). "La Protesta Negra por el derecho al aborto", *VientoSur*, 22/02/2017, <https://vientosur.info/la-protesta-negra-por-el-derecho-al-aborto/>

Benanav, A. (2020). "La automatización y el futuro del trabajo II" *New Left Review* 120, segunda época, enero-febrero.

Cambiasso, M. y Chaves, M. (2017). "Paro por acoso sexual en una empresa multinacional norteamericana. Aportes para el estudio de la relación entre sindicalismo de base y género en la Argentina actual", *Revista Pilquen*, Vol. 20, N°2, Universidad Nacional del Comahue.

Chrzczonowicz, M. (2017). "Discipline above all else. How politicians control the sexuality of Polish women" *OKOpress*, 4/5/2017, <https://oko.press/discipline-above-all-else-how-politicians-control-the-sexuality-of-polish-women/>

Ferguson, S. (2020). "Las visiones del trabajo en la teoría feminista" en revista *Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda* N° 16, marzo.

González, C. (2018). "Neoliberalismo y crisis de reproducción social. Entrevista con Nancy Fraser", en *Con Ciencia Social revista digital de Tra-*

bajo Social, Vol. 2, N° 3 (pp. 215-225). Disponible en <https://revistas.psi.unc.edu.ar/index.php/ConCienciaSocial/article/view/21643/21425>

Kremer Hernández, M. (2018). "A dos años del primer paro a Macri: el Paro Nacional de Mujeres", *LATFEM*: <https://latfem.org/2-anos-del-primero-paro-macri-paro-nacional-mujeres/>

Laudano, C. (2017). "Movilizaciones #Niunamenos y #Vivasnosqueremos. Entre el activismo digital y #Elfeminismolohizo" ponencia presentada en el Seminario Internacional Fazendo Genero 11ª y 13ª Women's WorldCongress, Florianópolis.

Laudano, C. y Tratje, J. (2018). "Vivas y libres nos queremos", "Nosotras paramos". Una cartografía de producciones audiovisuales en torno al Primer Paro Internacional de Mujeres", *MILLCAYAC*, V.9. Mendoza: UnCuyo.

Palmeiro, C. (2019). "Ni una menos: las lenguas locas, del grito colectivo a la marea global", *Cuadernos de Literatura* 23.46, <https://doi.org/10.11144/Javeriana.cl23-46.nlgm>

Varela, P. (2020). "Feminismo y sindicatos entre 2015-2018 en Argentina: articulaciones y tensiones. Una lectura desde la pregunta por el cruce entre género y clase", en *Revista Plaza Pública* N°23. *Dossier: Los años macristas en debate*. Tandil.

_____ (2020b). "La reproducción social en disputa: un debate entre autonomistas y marxistas" en *Revista Archivos de Historia del Movimiento Obrero y la Izquierda* N°16, marzo, Buenos Aires, 2020.

_____ (2019). "¿Existe un feminismo socialista en la actualidad? Apuntes sobre el movimiento de mujeres, la clase trabajadora y el marxismo hoy", en *Revista Theomai* N°39, primer semestre, Buenos Aires, 2019.

Vogel, L. (2013). *Marxism and the Oppression of Women. Toward a Unitary Theory*. Historical, Londres: Materialism-Brill.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Los propietarios en la calle. Argentina 2008-2020

The proprietors in the street. Argentina 2008-2020

María Celia Cotarelo*

Recibido: 16 de noviembre de 2020

Aceptado: 10 de diciembre de 2020

Resumen: Tras la insurrección popular espontánea de diciembre de 2001, la oligarquía financiera buscó reconstituir su fuerza social utilizando la movilización callejera como un instrumento de lucha hasta entonces poco utilizado en el período actual. En este artículo presentamos una descripción de los principales rasgos de las protestas de sectores reaccionarios y conservadores en Argentina desde 2008: marchas, concentraciones, cacerolazos, cortes de ruta y otros. Quienes se movilizaron lo hicieron en tanto propietarios y ciudadanos, siendo el eje central la defensa del régimen social vigente.

Palabras clave: Burguesía, medios de lucha, Argentina.

Abstract: After the spontaneous popular insurrection of December 2001, the financial oligarchy tried to rebuild its social force by street demonstrations as an instrument of struggle rarely used until then in the present historical period. In this paper we describe the main features of the protest of reactionary and conservative sectors in Argentina since 2008: marches, meetings, cacerolazos, roadblocks and others. Those who demonstrated did so as proprietors and citizens, in defence of the current social regime.

Key words: Bourgeoisie, means of struggle, Argentina.

Introducción

Desde 2002 en Argentina se han sucedido acciones de protesta callejera en torno a banderas que levantan sectores reaccionarios y conser-

* Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina. mcotarelo@gmail.com

vadores de la sociedad, incluyendo a reformistas neoliberales, todos contrarrevolucionarios: seguridad y “mano dura” con los delincuentes pobres, reivindicación de la guerra antisubversiva de la década de 1970, valores religiosos que implican el rechazo a la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario, la Educación Sexual Integral en las escuelas y las políticas de género, la represión a protestas sociales de las clases subalternas, la defensa de la república, la lucha contra la corrupción (pero sólo de algunos), la libertad (individual y de empresa) y la propiedad privada.¹ Esta última es en definitiva el hilo conductor de estos hechos, que apuntan a la defensa del régimen de explotación y dominación vigente.

Se trata de ejes de movilización que hacen al interés de la clase dominante, y han sido motorizados por la fracción que detenta el poder —la oligarquía financiera—, aun cuando quienes se movilizan en las calles sean en su mayoría pequeños o medianos propietarios, junto a algunos asalariados. Más allá de cuál sea su posición en la estructura económica de la sociedad, se mueven en tanto propietarios, en defensa de su propiedad, real o imaginaria.

Los participantes de estos hechos utilizan una cantidad limitada de instrumentos de lucha: los principales son marchas, concentraciones, caravanas de vehículos, cacerolazos, cortes de ruta y ceses de comercialización.

En nuestro trabajo de investigación sobre el proceso de luchas en la Argentina actual hemos indagado acerca de los instrumentos y formas de lucha de la clase obrera y otras fracciones y capas populares. Analizamos huelgas, huelgas generales, cortes de ruta, saqueos a comercios, ataques a edificios públicos y privados, luchas callejeras; conceptualizamos hechos como revuelta, motín, manifestaciones con elementos de motín, toma de una ciudad, insurrección espontánea, localizándolos en una escala de formas de lucha de la clase obrera. ¿Pero qué pasa con

¹ Obviamente, no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Tanto en América Latina como en otros lugares del mundo se registran acciones callejeras semejantes. En la región, se han dado en particular en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Brasil.





los instrumentos y formas de lucha de la burguesía? ¿Podemos analizarlos de la misma manera?

No son muchos los trabajos en Argentina que abordan esta temática, pero en los últimos años se han emprendido varias investigaciones sobre los hechos a los que nos referimos en este artículo. Existen algunos que brindan elementos interesantes, como el de Ricardo Aronskind y Gabriel Vommaro (2010) o el de Gastón Varesi (2014), sobre el conflicto de las patronales del campo en 2008; o el de Susana Murillo (2008), sobre las marchas por la seguridad encabezadas por Juan Carlos Blumberg y otras entre 2004 y 2006. El conflicto de 2008 también ha sido abordado por Roy Hora (2010), mientras que los cacerolazos de 2012-2013 son objeto de una tesis de maestría de Tomás Gold (2017). A los que se suman los trabajos sobre las derechas que llevan adelante Gabriel Vommaro, Sergio Morresi, Ernesto Bohoslavsky y otros. Se trata de un campo de problemas sobre el que queda aún mucho por indagar.

En el período actual, para librar sus luchas contra otras fracciones y capas burguesas y contra la clase obrera, la cúpula de la burguesía en Argentina –la oligarquía financiera- ha utilizado fundamentalmente los instrumentos habituales que se derivan del ejercicio del poder, como el uso de la fuerza armada del gobierno para reprimir protestas, maniobras especulativas, devaluaciones del peso, aumentos de precios y de tarifas, evasión fiscal, fuga de capitales, políticas tributaria, monetaria y crediticia, “flexibilización” de las formas de contratación de fuerza de trabajo, despidos de trabajadores, lobbies, uso de los medios de comunicación para construir la opinión pública, manipulación del miedo, extorsiones, creación de estados de ánimo en la sociedad, lucha electoral y parlamentaria, causas judiciales, entre muchos otros. Pero, como dijimos, en el actual período desde 2002 ha apelado con cierta frecuencia a la convocatoria a acciones callejeras.²

² En la década de 1990 es recordada, como excepción, la “Plaza del Sí”, una manifestación en la Plaza de Mayo de Buenos Aires organizada por el periodista Bernardo Neustadt en apoyo a las políticas neoliberales del presidente Carlos Menem. Sin embargo, es necesario indagar acerca de si efectivamente no hubo movilizaciones de este tipo o si no las registramos.

¿Por qué la clase dominante apela a la convocatoria y organización de movilizaciones callejeras y otros hechos de protesta? ¿En qué momentos lo hace? ¿Qué fines persigue? Está claro que pone en movimiento a la fuerza social que conduce. ¿Pero por qué necesita hacerlo de esa forma? ¿Indica fortaleza o debilidad?

Para poder responder a estas preguntas, en este trabajo presentamos una primera aproximación, tomando como soporte empírico hechos de protesta y de lucha protagonizados por sectores reaccionarios y conservadores en Argentina desde 2008 hasta el momento de escribir estas líneas (31 de octubre de 2020). Se trata de un lapso dentro de un período más amplio, cuyo comienzo establecemos en principio en 2002, tras la insurrección espontánea de diciembre de 2001 que precipitó la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, período que aún estamos transitando. Y que a la vez se inscribe en un período todavía más amplio, de carácter contrarrevolucionario, iniciado en 1976.

Antes de 2002, este tipo de hechos no eran relevantes. Entre ese año y 2007, en cambio, se llevaron a cabo movilizaciones, algunas de ellas masivas, en torno a la cuestión de la seguridad –aquellas convocadas por Juan Carlos Blumberg fueron el punto culminante; a la reivindicación de la guerra antisubversiva de los '70, como respuesta a la política del gobierno de Néstor Kirchner de impulsar los juicios por crímenes de lesa humanidad y otras medidas referidas a la memoria y de apoyo a los organismos de derechos humanos; y a la defensa de los “valores cristianos”. En nuestra hipótesis, la recurrencia a estas movilizaciones callejeras se vincula con la lucha popular de 2001 y el cambio en la relación de fuerzas resultante.

En 2008 se produjo un hecho cualitativamente distinto: el primer enfrentamiento social general tras los hechos de 2001, el llamado conflicto de las patronales del campo, que se oponían a las retenciones móviles a las exportaciones de cereales y soja dispuestas por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En su transcurso se realizaron numerosas acciones por parte de propietarios rurales, apoyados por sectores urbanos. A





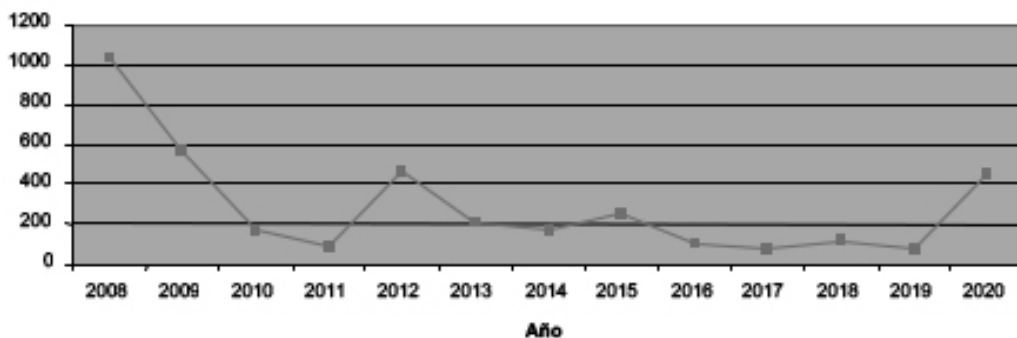
partir de entonces, se incrementó, aun con altas y bajas, la cantidad de hechos protagonizados por sectores reaccionarios y conservadores en relación con el momento inmediatamente anterior.

Realizaremos una descripción tomando los hechos que tenemos registrados en la base de datos de PIMSA. Sabemos que pueden estar subrepresentados, ya que la base está elaborada a partir de información de sólo cuatro fuentes periodísticas (los diarios Clarín, La Nación, Página 12 y Crónica), pero confrontando con otras fuentes vemos que ese subregistro no es tan grande como en el caso de los hechos llevados a cabo por las clases subalternas.

Descripción de los hechos

Comenzamos con una descripción cuantitativa de los hechos de rebelión de sectores reaccionarios y conservadores. La delimitación del universo se basa en el tipo de demanda planteada y el tipo de organización convocante. En la base de datos de PIMSA registramos un total de 3.776 hechos desde 2008 hasta el 31 de octubre de 2020.

Gráfico I. Cantidad de hechos (2008-2020)



Fuente: elaboración propia.

Los hechos fueron claramente más numerosos al comienzo de cada gobierno kirchnerista. El pico de 2008-2009 se corresponde con el conflicto de las patronales del campo, al comienzo del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner; los siguientes picos, en el comienzo de su segundo gobierno en 2012 y del gobierno de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner en 2020. Es notable, en cambio, la poca movilización durante todo el gobierno de Mauricio Macri (2016-2019).



Cuadro I. Ubicación espacial de la mayoría de los hechos

Provincia	Bs. As.	CABA.	GBA	Santa Fe	Córdoba	E. Ríos
Cantidad	928	618	524	481	301	203

Fuente: elaboración propia.

El 81% de los hechos (3.055) tuvieron lugar en sólo cinco provincias. En primer lugar, la provincia de Buenos Aires (1.452), principalmente (el 63%) en el interior de la provincia. Las dos ciudades en que hubo mayor cantidad de hechos fueron Mar del Plata (67) y La Plata (54); casi el 90% de los hechos se realizaron en ciudades más pequeñas, que se encuentran vinculadas a la actividad agropecuaria y agroindustrial. Entre ellas, en orden decreciente en número de hechos, San Pedro, Bahía Blanca, Junín, Azul, Olavarría, Tandil, Pergamino, Trenque Lauquen y Tres Arroyos. En lo que respecta al Gran Buenos Aires, las localidades con más protestas fueron Olivos (donde se encuentra la quinta presidencial), Lanús y Quilmes, y en menor medida, San Isidro, Lomas de Zamora y Wilde.

También en la provincia de Santa Fe, la gran mayoría (casi el 80%) de las protestas se produjeron en las ciudades medianas y pequeñas; sólo 78 y 28 se desarrollaron en las ciudades más grandes, Rosario y Santa Fe respectivamente. Lo mismo sucedió en Córdoba (75% en el interior provincial) y Entre Ríos (casi el 70%).



Por el contrario, en las provincias que siguen en cantidad de hechos, Mendoza (86 hechos) y Tucumán (90 hechos), la casi totalidad se produjeron en las ciudades capitales y fueron casi inexistentes en el interior.

Por lo tanto, los hechos se concentraron fuertemente en la zona productiva de la soja y los cereales. Cabe pensar que el alto número de acciones en el conflicto de las patronales del campo en 2008-2009 puede estar distorsionando la situación. Pero aun sin considerar esos dos años, se observa algo similar: casi el 80% de los hechos fueron en el interior de la provincia de Buenos Aires (restando los hechos ocurridos en Mar del Plata y La Plata), el 60% en el interior de Santa Fe y de Córdoba, y 50% en el interior de Entre Ríos.

La mayor cantidad de hechos fueron manifestaciones (2.131). En primer lugar, concentraciones (749), seguidas de concentraciones con golpeteo de cacerolas (602), marchas a pie (479) y caravanas en autos, tractores o camionetas (209). Mucho menor fue la cantidad de escraches (51) y ceremonias religiosas (24); el resto fueron abrazos a simbólicos a edificios, radios abiertas, demostraciones mediáticas y parodias.

Los cortes de vías de circulación ocuparon el segundo lugar entre los tipos de hechos: 892. La gran mayoría fueron cortes o bloqueos de rutas (806); otros 58 fueron cortes de calles y 24 de accesos a ciudades. El resto fueron cortes de pasos fronterizos y de vías férreas (1 y 3 respectivamente).

Estos dos tipos de hechos constituyeron el 80% del total. Sin embargo, los cortes y bloqueos –junto con carpas y vigalias, y asambleas– se concentraron en 2008 y 2009; en los años siguientes fueron un instrumento poco utilizado; por su parte, los “cacerolazos” fueron más numerosos en 2012, 2013 y 2020. Por lo tanto, los medios de lucha callejera más utilizados durante todo el lapso considerado fueron algunos tipos de manifestaciones, no muy variados y bastante parecidos entre sí a lo largo de los años analizados.

Tampoco hubo mucha variedad en los lugares en los que se realizaron los hechos. En el caso de los bloqueos y cortes, y los tractorazos,

éstos se llevaron a cabo principalmente (72%) en las rutas del interior de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; es decir, el corazón del territorio sojero. Si bien los cortes como medio de lucha tendieron a ser asociados con los desocupados y los trabajadores, se trata de un instrumento con una larga historia en zonas rurales; por ejemplo, el corte de ruta se encuentra presente ya en el Grito de Alcorta de 1912 (Bidaseca y Lapegna, 2006).

En cuanto a las manifestaciones, pasa algo similar: el 61% se concentró en las grandes ciudades de las mismas provincias más la ciudad de Buenos Aires. Una de las variantes de las manifestaciones, las concentraciones con golpeteo de cacerolas –junto con el golpeteo desde balcones y bocinazos– y portando banderas argentinas y carteles, fue más frecuente en la ciudad de Buenos Aires: habitualmente se realizaron en la plaza de la República y en las esquinas de algunos barrios, aquellos donde habitan las capas más acomodadas de la pequeña burguesía, como Cabildo y Juramento en Belgrano, Santa Fe y Callao en Recoleta, Santa Fe y Coronel Díaz en Palermo y Acoyte y Rivadavia en Caballito. También frente a la quinta presidencial de Olivos (en el Gran Buenos Aires), en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario (Santa Fe), en el Patio Olmos en la ciudad de Córdoba, en el monumento a San Martín en Mar del Plata (provincia de Buenos Aires) y en la calle peatonal en el centro de la ciudad de Mendoza.

A diferencia de los otros instrumentos utilizados, la historia de los cacerolazos en nuestro país es muy reciente.³ Si bien desde la década de 1980 se habían producido algunas concentraciones con golpeteo de cacerolas, vinculadas a protestas por aumentos de precios de los alimentos y por la situación económica por parte de amas de casa y trabajadores, no lograron extenderse. El primer cacerolazo nacional fue el 12 de septiembre 1996, contra las políticas económicas y sociales del gobierno de Carlos Menem. Fue convocado como un apagón de 5 minutos con el

³ Un antecedente en la región fueron los cacerolazos de la burguesía y la pequeña burguesía chilenas contra el gobierno de Salvador Allende en la década de 1970.





lema “Apagar la luz para encender la esperanza”, acompañado del ruido de cacerolas y otros elementos. La iniciativa fue del Frente País Solidario (FREPASO) pero luego se sumaron numerosas organizaciones políticas, sindicales y de pequeños y medianos empresarios, nucleados en un foro multisectorial. Según señalaba el diario Clarín, “Al recurrir a esta forma de protesta en tiempos que no son de dictadura ni de guerra y que no implica riesgo para los que participen, tanto radicales como frentistas estarían reconociendo que es más fácil convocar a consumidores con un bajo nivel de compromiso político que a militantes” (Clarín, 12/9/96). El apagón fue acompañado por el golpeteo de cacerolas desde balcones, veredas y concentraciones en algunas esquinas, así como bocinazos, en todas las grandes ciudades del país.

El siguiente cacerolazo importante fue el realizado a la noche del 19 de diciembre de 2001, contra el gobierno de Fernando de la Rúa. Comenzó tras su discurso anunciando el estado de sitio. En otro trabajo (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2004), lo conceptualizamos como la “insurrección de la pequeña burguesía”. A diferencia del hecho de 1996, en este caso no se registra ninguna convocatoria. No hay tampoco registro de cómo se originó, pero sí fue evidente el efecto contagio. Apenas comenzó a oírse ruido de cacerolas, miles de ciudadanos se lanzaron a las calles en forma espontánea y confluyeron en las calles y avenidas de los distintos barrios al grito de “que se vayan todos”.

Desde 2008, los cacerolazos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fueron convocados a partir de mensajes difundidos a través de las redes sociales, emitidos desde múltiples cuentas de Facebook, Twitter o blogs y sitios de Internet que aparecen como pertenecientes a simples ciudadanos; algunos se reconocían como militantes de los partidos que formarían Cambiemos, como el PRO (Propuesta Republicana), Unión por Todos (partido creado por Patricia Bullrich), Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical (UCR); otros se presentaban como “independientes”. Si bien este instrumento de lucha fue utilizado fundamentalmente por distintas fracciones de la pequeña burguesía, desde entonces quedó

asociado a la expresión de la pequeña burguesía reaccionaria. Para diferenciarse, en los últimos años fracciones de pequeña burguesía democrática lanzaron convocatorias a hechos similares, pero denominándolos “ruidazos”.

Las marchas y concentraciones han sido utilizadas por las más diversas fracciones y sectores sociales a lo largo de la historia argentina. Sin embargo, en el período actual una parte de las fracciones y capas sociales participantes no habían sido activas manifestantes antes de 2002. Y esas manifestantes presentan algunas características distintivas. En las marchas los manifestantes no se desplazan en columnas organizadas e identificadas, sino que lo hacen en forma individual o en pequeños grupos; suelen recalcar que “nos llevó nadie”, que “no hay micros” que trasladen manifestantes y que son individuos independientes que se movilizan espontáneamente. Si bien en algunas concentraciones se montaron escenarios desde donde hablaron los principales dirigentes convocantes, en la mayoría no hay oradores.

Vemos, pues, que un mismo instrumento de lucha puede dar lugar a hechos de carácter diverso y formar parte de la estrategia de clases o fracciones de clase diferentes, en función de qué fuerza social contribuyen a constituir, desarrollar, fortalecer o consolidar. Sin embargo, hay algunos instrumentos que son más propios de ciertas fracciones sociales que de otras.

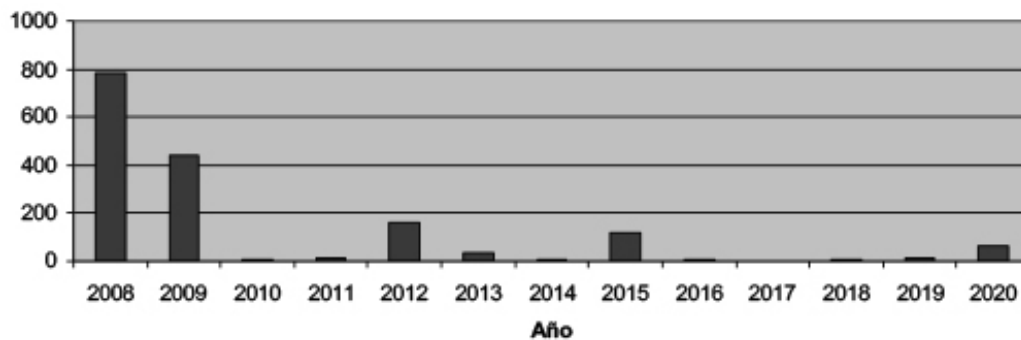
¿Quiénes fueron los participantes de estas movilizaciones? En primer lugar, empresarios: protagonizaron 1.716 hechos (45% del total); en menor medida, ciudadanos (586; 16,5%), vecinos (486; 13%) y militantes (345; 9%).

Los empresarios fueron en su casi totalidad (1.662 hechos) de la rama agropecuaria, lo que se corresponde con los lugares en que tuvieron lugar las protestas y algunos de los instrumentos utilizados. En el gráfico siguiente se observa la evolución de los hechos: obviamente el pico fue en 2008-2009, pero luego tuvieron peso en 2012, 2015 y, tras su retiro de las calles durante el gobierno de Macri, nuevamente en 2020.





Gráfico II. Cantidad de hechos de empresarios



Fuente: elaboración propia.

El mayor peso de los “ciudadanos” se dio en 2012, cuando se realizaron los cacerorazos más masivos contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El 52% de los hechos protagonizados por ellos se desarrollaron en grandes ciudades, en particular la ciudad de Buenos Aires, seguida de Córdoba, Rosario y Mendoza.

Por su parte, el peso de los “vecinos” en las protestas fue más constante a lo largo del lapso considerado, aunque fue notablemente menor durante el gobierno de Macri. Su movilización tuvo lugar en los barrios de las grandes ciudades.

En cuanto a los militantes, su presencia fue creciendo a partir de 2013 y su acción se concentró en las grandes ciudades, en particular la ciudad de Buenos Aires.

¿Cuáles fueron los instrumentos utilizados por cada uno? Los hechos protagonizados por ciudadanos fueron mayoritariamente concentraciones con cacerolas (65%), y en segundo lugar, marchas; de manera similar, los militantes hicieron principalmente (casi el 70%) concentraciones con y sin cacerolas. También los vecinos realizaron en primer lugar marchas y concentraciones. Los empresarios, en cambio, utilizaron una mayor diversidad de medios: el corte de ruta y bloqueo en 764 hechos (45%); concentraciones (16%), asambleas (12%), caravanas y tractorazos (9%). También fueron los que más escraches y vigiliats realizaron.

Veamos ahora cuáles fueron las formas de organización de los he-

chos. En primer lugar (un tercio del total), organizaciones empresarias gremiales, en su gran mayoría de la burguesía agropecuaria: Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), así como muchas de sus filiales locales, juntas en la Mesa de Enlace Agropecuario o por separado. Es decir, organizaciones corporativas de los empresarios, que se oponían a una política de gobierno que afectaba sus intereses económicos inmediatos. En 2008 y 2009 esa lucha gremial adquirió un carácter político y articuló los intereses de otras fracciones, capas y sectores sociales, conformando un hecho complejo; en otros momentos, sólo se trató de luchas económico-corporativas.

Entre los convocantes hubo también otras organizaciones empresarias corporativas por rama a nivel local: de comercio, hotelería y gastronomía, lecheros y de expendedores de combustibles; y empresas o grupos empresarios, como el Grupo Clarín, Coto, Techint, Cargill, entre otros. En varias ocasiones, las protestas económico-corporativas de los patrones fueron acompañadas por sus trabajadores, que se movilizaron como atributo de esas fracciones de capital.

Asimismo, algunos hechos fueron convocados por organizaciones de empresarios en tanto ciudadanos, como Campo + Ciudad. Es una agrupación política que utiliza activamente las redes sociales, y desde ellas difunde sus convocatorias, aunque se define como una “organización no gubernamental” y un “espacio de expresión” de “personas comunes”, de distintas ideologías y profesiones. Vale la pena reproducir su presentación en su página de Facebook, por ser ilustrativa del discurso general que busca legitimar a buena parte de los hechos:

“Campo + Ciudad es, ante todo, una agrupación de personas comunes. Con diferentes realidades, opiniones, profesiones, historia e intereses, pero que comparten un objetivo: hacer de la Argentina un país próspero en donde cualquiera que esté dispuesto a esforzarse y a respetar a los demás pueda progre-





sar en paz y en libertad. Nacimos en 2019 como un espacio de expresión que buscaba concientizar sobre el retroceso institucional que significaba el regreso del kirchnerismo. Hoy, con ellos en el poder, es necesario ponerle un freno a sus ambiciones. Creemos en la República, el Federalismo y en la Constitución Nacional que los consagra. En la igualdad ante la ley, el derecho a disfrutar de los frutos de nuestro trabajo, y a disponer libremente de nuestra propiedad. Creemos que no debe haber recompensa sin esfuerzo, crimen sin castigo ni poder sin responsabilidad. Creemos, por sobre todas las cosas, que son las personas honestas y trabajadoras las que hacen crecer la patria. Y nos unimos porque vemos que, con el actual gobierno, todo aquello en lo que creemos está en peligro. Por décadas tiramos del carro mientras políticos, sindicalistas y un ejército de burócratas improductivos vivieron como reyes a costa de nuestro esfuerzo y llevaron a la ruina a la Argentina. Es hora de decirles basta. Los honrados, los respetuosos, los laburantes, los patriotas, somos muchos más de los que creemos. Y si peleamos juntos, somos imparables. Somos muchos, pero estamos dispersos. C+C es el espacio para encontrarnos“ (<https://www.facebook.com/campomasciudad/>).

También tuvo cierta actuación un grupo de whatsapp de 256 grandes empresarios y CEOs, llamado Nuestra Voz, que apoyó la campaña electoral de Mauricio Macri en 2019.

Una particularidad de la forma de convocatoria de algunos de estos hechos (15%), es la utilización de las redes sociales, como Facebook, Twitter y whatsapp, y blogs y sitios de Internet. Pero no se trata sólo de un medio de difusión sino que las páginas y cuentas mismas aparecen como convocantes. En muchos casos no aparece ninguna persona identificable; en otros se presentan como ciudadanos independientes, apartidarios y sin ideología, preocupados por la república y la libertad. La lista es muy larga. Algunos comenzaron siendo impulsados por ciudadanos apartidarios que luego pasaron a militar en algún partido político, como la Coalición Cívica (encabezado por Elisa Carrió) y Unión por la Libertad (conducido por Patricia Bullrich); otros fueron creados desde el comienzo por militantes de los partidos que luego confluyeron en la alianza Cam-

bios; otros son trolls al servicio de esos mismos partidos. A la vez, algunas convocatorias fueron hechas por organizaciones no gubernamentales de todo tipo, por lo general también desde las redes sociales –como Mujeres Independientes Federales, Fundación Blumberg, las organizaciones Pro Vida, Fundación Gospa, entre otras. En definitiva, se trata de una multiplicidad de militantes políticos dedicados a tareas de agitación, coordinados de manera directa o indirecta por cuadros de partidos políticos, aunque no en forma explícita o pública.

Otra parte de los hechos fue convocada por grupos autodenominados como autoconvocados. La mayor cantidad se registró durante el enfrentamiento de 2008-2009: se trataba de propietarios rurales críticos de las conducciones de sus organizaciones gremiales, a quienes consideraban demasiado moderadas. Otros autoconvocados fueron vecinos y padres de alumnos. Entre éstos, al igual que en el caso de los que convocaron a través de las redes sociales, se encuentran militantes políticos que se presentan como apartidarios.

También se presentaron como apartidarias algunas agrupaciones de profesionales, en particular de abogados, como Será Justicia y Usina de Justicia, además del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

Las protestas en defensa de los “valores cristianos” fueron organizadas por cuadros, organizaciones e instituciones religiosas, tanto católicas como evangelistas, como sacerdotes y arzobispos, la Conferencia Episcopal Argentina, la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y otros grupos evangélicos, además de los grupos Pro Vida ya mencionados.

Finalmente, también hubo hechos convocados por organizaciones políticas –partidos, agrupaciones o dirigentes–, aunque por lo general no lo hicieron en forma directa; fue frecuente que dirigentes políticos adhirieran a movilizaciones “a título personal”, ya que se tendió a enfatizar su carácter supuestamente espontáneo y apartidario. Entre lo que sí convocaron en forma directa, se encuentran partidos, dirigentes o agrupaciones





vinculados con la última dictadura cívico-militar (Fuerza Republicana, Partido Unidad Federalista, Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina, Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos, Cecilia Pando, Cynthia Hotton, entre otros), partidos nacionalistas (Partido Nacionalista Constitucional, Foro Nacional Patriótico, Vanguardia Nacionalista), liberales (como el Partido Libertario), así como los partidos que conforman Cambiemos (ahora Juntos por el Cambio).

En varios hechos, en particular desde 2012, confluyeron distintos sectores participantes, organizaciones convocantes y reclamos planteados.

Una característica de la mayor parte de las protestas ha sido un alto grado de agresión verbal, pero sólo en el 1% de los hechos hubo choques callejeros (en su mayoría protagonizados por propietarios rurales y por vecinos). Esto se debió a que casi no hubo intervención policial para reprimir estas protestas y a que no se produjeron movilizaciones contrarias en el mismo lugar y momento.

Algunos resultados e hipótesis

De la descripción precedente se desprenden algunos resultados parciales y algunas hipótesis a confirmar en el curso de la investigación.

La convocatoria a protestas callejeras de sectores reaccionarios y conservadores se volvió frecuente desde 2002, es decir, tras la insurrección espontánea de 2001. Tal como hemos mostrado en otros trabajos, ésta fue el punto culminante de un ciclo de rebelión iniciado en 1993, en el que se fue constituyendo una fuerza social de carácter popular y democrático, y fue un punto de inflexión en el período contrarrevolucionario que estamos transitando (Cotarelo, 2016). Esa insurrección popular no sólo precipitó la caída del gobierno de De la Rúa sino que puso de manifiesto una crisis de representación política y puso en cuestión la hegemonía de la oligarquía financiera. Dio lugar a un cambio en la relación de

fuerzas, que se expresó en un cambio de la alianza social en el gobierno. Esta nueva alianza social, que logró una expresión política mayoritaria en el llamado kirchnerismo desde 2003, incluía a la mayor parte de las fracciones y capas sociales del campo del pueblo que se movilizaron activamente contra las políticas neoliberales de la década de 1990.

Por lo tanto, la convocatoria a protestas callejeras responde a la necesidad, para la oligarquía financiera, de reconstituir una fuerza social reaccionaria, conservadora y neoliberal a partir de la confrontación con la fuerza social popular y democrática a fin de neutralizarla y/o destruirla.

Veámos que la cantidad de hechos fue mayor en los primeros años de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner –en 2008-2009 y en 2012-2013, y de Alberto Fernández-Cristina Fernández en 2020 (de Néstor Kirchner en el momento anterior). ¿Por qué? Señalamos dos hipótesis, no contradictorias entre sí: es posible que fuera para intentar poner límites a las políticas que esos gobiernos se proponían aplicar y así restringir los posibles avances de las fracciones y capas del campo popular dentro de la alianza que había accedido al gobierno, así como de las fracciones burguesas que la conducen; y es posible que intentaran mantener y aumentar la fuerza moral de su propia fuerza social luego de cada derrota electoral.

Era esperable que durante el gobierno de Cambiemos el número de protestas disminuyera drásticamente, ya que al lograr una expresión mayoritaria esa fuerza social volvió al gobierno del estado. Esto fue, en buena medida, resultado del proceso de movilización entre 2012 y 2015, que permitió la consolidación de esa fuerza social y el debilitamiento y crisis de la alianza social en el gobierno. La mayor parte de los hechos fueron de apoyo al gobierno de Macri y contra la resistencia de las capas populares de la fuerza contraria, lo que no fue suficiente para evitar un nuevo cambio de alianza en el gobierno.

Vimos también que los protagonistas de los hechos fueron principalmente la burguesía agraria y fracciones de pequeña burguesía rural y urbana, y una parte menor de trabajadores asalariados, todos movilizados en tanto propietarios y ciudadanos. Y lo hicieron en su gran mayoría en





su propio territorio: el corazón de la producción agropecuaria, del territorio sojero, y sus pequeños, medianos y grandes centros urbanos, así como la ciudad de Buenos Aires. En las grandes ciudades lo hicieron en sus propios barrios, así como en algunos lugares emblemáticos del centro.

Los instrumentos utilizados fueron relativamente escasos y con poca variación a lo largo de los años. Los más numerosos fueron marchas, caravanas en autos y concentraciones con cacerolas y banderas argentinas en la ciudad, cortes de ruta y tractorazos con banderas argentinas en el campo. Entre esos instrumentos, los cacerolazos quedaron asociados a la acción de la pequeña burguesía reaccionaria. En buena parte de los hechos los participantes enfatizaron una y otra vez que se movilizaban espontáneamente, sin responder a partidos políticos, autoconvocados. Sin embargo, detrás de las convocatorias existió una amplia red de militantes y cuadros políticos de diversos partidos y agrupaciones, de agitadores y propagandistas.

Volviendo a las preguntas iniciales, planteamos aquí algunas cuestiones a modo de hipótesis. La oligarquía financiera desarrolla una estrategia contrarrevolucionaria, en disposición de guerra permanente contra la clase obrera y sus aliados. Para ello utiliza todos los medios de lucha a su alcance, privilegiando unos u otros según el momento que se transite en el proceso de lucha. ¿Por qué apelar a la movilización callejera de su base social en estos años? Dijimos que necesitaba reconstituir su fuerza social luego de la crisis e insurrección popular de 2001, que puso en cuestión su hegemonía. Para superar la crisis de representación política que estalló en ese momento, necesitaba recomponer el sistema republicano y de democracia representativa a fin de neutralizar todo intento de avance popular hacia otras formas de democracia, cuestión que una parte del pueblo empezó a plantear en esos días.

Esa recomposición del sistema de representación política efectivamente se logró pero lo hizo a partir de una alianza social que contenía a la mayor parte de la clase obrera y otros sectores del pueblo, constituidos entonces como una fuerza democrática y popular en disposición de enfrentamiento. La lucha electoral se convirtió en un instrumento de lucha

privilegiado para ambas fuerzas sociales en pugna y es la que permite mantener un equilibrio inestable entre ambas. Lo que implica que, al mismo tiempo, les impone un límite para su desarrollo y para un grado más alto en la confrontación.

Para poder librar sus luchas en el terreno electoral, la fuerza de la oligarquía financiera requiere de la constitución y consolidación de un partido o alianza de partidos propios; ya no está en condiciones de utilizar los partidos tradicionales como lo hizo en la década de 1990, ya que éstos colapsaron después de 2001. Las movilizaciones en la calle contribuyen a ese objetivo. Y a la vez, resultan imprescindibles llegado el momento de profundizar el enfrentamiento.

Como dijimos, ésta es una primera aproximación a este campo de problemas. Es imprescindible avanzar en el conocimiento de los instrumentos y formas de lucha de la clase dominante en el período actual a fin de comprender su/s estrategia/s.

Bibliografía

Aronskind, R. y Vommaro, G. (comp.) (2010). *Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario*; Buenos Aires, Ed. Universidad Nacional de General Sarmiento/Prometeo.

Bidaseca, K. y Lapegna, P. (2006). “El Grito de Alcorta revisitado: cultura y sentimientos en la acción colectiva”; en *Anuario* N° 21, Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario.

Cotarelo, M. C. (2016). *El proceso de formación de una fuerza social. Argentina 1993-2010*; Buenos Aires, Ed. Imago Mundi/PIMSA.

Gold, T. (2017). De redes y cacerolas: el ciclo de movilización anti-gubernamental en la Argentina (2012-2013); tesis de maestría; Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín; disponible en <https://ri.unsam.edu.ar/bitstream/handle/123456789/793/TMAG%20IDAES%202017%20GT.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.





Hora, R. (2010). “La crisis del campo del otoño de 2008”; en *Revista Desarrollo Económico*, Vol 50 N° 197; Buenos Aires.

Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2004). “La insurrección espontánea. Argentina, diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización”; en *PIMSA, Documento de Trabajo N° 43*, Buenos Aires.

Murillo, S. (2008). *Colonizar el dolor*; Buenos Aires, Ed. CLACSO.

Varesi, G. (2014). *El “conflicto del campo” de 2008 en Argentina: Hegemonía, acumulación y territorio*; Universidad Nacional de la Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Geografía; *Geograficando*; 10; 2; 11-2014; 1-19.



Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Luchas campesinas en Argentina: la supervivencia de un sujeto incómodo en los albores del Siglo XXI

Peasant struggles in Argentina: the survival of an uncomfortable subject at the beginning of the 21st century

Juan Wahren* y Luciana García Guerreiro**

Recibido: 29 de noviembre de 2020

Aceptado: 14 de diciembre de 2020

Resumen: En este artículo abordamos de forma general las luchas campesinas en la Argentina desde comienzos del siglo XX hasta los albores del siglo XXI para identificar y analizar rupturas y continuidades tanto en sus acciones colectivas de protesta, como en los procesos de reconstrucción identitaria, así como su relación con el Estado y otros actores. Abordamos también sus diferentes demandas y los cambios acaecidos en torno a las disputas por la tierra y territorio en relación a los diferentes modelos de desarrollo agrario hegemónicos que se fueron conformando en la Argentina durante los distintos períodos abordados. Para ello nos basamos en bibliografía especializada que trabaja sobre los distintos períodos de la lucha campesina en Argentina, así como nuestros propios trabajos de investigación con diversos movimientos campesinos contemporáneos.

Palabras clave: Luchas campesinas, Movimientos Sociales Rurales, Territorio, Estado, Identidad.

Abstract: In this article we discuss in general terms the peasant struggles in Argentina from the beginning of the 20th century to the dawn of the 21st century in order to identify and analyze ruptures and continuities both in their collective protest actions and in the processes of identity reconstruction, as well as their relationship with the State and other actors. We also address their different demands and the changes that have taken place around the disputes for land and territory in relation to the different hegemonic models of agrarian development that have been shaped in Argentina during the different periods covered. In order to do so, we based ourselves on specialized bibliography working on the different pe-

* Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Coordinador del Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina. juanwahren@conicet.gov.ar

** Socióloga (UBA). Integrante del Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Argentina. lgarcia@sociales.uba.ar





riods of peasant struggle in Argentina as well as our own research work with various contemporary peasant movements.

Key words: Peasant struggles, Rural Social Movements, Territory, State, Identity.

Introducción

El presente artículo se propone analizar de modo general las luchas campesinas en la Argentina desde comienzos del siglo XX hasta los albores del siglo XXI para identificar y analizar rupturas y continuidades tanto en sus acciones colectivas de protesta, como en los procesos de reconstrucción identitaria, sus procesos de territorialización así como su relación con el Estado y otros actores de los mundos rurales.

En un primer momento, damos cuenta de algunos debates teóricos que se han suscitado en torno a la definición del campesinado y su particular vínculo con el sistema, destacando su resistencia y capacidad de supervivencia a lo largo del tiempo. En un segundo apartado, desarrollamos algunos conceptos provenientes de las teorías sobre los movimientos sociales que consideramos valiosos para el análisis comparativo de los diferentes ciclos de la acción colectiva de los movimientos campesinos en nuestro país. Posteriormente, analizamos diferentes momentos de las acciones colectivas protagonizadas por el campesinado en Argentina. En primer lugar, abordamos los antecedentes de las luchas campesinas, destacando la experiencia de lo que se denominó El grito del Alcorta de 1912, así como las protestas de trabajadores rurales en la Patagonia a principio del siglo XX. Luego, analizamos el surgimiento y desarrollo de las Ligas Agrarias durante la década del sesenta y setenta del siglo pasado. En tercer lugar, nos detenemos en los procesos de (re)organización de movimientos campesinos que se abren durante la década del ochenta y noventa, los cuales tendrán como eje la lucha por la tierra y el enfrentamiento al modelo

neoliberal. Por último, analizamos el despliegue de los movimientos campesinos y sus múltiples articulaciones durante el siglo XXI, destacando la centralidad que asume la lucha por el territorio, así como consignas vinculadas a la soberanía alimentaria, la agroecología y la reforma agraria integral.

Teniendo en cuenta la generalidad del tema abordado no pretendemos lograr una exhaustividad en el relevamiento de las distintas organizaciones campesinas de cada período abordado, sino dar cuenta de la diversidad de experiencias, con organizaciones que tienen un alcance nacional, hasta otras de alcance local, así como algunos de los espacios de articulación más paradigmáticos de las luchas campesinas de la Argentina en el período abarcado.

En términos metodológicos, nos basamos en el análisis de fuentes secundarias y académicas sobre la temática, así como en nuestro trabajo de investigación en el marco del Grupo de Estudios Rurales-Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales (GER-GEMSAL) en el que participamos desde el año 2004.

Definiciones sobre una clase incómoda

La definición sobre el campesinado ha dado lugar a importantes debates políticos y académicos en el marco del avance del desarrollo capitalista en el agro; algunos de los cuales se han actualizado a la luz de las recientes transformaciones económicas y sociales ligadas al avance del modelo de agronegocios. Como señalan Giarracca y Aparicio,

los campesinos son agricultores que pueden producir para el mercado, que combinan esa producción con otras para el autoconsumo, pero cuyo rasgo principal es la organización productiva basada en el trabajo familiar. (...) La interacción de estas unidades dentro de sociedades más amplias determina la incorporación de elementos capitalistas como trabajo asalariado, capital, venta de fuerza de trabajo, etc. que hace





que, aún manteniendo la relación social básica, se presenten diversidad de situaciones (1991:14).

Es justamente esa diversidad de situaciones, así como la dificultad para definir fenómenos cambiantes y heterogéneos, lo que hace necesario retomar y actualizar algunas de aquellas viejas discusiones e interrogantes acerca del sujeto campesino y su articulación con el resto del sistema.

Los estudios clásicos de Marx, Lenin, Kautsky, Chayanov, entre otros, han abordado la cuestión agraria a fines del siglo XIX y principios del XX intentando comprender la compleja relación de las pequeñas explotaciones agrícolas y el desarrollo del capitalismo. Mientras la tradición marxista encontraba en el campesinado un sector destinado a desaparecer (para algunos autores, por representar una forma atrasada e incompatible con el desarrollo del capitalismo y, para otros, porque los procesos de diferenciación social inevitablemente conducirían a su proletarianización o a su capitalización); otros, como Chayanov, desde la escuela para el análisis de la organización y producción campesinas, sostenían que era necesario comprender la unidad económica familiar en forma diferenciada a la agricultura capitalista, por estar basada su lógica no en la ganancia, la renta o el salario (elementos capitalistas), sino en la satisfacción de sus necesidades familiares.

Tal como señala Sevilla Guzmán (1983), desde las ciencias sociales durante largo tiempo se evitó dar cuenta de la existencia de un modo campesino de producción específico, dejando de lado la antigua tradición europea de los estudios campesinos. La misma fue retomada recién en las décadas del sesenta y setenta del siglo pasado, abriendo nuevamente el debate en torno a la persistencia del campesinado en contextos de modernización capitalista. En ese marco, se desplegó la discusión entre descampesinistas y campesinistas, donde para los primeros el campesinado constituía un resabio no-capitalista que, en el marco de la expansión del capitalismo, desaparecería convirtiéndose en proletariado o en burguesía rural; mientras que para los segundos constituía un modo

de producción con una lógica propia, diferente a la capitalista, que resiste y que subsiste subordinada y, en algunos casos, en forma funcional al desarrollo capitalista (Giarracca, 1999), lo cual reviste a la clase campesina de una cualidad que puede rastrearse en toda la historia de los campesinos a escala global: su capacidad de supervivencia (Berger, 2006).

Una importante contribución al debate provino de Teodor Shanin (1983) quien señala que, a pesar de ser la mayoría de la población de la humanidad, el sujeto campesino no encaja bien en ninguno de los conceptos generales de sociedad moderna. En su definición analítica de campesinado destaca como características principales una relación específica con la tierra; la explotación económica de tipo familiar; la organización social en torno a la comunidad rural; y pautas específicas de desarrollo que la constituyen en un modelo general de vida social particular. La preocupación de este autor está orientada a analizar la incidencia política del campesinado como grupo social diferenciado y, en tal sentido, sostiene que, lejos de las predicciones de los académicos sobre su desaparición, el campesinado ha subsistido.

Algunos autores sostienen que lo que caracteriza a la cultura campesina, en tanto existe y ha existido a lo largo del tiempo, haciendo frente a múltiples formas de hegemonía con intereses contrarios y en relaciones de desigualdad, es cierta dinámica y práctica de resistencia. Es quizás esa carga política, lo que vuelve nuevamente pertinente pensar la cuestión campesina.

Así, hablamos de resistencias y luchas campesinas dando cuenta de la existencia de una constante confrontación y adaptación dialéctica entre las formas de producción campesinas y la voluntad omnipresente y subordinadora del sistema capitalista (Paz, 2006); disputa que se manifiesta en varios niveles y ámbitos y de diferentes modos.





Movimientos Campesinos, Territorio y Autonomía

Para abordar los distintos períodos de las luchas campesinas en Argentina nos proponemos trazar una constelación de conceptos provenientes de las teorías sobre los movimientos sociales que nos permitan sistematizar y analizar los diferentes ciclos de la acción colectiva de este actor social incómodo, que tercamente permanece en la escena política y en los territorios, sobreviviendo pese a los diversos anuncios de su inevitable desaparición. Un concepto clave, con raigambre en los estudios anglosajones sobre los movimientos sociales, es el de repertorio de acción colectiva (Tilly, 2019). Los movimientos sociales utilizan formas de protesta colectivas flexibles y sujetas a negociación e innovación que constituyen repertorios específicos de la acción colectiva y que se van cristalizando históricamente a través de la práctica de cada sujeto social, a través de generaciones y memorias de la protesta social. Son las formas de protesta utilizadas y/o reinventadas por los actores sociales para visibilizar sus demandas en el marco de la interacción entre antagonistas.

Por su parte, Tarrow (2009) desarrolló la noción de Estructura de Oportunidades Políticas (EOP), la cual refiere al sistema político institucional y los diferentes grados de apertura o de cierre para habilitar o restringir la acción colectiva de los movimientos sociales. De este modo, las relaciones entre los movimientos sociales y el Estado se pueden analizar tanto en clave de oportunidad o de constreñimiento de la acción colectiva.

Asimismo, Tarrow (2009) propuso el término de “ciclo de protesta” para analizar los diferentes flujos de la protesta social por parte de los movimientos sociales en determinados períodos históricos. Implica una expansión de las acciones colectivas de protesta hacia un conjunto de movimientos sociales que se suman con sus propias demandas a las protestas, generando una suerte de efecto contagio entre movimientos hasta llegar a un punto de inflexión, el momento más álgido de las protestas en el cual si no se logran los objetivos de los movimientos, comienza un paulatino agotamiento del ciclo de protesta que puede llevar

a un proceso de institucionalización de los movimientos sociales y sus demandas o a una fase represiva que retrotraiga y/o constriña la acción colectiva de estos movimientos sociales.

Por otro lado, es importante destacar la dimensión identitaria de los movimientos campesinos. Como vimos en el apartado anterior, el campesinado como sujeto colectivo –como clase social y como sociedad en sí mismo– posee una serie de características comunes y, a la vez, presenta múltiples diferencias en espacios y tiempos específicos. Es un actor histórica y geográficamente situado y su componente identitario se va reificando (Melucci, 1991) en su propia práctica política, social, cultural y económica, así también sus demandas se van transformando e incorporando aquellas transformaciones estructurales de la sociedad en la que se encuentran inmersos como actor social específico, construyendo lazos y relaciones con otros actores y movimientos sociales.

En paralelo a la conformación identitaria de los movimientos sociales, Melucci plantea que existen dos fases de la acción colectiva: *invisibilidad* y *latencia*. En este sentido, hablamos de *latencia* para caracterizar al momento de ausencia de acción colectiva en el espacio público, el momento en el cual los movimientos refuerzan sus lazos solidarios y crean nuevas prácticas sociales, políticas y culturales. Por su parte, la irrupción en el espacio público, el momento de *visibilidad*, tiene una fuerte función simbólica que, por un lado, cuestiona una política particular del sistema hegemónico y, por otro lado, pone en aviso al resto de la sociedad que existen conflictos y contradicciones en el sistema político.

Todas dimensiones de análisis se entraman en la dimensión territorial de los movimientos sociales. En este caso en diversas territorialidades campesinas que implican formas de habitar y practicar los territorios ligadas a esas prácticas y cosmovisiones que se fueron (re)constituyendo de generación en generación. Una territorialidad construida a través de procesos internos de larga duración, y enmarcados por los cambios de las estructuras sociales de las cuales los campesinos forman parte de manera subordinada.





Desde esta perspectiva, el territorio comporta sentidos políticos, sociales y culturales:

[ya que] el territorio no es simplemente una sustancia que contiene recursos naturales y una población (demografía) conformando los elementos para constituir un Estado. El territorio es una categoría densa que presupone un espacio geográfico que es construido en ese proceso de apropiación-territorialización, propiciando la formación de identidades-territorialidades que están inscriptas en procesos que son dinámicos y mutables; materializando en cada momento un determinado orden, una determinada configuración territorial, una topología social (Porto Gonçalves, 2002: 230; traducción nuestra).

Encontramos que en la Argentina, frente a los procesos de modernización capitalista que construyen territorios cada vez más excluyentes y promueven vínculos superficiales y fragmentados, las luchas campesinas habilitan el (re)surgimiento de territorialidades basadas en la defensa de un modo de vida campesino que incluye la lucha por la tierra, la soberanía alimentaria y la resistencia frente al avance del agronegocio.

El territorio actúa como el soporte material que habilita potencialmente la construcción de autonomías por parte de diversos movimientos sociales de América Latina (Wahren, 2011) Así, tanto la idea de autonomía, como las identidades que se forjan y reifican en el devenir de los movimientos sociales son mutables y contingentes, dentro del marco estructural desde donde actúan y construyen sus entramados sociales, configurando sus propias formas instituyentes contrahegemónicas, ancladas justamente en esos territorios en disputa.

Luchas en los distintos períodos. Los antecedentes de las luchas campesinas en Argentina

Un primer antecedente que podemos analizar para pensar la conformación del campesinado en la Argentina es la rebelión del denominado “Grito de Alcorta” que se dio a partir del año 1912 en la zona núcleo de producción agrícola pampeana, abarcando principalmente el sur de las provincias de Córdoba y Santa Fé y el norte de la provincia de Buenos Aires, caracterizada por Plácido Grela como una “rebelión campesina” (1958). Si bien existen diversos planteos e interpretaciones acerca de lo que fue esta acción colectiva, así como el carácter identitario de los sujetos protagonistas de la misma: “agricultores”, “campesinos”, “chacareros”, “obreros agrícolas” (Grela, 1958; Solberg, 1971, Arcondo, 1980; Bidaseca y Lapegna, 2006; Azcuy Ameghino, 2012), creemos que marca un hito fundante en las luchas por la tierra por parte de los sujetos rurales subalternos del siglo XX en la Argentina. Más allá de sus derivas posteriores en la que estos sujetos se convierten en “chacareros” o “farmers” (Bonaudo y Godoy, 1985), el Grito de Alcorta visibiliza una demanda y a un sujeto trabajador de la tierra o campesino sin tierra que hasta entonces no aparecía en la escena pública nacional.

De esta manera el Grito de Alcorta pone en juego a los campesinos como movimiento social, a partir del despliegue de una serie de acciones colectivas de protesta, entre las que destacan la huelga agraria, los cortes de ruta, las movilizaciones y los petitorios, además de multitudinarias asambleas de campesinos en los diferentes pueblos rurales que fueron el epicentro de la rebelión agraria (Grela, 1958, Arcondo, 1980). Podremos observar en los siguientes apartados, como estas acciones colectivas de protesta se convertirán en parte del repertorio modular de acciones colectivas del campesinado en la Argentina en sus diferentes etapas históricas.

Asimismo, las demandas en torno a los arrendamientos puso en debate la cuestión del acceso a la tierra y la reforma agraria (Grela, 1958)





como un proyecto de los actores subalternos de los mundos rurales, a la vez que este conflicto tuvo como saldo organizativo la conformación de la organización gremial más importante de los pequeños y medianos productores agrarios del país: la Federación Agraria Argentina que nucleó a gran parte de estos campesinos que, con el acceso a la tierra y una paulatina (pero limitada) capitalización se fueron transformando en actores “farmers”, “colonos” y/o “chacareros” (Archetti y Stolen, 1975; Bonaudo y Godoy, 1985) reificando así sus identidades, sus formas de producir y de organizarse políticamente durante las décadas siguientes.

Otro antecedente de las luchas campesinas podemos encontrarlo en las protestas protagonizadas, preponderantemente, por trabajadores rurales, pero también campesinos e indígenas, en la denominada “Patagonia Rebelde” (Bayer, 1974). Una serie de huelgas rurales y acciones armadas entre los años 1920 y 1921 en distintos establecimientos agropecuarios de la región patagónica, principalmente en la provincia de Santa Cruz, terminaron configurando un levantamiento de los actores subalternos y la consiguiente respuesta represiva por parte de los terratenientes y fuerzas de seguridad locales y nacionales, incluyendo al propio Ejército Argentino, quienes fueron responsables de las masacres y fusilamientos a los protagonistas de esta revuelta, donde fueron asesinados más de 500 huelguistas (Zubimendy y Sampaoli, 2019). Sus reclamos eran mejoras en sus salarios y condiciones laborales, así como una reducción de la jornada de trabajo. Su organización se dio en el formato sindical y algunos de sus referentes tenían militancia previa en organizaciones anarquistas.

Estos dos acontecimientos, si bien no fueron protagonizados por un sujeto propiamente campesino, constituyen los antecedentes más importantes para comprender la consolidación de este sujeto incómodo como un movimiento social central de los mundos rurales de Argentina.

En ambos casos podemos observar que hay una yuxtaposición de identidades políticas y sociales entre las cuales se encuentra el campesinado, pero como una identidad en permanente (re)construcción. El

devenir de estas primeras luchas no implica, entonces, un saldo organizativo en torno a la identidad campesina, pero sí constituyen antecedentes que marcan hitos importantes de las luchas de los sujetos rurales subalternos y plantean algunas demandas y repertorios de acciones, que son en parte retomadas posteriormente por diversas organizaciones campesinas en distintas geografías y momentos históricos de la Argentina. En efecto, el sujeto campesino pervivió y se reorganizó en otras regiones del país –alejados de las zonas núcleo de la producción de granos y ganado– para (re)emerger como un movimiento social en una coyuntura marcadamente diferente y en momentos que comienza la paulatina crisis del modelo agroindustrial (la década del sesenta) que signó la producción agropecuaria desde 1930 hasta fines de los años ochenta del siglo XX.

Las Ligas Agrarias: el campesinado y la Reforma Agraria

A finales de la década del sesenta, en diferentes provincias del Nordeste argentino se consolida una experiencia organizativa de pequeños y medianos productores agrarios, como así campesinos y trabajadores sin tierra, que será conocida como “Ligas Agrarias”. La misma estuvo conformada por diferentes organizaciones, que compartieron gran parte de sus objetivos y acciones, aunque también presentaban particularidades regionales: en la provincia de Chaco se conformaron las Ligas Agrarias Chaqueñas, en Formosa las Ligas Campesinas, en Corrientes las Ligas Agrarias Correntinas, en Misiones el Movimiento Agrario Misionero, en Entre Ríos las Ligas Agrarias Entrerrianas y en Santa Fe la Unión de Ligas Agrarias de Santa Fe.

Varios trabajos se han detenido a analizar las características que ha asumido esta experiencia organizativa (Galafassi, 2005; Ferrara, 1973 y 2007; Rozé, 1992; Lasa, 1990). La gran relevancia que las Ligas Agrarias representan en la historia de las protestas y movimientos rurales de





nuestro país se evidencia, entre otras cosas, en el hecho de que tuvieron una importante presencia regional con impacto nacional (Rozé, 1992).

Estas organizaciones rurales lograron congregarse a una gran parte de las familias agricultoras del Nordeste, en su diversidad regional, expresando los intereses de sujetos rurales que habían sido marginados por el “modelo de desarrollo agrario dominante” (Galafassi, 2005). Respecto a los sujetos protagonistas de las Ligas existe cierto debate o disenso acerca de su caracterización. A la posible heterogeneidad de situaciones regionales se suma la diversidad de perspectivas en relación a la cuestión, lo cual ha conllevado que las Ligas Agrarias fueran comprendidas tanto como un movimiento homogéneamente campesino y de carácter fuertemente revolucionario (Ferrara, 1973); como un movimiento caracterizado por su heterogeneidad, derivada de la diferente conformación provincial y estructuras de clase (Rozé, 1992); o como expresión de la lucha de familias colonas y de productores medios que asumen características diferentes al campesinado (Bartolomé, 1982); que en algunas provincias tuvo la participación de trabajadores sin tierra (Barbetta y Domínguez, 2016).

Más allá de las diferentes perspectivas, todas concuerdan en que la conformación de las Ligas resultó de la cristalización de un intenso trabajo de base realizado desde mediados de los años de 1960 por el Movimiento Rural de la Acción Católica,¹ así como por el movimiento cooperativo, en un escenario de un intenso proceso de organización y movilización por parte de los pequeños productores y campesinos de las provincias del Nordeste argentino (Ferrara, 1973, Vommaro, 2011). A partir del trabajo del Movimiento Rural de Acción Católica, ya a fines de la década del sesenta, vastas familias rurales de la región contaban con

¹ Como señala Vommaro, el Movimiento Rural de la Acción Católica, fundado en 1958, tuvo una estrecha vinculación con los sectores de la Iglesia Católica más receptivos a los cambios “que se expresaron en la realización del Concilio Vaticano II (1962-1965) y el nacimiento de la Teología de la Liberación y, en la Argentina, del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo” (2011:192).

experiencia en la organización y participación de grupos con un funcionamiento democrático, tendiente a la horizontalidad; la discusión de cuestiones de su realidad inmediata y nacional, es decir la reflexión sobre su propia práctica; la participación en espacios de formación orientados por las metodologías de la educación popular de Paulo Freire; y la creación de cooperativas de producción y consumo (Vommaro, 2011: 202).

Estos procesos organizativos en los diferentes territorios podríamos comprenderlos como una etapa de latencia de las luchas rurales y campesinas, dado que se caracterizó por el afianzamiento de vínculos solidarios y la experimentación de nuevas prácticas políticas y económicas que configurarán nuevos antagonismos y serán fundamentales, luego, en los momentos de visibilidad y de emergencia de la acción colectiva disruptiva. En este sentido, podemos observar como

el proceso de agitación y concientización generado por el Movimiento Rural en su última etapa junto a esta crisis que generaba una pauperización creciente fueron los condimentos esenciales que permitieron la emergencia de movimientos rurales de protesta en las distintas provincias del nordeste organizados principalmente a partir del nucleamiento de los productores en cada provincia pero con una importante dinámica de articulación y conjunción a nivel regional (Galafassi, 2005: 247).

Estos elementos hacen referencia a cierta estructura de oportunidades políticas, en términos de Tarrow, en un contexto histórico caracterizado por una gran efervescencia política y social, que habilitó la irrupción en la escena pública de las Ligas Agrarias como movimiento social, en el marco de un ciclo ascendente de las protestas sociales a nivel nacional y latinoamericano.

Asimismo, quienes analizan el surgimiento de estas organizaciones rurales señalan que estas luchas campesinas emergentes también estuvieron vinculadas a la baja de los precios de las principales producciones (en particular, el algodón, la yerba mate, el té y el tabaco), la





cual generó un contexto crítico para la economía regional. Esta situación evidenció, por un lado, un aumento en la concentración económica, así como la centralidad que asumían los acopiadores y comercializadores en la compra y venta de la producción. Por otro lado, la situación de concentración de la tierra fue determinante para la activación de las familias agricultoras, siendo que el 75% de las propiedades, ocupaban sólo el 9% de las tierras; mientras que el 1% de las explotaciones se extendían sobre el 37% de las tierras (Ferrara, 1973). De ese modo, los reclamos y las protestas agrarias que se produjeron en las provincias del Nordeste a comienzos de los setenta se orientaban fundamentalmente hacia, en primer lugar, los monopolios de la comercialización, industrialización y exportación de sus producciones y, más profundamente, la posesión latifundista de la tierra. Esos serían sus adversarios fundamentales, junto con el gobierno dictatorial.

Es importante destacar, recuperando a Barbeta y Dominguez (2016), que si bien los reclamos se centraban principalmente en la cuestión de los precios de las producciones, entre las consignas de las Ligas también estaba presente la cuestión del acceso y el derecho a la tierra. En efecto, basándose en la concepción de que “la tierra debe ser para quien la trabaja”, las Ligas Agrarias se oponían a la concentración de la tierra y de los medios de producción reclamando por la implementación de políticas tendientes a promover el acceso y distribución de la tierra para las familias agricultoras y campesinas, que iban desde la reforma agraria mediante expropiación; la aplicación de impuestos a las tierras improductivas; la colonización de tierras; entre otras.

En referencia a sus modos de organización, las Ligas son definidas como organizaciones de base estructuradas sobre métodos democráticos (Ferrara, 2007). En las diferentes colonias,² en forma asamblearia y

² Se denomina “colonia” al resultado de las políticas de colonización agrícola que se desarrollaron en el país desde la mitad del siglo XIX y principios del XX, principalmente en la región del Litoral, a partir de la conformación de núcleos para el establecimiento de agricultores, sobre todo inmigrantes europeos, en tierras privadas o públicas, delimitadas y parceladas previamente.

mediante la participación directa de sus integrantes, se elegían delegados de colonia, quienes cumplían un rol central en la organización de las Ligas en otras instancias de participación y coordinación, como ser Comité de lucha zonal, Unión provincial, Coordinadora Central, Congreso General, Coordinadora Regional del Nordeste y Coordinadora Nacional de Ligas y Movimientos Agrarios (Vommaro, 2011). Así, cuatro elementos asumieron una importancia fundamental para estas organizaciones: consulta con la base, organización, concientización y movilización.

Las acciones que eran desarrolladas por las Ligas Agrarias se centraban principalmente en el reclamo reivindicativo, en la mayoría de los casos dirigido al Estado. Sin embargo, han sido significativas las acciones directas implementadas en diferentes provincias, como han sido cortes de ruta, bloqueos y tomas de galpones acopiadores, acompañando a los paros generales de agricultores. Así mismo, en el caso de la Liga Campesina Formoseña se registraron algunas tomas y ocupaciones de tierras, basadas en la idea de que la tierra debía ser para quien la trabaje. En este sentido, aparece una continuidad con parte del repertorio de acciones observados durante los sucesos de “El Grito de Alcorta” y la “Patagonia Rebelde”, como los cortes de ruta o las tomas de establecimientos de hacendados de la zona, así como la innovación en ocupaciones de fincas ociosas para campesinos sin tierra.

Por otro lado, estas experiencias tuvieron un acercamiento a experiencias de participación política partidaria, ligadas predominantemente con el peronismo, particularmente en la campaña presidencial de 1973 con la candidatura de Héctor Cámpora por parte del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) que implicaba el fin de la proscripción del peronismo en el país desde el año 1955 cuando Juan Domingo Perón fue derrocado como presidente constitucional por un golpe cívico militar. Vastos sectores juveniles, de trabajadores y sectores populares se sumaron a las luchas de la denominada “Resistencia Peronista”, así como también a algunos movimientos armados del peronismo de izquierda como Montoneros, las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) o las Fuerzas





Armadas Revolucionarias (FAR). Las Ligas Agrarias no fueron ajenas a estos procesos de movilización política a escala nacional y algunos de sus referentes y organizaciones de base se sumaron a algunas de estas expresiones políticas de resistencia frente a las dictaduras militares. Esto no sin generar tensiones internas y distintas miradas, a veces contrapuestas, dentro de las propias Ligas, que como vimos, tenían una gran diversidad en torno a sus demandas, sujetos organizados y formas de acción.

Como señalan varios autores, si bien las Ligas Agrarias tuvieron un gran crecimiento durante los primeros años de la década del setenta, a mediados de dicha década presentaban cierto debilitamiento, resultado de la confrontación con el gobierno de facto y de la profundización de conflictos internos. Con la llegada de la dictadura militar a partir de 1976 son ferozmente reprimidas, incluyendo activistas asesinados, desaparecidos, exiliados y presos, marcando la interrupción de estas experiencias de organización rural durante casi una década.

La reorganización campesina y las resistencias frente al neoliberalismo

En el marco de los procesos de recuperación del sistema democrático representativo en la Argentina desde fines del año 1983, (re)aparecen en la escena pública algunos viejos y nuevos movimientos sociales que marcarán la agenda de los conflictos sociales en Argentina por las siguientes décadas; entre ellos, los movimientos campesinos. Con dicho resurgimiento se abre un ciclo de acción colectiva de protesta por parte de estos movimientos sociales signado por un proceso de reconstrucción del entramado organizativo y comunitario, caracterizado, a su vez, por una escasa irrupción en el espacio público con el formato de protesta social. En efecto, en este período las acciones de estos colectivos sociales estuvieron más bien marcadas por procesos

organizativos y de reconstrucción identitaria que podemos caracterizar a partir de la noción de “latencia” (Melucci, 1994), la cual da cuenta justamente del momento en que se producen los replanteos y cambios en la construcción de significados, se generan nuevos códigos y se negocian internamente las estrategias de las acciones colectivas. En este marco se inscriben el surgimiento de organizaciones como el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) que, si bien se conforma como tal a nivel provincial en 1990, se da como corolario de un proceso organizativo previo entre distintas comunidades y organizaciones campesinas a nivel local, que comenzaron a articularse en defensa de sus territorios desde principios de la década del ochenta. Del mismo modo, la reconfiguración del Movimiento Agrario de Misiones (MAM) a partir de 1986 da cuenta de una recuperación de la experiencia organizativa de las Ligas Agrarias en la zona, que habían sido ferozmente reprimidas y desarticuladas durante la última dictadura militar. Esto mismo sucede con la Unión de Pequeños Productores del Chaco (UNPEPROCH) que retoma en parte las experiencias liguistas en la provincia en su recomposición organizativo también a mediados de los ochenta. No podemos comprender cabalmente la emergencia de estas organizaciones sin las redes latentes que permanecieron ocultas en los territorios campesinos durante los años oscuros de la dictadura militar y que, en el marco de una apertura de las oportunidades políticas signadas por el retorno del sistema democrático, empezaron a rearticularse para re-emergir en el espacio público en un nuevo ciclo de visibilidad y lucha por viejas y nuevas demandas de un campesinado en reconstrucción política e identitaria.

Cabe mencionar que todo este proceso organizativo de las organizaciones campesinas tuvo en varios casos una fuerte influencia de la Iglesia Católica, particularmente de los sectores más progresistas ligados a la Teología de la Liberación. Con respecto a las organizaciones campesinas es notoria la influencia y el accionar de curas y párrocos de base en los procesos organizativos, así como de ONG ligadas a estos sectores de la Iglesia, como es el Instituto de Cultura Popular (INCUPO), tanto en





el caso del MAM como del MOCASE y la UNPEPROCH, sobre todo durante los años ochenta.

Este proceso de influencia de la Iglesia, ligado a lo que Zibechi (2003) señala como una de las principales vertientes que conforman a los movimientos sociales latinoamericanos, va a perder fuerza posteriormente, cuando las acciones colectivas de los movimientos campesinos se radicalicen en defensa de sus territorios y cuando el proceso identitario fue acrecentando las diferencias con la Iglesia Católica, sobre todo con la estructura hegemónica de la misma, profundamente conservadora y que nunca aceptó la acción evangelizadora de la Teología de la Liberación (e incluso, la combatió).

Durante la década del noventa los movimientos campesinos empezaron a protagonizar acciones de resistencia que afloran en los mundos rurales, fundamentalmente, contra el avance de las reformas neoliberales impulsadas por el gobierno nacional de Carlos Menem.

Simultáneamente los movimientos campesinos empiezan a cobrar cierta autonomía, tanto del Estado como de la Iglesia y los partidos políticos. A comienzos de este período los movimientos luchaban por el acceso y/o reconocimiento a sus tierras, así como resistían el avance de emprendimientos del naciente agronegocio que comenzaba a ampliar, con cada vez más ímpetu, la frontera agropecuaria (Giarracca y Teubal, 2008).

La clásica demanda por el acceso a la tierra se va transformando paulatinamente en una demanda más integral de (auto)gestión y/o autodeterminación del territorio -en parte por influencia de los procesos de reemergencia indígena que se dieron en toda América Latina por estos años (Bengoa, 2009)- aunando las dimensiones productivas con las culturales e identitarias. En este proceso, la estrategia defensiva en torno a la tierra se transforma en una estrategia propositiva donde lentamente se van construyendo alternativas societales en esos “territorios insurgentes” (Wahren, 2011), espacios en que las comunidades campesinas van conformando diversas experiencias de vida en contraposición con las formas hegemónicas coloniales y capitalistas.

En este punto cabe mencionar la experiencia de las ferias francas, que se desarrolla en la provincia de Misiones y luego se expande a varias provincias argentinas. A comienzos de la década de los noventa, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), junto con otras organizaciones e instituciones de la provincia, abrió la discusión y la búsqueda de nuevas estrategias económicas para las familias agricultoras a través de las ferias francas que impulsaron la recuperación de prácticas agroecológicas, la organización de la economía social y una relación más directa entre productor y consumidor. Este formato se fue multiplicando paulatinamente por todo el país y desde diversos movimientos campesinos.

En paralelo, desde mediados de los noventa en la provincia de Jujuy se conforma la Red Puna como espacio de articulación y referencia regional, que contiene en su seno –no exenta de tensiones– identidades indígenas y campesinas y que impulsa tanto las disputas territoriales como la construcción de canales de comercialización alternativos y cooperativos con mucho éxito en el nivel local y provincial.

Simultáneamente en Chaco, la UNPEPROCH comenzó un proceso de tomas de tierras fiscales o privadas abandonadas en distintas regiones de la provincia para recuperar territorios para las familias campesinas, conformando una serie de “Reservas Campesinas” de uso familiar y/o comunitario desde la cual éstas “expresan y construyen una acción anclada en la recreación de una territorialidad campesina” (Astelarra et. al., 2014:430). En este período se forman también diversas organizaciones de base campesina en el centro y norte de la provincia de Córdoba, entre ellas la Asociación de Pequeños Productores del Noroeste de Córdoba (APENOC) y Unión Campesina de Traslasierra (UCATRAS) que junto a otros agrupamientos similares terminarán confluyendo años después en la fundación del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC).

Vemos así que el movimiento campesino atraviesa una etapa de expansión organizativa en un doble movimiento: por un lado, un proceso defensivo del territorio frente al ya mencionado avance de la frontera





agropecuaria (Giarracca y Teubal, 2008), que comienza a arrinconar y despojar a los territorios habitados por las comunidades campesinas; por otro, un proceso de recuperación identitaria y de recuperación de tierras improductivas que son ocupadas para ser puestas en producción bajo lógicas propias de las organizaciones campesinas, en contraposición con el modelo productivo del Agronegocio. Esta última forma de acción colectiva comenzó en este período, pero se extenderá con mayor fuerza durante el ciclo siguiente.

El movimiento que muestra un mayor crecimiento es el MOCASE, que se expande por casi toda la provincia y se convierte en una organización paradigmática para otros movimientos sociales rurales y urbanos por combinar la radicalidad de las acciones de protesta por medio de la acción directa (cortes de ruta, movilizaciones, etc.) con la práctica de la autodefensa territorial para evitar los desalojos y la construcción de una territorialidad contrahegemónica o “insurgente” en los territorios en disputa. De esta manera, el ejemplo del MOCASE fue importante para experiencias organizativas de otras provincias habilitando, junto con otros factores, la conformación de nuevas organizaciones campesinas en otras provincias (García Guerreiro, Hadad y Wahren, 2018).

Por último, cabe agregar que en esta etapa se afianza la noción de Soberanía Alimentaria como una demanda y, a la vez, un concepto clave de las luchas campesinas en Argentina, pero también a nivel latinoamericano y global (García Guerreiro y Wahren, 2016). Esta demanda se asoció rápidamente a la de Reforma Agraria y a la defensa y recreación de los territorios campesinos de forma integral.

Extractivismo, luchas campesinas por el territorio y relaciones con el Estado

Una de las características principales de la nueva etapa que se despliega desde principios de siglo XXI hasta la actualidad es que se

produce un afianzamiento de la (re)construcción territorial donde se despliegan estas formas societales alternativas en el marco de una profundización y consolidación del modelo extractivo que implicó un nuevo avance por sobre los territorios campesinos.

Por otro lado, se da un proceso de reconstitución de la institucionalidad estatal, del cual los movimientos campesinos –o por lo menos algunas de sus organizaciones más importantes– no fueron ajenos. Este último ciclo se enmarca en un proceso de re-institucionalización de la política en el que, a partir de los gobiernos kirchneristas, se relegitiman algunas de las instituciones estatales y formatos políticos institucionalizados en general, y donde diversos movimientos sociales que habían protagonizado las resistencias al neoliberalismo asumen posiciones cercanas a los gobiernos kirchneristas, incluyendo en esta constelación de movimientos sociales algunas organizaciones campesinas, indígenas, así como movimientos territoriales urbanos, fábricas recuperadas, entre otros. En este marco, los movimientos son interpelados a participar y transformar sus realidades desde adentro de la esfera estatal, así como a transformar el Estado “desde adentro”.

Pero simultáneamente a este proceso de institucionalización de algunos movimientos sociales y un reflujó de las acciones colectivas de protesta, emergen en distintas geografías del país una serie de conflictos que se han englobado bajo el nombre de “socio-ambientales”, en lo que Svampa (2012) ha denominado el “giro eco-territorial” de las luchas. Una multiplicidad de actores sociales locales van convergiendo en estas disputas que rearticulan las luchas por el territorio, permitiendo la vinculación de las nacientes asambleas ciudadanas de distintos pueblos con movimientos campesinos y comunidades indígenas, así como organizaciones ecologistas (García Guerreiro, Hadad y Wahren, 2018). Es por ello que planteamos que la apertura de este nuevo ciclo en las disputas por el territorio da cuenta de la ampliación de los actores involucrados y la consolidación de la demanda territorial-ambiental que complementa las demandas anteriores del acceso a la tierra y al reconocimiento político y





cultural. El territorio y lo ambiental en sentido amplio aparecen como los elementos estructurantes y ordenadores de estas luchas.

En este marco de intensificación del modelo de desarrollo extractivista, principalmente ligado a la megaminería, los hidrocarburos y los agronegocios, se profundiza la violencia rural por parte del Estado como por parte de empresas y actores privados que disputan los territorios con los diversos movimientos sociales rurales. Esto genera una serie de hechos represivos en distintas provincias con alta conflictividad territorial, algunos de los cuales provocaron la muerte de miembros de diversos movimientos indígenas y/o campesinos.

En torno al movimiento campesino, durante los primeros años de este período, se observa una multiplicación de experiencias de organización y resistencia campesina en diferentes provincias del país, como es el caso de la creación en la provincia de Mendoza de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST) y la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) entre el año 2001 y 2002; en Misiones de la Comisión Central de Tierras de Pozo Azul (CCT), la Unión de Trabajadores Rurales del Noreste Misionero (UTR), las organizaciones Productores Unidos de Santiago de Liniers (PUSALI) y Productores Independientes de Piray (PIP); entre otras. Asimismo, se dan una serie de articulaciones entre las que se destaca la creación en el año 2003 del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) que, como resultado de una década de articulación previa en torno a la Mesa Nacional de Productores Familiares, ha agrupado a organizaciones de base y de segundo grado de diferentes provincias: el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza y San Juan (UST), la Red Puna y Tierra Fértil de Jujuy, Encuentro Calchaquí de Salta, Coordinadora de Trabajadores Rurales de Misiones (COTRUM), el Movimiento Campesino de Neuquén (MCNN) y el MNCI Buenos Aires (con núcleos organizativos principalmente en algunos distritos del conurbano bonaerense). El MNCI, a su vez, se articula a nivel internacional participando de la Coordinadora

Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y la Vía Campesina (VC). Cabe mencionar que durante el año 2020, tras la manifestación de diferencias que se volvieron irreconciliables, algunas organizaciones que formaban parte del MNCI (entre ellas la UST, Red Puna, MCC, MCNN) se rearticulaban conformando el MNCI-Somos Tierra. Ambos espacios se mantienen dentro de la CLOC y VC.

Otro espacio de articulación es el que se dio en torno al Frente Nacional Campesino (FNC), en el marco del denominado conflicto entre “el campo” y el gobierno en 2008, compuesto por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero de Los Jurés, el Movimiento Agrario de Misiones (MAM), el Movimiento Campesino de Jujuy (MOCAJU) y el Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).

Asimismo, otro proceso organizativo que comienza en esta etapa se encuentra ligado a los territorios rururbanos donde campesinos y trabajadores rurales producen hortalizas, verduras, flores y frutas orientadas a los mercados agroalimentarios de las grandes ciudades como Buenos Aires, La Plata y el conurbano circundante, la denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En el año 2005 emerge la primera organización en estos territorios –la Cooperativa de Trabajadores Rurales (CTR) que forma parte actualmente del Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional (FPDS-CN)– puntualmente en la zona rural del municipio de San Vicente, donde vecinos de barrios populares de la ciudad, junto a activistas de la organización y pobladores rurales de la zona conforman un espacio organizativo y cooperativo para producir alimentos, principalmente hortalizas, verduras, leche, quesos y otros derivados lácteos, huevos y carne de distintos animales que crían de forma conjunta y se constituyó en la primera experiencia de rearticulación campesina en la zona rururbana de la Provincia de Buenos Aires.

En el año 2010 se funda en la zona rururbana del Parque Pereyra Iraola –cerca de la ciudad de La Plata– la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), como un desprendimiento de la CTR, articulando a diversas familias de productores hortícolas de esta zona donde se concentran gran





parte de los trabajadores rurales y/o campesinos del AMBA. La organización fue creciendo exponencialmente, en toda la región y simultáneamente fue incorporando diversas organizaciones campesinas en distintas provincias del país.

Esta organización adquirió un fuerte protagonismo en las luchas campesinas de este ciclo a partir de la innovación del repertorio de acciones de protesta campesina con la realización, además de movilizaciones y cortes de ruta, de ferias populares –denominados “Verdurazos”- donde regalaban o vendían a precios populares frutas y verduras en las plazas centrales de las grandes ciudades para visibilizar sus principales demandas: precios dignos para sus productos, acceso a la tierra, apoyo a la producción frutihortícola e infraestructura y servicios en sus territorios. Esta innovadora forma de protesta generó una visibilidad y legitimidad a los reclamos de este sujeto que, aún viviendo en las orillas rururbanas de las grandes ciudades, había estado invisibilizado hasta entonces.

Por otra parte, se constituyó en el año 2014 el MTE Rural (su primera denominación fue Movimiento de Pequeños Productores), que es la rama agraria del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que agrupa a nivel nacional, además de pequeños productores rurales, a cartoneros (recicladores urbanos populares), trabajadores de la economía popular, cooperativas de trabajo y otras expresiones de trabajadores informales y/o precarizados, y tiene presencia en varias provincias del país (Pinto, 2020).

Además de estas experiencias, emergieron otras organizaciones similares como la rama Rural del Movimiento Popular la Dignidad en diferentes provincias; la UST Campesina y Territorial como un desprendimiento de la UST de Mendoza; el Movimiento Campesino de Liberación, con presencia en distintas provincias y ligado al Partido Comunista; el Frente Agrario Evita como espacio rural del Movimiento Evita, entre muchas otras organizaciones campesinas y de actores rurales subalternos.

Una parte sustancial de estas organizaciones confluyeron en el año 2019 en un encuentro que articuló diversas luchas de los movimientos sociales rurales, principalmente campesinos, pero también pueblos indígenas y productores familiares: el Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular donde miembros de organizaciones provenientes de todo el país debatieron en torno al acceso a la tierra y el territorio, los impactos sociales, ambientales y sanitarios del modelo de agronegocios, fomento de la producción y comercialización de las agriculturas campesinas e indígenas y de la Agroecología así como políticas públicas orientadas hacia el sector. Una de las principales conclusiones del Foro Agrario fue la necesidad de impulsar las acciones y debates por una reforma agraria integral, retomando viejas luchas y tradiciones de los movimientos campesinos, en conjunción con la demanda de Soberanía Alimentaria y la promoción y expansión de la agroecología como forma productiva alternativa a los agronegocios (Hadad, Palmisano y Wahren, 2020).

En este plano, la multiplicación de organizaciones campesinas pareciera indicar una profundización del ciclo de protesta del movimiento campesino, en el marco de un fortalecimiento del modelo de agronegocios y extractivo en todo el país, pero al mismo tiempo, se consolida una apertura de la estructura de oportunidades políticas que expresan los sucesivos gobiernos kirchneristas para la relación cada vez mayor de los movimientos campesinos con el Estado, las políticas públicas y los recursos estatales. Por su parte, desde el Estado se crea, en el año 2006, en el ámbito del Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Foro de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (FONAF), con la pretensión de generar un espacio institucional de representación de las organizaciones campesinas e indígenas dentro del Estado.

Asimismo, como expresión de la mayor institucionalización que asume el sector, en 2008 el Programa Social Agropecuario (PSA), una de las pocas políticas orientadas a apoyar a nivel nacional los mundos campesinos e indígenas, es convertido en Subsecretaría de Desarrollo





Rural y Agricultura Familiar (SENAF), incorporando en su seno a importantes referentes e integrantes de los movimientos campesinos, algunos de los cuales ya venían participando como funcionarios del PSA desde el año 2006. Esto se vio reforzado aún más en el año 2014 cuando este organismo pasa a tener el rango de Secretaría y se fortalece dentro de la misma la gestión de referentes del MNCI y del Frente Agrario Evita. En el interregno del gobierno conservador/neoliberal de Mauricio Macri, se desmantelan algunas de estas políticas públicas, se despide a gran parte de los trabajadores de la SENAF y los movimientos campesinos quedan alejados de la gestión de la política pública orientada hacia su sector.

Con la vuelta al gobierno del kirchnerismo a partir del año 2020, estas vinculaciones se vuelven a profundizar. En efecto, en el marco del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGyP), el gobierno de Alberto Fernandez le devolvió el rango a la ahora rebautizada Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI), designando en su coordinación a referentes del Movimiento Evita Rural y del Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural (MTE Rural). Asimismo, referentes de estos movimientos, así como del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC) ocupan importantes cargos como funcionarios y/o asesores.

Por último, se encuentra la que es quizás la experiencia más interesante de articulación entre el Estado y los movimientos sociales rurales: el Mercado Central de Buenos Aires³ con la gestión de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) desde el año 2020. Lo más sobresaliente de esta experiencia resulta en que es la primera vez que un movimiento social rural tiene la gestión formal de un organismo estatal que regula una rama hegemónica de producción específica, en este caso el complejo fruti-hortícola, y no solamente los organismos que se focalizan en los actores subalternos de los mundos rurales.

³El Mercado Central, es el principal mercado de abasto frutihortícola de la Argentina y tiene bajo su órbita la comercialización de gran parte de los alimentos que se distribuyen en la región del AMBA, abarcando a más de 14 millones de personas.

Lo que se observa en este período es una mayor relevancia del Estado en las demandas e interpelaciones de las organizaciones campesinas que llevan incluso en varios casos a disputas por la participación en la gestión del mismo o parte del mismo. En este marco, podemos observar que el actual gobierno de Alberto Fernández actúa en dos líneas contradictorias entre sí: por un lado, profundiza el modelo del agronegocio y de una tecnología funcional a los intereses del gran capital transnacional y del modelo extractivo en general. Por otro lado, plantea algunas políticas públicas orientadas hacia la agroecología y las agriculturas campesinas e indígenas aunque con un presupuesto mucho menor que el orientado a promover a los sectores del modelo de Agronegocios.

Cabe mencionar también las múltiples articulaciones en la lucha que se fueron gestando entre diversas organizaciones campesinas y movimientos sociales urbanos –movimientos de desocupados, organizaciones estudiantiles, empresas recuperadas y cooperativas, etcétera–, que aunaron fuerzas para acciones que van desde la realización de movilizaciones y protestas en el espacio público, hasta la construcción de propuestas concretas como redes de comercialización solidaria de productos campesinos y/o agroecológicos.

En términos de la esfera productiva, podemos afirmar que en esta etapa se consolida una apuesta por la agroecología, como forma de producción alternativa al modelo de desarrollo de los agronegocios, que combina saberes académicos y agronómicos con saberes indígenas y campesinos ancestrales para producir en armonía con la naturaleza y sin insumos externos de origen industrial (agrotóxicos, fertilizantes, etcétera) que permiten producir alimentos más económicos, sin contaminantes y reduciendo los impactos sanitarios y ambientales que general el modelo hegemónico. Así la Agroecología se suma paulatinamente a esta constelación de demandas y conceptos emergentes desde los movimientos campesinos junto con la Soberanía Alimentaria y la Reforma Agraria Integral y Popular.

En este sentido nos interrogamos acerca de si estas experiencias





de resistencia y construcción de alternativas permiten hablar de cierta recampesinización de la agricultura que, aunque esté emergiendo desde los márgenes del régimen agroalimentario mundial, constituye una respuesta de resistencia al impacto sobre la agricultura del neoliberalismo y la globalización económica (Sevilla Guzmán y González de Molina, 2004).

De este modo, los diferentes movimientos sociales campesinos de la Argentina promueven la recuperación de sus saberes tradicionales, la defensa y acceso a sus territorios y el despliegue de prácticas agroecológicas. A esto se suma la noción de Soberanía Alimentaria, vinculando el problema del acceso de alimentos con el respeto a la cultura productiva, a los saberes locales de los pueblos y al paradigma productivo de la agroecología; el cual está basado en el uso de insumos bio-ecológicos (sin agrotóxicos ni fertilizantes de origen industrial), la pequeña y mediana escala productiva, la comercialización en mercados de cercanía y un horizonte emancipatorio que cuestiona la lógica de explotación de la fuerza de trabajo y de la naturaleza suplantándola por una lógica de reciprocidad y solidaridad, tanto entre productores como con la propia naturaleza (García Guerreiro y Wahren, 2016).

Así la noción de Soberanía Alimentaria y la de Agroecología abonan a la resignificación de una vieja demanda campesina, que ya vimos que aparecía en las primeras luchas del siglo XX, principalmente en el “Grito de Alcorta”, y que fue retomada con fuerza por las Ligas Agrarias en las décadas del sesenta y el setenta del siglo pasado: la Reforma Agraria. Actualmente, además de reclamar el reparto de las tierras, esta demanda implica también una recuperación integral de los territorios rurales que incorpore múltiples dimensiones como la educación, la salud, y una forma de producción alternativa, asociada a la reciprocidad con la Naturaleza y a la producción de alimentos para el autoabastecimiento y los mercados locales. Por eso los movimientos sociales rurales hablan de una Reforma Agraria Integral, o una Revolución Agraria.

Conclusiones

A lo largo del siglo XX y a comienzos del siglo XXI podemos observar como el campesinado como sujeto y clase incómoda ha sobrevivido a, por lo menos, tres modelos de desarrollo agrario hegemónico: el modelo agroexportador, el modelo agroindustrial y el modelo de agronegocios. En cada uno de los períodos abordados en el presente trabajo podemos vislumbrar un repertorio de acciones que mantiene una línea importante de continuidad en las movilizaciones, los cortes de ruta, las asambleas de base, la autodefensa territorial, a las que se fueron sumando las ocupaciones de tierra y los “Verdurazos” o ferias populares en espacios públicos. La huelga agraria como repertorio ligado más a la tradición de los trabajadores rurales fue perdiendo peso en el repertorio de acción campesina y de los actores subalternos rurales que fuimos analizando.

Por otra parte, se puede afirmar que el campesinado ha actuado de forma flexible de acuerdo a las distintas coyunturas y estructuras de oportunidades políticas que se le han presentado a lo largo de estos diferentes períodos, combinando estrategias de confrontación con otras de armado de alianzas y negociaciones con otros actores político-sociales y/o con el Estado.

Asimismo, los procesos identitarios del campesinado, así como su despliegue organizativo, ha sido dinámico, fluctuando de acuerdo a cada período histórico, pero manteniendo algunas de sus demandas básicas que se fueron enriqueciendo a lo largo del devenir de las luchas campesinas. De la lucha por el acceso a la tierra y la concreción de la Reforma Agraria, hasta la constelación de demandas que implica el pasaje a la defensa y disputa por el territorio en relación con la Soberanía Alimentaria, la Agroecología y la Reforma Agraria Integral y Popular, hay un proceso de resignificación y repolitización del sujeto campesino que se fortalece frente a otras denominaciones “despolitizadas” como las de minifundistas, pequeños productores, agricultores familiares, entre otras.

Pero esta identidad campesina también aparece atravesada, a lo





largo de todo este período de luchas por otras identidades, también politizadas, que la enriquecen, complementan y tensionan, como la de los trabajadores rurales, los trabajadores de la tierra, entre otras identidades. Lo que marca esta reificación identitaria es, entonces, que el campesinado en la Argentina se encuentra en permanente (re)construcción, anclada en los territorios y las luchas que protagoniza y es en esas mismas acciones colectivas y procesos de territorialización en donde la identidad campesina encuentra sus clivajes principales y su propio dinamismo.

Los territorios campesinos actúan entonces como reservorio de esta capacidad de lucha y supervivencia del sujeto campesino, mostrando a una clase resiliente, dinámica y que no sólo resiste a los diferentes embates, despojos y arrinconamientos del sistema hegemónico, sino que propone y ensaya experiencias sociales alternativas, de forma integral y ancladas en los territorios, en torno a las diferentes esferas de la vida social: agroecología y producción cooperativa, salud comunitaria, educación y comunicación popular, entre múltiples dimensiones de la territorialidad campesina en las diferentes geografías de nuestro país, desde zonas rurales alejadas de los centros urbanos, hasta territorios campesinos rururbanos en el (des)borde de las grandes ciudades.

Esta territorialidad expandida le ha permitido al campesinado conformar redes de articulación cada vez más sostenidas con sectores populares urbanos, a través de luchas comunes en defensa de los territorios y frente al extractivismo. En estas ciudades también se despliegan cadenas alternativas de comercialización de alimentos, acercando como nunca antes a productores campesinos con los consumidores urbanos de forma directa.

Por otra lado, se observa en el último período abordado un viraje importante respecto a la vinculación de los movimientos campesinos respecto al Estado, incluyendo la participación directa en las políticas públicas y gestión de cargos de gobierno tanto a nivel nacional como en niveles provinciales y locales, así como experiencias de co-gestión, propuestas de políticas públicas e, incluso, participación directa en la

arena político-electoral. A diferencia de etapas anteriores de las luchas campesinas, actualmente la contradicción y tensión con el Estado se combina con cada vez más vasos comunicantes con las arenas de negociación, articulación e incluso incorporación plena a las estructuras estatales.

Esta dinámica se combina y tensiona con formas de territorialización contrahegemónica que se producen desde sus espacios de base, alejados de estas disputas institucionales y donde se mantienen prácticas disruptivas y autónomas. Es decir, no deja de ser un proceso complejo, plagado de tensiones, disputas y contradicciones, incluso al interior de los propios movimientos campesinos.

Así, en los albores del siglo XXI el campesinado en la Argentina sigue luchando por sobrevivir con sus modos de vida campesina; lo mismo por lo que luchaban sus antepasados de clase en las rebeliones campesinas europeas desde el siglo XXI, los campesinos rusos del siglo XIX y de la Revolución de 1917-1921, los campesinos de la Revolución Mexicana de 1910-1920 y de tantas rebeliones y revoluciones en el convulsionado siglo XX latinoamericano. Hoy en día, sigue presente esa vieja consigna campesina, tan “rústica” como radical, de “Tierra y Libertad” o, de forma más actualizada, “Territorio y Libertad”.

Bibliografía

Archetti, E. P. y Stølen, K. A. (1975). *Explotación familiar y acumulación de capital en el campo argentino*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores.

Arcondo, A. (1980). “El conflicto agrario argentino de 1912. Ensayo de interpretación”, en *Revista Desarrollo Económico*, Vol. 20, N° 79, octubre-diciembre. Buenos Aires.

Astelarra, S. et al (2014). “Recampesinización y recreación política del campesinado en un escenario de despliegue de los agronegocios. El





caso de las reservas campesinas en el Chaco”, en *Veredas: Revista del Pensamiento Sociológico*, (28), 405-432. México.

Azcuy Ameghino, E. (2012). “En torno del Grito de Alcorta y apuntes sobre la conflictividad agraria pampeana en el siglo XX”, en *Realidad económica*, 272, 105-126. Buenos Aires.

Barbetta, P., y Domínguez, D. (2016). “Derecho a la tierra y activismo rural en Argentina: De las Ligas Agrarias a los movimientos campesinos”, en *Alternativa. Revista de Estudios Rurales*, 3(6), Article 6. Córdoba.

Bartolomé, L. J. (1982). “Base social e ideología en las movilizaciones agraristas en Misiones entre 1971 y 1975 Emergencia de un populismo agrario”, en *Desarrollo Económico*, 22(85), 25-56. Buenos Aires.

Bayer, O. (1974). *Los vengadores de la Patagonia Trágica*. Buenos Aires: Galerna.

Bengoa, J. (2009). “¿Una segunda etapa de la Emergencia Indígena en América Latina?”, en *Cuadernos de antropología social*, 29, 7-22. Buenos Aires.

Berger, J. (2006). *Puerca tierra*. Buenos Aires: Alfaguara.

Bidaseca, K., y Lapegna, P. (2006). “El Grito de Alcorta revisitado: Cultura y sentimientos en la acción colectiva”, en *Anuario*, 21, 309-336. Rosario.

Bonaudo, M. y Godoy, C. (1985). “Una corporación y su inserción en el proyecto agro-exportador: la Federación Agraria Argentina (1912-1933)”, en *Revista Anuario* N° 11. Rosario.

Castoriadis, C. (2010). *La institución imaginaria de la sociedad*. Buenos Aires: Tusquets.

Chayanov, A. (1981). Sobre la teoría de los sistemas económicos no capitalistas. En *Chayanov y la teoría de la economía campesina* (pp. 49-79). Ediciones Pasado y Presente.

Ferrara, F. (1973). *Qué son las ligas agrarias: Historia y documentos de las organizaciones campesinas del Nordeste argentino*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

_____ (2007). *Los de la tierra: De las Ligas Agrarias a los Movimientos Campesinos*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Galafassi, G. (2005). “Rebelión en el campo. Las Ligas Agrarias de la región Chaqueña y la discusión del modelo dominante de desarrollo rural (1970-1976)”, en Lázaro & Galafassi (Comp.), *Sujetos, política y representación del mundo rural. Argentina 1930-1975*. Buenos Aires: Siglo XXI.

_____ (2008). “El Movimiento Agrario Misionero en los años setenta. Protesta, movilización y alternativas de desarrollo rural”, en *Revista Herramienta*, 38 Año XII. Buenos Aires.

García Guerreiro, L., & Wahren, J. (2016). “Seguridad Alimentaria vs. Soberanía Alimentaria: La cuestión alimentaria y el modelo del agro-negocio en la Argentina”, en *Trabajo y Sociedad*, 26. Santiago del Estero.

García Guerreiro, L., Hadad, G., & Wahren, J. (2018). “De (re)emergencias y resistencias territoriales: La lucha campesina e indígena en la Argentina contemporánea. REMS”, en *Revista de Estudios Marítimos y Sociales*. Mar del Plata.

Giarracca, N., & Aparicio, S. (1991). *Los campesinos cañeros: Multi-ocupación y organización*. Cuadernos N°3. Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Buenos Aires.

Giarracca, N. (Ed.) (1999). *Estudios rurales: Teorías, problemas y estrategias metodológicas*. Buenos Aires: La Colmena.

Giarracca, N., y Teubal, M. (2008). Del desarrollo agroindustrial a la expansión del agronegocio: El caso argentino. En B. Mancano Fernandez, *Campesinato e agronegócio na América Latina: A questão agrária atual*. San Pablo: Expressao Popular-CLACSO.

Grela, P. (1958). *El grito de Alcorta: Historia de la rebelión campesina de 1912*. Buenos Aires: Tierra Nuestra.

Hadad, G., Palmisano, T., & Wahren, J. (2020). *Argentina Informe 2019. Acceso a la tierra y el territorio en Sudamérica* (Informe 2019. Acceso a la tierra y el territorio en Sudamérica, pp. 43-76). Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica.





Lasa, C. (1990). "Un proceso de mediación política. El Movimiento Rural y las Ligas Agrarias Chaqueñas", en *Sociedad y Religión* nº 7. Buenos Aires.

Melucci, A. (1991). "La acción colectiva como construcción social", en *Estudios Sociológicos*, 9(26), 357-364. México.

_____ (1994). "Asumir un compromiso: Identidad y movilización en los movimientos sociales", en *Zona abierta*, 69, 153-180. Madrid.

Paz, R. (2006). "El campesinado en el agro argentino: ¿repensando el debate teórico o un intento de reconceptualización?", en *European Review of Latin American and Caribbean Studies*, 81, 65-85. Amsterdam.

Pinto, L. H. (2020). "Agroecología y recampesinización cualitativa en el agro argentino contemporáneo (2014-2019)", en *Boletín de Estudios Geográficos*, 113, 161-180. Mendoza.

Porto-Gonçalves, C. W. (2002). Da geografia ás geo-grafías: Um mundo em busca de novas territorialidades. En A. E. Ceceña & E. Sader (Eds.), *La Guerra Infinita: Hegemonía y terror mundial*. Buenos Aires: CLACSO.

Roze, J. P. (1992). *Conflictos agrarios en la Argentina: El proceso liguista*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina.

Sevilla Guzmán, E. (1983). Apéndice a la primera parte: una breve incursión por "la otra sociología rural", en Newby, Honrad y Sevilla Guzmán, Eduardo, *Introducción a la Sociología Rural*. Madrid: Alianza.

Sevilla Guzmán, E. y González de Molina, M. (2004). Sobre la evolución del concepto de campesinado en el pensamiento socialista. Un aporte para la Vía Campesina, en http://www.pronaf.gov.br/dater/arquivos/evolucion_del_concepto_de_campesinado.pdf

Shanin, T. (1983). *La clase incómoda: Sociología política del campesinado en una sociedad en desarrollo (Rusia 1910 - 1925)*. Madrid: Alianza.

Solberg, C. (1971). "Rural Unrest and Agrarian Policy in Argentina, 1912-1930", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, Vol. 13, Nº 1 (Jan).

Svampa, M. (2012). "Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico en América Latina", en *Observatorio Latinoamericano y Caribeño, Año XIII(32)*. Buenos Aires.

Tapia, L. (2008). *Política Salvaje*. La Paz: CLACSO - Muela del diablo.

Tarrow, S. (2009). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

Tilly, C. (2019). Acción colectiva. *Apuntes de Investigación del CECYP, 0(6)*, 9-32.

Toledo, V. M. (1992). "Utopía y Naturaleza. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de América Latina", en *Nueva sociedad, 122*, 72-85. Buenos Aires.

Vommaro, P. (2011). "Movilización social desde el protagonismo juvenil: Experiencias de dos organizaciones rurales argentinas", en *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 9 (1)*, 191-214. Manizales.

Wahren, J. (2011). Territorios Insurgentes: La dimensión territorial en los movimientos sociales de América Latina. IX Jornadas de Sociología, Buenos Aires.

Zibechi, R. (2003). "Los movimientos sociales latinoamericanos: Tendencias y desafíos", en *Observatorio Social de América Latina, 9*. Buenos Aires.

Zubimendy, M. A. y Sampaoli, P. (2019). "La Patagonia rebelde en el noreste de Santa Cruz. Nuevos estudios a partir del manuscrito inédito de un peón rural", en *Ejes de Economía y Sociedad, 3(4)*, 102-122. Paraná.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

De la dignidad. Reflexiones sobre la racionalidad de las acciones insurreccionales

On dignity. Reflections on rationality of insurreccional actions

Alberto Bonnet*

*Recibido: 10 de octubre de 2020
Aceptado: 11 de noviembre de 2020*

Resumen: Este artículo propone algunas reflexiones sobre la racionalidad de las acciones insurreccionales. Pone en discusión la capacidad explicativa de los modelos de explicación de la acción colectiva a partir de agentes individuales dotados de una racionalidad utilitarista maximizadora de valores ex ante respecto de la propia acción. Y esboza un modelo alternativo, dialéctico, de explicación de la relación entre conciencia y acción. Este modelo descansa en una racionalidad ex post, según la cual la propia acción colectiva genera retroactivamente esos valores (aquí sintetizados mediante el concepto de "dignidad") que dotan de racionalidad a las acciones insurreccionales.

Palabras clave: Acción, conciencia, acción colectiva, racionalidad, dignidad.

Abstract: This article proposes some reflections on the rationality of insurreccional actions. It questions the explanatory capacity of the models for explaining collective action based on individual agents endowed with a utilitarian rationality that maximizes values ex ante with respect to the action itself. And he outlines an alternative, dialectical model for explaining the relationship between consciousness and action. This model rests on an ex post rationality, according to which collective action itself generates retroactively those values (here synthesized by the concept of "dignity") that endow insurreccional actions with rationality.

Key words: Action, conscience, collective action, rationality, dignity.

* Universidad Nacional de Quilmes y Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Email: abonnetprivado@gmail.com. Agradezco enfáticamente a varios compañeros que comentaron versiones previas de este artículo y, si estuve a su altura, me ayudaron mucho a mejorarlo. Me refiero a John Holloway, Javier Waiman, Mariana Giarretto, Pablo Romá, Adrián Piva y, en especial, a Mariana Dimópulos —una conversación con ella sobre la espontaneidad en Adorno me impulsó a escribir estas páginas.

A nuestros insurrectos en Chile

“En la tormenta del período revolucionario, también el proletario se transforma de un previsor padre de familia en un ‘revolucionario romántico’ para quien hasta el bien supremo, la vida misma, por no hablar del bienestar material, tienen poco valor comparado con el ideal de la lucha”

(Luxemburg: *Massenstreik, Partei und Gewerkschaften*)

Introducción

¿Era José Miguel Uribe Antipani un agente racional? No lo sabemos. Sólo sabemos que era un obrero de la construcción de 25 años, padre de un niño pequeño, que volvía de una multitudinaria movilización protagonizada en Curicó cuando, la noche del 21 de octubre de 2019, un camión militar se infiltró entre las barricadas. Sabemos también que José Miguel, desarmado, insultó a los militares y que los militares dispararon. Y sabemos que cayó en la acera, baleado en el pecho, y que, aunque sus compañeros lo socorrieron, murió poco después en un hospital.

Fue la primera víctima fatal de la represión en Chile. Sin embargo, desde entonces, miles de chilenos se sumaron a las movilizaciones, cientos perdieron la vista, decenas la vida, y siguen empeñados hasta nuestros días en enfrentar la represión de los militares. ¿Son agentes racionales estos jóvenes chilenos? ¿Qué cálculo de costos y beneficios puede explicar las acciones de estos jóvenes que desafían la violencia armada del estado sin más armas que sus voces y unas pocas piedras?

Esta pregunta o, planteada en términos sociológicos más generales, la pregunta por la racionalidad de acciones insurreccionales de estas características, nos enfrenta a un problema muy complejo. Vamos a proponer en las siguientes páginas algunas reflexiones para aproximarnos a una respuesta. Sospechamos de antemano que este problema es tan complejo que no puede resolverse sin resto en el estrecho marco del método sociológico que prescribiría la división del trabajo intelectual vigente.





Vamos a empezar entonces situándonos en el terreno de la reflexión filosófica, para desplazarnos después hacia el marco propiamente sociológico del análisis de los conflictos sociales. Naturalmente, estas páginas no pretenden proponer una explicación filosófica o psicológica de las acciones insurreccionales, sino sólo delinear un concepto alternativo de racionalidad que quizás resulte fértil para orientar la investigación propiamente sociológica de dichas acciones.

De la conciencia a la acción (y viceversa)

Antes que nada, precisemos nuestra pregunta. Cualquier práctica social, incluyendo las acciones insurreccionales que nos incumben, se desenvuelve inexorablemente dentro de las formas sociales, es decir, de los modos específicos de existencia de las relaciones sociales, propias de la sociedad capitalista. Así, la actividad productiva cotidiana es reproducción de la forma capital, la actividad política cotidiana es reproducción de la forma estado, y de así en más. Sin embargo, la constatación igualmente cotidiana de la existencia de prácticas que desafían esas formas – y a veces muy descaradamente, como en el caso de esas acciones insurreccionales- nos exige preguntarnos acerca de la peculiar manera en que ese contenido de relaciones sociales se encuentra subsumido dentro de esas formas capitalistas. Esta subsunción es contradictoria. El carácter antagónico del contenido en cuestión (esto es, relaciones sociales de explotación y opresión) convierte a la relación entre ese contenido y sus formas (capital, estado) en una relación contradictoria. Las relaciones sociales existen entonces, para valernos de una expresión de Holloway, “en-contra-y-más-allá” de esas formas capitalistas.¹

Esta contradicción entre forma y contenido es el punto de partida para entender la existencia de acciones sociales, como las acciones in-

¹ Véase Holloway (1980 y escritos posteriores). Un análisis exhaustivo de esta relación entre forma y contenido, que no puede reproducirse en estas pocas páginas, se encuentra en Bonnet (2019).

surreccionales, que desafían abiertamente el orden capitalista. Pero no alcanza para explicarlas. Porque dicha contradicción es inmanente a la forma o, en otras palabras, es su negatividad interna, y no algo positivo existente por fuera de ella. Resta explicar en consecuencia de qué manera esta contradicción inmanente a la forma puede convertirse en acción que desafía dicha forma. En otras palabras: no alcanza con suponer que la vida de José Miguel, como obrero de la construcción y ciudadano chileno, era seguramente una vida contradictoria. Hay que explicar, además, su pasaje a la acción.

La explicación más a mano de este pasaje a la acción se conformaría con invocar la mediación de la conciencia política. Y la prensa informó, en los hechos, que José Miguel no carecía de alguna conciencia política crítica. Pero aún esta explicación resultaría insuficiente porque entre la conciencia y la acción siempre subsiste una distancia. Distancia por demás evidente, en este caso, entre cualquier conciencia política con la que José Miguel haya podido contar de antemano y su acción desarmada contra un camión entero de militares armados.

Una manera posible de conceptualizar esta distancia entre la conciencia y la acción políticas es recurriendo a una crítica esgrimida por Adorno a la moral kantiana.² Adorno nos recuerda que Kant “concebía a la razón práctica como la verdaderamente ‘pura’, es decir: soberana frente a todo lo material”. Ante lo que objeta que “la conciencia, la comprensión racional, no equivalen simplemente a acción libre, no pueden ser equiparadas lisa y llanamente con la voluntad” (1975: 227). La acción no puede reducirse sin más a la conciencia. Adorno (1966) denomina como “lo añadido” –*das Hinzutretende*- (pp. 224 y ss.) a ese excedente puesto entre paréntesis por la abstracción racionalista que pretende reducir la acción a la conciencia. “La praxis necesita también más: otro que

² Ante la eventual objeción del lector de que no puede asimilarse la acción política a la acción moral, vale recordar que para Adorno la acción moral es aporética (“no cabe la vida justa en la vida falsa”; 1987: 37) y, en consecuencia, la problemática moral conduce inexorablemente a la problemática política (“la pregunta por la vida recta sería la pregunta por la política recta”; 2019a: 321).





no se acaba en la conciencia, somático y convertido por la mediación en racional a la vez que distinto cualitativamente de la razón” (1975: 229).

Precisemos las características de este añadido. Por un lado, afirma Adorno, es algo “somático”. Este añadido se origina en el sufrimiento –y el sufrimiento de nuestro cuerpo es la quintaesencia de todo sufrimiento. La decisión de pasar a la acción es la decisión de resistir ese sufrimiento, es decir, es la negación concreta de ese sufrimiento. “Sólo hay una forma de comprender la libertad: en negaciones concretas, a partir de la figura concreta de lo que se le opone” (*idem*: 230). Por otro lado, afirma en consecuencia Adorno, es algo “cualitativamente distinto de la razón”, que “posee un aspecto irracional según las reglas de juego racionalistas” (*idem*: 228). Y esto nos plantea un problema: entre la conciencia y la acción se interpone algo más, que no puede reducirse sin resto a la conciencia: un impulso que, aunque mediado por la conciencia, nos empuja más allá de sus límites, es decir, hacia la acción propiamente dicha. “Voluntad es la fuerza de la conciencia con la que ésta abandona el terreno de su jurisdicción y transforma así lo que meramente es; su reverso es la resistencia” (*idem*: 241).

Adorno ilustra este impulso a través de dos ejemplos. El primero refiere a la venganza de Hamlet en el drama de Shakespeare (Adorno, 2019b: 434 y ss.). Hamlet pasa de sus meditaciones sobre las afrentas que ha sufrido a su acción vengadora recién en el último acto del drama -y en ese momento las acciones se precipitan vertiginosamente, esquivando en gran medida sus previsiones. Hamlet actúa porque ya no puede continuar posponiendo la acción, es decir, porque la escisión entre su conciencia y su (in)acción amenaza con convertir en efectiva su fingida demencia.

El segundo refiere a la intervención de von Schlabrendorff en el conocido complot del 20 de julio de 1944 para asesinar a Hitler. Adorno recuerda que preguntó al ex oficial del ejército alemán: “usted sabía muy bien que las chances de éxito del complot eran mínimas y debía saber también que si eran descubiertos les esperaba algo mucho peor que la muerte, algo inimaginablemente peor. ¿Cómo entonces fue para ustedes

posible actuar de esa forma?”. Y recuerda que el militar respondió: “hay situaciones que son tan insoportables que no se puede simplemente seguir siendo parte, da lo mismo lo que suceda y da lo mismo lo que le suceda a uno en el intento de cambiarlas” (Adorno, 2019a: 43).

El príncipe danés y el oficial alemán, como nuestro obrero chileno acaso, actuaron sin detenerse a evaluar las consecuencias de su acción, simplemente porque permanecer en la inacción ya les resultaba completamente insoportable. Actuaron porque “¡ya basta!”.

Ahora bien, ya es hora de reconocer que parecemos estar ante una aporía bastante incómoda. Si el pasaje a la acción no puede explicarse sin resto a partir de la conciencia, si existe ese añadido, que Kant no hubiera dudado en catalogar como patológico en aras de la perfecta autonomía de la razón práctica, la decisión involucrada en ese pasaje a la acción es en apariencia una decisión irracional. Y mientras tanto no estamos nosotros, como ciertamente tampoco estaba Adorno (2019b: 439), muy cómodos en compañía de ningún decisionismo. ¿Hay alguna salida a esta aporía?

No estamos seguros, pero avancemos. Comencemos pues revisando los términos en los que está planteada esta aporía. Adorno afirma que ese añadido siempre esta ya “racionalmente mediado”, aunque tenga un aspecto irracional conforme “las reglas de juego racionalistas”. Esto sugiere que la salida de esa aporía quizás se encuentre en un concepto de racionalidad que trascienda esas reglas de juego racionalistas. Acaso en una racionalidad que no nos conmine a establecer una relación estática (o meramente deductiva) entre el fundamento (la conciencia) y lo fundamentado (la acción), sino que nos permita establecer una relación más dinámica (o dialéctica) entre ambas.

Una manera de pensar esta relación dialéctica entre conciencia y acción es en analogía con la noción psicoanalítica de acto.³ El acto psi-

³ Véanse especialmente a las lecciones 11-12 del seminario XIV *La logique du fantasme* y 1-4 del seminario XV *L'acte psychoanalytique*, dictadas todas en 1967, en vísperas del mayo francés -pero también la lección 22 del seminario XVI *D'un autre à l'Autre*, ya de 1969.





coanalítico, afirma Lacan, es la puesta en acto del inconsciente. Pero se pregunta a continuación si este inconsciente existía antes de dicho acto, puesto que la mera acción sólo se convierte en acto gracias a la dimensión del significante, en la que se manifiesta el sujeto, revelada precisamente por el acto psicoanalítico. Las acciones se repiten, pues son reproductivas. Caminamos todos los días hacia nuestros trabajos. Pero el acto es repetitivo en un sentido diferente: cuenta con una *incidence signifiante rétroactif*, en sus palabras. Atravesamos un umbral y nos desplazamos fuera de la ley. ¿Quién es el sujeto de estos enunciados? El obrero que camina todos los días hacia su trabajo es siempre el mismo. Pero cuando ese obrero da un paso fuera de la ley, cuando arroja la piedra, ya no es el mismo obrero: este paso lo convierte en nuevo sujeto, en un delincuente, o en sujeto a secas. La definición más sucinta del acto consiste entonces en que, a diferencia de las acciones cotidianas, un acto re-constituye retroactivamente sus propias condiciones subjetivas de posibilidad.

El propio Lacan sugiere mediante algunos de sus ejemplos –César cruza el Rubicón, Lenin inicia la insurrección- la extrapolación de esta noción psicoanalítica de acto al terreno del análisis social, aunque sin desarrollarla. Žižek en cambio la convierte en una de sus nociones claves en este último terreno. “Mientras que el pasado puro es la condición trascendental para nuestros actos, nuestros actos no sólo crean nueva realidad efectivamente existente –escribe Žižek-, ellos también cambian retroactivamente esta misma condición” (2015: 182).⁴

Es evidente que la acción, así entendida como acto, supera aquella relación meramente deductiva entre conciencia y acción. Pero parece conducirnos a una nueva aporía. “¿Son inevitables las intervenciones cuyo significado sólo podemos establecer retroactivamente, de modo que, en el momento del Acto, todo lo que podemos hacer es esperar a que la

⁴ También podríamos recurrir a la relación que establece Badiou entre el *événement* (el acto) y el *site événementiel* (dentro de una situación histórica) en sus meditaciones 16 y 17 de *L'Être et l'événement*, pero aquí preferimos partir de la concepción dialéctica del acto de Žižek. Advirtiendo sin embargo –aunque no podemos detenernos en este asunto en estas páginas- que la interpretación de la dialéctica hegeliana de Žižek es incompatible con la de Adorno, que nosotros compartimos.

historia muestre piedad (y gracia) y recompense nuestra intervención con al menos un ápice de éxito?” (*idem*: 225). Quizás la única manera de salvar esta nueva aporía o, más precisamente, este desplazamiento de nuestra vieja aporía, sea desplazándonos nosotros mismos desde el terreno de la reflexión filosófica sobre la relación entre la conciencia y la acción individuales hacia el terreno del análisis de la relación entre la conciencia y la acción colectivas registrada en el marco de los procesos insurreccionales. Pues el propio Žižek invoca en su pregunta el juicio *post-hoc* de la historia colectiva –no de una Historia hipostasiada de antemano, por supuesto, sino de un futuro resultante de nuestras propias apuestas del presente-.⁵

Pero, antes desplazarnos hacia ese terreno de la acción colectiva, conviene aclarar en qué sentido afirmamos aquí que esa noción de acto puede ayudarnos a entender la relación entre conciencia y acción en los procesos insurreccionales. Žižek está pensando en el “gesto de Lenin”, es decir, en el Acto del líder (Budgen, Kouvelakis y Žižek, 2010: 7; véase también Žižek 2004). Nosotros, en cambio, estamos interesados en el acto de José Miguel. Žižek pretende convertir a la noción de Acto en la clave de bóveda de un dudoso *aggiornamento* de la doctrina leninista de la revolución. Lejos de semejante pretensión, nosotros simplemente recuperamos esa noción para intentar entender la relación que se establece entre la conciencia y la acción de los hombres y las mujeres de a pie cuando se ven involucrados en procesos insurreccionales.⁶

⁵ Recuérdese en este sentido la idea de revolución como redención (aunque aquí desde la perspectiva de aquellos que esperan ser redimidos) de las *Tesis* de Benjamin.

⁶ Si esta pretensión de *aggiornamento* lacaniano del leninismo ya es dudosa en la versión de Žižek, agreguemos, se convierte en una auténtica impostura en la versión de Badiou (desde la lección del 4/12/1977 de su *Theorie du sujet* en adelante).



De la acción colectiva (y su racionalidad)

Así pues, no es casual que “espontaneidad” sea el nombre corriente de ese añadido que para Adorno conduce de la conciencia a la acción. Y tampoco es casual que Adorno recuerde, en el marco de sus reflexiones sobre este asunto, “la protesta contra el determinismo mecánico-causal en el pensamiento socialista” formulada por Rosa Luxemburg (2019b: 411) ni que el propio Žižek recuerde su “dialéctica del proceso revolucionario” (2013: 111). Luxemburg, en efecto, había intuido de una manera privilegiada la dialéctica entre la conciencia y la acción existente dentro de los procesos insurreccionales en su crítica de la estrategia política dominante en la socialdemocracia alemana ante la huelga de masas. Recordemos algunos de sus argumentos. (1) La huelga de masas no puede concebirse a la manera socialdemócrata como una acción impulsada por el partido y los sindicatos, conforme un plan concebido de antemano y tras un cuidadoso examen de las condiciones preexistentes para su éxito y de los costos y beneficios que acarrearía. (2) Las condiciones de la acción en materia de conciencia y organización guardan una relación dialéctica con la propia acción, de tal manera que la huelga de masas puede ir creando sus propias condiciones en su proceso. (3) Los resultados de la acción no pueden evaluarse sin más en términos de su éxito o fracaso inmediatos, sino que debe atenderse también a sus consecuencias más mediatas para esa conciencia y organización de los involucrados. (4) Las luchas económicas y políticas interactúan en el proceso de la huelga general, de manera que no puede establecerse de antemano una relación mecánica entre ambas ni, en términos más amplios, saberse de antemano qué demandas pueden desencadenar un proceso huelguístico de masas.⁷ Es a la luz de esta dialéctica que Luxemburg afirma que “en la tormenta del período revolucionario” cualquier proletario, como nuestro José Mi-

⁷ Aquí nos referimos por excelencia a su análisis del proceso huelguístico ruso de 1896-1906 (Luxemburg 2015; modificamos la traducción del párrafo citado), pero argumentos semejantes se encuentran dispersos otros escritos suyos vinculados con el debate sobre la huelga de masas (véase asimismo AAVV 1975 y 1976).

guel, “se transforma de un previsor padre de familia en un ´revolucionario romántico´ para quien hasta el bien supremo, la vida misma, por no hablar del bienestar material, tienen poco valor comparado con el ideal de la lucha”.

Repitamos una vez más nuestra pregunta: ¿esta “espontaneidad” equivale sin más a “irracionalidad”? Basta comparar este análisis de la dialéctica entre conciencia y acción en el proceso de la huelga de masas de Rosa Luxemburg con la concepción de Georges Sorel de esa misma huelga como mito movilizador de las masas, en esos mismos años y en contra de esa misma estrategia quietista de la socialdemocracia, para convencerse de lo contrario:

para apreciar el alcance de la idea de la huelga general, ha de prescindirse de todos los procedimientos de discusión que se acostumbra entre políticos, sociólogos y otros aspirantes a la ciencia práctica. A los adversarios se les puede conceder todo lo que intenten demostrar, sin que tal postura implique algún deterioro del valor de la tesis cuya refutación creen poder realizar. (Sorel, 1978: 128).

A diferencia de Sorel, Luxemburg no estaba dispuesta a refugiarse en ningún mito: se esforzó por entender racionalmente, aunque para hacerlo se viera obligada a conducir a la razón más allá de “las reglas de juego del racionalismo”, el problema que nos incumbe en estas páginas.

¿De qué “reglas de juego” estamos hablando? En última instancia, de las reglas de juego de una racionalidad utilitarista que, para valernos de la salvaje expresión de Marx, puede definirse como una “racionalidad de filisteos”. En sus palabras:

quien quisiera enjuiciar según el principio de la utilidad todos los hechos, movimientos, relaciones, etc., del hombre, debería ocuparse primero de la naturaleza humana en general y luego de la naturaleza humana modificada históricamente en cada época. Bentham no pierde tiempo en esas bagatelas. Con la aridez más ingenua parte del supuesto de que el filisteo moderno, y especialmente el filisteo inglés, es el hombre normal.





Lo que es útil para este estafalario hombre normal y para su mundo, es útil en sí y para sí. Conforme a esta pauta, entonces, Bentham enjuicia lo pasado, lo presente y lo futuro (2002: 755-6).⁸

La conversión de esta racionalidad de filisteos en racionalidad dominante en una sociedad que se reproduce a través de la producción y el intercambio de mercancías es un fenómeno general fácilmente explicable. Pero aquí nos interesa un problema más específico, a saber, la imposibilidad de explicar a partir de esa racionalidad utilitarista el fenómeno de las acciones insurreccionales, que desafían precisamente las formas que reviste esa reproducción social y, en consecuencia, su racionalidad. Así como a la vez, paradójicamente, la influencia que ejerce esa misma racionalidad en la investigación sociológica contemporánea de la acción colectiva, con la resultante ceguera ante esos fenómenos insurreccionales.

Aquí no podemos sino ilustrar este fenómeno recurriendo a unos pocos ejemplos significativos. Y ya que estamos hablando de una racionalidad de filisteos, nada mejor que empezar con ejemplos proporcionados por economistas. Más exactamente: por la manera en que algunos economistas marginalistas (*nobel laureates* todos, como corresponde *in their business*) conciben la acción colectiva, para desgracia de los sociólogos que les rinden pleitesías.

Buchanan y Tullock definen la acción colectiva como sigue: “entendemos la acción colectiva como la acción de los individuos cuando eligen alcanzar fines colectiva antes que individualmente, y al gobierno como nada más que el conjunto de procesos, la máquina, que permite que esa acción colectiva tenga lugar” (1990: 18). Tenemos pues dos mecanismos diferentes de coordinación de las acciones de los individuos: por una parte

⁸ Marx emplea aquí la expresión *Spießbürger*, que ciertamente puede traducirse como “filisteo”, pero a esta palabra algo *démodée* y cargada de connotaciones bíblicas conviene agregar otras tres igualmente viables: “pequeñoburgués” (*Kleinbürger*), “hombre de bien” (*Biedermann*) y “tonto” (*Einfaltspinsel*). Cuando se refiere al *englischen Spießbürger* como exponente por excelencia de ese filisteo Marx podría haber empleado sin más, como hace en otras ocasiones, *shopkeeper*, que puede traducirse como “tendero” o simplemente como “mercachifle”. El lector debería tener en cuenta todas estas connotaciones de sus expresiones en la lectura de las siguientes páginas.

el mercado, que coordina acciones individuales en la esfera privada, y por otra el estado, que coordina acciones colectivas en la esfera pública. Ambos mecanismos, sin embargo, involucran intercambios: “dos o más individuos encuentran mutuamente ventajoso unir sus fuerzas para alcanzar ciertos fines comunes. En un sentido muy real, ellos ‘intercambian’ *inputs* para asegurarse el *output* común compartido” (*ibidem*). Porque, dos siglos después, estos individuos de Buchanan y Tullock siguen siendo los mismos “individuos maximizadores de utilidad” del viejo Bentham: “podríamos asumir que el individuo representativo o promedio actúa sobre la base de la misma escala general de valores cuando participa de la actividad del mercado y de la actividad política” (*idem*: 19).

La sociedad entera es entonces, para Buchanan y Tullock, el mismo agregado de mercachifles que era para Bentham:

el modelo más simple sería uno que postulara que la mayoría de los individuos son, en los hechos, esencialmente equivalentes en todas sus características externas. Una nación de pequeños propietarios libres, quizás aproximadamente similar a los Estados Unidos de 1787, encarnaría bien el modelo. (*idem*: 14).

Pero nuestros economistas constatan que, desgraciadamente, la sociedad norteamericana de los años sesenta es bastante diferente de esa sociedad ideal de pequeños propietarios libres: entre el interés público constituido en el estado y los intereses privados existentes en el mercado se interponen intereses colectivos organizados y actuantes. Y ellos ya no pueden limitarse a denunciar sin más estos intereses parciales, como Bentham y Mill, en términos de *sinister interests* que atentan contra el *common good*.⁹ Su solución a este dilema consiste en cambio en asimilar esos intereses parciales a los intereses de *pressure groups* que se comportan según la misma racionalidad utilitarista que los individuos que los

⁹ Denuncia cuya función ideológica había mutado sintomáticamente entre los utilitaristas clásicos: si Bentham se refería a comienzos del siglo XIX a los intereses de la aristocracia aún encaramada en el gobierno, Mill durante la segunda mitad del siglo ya se refería a los intereses de la clase obrera.





integran (*idem*: 282 y ss.). La ruta para que la sociología investigue cualquier acción colectiva en términos de acción utilitarista de grupos de interés está ya debidamente asfaltada.

La reducción de la racionalidad de la acción colectiva a la racionalidad de los individuos involucrados en ella, sin embargo, enfrenta algunas dificultades. Veamos pues dos maneras características de lidiar con ellas: mediante la teoría de la elección racional y mediante la teoría de conjuntos. En efecto, Olson (1971) parte de la constatación de que el costo de participar en la acción colectiva para un individuo siempre supera la porción del beneficio colectivo que ese individuo obtendría en los casos en los que ese beneficio colectivo se obtenga igualmente sin su participación (problema de los *public goods*). Y en consecuencia, al menos en el caso de organizaciones grandes, los “individuos racionales y orientados por su propio interés” no actuarán colectivamente en aras de un objetivo común (su elección racional los conduciría en cambio a comportarse como *free-riders*), a menos que persigan intereses diferenciados o estén sometidos a un mecanismo coercitivo.

También Olson tiene en mente aquí básicamente a los grupos de presión, pero aspira ciertamente a una teoría más amplia de la acción colectiva: “el obrero tiene la misma relación con la masa del proletariado y el empresario con la masa de la burguesía que la que tienen el contribuyente con el estado y la firma competitiva con la industria” (1971: 107).¹⁰ La paradoja consiste en que, en sus manos, esta teoría de la acción colectiva tiende convertirse en una teoría de su imposibilidad: “un obrero que piense que sería beneficiado por un gobierno ‘proletario’ no consideraría racional arriesgar su vida y recursos en iniciar una revolución contra el gobierno burgués” (*idem*: 106). No sabemos pues si nuestro José Miguel soñaba o no con algo así como un “gobierno proletario”, pero lo

¹⁰ Offe y Wiessenthal impugnaron este empleo vacío del concepto de *interests groups* y, más importante aún en este contexto, avanzaron incluso hacia una impugnación de la racionalidad utilitarista atribuida a su accionar (1980: 78-9 y 95-6). Aunque su preocupación era diferente de la nuestra, en este último sentido existen puntos de contacto entre sus críticas y las nuestras.

que sí sabemos ahora gracias a Olson es que, en cualquier caso, no pudo haber perdido la vida rebelándose contra los militares del gobierno burgués de Pineda.

Schelling (1980), en cambio, enfrenta ese problema de la relación entre intereses individuales y colectivos a través de una ampliación de la teoría de los juegos hacia casos en los que co-existan intereses conflictivos y compartidos (i. e., *bargaining games* intermedios entre los juegos de suma cero y los colaborativos). Los jugadores involucrados siguen siendo los mismos agentes utilitaristas de siempre, orientados por “estrategias de decisión maximizadoras de valores”, pero el análisis se centra ahora en la interacción entre dichos agentes. Schelling tiene en mente, específicamente, las estrategias de disuasión entre potencias en el marco de la guerra fría, de manera que el menú de jugadas que analiza escapa a nuestros intereses. Pero considera que esta ampliación de la teoría de los juegos también sería iluminadora para un variopinto menú de acciones colectivas que incluye “guerras y amenazas de guerra, guerras de precios, huelgas, negociaciones, disuasión de criminales, guerra de clases, guerra de razas y chantajes; maniobrar dentro de una burocracia o de un embotellamiento; y la coerción de nuestros propios hijos” (*idem*: 83).

Ahora bien, supongamos por un momento que este tipo de aventuras de economistas marginalistas por las salvajes tierras de la acción colectiva cuente con alguna relevancia cognoscitiva. Supongamos más precisamente que la citada conversión de su racionalidad utilitarista en la racionalidad dominante dentro de una sociedad que se reproduce a través de la producción y el intercambio de mercancías otorgue a sus argumentos alguna plausibilidad a propósito de ciertos comportamientos rutinarios e institucionalizados de algunos *lobbies* y sindicatos. Olvidémonos por un momento, en consecuencia, que esa reproducción social no sólo tiene lugar *a través* de las acciones individuales y colectivas de los agentes involucrados, sino también *a espaldas* de ellas, en aras de que los rigurosos cálculos de costos y beneficios presupuestos por la acción racional atribuida a esos agentes por nuestros economistas sea algo más que una





entelequia.¹¹ Pues bien, aún suponiendo todas estas cosas, es evidente que este tipo de aventuras no puede proveernos método alguno para analizar la racionalidad de acciones colectivas insurreccionales como las que nos interesan en estas páginas. ¿Cómo puede explicarse el pasaje a la acción a partir de este método de filisteos? ¿Acaso el ataque colectivo a las formaciones del metro de Santiago puede explicarse a partir de los cálculos de costos (soportar una represión generalizada) y beneficios (revertir un aumento de 30 pesos chilenos –unos 4 centavos de dólar- en la tarifa del metro) realizados previamente por los jóvenes involucrados? ¿Y acaso los jóvenes chilenos que se abstuvieron de involucrarse en esas acciones juzgaron que, aún sin participar de ellas, gozarían de una eventual reducción de esa tarifa? ¿Evaluaron acaso, antes de destruir vagones, que se involucrarían en un juego mixto en el que sus intereses serían conflictivos (en materia de tarifas) pero a la vez compartidos (en materia de disposición de medios de transporte) con sus contrincantes del gobierno? ¿Fue acaso un ejemplo de las decisiones racionales prescriptas por este método de filisteos aquella de nuestro José Miguel de insultar a los militares armados?

Ante tales preguntas absurdas, una sociología inspirada en este método de filisteos seguramente comenzaría aferrándose a dicho método sin consideración alguna por su objeto. Afirmaría por ejemplo, como el mencionado Schelling, que “la premisa de la ‘conducta racional’ es una premisa potente para la producción de teoría. Si la teoría resultante provee una visión buena o mala de la conducta real es una cuestión de juicio posterior” (1980: 4). A continuación, cuando el inexorable imperativo de confrontar ese método de filisteos con su objeto se impusiera por derecho propio, se vería compelida a optar entre dos procedimientos: o bien ejercer una dosis de violencia sobre ese objeto que resultara suficiente como para amoldarlo a su método, o bien ignorar sin más a ese objeto para pre-

¹¹ Es importante tener en cuenta que, en principio, esta sociología utilitarista es tan incapaz de distinguir entre acciones sociales rutinarias y no-rutinarias como de concebir acciones intencionales con consecuencias inesperadas –oscuras preocupaciones de Marx y Weber que su luminosa concepción de la sociedad no puede albergar.

servar su método. La cárcel o el destierro del objeto son las consecuencias necesarias de la prioridad concedida al método.

Pero ambas opciones resultan incómodas. La dosis de violencia requerida para encerrar a las acciones colectivas insurreccionales dentro de semejante racionalidad utilitarista es inaudita: el objeto estallaría dentro del método. Por su parte, la posibilidad de excluir a esas acciones colectivas insurreccionales de esa racionalidad utilitarista no impide que dichas acciones sigan existiendo: el objeto excluido se empeñaría en atestiguar la futilidad del método. Las vacilaciones de Olson son un buen ejemplo de esta encerrona. Según su método, su objeto no puede existir: “*la acción de clase no ocurrirá si los individuos que componen una clase actúan racionalmente*” (1971: 106). Pero ese objeto, la acción de clase, insiste en seguir existiendo de espaldas a su método. El método declara entonces la irracionalidad del objeto: “esto no significa negar que una teoría de la conducta *irracional* que conduce a la acción de clase pueda ser de algún interés en ciertos casos” (*idem*: 108).¹²

Abandonemos pues estas aventuras de economistas en tierras de la acción colectiva; pero no aún la discusión más amplia de las reglas de juego impuestas por su racionalidad utilitarista. La influyente concepción de la “acción colectiva contenciosa” de Tarrow no se inscribe ciertamente en la senda abierta por esos economistas (véase Tarrow, 1997: 40 y ss.) –por fortuna para la sociología, aunque acaso no para el propio Tarrow, que nunca accederá a su selecto club de *nobel laureates*. En efecto, su visión de la acción colectiva es mucho más compleja desde un punto de vista metodológico y más relevante desde un punto de vista empírico. Sin embargo, aún en este caso, cabe preguntarse si no subsiste una matriz utilitarista en su núcleo duro. Veamos.

Tarrow asume nuestra pregunta por el pasaje a la acción como su pregunta decisiva en los siguientes términos: “cómo se transforma en ac-

¹² Es interesante notar que estas consideraciones de Olson acerca de la lucha de clases presuponen que Marx compartía esa misma racionalidad utilitarista. Este malentendido es un lugar común entre los sociólogos norteamericanos y proviene seguramente de la manera en que su padre fundador introdujo el pensamiento europeo (Parsons, 1966: 107 y ss.; 488 y ss).





ción la estructura social subyacente y el potencial de movilización” (*idem*: 151). Y ubica en el centro de su respuesta a la “estructura de las oportunidades políticas”, entendida como “dimensiones congruentes –aunque no necesariamente formales o permanentes- del entorno político que ofrecen incentivos para la que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus expectativas de éxito o fracaso” (*idem*: 155). Algunas de estas oportunidades políticas se relacionan con la apertura del acceso al poder, los cambios en los alineamientos gubernamentales, la disponibilidad de aliados influyentes y las divisiones en y entre las élites. “Los movimientos sociales –escribe entonces Tarrow- se forman cuando los ciudadanos corrientes responden a cambios en las oportunidades que reducen los costos de la acción colectiva, descubren aliados potenciales y muestran en qué son vulnerables las élites y las autoridades” (1997: 49).¹³

Ahora bien, este concepto de oportunidad política, ¿no está forjado en una matriz utilitarista? La manera en la que Tilly había introducido metodológicamente dicho concepto parece sugerir una respuesta afirmativa. Pues Tilly (1978: 98 y ss.) explica el tránsito de las “capacidades de actuar” a los “incentivos u oportunidades (sic) de actuar” a partir de una serie de variables (“represión / facilitación”, “poder” y “oportunidad / amenaza”) que resumen una matriz de costos / beneficios. Desde luego que Tilly no reduce esto a un cálculo de costos y beneficios estimados en términos de utilidades marginales por parte de agentes perfectamente racionales. Y desde luego que, en consecuencia, la concepción de la acción colectiva de Tilly y Tarrow no sugiere preguntas tan absurdas como aquellas que sugieren las concepciones de la acción colectiva de los economistas marginalistas. Pero aún así cabe preguntarse: ¿los jóvenes chilenos se rebelaron, en octubre de 2019, porque percibieron un cambio en la estructura de oportunidades políticas que modificó sus ecuaciones de costos y be-

¹³ Tarrow, en la tercera edición de *Power in Movement* (2011: 163), enfatiza en el carácter subjetivamente percibido –antes que objetivamente dado- de esas oportunidades, pero la definición del concepto no se modifica sustancialmente.

neficios de la acción colectiva? Esta pregunta no es absurda, ciertamente, pero la respuesta seguramente sigue siendo negativa.

A manera de conclusión

Recapitemos nuestro problema: ¿cómo podemos explicar el pasaje a la acción en semejantes acciones insurreccionales? Tenemos por una parte un factor *ex ante*, que podríamos conceptualizar como una memoria de las injurias sufridas y que siempre está de antemano más o menos mediado por la conciencia. Pero el pasaje a la acción no puede explicarse sin más a partir de esta conciencia. Se requiere un añadido, un impulso, que escapa ciertamente a los cánones de la racionalidad utilitarista dominante. Cualquier intento de conceptualizarlo en los términos de un cálculo de costos y beneficios conduciría inexorablemente a una paradoja: el beneficio de la acción consistiría en evitar el insoportable costo de la inacción, de manera que la acción se revelaría como un fin en sí misma, burlando en consecuencia la matriz medios – fines subyacente a ese cálculo de costos y beneficios.

Podría designarse este impulso de muchas maneras. Yo preferiría tomar en préstamo una palabra a la que los zapatistas devolvieron su verdadero significado y designarlo como “el impulso de la dignidad”. Porque pienso con ellos que esta palabra, “dignidad”, es la más adecuada para nombrar algo tan indigesto para cualquier proceso digestivo de costos y beneficios. Recordemos por un momento el significado que reviste en las proclamas originales del EZLN de 1994:

Entonces ese dolor que nos unía nos hizo hablar, y reconocimos que en nuestras palabras había verdad, supimos que no sólo pena y dolor habitaban nuestra lengua, conocimos que hay esperanza todavía en nuestros pechos. Hablamos con nosotros, miramos hacia dentro nuestro y miramos nuestra historia: vimos a nuestros más grandes padres sufrir y luchar, vimos a nuestros abuelos luchar, vimos a nuestros padres con





la furia en las manos, vimos que no todo nos había sido quitado, que teníamos lo más valioso, lo que nos hacía vivir, lo que hacía que nuestro paso se levantara sobre plantas y animales, lo que hacía que la piedra estuviera bajo nuestros pies, y vimos, hermanos, que era DIGNIDAD todo lo que teníamos, y vimos que era grande la vergüenza de haberla olvidado, y vimos que era buena la DIGNIDAD para que los hombres fueran otra vez hombres, y volvió la dignidad a habitar en nuestro corazón, y fuimos nuevos todavía, y los muertos, nuestros muertos, vieron que éramos nuevos todavía y nos llamaron otra vez, a la dignidad, a la lucha (EZLN, 1995: 122; véase al respecto Holloway 1997).

O si el lector prefiere, puesto que tampoco se trata aquí de denigrar la autonomía de la razón práctica, recordemos el significado que esta palabra revestía en un escrito del propio Kant de 1785. “En el reino de los fines, todo tiene un precio o una *dignidad*. Aquello que tiene precio, puede ser sustituido por algo equivalente; en cambio, lo que se halla por encima de todo precio y, por tanto, no admite nada equivalente, eso tiene una dignidad” (Kant, 2017: 28; véase al respecto Adorno, 2019a: 279). El hecho de que hayan sido los indígenas zapatistas y no los académicos norteamericanos quienes supieron heredar esta palabra, en todo caso, no es para nada un hecho aleatorio. Aunque también podrían usarse otras palabras.

El problema es que, si tuviéramos que definir esta dignidad o como quiera que se nombre a este impulso, nos encontraríamos en problemas, pues no puede definirse acabadamente *ex ante* de la acción misma. Esta dignidad sólo adquiere un contenido acabado *ex post* de la acción, es decir, como algo que había sido negado. Así, las insurrecciones parecen dotar de significado, retroactivamente, al impulso que les dio origen. Quizás esta conclusión resulte problemática desde el punto de vista de la reflexión filosófica y estéril desde el punto de vista de la investigación sociológica. No podemos dictaminar acerca de sus potencialidades en el contexto de estas pocas páginas. Pero si, en los hechos, nuestro obrero chileno actuó sencillamente porque ya no podía no actuar, como antes el

príncipe danés y el oficial alemán, si se rebeló porque no podía soportar sin rebelarse que los militares volvieran a adueñarse de las calles, no podemos empujar a la razón más allá de los hechos.

Hacerlo sería un atropello, y no ya sociológico sino incluso moral, contra su acto de rebeldía. Si lo hiciéramos ese impulso, “que es inmanente a la conducta moral, sería negado por afán de una racionalización despiadada; lo más urgente se convertiría de nuevo en contemplativo, una burla a su propia urgencia” (Adorno, 1975: 283).

Bibliografía

AAVV (1975). *Debate sobre la huelga de masas* (primera parte). Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente.

_____ (1976). *Debate sobre la huelga de masas* (segunda parte). Córdoba: Cuadernos de Pasado y Presente.

Adorno, T. W. (1966). *Negative Dialektik*. Frankfurt: Suhrkamp Verlag.

_____ (1975). *Dialéctica negativa*. Madrid: Taurus.

_____ (1987). *Minima moralia. Reflexiones sobre la vida dañada*. Madrid: Taurus.

_____ (2019a). *Problemas de filosofía moral*. Buenos Aires: Las Cuarenta.

_____ (2019b). *Sobre la teoría de la historia y de la libertad*. Buenos Aires: Eterna Cadencia.

Bonnet, A. (2020). The concept of form in the critique of the political economy. En I. Novara, A. Oliva y A. Oliva (eds.). *Marx and Contemporary Critical Theory: the Philosophy of Real Abstraction* (p. 203–225). Londres: Palgrave Macmillan.

Buchanan, J. M. y Tullock, G. (1990). *The Calculus of Consent. Logical Foundations of Constitutional Democracy. The Collected Works of James M. Buchanan* (volumen 3). Indianápolis: Liberty Fund.





Budgen, S.; Kouvelakis, S. y Žižek, S. (2010). *Lenin reactivado. Hacia una política de la verdad*. Madrid: Akal.

EZLN (1995): Carta del CCRI-CG del ELN al Consejo 500 años de Resistencia Indígena del 1/2/94. En *Chiapas. La palabra de los armados de verdad y fuego*, volumen I. México: Fuenteovejuna.

Holloway, J. (1980). El estado y la lucha cotidiana. *Cuadernos Políticos* 24, p. 7-27. México.

_____ (1997). La revuelta de la dignidad. *Revista Chiapas* 5, p.7-40. México.

Kant, I. (2017). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. Santiago de Chile: ARCIS, disponible en <https://www.philosophia.cl/biblioteca/Kant/>

Luxemburgo, R. (2015). *Huelga de masas, partido y sindicatos*. México: Siglo XXI.

Marx, K. (2002). *El capital*, tomo I. México: Siglo XXI.

Offe, C. y Wiessenthal, H. (1980). Two Logics of Collective Action: Theoretical Notes on Social Class and Organizational Form. *Political Power and Social Theory* I, p. 67-115. Stamford.

Olson, M. (1971). *The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge: Harvard University Press.

Parsons, T. (1966). *The Structure of Social Action. A Study on Social Theory, with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York: The Free Press.

Schelling, Th. (1980). *The Strategy of Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.

Sorel, G. (1978). *Reflexiones sobre la violencia*. Buenos Aires: La pléyade.

Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.

_____ (2011). *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*. (tercera edición). New York: Cambridge University Press.

Žižek, S. (2004). *A propósito de Lenin. Política y subjetividad en el capitalismo tardío*. Buenos Aires: Atuel – Parusía.

_____ (2013). *El más sublime de los histéricos*. Barcelona: Paidós.

_____ (2015). *Menos que nada. Hegel y la sombra del materialismo histórico*. Madrid: Akal.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

“De cada fábrica una fortaleza”: el PRT-ERP en Talleres Electromecánicos Norte S. A. (TENSA), 1973-1976.

"From each factory one fortress": PRT-ERP in Talleres Electromecánicos Norte S.A. (TENSA), 1973-1976.

Santiago Stavale*

*Recibido: 20 de junio de 2020
Aceptado: 31 de octubre de 2020*

Resumen: En el siguiente artículo se aborda la experiencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) en la fábrica metalúrgica Talleres Electrometalúrgicos Norte S. A. (TENSA), ubicada en la Zona Norte del Gran Buenos Aires, en el período 1973-1976. Allí el PRT-ERP formó parte de un movimiento de bases antiburocrático junto a otras organizaciones de izquierda y desarrolló una intensa actividad militar ligada a los conflictos sindicales. En ese sentido el trabajo avanza en el estudio del vínculo entre la nueva izquierda y el movimiento obrero y, más específicamente, entre los conflictos obreros y las acciones guerrilleras durante los años setenta.

Palabras clave: PRT-ERP, movimiento obrero, lucha armada, lucha sindical, nueva izquierda.

Abstract: The following article it is about the experience of the Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) at a metallurgical factory called Talleres Electrometalúrgico Norte S. A. (TENSA), located in the Northern Zone of Gran Buenos Aires, in the period of 1973-1976. There the PRT-ERP took part in an anti-bureaucratic grassroots movement along with other left-wing organizations and carried out an intense military activity related to trade union conflicts In that respect, this paper goes deeper into the study of the link between the new left and the labor movement and, more specifically, between the labor conflicts and the actions of the *guerrilla* during the seventies.

Key words: PRT-ERP, labor movement, armed conflict, union struggle, new left.

* Doctor en Ciencias Sociales y Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata. Becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones en Científicas y Técnicas (CONICET). santiago-stavale@gmail.com

Introducción

Para comprender el fenómeno de la violencia política en los años setenta es fundamental comprender el proceso de activación social y político general que vivieron amplios sectores de la sociedad argentina y, a su vez, indagar en la experiencia, el imaginario y el horizonte de expectativas de quienes fueron parte del campo de la nueva izquierda (Torti, 2014). En ese marco, consideramos imprescindible una mirada centrada en la experiencia de clase de los trabajadores argentinos, sujeto protagonista de la escena política durante aquellos años y centro del proyecto de las organizaciones revolucionarias. Hacer foco en sus experiencias de lucha, en sus repertorios de acción y en su organización al interior de los establecimientos, permite comprender el campo de sentidos sobre la cual actuaron e intervinieron aquellas organizaciones y las características que asumió su vínculo con los trabajadores. Compartimos con Federico Lorenz (2013) la idea de que en el estudio de ese vínculo la división taxativa entre "lucha armada" y "lucha sindical" resulta al menos insuficiente para analizar un espacio de acción mucho más complejo en el que ambos términos por momentos, lejos de ser antagónicos, se tornaron intercambiables (p. 14).

En este artículo nos proponemos analizar la intervención político-sindical de la organización marxista más importante de la nueva izquierda, el Partido Revolucionario de los Trabajadores- Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), tomando el caso de una de las fábricas metalúrgicas más importante de la Zona Norte del Gran Buenos Aires: Talleres Electromecánicos Norte S.A (TENSA), ubicada en Munro (planta principal) y Pablo Nogués (depósito).¹

Nuestro interés por el estudio de la experiencia perretista radica, principalmente, en su disposición a penetrar en las principales fábricas de la argentina intentando incorporar a los obreros a su estrategia de "gue-

¹ Este trabajo es resultado de un trabajo de más largo aliento expresado en una tesis doctoral (Stavale, 2019).





rra revolucionaria”, combinando la lucha armada con la actividad sindical y cuestionando la identidad peronista. Consideramos que la apuesta por aquella combinación fue una de las marcas distintivas de la política sindical perretista que planteó una forma novedosa de resolver los conflictos que rompieron con los métodos clásicos del sindicalismo tradicional. Se trató de una práctica compleja cargada de tensiones que, por momentos, ayudó a los objetivos de la organización y de los trabajadores y, por otros, fue controvertida y contraproducente.

Por su parte, el interés por el caso de TENSA responde a varios factores que se vinculan al objetivo del artículo: allí el PRT-ERP llevó a cabo un trabajo sindical que le permitió contar con activistas en el Cuerpo de Delegados (CD) y la Comisión Interna (CI) y, en relación con ello, desarrolló una intensa actividad militar ligada a los conflictos gremiales. Además, en aquel establecimiento se desarrolló uno de los primeros conflictos del año 1973 que condensó y adelantó gran parte de los elementos que formaron parte del clima político que se vivió en las fábricas durante el período iniciado con el retorno del peronismo al gobierno y clausurado con la última dictadura militar.

Consideramos que el estudio de caso permite ajustar la escala de observación –la fábrica-, identificando dinámicas de politización, matices y contradicciones poco visibles en los abordajes generales centrados en las organizaciones o en los grandes procesos (Basualdo y Lorenz, 2012). En este artículo nuestro análisis se enfocará en dos dimensiones: 1- la reconstrucción de la conflictividad político-sindical de la fábrica y la formación del movimiento de base y 2- las características que adquirió el trabajo político-sindical y militar del PRT-ERP.

Para ello utilizamos distintos tipos de fuentes: entrevistas a militantes y activistas de la fábrica; los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA); los periódicos partidarios *El Combatiente* y *Estrella Roja*; periódicos de otras organizaciones intervinientes (*No Transar*, *Avanzada Socialista* y *Política Obrera*), así como diarios y revistas de la época.

El PRT-ERP: lucha armada y lucha sindical

El PRT-ERP fue una organización que desde sus inicios definió a la clase obrera como "sujeto de la revolución" y concentro gran parte de sus esfuerzos en penetrar y desarrollarse en el movimiento obrero, enmarcando su accionar sindical en una estrategia general de "guerra revolucionaria". Así, con su intervención en las fábricas buscaba tanto la incorporación de los obreros a sus filas como la integración de las luchas reivindicativas a aquella estrategia.

Es de destacar que el lugar otorgado por el PRT-ERP a la lucha sindical estuvo fuertemente atravesado por el debate con aquellas corrientes y organizaciones que, rechazando la estrategia armada, centraban su intervención en el movimiento obrero haciendo eje en el aspecto sindical. Para los perretistas esas corrientes recaían en concepciones "reformistas" y "sindicalistas" y dejaban a la clase obrera sin una estrategia de poder.² Así, en el marco de la asunción de la vía armada, radicalizaron sus planteos llegando a caracterizar a la lucha sindical como un tipo de lucha "inferior" y construyendo una suerte de "desconfianza" en los efectos que esta actividad podía acarrear en las concepciones de la organización. En esa dirección, la preocupación del PRT-ERP pasaba por no limitar su intervención fabril a la actividad reivindicativa, sino buscar combinar dicha actividad con otras formas de lucha, sobre todo, con la armada. Los esfuerzos debían estar puestos en desarrollar e incorporar nuevos métodos que rompieran y trascendieran los repertorios sindicales clásicos y, en ese sentido, la violencia revolucionaria aparecía como uno de los vehículos principales para ayudar a dar el "salto" del plano reivindicativo al político. Así fue que las acciones de propaganda armada protagonizadas por el ERP en las fábricas o la organización de organismos de autodefensa armados en el marco de las huelgas obreras asumieron vital importancia en la experiencia fabril perretista. El criterio planteado era el de apuntalar

² "El único camino hasta el poder obrero y el socialismo" En: De Santis, 2004.





la movilización de los trabajadores, fomentando su participación directa o indirecta en la guerra. Partían de la concepción guevarista de que la lucha armada podía officiar de motor impulsor de la movilización, como un generador de la conciencia revolucionaria y de entusiasmo combativo de la clase obrera. Desde la retina de la organización, construir el vínculo entre la lucha armada y la lucha sindical era el arte de conectar la expresión "más elevada" de la lucha de clases (el momento militar), con la "más atrasada" (el momento corporativo). Además, con las acciones en las fábricas buscaban poner en práctica a pequeña escala una muestra del poder dual que revirtiera por un momento la autoridad dentro de los establecimientos, infundiera miedo entre los capitalistas e inspirara confianza en los trabajadores (Scoppetta y Torres, 2018: 91).

Por su parte, el avance en su inserción fabril y el creciente protagonismo que fue adquiriendo en los conflictos obreros fue llevándolo a ajustar y complejizar la línea sindical. En aquel plano planteaba la lucha por "consignas mínimas" como la defensa y reorganización de las comisiones internas y de los sindicatos, y la organización de oposiciones clasistas a la "burocracia sindical". Para ello se proponían impulsar agrupaciones clasistas o listas sindicales lo más amplias posibles que llevaran adelante la lucha por la democracia de base con una línea antiburocrática y antipatronal. En ese camino apostaban a fortalecer los espacios de base de las fábricas como a organizar espacios federativos donde hacer confluir a todas las expresiones combativas y clasistas del movimiento obrero. En este esquema, como para el de la mayoría de las organizaciones de izquierda, el rol de los delegados era fundamental debido a que era la persona que representaba a los intereses de sus compañeros en la cotidianeidad de la fábrica.

En los hechos, la participación en la lucha sindical se transformó en una forma eficaz de acercarse a la gran masa de trabajadores fomentando su organización y politización, al mismo tiempo que como un medio efectivo para darse a conocer y erigirse como una alternativa política ante la clase obrera. Ello se aceleró fundamentalmente a partir de 1973. Ante la

apertura democrática la organización analizó que las movilizaciones se desencadenarían fundamentalmente por motivos reivindicativos, por lo que se propuso aumentar su inserción fabril y su influencia sindical.³ Así, bajo el lema de "formar centenares de células fabriles", la organización buscó penetrar en los principales establecimientos fabriles del país. En ese marco se inscribió el trabajo político de TENSA.

Ahora bien, como veremos, el desarrollo de la organización y sus orientaciones dependió de la realidad de cada fábrica y, fundamentalmente, de la experiencia de su militancia fabril. En el caso de TENSA, gran parte de ello estuvo determinado por los niveles de inserción lograda y, fundamentalmente, por la tensión generada entre las aspiraciones de la organización, los niveles de politización general de la fábrica y las posibilidades, prioridades y herramientas que los militantes se pudieron plantear o creyeron necesarias construir.

La fábrica, el conflicto y el triunfo del movimiento de base

TENSA era una fábrica dedicada a la producción de autopartes (servofrenos, zapatas y cilindros de freno, columnas de dirección, etc.) que había sido instalada en Argentina en 1961, y que abastecía a varias de las principales automotrices instaladas en el país (Fiat, Ford, Peugeot). La fábrica poseía dos plantas: la principal de ellas, ubicada en la localidad de Munro (Vicente López), estaba dedicada a la producción general y contaba con 1200 trabajadores, mientras que la segunda, ubicada en Pablo Nogués (General Sarmiento), estaba destinada al depósito, embalaje y el control de calidad para la exportación, y empleaba alrededor de 50 operarios.

La CI y el CD,⁴ encuadrados en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), estaban conducidos por miembros de la Juventud Sindical Peronista

³ "Resoluciones del Comité Central de diciembre de 1972" En: De Santis, 2006: 280.

⁴ La CI estaba compuesta por 5 miembros y el CD por 38 delegados.





(JSP), agrupación juvenil de la llamada "ortodoxia sindical peronista".⁵ Esta agrupación, a su vez, adscribía a la Lista Marrón, la cual conducía la sección local del sindicato desde 1965 y tenía a Victorio Calabró y a Gregorio Minguito como sus principales dirigentes. Según testimonios, la JSP mantenía un vínculo de complicidad con la empresa, basado en una cooperación mutua que comprendía la pasividad del sindicato ante la vulneración de derechos y la persecución de cualquier tipo de oposición sindical que pudiera surgir en las plantas.⁶

Los problemas principales de la fábrica pasaban por las malas condiciones de seguridad e higiene y atrasos en los pagos de los salarios, aguinaldos y horas extras. La fábrica prescindía de las medidas de seguridad básica: los obreros no recibían la ropa adecuada y las máquinas no contaban con los dispositivos que permitían la interrupción automática de su funcionamiento, por lo que proliferaban accidentes de trabajo. A eso se sumaba una atención médica ineficaz y funcional a las exigencias de la empresa.⁷

En este marco, a lo largo del año 1972, fue organizándose la agrupación "7 de julio" –posteriormente rebautizada "16 de enero"- motorizada por un núcleo de activistas de Vanguardia Comunista (VC) y con la participación de militantes del PRT-ERP, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y la Juventud Trabajadora Peronista (JTP).⁸

El conflicto se agravó a fines de ese año cuando se conoció que la empresa había acordado con la CI el atraso en el pago del aguinaldo. Por tal razón, el 16 de enero de 1973 los trabajadores de la planta de Munro, reunidos en una asamblea, decidieron tomar la fábrica reclamando que se liquidasen inmediatamente los salarios y el aguinaldo y la renuncia de

⁵ *La Causa Peronista* N° 7, 20 de agosto de 1974.

⁶ Un ejemplo de ello es relatado por Roberto Mereta –obrero de Pablo Nogués y militante perretista- quien nos cuenta que en la planta de Pablo Nogués el primer y único delegado con que habían contado los trabajadores antes del conflicto había sido desplazado por haber manifestado su disconformidad con los manejos del organismo por una maniobra sindical-patronal (Entrevista a Roberto Mereta por el autor, Marzo de 2018).

⁷ Entrevista con Carlos "Lito" Gonzales con el autor, Buenos Aires, 2017. "Lito" Gonzales, ingresó a TENSA en 1971 y al poco tiempo comenzó a militar en Vanguardia Comunista (VC).

⁸ Entrevista a "Lalo" Piñon con el autor, Buenos Aires, 2018. Lalo Piñon, ingresó a TENSA en 1971 donde comenzó a militar en VC, llegando a ser un militante sindical destacado dentro de la fábrica y en la organización.

la CI y el CD.⁹ Esta misma situación se replicó en la planta de Pablo Nogués cuyos operarios se plegaron de forma inmediata.¹⁰ La contundencia de la medida obligó a la empresa a liquidar los salarios en medio del paro y a pagar el 50% de las horas caídas en razón de la protesta. Por su parte los representantes gremiales se vieron obligados a dimitir. La UOM decidió intervenir la CI mediante un agente propio hasta que se "normalizara" la situación; mientras tanto los trabajadores designaron en asamblea un CD provisional.¹¹ Finalmente, el 5 de abril, se realizaron elecciones sindicales y se conformó una nueva CI y CD en base a los activistas de la agrupación. El triunfo se inscribía en el contexto de intensa movilización motivado por la victoria electoral peronista de marzo, y anticipó la ola de tomas de fábricas que se dieron durante el breve interregno camporista, transformándose rápidamente en un ejemplo para la zona.

En el nuevo CD estuvieron representadas la mayoría de las fuerzas políticas de izquierda que actuaban en la fábrica,¹² aunque la organización con mayoría de representantes era VC que, en consecuencia, resultó hegemónica en la conformación de la CI, al contar con tres de los cinco representantes que la componían.¹³ Asimismo, también salió elegido Roberto Mereta, obrero de la planta Pablo Nogués y militante perretista que, como veremos, tendrá un papel destacado en la vida político-sindical de la empresa.

⁹ "Tensa: También Calabró pierde la primera vuelta" *Política Obrera* N° 142, 13 de febrero de 1973.

¹⁰ "En Nogués a nosotros nos llaman por radio y nos dicen que estaba sucediendo eso en la planta grande y nosotros inmediatamente paramos la planta, y quedó todo así en stand by a la espera... no hizo falta correr a nadie porque nos habían dejado sin delegado." (Entrevista a Roberto Mereta por el autor, Marzo de 2018).

¹¹ El CD provisional contó con Roberto Mereta y Juan Carlos Chersanaz, ambos militantes del PRT-ERP, como delegados de la planta de Pablo Nogués ("Tensa. Se eligieron colaboradores en asamblea" *Avanzada Socialista* N° 48, miércoles 7 de febrero de 1973).

¹² En aquel CD había representantes de la JTP, el PRT-ERP, el PST y el PC.

¹³ Los integrantes de la CI eran Lalo Piñon (principal dirigente de la fábrica) Nicolás "Pipo" Román y Francisco Mercado (de VC), Roberto Mereta (PRT) y Carlos Luis Baynon (independiente).





Ninguna tregua a TENSA: el PRT-ERP en la fábrica

Si bien no se ha podido determinar exactamente el año en que el PRT-ERP logró ingresar a TENSA, a partir de los testimonios se puede afirmar que la organización ya contaba con presencia en las dos plantas durante el año 1972, e incluso algunos de sus militantes habrían protagonizado los primeros conflictos sindicales de aquel año.¹⁴ No obstante es de destacar que, según Roberto Mereta, fue recién después de desatada la "rebelión" de enero cuando el PRT-ERP logró su mayor nivel de influencia.

La participación sindical del PRT-ERP se centró en los organismos de base (CI y CD) y en la agrupación. Allí contaba con la presencia de Mereta entre los miembros de la CI, y con delegados en las plantas de Pablo Nogués y Munro. No obstante, el tipo de intervención varió en ambas plantas. En el caso de Munro estuvo condicionada por la cantidad de fuerzas políticas que intervenían en la agrupación (militantes de VC, el PST y la JTP), de modo que la influencia estaba más repartida y la capacidad de maniobra era más reducida. Si bien, como indican la mayoría de los testimonios, el vínculo entre las organizaciones era "excelente", la disputa política en su interior exponía un límite a la influencia perretista.¹⁵ Pese a ello, como indica "Lalo" Piñon, el PRT-ERP logró captar a varios militantes, contando con delegados o activistas "muy respetados en sus secciones". En la planta de Pablo Nogués, en cambio, las condiciones eran distintas ya que allí, pese a la presencia de algunos militantes de base de la JTP, la dirección "indiscutida" estaba en manos del PRT-ERP.¹⁶ Allí logró orga-

¹⁴ Entrevista a Lalo Piñon por el autor, Buenos Aires, Julio de 2018.

¹⁵ Entre los militantes perretistas quienes más se destacaron fueron los hermanos Jesús Lautaro y Gerardo Cesar De La Rosa Aragón, Luis Alberto Sportuno Pérez (sección tornos) y Luis "el Tío" Arce (sección Mecanizado General), quienes, según los testimonios, eran obreros "muy respetados en sus secciones" (Entrevista a "Lalo" Piñon con el autor, Buenos Aires, 2018; Entrevista a Mario Masolini con el autor, Los Polvorines, 2018; Entrevista con Rubén Guerra con el autor, Buenos Aires, 2018).

¹⁶ "Lito" Gonzales plantea que en dicha planta la dirección era exclusiva del PRT-ERP y Mario Masolini lo confirma planteando que la influencia del PRT-ERP en aquella planta llegaba incluso hasta el personal administrativo (Entrevista con Carlos "Lito" Gonzales con el autor, Buenos Aires, Diciembre de 2017; Entrevista con Mario Masolini, Los Polvorines, Junio de 2018). Esta primacía, además, puede verse, en el hecho de que, de las dos plantas, la "Agrupación 16 de enero de Metalúrgicos de Nogués" fue la única que participó en el primer plenario del Movimiento Sindical de Base -frente sindical impulsado por los perretistas-, realizados el 8 de julio de 1973.

nizar a aproximadamente siete militantes, tener a todos los delegados,¹⁷ y un amplia red de simpatizantes.¹⁸ En ese sentido, las dimensiones del depósito (50 operarios) y la ausencia de disputa política ayudaban a que el trabajo político y sindical fuera más fluido: los militantes perretistas se reunían cotidianamente junto a sus simpatizantes y discutían e impulsaban las propuestas de manera colectiva en reuniones organizadas espontáneamente o en función de algún conflicto específico.¹⁹

En ambas plantas la actividad se daba de manera clandestina, es decir, que quienes oficiaban de dirigentes sindicales o delegados, como el caso de Mereta, no eran públicamente reconocidos como militantes perretistas.²⁰ Esta modalidad se profundizó a medida que la situación represiva fue recrudesciendo. Como indica Roberto Astudillo –militante perretista de la planta Munro-, la organización intervenía sindicalmente “con personas que no estaban descubiertas” e intercalaban la intervención en las asambleas para evitar que los militantes fueran identificados como tales.²¹ Así, a diferencia de los militantes de VC, los perretistas dedicados a la tarea sindical no buscaban referenciarse públicamente con la organización.

Según Mereta, si bien se intentaba “subir la vara” dándole una explicación tácitamente marxista a los conflictos cotidianos de la fábrica, debía respetarse el papel de sindicalista evitando asumir un discurso “partidario”. Aun así, en reuniones reducidas o en “tertulias” en el comedor y en la oficina sindical, se podía profundizar los planteos e “ir más a fondo”

¹⁷ Roberto Mereta, Bartolomé Da Silva y Juan Carlos Chersanaz Burgos, militantes perretistas, fueron los delegados de la planta.

¹⁸ Según Mario Masolini la lectura de *El Combatiente* en Pablo Nogués era tan extendida que hasta los administrativos lo tenían. (Entrevista a Mario Masolini por el autor, Buenos Aires, Julio de 2018).

¹⁹ Incluso el propio Mereta, líder sindical de la planta, no recuerda que la agrupación se haya constituido como tal ya que en realidad funcionaba “de hecho”. Ello también repercutía a nivel de funcionamiento partidario: la presencia casi exclusiva del PRT-ERP relajaba la disciplina, lo que, según Mereta, le habría significado discusiones con sus responsables en más de una ocasión debido a que en los hechos tendía a construir en base a criterios propios y en función de lo que demandaba la práctica (Entrevista a Roberto Mereta con el autor, Buenos Aires, 2018).

²⁰ Ello, por ejemplo, es lo que hace que tanto Blas Obella –trabajador de la planta Pablo Nogués- como “Lito” Gonzales –obrero de la planta Munro y militante de VC- y Carlos Luis Baynon –delegado de la planta Munro-, considerasen que el PRT-ERP no tenía participación de la vida gremial de la fábrica. (Entrevista a Carlos “Lito” Gonzales por el autor, Diciembre de 2017; Entrevista a Carlos Luis Baynon por el autor, Junio de 2018).

²¹ Entrevista a Roberto Astudillo por el autor, Diciembre de 2017.





con los debates políticos. La clave era que los militantes partidarios fueran considerados como delegados o dirigentes modelo, lo que en el imaginario perretista estaba vinculado a los valores de la "entrega" desinteresada a la causa de los trabajadores, la "incorruptibilidad" y la "combatividad". Ese era considerado como el punto de partida desde el cual construir vínculos de confianza con sus compañeros y lograr forjar una conciencia antipatronal y antiburocrática independientemente de sus filiaciones políticas. Además esa referencia construida les debía permitir detectar a aquellos obreros que demostraran interés en la política revolucionaria (o demostraran entusiasmo luego de alguna acción del ERP) para sumarlos a la organización u organizarlos en su órbita.

En el esquema partidario, en base a ese trabajo, los militantes tenían que organizar el "radio de influencia", es decir el conjunto de personas a las que debían "atendérselas" haciéndoles llegar la línea de la organización, la prensa y los distintos materiales de propaganda con que contaban. Estas personas podían cumplir algunas tareas, dependiendo del nivel de compromiso que estaban dispuestas a asumir, por lo que las células las organizaban y jerarquizaban como "simpatizantes" o "contactos". Como indica Astudillo se trataba de un "trabajo de hormiga" a través del cual se iba construyendo el partido.²²

Para ello, una de las herramientas fundamentales con la que contaban era el boletín fabril. Se trataba de un material partidario periódico, específico para la planta, que debía reflejar los problemas reivindicativos y ligarlos con los aspectos políticos e ideológicos generales.²³ Además, debía servir para fomentar el vínculo con los trabajadores, incorporándolos a la redacción, invitándolos a que sugieran los temas a tratar, etc.²⁴

²² Una manifestación de la influencia lograda fue, por ejemplo, la participación de algunos trabajadores de TENSA en el V Congreso del Frente Antiimperialista por el Socialismo (FAS), frente político impulsado por los perretistas. Realizado en la provincia de Chaco en noviembre de 1973, un contingente de la fábrica viajó junto a la delegación del PRT-ERP que había organizado una caravana con trabajadores de la zona.

²³ "La propaganda de masas: los boletines fabriles" *El Combatiente* N° 155, 17 de febrero de 1975.

²⁴ Como indica Luis Mattini, responsable nacional sindical y miembro del buró político perretista, la presencia de un boletín fabril era un indicador del desarrollo y una señal de la profundidad que tenía la organización en las fábricas (Entrevista a Luis Mattini por el autor, Buenos Aires, 2017).

En TENSA llevó el nombre de "Boletín Fabril Metalúrgico de los compañeros de TENSA", y salió por primera vez en el año 1973. En el editorial de su número 2, fechado el 29 de agosto, se consignaba que el boletín surgía "como necesidad de muchos compañeros para denunciar y divulgar todo lo que ocurría en la fábrica dándole una interpretación política".²⁵ Se proponía dar a conocer semanalmente las acciones de la organización y ser un espacio para la "libre discusión".²⁶ Según Astudillo, los artículos para este tipo de materiales salían de la discusión con los trabajadores y los colaboradores quienes, a través de sus opiniones, ayudaban a construirlos e incluso, en algunos casos, a escribirlos. El boletín fabril se entregaba afuera de la fábrica por equipos de propaganda que, armados, entregaban en mano los materiales.²⁷ Ello, según Mereta, conspiraba contra la regularidad de su salida ya que la posibilidad de realizar los repartos dependía de la situación represiva y el clima de la fábrica.

Como veremos a continuación, si bien esta forma de militancia política y sindical cotidiana fue la base que le permitió a los perretistas ganar influencia entre los trabajadores, la mayoría de los testimonios coinciden en que fue el accionar del ERP lo que le dio un salto cualitativo en su protagonismo en la fábrica.

La acción del ERP

Como dijimos, para los perretistas el accionar militar era un aspecto fundamental en su política fabril, y en el caso de TENSA jugó un rol de-

²⁵ DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

²⁶ En esa dirección el ejemplar incluía distintos tipos de notas que hablaban de las acciones realizadas por la organización de la zona, denunciaban los planes represivos de la empresa, e incluso convocaban a formar comandos de apoyo al ERP y un instructivo sobre como armar bombas "molotov" (DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309).

²⁷ Un informe de la DIPBA deja en claro la metodología que utilizaban para repartir el boletín fabril: "Realizadas averiguaciones, se establece que el material adjunto, "BOLETIN FABRIL METALÚRGICO" No. 2 editado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, dirigido a los compañeros de Tensa, fechado el 29 de agosto, fue distribuido mano en mano, por un grupo de jóvenes de ambos sexos, armados con ametralladoras y protegidos por una pick-up como grupo de apoyo, frente a la planta de Munro y siendo las 06, 00 hs. Entrada y salida del personal de obreros." (Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 994).





terminante. Allí, según las palabras de la organización, la combinación de la lucha sindical con la lucha armada había surgido como fruto de las circunstancias específicas y generales de sus plantas, y buscaba acompañar y consolidar el triunfo de enero, acabando con "la humillación" y el "trato policial" de los capataces, así como con la represión y las amenazas de la seguridad privada.²⁸

Entre 1973 y 1975, llevaron a cabo al menos 9 acciones militares de diferente envergadura: desde tomas de las plantas, hasta el secuestro del subgerente y el asesinato de un delegado de la "burocracia". Ello llevó a que la DIPBA y la empresa de seguridad privada Vanguard consideraran que el ERP había tomado a TENSA como "planta piloto" para realizar todo tipo de acciones y que había iniciado una "campaña psicológica" contra la empresa.²⁹

Al calor de dicha actividad la organización logró formar escuadras militares en ambas plantas, que funcionaban con obreros de la empresa y militantes de fuera de la misma. Astudillo, miembro la escuadra de Munro, remarca que las acciones militares tenían dos sentidos: 1- "rechazar las propuestas de la burocracia y la patronal" y 2- "dar a conocer la línea del partido".³⁰

La primera acción que registramos, se dio el 8 de febrero de 1973 en la planta de Munro, a muy pocos días de estallado el conflicto. A las 6 de la mañana una unidad del ERP autodenominada "Comando Jorge Ulla-Clarisa Lea Place", compuesta por 8 integrantes, intentó copar el establecimiento con el objetivo de arengar a los trabajadores, realizar pintadas y repartir volantes de la organización. No obstante, fueron interceptados por agentes de seguridad de la empresa, quienes se resistieron e iniciaron un enfrentamiento. En él cayó abatido el Sargento Segovia (retirado de la policía bonaerense), después de lo cual el comando debió huir sin poder realizar las acciones de propaganda planeadas, aunque, según informa-

²⁸ "Boletín fabril metalúrgico" DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309 (el subrayado es del original).

²⁹ DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

³⁰ Entrevista a Roberto Astudillo por el autor, Diciembre de 2017.

ciones periodísticas y policiales, lograron quitarle las armas a dos de los integrantes del servicio de vigilancia.³¹

A poco más de un mes, la organización elevó la apuesta con una acción que la puso en el centro de la escena política de la fábrica: el secuestro del sub-gerente general de la empresa, el ingeniero Alberto Lloveras.³² A las 8 de la mañana del 16 de marzo un comando integrado por 3 personas interceptó el auto del ingeniero, quien viajaba de su casa a la empresa. Fue trasladado a una "cárcel del pueblo" en el cual lo mantuvieron hasta el 23 de ese mes, día en que fue liberado posteriormente al pago de 400 millones de pesos.³³ El secuestro, a diferencia de otros casos, no tuvo como objetivo resolver algún conflicto sindical sino financiar a la organización guerrillera. Esto queda claro en el comunicado que repartió el ERP entre los obreros posteriormente.³⁴ En él también informaban que Lloveras había sido interrogado, y que en el interrogatorio había confirmado la existencia de capitales norteamericanos en las acciones de TENSA por un 30%, algo negado por la empresa sistemáticamente.³⁵ El escrito además comparaba a la fábrica con un "campo de concentración", donde los obreros eran vigilados y sometidos a tratos policiales, y presentaba al secuestro y otro tipo de acciones como actos de la "justicia popular" en la que los "explotadores" debían rendir cuentas. Finalmente culminaba llamando a hacer "de cada fábrica una fortaleza" y a formar "comandos de apoyo al ERP".³⁶ Como indica Vera Carnovale (2011), en la concepción perretista los secuestros eran inscriptos en el orden de un imaginario justiciero, ya que

³¹ *Clarín*, jueves 8 de febrero de 1973

³² Según un informe de la DIPBA los días posteriores al intento de copamiento de febrero habría habido una serie de reuniones (10/2; 11/2 y 20/2) fuera de la fábrica a las que asistieron varios activistas de TENSA en las que algunos asistentes se habrían adjudicado el intento de copamiento de la fábrica y habrían discutido la posibilidad de secuestrar al presidente de TENSA, Germán Figaredo. Sin embargo, como advierte la propia policía, resulta al menos sospechoso que los militantes del PRT-ERP hayan reivindicado abiertamente las acciones una reunión de esas características, con trabajadores independientes "de los cuales no se hallan plenamente seguros de su fidelidad" (DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309).

³³ *Clarín*, domingo 25 de marzo de 1973; DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 707; DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309

³⁴ "Comunicado del Comando Jorge Ulla-Clarisa Lea Place del ERP" DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309

³⁵ *Clarín*, domingo 25 de marzo de 1973.





ofrecían la posibilidad de hacer efectiva la reparación –al menos parcial y en alguna medida particularizada- del daño cometido, al tiempo que le permitían a la organización erigirse ante las masas y ante sí misma como autora y referente de pequeños actos de reversión de injusticias (pp. 146-147).

En los hechos, la acción le dio al PRT-ERP un protagonismo que no había tenido hasta al momento. De hecho, a los pocos días, German Figaredo, presidente de la compañía, emitió un comunicado que pegó en todas las paredes de las plantas en el que pedía abiertamente una “tregua”.³⁷ Por su parte el PRT-ERP, asumiendo ser el destinatario del mensaje, respondió la carta mediante un comunicado dirigido a los “compañeros de TENSA”, en que denunciaba los planes represivos y las malas condiciones de trabajo de la empresa.³⁸

A partir de allí la organización comenzó a intervenir más sistemáticamente sobre la fábrica a través de volantes y acciones de diverso tipo. De hecho constituyó un “Tribunal Revolucionario Popular” para todo el partido de Vicente López que tuvo a dicha fábrica como centro principal de operaciones.³⁹ En una de sus actuaciones, por ejemplo, el tribunal realizó una “investigación” sobre los principales exponentes de “la patronal, subalternos y su aparato represivo (Vanguard)”. El informe final consignaba los nombres de los indagados, su cargo de responsabilidad con una breve descripción sobre sus actitudes y comportamiento y un largo listado de hechos por los cuales se lo acusaban. Entre ellas se puede leer imputaciones por amenazas, maltratos, intimidación, despidos, suspensiones, delaciones y arbitrariedades varias. En él no sólo se exponía a personal jerárquico sino también a trabajadores que eran considerados “alcahuetes”, “traidores” o “infiltrados” y se los ponía a disposición del tribunal.⁴⁰

³⁶ “Comunicado del Comando Jorge Ulla-Clarisa Lea Place del ERP” DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309

³⁷ Entrevista a Floreal Avellaneda, obrero y militante del PC, Memoria Abierta.

³⁸ “A los compañeros de Tensa”, DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

³⁹ “Boletín fabril metalúrgico” DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

⁴⁰ “A los compañeros trabajadores de TENSA: Proclama del Tribunal Revolucionario Popular del Partido de Vicente López” DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

Con este tipo de declaraciones buscaban intimidar a los directivos de la empresa para que concedieran las reivindicaciones gremiales básicas, así como también para mejorar y alivianar la cotidianeidad de los trabajadores morigerando los maltratos de supervisores y capataces quienes sentían la amenaza de haber sido nombrados y "sentenciados" por el ERP. Esto se complementó, además, con amenazas telefónicas y con las tomas de las plantas en las cuales se los exponía a un interrogatorio *in situ* frente a los trabajadores, haciéndolos comprometer ante éstos que cesarían con sus actitudes. Durante el año 1973 y 1974 el ERP realizó tres tomas que resultaron exitosas: dos en la planta de Pablo Nogués (12/5/73; 4/9/73) y una en la de Munro (24/5/74). En el caso de Pablo Nogués la metodología empleada fue similar en ambas tomas: el comando se presentaba intempestivamente en la fábrica a primeras horas de la mañana, reducía a los guardias que estuvieran vigilando, reducían al personal administrativo que considerasen jerárquicos y reunían a los trabajadores en un espacio común de la fábrica (patio, comedor, etc.). Ante ellos leían alguna proclama, volante o comunicado y procedían a vender los periódicos *Estrella Roja* y *El Combatiente*, además de repartir volantes o el boletín fabril. En paralelo algunos de los combatientes se disponían a pintar consignas con aerosol en las paredes⁴¹ y/o colgar la bandera del ERP en algún lugar visible. Además intentaban entablar un diálogo con los trabajadores sobre la situación de la fábrica y la situación política nacional.

Algunos pasajes de la reconstrucción que realizó la DIPBA de una de las tomas de la planta resultan ilustrativos tanto de la forma en que se desarrollaban las mismas así como de la recepción de los trabajadores.⁴² Según lo relatado, las tomas de fábrica no habrían sido repudiadas y, si bien no se informa que haya habido apoyo explícito o palabras de aliento de parte de los trabajadores para el comando, sí se destaca el hecho de

⁴¹ En el caso de TENSA se habrían pintado las siguientes consignas: "Ninguna tregua al ejército opresor"; "Ninguna tregua a las empresas explotadoras", "Libertad a los combatientes de la liberación" DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.

⁴² DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Daños, Legajo 2421.





que la prensa haya sido comprada por la totalidad de los obreros, y que incluso hayan donado su vuelto.⁴³

En opinión de los perretistas entrevistados las intervenciones del ERP no solo no fueron repudiadas sino que despertaron amplia simpatía en sus compañeros ya que robustecía su confianza además de prestigiar a la organización. Según Blas Obella, obrero independiente de la planta de Pablo Nogués, las acciones del ERP hacían que los obreros se sintieran respaldados y servían para que los supervisores disminuyeran considerablemente el "berdugueo".⁴⁴ Por su parte Lalo Piñon observa que, a pesar de que él políticamente estaba en desacuerdo, las acciones del ERP, en general, "eran bien recibidas" por los trabajadores ya que, al "meter miedo a los de arriba" generaba un sentimiento de justicia y venganza ante una cotidianeidad hostil de explotación y vigilancia, además de morigerar la acción represiva de la empresa.⁴⁵

No obstante existen quienes, como "Lito" Gonzales, y Mario Masolini –obrero independiente de la planta Munro-, consideran que las acciones, en general, eran reprobadas por el conjunto de los obreros, además de ser problemáticas, por darle argumentos a la "burocracia sindical" para "desprestigiar" al movimiento de base y atraer la represión.⁴⁶

Si bien es difícil precisar los niveles de simpatía que generaban las acciones del ERP, las fuentes y testimonios nos indican que estuvieron lejos de generar una reacción homogénea o mayoritaria entre los trabajadores, sea ésta condenatoria o celebratoria, pero que el impacto entre quienes simpatizaron fue fundamental para su crecimiento al interior de la planta.

⁴³ Según el informe la policía no pudo obtener ningún ejemplar de los periódicos vendidos porque todos los obreros habían manifestaron querer guardarlos "como recuerdo". (DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 994).

⁴⁴ Obella remarca que luego de las tomas los supervisores, que amedrentaban constantemente a los trabajadores, "parecían ovejas" y actuaban de manera amable por el miedo. (Entrevista a Blas Obella por el autor, Buenos Aires, Julio de 2018).

⁴⁵ Entrevista a "Lalo" Piñon con el autor, Buenos Aires, 2018.

⁴⁶ Entrevista a Carlos "Lito" Gonzales por el autor, Diciembre de 2017; Entrevista a Mario Masolini por el autor, Buenos Aires, Julio de 2018.

Por otro lado, en lo que respecta a sus efectos políticos y represivos, efectivamente en TENSA, como se puede observar en los archivos de la DIPBA, la actividad del ERP motivó una atención especial por parte de las fuerzas de seguridad y un robustecimiento de la vigilancia tanto privada como policial. Inclusive la propia organización debió advertir a los trabajadores que el presidente de la empresa utilizaría como excusa al accionar del ERP y las supuestas amenazas hacia su persona para justificar la introducción de "matones de la Juventud Sindical" y el reforzamiento de la guardia.⁴⁷ Sin embargo, como veremos, la virulencia de la reacción burocrática contra el movimiento de base no estuvo relacionada principalmente con el accionar del ERP sino con la influencia que empezaba a mostrar el movimiento de base para el resto de las fábricas de la zona. Por otro lado, como destacan algunos testimonios y como se deja ver en el pedido de tregua de la empresa, las acciones del ERP habrían ayudado a brindarle cierta "seguridad" al trabajo político-sindical del CD y la CI frente al poderoso entramado patronal-sindical-policial que gobernaba en la empresa hacía años.

Ahora bien, consideramos que existieron dos etapas en el accionar del ERP sobre la fábrica: una primera, reseñada en el presente apartado, que comprende todo el año 1973 y parte del año 1974, en la que los efectos de las acciones militares tendieron a fortalecer al movimiento de base de la fábrica y, ayudaron a morigerar la acción represiva de la empresa y de la propia "burocracia sindical"; y una segunda, que comprende la última mitad del año 1974 (momento en que, como se verá, es derrotado el movimiento de base) hasta el golpe de 1976, en la que, a diferencia del período previo, perdieron su contacto con las demandas obreras y alimentaron el recrudescimiento de la respuesta represiva.

⁴⁷ "Boletín fabril metalúrgico" DIPBA, Mesa D(s), Carpeta Varios, Legajo 1309.





La contraofensiva burocrática y la huelga: un punto de inflexión

El triunfo de enero y la elección de la CI y el CD, cambiaron la situación de la fábrica inmediatamente. La puesta en ejercicio de un modelo de "democracia sindical" basado en la acción directa y los métodos asamblearios fue la clave que les permitió a los trabajadores de TENSA conseguir, durante el año 1973, muchas de estas demandas. En poco tiempo, mediante petitorios y quites de colaboración, la nueva conducción logró mejoras sustanciales en materia de comedor, insalubridad, ropa de seguridad y consiguió la reincorporación de tres despedidos y la participación de los obreros en las discusiones sobre productividad y métodos de trabajo.⁴⁸ Así, TENSA se transformó rápidamente en un ejemplo para el resto de las fábricas de la zona y en una articuladora de las experiencias anti-burocráticas allí surgidas (como en las fábricas EMA, Corni y Del Carlo).⁴⁹

No obstante, esta situación no duró mucho tiempo. El ejemplo de TENSA se transformó en inadmisibles para la conducción de la UOM, la cual desde mediados de año comenzó con ataques violentos sobre los trabajadores,⁵⁰ que se intensificaron a inicios de 1974. Para entonces, Victorio Calabró había asumido la gobernación de Buenos Aires y con él se había consolidado el poder de la UOM en la estructura de poder de la provincia, por lo que sus grupos de choque actuaban con mayores libertades. En ese marco, la JSP fue reconstruyendo su trabajo político en la planta y en las elecciones pautadas para la renovación de la CI, se impuso con fraude desplazando a la agrupación "16 de enero".⁵¹

⁴⁸ "Tensa: para qué sirve una comisión combativa" *Avanzada Socialista* N° 58, miércoles 9 de mayo de 1973; Entrevista con Lalo Piñón con el autor, Buenos Aires, 2018.

⁴⁹ De hecho, el trabajo de coordinación y contacto con otras experiencias antiburocráticas fue contribuyendo para que, a principios de 1974, se conformara la Lista Gris, agrupamiento que buscó disputar la conducción de la UOM Vicente López. Entre las principales fábricas participaron: Corni, Del Carlo, EMA, ASTARSA, BIC-CIÚ, Buffalo, OTIS, PENSA, METLCOR, CORMASA, Wobron, Kinittax, Shulman, Singer, PENSA, etc. (*Avanzada Socialista* N° 91, semana del 7 al 14 de febrero de 1974; *Política Obrera* N° 185, 2 de febrero de 1974).

⁵⁰ Entre octubre y noviembre llevaron a cabo amedrentamientos con armas al interior de la planta, atacaron a cadenas a uno de los delegados fuera de la fábrica, amenazaron de muerte a varios activistas. Incluso, un grupo de 5 obreros fueron atacados a balazos y detenidos por la policía mientras realizaban una pintada en las paredes de la fábrica (*El Mundo*, jueves 22 de octubre de 1973; *Nuevo Hombre* N° 50, 1ª quincena de noviembre de 1973; "Victoria obrera en Tensa (Munro)" *El Combatiente* N° 97, Miércoles 14 de noviembre de 1973).

⁵¹ Como indica "Lalo" Piñón, estos sectores habían "aprendido" de la derrota y, da poco, fueron recobrando le-

La derrota electoral significó un duro golpe para la agrupación pero no su aplastamiento definitivo. De hecho siguió teniendo incidencia entre los trabajadores y continuó desarrollándose en enfrentamientos por momentos silenciosos y por momentos abiertos con la empresa y la nueva conducción de la CI. Por su parte, aunque con menor intensidad, el ERP continuó actuando sobre la fábrica,⁵² lo que configuraba un clima de ingobernabilidad que desafiaba directamente a la representatividad de los nuevos delegados.⁵³

En este contexto, el 25 de julio, en el marco de una asamblea extraoficial que había convocado la agrupación "16 de enero", los nuevos miembros de la CI ingresaron al establecimiento junto a un grupo de personas del sindicato y expulsaron a los activistas a punta de pistola, quienes se trasladaron a Pablo Nogués en búsqueda de la solidaridad de sus compañeros.⁵⁴ Con el control de la planta, el grupo de la UOM, junto a la CI, se reunió con la empresa y le exigieron el despido de 27 obreros, entre los que figuraban, en su mayoría, referentes de la agrupación.⁵⁵ Al día siguiente la empresa confirmó los despidos acusando presión sindical e inmediatamente los activistas, junto a los despididos, organizaron una huelga por tiempo indefinido.

La huelga tuvo una duración de aproximadamente un mes, aunque las primeras dos semanas fueron las de mayor intensidad y acatamiento.⁵⁶

gitudinal a través del trabajo de base que realizaban algunos activistas "inteligentes", como José Chirino, quienes levantaban algunas reivindicaciones sentidas por sus compañeros. (Entrevista a "Lalo" Piñón con el autor, Buenos Aires, 2018).

⁵² El 21 de marzo un comando procedió a copar la clínica en la que se atendía al personal de TENSA donde interrogaron a los profesionales médicos "sobre su actividad al servicio de la patronal"; y el 24 de mayo, nuevamente, se dio un copamiento de la planta Munro, donde repartieron el periódico *Estrella Roja* y arengaron a los obreros. La acción terminó en un tiroteo con la policía, del cual un agente resultó herido de gravedad. ("Crónica de la guerra revolucionaria" *Estrella Roja* N° 32, lunes, 10 de abril de 1974; "Crónica de la guerra revolucionaria" *Estrella Roja* N° 35, 1ro de julio de 1974).

⁵³ De hecho, según relatan los testimonios, la propia empresa terminaba quejándose ya que los acuerdos a los que arribaban con los nuevos delegados no eran respetados por las bases que, muchas veces, de manera espontánea adoptaban medidas de fuerzas (Entrevista a Lalo Piñón con el autor, Buenos Aires, 2018; Entrevista a Mario Masolini con el autor, Los Polvorines, 2018).

⁵⁴ Desde allí marcharon nuevamente hacia Munro, pero al llegar la fábrica ya estaba desalojada. (*Avanzada Socialista* N° 114, 1 de agosto de 1974).

⁵⁵ Entre ellos la mayoría de los militantes de VC, y algunos activistas del ex CD. Según "Lito" Gonzales, luego de los despidos quedaron solo dos militantes de VC (Entrevista con el autor, Buenos Aires, 2017). Por su parte, el PRT-ERP no sufrió bajas significativas ya que Mereta, su principal referente, al ser obrero de Pablo Nogués no fue incluido en los listados.

⁵⁶ Según los periódicos *Noticias* y *El Combatiente*, la medida alcanzó un nivel de acatamiento del 80% del per-





Garantizada desde afuera por el núcleo de despedidos, los trabajadores organizaron ollas populares, piquetes de huelga, comisiones de solidaridad, volanteadas en colectivos y en la estación de trenes, etc.

La violencia fue, desde el principio, un común denominador del conflicto. De hecho, la primera asamblea que dio inicio al plan de lucha fue reprimida por la policía. A su vez, al interior de la fábrica y a sus alrededores, la actividad de patotas de la UOM se intensificó y el amedrentamiento (a punta de pistola o con golpizas) de los obreros que entraban a trabajar y realizaban alguna actividad en apoyo a la huelga fue una constante. Ello se complementó con la persecución interna organizada por Vanguard –empresa de seguridad privada- que requisaban a todos los trabajadores que ingresaban a trabajar y les retenían cualquier material sospechoso de ser “subversivo”.⁵⁷

El PRT-ERP buscó organizar a los trabajadores para responder a estas agresiones. Desde su punto de vista para hacer triunfar la huelga debían garantizarse tres pilares fundamentales: la organización de la autodefensa obrera para responder a los ataques; la organización de la solidaridad de distintos sectores de la sociedad para evitar el aislamiento; y la unificación de las luchas con distintas fábricas de la zona para darle una perspectiva más amplia al conflicto.⁵⁸

En cuanto a la autodefensa, el ERP organizó grupos de obreros y militantes armados que actuaron resguardando los piquetes y ollas populares. De hecho existieron algunas escaramuzas en distintos lugares e incluso se dio un enfrentamiento en un piquete de huelga, donde un grupo de sindicalistas de la UOM, apoyados por la policía, agredieron a tiros la manifestación y se encontraron con la resistencia armada.⁵⁹ Para los pe-

sonal de Munro y de la totalidad de los trabajadores de Pablo Nogués (Noticias N° 245, viernes 2 de agosto de 1974; “TENSA: ‘globo’ de ensayo de López Rega”, *El Combatiente* N° 129, miércoles 7 de agosto de 1974).

⁵⁷ *Noticias* N° 256, miércoles 14 de agosto de 1974.

⁵⁸ “TENSA: ‘globo’ de ensayo de López Rega”, *El Combatiente* N° 129, miércoles 7 de agosto de 1974.

⁵⁹ La acción es relatada en *El Combatiente* donde se consigna que la burocracia y la policía se vieron obligados a retroceder. Ello es confirmado por Lito Gonzales quien fue testigo presencial y confirma que “no hubo muertos por casualidad”. Por su parte “Tito”, quien participó directamente de la acción en calidad de responsable de la zona, nos comenta: “yo me acuerdo haber participado en un piquete de huelga que fuimos y luego la burocracia y ahí nos cagamos a tiros... cuando ellos se cruzaron así nosotros desenfundamos y los cagamos a tiros... por supuesto que después de eso nosotros nos fuimos cagando.” (Entrevista a Tito por el autor, Cafayate, 2018).

retistas éste y otros ejemplos, eran la demostración "en la práctica" de la importancia del desarrollo de la lucha armada ligada al movimiento obrero en general y para el caso de TENSA en particular.⁶⁰

En cuanto a la solidaridad y unidad con otras fábricas se logró la participación de trabajadores de diferentes establecimientos y sindicatos en las asambleas,⁶¹ además de la formación de una comisión integrada por las organizaciones políticas que se solidarizaban o eran parte de la lucha.

Con el pasar de las semanas, sin embargo, la huelga comenzó a "desinflarse". En palabras de "Lito" Gonzales fueron dos los factores que fueron haciendo que la huelga "no diera para más": la dificultad que significaba sostener el conflicto desde afuera de la fábrica y el aumento del aparato burocrático y de los niveles de virulencia que impusieron éstos.⁶² No obstante, como indican "Lalo" Piñon y Floreal Avellaneda (obrero y activista del PC), el quiebre final se dio en el momento en que algunos de los despedidos decidieron negociar sus indemnizaciones con la empresa, fracturando la unidad de la huelga.⁶³

El levantamiento de la medida significó un duro golpe para los obreros. Como indican Mereta y Astudillo, el resultado inmediato fue el fortalecimiento de la burocracia, la restricción de las libertades para la militancia gremial, la incomunicación entre los trabajadores de ambas plantas y la inseguridad individual de los activistas.⁶⁴ Efectivamente, según lo que pudimos relevar, existió una importante merma en la vida gremial de la fábrica. De hecho las últimas referencias del año 1974 se registran entre agosto y septiembre.⁶⁵ Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la agrupación volverá a reactivar su actividad durante 1975.

⁶⁰ "TENSA: 'globo' de ensayo de López Rega", *El Combatiente* N° 129, miércoles 7 de agosto de 1974.

⁶¹ En ellas participaron obreros de FATE Electrónica, quienes además realizaron un paro de 15 minutos en apoyo a TENSA; obreros de Texas Instruments; trabajadores de la UTA, Santard Textil, Warco, Martin Amato, EMA, la Federación Gráfica Bonaerense, el Sindicato Capital Gas del Estado, etc.

⁶² Gonzales recuerda que un punto de inflexión fue una balacera cuando estaban volanteando en un colectivo. (Entrevista a Carlos "Lito" Gonzales por el autor, Diciembre de 2017)

⁶³ Entrevista a Lalo Piñon por el autor, Julio de 2018; Entrevista a Floreal Avellaneda, Memoria Abierta.

⁶⁴ Entrevista a Roberto Astudillo por el autor, Diciembre de 2017.

⁶⁵ En aquel mes los obreros de TENSA aparecen firmando el acta constitutiva de la Coordinadora Nacional de Lucha Sindical conformada en Tucumán ("Coordinar las luchas por aumentos salariales y por la democracia sindical" *Nuevo Hombre* N° 70, segunda quincena de septiembre de 1974).





De la acción acompañada a la "ley del talión"

Luego de la huelga, el PRT-ERP continuó interviniendo sindicalmente a través de la agrupación, aunque ahora con niveles mucho más estrictos de clandestinidad. Aquel espacio comenzó un proceso de recomposición, ahora basado en una nueva generación de activistas –independientes y militantes de diferentes corrientes– aunque ya sin la presencia destacada de los militantes de VC. En esta nueva etapa uno de sus principales referentes perretistas en la planta Munro fue Luis “el Tío” Arce quien, según los testimonios, era uno de los referentes principales de la agrupación y uno de los activistas más reconocidos entre los trabajadores.⁶⁶ Mientras tanto en Pablo Nogués, el trabajo político del PRT-ERP continuó casi intacto ya que allí no había repercutido fuertemente la derrota.

Por su parte la actividad del ERP mermó significativamente. Según Astudillo por esos tiempos se realizaban acciones menores como “volanteadas” en puerta de fábrica, colocación de “bombas de volantes” o cortes de calles aledañas a la fábrica en los que se exhibían banderas de la organización.⁶⁷ En ese sentido la actividad guerrillera se comenzaba a amoldar a la nueva situación que vivía la fábrica y al proceso de recomposición de fuerzas del movimiento de base. Sin embargo ello cambió rotundamente cuando el 5 de abril de 1975 el comando “Uriz-Villaverde-Da Silva” llevó a cabo “ajusticiamiento” de José Chirino, hombre de la UOM y delegado general de la fábrica. Esta acción fue realizada en represalia a la desaparición de Tomás Sánchez, obrero de la planta Munro y militante perretista. En las declaraciones posteriores la organización justificó la acción por considerar a Chirino como “responsable directo de la bárbara y criminal represión desatada en la zona”.⁶⁸

⁶⁶ Según Mario Masolini y Rubén Guerra, ambos activistas de la fábrica, Arce era muy querido entre sus compañeros por ser solidario y a través de esa referencia logró organizar a varios simpatizantes alrededor suyo. (Entrevista a Rubén Guerra, Buenos Aires, 2018; Entrevista a Mario Masolini, Los Polvorines, 2018).

⁶⁷ Entrevista a Roberto Astudillo por el autor, Italia, 2017.

⁶⁸ *El Combatiente* N° 165, lunes 21 de abril de 1975; *Estrella Roja* N° 53, 5 de mayo de 1975.

Según "Lito" Gonzales la desaparición de Sánchez habría sido consecuencia de una discusión belicosa que había sostenido aquel con Chirino dentro del vestuario.⁶⁹ Por su parte Mereta también apunta al sindicato como principal responsable y recuerda que en aquel momento un militante perretista habría escuchado de boca del propio delegado que tenían a Sánchez, lo que habría motivado a la organización a tomar aquella medida.⁷⁰

Según los testimonios aquella acción habría tenido una recepción distinta en el activismo y en el conjunto de los trabajadores. Mientras que entre los primeros habría caído bien, y mucho de los miembros de la agrupación lo habrían festejado, la gran mayoría de los trabajadores no habrían compartido la metodología. Por otro lado, la acción recibió el repudio de organizaciones como el PST, que la calificó como una "acción descolgada" y sumamente negativa por atraer la represión y generar "pasividad" y "confusión" entre los trabajadores, fomentando una "división" innecesaria entre quienes las apoyaban y quienes las repudiaban.⁷¹ Lo que resulta interesante en este caso es que el PRT-ERP, en general, rechazaba las ejecuciones de "burócratas sindicales" ya que consideraban que la "liquidación de la burocracia" no se resolvía con la "liquidación física" de sus representantes sino con la movilización y organización independiente de las bases.⁷² En ese sentido, como indica el propio Mereta, lo esperable en ese caso hubiese sido que se respondiera organizando un paro o con alguna acción de ese tipo, como ya había sucedido hacía poco más de un año –en octubre del año 1973- cuando, ante la detención de 5 obreros de la fábrica –algunos de ellos militantes perretistas-, se había organizado una movilización a las comisarías exigiendo su liberación.⁷³ De modo que puede considerarse que, en esta acción, el ERP respondió a una lógica de enfrentamiento entre estructuras, en las que intentó demostrar capa-

⁶⁹ Entrevista a Carlos Lito Gonzales por el autor, Buenos Aires, 2017.

⁷⁰ Entrevista a Roberto Mereta por el autor, Buenos Aires, 2018.

⁷¹ "TENSA: el caso Chirino", *Avanzada Socialista* N° 142, 12 de abril de 1975.

⁷² "La burocracia sindical. Instrumento burgués" *El Combatiente* N° 95, viernes 26 de octubre de 1973.

⁷³ *El Mundo*, jueves 22 de octubre de 1973; *Nuevo Hombre* N° 50. 1ª quincena de noviembre de 1973.





cidad de respuesta a la acción represiva de la "burocracia" bajo la lógica de la "ley del talión". De hecho, como remarcan los testimonios, la acción se transformó en un nuevo punto de inflexión al interior de la fábrica en tanto agudizó el clima de hostilidad y represión.⁷⁴

Pese a ello, el movimiento de base continuó con niveles de actividad. De hecho, en mayo se dieron movimientos y protestas gremiales y en los meses posteriores los trabajadores participaron activamente tanto las movilizaciones generales de junio y julio así como en las coordinadoras de gremios en lucha surgidas en aquellos meses. El golpe definitivo, en cambio, estuvo dado por la política represiva general del gobierno: como consecuencia de los llamados "decretos de aniquilamiento" dictados en octubre de 1975,⁷⁵ el 20 de noviembre fueron secuestrados tres activistas, entre ellos Mario Masolini delegado de la agrupación en las coordinadoras.⁷⁶ A partir de allí la actividad de la agrupación fue cada vez más difícil de sostener, situación que se profundizó notablemente con la instauración de la dictadura militar en marzo de 1976: entre marzo y julio de aquel año desaparecieron una cantidad importante de activistas de TENSA,⁷⁷ mientras que otros tantos abandonaron la fábrica.

En lo que respecta a la actividad perretista, según Mereta, luego del secuestro de Chirino la militancia se volvió cada vez más peligrosa y, paradójicamente, los criterios de seguridad de la organización más relajados, lo que llevó a "malos manejos" e incluso sospechas de infiltraciones. Además, por otro lado, algunos militantes abandonaron la fábrica y pasaron a la clandestinidad⁷⁸ por lo que, en palabras del entrevistado, "los contac-

⁷⁴ Entrevista a Roberto Mereta con el autor, Buenos Aires, 2018; Entrevista a Rubén Guerra con el autor, Buenos Aires, 2018.

⁷⁵ Se trataron de 3 decretos que, entre otras cosas, dispusieron de la creación de un Consejo de Seguridad Interna (compuesto por miembros del ejecutivo y las FFAA), la asignación de otro ente de tipo operativo (Consejo de Defensa Nacional) la función de establecer convenios con las provincias y colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario para la "lucha contra la subversión" y la delegación a las FFAA de la ejecución de las operaciones militares y de seguridad para "aniquilar" "elementos subversivos" en todo el país. (Franco, 2012: 151-152).

⁷⁶ Masolini recuerda que en el interrogatorio del cautiverio quienes lo detuvieron hacían especial hincapié en el PRT-ERP dentro de la fábrica y que, particularmente, "la obsesión" era Ramón "el Tío" Arce. (Entrevista a Mario Masolini por el autor, 2018).

⁷⁷ Hasta hoy han sido identificados 18 trabajadores desaparecidos.

⁷⁸ El caso más evidente fue el de Luis Alberto Sportuno (sargento "Lucho") quién formó parte del asalto al Batallón de Arsenales 601 "Domingo Viejobueno" de Montechingolo, donde calló en combate. (Plis-Sterenber, 2006).

tos se venían a menos”, es decir se iba perdiendo el trabajo y la influencia política lograda. Por ello Mereta, junto a otro compañero, decidió abandonar el partido a fines de 1975.

El PRT-ERP continuó con una estructura mínima en la fábrica durante los primeros meses del golpe, aunque no hemos podido precisar cuándo fue que terminó desarticulándose definitivamente ni hallar datos sobre si desarrolló algún tipo de actividad o acción en tiempos dictatoriales.⁷⁹

Conclusión

En discusión con aquellas lecturas que han explicado la violencia política de los años '70 y a las organizaciones armadas como fenómenos “externos” al movimiento social y a la experiencia de la clase obrera, este trabajo avanzó en el análisis del vínculo entre la izquierda armada y los trabajadores a partir de un estudio de caso. Ello nos permitió ver que, lejos de tratarse de una organización “externa” y “extraña” a la experiencia de clase de los trabajadores de aquella fábrica, la organización se desarrolló entre los operarios obteniendo resultados significativos: logró una inserción considerable que le permitió construir células en las dos plantas, editar un boletín fabril y organizar una red de simpatizantes y colaboradores que, en el caso de Pablo Nogués, fue bastante amplia. En el marco de ese desarrollo, sus militantes lograron impulsar, junto a otras organizaciones, una agrupación sindical y participar activamente en el CD y en la CI. Además, como rasgo distintivo, contó con un audaz y significativo despliegue militar que se transformó en un aspecto clave para el crecimiento orgánico y político de la organización.

⁷⁹ En el archivo de la DIPBA hemos hallado un informe del año 1977 que reporta la distribución del Boletín Fabril en la fábrica, por lo que estimamos que al menos hasta aquel año el PRT-ERP contó con organización al interior de las plantas. (DIPBA, Mesa B, Leg. 139, caja 1714).





No obstante, como vimos, fue una práctica compleja cargada de tensiones que, lejos de ser armónica, significó una apuesta polémica y controversial por momentos contraproducente para el movimiento de base de la fábrica. Es que la estrategia de la organización, sus tiempos y aspiraciones no siempre acompañaron los ritmos de politización de los trabajadores y los momentos políticos de la fábrica. Así, la recepción de los trabajadores, la dinámica de los conflictos, la presencia de otras fuerzas políticas, la fortaleza de la "burocracia sindical" y de los organismos de base obrera –agrupación, CI, CD-, etc., fueron variables que marcaron el impacto de sus acciones y afectaron de distinto modo su desarrollo e influencia.

Ahora bien, si la actividad guerrillera aumentó la tensión represiva al interior de la planta, también, como vimos, ayudó al movimiento de base y a los obreros a trabajar con mayores libertades y seguridades. Es que la violencia sindical y política –en distintos niveles y formatos- no fue algo exclusivo del PRT-ERP, sino que formó parte del clima generalizado y cotidiano de la fábrica, en la mayoría de los casos impulsado por la empresa y el sindicato.

Consideramos que avanzar en el estudio de estas experiencias, no sólo nos permite analizar las características que asumió la experiencia perreitsta en el mundo obrero, sino también el lugar que ocupó la violencia política en la fábricas y, por ende, en la experiencia de clase de un sector de los trabajadores.

Bibliografía

Acha, O. (2010). Dilemas de una violentología argentina: tiempos generacionales e ideologías en el debate sobre la historia reciente. Universidad Nacional de General Sarmiento: *V Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente*.

Basualdo, V. y Lorenz, F. (2012). Los trabajadores industriales argentinos en la primera mitad de la década del '70: propuestas para una agenda de investigación a partir del análisis comparativo de casos, *Revista Digital de la Escuela de Historia*, 4(6), pp 123-157.

Carnovale, V. (2011). *Los combatientes. Historia del PRT-ERP*. Bs. As.: Siglo XXI.

De Santis, D. (2004). A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I Vol. 1, *Nuestra América*, Bs. As.

_____ (2006). A vencer o morir. PRT-ERP. Documentos, Tomo I Vol. 2, *Nuestra América*, Bs. As.

Franco, M. (2012). *Un enemigo para la nación. Orden interno, violencia y "subversión", 1973-1976.*, Fondo de Cultura Económica, Bs. As.

Lorenz, F. (2013). *Algo parecido a la felicidad. Una historia de la lucha de la clase trabajadora durante la década del setenta (1973-1978)*. Bs. As: Edhasa.

Plis Sterenberg, G. (2003). *Monte Chingolo: la mayor batalla de la guerrilla argentina.*, Editorial Planeta, Bs. As.

Scoppetta, L. y Torres, P. (2018). "La política sindical del PRT-ERP: notas sobre una búsqueda (1965-1976)" En: Simonassi, Silvia y Dicósimo, Daniel: *Trabajadores y sindicatos en Latinoamérica*. Bs. As: Imago Mundi.

Stavale, S. (2019). "Perros en las fábricas: La política sindical del PRT-ERP, sus prácticas y la experiencia de sus militantes en fábricas del Gran Buenos Aires, 1973-1976" (Tesis de posgrado). –FAHCE-UNLP. Disponible en: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1675/te.1675.pdf>

Tortti M. C. (2014). *La nueva izquierda argentina (1955-1976): socialismo, peronismo y revolución*. Rosario: Prehistoria Ediciones.

Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Bs. As.: Siglo XXI.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

El fin de la lucha armada en la Argentina. Montoneros y su segunda Contraofensiva (1980)

The end of the armed struggle in Argentina. Montoneros and their second Counteroffensive (1980).

Hernán Eduardo Confino*

*Recibido: 22 de junio de 2020
Aceptado: 24 de agosto de 2020*

Resumen: El siguiente artículo reconstruye históricamente la segunda Contraofensiva Estratégica, última estrategia organizada de Montoneros, desarrollada a lo largo del año 1980. Esta estrategia involucró el retorno clandestino de militantes que estaban en el exilio para combatir a la dictadura militar (1976-1983). A partir de las entrevistas realizadas a los protagonistas, los documentos partidarios de Montoneros y los documentos desclasificados de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de seguridad, el trabajo aborda cómo fue el proceso que terminó con la lucha armada que Montoneros había realizado a lo largo de su década de historia y que marcó su derrota final.

Palabras clave: Montoneros, Contraofensiva Estratégica, lucha armada, Terrorismo de Estado, Derrota.

Abstract: The following article carries out a historical reconstruction of the second Strategic Counteroffensive, Montoneros' last organized strategy, developed throughout the year 1980. This strategy involved the clandestine return of exiled militants to fight the military dictatorship (1976-1983). Based on interviews carried out with the protagonists, Montoneros party documents and declassified intelligence documents of the Armed and Security Forces, this work addresses how the process ended with the armed struggle which Montoneros had carried out throughout its decade-long history and which marked its final defeat.

Key words: Montoneros, Strategic Counteroffensive, Armed struggle, State Terrorism, Defeat.

* Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín/Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad Nacional de General Sarmiento/Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Argentina. hconfino@gmail.com

Introducción¹

En enero de 1980, la Conducción de Montoneros² y otros jefes de menor jerarquía decidieron la continuación de la Contraofensiva, estrategia que la organización había iniciado en octubre de 1978 y había desarrollado durante 1979 mediante el ingreso clandestino de militantes desde el exterior para realizar propaganda y atentados militares a la Argentina dictatorial (Larraquy, 2006). En esa ocasión, el diagnóstico de Montoneros había sido que la dictadura estaba en crisis y que la organización podía dirigir con su estrategia político-militar el descontento social que había con la dictadura (1976-1983).³ Reunida en La Habana a principios de 1980, la dirigencia montonera, que seguía pensándose como la “vanguardia del pueblo en la lucha por su liberación”,⁴ hizo una lectura por demás complaciente de los sucesos de 1979 y destacó positivamente el retorno de Montoneros a las portadas de los matutinos.⁵ La prensa que cubrió los tres atentados militares que la organización había realizado entre septiembre y noviembre de aquel año, había puntualizado sobre el vínculo de Montoneros con los palestinos (Robledo, 2018), había publicado la condena de otros actores políticos a los métodos armados y agitado la vigencia de la “subversión”.⁶ La situación de la organización era crítica. A la disidencia que habían encabezado Rodolfo Galimberti y Juan

¹ Agradezco los comentarios que Julián Delgado, Andrés Gattinoni, Rodrigo González Tizón y Leandro Lacquaniti hicieron a una versión previa de este escrito. Naturalmente, ninguno de ellos es responsable por los equívocos u omisiones en que pudiera incurrir el autor.

² La Conducción reunía a los jefes máximos de Montoneros: hacia 1980 estaba integrada por Mario Firmenich, Roberto Perdía, Raúl Yáger, Fernando Vaca Narvaja, Horacio Campiglia y Eduardo Pereira Rossi.

³ La Contraofensiva se sustentó en dos premisas centrales: la crisis de la dictadura y las internas militares en torno a las políticas económicas. Atacando militarmente a los funcionarios de la cartera económica y transmitiendo proclamas de los dirigentes de la organización en interferencias clandestinas, Montoneros tenía la intención de potenciar esas rispideces. Por otro lado, la organización planteaba el “triumfo de la Resistencia” puesto que el régimen militar no había logrado vencer a la totalidad de la organización para 1977 como tenía previsto de acuerdo a sus proyecciones políticas. Sobre el diagnóstico que justificó la Contraofensiva véase *Evita Montonera* N° 23, 1979.

⁴ Montoneros, “Boletín Interno N° 13”, febrero de 1980. Sobre la “infalibilidad de la vanguardia” véase el análisis de Pittaluga (2009) sobre el PRT-ERP, también aplicable al caso montonero. Para una reconstrucción de los debates en torno a la vanguardia en Montoneros, véase Salas (2014).

⁵ Estos análisis fueron volcados en el último boletín interno de la organización, el número 13, de febrero de 1980: la frase exacta es “Volvimos a la primera página de los diarios”.

⁶ Por ejemplo, “Bittel”, *Clarín*, 29 de septiembre de 1979, p. 3 y “La CUTA expresó su repudio por el atentado subversivo”, *Clarín*, 14 de noviembre de 1979, p. 4.





Gelman en febrero de 1979 se sumarían las numerosas víctimas montoneras durante la Contraofensiva y una nueva escisión, esta vez frente a la intención de la Conducción de proseguir con la estrategia: “Montoneros 17 de octubre” (Levenson, 2000; Larraquy y Caballero, 2010; Slipak, 2017; Confino, 2019a).⁷

En este artículo me propongo reconstruir la segunda Contraofensiva de Montoneros, que comenzó en febrero de 1980 y no tuvo un cierre puntual más allá del dictado por el propio proceso de su desarticulación paulatina. Fue la última estrategia organizada por una guerrilla en el país y marcó, a la postre, el final de la “opción armada” de Montoneros y, para el caso argentino, el ocaso definitivo de los procesos políticos de radicalización que habían crecido a la luz de la Revolución en Cuba de 1959.⁸ Este desenlace no obedeció a una decisión ideológica ni estratégica de parte de la Conducción de la organización. Fue la aceptación de un hecho consumado: la imposibilidad material de la agrupación diezmada, ante la persistencia de la represión estatal y la ineficacia de sus políticas, para continuar con su actividad militar. Durante su desarrollo, la Contraofensiva de 1980 prescindió de su aspecto armado. En ese contexto, este trabajo no sólo reconstruye las interpretaciones de la organización sobre el proceso político sino que también se pregunta por las razones de los militantes que continuaron respaldando una política que, como mínimo, se revelaba muy sacrificada y poco productiva.

Si bien en los últimos años numerosos trabajos han avanzado en la reconstrucción de la estrategia final de Montoneros, las intervenciones se han concentrado sobre todo en la Contraofensiva de 1979 (Astiz, 2005;

⁷ Sobre la disidencia encabezada por Galimberti y Gelman, llamada “Peronismo Montonero Auténtico”, véase su manifiesto fundacional: “Algunas reflexiones para la construcción de una alternativa Peronista Montonera Auténtica”, 9 de junio de 1979, disponible en *Bibliothèque de Documentation Internationale Contemporaine (BDIC)*. Para dar con el comunicado de expulsión y condena a muerte realizado por Montoneros, consúltese Partido Montonero, “Resolución 045/79: Sobre la desertión de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior”, 10 de marzo de 1979, disponible en *BDIC*. También puede verse el manifiesto de la disidencia de 1980, “Montoneros 17 de Octubre” s/t, abril de 1980, disponible en www.eltopoblindado.com.ar

⁸ La última acción político-militar en la Argentina se produjo casi una década después cuando el Movimiento Todos por la Patria intentó el copamiento del Regimiento de La Tablada, en enero de 1989. No obstante, las diferencias significativas de contexto dificultan pensarla como una línea de continuidad con respecto a los proyectos revolucionarios de la Argentina de “los setentas”. Sobre tema véanse Hilb (2013) y Celesia y Waisberg (2013).

Larraquy, 2006; Zuker, 2010; Campos, 2016; Confino, 2018a). En comparación, la segunda Contraofensiva ha merecido una atención escasa y fragmentaria (Larraquy, 2006; Pacheco, 2014; Confino, 2018b).⁹ Presumiblemente esto haya sido así por motivos relacionados con la gran debilidad política que Montoneros tenía en 1980 o con la consideración de la segunda Contraofensiva como una mera continuidad de la del año previo. Quizá también la estrategia no sea tan recordada porque Montoneros no logró concretar ningún atentado militar durante su desarrollo. Esta cuestión marca dos aspectos a considerar sobre la recuperación histórica de los momentos finales de la organización: en primer lugar, la pregnancia de la práctica militar en la elaboración memorial de ese pasado y, derivado de este punto, el recuerdo de la Contraofensiva como una estrategia exclusivamente militar.¹⁰ Sin embargo, ambas contraofensivas involucraron, además del aspecto armado, políticas de propaganda y de acercamiento con otros grupos opositores a la dictadura.

En segundo lugar, tal vez la definición estrictamente militar que organizó el recuerdo (y los olvidos) de los años finales de Montoneros se vincule con el modo en que las reconstrucciones posteriores de la trayectoria de la agrupación se estructuraron en torno a la figura del llamado “desvío” (Slipak, 2016): esto es, un movimiento progresivo de reemplazo de lo político por lo militar (Gillespie, 1998; Svampa, 2003; Calveiro, 2005; Gasparini, 2008). En ese contexto, la Contraofensiva constituía un punto de llegada no sólo cronológico, sino también lógico, que exponía con toda su crudeza la ausencia de política y la primacía del pensamiento militar (Confino, 2019b). En los últimos años, sin embargo, algunos trabajos han cuestionado esta manera de entender el devenir histórico de Montoneros y han planteado que la plataforma de la agrupación tendió a fusionar, a lo largo de su trayectoria, elementos políticos y militares. Pensar lo político como antinómico a lo militar, coinciden estas miradas, implica oscurecer

⁹Larraquy (2006) aborda solamente la experiencia de los grupos armados mientras que Pacheco (2014) sigue el recorrido de un grupo de militantes que participaron de las actividades de propaganda. Ninguno reconstruye la estrategia en su conjunto.

¹⁰Como ejemplo de este punto véase las caracterizaciones de Calveiro, 2005; Gasparini, 2008 y Zuker, 2010.





sus intersecciones, que sí fueron variables a lo largo de la década de historia montonera (Slipak, 2016; Confino, 2018b; Otero, 2019).

Hacia febrero de 1980, Montoneros había sufrido dos secesiones en un año y había quedado al borde de su desarticulación política. Además, muchos militantes con largas trayectorias al interior de la agrupación habían sido víctimas de la represión durante la Contraofensiva de 1979. De quienes habían logrado sobrevivir, algunos se manifestaron en contra de la persistencia en la estrategia luego de regresar al exterior y abandonaron la organización (Larraquy, 2006; Zuker, 2010). Según fuentes de inteligencia, para mayo de 1980 Montoneros no contaba con más de veinte militantes y veinte simpatizantes dentro del país.¹¹

A posteriori, la Contraofensiva de 1980 marcó la desarticulación total de Montoneros como proyecto político.¹² El porcentaje de víctimas de la represión entre los militantes que volvieron sobrepasó al del año previo y puso de manifiesto la colaboración represiva entre las dictaduras latinoamericanas, a partir de los secuestros y desapariciones de militantes montoneros en Brasil y Perú en febrero y junio de 1980 respectivamente (Fernández Barrio, 2017).¹³ Al mismo tiempo, los magros resultados políticos y la peligrosidad del contexto represivo argentino impedirían la conformación de nuevos contingentes para seguir con la estrategia. Como nunca antes, los servicios de inteligencia del régimen de facto conocieron en detalle las planificaciones de Montoneros y operaron en consecuencia.

¹¹ El número surge de un intercambio entre un miembro de la inteligencia militar argentina con un funcionario de la Embajada de EEUU. En su cable secreto a la embajada de su país, el informante norteamericano daba cuenta de estos datos extraídos de su vinculación con miembros de inteligencia de la dictadura (Sentencia causa 8905, p. 63). Más allá de la dificultad de precisar un número exacto, las estimaciones del personal de inteligencia indican la debilidad de Montoneros hacia 1980.

¹² Si bien la organización continuó editando su publicación partidaria *Vencer* hasta marzo de 1982, para mediados de 1980 Montoneros ya había perdido cualquier capacidad de incidir en la política nacional.

¹³ Fernández Barrio distingue cuatro momentos particulares de la represión extraterritorial de la dictadura argentina: "En primer lugar, las desapariciones de ciudadanos argentinos en Uruguay, Paraguay y Brasil entre 1976 y 1978, asociadas a la llamada Operación Cóndor y relacionadas con la actividad extraterritorial de la Secretaría de Inteligencia del Estado. En segundo lugar, las acciones represivas en el exterior desarrolladas en ese mismo período por el Grupo de Tareas 3.3/2 de la Armada argentina en Uruguay, Paraguay y Perú. En tercer lugar, las operaciones extraterritoriales llevadas a cabo por el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército argentino entre 1978 y 1980 en Brasil, Perú y México, dirigidas a contrarrestar la llamada Contraofensiva de Montoneros [...] Por último, la transferencia de *expertise* en materia represiva por parte de las Fuerzas Armadas argentinas a la dictadura boliviana de Luis García Meza Tejada entre 1980 y 1981, que incluyó acuerdos de asesoría y entrenamiento de oficiales bolivianos por parte de represores argentinos enviados a Bolivia" (2017).

A tal punto fue así, que algunas memorias sobre aquellos años plantean la derrota de la Contraofensiva –y de Montoneros– debido a la colaboración o la infiltración de su máxima dirigencia. Sobre este sensible punto también se explaya el artículo.

Este trabajo se aproxima a los años finales de Montoneros a partir de los testimonios de los protagonistas, de los documentos partidarios de la organización y de los informes desclasificados de inteligencia. El artículo, a su vez, se encuentra diagramado en tres apartados: en el primero se exploran las continuidades y cambios de la segunda Contraofensiva con respecto a la desarrollada a lo largo de 1979. La segunda sección, por su parte, reconstruye la experiencia de los militantes que tuvieron a su cargo la realización de un atentado en el país y la última se extiende sobre la experiencia de los montoneros que, habiendo regresado a la Argentina durante 1980, se desempeñaron en actividades políticas que excluían a los métodos militares.

Continuidad con cambios, la Contraofensiva de 1980

Al finalizar la Contraofensiva de 1979, los militantes montoneros que habían sobrevivido fueron convocados nuevamente al extranjero. Allí realizaron los balances con la dirigencia y dispusieron de unos días de vacaciones (Larraquy, 2006; Zuker, 2010). Paralelamente a la realización de la Contraofensiva, Montoneros había continuado reclutando en el exilio a futuros interesados en participar de la estrategia y los había entrenado, al igual que al contingente de 1979, en México, España y El Líbano (Robledo, 2018). Para la Conducción de la organización, a pesar de la gran cantidad de militantes que habían sido secuestrados y asesinados o desaparecidos por la dictadura, el balance de la estrategia de 1979 había sido positivo pues había demostrado la presencia de la vanguardia montonera guiando al pueblo en su lucha contra la opresión militar.¹⁴

¹⁴ "Boletín Interno N° 13". De acuerdo con la información recabada en las audiencias del juicio oral de la Con-





Mientras la organización planificaba su segundo retorno al país, en la Argentina la dictadura buscaba gestar una “convergencia cívico-militar” a partir de las “bases políticas” que las tres armas habían publicitado a fines de 1979 (Canelo, 2016). Transcurrida la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, que había obligado al régimen a dirigir su atención hacia las denuncias internacionales recibidas por los crímenes cometidos, para 1980 la dictadura buscaba institucionalizar un sistema republicano bajo su tutela que garantizara la continuidad del proyecto político iniciado en marzo de 1976. A tal fin, la Junta Militar había comenzado a trazar un acercamiento con sectores de la “civilidad” que formaran una “corriente de opinión” que posibilitara controlar el “disenso permitido” (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004; Franco, 2018). Los “subversivos”, por supuesto, estaban fuera de los sectores convocados.¹⁵

Montoneros mantuvo una reunión en Cuba para planificar la Contraofensiva de 1980.¹⁶ Según las fuentes consultadas, el encuentro entre los dirigentes de mayor rango estuvo dedicado a resolver las modalidades que tendrían las futuras acciones montoneras (Larraquy, 2006; Zuker, 2010). El mes anterior, en diciembre de 1979, un grupo de militantes que estaba en desacuerdo con la continuidad de la Contraofensiva había publicado un manifiesto crítico en Europa, el “Documento de Madrid”, que, ante la negativa de la Conducción a discutir sus premisas, fue el embrión de “Montoneros 17 de octubre”, la última disidencia montonera encabezada en abril de 1980 por militantes con larga trayectoria en la agrupación como Miguel Bonasso y Jaime Dri, entre otros.

No obstante, en la reunión de Cuba también hubo planteos de disconformidades de parte de los montoneros que pretendían transforma-

traofensiva y de otras fuentes complementarias, 84 militantes montoneros fueron víctimas, entre asesinados y desaparecidos, durante 1979 y 1980: 38 en 1979 y 46 en 1980. No obstante, y dado que las prácticas reconstruidas transcurrieron en la clandestinidad, el número es aproximado.

¹⁵ *Clarín*, 13/3/80.

¹⁶ La reunión también es recogida por los servicios de inteligencia de la dictadura y volcada en el “Informe Especial de Inteligencia N°02/80”, en Peiró, C., “Archivos secretos de la dictadura revelan su alto conocimiento de los planes de Montoneros”, Infobae, 11 de diciembre de 2016, disponible en <http://www.infobae.com/politica/2016/12/11/archivos-secretos-de-la-dictadura-revelan-su-alto-conocimiento-de-los-planes-de-montoneros/>

ciones en la implementación de la Contraofensiva. Jorge Lewinger, “oficial mayor” de la organización y encargado del reclutamiento de los militantes en el exilio durante 1978 y 1979, recuerda el debate entre las instancias directivas de Montoneros. Una parte de los presentes, que había estado en la Argentina durante 1979, planteó la dificultad de los militantes para darse a conocer como montoneros en un contexto muy represivo como el vigente en el país. La Conducción, fiel a sus concepciones ideológicas, temía que, de no identificarse como montoneros, la resistencia a la dictadura se diluyera y la organización no pudiera capitalizar políticamente su percepción de ser la dirección del movimiento opositor. En el fondo, también se discutían dos versiones de contraofensiva: una más ligada a la práctica militar de 1979 y a la posibilidad de reeditar las “propagandas armadas” de los primeros años de la década de 1970 y otra pensada más a mediano plazo, que hacía énfasis en una construcción política paulatina con otros actores y relativizaba la necesidad de los atentados. De acuerdo con Lewinger, la perspectiva de los máximos jefes logró imponerse no solamente por una cuestión disciplinaria sobre el resto de los militantes sino por “el reconocimiento de que los miembros de la Conducción Nacional tenían más experiencia, no solo individual sino grupal”.¹⁷ La discusión se saldó a través de una solución intermedia: se podría ocultar la identidad montonera en el trabajo político con otras agrupaciones pero continuaría la actividad militar, a través de la planificación de un atentado contra un funcionario del Ministerio de Economía de la dictadura para el 24 de marzo de 1980.¹⁸

Entre las razones aducidas por la Conducción y rememoradas por Lewinger muchos años después, sobresale un aspecto que había sido

¹⁷ Lewinger, entrevista con el autor, *op. cit.*

¹⁸ “Informe especial de inteligencia N°02/80”, en Peiró, C., *op. cit.* Los posibles objetivos del ataque de las TEI se encontraban vinculados con la política económica de la dictadura y los sectores empresariales: Juan Antonio Nicholson, Subsecretario de Coordinación Económica; Marcos Raúl Firpo, miembro de la Sociedad Rural Argentina; Ricardo Gruneissen, integrante del grupo empresario Astra; Eduardo Braun Castillo, empresario; Arturo Acevedo, grupo ACINDAR; Fernando Campos Menéndez, miembro de la Sociedad Rural Argentina y Luis Alberto Aragón, socio de Martínez de Hoz. Además, la inteligencia militar da cuenta del posible ingreso de un segundo grupo TEI que finalmente –ante la suerte corrida por el primero– sería descartado por la organización (“Situación de la BDT Montoneros al 1 Mar 80”, *op. cit.*, en Peiró, C., *op. cit.*).





central en el inicio de la Contraofensiva: la preocupación de la dirigencia montonera ante la posible disolución de la identidad de la organización frente a la sociedad argentina. A principios de 1979, el mismo Lewinger había planteado esta idea como central durante la convocatoria a otros militantes para sumarse a la estrategia.¹⁹ En todo caso, en medio de un contexto político en el que la dictadura destacaba su victoria en la “guerra contra la subversión” y planeaba conformar el “Movimiento de Opinión Nacional” que garantizase el triunfo de los principios dictatoriales (Novaro y Palermo, 2003; Quiroga, 2004; Franco, 2018), Montoneros quería proyectar la vigencia de su política.

A pesar de que fue entendida por la bibliografía especializada como una mera continuidad de la estrategia de 1979, la Contraofensiva de 1980 tuvo sus particularidades.²⁰ Al igual que la estrategia de 1979, la de 1980 también estructuró grupos de propaganda y grupos militares, desconectados entre sí. No obstante, la política no armada y las tareas propagandísticas no estuvieron ya a cargo de las Tropas Especiales de Agitación (TEA)²¹ como en 1979, sino de las nuevas Unidades Integrales (UI) que establecían, como novedad, el mandato de la reinserción territorial en Argentina y la posibilidad de que los militantes ingresaran al país con sus familias. La misión principal de los miembros de las UI era realizar un trabajo político más modesto en relación con distintas organizaciones vecinales, sindicales y sociales que, a ojos de los jefes montoneros, comenzaban a mostrar su oposición al gobierno militar. En cuanto a su modalidad estratégica, la Contraofensiva de 1980 fue encuadrada, no como un nuevo capítulo de la “guerra popular y prolongada”, sino dentro la “insurrección popular armada”, bajo la estela de las revoluciones triunfantes en Nicaragua y en Irán.²² Una vez en la Argentina, los militantes

¹⁹ Así lo recuerda una de las militantes visitadas por Lewinger antes de la Contraofensiva de 1979: “Viene [Jorge] ‘Josecito’ Lewinger [...] me dice que teníamos que volver porque estaba desapareciendo la organización. Y dejaba de existir no tanto por las caídas, por las desapariciones, sino por la falta de política y de acciones” (H.D., entrevista con el autor, Rosario, abril de 2015).

²⁰ Dos ejemplos de esta perspectiva son Calveiro (2005) y Gasparini (2008).

²¹ Las TEA eran grupos comando de propaganda que durante la Contraofensiva de 1979 tuvieron la misión de interferir clandestinamente los canales de televisión con un aparato diseñado por Montoneros a tal fin. Sobre las TEA véase Astiz (2005).

²² “Boletín Interno N° 13”, *op. cit.* y revista *Vencer* N° 1 y 2, 1979.

de las UI tendrían mucha autonomía. Muchos de ellos, que volvieron dentro de las UI y lograron eludir la represión estatal, permanecieron en el país de forma ininterrumpida hasta la recuperación democrática.²³

Por otra parte, las mayores continuidades entre ambas contraofensivas estuvieron en las Tropas Especiales de Infantería (TEI) que en 1980, al igual que en 1979, debían atacar militarmente contra el equipo económico de Martínez de Hoz. Las TEI constituían grupos comando cuya misión era ingresar clandestinamente al país, agruparse en una casa, planear y realizar el atentado. Luego, tenían la orden de volver al extranjero. Sin embargo, el secuestro de la totalidad del primer grupo a poco de ingresar a la Argentina, entre febrero y marzo de 1980, llevó a la Conducción a dismantlar el grupo subsiguiente y a abandonar la práctica armada. Por el peso y la efectividad de la represión estatal, a partir de marzo de 1980, la Contraofensiva quedó abocada exclusivamente a la militancia no armada de las UI.

Más allá de cuán profundos se juzguen los cambios entre una y otra contraofensiva, lo cierto es que varios de los militantes de las UI las entendieron como distintas y, quizás, en esa diferencia cifraron su participación. Este es el caso, por ejemplo, de Jorge Falcone, quien había militado en el sector de Prensa del Área Federal y que ya llevaba un par de años en el exilio (Falcone, 2001). Falcone plantea que fue “la autocrítica sobre el perfil preferentemente militarista de la primera fase de la Contraofensiva a la luz del proceso insurreccional de las masas iraníes [la que] nos permitió repensar el modelo con el que íbamos a entrar al país”.²⁴ Para él, la perspectiva insurreccional implicaba dejar de pensar en resultados a corto plazo y “volver en un contexto más familiar como quien siembra semillitas en un surco abierto a la espera de que germinen”.²⁵ Esas modificaciones, sin embargo, deberían entenderse no sólo por un cambio estratégico sino también a la luz del fracaso de las TEI de 1980.

²³ Estos son los casos de Jorge Falcone, Marina Siri y Ricardo Rubio, por ejemplo (Jorge Falcone, entrevista con el autor, Buenos Aires, marzo de 2016; Ricardo Rubio y Marina Siri, entrevista con el autor, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, abril de 2017).

²⁴ Jorge Falcone, entrevista con el autor, *op. cit.*

²⁵ *Ibid.*





En la misma tónica se expresan Marina Siri y Ricardo Rubio, ambos ex militantes de la Columna Sur de Montoneros entre 1976 y 1978, miembros de las TEA durante la Contraofensiva de 1979 y partícipes, también, de la estrategia de 1980. Habiendo formado parte del balance de su grupo a fines de 1979 en Panamá con el miembro de la Conducción Eduardo Pereira Rossi, rememoran que no ahorraron críticas sobre la actuación de la organización en la primera Contraofensiva. Rubio recuerda que su postura en ese momento fue que “No estábamos en condiciones, que a través de un golpe no íbamos a levantar a la población”.²⁶ Esa objeción, entienden Siri y Rubio, había logrado modificar el aspecto militar de la estrategia para el retorno de 1980. En este sentido, remarcan como central el abandono de la cadena de mandos en el país y la posibilidad de que “cada uno comenzara su trabajo en el territorio sin ‘responsable’ de nadie [sic]”.²⁷ En cualquier caso, estas transformaciones se circunscribían únicamente a las UI. Como se verá en el próximo apartado, las TEI continuaron actuando sobre los mismos fundamentos políticos de 1979. Cabe destacar que ni Falcone, ni Siri ni Rubio tuvieron conocimiento de la conformación de los grupos militares para 1980 ni de los secuestros que los desarticulaban entre febrero y marzo de ese año.²⁸

Roberto Perdía, segundo jefe en importancia de Montoneros y al mando de la llamada “Secretaría Táctica”, también refiere las modificaciones implementadas para afrontar la nueva Contraofensiva. Si bien reconoce que “Montoneros mantiene ahí la idea de la acción militar a un miembro del poder económico”, sostiene que, a diferencia del año previo, “se le va fijando a los compañeros ideas de residencia en el país”.²⁹ Perdía, al tanto del secuestro de las TEI de 1980, vincula este hecho con las modificaciones por parte de la organización: “después de que caen varios compañeros, se quita el uso del arma y se va cambiando de estrategia”.³⁰

²⁶ Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op. cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Teniendo en cuenta la “compartimentación” de la información en un contexto de clandestinidad, no era inusual que no lo supieran. Sin duda, este desconocimiento modeló sus percepciones sobre aquellos años.

²⁹ Roberto Perdía, entrevista con el autor, City Bell, Provincia de Buenos Aires, diciembre de 2016.

³⁰ *Ibid.* Perdía no menciona el secuestro de las TEI en la primera edición de su libro de memorias (Perdía, 1997).

Ese cambio, agrega el ex jefe montonero, estuvo influido por el ejemplo de las revoluciones triunfantes en Nicaragua e Irán, en 1979. Una vez descartada la posibilidad del atentado, en palabras de Perdía, la misión de Montoneros fue “ir preparando a la gente para una insurrección masiva”.³¹

Es destacable que algunas memorias montoneras anuden el pronunciamiento en favor de la insurrección popular armada con el fin de la “lucha armada” de la organización. En sentido estricto, Montoneros no abandonó la violencia como método, sino que modificó el tipo de violencia a utilizar y el contexto en el que lo haría. Así lo plantea Edgardo Binstock, que en 1980 era uno de los responsables de la guardería montada por la organización en La Habana (Argento, 2013).³² Durante 1980, mientras estaba en Cuba, Binstock tuvo la posibilidad de intercambiar análisis con Raúl Yäger, miembro de la Conducción y Secretario Militar de Montoneros, quien le planteó que la organización ya “no va a usar el máximo nivel de violencia” porque “hay que acompañar el proceso de las masas”.³³ Montoneros buscó difundir este cambio estratégico, haciéndole llegar una declaración al papa Juan Pablo II a través de Adolfo Pérez Esquivel que acababa de ser galardonado con el premio Nobel, a fines de 1980. La carta explicitaba que Montoneros asumía una actitud “más insurreccional, tampoco democrática, pero pasando de una mirada más de lucha armada a otra más insurreccional”.³⁴ Evidentemente, durante la segunda Contraofensiva, a causa del secuestro del grupo TEI y también de las acciones represivas de la dictadura en Perú y Brasil –los dos puntos de establecimiento del “comando de apoyo táctico”– Montoneros se replanteó el lugar de los métodos militares en su estrategia política.

³¹ *Ibid.*

³² La guardería tenía la función de recibir a los hijos de los militantes de la Contraofensiva de 1979. Como se verá a lo largo del artículo, para 1980 los montoneros fueron autorizados a ingresar al país con sus hijos. Sobre la guardería puede verse el film documental de Virginia Croatto *La guardería*, de 2015

³³ Edgardo Binstock, entrevista con el autor, Buenos Aires, septiembre de 2016.

³⁴ *Ibid.*





Adiós a las armas: el secuestro de las Tropas Especiales de Infantería de 1980

El debate que se dio en la reunión de inicio de la Contraofensiva de 1980 también tuvo su expresión entre las filas de las TEI que habían actuado en 1979. A fines de ese año, los sobrevivientes de los tres grupos de “infantería” que habían atentado contra los funcionarios dictatoriales Guillermo Klein y Juan Alemann y el empresario Francisco Soldati acudieron nuevamente al exterior para realizar los balances políticos correspondientes con los integrantes de la Conducción (Larraquy, 2006). Klein y Alemann habían sobrevivido y Soldati había sido asesinado en pleno centro de Buenos Aires. La prensa y la totalidad de los actores políticos, sindicales y empresarios de la época habían repudiado los hechos.³⁵ Internamente, las cosas no eran mejores para Montoneros. Ninguno de los jefes de los tres grupos TEI de 1979 quiso continuar en la Contraofensiva. No obstante, sus motivos fueron distintos. Manuel López decidió abandonar la organización junto con su esposa embarazada. Estaba en contra de la continuidad de la estrategia por considerarla equivocada (Zuker, 2010). “Chacho”, el jefe del grupo que mató a Soldati, sufrió el asesinato y desaparición de su pareja en el operativo y, una vez en el exterior, decidió no participar. Antes de irse, convalidó en un documento la posición de la Conducción.³⁶ El tercer jefe, Osvaldo Olmedo, fue sancionado y degradado por los dirigentes de la organización luego de no haber podido realizar el atentado contra Alemann.³⁷ Una vez en España, presentó un descargo y abandonó Montoneros. La estrategia continuaba siendo la misma, esto es, atentados militares contra el gabinete económico dicta-

³⁵ Por ejemplo *Clarín*, 29 de septiembre y 15 de noviembre de 1979.

³⁶ “Boletín Interno N°13”, *op. cit.*

³⁷ Las TEI debían atacar contra Alemann el 27 de septiembre de 1979 pero, a minutos de realizar el operativo, Olmedo decidió suspenderlo, presumiblemente porque no confiaba en las medidas de seguridad para realizarlo. Así lo recuerda H.D., que integró ese grupo TEI: “¿Qué pasó que Miguel [Olmedo] decidió levantar el operativo? Él supongo que creyó que no era posible hacer el operativo. No sé exactamente qué pasó, qué vio. Lo que sé es que a él le sacaron el grupo” (H.D., entrevista con el autor, *op. cit.*). Ángel García Pérez, que luego sería desaparecido en la Contraofensiva de 1980, quedó como jefe de grupo para la reorganización de la acción. Olmedo fue despromovido, salió rumbo a Madrid, presentó su descargo y abandonó la organización.

torial, pero la organización debía buscar un nuevo jefe para las TEI de 1980.

Ernesto García Ferré fue el militante elegido para comandar las TEI. Tenía 24 años, era “teniente primero” en el escalafón montonero y no había formado parte de la Contraofensiva de 1979. Había sido instructor de un grupo de las TEA y luego había hecho el curso militar en El Líbano, entre mediados y fines de 1979. Cuando partieron los tres grupos de la primera Contraofensiva, Ferré permaneció en Medio Oriente capacitando e instruyendo a otros militantes. En Argentina, se había desempeñado en la “Unidad Logística del Ejército Montonero de Capital Federal”. Además de Ferré, el grupo se completó con doce militantes más, siete de los cuales ya habían integrado la Contraofensiva del año previo. Eran Julio César Genoud –que había integrado las TEA durante 1979–, Ricardo Zuker y su pareja Marta Liebenson, Verónica Cabilla, Ángel Carabajal, Raúl Milberg y Ángel García Pérez. Además de Ferré, los que regresaban por primera vez eran Lía Guangirolí, pareja de Genoud, Ángel Servando Benítez y su sobrino Jorge Benítez, Matilda Rodríguez de Carabajal, esposa de Ángel, y Miriam Antonio Fuerichs, pareja de Ferré (Larraquy, 2006).

Mientras Montoneros ultimaba en el extranjero los preparativos para la Contraofensiva de 1980, en la Argentina, las Fuerzas Armadas detectaron la forma en que los militantes habían resguardado sus recursos el año previo antes de volver al exterior. A fines de 1979, los montoneros habían dejado las armas, los documentos y los equipos de interferencia en diversos depósitos de empresas de mudanza ubicadas en Capital Federal y Gran Buenos Aires. De enero de 1980 es la “Orden de operaciones 01/80 ‘Operativo Guardamuebles’”³⁸ en la que las Fuerzas Armadas asentaban “que la BDTM [Banda de Delincuentes Terroristas Montoneros] ha organizado depósitos encubiertos en guardamuebles de armamentos, granadas, explosivos” e instaban, por ese motivo, a “una inspección y con-

³⁸ “Orden de operaciones 01/80 ‘Operativo Guardamuebles’”, Jefatura Área II, Palermo. Agradezco a Virginia Croatto haberme puesto en contacto con este documento. También debe verse DIPBA, Mesa “D(s)”, Carpeta Varios, Legajo 16.851, pp. 84-141, que reconstruye las comunicaciones efectuadas entre las distintas fuerzas a propósito del “Operativo Guardamuebles”.





trol de los depósitos en cuestión”.³⁹ La orden además incluía instrucciones para las Fuerzas Armadas y de seguridad sobre la forma de revisar el mobiliario para no resultar heridos frente a la potencial explosión del armamento. Dicha orden fue enviada a las distintas reparticiones localizándose los mismos procedimientos de control en La Plata y Mar del Plata, por ejemplo.⁴⁰

Si bien es imposible determinar fehacientemente, a partir de las fuentes analizadas, cómo detectaron las fuerzas represivas la logística montonera, todo indica que fue por un hecho accidental: el incendio de un guardamuebles en el barrio de Belgrano de Buenos Aires, el 26 de diciembre de 1979, que hizo detonar explosivos de la organización. Así lo sostuvo el general Juan Carlos Trimarco –Segundo Comandante y Jefe del Estado Mayor del Comando del Primer Cuerpo de Ejército y, a partir de diciembre de ese año, Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército– en la conferencia de prensa realizada en el Primer Cuerpo de Ejército, en Palermo, el 22 de enero de 1980. Habría sido un incendio en el depósito “Transporte Conde”, ubicado en Conde 2689, el que habría delatado la presencia de material montonero.⁴¹ El contenido de la conferencia de prensa sumado a una demostración de las armas encontradas y su peligrosidad fueron difundidas por numerosos diarios entre los días 22 y 27 de enero de 1980.⁴² Aún no había llegado el primer grupo TEI a la Argentina. Parece improbable, en todo caso, que la Conducción no hubiera estado al tanto de la noticia. Ángel Carabajal, primer montonero secuestrado de las TEI de 1980, sería capturado por el Ejército en su visita al guarda-

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ DIPBA, Mesa “D(s)”, Carpeta Varios, Legajo 16.851.

⁴¹ Otra hipótesis podría cambiar el orden de los factores, aunque siempre en el terreno de las suposiciones. Podría haber sucedido la localización del guardamuebles antes del incendio y que dicho incendio haya sido la excusa para publicitar el hecho. En todo caso, no hay forma de demostrarlo. Además, la orden de la “Operación Guardamuebles” es de enero de 1980 pudiendo representar, en fin, una consecuencia del incendio de diciembre. Zuker lo interpreta de otra manera: habría sido una información arrancada bajo tortura a una militante apresada con vida durante el atentado contra Soldati, en noviembre de 1979. Plantea que la Operación Guardamuebles se montó porque “Alguien había ‘confesado’ que a partir de marzo se reanudarían las operaciones de las TEI [...] Para llevarlas a cabo debían primero recuperar el armamento dejado a fines de 1979” (Zuker, *op. cit.*, p. 247).

⁴² *La Razón* brindó la información el 22 de enero. *Crónica, Clarín, Popular y El Día* lo hicieron al día siguiente y *Buenos Aires Herald*, el 27 del mismo mes (DIPBA, Mesa “D(s)”, Carpeta Varios, Legajo 16.851, pp. 134-141).

muebles del 21 de febrero, es decir, casi un mes después de la rueda de prensa de Trimarco. ¿Por qué, entonces, frente al descubrimiento de la dictadura de la logística de la organización los jefes montoneros no cambiaron la estrategia?

Al día de hoy este es un tema sumamente polémico para los protagonistas de aquella historia. No hay acuerdo entre los ex militantes montoneros consultados acerca de si la Conducción se enteró a tiempo de la voladura del depósito, si desestimó el hecho, si su accionar fue producto de la infiltración o si directamente tuvo una actitud desaprensiva hacia los militantes. En todo caso, tal como se había manifestado en debates internos previos, las vidas individuales de los militantes se subordinaban al proyecto político colectivo y eso implicaba, para quienes componían Montoneros en 1980, seguir mostrando presencia en el territorio argentino.⁴³ Independientemente de que la Conducción hubiera estado enterada o no, lo cierto es que la Contraofensiva no se detuvo. El plan continuó igual que antes de la explosión y los integrantes de las TEI fueron capturados entre el 21 de febrero y el 20 de marzo.

Los procedimientos fueron asentados minuciosamente en los documentos de inteligencia de la dictadura. En un informe del primero de marzo de 1980, el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército registraba los secuestros cometidos en febrero. Bajo el título de “Bajas producidas a la BDT”,⁴⁴ figuran los nombres de Ángel Carabajal, Julio César Genoud, Mariana Guangiroli, Verónica Cabilla, Ernesto García Ferré, Miriam Antonio, Raúl Milberg, Ricardo Zuker, Marta Libenson y Matilda Adela Rodríguez. Habían sido secuestrados en tan solo una semana, entre el 21 y el 29 de febrero.⁴⁵ El informe no detalla solamente el día y la circunstancia de los secuestros de los integrantes de las TEI sino que también contiene muchos datos de sus trayectorias previas e incluso se extiende sobre las desertiones que habían ocurrido al interior de las estructuras de “infante-

⁴³ Véanse, por ejemplo, *Evita Montonera* N°23, *op. cit.*, “Boletín Interno N° 13”, *op. cit.* y *Vencer* N°1, *op. cit.*

⁴⁴ “Situación de la BDT Montoneros al 1/80”, en Peiró, C., *op. cit.*

⁴⁵ *Ibid.*





ría” de la organización a principios de 1980.⁴⁶ Si se tiene en cuenta que la gran mayoría del grupo a cargo de Ferré había sido detenida por el Ejército entre el 21 y el 29 de febrero, no restan muchas dudas para sostener que parte de la información que recogía el documento había sido extraída mediante la tortura a los militantes apresados ilegalmente. Una nueva actualización de los servicios de inteligencia, esta vez de la Prefectura Naval, de abril de 1980, completaba la información de los secuestros del grupo TEI con los tres sucedidos en marzo: Ángel García Pérez, Jorge Benítez y su tío Ángel Servando Benítez (identificados por sus alias “Manuel”, “Raúl” y “Fermín”, respectivamente). El 20 de marzo, el primer grupo TEI de la Contraofensiva de 1980 había sido completamente desmantelado. Con dichas capturas se frustraba la idea de Montoneros de realizar un operativo altisonante el 24 de marzo que tuviera repercusiones mediáticas. Si la Conducción no había hecho ninguna rectificación en su estrategia luego de la quema del depósito ubicado en Belgrano, la detención del primer grupo TEI de 1980 sí ocasionó una transformación sustancial: se abandonaron el accionar de “infantería” y las “operaciones comando”.

Esas modificaciones también obedecieron a otro episodio represivo que tuvo lugar en Brasil en marzo de 1980 y que involucró a un integrante de la Conducción. Entre las escasas modificaciones en el accionar de las TEI de 1980 con respecto al del año previo, figuraba la constitución de dos “Comandos Tácticos” en Brasil y Perú. En el primer país se asentó Horacio Campiglia, “Segundo Comandante” de Montoneros, y en Perú, Perdía. La idea era tener un representante de la cúpula partidaria que pudiera asistir y brindar directivas a los jefes de los grupos TEI –cuando la Conducción aún pensaba que habría dos en el país antes de la mitad de 1980. Además, Río de Janeiro y Lima serían sede de las reuniones entre militantes que salían y entraban al país. Sin embargo, ambas bases fueron reprimidas por el accionar del Batallón 601 del Ejército en complicidad

⁴⁶ El documento hacía particular hincapié en la desvinculación de dos de los jefes TEI de 1979: Osvaldo Olmedo y Alberto López.

con las Fuerzas Armadas de otros países.⁴⁷ Para explicar el agotamiento de los métodos militares de Montoneros, entonces, cobra relevancia dar cuenta lo que sucedió en Brasil. Días antes de la desaparición de los últimos tres integrantes de las TEI, el 12 de marzo de 1980, y con la cooperación activa de militares brasileños, fueron secuestrados Campiglia y su asistente, Mónica Pinus, esposa de Binstock, en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Galeão, en el preciso momento en que ingresaban al país desde Panamá.⁴⁸ El asentamiento de Montoneros en Brasil quedó desarticulado antes de siquiera montarse.⁴⁹

El segundo grupo TEI, que tenía la orden de ingresar al país entre abril y mayo de 1980, fue desactivado por la cúpula de la organización. Así lo rememora Víctor Hugo “Beto” Díaz, quien había sido el jefe de las TEA-Sur durante 1979 y luego había sido designado por la Conducción para dirigir las TEI II de 1980 (Confino, 2018a). Según Díaz, al convocarlo, Pereira Rossi le dijo “necesito que te hagas cargo, necesito un jefe político

⁴⁷ El ataque a la base de Perú fue en junio de 1980 mientras ingresaban a la Argentina de los militantes que integraban las UI. El episodio había comenzado con el secuestro de Federico Frías Alberga el primero de mayo de 1980, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Frías, que había participado de la Contraofensiva de 1979 como jefe de las TEA II, había retornado a la Argentina en 1980 a cargo de una UI. Después de su asentamiento en el país, tenía estipulado un encuentro con María Inés Raverta en el Parque Kennedy de Lima, Perú. Raverta conduciría a Frías ante Perdía. Por eso, y bajo tortura, Frías fue utilizado por los militares que lo habían capturado como señuelo para apresar al jefe montonero. El 11 de junio, Frías intentó escapar por las calles céntricas de la capital peruana, sin éxito y, tras ser recapturado y torturado, admitió que la cita con Raverta sería al día siguiente. El 12 de junio concurrió al encuentro bajo la atenta mirada de los militares argentinos y sus colaboradores peruanos, que habían prestado una residencia de su ejército en Playa Hondable, en las afueras de Lima, para las sesiones de tortura a las que someterían a los militantes montoneros. Frente a la demora de Frías y Raverta, Perdía, su esposa y otros militantes que estaban en Perú se refugiaron en la casa del diputado del PSR Antonio Meza Cuadra. A los secuestros de Raverta y Frías se sumaron los de Noemí Giannetti y Julio César Ramírez. Ninguno de los cuatro sobrevivió (Uceda, 2004).

⁴⁸ Hay tres hipótesis que podrían explicar los secuestros de Campiglia y Pinus. En primer lugar, la posibilidad de que García Ferré estuviese colaborando con la inteligencia militar y supiera, como jefe TEI, que iba a tener una cita en Río de Janeiro con Campiglia. Esta explicación se encuentra sustentada en un cable de inteligencia desclasificado por la embajada de Estados Unidos en la que un consultor y asesor en las embajadas norteamericanas en América Latina da cuenta de su comunicación con miembros del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército en la que le confirman que el jefe de las TEI se encontraba colaborando con la régimen de facto (Sentencia causa 8905, *op. cit.*, pp. 62 y 63). Estas posibles explicaciones también son abordadas por Larraquy (2006, *op. cit.*, pp. 212-216). No obstante, si se considera el documento de inteligencia militar que sostiene que Ferré había sido secuestrado el 28 de febrero de 1980, la hipótesis se debilita, salvo que el jefe TEI hubiese comenzado en secreto su colaboración a fin de facilitar el apresamiento de Campiglia, cuestión que es improbable. Aun así, tampoco explica que Ferré supiera las identidades falsas de Pinus y el “Segundo Comandante” montonero y, menos aún, los vuelos que abordarían. Las otras dos hipótesis plantean una filtración de la información en el extranjero. O desde lo más alto de la dirigencia montonera, a través de la Secretaría Técnica de la organización sita en La Habana, que conocía las identidades falsas y los pormenores del viaje o, como también destaca Edgardo Binstock que plantea Calveiro, por un seguimiento realizado desde Panamá, donde Campiglia y Pinus abordaron el avión hacia Brasil (Edgardo Binstock, entrevista con el autor, *op. cit.*).

⁴⁹ Binstock, entrevista con el autor, *op. cit.*





ahí”⁵⁰ y lo envió a México, primero, y a Medio Oriente, después. “Mi tarea era reconstruir a los que habían sobrevivido a los atentados. Estoy un mes en El Líbano y me llega la orden de venir a España y ahí se me dice que se aborta todo este tipo de idea, de método, de construcción de grupos de ingreso al país”.⁵¹ En Madrid, Díaz mantuvo una reunión con uno de los encargados del “Departamento de Logística” quien le transmitió la decisión de la Conducción de descartar el “grupo comando” para desempeñarse en tareas militares.⁵²

Desde ese momento, las acciones armadas quedaron supeditadas a la casi profética “insurrección masiva” que la organización buscaría atizar a futuro.⁵³ Mientras tanto, los montoneros continuaron ingresando a la Argentina durante 1980 en el marco de las UI, con objetivos a largo plazo y directivas de reinserción y asentamiento en el país, incluso a costa de ocultar su identidad política. La Contraofensiva no se detenía, si bien prescindía de su costado militar. Sin dudas, el secuestro de la totalidad de las TEI y el de Campiglia y Pinus fueron la contundente y final prueba de que, luego de diez años, Montoneros ya no estaba en condiciones de continuar practicando la “lucha armada”. Fue la eficacia represiva dictatorial la que doblegó las pretensiones de la Conducción.

Las Unidades Integrales: la posibilidad de volver a vivir en la Argentina

Descartado el accionar militar, las UI continuaron ingresando a la Argentina durante el segundo trimestre de 1980. Montoneros buscaba reactivar vínculos políticos en el ámbito gremial, rearmar el Movimiento Peronista Montonero y, también, montar una estructura clandestina de prensa en el país. La dictadura conoció los planes de ingreso de los mili-

⁵⁰ Víctor Hugo Díaz, entrevista con el autor, La Plata, 27 de diciembre de 2016.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

⁵³ Sobre lo profético en el discurso político revolucionario véase Pittaluga (2009).

tantes y su *modus operandi* como fruto de su labor de inteligencia que comprendía la aplicación de torturas para obtención de información y, presumiblemente, también la infiltración de la organización. Por ejemplo, sabían que la doctrina montonera excluía la utilización de vuelos intercontinentales o de cabotaje por considerarlos riesgosos frente a la debilidad de su documentación apócrifa. Los militantes ingresaron por tierra desde un país limítrofe, al igual que en 1979. Por este motivo, el gobierno de facto había diseñado un plan represivo, conocido como “Operación Murciélago”,⁵⁴ que estipulaba el control de los pasos fronterizos y la utilización de militantes cautivos como “marcadores” para que reconocieran a sus compañeros al momento de ingresar a la Argentina.⁵⁵

Hasta el día de la fecha, se ha podido reconstruir la existencia de ocho UI conformadas por entre cuatro y seis militantes cada una. Contenidos en ellas, alrededor de cincuenta militantes ingresaron al país desde fines de abril de 1980 para cumplir con diferentes tareas. Dos células fueron completamente desarticuladas por la dictadura y sus militantes fueron asesinados y desaparecidos.⁵⁶

Las Fuerzas Armadas estuvieron al tanto de la conformación de las UI. Así lo demuestra un documento de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, fechado en junio de 1980: “Las UI [...] fueron instruidas para operar en ámbitos políticos, gremiales y agrarios, organizadas y estructuradas para realizar contactos, captación y agitación”⁵⁷. Como se desprende de la definición de los servicios de inteligencia, estas nuevas células constituían una forma de militancia emparentada con la que ha-

⁵⁴ “Informe de Inteligencia Especial Nro 02/80”, octubre de 1980, p.1, en Peiró, C., *op. cit.*

⁵⁵ La sentencia de la causa 8905 recoge las declaraciones de Néstor Norberto Cendón, ex agente penitenciario durante la dictadura y participante del GT 2 [Grupo de Tareas 2], dependiente del Batallón 601 de Inteligencia: “Declara sobre la operación ‘Murciélago’, iniciada a mediados de 1978 y que estuvo a cargo del personal civil de inteligencia del Batallón 601 y de la Jefatura II, y tenía por objeto detener a los ‘Montoneros’ que intentaban regresar al país desde el extranjero. Para ello, funcionaban ‘bases’ con personal civil de inteligencia del Batallón 601 en Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay y personal civil de inteligencia de la Jefatura II en países centroamericanos. Utilizaban a detenidos para que ‘marcaran’ a sus compañeros en los puestos fronterizos. Participaron Arias Duval, González Ramírez Feito, etc.” (*op. cit.*, pp. 56 y 57).

⁵⁶ Son los casos de la UI de Federico Frías Alberga, Toni Agatina Motta, Salvador Privitera, Gastón Dillon y Martha Simonetti y de la UI de Silvia Ruiz Dameri, Orlando Ruiz y Alcira Machi (Elaboración propia. Véase Confino, 2018b). No obstante, dada la estricta clandestinidad política en la que se desarrollaron tanto la Contraofensiva como su represión por parte del régimen militar, el número es estimativo.

⁵⁷ Central de Reunión, Batallón de Inteligencia 601, junio de 1980, p.13.





bían realizado las TEA durante la Contraofensiva de 1979 –ya que ambas excluían los operativos militares de su accionar–, aunque con diferencias significativas. Además del abandono tanto de los grupos comando de propaganda como de los objetivos políticos de corto plazo ya mencionados, y tal como el adjetivo “integral” permite entrever, las nuevas funciones de los militantes no tenían un plazo determinado para ser cumplidas e iban más allá de las interferencias a los canales de televisión que habían hecho las TEA el año previo.⁵⁸ Montoneros buscaba que los militantes se instalaran en la Argentina y, a diferencia de 1979, esta vez podrían hacerlo con sus familias. Los menos comprometidos y conocidos para el aparato represivo, además, tuvieron la directiva de legalizar sus identidades.⁵⁹ La Conducción abandonó la idea de una “campaña”, con plazos y requerimientos fijos, y se abocó a “preparar la insurrección”⁶⁰ que los ejemplos iraníes y nicaragüenses aconsejaban. Las tareas asignadas a cada UI fueron variadas, al igual que su lugar de asentamiento y momento de ingreso al país. Esa flexibilidad puede haber sido un motivo contundente para que los militantes las integraran, deseosos de establecerse en la Argentina tras años de exilio.

En este apartado se abordará la experiencia de militancia de las UI a partir de los casos de tres células, que son representativas de las distintas tareas que debieron cumplir los militantes y de los contextos en los cuales tuvieron que hacerlo. Las tres UI tuvieron diferentes funciones. La célula integrada por Daniel Cabezas tuvo la misión de instalar una imprenta clandestina. La segunda, conformada por Jorge Falcone y su pareja, debía trazar contactos políticos en la zona norte del Conurbano con el fin de armar una estructura del Movimiento Peronista Montonero en la zona.⁶¹ Por último, Marina Siri y Ricardo Rubio regresaron con el objetivo de legalizar sus identidades y seguir en contacto con las distintas organi-

⁵⁸ No obstante, siguió habiendo interferencias de los llamados “Montoneros silvestres” (Pacheco, 2014), es decir, militantes que habían quedado desenganchados de la organización.

⁵⁹ Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op. cit.*

⁶⁰ Roberto Perdiá, entrevista con el autor, *op. cit.*

⁶¹ Jorge Falcone, entrevista con el autor, *op. cit.*

zaciones legales del peronismo.⁶² Si bien sus propósitos eran distintos, el contexto represivo que la dictadura había montado en el país fue percibido por los tres grupos. Jorge Villar, integrante de la UI en la que estaba Falcone, fue asesinado y desaparecido en 1981.⁶³ La pareja que volvía con Siri y Rubio se desvinculó, presumiblemente por temor, ni bien ingresó al país.⁶⁴ En el grupo de Cabezas, por su parte, hubo tres militantes que fueron desaparecidos durante 1980.⁶⁵ Él mismo y su pareja fueron detenidos en agosto de 1980 pero sus detenciones fueron legalizadas y quedaron a disposición de un Consejo de Guerra.⁶⁶ La dictadura, que había descubierto el modo en que Montoneros había diagramado el ingreso de sus militantes, mantenía en plena actividad su aparato represivo.

Habida cuenta de las enormes dificultades del contexto político y del estado de disgregación de Montoneros luego de dos disidencias en un año, ¿por qué los militantes habían decidido sumarse a la Contraofensiva? Las razones, como podrá suponerse, fueron variadas. Algunas, sobre todo las que enfatizaban el compromiso militante con la organización o con la memoria de los militantes víctimas de la dictadura, deben haber sido consonantes con las que tuvieron los miembros de las TEI secuestrados entre febrero y marzo de 1980. En el caso de las UI, hubo situaciones en las que el hecho de volver al país primó por encima de la estrategia que encuadraba el regreso. Este es el caso de Cabezas, por ejemplo. Su madre había sido secuestrada por la dictadura y él quería volver para estar cerca suyo.⁶⁷ Luego de que Montoneros no le permitiera integrar la Contraofensiva de 1979, Cabezas pudo hacerlo en 1980, para

⁶² Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op. cit.*

⁶³ Jorge Villar fue integrante de la "Secretaría Política de Zona Norte" en la Contraofensiva de 1979 y autor de uno de los textos que integran el debate partidario de 1980 que conforman el "Boletín Interno N° 13". Murió asesinado en Argentina, en mayo de 1981 (elaboración propia en base a la biografía realizada por Roberto Baschetti, disponible en <http://www.robertobaschetti.com/biografia/v/120.html>)

⁶⁴ Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op. cit.*

⁶⁵ Se trata de Alfredo Lires, Graciela Álvarez y Gervasio Guadix, los tres desaparecidos en agosto de 1980 (Daniel Cabezas, entrevista con el autor, *op. cit.*).

⁶⁶ Cabezas y su pareja fueron legalizados y puestos a disposición de un Consejo de Guerra y recuperaron la libertad en 1984, una vez restablecida la democracia (Daniel Cabezas, entrevista con el autor, *op. cit.*).

⁶⁷ Con respecto a la historia de Thelma Jara de Cabezas véase Bonasso, M., "Un viaje por los abismos de la ESMA", *Página 12*, 4 de septiembre de 2000, disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-04/pag03.htm>





montar una estructura de prensa en Buenos Aires. Por su parte, Falcone justificó su participación en las modificaciones estratégicas que Montoneros había planeado para las UI: si bien, a diferencia de Cabezas, estaba orgánicamente incorporado a la organización con lo cual la aceptación del retorno obedecía también a la disciplina partidaria, desde su punto de vista fue el cambio en la modalidad de la militancia de la segunda Contraofensiva la que lo convenció del retorno.⁶⁸ Lo mismo sucedió con Rubio y Siri. Los dos habían participado en 1979 y no habían ahorrado críticas sobre el desempeño montonero. Ambos relatan, además, que su participación en 1980 tuvo que ver con las rectificaciones que puso en marcha la organización, pero también con la necesidad de abandonar el extranjero, ver “con sus propios ojos lo que sucedía en el país”⁶⁹ y, finalmente, poder establecerse en la Argentina con sus hijas.⁷⁰

Las tareas que la Conducción encomendó a los militantes en el país fueron diversas. Cabezas y su grupo debieron montar una imprenta clandestina con un mimeógrafo para armar y distribuir un libro titulado *Montoneros, el camino de la liberación* que era, por lo que se ha podido reconstruir, una selección de documentos de la organización que tenían la intención de mostrar la coherencia política montonera en su lucha contra el régimen militar. No obstante, y según el recuerdo de Cabezas, ninguno de los receptores postales del libro –políticos, historiadores e incluso militares– se dio por aludido ante el terror diseminado por la dictadura.⁷¹ Por su parte, Falcone, su pareja y Jorge Villar debían rearmar el Movimiento Peronista Montonero de zona norte. El hecho de que una célula de tres personas tuviera semejante tarea por delante demuestra la debilidad de la organización. Si bien, según la historiografía especializada

⁶⁸ Jorge Falcone, entrevista con el autor, *op. cit.* Véase también su libro de memorias, Falcone (2001).

⁶⁹ Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Al respecto, relata Cabezas: “A mí me tocó llamar a José María Rosa [abogado e historiador], entonces yo me presento, para mí en ese momento era un prócer ‘el viejo’, estaba orgulloso de llamarlo. Y lo llamo y le digo ‘mire, le mandamos un libro que queríamos saber si lo recibió’ ‘sí, ¿cuál?’ ‘Montoneros, el camino de la liberación’ y me dice ‘No, no, no [enfáticamente], no recibí nada’. Claro, cómo iban a aceptar que recibían eso en esa época, o sea, ahí es donde están, en esas pequeñas cosas se veía también el desfasaje que teníamos con respecto a la realidad” (Entrevista con el autor, *op. cit.*).

sobre el tema, para 1980 muchos de los apoyos iniciales del régimen *de facto* se habían esfumado, todavía faltaban dos años para que su descrédito fuera significativo. La “guerra contra la subversión”, lejos de ser un elemento de deslegitimación de la dictadura, era, en un contexto de crisis económica, su principal activo político frente a la sociedad (Quiroga, 2004; Canelo, 2008 y Franco, 2018).

Falcone terminó haciendo un boletín de prensa para la Coordinadora Gremial de Base de la Unidad Ferroviaria y su pareja integrándose a la Liga de Amas de Casa.⁷² Las actividades que ellos desarrollaron en el país tuvieron poca relación con las que Montoneros había dispuesto durante 1979 para los militantes de las TEA. Tanto las Ligas de Amas de Casa como las publicaciones con las que colaboró Falcone ponían en evidencia que la “preparación de la insurrección masiva” significaba también, a corto plazo, la posibilidad de los militantes de volver a vivir en la Argentina con sus familias.⁷³ Siri y Rubio, finalmente, debían asentarse definitivamente en el país y buscar la legalización de sus identidades. Para hacerlo, se trasladaron a Córdoba donde tenían mayores contactos y, si bien continuaron ligados a las redes de Montoneros a través de los nuevos espacios que se fueron constituyendo a principios de los ochenta como Intransigencia y Movilización Peronista, la Comisión Peronista de Derechos Humanos y el Peronismo Revolucionario, comenzaron también a explorar otras actividades. Siri se inclinó por la militancia sindical y la docencia al tiempo que Rubio continuó trabando contactos con militantes en el país.⁷⁴

La pareja, al igual que Falcone y Cabezas, recuerdan la Contraofensiva de 1980 como la oportunidad para volver a vivir en el país luego de años en el exilio. Todos destacan, además, el hecho de haber podido hacerlo con sus familias. Desmanteladas las TEI, Montoneros había fa-

⁷² Jorge Falcone, entrevista con el autor, *op. cit.*

⁷³ Falcone siguió relacionado con las redes que habían constituido Montoneros hasta 1990, momento en que el presidente Carlos Menem indultó a Firmenich –y a los militares condenados por la represión ilegal– y éste último decretó la libertad de acción de los pocos militantes que aún respondían a su jefatura (Jorge Falcone, entrevista con el autor, *op. cit.*).

⁷⁴ Marina Siri y Ricardo Rubio, entrevista con el autor, *op. cit.*





vorecido la reinserción de sus militantes en Argentina sin plazos ni actividades estipuladas y con objetivos más modestos. Y con éxito variable también, ya que una cantidad considerable de los ingresantes fue secuestrada en las fronteras a partir del trabajo de inteligencia de la dictadura, realizado a través de la tortura y el tormento a los secuestrados. Hacia mediados de 1980, la Contraofensiva había finalizado de hecho, por más que la Conducción siguiera invocándola en sus publicaciones o en entrevistas a medios extranjeros.⁷⁵ Esto marcó, en última instancia, el final de la estrategia de “lucha armada” en el país que se había desarrollado, con sus intermitencias, desde fines de la década de 1950.

Conclusiones

En una conferencia de prensa realizada el 25 de abril de 1981 en Córdoba, el General Cristino Nicolaidis –jefe del Batallón de Inteligencia 601 y futuro Comandante en Jefe del Ejército luego de la guerra de Malvinas– reconoció a las “fuerzas vivas” de esa ciudad que el año previo “habían desarticulado dos células guerrilleras que habían logrado ingresar al país pese al férreo control de fronteras”. Además, agregó: “Yo he tenido la oportunidad de hablar con uno de esos delincuentes y puedo asegurar que tienen un alto nivel de preparación en todos los sentidos”.⁷⁶ Se refería al grupo de las TEI que había sido secuestrado por el Ejército entre febrero y marzo de 1980. La infidencia de Nicolaidis sirvió para iniciar, una vez restaurada la democracia, una causa por los delitos de lesa humanidad cometidos contra los montoneros que participaron de la Contraofensiva, pero su mensaje pasó desapercibido para la Argentina de esos años.

La Contraofensiva fue la estrategia final de Montoneros. Luego del secuestro y asesinato de más de ochenta militantes en el país entre 1979

⁷⁵ Véase, por ejemplo, la *Revista Vencer* N° 6 y N° 7, de enero-febrero y marzo-abril de 1981, respectivamente. Agradezco a Roberto Baschetti haberme puesto en contacto con estos documentos.

⁷⁶ *Revista Vencer* N° 8, mayo-junio de 1981.

y 1980 y de las dos disidencias sufridas durante su transcurso, la organización Montoneros había quedado prácticamente extinta. La represión dictatorial fue, sin dudas, el resorte principal que explica la derrota de la organización, pero no el único. Atribuir el resultado del proceso político únicamente a la acción represiva dictatorial o al accionar de un doble agente dentro de la Conducción implicaría convalidar, aun de un modo implícito, que de no haber mediado esas estrategias represivas Montoneros podría haber conducido una insurrección. Lo cierto es que las últimas acciones de Montoneros en el país no lograron interpelar eficientemente a la sociedad argentina. La lectura política montonera se había revelado, para inicios de la década de 1980, como anacrónica.

A partir de marzo de 1980, la Contraofensiva poco tuvo que ver con la desarrollada en 1979. Los militantes que continuaron ingresando al país pudieron explorar otras opciones de quehacer político de acuerdo con sus propias experiencias y expectativas. Salvo por el grupo de prensa que tuvo la tarea específica de montar una imprenta clandestina, el resto de los montoneros vino con escasas indicaciones, más allá de la permanencia en el país por si acaso se producía la insurrección deseada. La estrategia se reconfiguró entonces bajo la nueva situación de Montoneros, casi en estado de disolución, y también en el contexto de un país que empezaba a pensar la salida política de la dictadura sin demasiadas críticas hacia la represión estatal ocurrida en los años precedentes. En ese marco, quienes volvieron al país en 1980 y lograron evadir el aparato represivo estatal continuaron participando en distintas iniciativas políticas en la medida de sus posibilidades, muchas veces debiendo ocultar su identidad montonera. El fracaso de la opción armada habilitó otras instancias políticas que también se encontraban dentro del repertorio de la organización y que, además, eran coincidentes con los deseos de varios de sus integrantes.

El final de la lucha armada de Montoneros no fue producto de una transformación ideológica de sus dirigentes ni de una readecuación a un contexto que entendían como novedoso. La Conducción, y también los





militantes, continuaron respaldando los métodos militares de la política. La interrupción de estos métodos obedeció, en cambio, a la constatación de una imposibilidad. Los malos resultados políticos, la efectividad represiva de la dictadura, las disidencias y los desacuerdos entre los militantes acabaron con las pretensiones de los jefes montoneros de conducir una revuelta generalizada en contra del régimen. En adelante, y durante el período llamado de “transición a la democracia”, serían otros actores políticos los que pondrían en jaque la dominación dictatorial.

Probablemente, los cambios en el carácter de la Contraofensiva de 1980 y su lenta disolución como operación política organizada conspiraron contra su recuerdo específico. En las memorias sobre los últimos años de Montoneros, la estrategia quedó reducida a los resonantes atentados militares realizados entre septiembre y noviembre de 1979 y, en menor medida, al secuestro encadenado de las TEI de 1980, eludiendo el resto de los regresos que se produjeron durante ese año. De este modo, ambas Contraofensivas quedaron asociadas exclusivamente a los métodos armados. Quizás por eso, las omisiones memoriales de la Contraofensiva de 1980 pueden interpretarse como un reflejo del abandono por parte de Montoneros de la actividad armada que había sido un componente central de su identidad a lo largo de sus años de existencia.

Bibliografía

Argento, A. (2013). *La guardería montonera. La vida en Cuba de los hijos de la Contraofensiva*. Buenos Aires: Marea.

Astiz, E. (2005). *Lo que mata de las balas es la velocidad: una historia de la contraofensiva montonera del 79*. La Plata: De la Campana.

Calveiro, P. (2005). *Política y/o violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Campos, E. (2016) ¿Locura, épica o tragicomedia? Las historias de la contraofensiva montonera en la era de la democracia consolidada. *Estudios* (29).

Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires: Prometeo.

_____ (2016). *La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983)*. Buenos Aires: Edhasa.

Celesia, F. y Waisberg, P. (2013). *A vencer o morir. La última batalla de la guerrilla argentina*. Buenos Aires: Norma.

Confino, H. (2018a). Volver sin haberse ido: el caso de las “Tropas Especiales de Agitación Sur” durante la Contraofensiva. *Revista Universitaria de Historia Militar* (14).

_____ (2018b). *La Contraofensiva Estratégica de Montoneros. Entre el exilio y la militancia revolucionaria (1976-1980)*. (Tesis de Doctorado). UNSAM, Buenos Aires.

_____ (2019a). Exilio, debate y ruptura. Los balances de la Contraofensiva montonera de 1979 y la constitución de “Montoneros 17 de octubre”. *Anuario*, N° 31.

_____ (2019b). “Héroes, víctimas y enajenados. Los motivos de los militantes de Montoneros que participaron de la Contraofensiva (1978-1980)”. En *Nuevos Mundos Mundos Nuevos*. Disponible en <https://journals.openedition.org/nuevomundo/78687>

Falcone, J. (2001). *Memorial de guerralarga. Un pibe entre cientos de miles*. La Plata: De la Campana.

Fernández Barrio, F. (2017). Diplomacia y represión extraterritorial: la actuación del Servicio Exterior argentino en el “caso Molfino”. *Avances del Cesor* (V). XIV, N° 16.

Franco, M. (2018). *El final del silencio. Dictadura, sociedad y derechos humanos en la transición*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Gasparini, J. (2008). *Montoneros. Final de cuentas*. La Plata: De la Campana.

Gillespie, R. (1998). *Soldados de Perón. Los Montoneros*. Buenos Aires: Grijalbo.

Hilb, C. (2013). *Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta*. Buenos Aires: Siglo XXI.





Jensen, S. (2010). *Los exiliados. La lucha por los derechos humanos durante la dictadura*. Buenos Aires: Sudamericana.

Larraquy, M. (2006). *Fuimos soldados. Historia secreta de la Contraofensiva montonera*. Buenos Aires: Aguilar.

Larraquy, M. y Caballero, R. (2000). *Galimberti. De Perón a Susana, de Montoneros a la CIA*. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.

Levenson, G. (2000). *De los bolcheviques a la gesta montonera. Memorias de nuestro siglo*. Buenos Aires: Colihue.

Novaro, M. y Palermo, V. (2003). *La dictadura militar 1976-1983: del golpe de Estado a la restauración democrática*. Buenos Aires: Paidós.

Otero, R. (2019). *Montoneros y la memoria del peronismo*. Buenos Aires: Prometeo.

Pacheco, M. (2014). *Montoneros silvestres (1976-1983). Historia de resistencia a la dictadura en el sur del conurbano*. Buenos Aires: Planeta.

Perdía, R. (1997). *La otra historia. Testimonio de un jefe montonero*. Buenos Aires: Grupo Ágora. Pittaluga, R. (2009). Tiempo y espacio en las concepciones del PRT (1968-1976). *Ponencia XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Bariloche.

Quiroga, H. (2004). *El tiempo del "Proceso". Conflictos y coincidencias entre políticos y militares 1976-1983*. Rosario: Homo Sapiens.

Robledo, P. (2018). *Montoneros y Palestina*. Buenos Aires: Sudamericana.

Salas, E. (2014). *De resistencia y lucha armada*. Buenos Aires: Punto de encuentro.

Slipak, D. (2015). *Las revistas montoneras. Cómo la organización construyó su identidad a través de sus publicaciones*. Bs. Aires: Siglo XXI.

Slipak, D. (2017). Sobre desvíos, espejos y cúpulas. Las disidencias montoneras y las lecturas sobre los años setenta. *Revista Izquierdas* (32).

Svampa, M. (2003). "El populismo imposible y sus actores, 1973-1976" en James, Daniel (Dir.), *Violencia, proscripción y autoritarismo (1955-1976)*, tomo IX de la Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 2003.

Uceda, R. (2004). *Muerte en el Pentagonito. Los cementerios secretos del Ejército peruano*. Planeta: Lima.

Zuker, C. (2010). *El tren de la victoria. La saga de los Zuker*. Buenos Aires: Del Nuevo Extremo.

Entrevistas

Edgardo Binstock, entrevista con el autor, Buenos Aires, 8 de septiembre de 2016.

Daniel Cabezas, entrevista con el autor, Buenos Aires, 3 de noviembre de 2014.

H.D., entrevista con el autor, Santa Fé, 25 de abril de 2015.

Víctor Hugo Díaz, entrevista con el autor, La Plata, Provincia de Buenos Aires, 27 de diciembre de 2016.

Jorge Falcone, entrevista con el autor, Buenos Aires, 10 de marzo de 2016.

Jorge Lewinger, entrevista con el autor, Buenos Aires, 11 de junio de 2016.

Roberto Perdía, entrevista con el autor, City Bell, Provincia de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2016.

Ricardo Rubio y Marina Siri, entrevista con el autor, San Miguel, Provincia de Buenos Aires, 27 de abril de 2017.

Documentos partidarios

“Boletín Interno N° 13”, febrero de 1980.

Partido Montonero, “Resolución 045/79: Sobre la desertión de cinco militantes del Partido y cuatro milicianos en el exterior”, 10 de marzo de 1979.

Montoneros 17 de Octubre, s/t, abril de 1980.





Montoneros, “Ante la crisis del Partido. Reflexiones críticas y una propuesta de superación”, en “Boletín Interno N° 13”, op. cit.

Peronismo Montonero Auténtico, “Algunas reflexiones para la construcción de una alternativa Peronista Montonera Auténtica”, 9 de junio de 1979.

Evita Montonera N° 23, enero de 1979.

Revista Vencer N° 1, 1979.

Revista Vencer N° 2, 1979.

Revista Vencer N° 6, enero-febrero de 1981.

Revista Vencer N° 7, marzo-abril de 1981.

Revista Vencer N° 8, mayo-junio de 1981.

Documentos de inteligencia

DIPBA, Mesa “D(s)”, Carpeta Varios, Legajo 16.851.

Ejército Argentino, “Informe de Inteligencia Especial Nro. 02/80 Actualización de la situación de la BDT Montoneros”, octubre de 1980, en Peiró, C., “Archivos secretos de la dictadura revelan su alto conocimiento de los planes de Montoneros”, Infobae, 11 de diciembre de 2016, disponible en <http://www.infobae.com/politica/2016/12/11/archivos-secretos-de-la-dictadura-revelan-su-alto-conocimiento-de-los-planes-de-montoneros/> [última fecha de consulta, 31 de marzo de 2018].

Ejército Argentino, Central de Reunión, Batallón de Inteligencia 601, “Situación de la BDT Montoneros al 1/80”, disponible en Peiró, C., op. cit.

Ejército Argentino, “Orden de operaciones 01/80 ‘Operativo Guardamuebles’”, Jefatura Área II, Palermo.

Ejército Argentino, Central de Reunión, Batallón de Inteligencia 601, mayo de 1980.

Ejército Argentino, Central de Reunión, Batallón de Inteligencia 601, junio de 1980.

Causa Judicial

Causa N° 8905/07, “Simón Antonio Herminio s/Privación ilegal de la libertad personal”, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Secretaría N° 8.

Prensa

Bonasso, M., “Un viaje por los abismos de la ESMA”, Página 12, 4 de septiembre de 2000, disponible en: <https://www.pagina12.com.ar/2000/00-09/00-09-04/pag03.html>

“Bittel”, *Clarín*, 29 de septiembre de 1979, p.3

“La CUTA expresó su repudio por el atentado subversivo”, *Clarín*, 14 de noviembre de 1979





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Formas excepcionales de la violencia en el cautiverio clandestino: el trabajo forzado de prisioneras de la ESMA en la Cancillería argentina

Exceptional forms of violence in clandestine captivity: the forced labor of ESMA prisoners in the Argentine Foreign Ministry.

Facundo Fernández Barrio*

*Recibido: 12 de mayo de 2020
Aceptado: 14 de octubre de 2020*

Resumen: Este trabajo indaga sobre ciertas formas excepcionales de la violencia en el cautiverio clandestino durante el terrorismo de Estado en Argentina. Estudiamos el caso de un grupo de prisioneras de la Escuela de Mecánica de la Armada que, durante su detención ilegal, debieron cumplir tareas forzadas bajo las órdenes de sus victimarios en la Cancillería. A partir de los testimonios de las sobrevivientes, analizamos un aspecto que singularizaba su experiencia de cautiverio: en la Cancillería, las detenidas trabajaron en contacto permanente y prolongado con personas ajenas al plan represivo, ante quienes debían simular identidades falsas. Observamos cómo la producción de vínculos cotidianos entre las prisioneras y sus “compañeros” de oficina en un ámbito del “afuera” de la ESMA puso socialmente en acto la sujeción de las víctimas del cautiverio clandestino al poder concentracionario.

Palabras clave: Dictadura, represión, ESMA, Cancillería, cautiverio clandestino.

Abstract: This work investigates certain exceptional forms of violence in clandestine captivity during state terrorism in Argentina. We analyze the case of a group of prisoners from the Navy Mechanics School (ESMA) who had to carry out forced tasks under the orders of their victimizers at the Foreign Ministry during their illegal detention. Based on the testimonies of the survivors, we analyze an aspect that singled out their experience of captivity: at the Foreign Ministry, the detainees worked in permanent and prolonged contact with people outside the repressive plan, before whom they had to simulate false identities. We observe how the production of daily relationships between the prisoners and their “compañeros” in the

* Candidato a Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires) y becario doctoral UBACyT. facundofb@gmail.com

office in a space from the "outside" of ESMA put into action the subjection of the victims of clandestine captivity to the power of the victimizers.

Key words: Dictatorship, repression, ESMA, Foreign Ministry, clandestine captivity.

Introducción

Entre 1976 y 1978, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina funcionó bajo control de la Armada, según el esquema de reparto tripartito del poder establecido por las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar (Canelo, 2016).¹ La intervención de la Cancillería habilitó a que varios represores del Grupo de Tareas 3.3 (GT) de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los mayores centros clandestinos de detención (CCD) del país, operaran en una dependencia estratégica del ministerio: la Dirección General de Prensa y Difusión (DGPYD). Algunos miembros del GT fueron designados allí con cargos públicos mediante resoluciones ministeriales, mientras que otros frecuentaban la dirección sin que se los hubiera blanqueado por vía administrativa. La DGPYD había sido creada como un instrumento de la dictadura para contrarrestar lo que el régimen militar calificaba como una "campaña antiargentina" en el extranjero, donde ya impactaban las denuncias por violaciones a los derechos humanos en el país de las redes de exiliados. No obstante, en la práctica, esa oficina de la Cancillería también fue utilizada por los marinos como una herramienta de apoyo a los planes políticos del almirante Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada e integrante

¹ Vale una aclaración inicial sobre el uso de ciertas marcas del lenguaje que haremos en este trabajo. En los testimonios que analizaremos aparecen categorías y denominaciones nativas, elaboradas por los represores ("proceso de recuperación", "staff", "mini staff", etcétera) pero también por los sobrevivientes ("colaboración", "personas comunes", etcétera), difícilmente sustituibles por categorías analíticas propias. En la mayoría de esos casos hemos optado por utilizar comillas simples para referirlas, reservando el uso de comillas dobles para las citas textuales de otros autores o de los testimonios analizados. Una excepción a esto es el uso que haremos de la noción de "trabajo forzado". Aunque es cierto que esa fórmula también nace como categoría nativa en el relato de algunos sobrevivientes, aquí la utilizaremos como propia ya que creemos que describe satisfactoriamente el fenómeno que queremos analizar. Incluso en los casos de prisioneros que cumplían las tareas requeridas por los represores bajo la apariencia (o incluso bajo la propia percepción) de una "colaboración" voluntaria con los victimarios, la amenaza última de la muerte convertía a esas labores en un mandato de carácter obligatorio para todos ellos.





de la Junta Militar de Gobierno entre 1976 y 1978, quien aspiraba a convertirse en el próximo líder del gobierno de facto (Uriarte, 1992).

En la ESMA, el proyecto personal de Massera había dado lugar a la creación de lo que los represores del CCD denominaron como un “proceso de recuperación” de un grupo de prisioneros y prisioneras provenientes del peronismo revolucionario, un experimento que apuntaba a la conversión ideológica de los militantes y que implicaba para ellos el cumplimiento forzado de diversas tareas intelectuales y manuales bajo la supervisión de los miembros del GT. Desde 1977, y sobre todo durante el año del Mundial de Fútbol de 1978, esas labores se orientaron según dos objetivos de los marinos: el despliegue de acciones para lavar la imagen exterior del régimen militar en general y de la ESMA en particular; y la producción de información para nutrir los planes políticos de Massera, quien se promocionaba en el extranjero como el líder que Argentina necesitaba. Las tareas requeridas a los prisioneros y prisioneras incluían, entre otras cosas, la confección de informes sobre coyuntura política, el análisis y la traducción de prensa local y extranjera y la producción de material escrito y audiovisual sobre el llamado “terrorismo internacional” y de material de propaganda sobre Argentina. En ciertos casos, las tareas forzadas de los integrados al “proceso de recuperación” excedieron las fronteras físicas del CCD: algunos detenidos y detenidas debieron trabajar en lugares controlados por los marinos fuera de la ESMA, lo que configuraba un cuadro de límites inciertos pero efectivamente existentes de su cautiverio, que de esa manera se prolongaba hacia el “afuera” del CCD pero seguía asociándose de manera indisoluble al dispositivo de tortura, muerte y desaparición que imperaba como regla en el “adentro” de la ESMA (Feld, 2019).

El “proceso de recuperación” fue el escenario sobre el que se desplegó lo que ha sido definido como una “productividad destructiva” de la experiencia concentracionaria en la ESMA, donde el sometimiento de los prisioneros y prisioneras adoptó formas complejas y ambiguas que iban más allá de la destrucción física y que incluían, entre otras cosas, la im-

posición de relaciones cotidianas y cercanas que las víctimas debían establecer con sus victimarios (Feld y Franco, 2019).² De ese modo, la represión en el CCD no se reducía sólo a su faceta que mejor conocemos: la de los secuestros, los asesinatos y la desaparición (Calveiro, 1998). Esta dimensión “productiva” de la represión en la ESMA probablemente se asociara al hecho de que el CCD excedió su función principal de centro desaparecedor y su dinámica se imbricó con cuestiones decisivas de la vida política argentina: para los prisioneros y prisioneras del “proceso de recuperación”, el cautiverio se anudó con el proyecto político de Massera y, por transición, con la interna militar, el frente externo de la dictadura y el funcionamiento de áreas clave del Estado como la de las relaciones exteriores.

La DGPYD de la Cancillería fue uno de los espacios en el “afuera” de la ESMA en los que se desarrollaron los trabajos forzados de un puñado de integrantes del “proceso de recuperación”. Durante 1978, cuatro prisioneras cumplieron tareas bajo las órdenes de los miembros del GT en el Palacio San Martín, donde convivieron durante meses tanto con sus secuestradores como con funcionarios y empleados civiles de la Cancillería. Todos los días las prisioneras eran trasladadas desde la ESMA hasta el edificio del ministerio en pleno centro de Buenos Aires. Una vez que concluían la jornada, los represores volvían a llevarlas a dormir al CCD. A partir de los testimonios de las cuatro sobrevivientes,³ en este trabajo analizaremos un aspecto que singularizaba su experiencia de cautiverio frente a la de los demás detenidos y detenidas incorporados al “proceso de recuperación”: en la Cancillería, estas prisioneras trabajaron en contacto cotidiano, permanente y prolongado con personas ajenas al plan represivo, ante quienes se veían obligadas a aparentar identidades

² Otros trabajos han pensado en la dimensión “productiva» del cautiverio en la prisión política, donde ésta se asoció más bien a la reconstitución de vínculos e identidades entre los detenidos y las detenidas (Garaño, 2010).

³ Abordaremos las declaraciones judiciales que brindaron las cuatro sobrevivientes en el llamado juicio ESMA II, desarrollado entre 2009 y 2011, en el que varios represores del GT de la ESMA fueron condenados a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad; así como otros testimonios orales de las sobrevivientes brindados al Archivo Oral de Memoria Abierta y editados en un libro (Actis *et al.*, 2001).





falsas. Aun cuando ellas intuyeran que los empleados administrativos y diplomáticos de la Cancillería tal vez percibían, sospechaban o incluso sabían que eran detenidas ilegales, las secuestradas debían disimular su condición de cautivas frente a sus “compañeros” de oficina, quienes se comportaban con apariencias de normalidad ante su presencia.

Esta condición específica de su cotidianeidad convertía a la experiencia concentracionaria de estas mujeres en una excepción dentro de la excepción: si el “proceso de recuperación” en la ESMA involucró a una minoría entre los miles de detenidos y detenidas que habían pasado por el CCD, y si dentro de esa minoría fueron menos aun los que frecuentaron el “afuera” de la ESMA, prácticamente no existieron otros casos de prisioneros o prisioneras que además de eso tuvieran contacto regular con personas ajenas al plan represivo.⁴ ¿Por qué observar, entonces, casos atípicos del cautiverio clandestino? Si bien las prisioneras que pasaron por la Cancillería constituían un grupo mínimo dentro de otro grupo también reducido de detenidos y detenidas de la ESMA, aquí partimos de la noción de que la tecnología del poder desaparecedor se componía tanto de sus reglas como de sus excepciones (Lampasona, 2013). Nos interesa ver cómo el impacto de la irrupción del “afuera” y de las relaciones con “personas comunes”⁵ en las subjetividades de estas mujeres nos habla no sólo de sus propias experiencias personales sino también del dispositivo concentracionario.

En la primera parte del trabajo partiremos de la hipótesis de que la producción de vínculos cotidianos entre las prisioneras de la ESMA y sus “compañeros” de oficina en la Cancillería mostró la capacidad del poder

⁴ Algunos detenidos y detenidas mantuvieron este tipo de interacciones con personas ajenas al plan represivo bajo el mando de los marinos una vez que salieron de la ESMA y que siguieron bajo control de los represores en régimen de “libertad vigilada”. Ese fue el caso de pequeños grupos de secuestrados y secuestradas que cumplieron tareas en el Centro Piloto de París; en el Ministerio de Bienestar Social, controlado por la Armada; en las oficinas políticas del almirante Massera en la calle Cerrito; y en casas y locales donde los marinos montaron negocios de distintos rubros. Sin embargo, casi ninguno de ellos tuvo contactos cotidianos de esta naturaleza durante la etapa del cautiverio en la ESMA.

⁵ La denominación de “personas comunes” o “gente normal” para referirse a funcionarios y empleados de la Cancillería ajenos al plan represivo aparece de manera recurrente en los testimonios de las sobrevivientes. Aunque no hacemos propia la categoría, a lo largo del trabajo utilizaremos esa denominación entre comillas simples para aludir a esas personas.

concentracionario para poner socialmente en acto la sujeción de las víctimas del cautiverio clandestino a los victimarios, en cuanto que esas relaciones con personas ajenas al plan represivo estuvieron mediatizadas por un sometimiento silenciado de las secuestradas a los marinos en el ministerio que les imponía la obligación de simular identidades falsas ante sus “compañeros” de oficina. De ese modo, además del desplazamiento para la identidad de las víctimas que suponía el haber “caído” en la ESMA, en el caso de estas detenidas se solapaba un segundo desplazamiento, que era el de la performatización de una falsa identidad que les resultaba perturbadoramente contradictoria con la subjetividad del cautiverio: incluso en un espacio del “afuera” como el Palacio San Martín, donde la realidad parecía muy otra a la de la ESMA, ellas seguían siendo prisioneras y estando “adentro”.

En la segunda parte dejaremos formulados algunos interrogantes acerca de las racionalidades que guiaron las decisiones de los miembros del GT al momento de seleccionar a los prisioneros y prisioneras que participaban en el “proceso de recuperación” y, en particular, en ciertas tareas asignadas en el “afuera” del CCD. Esto nos llevará a analizar una clasificación hecha por los represores que separaba en dos grupos a los detenidos y detenidas “en recuperación”, el “staff” y el “mini staff” (Calveiro, 1998), y a indagar sobre dos condiciones que atravesaron al “proceso de recuperación”: el carácter aparentemente aleatorio de las determinaciones de los miembros del GT sobre el destino de los prisioneros y prisioneras; y el carácter generizado de ese “proceso”. Los testimonios que trabajaremos aquí pertenecen a sobrevivientes mujeres. Si las voces de los ex detenidos de los CCD han tenido en general poca circulación social, eso es aun más notorio en los casos de ciertas experiencias de mujeres sobrevivientes del cautiverio clandestino. Las voces femeninas sobre la dictadura que han tenido mayor recepción social pertenecen sobre todo a mujeres que hablan desde identidades de género normativas, como las Madres y las Abuelas (Sutton, 2015). Aún hoy, las historias de mujeres sobrevivientes como Beatriz Elisa Tokar, Lidia Cristina Vieyra, Marta Ál-





varez y Graciela García parecen tener menor audibilidad pública (Álvarez, 2015). En los últimos años, diversos trabajos históricos con perspectiva de género han explorado los modos específicos en que las prisioneras de los CCD fueron disciplinadas por el poder concentracionario, y han demostrado que, aunque las detenidas no sufrieran ni más ni menos que sus compañeros varones, a las mujeres les fueron infligidos “repertorios más amplios de suplicio” (Barrancos, 2008: 147-148). Este trabajo quiere contribuir al conocimiento histórico sobre las experiencias de esas mujeres sobrevivientes y sobre lo que ellas nos dicen acerca del cautiverio clandestino durante el terrorismo de Estado.

Los vínculos entre secuestradas y personas ajenas al plan represivo

Lidia Vieyra fue secuestrada por el GT de la ESMA en marzo de 1977. Poco después de su detención, los marinos la incorporaron al grupo de prisioneros “en recuperación” y le asignaron tareas bajo las órdenes del GT, primero en el espacio de la “Pecera” y luego en el “Dorado”.⁶ En marzo de 1978, Vieyra fue notificada de que, a partir de entonces, tendría que ir a trabajar todos los días a la DGPYD de la Cancillería. Cada mañana, un “verde” la trasladaba en auto hasta el ministerio. Al final del día la regresaban a la ESMA, donde dormía en “Capucha”.⁷ Vieyra dice que, a poco de haber comenzado sus labores forzadas en el Palacio San Martín, comprobó que los miembros del GT se manejaban allí con la misma omnipotencia que en la ESMA:

⁶ La “Pecera” era un sector de oficinas y archivo en el altillo de la ESMA, donde detenidos y detenidas realizaban diversas tareas intelectuales ordenadas por el GT. Constituía el núcleo espacial del “proceso de recuperación”. El “Dorado” era un salón de la planta baja donde los miembros del GT realizaban tareas de inteligencia y planificaban los operativos de secuestro de personas.

⁷ Los “verdes” eran cadetes y personal de baja jerarquía de la Armada que se dedicaban a la vigilancia de los detenidos y detenidas. “Capucha” era el principal área destinada al alojamiento de los prisioneros y prisioneras.

Un día cuando nuestro compañero Horacio Maggio se fuga de la ESMA, Alberto González Menotti me sienta en una oficina con un grabador y empieza a interrogarme sobre qué sabía yo sobre Maggio. O sea, me interrogó en el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores (...) Se movían absolutamente a sus anchas, eran los dueños del ministerio. Era como una extensión de la ESMA (Declaración testimonial de Lidia Vieyra en el Juicio ESMA II, 2010).

En la Cancillería, la tarea principal de Vieyra era manejar una máquina de teletipo, donde recibía cables de noticias y comunicaciones de periodistas extranjeros que debía transmitir a los marinos. En la DGPYD compartía espacio con los represores del GT, con otros marinos que trabajaban en el área de las relaciones exteriores y/o vinculados al proyecto de Massera, con las otras prisioneras de la ESMA y con funcionarios y empleados civiles del ministerio, administrativos y diplomáticos, además de la presencia habitual de periodistas acreditados que frecuentaban el Palacio San Martín, ya fuera porque cubrían temas de política exterior o porque operaban para la Armada. La situación de Vieyra y las demás prisioneras en la Cancillería era de absoluta clandestinidad: vigiladas por sus captores, con identidad falsa, sin contrato de trabajo ni paga. En el testimonio de Vieyra se menciona de forma recurrente el efecto desestabilizador que le producía compartir la vida cotidiana con esos “compañeros” de quienes la separaba el silencio:

Cuando a mí me dicen que tengo que ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, yo lo sentí como una doble tortura, quería quedarme con mis compañeros en la “Pecera”. Si bien entendía que no podía decir que no, la verdad es que sentí una humillación... no sé... incalificable. (...) Muchos de los civiles del ministerio sabían de la existencia de detenidos desaparecidos que trabajaban ahí y sabían que la conducción del ministerio estaba directamente relacionada con el GT de la ESMA (...) En un lugar de trabajo se sabe lo que ocurre, es la general de la ley y también era así en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde los empleados sabían. Por supuesto había muchos que no querían ni siquiera asomarse porque el terror tiene tentácu-





los muy largos y cualquiera que se hubiese opuesto podría haber desaparecido (...) Había un cuerpo de prisioneros trabajando ahí. Y cuando digo trabajando digo esclavitud pura y dura, porque yo nunca por mi voluntad hubiera concurrido a ese lugar, jamás. Cuando digo esclavitud digo sometimiento, digo sojuzgamiento, digo amenaza, digo que me podían matar a mi hermano, a mi padre o a cualquiera. (...) Yo pasaba los télex y pensaba que dentro de diez minutos me venían a buscar para llevarme nuevamente a “Capucha”, donde mis compañeros me iban a contar a quién habían asesinado... era absolutamente demencial. Y tenía a un periodista ahí y no le podía decir lo que estaba ocurriendo. Si esto no es tortura, que me expliquen qué es. La tortura no es solamente la máquina, no es un simulacro de fusilamiento, la tortura en la ESMA tenía que ver con todo esto, con la deshumanización que existía (Declaración testimonial de Lidia Vieyra en el Juicio ESMA II, 2010).

Las detenidas que cumplieron tareas en la Cancillería no sólo compartían lazos cotidianos con sus torturadores sino además con “compañeros” de oficina que, al menos desde su percepción, posiblemente sabían, sospechaban o intuían que ellas eran detenidas ilegales. La mentira sobre la identidad que organizaba las relaciones con sus “compañeros” de oficina aparece en los testimonios de las ex prisioneras como un elemento perturbador: en palabras de Vieyra, “humillante”, “demencial”, “deshumanizante”. Las prisioneras pasaban el día fuera del CCD, en una institución pública, cerca de diplomáticos y periodistas, y sin embargo eran detenidas ilegales bajo amenaza de muerte, y esa condición les resultaba infranqueable.

Elisa Tokar fue secuestrada por el GT de la ESMA en septiembre de 1977 y a mediados de 1978 comenzaron a llevarla a la Cancillería. En su caso los represores la incorporaron a la oficina en el Palacio San Martín bajo su verdadero nombre, aun cuando se escondía que era una detenida ilegal. Sin embargo, para ella, “Elisa” no remitía a su realidad de entonces como cautiva, ya que dentro de la ESMA todos la llamaban por su nombre de militancia, “Mónica”. Para Tokar fue difícil ocultar ese otro nombre que

la conectaba con una faceta de su identidad, la de militante secuestrada, que debía permanecer velada ante sus "compañeros" de oficina. En el libro *Ese infierno*, en el que dialoga con otras sobrevivientes de la ESMA, Tokar recuerda:

Tokar. Mi nombre en la militancia era Mónica. Cuando me llevaron a trabajar a Cancillería había una compañera que también se llamaba así, y cuando la gente decía "Mónica" respondíamos las dos. Yo era Elisa Tokar, pero seguía siendo Mónica, no podía responder a otro nombre que no fuera ese.

Miriam Lewin. Vos identificabas el nombre Moni con la militancia y el adentro.

Tokar. Claro, yo en Cancillería seguía estando secuestrada y entonces seguía siendo Moni, respondía a ese nombre.

Munú Actis. Era el nombre con que te llamaban cotidianamente, porque de la ESMA te llevaban a trabajar allá. En la ESMA nadie te llamaba Elisa.

Tokar. Pero mis compañeros de Cancillería sí (*Actiset al.*, 2001: 82-83).

Tokar califica el hecho de que sus "compañeros" de oficina la llamaran por el nombre "Elisa" como algo "terrible" porque eso la remitía a una situación, la de estar "afuera" del CCD, que tensionaba su experiencia subjetiva, la de estar "adentro", incluso mientras cumplía tareas en el Palacio San Martín, donde dos "verdes" se apostaban todos los días en la puerta de las oficinas de prensa hasta que ellas concluían la jornada. Al mismo tiempo, "Mónica" no sólo era su nombre dentro de la ESMA sino además su nombre de militancia, de manera que "Elisa" tachaba además la identidad politizada de Tokar. Así, la "productividad" del cautiverio mostraba su costado más pernicioso, que era el de negar de forma sistemática la subjetividad de la víctima obligándola incluso a renunciar a su nombre de militancia, cosa que hasta entonces no había tenido que hacer ni siquiera en el propio CCD.⁸

⁸ El reverso de esa situación era lo que le ocurría a Tokar con los nombres de los represores. En su testimonio refiere que en la Cancillería evitaba llamar por el nombre a su "jefe", el capitán retirado Francis Whamond, quien a su vez era su "responsable" dentro de la ESMA. Tokar se dirigía a él como "capitán" para no llamarlo espontáneamente "Duque", que era el apodo por el que lo conocía en el CCD.





Al hablar de “personas comunes” en la Cancillería, Tokar recuerda a una funcionaria civil que trabajaba en la DGPyD y que a veces oficiaba como traductora. Tokar relata una ocasión, previa a su asignación en el ministerio, en que los marinos llevaron a un periodista inglés a la ESMA y montaron una farsa para mostrarle que allí no había ningún CCD. Trasladaron a la mayoría de los detenidos y detenidas a una casa quinta en el conurbano y sólo dejaron a unos pocos en la “Pecera”, a los que disfrazaron con uniformes de policía. La historia inventada era que allí funcionaba una oficina donde se analizaban publicaciones de prensa que pudieran dar pistas sobre la “campana antiargentina”. Tokar estaba presente cuando llegaron las visitas a la ESMA:

Lewin. ¿Vos viste al periodista?

Tokar. Por supuesto, y no solamente a él, sino que vi también a una mujer, B., con la cual después trabajé en Cancillería. Era traductora oficial en esta visita que estaba organizada por Prensa y Difusión de la Cancillería, que ya en esa época estaba en manos de la Marina. (...)

Liliana Gardella. Vos en ese momento todavía no la conocías.

Tokar. No la conocía (...) Miren qué curioso lo que pasó. Vino esta mujer al archivo...

Lewin. ¿A la ESMA, acompañando al periodista?

Tokar. Sí, vino con todos, el periodista, los torturadores. La traductora y yo nos miramos fijamente. Después de veinticinco años recuerdo esa mirada. Hicieron todo el circo, hablaban, comentaban, ella traducía, inspeccionaban. (...) Estuvieron un rato y se fueron. Al tiempo me llevan a trabajar a Cancillería y vuelvo a encontrarme con B.

Lewin. ¿Y te reconoció?

Tokar. No sé. Lo único que me dijo, en todos los años que trabajamos juntas, fue: “¡Qué ojos tristes que tenés!”.

Actis. Estoy segura de que siempre supo quién eras.

Tokar. Yo creo que ella supo todo desde el primer momento. Creo que siempre supo que los disfrazados de policías éramos detenidos, pero nunca dio el menor indicio al respecto (Actis et al., 2001: 181-183).⁹

⁹ Los estudios sobre la violencia estatal en el pasado reciente argentino han demostrado que las esferas de acción legal y clandestina del régimen militar se articularon e integraron en múltiples niveles (Águila, 2016;

Durante todo el tiempo que trabajaron juntas, entre Tokar y B. se mantuvo un juego de simulaciones en el que Tokar mentía sobre su identidad y ambas se comportaban como si aquel encuentro previo en la ESMA jamás hubiera acontecido. La noción de “simulación” en el contexto de la experiencia concentracionaria ha sido pensada para problematizar las relaciones entre víctimas y victimarios. En el discurso de los sobrevivientes, la “simulación” aparece como una estrategia de supervivencia por la que se mostraron dispuestos a “colaborar” en diversos grados con los marinos para convencerlos de su supuesta “recuperación”, cuando en realidad buscaban ganar tiempo y mejorar sus condiciones de vida dentro del CCD. Esa categoría fue luego analizada desde el ensayo histórico como un intento por parte de los sobrevivientes de legitimar sus comportamientos durante el cautiverio y de explicar las relaciones allí entabladas con los victimarios en clave de una forma sutil de resistencia (Longoni, 2007). No obstante, en la experiencia de las mujeres que cumplieron tareas en la Cancillería, la entrada en escena de personas ajenas al plan represivo implicó una forma de simulación de naturaleza distinta, ya no como una acción voluntaria y resistente sino como una obligación de falsear sus identidades impuesta por los marinos en un espacio de sociabilidad en el “afuera” del CCD, donde la producción de vínculos como el de Tokar y B. no podía transcurrir por fuera de la mediatización del poder concentracionario.

Sin embargo, esto no significaba que la irrupción de esas dinámicas del “afuera” en la experiencia concentracionaria fuera tan solo decodificada por las prisioneras como un elemento destructivo y desquiciante, sino que también –y al mismo tiempo– se interpretaba como una posibilidad de construir vínculos diferentes a los que tenían lugar dentro de la ESMA. El contacto con la gente de la Cancillería les ofrecía un punto de

D’Antonio, 2016; Garaño, 2008). Así es como una detenida ilegal y una funcionaria de un ministerio, con cargo en un área tan sensible como la de las relaciones exteriores, primero se encuentran adentro de un centro clandestino de detención, en un operativo de engaño montado por represores que llevan consigo a un periodista extranjero, y que dicen trabajar en una campaña de información que la dictadura había lanzado por decreto; y después vuelven a encontrarse como “compañeras” en el propio ministerio, donde una cumple con sus tareas como asesora de prensa y la otra con el trabajo forzado que se le impone en el cautiverio clandestino.





fuga respecto del horror del “adentro”, en la medida en que les exhibía a las víctimas un horizonte más allá del CCD; una expectativa de supervivencia. Tokar recuerda, de hecho, su empeño en “trabajar” las relaciones con sus “compañeros” de oficina como una vía para evadirse de la experiencia ominosa del cautiverio:

Empecé a trabajar la relación con los compañeros. Era tal mi necesidad de despegar de lo otro que si yo me quedaba siempre al lado de la gente del “mini staff” era siempre más de lo mismo. Así que empecé a trabajar mi vínculo con la gente común. Y creo que logré vínculos fuertes y que perduraron. De esa forma fue pasando el tiempo (Testimonio de Beatriz Elisa Tokar en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2001).

El acercamiento a sus “compañeros” del Palacio San Martín implicaba una búsqueda constante de asimilarse a ellos y de desarrollar vínculos que la colocaran más cerca de una situación de futura libertad. Ese deseo de generar relaciones distintas a las que se configuraban en el “adentro” del CCD podía apuntar incluso a los represores:

Tokar. Obviamente la relación de poder que tenían los marinos con nosotras era distinta de la que tenían con el resto del plantel de esa Dirección de Cancillería. Para ellos eran sus jefes, que era lo que yo quería lograr; pero para mí eran también mis torturadores. No puedo olvidar que mi primer “jefe” ahí adentro fue el “Duque” (Francis Whamond), mi torturador (Actis et al., 2001: 139-141).¹⁰

En ese “querer lograr” un vínculo de nuevo tipo con su torturador como un canal para “despegarse” del cautiverio se jugaba el carácter ambiguo y dual que definía al “proceso de recuperación” en la ESMA: aun cuando el sometimiento de las secuestradas al poder de sus “responsa-

¹⁰ Además de Jorge “Tigre” Acosta, jefe de inteligencia del GT, el represor Francis “Duque” Whamond aparece en los relatos de los sobrevivientes como uno de los personajes clave en la creación y el experimento del “proceso de recuperación” de prisioneros. Los testimonios coinciden en que, durante 1978, Francis Whamond tuvo presencia cotidiana en la Cancillería, aunque no se ha recuperado ningún documento que compruebe un pase formal suyo al ministerio.

bles” del GT en la Cancillería era total y se sostenía en la amenaza de muerte, la idea de entablar un tipo de relación “normal” con sus victimarios que las salvara del aniquilamiento aparecía como un camino posible. Y esa condición no sólo las afectaba a ellas, sino que además producía un efecto en las subjetividades de otros prisioneros y prisioneras incorporados al “proceso de recuperación” que permanecían en el “adentro” del CCD. Según Tokar, cuando los marinos le informaron que la habían designado para cumplir tareas en la Cancillería, ella lo conversó con algunos de sus compañeros referentes de la “Pecera”:

Me acuerdo que lo charlé con Vicky (Graciela Daleo), con el Gordo (Andrés Castillo), y ellos me dijeron que sí, que era un paso más adelante. Si no me equivoco el comentario fue: ‘Andá porque eso abre puertas para que nos podamos ir nosotros también’. Si yo me portaba bien, por ahí daba pie a que otros compañeros se fueran en las mismas condiciones (Testimonio de Beatriz Elisa Tokar en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2001).

Una buena parte de las tareas intelectuales de los prisioneros y prisioneras integrados al “proceso de recuperación” se destinaba a nutrir un triángulo de circulación de información que tenía como sus vértices al Palacio San Martín, al Centro Piloto de París y a la “Pecera” en la ESMA (Fernández Barrio y González Tizón, 2020). Para los secuestrados involucrados en ese circuito, el hecho de que un grupo de compañeras cumpliera sus trabajos de manera permanente en el “afuera” del CCD abría la expectativa de que los marinos pensarán en mantenerlos con vida y, eventualmente, en liberarlos. La presencia de algunas secuestradas en la Cancillería dinamizaba la forma en que estos prisioneros y prisioneras participaban del “proceso de recuperación”, con la sobrevivencia al cautiverio clandestino como un horizonte posible que, a su vez, alimentaba la “productividad” de su trabajo para exhibirles a los marinos los progresos en su supuesta “recuperación”.

Tanto Vieyra como Tokar habían sido integradas a lo que los repre-





sores del GT de la ESMA denominaron como un “staff” de prisioneros y prisioneras que componía el grupo mayoritario entre los secuestrados incorporados al “proceso de recuperación”. La “Pecera” fue el ámbito principal de las tareas forzadas que estos secuestrados cumplieron dentro del CCD. En el relato de los sobrevivientes, el “staff” suele describirse como un grupo que prestaba una “colaboración” limitada con los represores que, en realidad, tenía por objetivo mejorar las condiciones de vida en el cautiverio y salvar vidas de compañeros a los que procuraban sumar al grupo. Además del “staff”, la conducción del GT de la ESMA había definido otro grupo de prisioneros y prisioneras, el “mini staff”, mucho más reducido y con una circulación espacial distinta a la del “staff” dentro del CCD.¹¹ Los secuestrados incorporados al “mini staff” habían “caído” más tempranamente en la ESMA y, en el relato de otros sobrevivientes, suelen aparecer como un grupo que habría prestado una “colaboración” más activa y/o decisiva con los represores. La diferenciación nativa entre “staff” y “mini staff” marcó de manera definitiva el tránsito por la ESMA de prisioneros y prisioneras integrados ambos grupos, así como el proceso de (no) legitimación posterior de la voz como sobrevivientes de los incorporados al “mini staff”. Ese ha sido el caso de Graciela García, secuestrada por el GT de la ESMA en octubre de 1976 y seleccionada para realizar tareas forzadas en la DGPYD de la Cancillería desde fines de 1977. Aunque García había sido integrada al “mini staff”¹² (en virtud de lo cual, por ejemplo, ella no había tenido tránsito por la “Pecera” en la ESMA), sus

¹¹ Aunque excede los límites de este trabajo, por cierto valdría preguntarse si, en la experiencia concreta del cautiverio clandestino en la ESMA, la división entre “staff” y “mini staff” fue tan tajante y categórica como se ha reconstruido a posteriori en el relato de las víctimas. De hecho, en los propios testimonios de los sobrevivientes de la ESMA aparecen distintas versiones acerca de quiénes pertenecían exactamente al “mini staff” y cuáles eran sus contornos, e incluso zonas de solapamiento entre ese grupo y detenidos que de manera más general integraban el “proceso de recuperación”. Agradezco a Rodrigo González Tizón por sus observaciones sobre este punto.

¹² Claudia Feld y Luciana Messina (2014) han indagado sobre las dinámicas que contribuyeron a que, en la posdictadura, algunos sobrevivientes fueran considerados como testigos legitimados y otros como testigos denegados. Las acusaciones de “colaboración” hacia algunas víctimas han operado en esa dirección, lo que en definitiva es una expresión más de los efectos destructivos de largo plazo que produjo la experiencia concentracionaria. En el caso de la ESMA, la diferenciación nativa entre “staff” y “mini staff” ha sido utilizada, por ejemplo, por ciertos trabajos periodísticos, literarios o militantes para denostar la conducta de algunas víctimas, desde una posición de ajenidad total a la experiencia límite del cautiverio clandestino; o incluso por los abogados de los perpetradores para confrontar a los testimoniantes en los juicios por crímenes de lesa humani-

representaciones testimoniales sobre la experiencia en la Cancillería guardan importantes similitudes con las de Vieyra y Tokar.

La primera vez que llegó al Palacio San Martín, García fue recibida en persona por el canciller, el vicealmirante Oscar Montes. En su testimonio recuerda que los marinos se “divertían” con el hecho de que una montonera a la que ellos consideraban como una “espía” fuera a trabajar con ellos:

Quando entro estaba el canciller (Oscar) Montes y dos marinos más, (Roberto) Pérez Froio y (Eugenio) Vilardo. Me siento ahí, me habla Montes y me dice que él sabe quién soy yo, que sabe que soy una presa y que espera que yo cambie de idea, no me acuerdo muy bien, y se va. Ahí los dos marinos que estaban a cargo de la oficina de prensa de la Cancillería dicen que me tienen que poner un nombre, y me ponen Bonpland de apellido, que era un marino [N. del A.: se refiere a Aimé Bonpland], ellos se reían cuando decían todo esto (Declaración testimonial de Graciela García en el Juicio ESMA II, 2010).

Pese a que, a diferencia de Tokar, García tuvo que utilizar un apellido falso, en su caso la cuestión del nombre también puso en escena el sometimiento humillante que la vinculaba al poder de los marinos en ese espacio del “afuera” de la ESMA, donde la imposición de una falsa identidad era incluso un objeto de burla. Sin embargo, aun en esas condiciones de asedio a la subjetividad, la producción de vínculos con personas ajenas al plan represivo en el Palacio San Martín se le presentaba al mismo tiempo como una oportunidad para “tomar aire” del horror del “adentro” que ella percibía como un privilegio:

Me quedaba en la oficina hasta lo más tarde que podía, hasta las doce, una. (...) Hacía cosas, era más sano estar ahí que en la ESMA. (...) Trataba con los empleados del ministerio y con los periodistas. Era casi como un sueño: horas que vivía en otra realidad. Debo agradecer a Dios esos por esos momentos de aire que otros compañeros no tuvieron. Era un trato normal, con gente normal que hablaba de cosas normales. (...) Nosotras estábamos en carne viva, y yo creo que algunas per-





sonas ahí lo percibían. Algunos a mí me acunaron mucho. Pensá que nosotras estábamos viviendo en un campo de concentración, y afuera encontrábamos gente normal que nos daba cariño (Testimonio de Graciela García en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2007).

García fue ubicada en una pequeña oficina individual en la que, según ella, se “inventaba trabajo” para pasar el mayor tiempo posible diario en el Palacio San Martín. Realizaba tareas de prensa y propaganda internacional, entre las que se destacaban las ligadas al Mundial de Fútbol, celebrado en junio de 1978, y al Congreso Internacional del Cáncer, en octubre de ese mismo año. En la Cancillería, García se vio envuelta en una dimensión de lo cotidiano que a primera vista se le presentaba como “normal”, y que incluía desde salidas a almorzar con sus “compañeros” de oficina hasta contactos habituales con periodistas y otras personas externas al ministerio. No obstante, el trasfondo siniestro de su presencia allí permanecía latente y podía emerger de un momento a otro. En su testimonio, García relata un episodio que da cuenta de esa normalidad quebradiza. En algún momento de fines de 1978, los represores del GT les solicitaron a ella y a Tokar que salieran a “marcar” a Elena Holmberg (algo a lo que, según García, ellas pudieron negarse), una funcionaria diplomática de la Cancillería que se había enfrentado con los marinos y que pocas semanas después apareció asesinada en el río.

La generización del “proceso de recuperación” en la ESMA

Marta Álvarez fue otra de las prisioneras que realizaron trabajo forzado en la Cancillería. La secuestraron en junio de 1976 junto a su pareja, que sigue desaparecido, y en el momento de su secuestro estaba embarazada: su hijo mayor nació en el Hospital Naval durante su cautiverio. Al igual que García, Álvarez fue incorporada por el GT de la ESMA al grupo del “mini staff” de prisioneros, conformado por un grupo de entre seis y

ocho detenidos y detenidas. Aquí no nos interesa valorar qué tipo de tareas realizaban los integrantes del “mini staff” ni por qué lo hacían, pero sí hacer énfasis en otra cuestión presente en los relatos testimoniales de Álvarez y García: la percepción de que su pertenencia a ese grupo era una circunstancia aleatoria, que podía cambiar a discreción de los marinos y que no las eximía de la amenaza de la muerte. Ambas sobrevivientes recuerdan un episodio puntual que describe ese sentimiento: la desaparición de Inés Cobo, una compañera que formaba parte del mismo grupo que ellas, a quien los miembros del GT “trasladaron” un día en que todos los integrantes del “mini staff” y otros prisioneros fueron llevados al sótano de la ESMA para recibir una inyección:

Inés Cobo estaba en el camarote de al lado mío, también participaba de este grupo de recuperados, y un día a Inés la trasladaron. O sea que eso del grupo de recuperados... un día podías estar en ese grupo y al otro día no. El 5 de enero de 1977 nos bajan a todo su grupo de recuperados, como decían: al “mini staff”, nos llevan al sótano, nos ponen a todos en una hilera, tomados del hombro, íbamos nosotros y había otros compañeros, nos distribuyen en distintos boxes. (...) En un momento viene alguien que dice que nos va a dar una inyección, que es una vacuna para que no haya ningún tipo de enfermedad. Ese día Inés, que también había bajado con nosotros, fue trasladada. Después de que nos dan la inyección, le dicen al verde que nos lleve a nuestros camarotes, y subimos todos nosotros menos Inés. Y cuando yo pregunto, “falta Inés”, me dicen “no, Inés no va a subir”, y ahí nos damos cuenta de que ese día fue trasladada (Declaración testimonial de Marta Álvarez en el Juicio ESMA II, 2010).¹³

Ese carácter aparentemente aleatorio de las decisiones de los victimarios sobre la vida y la muerte de las víctimas era otro rasgo de la perversidad que atravesaba al “proceso de recuperación”. Los testimonios de varios sobrevivientes recuerdan una frase que Jorge “Tigre” Acosta,

dad.

¹³ Según el testimonio de Graciela García, Inés Cobo había sido abusada sexualmente por Acosta y luego de eso había entrado en un “estado de demencia» hasta que la desaparecieron (declaración testimonial de Gra-





líder del GT, solía repetir para explicar cómo decidía cuáles detenidos se “salvaban” y cuáles no: “Me lo dijo Jesucito”. La arbitrariedad era la apariencia que las decisiones de los represores tomaban ante los ojos de las víctimas. Sin embargo, eso no significaba que detrás de las determinaciones de los represores no existieran motivaciones con arreglo a ciertas lógicas. La cuestión de la racionalidad militar que operó detrás de la “guerra contra la subversión” ha sido pensada de manera amplia en relación con el despliegue de una doctrina castrense que asimilaba la seguridad interna del Estado a un campo de batalla de la “guerra revolucionaria”, lo que configuró un imaginario bélico en clave antisubversiva en las Fuerzas Armadas que habilitó prácticas represivas ilegales dirigidas no sólo al exterminio físico del “enemigo” sino también de sus subjetividades políticas (Pontoriero, 2017). En el caso de la ESMA, y en particular del “proceso de recuperación”, parece adecuado pensar en una articulación de múltiples racionalidades de los represores que no sólo se ligaban a los objetivos militares de la “lucha antisubversiva” sino también a otras variables, como la lógica política derivada del proyecto de Massera que influía en la dinámica del CCD.

Las motivaciones que guiaron ciertas acciones de los victimarios constituyen uno de los aspectos más difíciles de desentrañar de la experiencia del cautiverio clandestino.¹⁴ En cuanto al criterio que siguieron los marinos para que Álvarez, García, Tokar y Vieyra fueran las seleccionadas para cumplir las labores en la Cancillería, a priori cabe preguntarse por qué todas ellas fueron mujeres, aun cuando sus trayectorias previas en el “adentro” del CCD habían sido disímiles.¹⁵ Lo mismo podría decirse de

ciela García en el Juicio ESMA II, 2010).

¹⁴ Para una problematización reciente en torno a la cuestión del “pacto de silencio» de los perpetradores, véase Feld y Salvi (2019).

¹⁵ Además de que dos de ellas habían sido integradas al “staff” y dos al “mini staff”, la formación político-ideológica de cada una de ellas ligada a su status previo como militantes en la organización a la que pertenecían también era diversa. Tokar recuerda, por ejemplo, la perplejidad que le produjo que le asignaran para ciertas tareas en la ESMA, pese a que era una de las detenidas más jóvenes del CCD y, en la jerga de la militancia, una “peregila”: En una oportunidad se acerca (Héctor) Febres y me dice si sabía escribir a máquina, que me van a bajar al sótano porque tenían que hacer unos trabajos. En un momento pasó la Gaby [N. del A.: se refiere a Norma Arrostito, militante de Montoneros secuestrada en la ESMA y desaparecida] haciéndole burla a unos “verdes”, y se acerca y me dice: “Pero no lo dudes, vos bajá, si sos una peregila». Cada momento era un tema de confusión, esas cosas que pasaban ahí adentro (Declaración testimonial de Elisa Tokar en el Juicio

casi la totalidad de las víctimas que fueron empleadas como mano de obra forzada dentro de la órbita de oficinas estatales controladas por la Armada, como el Centro Piloto de París, el Ministerio de Bienestar Social y la Secretaría de Turismo.¹⁶ Esta evidencia nos sugiere que el reparto de tareas y destinos entre los prisioneros y prisioneras integrados al “proceso de recuperación” tuvo un carácter generizado. En la percepción de las sobrevivientes, de hecho, los objetivos de ese “proceso” tenían una especificidad dirigida a las mujeres:

Había diferencias entre las mujeres y los varones. Con las mujeres los marinos tuvieron algo así como un “clic” en la cabeza. Digamos, no solamente todos éramos montoneros, sino que además había mujeres montoneras. Descubrieron que la mujer pensaba, que podía empuñar un arma, hablar de armas, de política, de arte. Descubrieron... yo creo que descubrieron a la mujer, más allá de que descubrieran a la montonera. A los varones, a los compañeros, era más un trato de igual a igual, digamos, el hombre podía combatir, podía tener el arma, y con los oficiales montoneros tenían una actitud “de oficial a oficial”, había un trato así. Y las mujeres... había que encontrar en esa militante la esencia femenina. Ese era el proceso de recuperación, por lo menos con las mujeres: que empecemos a arreglarnos, a descubrir la maternidad, a tener charlas de los chicos, hacernos sacar la montonera y explotarnos como mujeres (Testimonio de Marta Álvarez en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2007).

El “proceso de recuperación” merece pensarse como un escenario particular de las múltiples formas de violencia de género que los victimarios ejercieron sobre las mujeres víctimas del cautiverio clandestino en la ESMA.¹⁷ Para las mujeres, el “proceso de recuperación” buscaba imponer formas subordinadas y domesticadas de femeneidad como condición de

ESMA II, 2010).

¹⁶ Diez de las once víctimas que cumplieron tareas para esas dependencias fueron mujeres, según relevamiento propio en base a las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes de la ESMA en el Juicio ESMA II, 2010.

¹⁷ De hecho las mujeres integrantes del “proceso” no estuvieron exentas de las diversas formas de violencia





existencia, lo que se ha interpretado como un intento de “exorcizar” la política de la vida de las detenidas (Sutton, 2015: 5).¹⁸ Es plausible que la existencia de esta idea de docilidad vinculada a lo femenino en el imaginario de los represores explicara en parte que los marinos seleccionaran casi exclusivamente a mujeres para las tareas en el “afuera” visible del CCD, y que encontraran más arriesgado que los prisioneros varones accedieran a esos ámbitos públicos. Por otro lado, podemos suponer que la mentira sobre las identidades que se operaba en un espacio como el de la Cancillería resultaba más sostenible con prisioneras mujeres, en la medida en que ciertas funciones y tareas en dichas dependencias estuvieran asociadas a personal femenino.¹⁹

Al mismo tiempo, los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA refieren el modo en que los destinos de las víctimas muchas veces estaban atados a la voluntad de los marinos que oficiaban como sus oficiales “responsables”. Desde que entraban al CCD, a todos los detenidos se les asignaba un oficial que a partir de entonces respondía ante el resto del GT por su prisionero a cargo.²⁰ Esta forma de relación entre víctimas y victimarios implicaba un dominio manifiesto de los “responsables” sobre los cuerpos de los detenidos y detenidas, que en el caso de las mujeres a veces se agudizaba hasta el punto del establecimiento de relaciones de sometimiento sexual sistemáticas y prolongadas en el tiempo. Aun cuando la sexualización no aparece en los testimonios de las sobrevivientes que pasaron por la Cancillería como un aspecto significativo de esa experien-

sexual que los represores ejercían sobre las mujeres cautivas en la ESMA (Lewin y Wornat, 2014).

¹⁸ Aunque excede el alcance de este trabajo, también valdría pensar hasta qué punto esas prácticas desubjetivantes tenían una pretensión femeneizante hacia todo el conjunto de detenidos, incluyendo a los varones, quienes también se veían alcanzados por un intento de reducción genérica por parte de los represores como forma de doblegar las identidades políticas.

¹⁹ Débora D'Antonio (2003) ha analizado el rol que algunas de las funcionarias y empleadas mujeres (no detenidas) de la DGPYD y el Centro Piloto de París tuvieron como “auxiliares del régimen», una posición subordinada que partía de la aceptación general de la legitimidad de un orden jerárquico donde la dominancia era masculina.

²⁰ Marta Álvarez refiere, por ejemplo, que la pertenencia al “staff” o al “mini staff” de los prisioneros y prisioneras dependía de qué oficiales “responsables” habían mentado su incorporación al “proceso de recuperación”: mientras que el “mini staff” habría sido conformado tempranamente por el “Tigre” Acosta, el “staff” se habría conformado de detenidos y detenidas sumados por otros oficiales del GT al “proceso” durante 1977. Según Álvarez, Acosta solía presumir de que “su” grupo de prisioneros era “posta», en relación a un supuesto mayor compromiso del “mini staff” en la colaboración con los marinos que la de los prisioneros y prisioneras a cargo

cia, es posible que la sujeción a los designios de sus oficiales “responsables” hubiera jugado un papel en su selección para cumplir tareas en el ministerio. Tokar recuerda, por ejemplo, que fue llevada a la Cancillería para desempeñarse como secretaria personal de su “responsable”:

Whamond hacía las dos tareas: director de Difusión en la Cancillería y represor y torturador en la ESMA. La situación era bastante complicada: a mí me ponen a trabajar en Difusión. Pasé a ser la secretaria de mi torturador. Alguna vez tuve que bancarme que viniera su mujer a preguntarme dónde me había comprado los vestidos que yo usaba porque decía que le gustaban. Era una situación totalmente loca (Testimonio de Beatriz Elisa Tokar en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2001).

En la imposibilidad de Tokar de negarse a esa interacción humillante con la esposa de su torturador se revelaba lo mismo que en la obligación de mentir sobre su identidad a los “compañeros” de oficina: el alcance del poder concentracionario no sólo iba más allá de las fronteras físicas del CCD, sino que además mediatizaba los vínculos interpersonales que las víctimas podían producir en el ámbito social del “afuera”. De esa forma, aunque el establecimiento de relaciones distintas a las que se entramaban en el “adentro” les abriera una vía cotidiana de fuga del horror, la irrupción de esos vínculos excepcionales en su experiencia de cautiverio resultaba profundamente destructiva para sus subjetividades políticas.

Comentarios finales

El paso por la Cancillería de Álvarez, García, Tokar y Vieyra fue una etapa de tránsito entre su cautiverio clandestino y un régimen de “libertad vigilada” en el que fueron ingresadas tiempo después. Desde mediados a fines de 1978, muchos de los prisioneros y prisioneras del “proceso de recuperación” que aún quedaban con vida fueron puestos bajo ese régimen, ya fuera en el país o en el extranjero, que funcionaba como una es-





pecie de etapa final de la detención ilegal. Muchos sobrevivientes relatan que su pasaje del CCD a la vida en el “afuera” se produjo de manera paulatina.²¹ Al principio los hacían dormir algunas noches en la ESMA y otras noches en sus casas o las de sus familiares, hasta que finalmente los enviaban en forma definitiva a sus hogares.

Sin embargo, las víctimas debían seguir reportándose a los represores, que les hacían sentir la continuidad de su vigilancia con visitas o llamados. Conocían sus domicilios y los de sus familias, incluso de aquellos que se habían exiliado a otros países. Durante la “libertad vigilada”, algunos de los prisioneros y prisioneras siguieron trabajando bajo las órdenes de los miembros del GT en distintos ámbitos. Durante 1979, Marta Álvarez cumplió tareas en la empresa Chroma, una productora audiovisual manejada por los marinos.²² Otros prisioneros y prisioneras recibieron la opción del exilio una vez que los sacaron de la ESMA. Lidia Vieyra fue una de las primeras integrantes del “proceso de recuperación” en ser liberada, en julio de 1978, y se radicó en el Reino Unido, donde continuó recibiendo llamados de los miembros del GT y “sintiéndose en la mira”: cualquier movimiento suyo que desagradara a los represores podía tener consecuencias fatales para sus compañeros aún cautivos.²³ También hubo detenidos y detenidas que, tras su salida del CCD, siguieron trabajando bajo diversos grados de “blanqueo” en dependencias estatales que la Armada controlaba o había controlado. Hacia fines de 1978, la Armada perdió el dominio de la Cancillería, que a partir de entonces quedó bajo control de la Fuerza Aérea. Poco después del traspaso entre fuerzas, Graciela García dejó de concurrir a la ESMA y, desde principios de 1979, comenzó a trabajar en el Ministerio de Bienestar Social junto a otro grupo muy reducido de detenidos y detenidas, donde permaneció hasta principios de 1983.²⁴ Elisa Tokar siguió trabajando en el Palacio San Martín in-

de otros oficiales “responsables” (testimonio de Marta Álvarez en el Archivo Oral de Memoria Abierta, 2007).
²¹ Para una aproximación a la cuestión de la “reparación» de víctimas de los CCD durante la última dictadura militar, véase Lampasona (2020).
²² Declaración testimonial de Marta Álvarez en el Juicio ESMA II, 2010.
²³ Declaración testimonial de Lidia Vieyra en el Juicio ESMA II, 2010.

cluso después de la salida del GT de la Cancillería, bajo la gestión de los comederos y con el cobro de un sueldo pero sin nombramiento legal, hasta fines de 1980.²⁵

Para las cuatro mujeres que cumplieron tareas en la Cancillería, los meses en el Palacio San Martín constituyeron una etapa del cautiverio clandestino que se reveló especialmente compleja y multifacética. Las prisioneras participaron de una configuración de relaciones sociales en un espacio del “afuera” del CCD que no existía ni podía existir en el “adentro”. Al desplazamiento espacial del cautiverio clandestino se sumó, en su caso, una modulación sensible respecto de las relaciones establecidas para los cautivos en la ESMA, cuya singularidad fue la producción de vínculos interpersonales con personas ajenas al plan represivo. En las oficinas del Palacio San Martín, las prisioneras se vieron envueltas en una dinámica cotidiana que se les presentaba bajo una apariencia de “normalidad” y de funcionamiento relativamente autónomo respecto de la función represiva principal del CCD. Sin embargo, hemos visto cómo en la Cancillería se operaba sobre ellas el mismo sistema de peligro y amenaza que en el “adentro” de la ESMA. Cada noche, cuando volvían a llevarlas a dormir al CCD, las detenidas comprobaban que el dominio de los represores sobre sus cuerpos seguía siendo absoluto.

La obligación de performatizar una falsa identidad frente a sus “compañeros” de oficina aparece en las representaciones testimoniales de las víctimas como una condición desintegradora y destructiva para sus subjetividades, en la medida en que tensionaba la percepción de estar cautivas incluso cuando cumplían tareas en un espacio exterior a la ESMA. En ese juego cotidiano de simulaciones se materializaba la sujeción extrema de las prisioneras al poder concentracionario, que no sólo mostraba su capacidad de ampliar las fronteras físicas del CCD sino además de mediatizar por completo las relaciones sociales que las prisioneras entablaban en el “afuera”. En este sentido, la experiencia excepcional de estas

²⁴ Declaración testimonial de Graciela García en el Juicio ESMA II, 2010.

²⁵ Declaración testimonial de Elisa Tokar en el Juicio ESMA II, 2010.





mujeres durante el cautiverio revelaba una potencia del dispositivo desaparecedor que se extendía más allá de los vínculos con los victimarios y entre las propias víctimas, y que ponía socialmente en acto la ambigüedad del “proceso de recuperación” en la ESMA.

Sin embargo, esa experiencia excepcional no puede interpretarse tan solo en clave de destrucción subjetiva. Para las prisioneras, la cotidianidad en la Cancillería representaba al mismo tiempo una vía de escape de la ominosidad del “adentro”, una expectativa de sobrevivencia y una mejora objetiva de las condiciones materiales de su cautiverio; y eso no sólo tenía un efecto en sus propias subjetividades sino también en las percepciones de los demás detenidos y detenidas integrados al “proceso de recuperación”, para quienes la presencia de compañeras en un espacio público y visible como el ministerio también abría un horizonte más allá del CCD y era interpretado como “un paso más” hacia una futura liberación. En ese punto el “proceso de recuperación” mostraba toda su perversidad: para las víctimas, el sometimiento al poder de los victimarios aparecía como una vía para intentar salvarse del aniquilamiento.

Queda pendiente seguir indagando acerca de las racionalidades y motivaciones que guiaron las decisiones de los represores en torno a la organización del cautiverio, los destinos de las víctimas y, en particular, el “proceso de recuperación” en la ESMA. Aquí hemos trazado algunos interrogantes e ideas preliminares acerca del carácter generizado de ese “proceso”, cuyo sentido no fue unívoco y tuvo especificidades dirigidas a las prisioneras mujeres. Sabemos que los procesos analizados carecen de representatividad cuantitativa en términos de cuál fue la “regla” general de la experiencia concentracionaria para detenidos y detenidas en otros CCD de Argentina e incluso en la propia ESMA. Sin embargo, creemos que el abordaje desde la investigación histórica de experiencias singulares como las de Vieyra, Tokar, García y Álvarez puede contribuir a una comprensión social más profunda de la naturaleza del terrorismo de Estado, cuyo repertorio de violencia no se agotaba en el exterminio físico, aunque finalmente se sostenía en él.

Bibliografía

Actis, Munú et al. (2001). *Ese infierno. Conversaciones de cinco mujeres sobrevivientes de la ESMA*. Buenos Aires: Sudamericana.

Águila, G. (2016). Las agencias estatales como objeto de investigación: a propósito del Ejército y sus prácticas represivas en el ámbito de Rosario. Ponencia presentada en las II Jornadas de Trabajo de la Red de Estudios sobre Represión y Violencia Política (RER), Buenos Aires, 2016.

Álvarez, V. (2015). "Género y violencia: memorias de la represión sobre los cuerpos de las mujeres durante la última dictadura militar argentina". *Nomadías*, nº 19, pp. 63-83. Santiago de Chile.

Barrancos, D. (2008). *Mujeres, entre la casa y la plaza*. Buenos Aires: Sudamericana.

Canelo, P. (2016). *El Proceso en su laberinto*. Buenos Aires: Prometeo.

Calveiro, P. (1998). *Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.

D'Antonio, D. (2016). *La prisión en los años setenta: historia, género y política*. Buenos Aires: Biblos.

_____ (2003). Mujeres, complicidad y Estado terrorista. En *Estudios críticos sobre Historia Reciente* (Parte IV, Cuaderno de trabajo nº 33). Buenos Aires: CCC.

Feld, C. (2019). "El 'adentro' y el 'afuera' durante el cautiverio en la ESMA. Apuntes para repensar la desaparición forzada de personas". *Sociohistórica*, nº 44. La Plata.

Feld, C.; Franco, M. (2019). "Las tramas de la destrucción: prácticas, vínculos e interacciones en el cautiverio clandestino de la ESMA". *Quinto Sol*, vol. 23 (nº 3), pp. 1-21. Santa Rosa.

Feld, C.; Messina, L. (2014). "En torno a la palabra testimonial de los sobrevivientes: testigos legitimados y denegados de los centros clandestinos de detención en Argentina". *Tramas. Subjetividad y procesos sociales*, nº 41, pp. 43-77. Ciudad de México.





Feld, C.; Salvi, V. (Eds.) (2019). *Las voces de la represión. Declaraciones de perpetradores de la dictadura argentina*. Buenos Aires: Miño y Dávila.

Fernández Barrio, F.; González Tizón, R. (2020). “De la ESMA a Francia: hacia una reconstrucción histórica del Centro Piloto de París (1977-1979)”. *Folia Histórica del Nordeste*, nº 28, pp. 99-134. Resistencia.

Garaño, S. (2010). “El ‘tratamiento penitenciario’ y su dimensión productiva de identidades entre los presos políticos (1974-1983)”. *Iberoamericana*, año 10 (nº 40), pp. 113-130.

_____ (2008). “Los pabellones de la muerte de la Unidad 9 de La Plata”, *Entre pasados. Revista de Historia*, año 17 (nº 34), pp. 33-53. Buenos Aires.

Lampasona, J. (2020). “(Re)apariciones: los sobrevivientes salen a la escena pública”. *Revista Mexicana de Sociología*, vol. 82, pp. 501-527. Ciudad de México.

Lampasona, J. (2013). “Desaparición forzada en Argentina: entre la desaparición y la sobrevida. O sobre la ‘regla’ y la ‘excepción’ en el despliegue de la tecnología del poder genocida”. *Aletheia*, vol. 6 (nº 3), pp. 1-20. La Plata.

Lewin, M.; Wornat, O. (2014). *Putas y guerrilleras*. Buenos Aires: Planeta.

Longoni, A. (2007). *Traiciones. La figura del traidor en los relatos acerca de los sobrevivientes de la represión*. Buenos Aires: Norma.

Pontoriero, E. (2017). “Excepcionalidad jurídica y contrainsurgencia: claves para pensar la racionalidad militar en los inicios del terror de Estado en Argentina (1973-1976)”. *Páginas*, año 9 (nº 19). Rosario.

Sutton, B. (2015). “Terror, testimonio y transmisión: voces de mujeres sobrevivientes de centros clandestinos de detención en Argentina (1976-1983)”. *Mora*, nº 21, pp. 5-23. Buenos Aires.

Uriarte, C. (1992). *Almirante Cero. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera*. Buenos Aires: Planeta.



Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Teoría económica del conflicto: un análisis crítico desde la reincorporación de las FARC

Economic theory of conflict: critical analysis since the FARC reincorporation.

Jorge Armando Cañón Niño*

*Recibido: 24 de abril de 2020
Aceptado: 20 de octubre de 2020*

Resumen: En este artículo se presenta el debate acerca de las causas y orígenes del conflicto entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC EP). Se destacan las llamadas causas objetivas y subjetivas del conflicto, de manera sucinta y desde el punto de vista de los autores especialistas en el tema. De estas discusiones teóricas y empíricas, se estudia a profundidad el carácter subjetivo del conflicto y la problemática que se plantea en la literatura económica acerca del tema; del cambio de los orígenes políticos de la guerrilla en las reclamaciones agrarias, hacia los factores económicos y la llamada “depredación de los recursos” en la maximización del beneficio de los actores armados, como determinantes de la prolongación del conflicto colombiano. El artículo termina contrastando la construcción de los supuestos de estas teorías con la realidad práctica presentada en el proceso de Reincorporación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Palabras clave: Teoría económica del conflicto, depredación de recursos, proceso de paz en Colombia, FARC, historia del conflicto armado colombiano.

Abstract: This paper presents the discussion about the causes and origins of the conflict between the Colombian state and the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC EP). The so-called objective and subjective causes of the conflict are highlighted, succinctly and from the point of view of the specialist authors on the topic. From these theoretical and empirical discussions, the subjective nature and the problems that arise in the economic literatura on the topic are studied in depth; from change in the political origins of the guerrilla in the agrarian claims, to economic factors and the so-called “predation of resources” in utility maximization of armedactors, as determinants of the prolongation of the Colombian conflict. The paper ends by contrasting the cons-

* Economista de la Universidad Nacional de Colombia. Estudiante de maestría en Sociología y asistente docente (en calidad de becario) de la asignatura Economía Agraria, en Universidad Nacional de Colombia. jacannon@unal.edu.co



struction of the assumptions of these theories whit the practical reality presented in the Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reintegration process.

Key words: Economic theory of conflict, resource predation, peace process in Colombia, FARC, history of the Colombian conflict.

Introducción

En este artículo se pretende discutir acerca de la teoría económica del conflicto y de que tan pertinentes son los análisis cuantitativos en los estudios del conflicto colombiano, ya que parten de supuestos fuertes sobre el comportamiento y la interacción de los actores que participan en el conflicto armado colombiano, específicamente, el estudio se va a centrar en el proceso histórico que ha emprendido la organización “Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo- Ejército del Pueblo” (FARC-EP) para detallar y comparar las predicciones y especulaciones teóricas con el caso práctico. Las discusiones acerca del conflicto armado colombiano son abundantes y tienen un sinfin de perspectivas, que analizan desde las causas y los factores que hacen que persistan las confrontaciones armadas, hasta las consecuencias y secuelas de la violencia histórica de nuestro país; en el presente escrito se aborda el tema desde las posibles explicaciones al origen y persistencia del conflicto.

En el contexto actual, pasamos por un proceso de paz reciente, del estado colombiano con el grupo de las FARC EP, la guerrilla más antigua del conflicto interno colombiano, para poder discutir los puntos más relevantes del conflicto en la mesa de dialogo que se estableció en la Habana (Cuba) se decidió por parte de las partes negociantes, designar un grupo de académicos quienes conformaron la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), quienes presentaron un informe acerca las dinámicas históricas del conflicto con el fin de aclarar las discusiones acerca del origen y persistencia de este.

Este informe presentado por la CHCV es la bibliografía especializada

en conflicto más reciente y con mayor esfuerzo expuesta por la comunidad académica acerca de este tema, y allí se condensan los principales debates, enfoques y teorías acerca del conflicto armado colombiano. El ensayo va a partir de una ilustración de las discusiones presentadas en la CHCV, haciendo énfasis en los dos relatores de los doce ensayos presentados: Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo, y en los ensayos mismos. Posterior a esto, se va a ilustrar un debate central, sobre las causas objetivas y subjetivas del conflicto armado, que a su vez lleva implícitas otras discusiones como: los orígenes del conflicto, las causas y factores de persistencia; es decir, es uno de los temas más relevantes presentados por los académicos acerca del conflicto. Una de las tesis que subyacen en este marco, es la de la teoría económica del conflicto, ya que los autores de las causas subjetivas del conflicto, encuentran allí un apoyo teórico.

Se va a discutir a profundidad el tema de la teoría económica del conflicto, esta teoría es explícita en uno de los ensayos: el de Jairo Estrada, pero está implícita en las discusiones de todo el informe, sobre todo en los argumentos presentados por los autores de las causas subjetivas del conflicto. Una vez se identifique el contexto y argumentos de la teoría económica del conflicto, herramienta usada por algunos autores, se van a estudiar a fondo sus principales exponentes, sus argumentos y fundamentos, para finalmente debatirla en el marco del tránsito político de las FARC, de una lucha armada a una lucha civil y política, tomando algunas cifras que se han presentado en el proceso de reincorporación posterior a los acuerdos de paz firmados en el 2016 y hasta el 2019, contemplando un periodo de estudio de 3 años.

La importancia de este estudio radica en que, hasta ahora los análisis teóricos son especulativos y no tienen en cuenta la perspectiva de los actores directos: para este caso los miembros de la guerrilla de las FARC. En la actualidad podemos estudiar el comportamiento que han tenido estos de cara a la opinión pública y podemos contrastar estas acciones con las que predecían las teorías económicas del conflicto.





Principales debates del informe de CHCV¹

Existen gran variedad de debates académicos acerca del conflicto armado, que a su vez inciden en la opinión pública y la forma como la sociedad Colombia ve el conflicto y la negociación con la ex guerrilla de las FARC, en el informe presentado en la mesa de negociación de la Habana, que involucra dicha organización y el estado colombiano, se mencionan estos debates. Son tan amplias las interpretaciones, que los dos relatores: Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo, enfocan las discusiones de manera diferente. A continuación, vamos a analizar cuáles son las discusiones más relevantes de este informe, para obtener un panorama mínimo de que es, o fue por lo menos con las FARC, el conflicto colombiano. En primer lugar, analizamos el informe presentado por Pizarro como relator de los demás ensayos.

Pizarro (2015) nos menciona de manera resumida lo principales debates de los 12 académicos de la comisión histórica del conflicto y sus víctimas: en primer lugar, está la discusión sobre el origen temporal, menciona que discutir este origen es discutir las causas mismas del conflicto, de allí se desprenden tres posibles enfoques; origen agrario en los años '20-'30, origen en la violencia política de los '50, o la etapa posterior al frente nacional y la oleada guerrillera en Latinoamérica producto del triunfo de la revolución cubana en el '59. Plantea que existen continuidades y rupturas en estos tres procesos.

En segundo lugar, está la caracterización del conflicto, en el que llega al conceso que es "un conflicto armado interno" de larga prolongación y de lucha irregular. A partir del primer punto se desprende otro debate central en el esclarecimiento de las dinámicas históricas del conflicto; las causas objetivas o subjetivas de este, se llega a la conclusión que

¹ En el informe presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas para la contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia, se presentan 12 ensayos con diferentes perspectivas, los encargados de la relatoría, Eduardo Pizarro y Víctor Moncayo, resumen las principales discusiones y establecen los posibles encuentros y desencuentros de los ensayistas desde diferentes enfoques. En esta sección se presenta un resumen de las relatorías para ilustrar las principales discusiones.

existen causas estructurales del conflicto como: la estructura agraria, la pobreza, desigualdad económica y política, violencia política, etc. y factores subjetivos o de la naturaleza de los actores como: motivaciones políticas o ideológicas; esta discusión parte del origen causal del conflicto: la violencia agraria, política o la influencia comunista sobre el país.

Pizarro (2015) opta por discutir los factores que hacen que persista el conflicto, llega a un punto importante y que se relaciona directamente con la discusión de las causas del conflicto (objetivas vs subjetivas) y es la forma de financiación, en el contexto de la estructura económica desigual y la exclusión política. Finalmente caracteriza los principales impactos sobre la sociedad colombiana y categoriza sus víctimas.

El otro relator, Víctor Moncayo, propone los siguientes temas de discusión: al igual que Pizarro, Moncayo (2015) expone en primer lugar la discusión sobre los orígenes y causalidades. El autor resalta varias posturas de los ensayistas en las que se encuentran: las causas objetivas del conflicto, las condiciones sociales, etc. como factores explicativos, sin excluir la visión subjetiva, pero con énfasis en la estructura; por otro lado, están las visiones que se centran en la visión subjetiva de los actores, la cual tiene varias vertientes; la política que propende una transformación por medio de la violencia, y la económica que hace énfasis en el aprovechamiento de recursos por parte de los actores armados, en esta última es que vamos a insistir más adelante.

El segundo punto de debate, que resalta el relator, es insurgencia y contrainsurgencia, es decir, un movimiento que va en contra del orden establecido y quiere su transformación, y su reacción por parte del orden establecido pretendiendo eliminar la contradicción, cabe resaltar que hay autores que entienden la insurgencia como un factor subversivo dadas las condiciones sociales, y otros que niegan esta posibilidad asegurando que existen factores económicos para que los insurgentes se mantengan en armas.

Luego, el relator resalta la importancia de las comprensiones históricas más allá de los debates teóricos, y es que la mayoría de informes





se centran en discusiones abstractas y enfoques reducidos, limitando la capacidad de comprensión de las realidades territoriales esenciales en el conflicto. Un tema que se desprende inmediatamente del anterior es la formación del estado en Colombia, los traumatismos que sufre una sociedad en la consolidación de un estado en clave moderna, en donde se desatan conflictos territoriales.

Luego, Moncayo (2015) resalta el carácter económico y también de allí relaciona factores conflictivos en las etapas de transición del modelo capitalista. Las condiciones en la globalización hacen que se reconfigure el conflicto en varios sentidos, un elemento importante es la aparición de nuevas formas de financiación del conflicto como el narcotráfico, en donde van a reñir explicaciones de causas objetivas, que argumentan que se aumentó la desigualdad y otros factores conflictivos; y la visión desde la elección racional (subjetiva) que argumenta que los incentivos de las economías ilícitas, desdibujan los intereses políticos de la insurgencia.

En este mapa de explicaciones teóricas de conflicto podemos resumir y comprimir los principales debates académicos acerca del fenómeno a tratar en la mesa de negociaciones en la Habana, a partir de las relatorías de Pizarro (2015) y Moncayo (2015). Van a sobresalir tres componentes explicativos bastante repetidos en las relatorías y que son interés de este ensayo:

1. Las causas de la estructura económica: la desigualdad, la pobreza, la conflictividad agraria, etc.
2. Las causas sobre exclusión política como la violencia bipartidista y su intensificación dados los hechos del Bogotazo;
3. Los factores subjetivos como: los discursos comunistas, las revoluciones de Cuba y Nicaragua y la degradación de los ideales revolucionarios por las formas de financiación como el narcotráfico y el secuestro.

Para cada factor explicativo corresponde un origen en la conformación del conflicto colombiano: los años 20-30 para la explicación agraria, los '50 para la explicación sobre la violencia política y los '60 para los factores subjetivos e influencias revolucionarias. Los autores no tienen pro-

blema en aceptar la existencia de estos tres componentes, lo que es materia de discusión, es la aparición de las FARC (y otras guerrillas) y el factor determinante para este hecho. Para cuestión de análisis, se van a resaltar algunos ensayos que van en la vía de las causas objetivas, como la explicación del origen agrario y económico, la exclusión política, etc. Y otros que tienden a las explicaciones subjetivas de ideales revolucionarios y elección racional de agentes económicos.

Algunas menciones a los factores objetivos del conflicto

Dentro de las causas o factores objetivos en la explicación del conflicto, se resaltan: la formación agraria y hacendaria del país, la violencia bipartidista, la exclusión y desigualdad social, la pobreza, la violencia política, debilidad del estado, entre otros. A manera de ilustración vamos a mencionar algunas notas de los autores de los informes de la CHCV. Al respecto Molano señala que:

El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el enriquecimiento desbordado de EE. UU. después de la Primera Guerra Mundial. (Molano, 2015: 1).

Con lo cual, de entrada, tenemos los principales factores objetivos en la aparición de violencia en el país. Uno de los aspectos es la tenencia de tierra, Fajardo analiza que:

En la formación social colombiana los grupos de poder han generado distintas modalidades de apropiación de los recursos y de control de su población, separando a las comunidades de sus tierras y territorios tradicionales y limitando el acceso a los mismos mediante procedimientos en los que se





han combinado el ejercicio sistemático de la violencia con políticas de apropiación y distribución de las tierras públicas. (Fajardo, 2015: 6).

Los factores territoriales de distribución de la tierra no son hechos aislados a los factores políticos, de hecho, encontraron representación política en la dicotomía: liberales-conservadores, el derecho a la rebelión aparece como uno de los factores que determinarían que unos hombres excluidos del medio directo de producción: la tierra, encontrarán apoyo político en algunos partidos afines a la repartición de esta, como el liberal y el comunista; y los terratenientes se identificaran con las ideas conservadoras. Las oportunidades de representación política se vieron opacadas por la oleada de violencia que se desató en el contexto bipartidista, la cual se escalaría, al punto de desatar un conflicto de grandes magnitudes como el colombiano. Pécaut señala un punto de ruptura con el conflicto agrario y hace énfasis en la violencia política:

Veamos ahora la fase de la "Violencia". Sin duda, ésta se puede interpretar parcialmente a partir de dos contextos evocados anteriormente: las estructuras agrarias que favorecen la irrupción de enfrentamientos crónicos y el modelo político y económico fundado sobre las pasiones partidistas y el mantenimiento de las desigualdades. Sin embargo, la violencia introduce una ruptura mayor... la imposibilidad teórica de que terceros partidos participen en las elecciones no es más que el complemento más visible de este cuadro...(Pécaut, 2015: 11).

Pécaut tiene una visión que intenta conciliar lo estructural con los factores subjetivos de los agentes, en una especie análisis de estructura vs actores, lo cual es interesante, ya que advierte la imposibilidad de leer el conflicto colombiano de una manera simplificada y lineal, sin embargo, hay quienes insisten en los factores subjetivos del conflicto armado colombiano, y hacen especial énfasis en la tradición cubana.

Algunas menciones a los factores subjetivos del conflicto

Si bien todos los autores coinciden en los problemas agrarios de Colombia, la violencia bipartidista y los factores problemáticos en la formación del estado colombiano, hay algunos que insisten en la influencia de la guerra fría y la vía armada, por parte de aquellos excluidos del pacto político conocido como el frente nacional, como un factor de ruptura con los procesos anteriores. En ese sentido Wills señala:

Así como Estados Unidos era el polo que influía sobre todo en el liberalismo, las izquierdas se inspiraban de varias experiencias. Para algunas corrientes, la Unión Soviética, desde su revolución triunfante a comienzos del siglo XX, representaba “El Modelo” a seguir; otros grupos miraban hacia China luego de que Mao, en 1949, condujera la Larga Marcha campesina al triunfo y desencadenara a los pocos años la Revolución Cultural. Y aún otras fuerzas pensaban que el camino foquista adoptado por las guerrillas en Cuba era el camino a tomar (Wills, 2015: 17).

Este factor subjetivo de los grupos excluidos del frente nacional, también representa un importante hecho en la conformación de las guerrillas y el conflicto contra el estado colombiano, sin duda aquí hay un nuevo matiz de análisis. Un autor que va en el mismo sentido de Wills es Jorge Giraldo quien se apoya en cifras para justificar la eficacia del frente nacional en la construcción de paz, acá aparece un elemento importante a señalar, y es el carácter cuantitativo de los estudios subjetivos del conflicto y el carácter mayoritariamente cualitativo de los análisis estructurales. Veamos un fragmento del pensamiento de Jorge Giraldo:

Los manifiestos mediante los que hicieron pública su aparición (las guerrillas) postulaban el objetivo máximo de lograr una revolución triunfante que permitiera cambiar totalmente las estructuras políticas, económicas y sociales. Para ello, estos grupos se propusieron la tarea de crear organizaciones políticas y militares modernas, siguiendo los modelos leninista de





partido y maoísta de guerrilla o el modelo castrista de partido armado, que posibilitaran iniciar en algún momento una ofensiva estratégica. Un factor nada desdeñable para la incubación armada fue el clima intelectual que justificaba el uso de la violencia (Giraldo, 2015: 8-9).

En el lado subjetivo, un discurso mucho más radical es el de Torrijos quien señala que las organizaciones insurgentes son ilegales y terroristas y que se amparan en un discurso revolucionario para justificar su lucro personal, esto desdibuja el carácter político de la insurgencia y la pone en el plano de la delincuencia:

En tal sentido, la historia del conflicto está basada en los intereses de unas organizaciones subversivas que, en procura de fortalecer sus posiciones y la lucrativa explotación ilegal de recursos escasos, se fundaron [con claros criterios de racionalidad organizacional] aprovechando las expresiones de gamonalismo, patrimonialismo y voracidad de algunas élites nacionales y regionales, así como los microvacíos estatales de poder en un país que por su estructura geocultural supone por lo menos cinco realidades regionales diversas (Torrijos, 2015: 3).

Este análisis se centra en la teoría económica del sujeto (en este caso organización) racional, quien elige de acuerdo a su interés egoísta de maximizar sus beneficios económicos. Con respecto a este último punto deseamos discutir, pero quienes nos dan una mayor claridad sobre este rema son Estrada y Duncan.

Discusión sobre la teoría económica del conflicto en la CHCV

Para discutir los elementos de la teoría económica en el conflicto, cabe resaltar que se encuentran en el lado de las explicaciones de las causas subjetivas, y que cimientan su argumento en el hecho individualista de la búsqueda de maximización de beneficio de los agentes involu-

crados en el conflicto, tal es la postura de Torrijos (2015) más hacia el lado de la criminalidad y Duncan (2015) desde el lado de la depredación de los recursos, concepto que vamos a profundizar más adelante. Quien abre el debate en el informe es Estrada quien plantea que:

Durante los últimos lustros surgieron interpretaciones del conflicto colombiano en las que se rechaza el carácter político-militar de la subversión armada y se afirma que ésta habría mutado hacia una empresa de carácter criminal, motivada esencialmente por la codicia y el afán de lucro. Con la elaboración de las tesis sobre las «nuevas guerras» por Mary Kaldor y Paul Collier, se estimularon las discusiones sobre la correlación entre conflicto y economía con el fin de introducir «la codicia y la depredación» como el fundamento para la acción de las fracciones armadas en disputa, cuyo objetivo ya no serían las reivindicaciones políticas o sociales, sino el acceso a recursos económicos o la captación de rentas. Esas fracciones operarían bajo los principios de la acción racional motivados por la codicia, rasgo que desdibujaría las razones de su lucha. (Estrada, 2015: 54).

Este debate es de suma importancia, ya que puede dar pie a interpretaciones sobre las causas del conflicto y por ende su naturaleza, generando concepciones equivocadas o acertadas de cara a lo que la opinión pública concibe del conflicto, esto es, en la generación de memoria. Además, la teoría económica del conflicto niega, de facto, el carácter histórico, político, social y estructural del conflicto armado; niega que la exclusión política y económica sea una de las causas, reduciéndolo a un problema de obtención de recursos de manera ilegal, por parte de unos agentes armados que quieren lucrarse por encima de los intereses políticos y reivindicativos que puedan tener, quien resalta que esta postura es cierta es Duncan:

Las oportunidades de inclusión estuvieron dadas tanto a comunidades como a individuos por efecto de la redistribución de recursos hacia la periferia a través de la criminalidad. Ya en la sección anterior se aludió al papel que juega el conflicto como





un medio de protección del narcotráfico que, a su vez, funciona como un medio de inclusión en los mercados globales de comunidades periféricas... (Duncan, 2015: 39-40).

Los motivos económicos se resaltan por encima de los políticos. Esta postura no es tan radical como la de Torrijos (2015) quien desconoce el carácter político y se fija solo en el económico, apoyándose en una teoría criminal del conflicto, la cual también tiene fundamentos en la teoría económica. Esta perspectiva de análisis puede ser un poco peligrosa en cuanto no comprende una explicación de carácter plural, sino que se centra en grandes teorías para explicar hechos contextuales, dejando de lado algunos procesos sociales determinantes. Este análisis económico es subjetivo, por lo que tienden a desecharse muchos de los factores estructurales. Estas teorías económicas se basan en algunos supuestos sobre el comportamiento de los agentes, argumentando que, lo que los motivan a realizar acciones es su afán de acumulación y maximización de beneficios.

El carácter general de estas teorías y su posterior aplicación a algunos casos, en forma de “leyes naturales” las hace propensas a la especulación, ya que parte de principios presupuestales, para luego encontrar (o no) explicaciones a los fenómenos sociales, es por tal razón que se deben estudiar a profundidad y determinar si son pertinentes en el análisis del conflicto colombiano, en específico del comportamiento de la organización FARC. Analicemos la teoría económica del crimen y la teoría económica del conflicto,² en principio con los autores colombianos que las adoptan y posteriormente con los primeros autores de estas, para alcanzar un mayor nivel de profundidad.

² La diferencia fundamental entre la teoría económica del crimen y la teoría económica del conflicto, es que la teoría del crimen analiza la violencia como un medio para alcanzar fines de lucro en la maximización del beneficio de algunos actores armados en cualquier contexto; mientras que la teoría del conflicto analiza la evolución de los conflictos bélicos, desde las razones políticas de los enfrentamientos, hasta la evolución de las causas, en el aprovechamiento de recursos que maximizan el beneficio de los actores en el contexto de la globalización.

Teoría económica del crimen

En los ensayos presentados por la CHCV se presentan diferentes posturas sobre el conflicto armado colombiano. Una de ellas, la de Torrijos (2015) tiene que ver con un análisis criminal sobre los actores insurgentes como las FARC, el ELN, el EPL, etc. El autor sostiene que estos grupos justifican su accionar con discursos politizados, pero de fondo existe un interés por aumentar las ganancias producto de economías ilícitas como: el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, etc. lo que pone de facto a los factores sociales e interacciones no económicas de los actores participantes en un segundo plano, también hace el mismo análisis para otros participantes del conflicto como los paramilitares, generando una explicación del enfrentamiento entre estos actores por la mera búsqueda del excedente económico, es decir los etiqueta como bandas criminales. Esta postura hace énfasis en una mejor administración de justicia como solución del conflicto, en donde los factores socio-estructurales no tienen importancia, en la literatura con respecto al tema se desataca el trabajo de Rubio (1999).

Las premisas básicas en la obra: Crimen e Impunidad: Precisiones sobre la violencia de Rubio (1999) son exactamente las mismas, y hace énfasis en una teoría general, comprobada matemáticamente con herramientas estadísticas, construyendo probabilidades alrededor de los homicidios cometidos como variable explicativa del conflicto, dejando de lado realidades territoriales como los pactos entre actores armados o el poder militar y territorial de un grupo armado que aísla los combates de ciertas zonas. Relaciona variables estructurales, como la pobreza, con los homicidios observados para determinar posibles relaciones, concluyendo que no son factores explicativos. De esta manera pretende atacar los factores políticos y sociales explicativos para el conflicto, de corte cualitativo, pero su método hace supuestos sobre los actores como el egoísmo, racionalidad en la elección y la individualidad, teniendo miles de contraejemplos para estas premisas. El autor usa algunos contraejemplos en donde “ve-





rifica” que, (probablemente) existe la no causalidad de factores estructurales sobre el conflicto, generalizando los resultados obtenidos. Hay dos aspectos que dificultan tal generalización, el carácter probabilístico del modelo, no es una certeza, y, en segundo lugar, la incapacidad de establecer relaciones de causalidad, en modelos estadísticos y probabilísticos de este corte solo se pueden establecer relaciones, sin causalidad, por tanto, no se puede hablar de causas generales o unidimensionales. Es una simplificación extrema, incluso, cuando pretende “no jerarquizar de la violencia” tomando crímenes indistintos para el modelo, pero en términos prácticos y sancionatorios, no es lo mismo un homicidio culposo que un genocidio, o un homicidio en ocasión del conflicto armado.

Las explicaciones económicas adquirieron un tinte utilitario desde sus inicios y desde la consolidación de la visión liberal utilitarista de la maximización del beneficio. Se han desarrollado teorías con estas premisas para explicar cualquier comportamiento de los actores en la sociedad. Este es el caso de una de las explicaciones del crimen, de uno de los pioneros de la economía clásica como fue Jeremy Bentham (1738-1832). Bentham (1996) analizó el crimen como un acto de elección racional sopesando los beneficios obtenidos, con los costos de ser aprehendido y la probabilidad de que ello ocurriera. Pero quien desarrolló un modelo de equilibrio general mucho más complejo con estas mismas premisas fue Gary Becker. Becker (1968) construye un modelo en donde la oferta es el papel de los delincuentes, la demanda las víctimas potenciales, y la intervención del gobierno actúa para que el equilibrio de este mercado tienda al menor crimen posible. La oferta delincuencial funciona con el mismo análisis de Bentham (la maximización del beneficio), la demanda propone un nuevo aspecto a estudiar: los mercados ilícitos y la disponibilidad de venta de las ganancias producto del crimen, la intervención pública se basa en la administración de justicia para que no se generen incentivos para los criminales, es decir que se castiguen los crímenes de acuerdo a su impacto, si un crimen muy grave tiene la misma pena de uno leve se generan incentivos para cometerlos, lo cual ya se contradice

con la no jerarquización del homicidio de Rubio (1999) teniendo en cuenta las premisas básicas de Becker.

La teoría económica del conflicto

Existe otra teoría económica que explica el conflicto propiamente dicho, es decir, teniendo en cuenta la formación histórica de conflictividad en nuestro país y los factores propios de la estructura colombiana, pero que tiene como premisa la decadencia del factor ideológico de justicia, que inicialmente plantean las guerrillas, debido a las formas de financiación a las que deben acudir para mantenerse como actor armado: narcotráfico, secuestro, extorsión, minería ilegal, etc. Este concepto se denomina: depredación de los recursos y básicamente es un paso del factor ideológico como justificación para la acumulación de beneficios en las economías de guerra y el aprovechamiento de los recursos que de allí se extraen.

El ensayo de Duncan (2015) argumenta en ese sentido. Pero un trabajo bastante destacado en este tema es: La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia de Salazar y Castillo (2001). Estos autores establecen un modelo de tipo evolutivo en teoría de juegos, para explicar el escalamiento de la violencia, además resaltan la estrategia del estado, de ignorar el factor político y dar respuesta militar a la insurgencia. El estado apuesta al crecimiento tecnológico para mejorar el carácter bélico del estado, llegando a la conclusión de que eso solo reproducirá la violencia. Los autores recomiendan crear un orden moral superior al de la insurgencia para desvirtuar su discurso de justicia, como estrategia efectiva del estado.

Según este modelo, el contexto en el que se desenvuelven los actores del conflicto es el de la globalización, lo que le ha abierto la puerta a la obtención de recursos de manera ilegal a las guerrillas y paramilitares participantes de la confrontación armada. Este factor de financiamiento





es lo que ha permitido la prolongación del conflicto. La disputa territorial es el factor determinante en el conflicto, la estrategia de los actores armados ilegales es seguridad por tributación, es decir, administran el monopolio de la violencia de un territorio y a cambio obtienen recursos para el conflicto, lo que desata enfrentamientos con los pobladores y este enfrentamiento tiene límites en el aspecto financiero, quien pueda controlar más recursos va ganando terreno en la guerra, con lo que los actores armados tienen incentivos al uso de más violencia para obtener dichos recursos.

Esta dinámica se recrea en un modelo de teoría de juegos, en donde el equilibrio entre las estrategias del estado y los actores armados, es el escalamiento de la violencia. De esta manera se justifica la elección racional de las organizaciones, en cuanto deciden aumentar los recursos para mayor control territorial y crecer en el conflicto.

Esta teoría es un poco más sustentable en el contexto colombiano, los autores proponen una salida en el cambio de estrategias de los actores; el estado no debe ignorar el carácter político de las guerrillas y apostarle al crecimiento tecnológico militar, ni se puede esperar una victoria de la insurgencia. Si no se cambian las estrategias, lo que tenemos es un callejón sin salida. Si bien esta hipótesis tiene aspectos veraces, lo discutible es que los individuos en guerra sean electores racionales y pretendan, únicamente, la maximización del beneficio, en este caso el control de mayores recursos. Además, con estas premisas se justifica la decadencia del factor ideológico de los insurgentes, cosa que no deja de ser especulativa y esconde una explicación socio-histórica. De igual modo, se pierden de vista factores importantes en la distribución del ingreso, la pobreza, la exclusión política, etc. Que no se tienen en cuenta en la solución propuesta del conflicto. Esta teoría tiene su soporte teórico en las premisas de Kaldor (2001) y Collier (2001).

Kaldor (2001) enmarca su explicación en el contexto de la globalización, plantea una dicotomía entre lo político y lo económico, en cuanto la prioridad de los actores, supervivencia o legitimidad. Cabe señalar que

esta dicotomía puede ser falsa, si una organización como las FARC tenía la capacidad para llevar a cabo las dos actividades de manera simultánea, esta discusión no deja de ser de carácter especulativo, como los supuestos que están detrás del modelo. Para llevar a cabo análisis más certeros hacen falta estudios con enfoque territorial, ya que son múltiples los factores que afectan la dinámica del conflicto de manera real. Kaldor (2001) sostiene que las guerras posteriores a la segunda guerra mundial, poseen una dinámica diferente en el marco de la globalización. En esta etapa pueden obtener mayores recursos, lo que determina nuevas tácticas. La autora establece una ruptura entre las antiguas guerras y las nuevas, por lo que el análisis para el conflicto y la organización FARC no es pertinente, recordemos que el nacimiento de esta data de los años 60 y aun no era clara una era de globalización como la actual, por tanto, no puede establecerse tal ruptura, más bien se puede hablar de transformación.

Una teoría más acorde con los argumentos planteados para el conflicto colombiano por Salazar y Castillo (2001) es la de Collier (2001). Este autor señala que los grupos rebeldes necesitan una justificación para su accionar, pero que lo que los mueve, principalmente, es la depredación de los recursos. Se habla de unas preferencias reveladas por los actores en su accionar, es decir se devela el carácter lucrativo de su lucha. Collier (2001) parte de un análisis estadístico de las guerras civiles observadas en el periodo de la apertura económica, encuentra relación del conflicto con países primario-exportadores, poco educados y con una raza claramente dominante. Para encontrar estas relaciones usó modelos económicos Logit y Probit, que establecen probabilidades, es decir que puede haber casos que no se enmarcan en esas condiciones, no son leyes generales como lo hacen parecer algunos economistas, condición suficiente para no poder negar otras posibles causas de conflictos como el colombiano. Además, la relación del conflicto con países primario-exportadores, pero no con desigualdad y pobreza, podría ser un error de multicolinealidad del modelo, las variables pobreza y desigualdad podrían estar relacionadas con la variable primario-exportador, recordemos la tesis de





Prebish (1998) que a partir de un análisis estadístico, bien riguroso, establece las dinámicas de un intercambio desigual entre países: los países-periféricos son especializados en producto (primario) y heterogéneos en ingreso (desiguales), mientras que los países centro son: diversificados en productos (industrializados) y homogéneos en ingreso (equitativos).

Uno de los desincentivos que encuentra el autor en la rebelión y el factor ideológico, es el efecto del polizón. La protesta se toma como un bien público, por lo que, si algunos miembros de la sociedad lo proveen, otros estarán incentivados a aprovecharse de él sin ofrecer ningún pago, notemos que no se sale de la lógica de la elección racional, no concibe que una persona pueda tener intereses cooperativos, además cambia el factor ideológico por el económico. Para mantener sus luchas, los rebeldes acuden a la depredación de recursos del sector primario. La guerra es por el control de los recursos, se nutren de la pobreza, en cuanto encuentran posibles combatientes a los cuales les pueden proporcionar un pago (incentivo económico, no rebelde, nótese el carácter especulativo de la propuesta). Sin embargo el autor propone que el estado no debe desconocer los factores políticos y sociales que alegan los rebeldes, ya que pueden persuadir a los rebeldes hacia la paz, que genera menos costos económicos que la guerra. Por eso es que el autor propone que, en un eventual posacuerdo, se negocien algunos descontentos del grupo, pero más en el sentido en que se mejore la estructura, para que el individuo no tenga capacidad de delinquir, o por lo menos, no tenga incentivos para ello. Se insiste en una explicación y solución económica del conflicto, escondiendo otras explicaciones menos generales y más territoriales.

Teoría económica del conflicto vs causas objetivas del conflicto vs teoría económica del crimen

La conceptualización de Masullo y Sánchez (2009): Teoría económica del conflicto vs teoría objetiva del conflicto, nos sirve para poder com-

parar las posturas que existen alrededor del conflicto, además se le añade otro aspecto de discusión, la teoría económica del crimen. En el marco de construcción de paz, los discursos son usados por diferentes actores políticos; el gobierno de Juan Manuel Santos usaba claramente el discurso de la teoría económica del conflicto y la creación de un orden moral superior, la insurgencia de las FARC se apoyaba en las causas objetivas del conflicto y existe un sector de extrema derecha: el uribismo, que alega sobre la teoría económica del crimen, etiquetando a la insurgencia como terrorista y desdibujando las fronteras que existen entre las disputas políticas y las disputas criminales. La pugna de visiones es fundamental en la construcción de paz porque determina los factores a atacar en el posacuerdo, con el fin de acabar con el conflicto por vía armada.

A partir del 2016 podemos analizar el discurso y el actuar de las FARC, ya que han salido de la clandestinidad, ya no son especulativas sus interpretaciones, sino que podemos analizar hechos efectivos y comparar el discurso con el accionar de una manera más adecuada. Podemos ver que la insurgencia toma aspectos de los trabajos de las causas objetivas del conflicto en sus reivindicaciones económicas: reforma agraria; políticas: apertura democrática; y sociales: víctimas y justicia; estos conceptos aparecieron desde los años '60 y '70, es decir, con las guerrillas mismas. Del otro lado, tenemos teorías económicas sobre el conflicto que empezaron a aparecer en los años 90's con la apertura económica y los cambios de escenario que propicio el contexto de la globalización. En la actualidad se califica a la guerrilla de alejarse de sus motivaciones iniciales por desplazarse hacia los beneficios económicos, pero vemos que aún persisten los factores estructurales del conflicto.

Masullo y Sánchez (2009) proponen que para un análisis más complejo y sin prejuicios, lo mejor es no jerarquizar una u otra causa, sino tenerlas en cuenta y tratar de identificar la solución de cada una de ellas. Es bastante perjudicial para la construcción de paz, ignorar algunos factores estudiados alrededor del conflicto, de uno y otro lado, ya que si persisten pueden prolongar la existencia de conflictos armados. La dicotomía





codicia vs agravios (Masullo y Sánchez, 2009) es una falsa disyuntiva, y de fondo esconde una u otra forma de negociar la paz: de manera urgente o de manera compleja. La manera inmediata plantea la dejación de armas y soluciones a corto plazo que tienen que ver con las garantías para los insurgentes (reincorporación), no se descartan cambios estructurales en la composición agraria y en la política, pero no es una prioridad. Una visión compleja lleva a analizar todos los posibles causales del conflicto armado y atacarlos de manera sostenida para evitar reincidencias. Podemos resumir esta discusión entre una paz positiva, construida socialmente; y una paz negativa, que solo toca temas a corto plazo y se asocia a la mera firma de unos acuerdos.

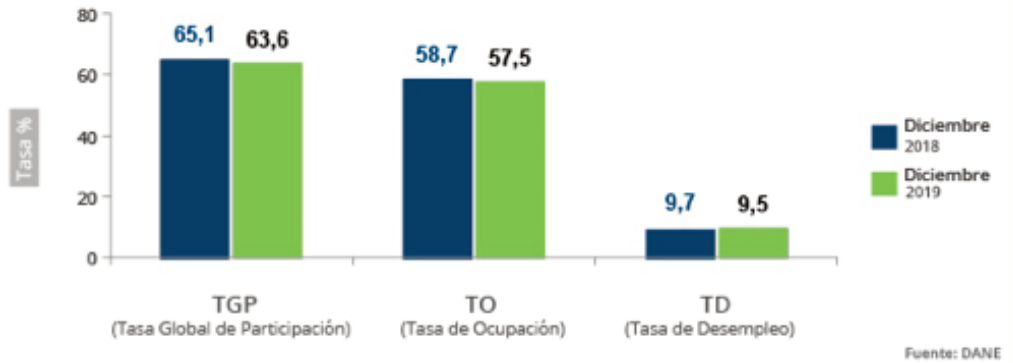
Posacuerdo y actuación efectiva de los actores

Actualmente nos encontramos en la etapa del posacuerdo, por lo menos con las FARC, lo que nos lleva a analizar la conducta de este grupo a más de tres años de la firma de los acuerdos de paz. En el camino a la construcción de paz, podemos establecer que tanto corresponden las acciones de este grupo a su discurso, si es más político o si en definitiva sirve el análisis de la elección racional. Para ello, vamos a plantear dos escenarios en donde se encuentran inmersos los excombatientes de FARC y de los cuales pueden elegir: el mercado laboral legal, entre formal e informal y el mercado laboral ilegal.

Mercado laboral legal

Para la caracterización de este escenario partimos de las cifras y las gráficas oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en lo que respecta al empleo formal e informal no delinencial:

Gráfico I: Desempleo en Colombia



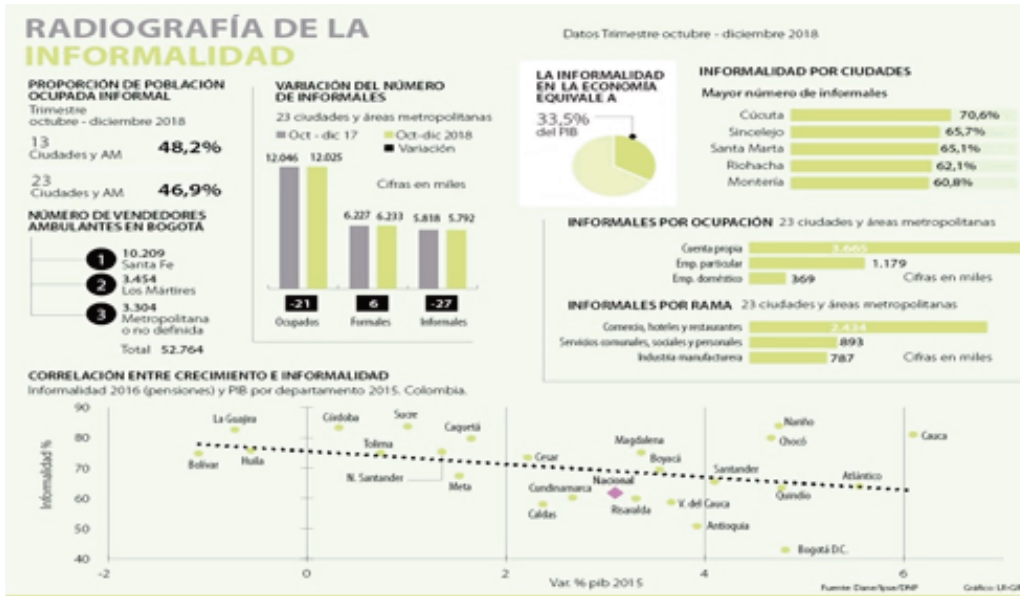
Fuente: DANE

Vemos que para unos hombres entrenados para actividades ilegales no existen muchos incentivos a optar por una vía legal, el desempleo está cerca de los dos dígitos lo cual es bastante alto, la tasa global de participación determina el tamaño de la fuerza de trabajo y la tasa de ocupación es la que en efecto nos interesa, ya que es el indicador de cuantas personas, de las que son económicamente activas, logran una ocupación real, tan solo el 57,5%.

Ahora analicemos la informalidad, si la tasa de ocupación nos dice que solo el 57,5 % de la población en edad para trabajar esta efectivamente ocupada, el panorama de la informalidad lo complementa: de ese 57,5% el 46,9 % encuentra en el empleo informal, es decir el 26,9% de la población esta empleada de manera informal y el 30,5% de manera formal, esto es, más de un cuarto del total de la población en edad para trabajar no cuenta con las garantías de seguridad social, como salud y pensión.



Gráfico II: informalidad en Colombia



Fuente: DANE

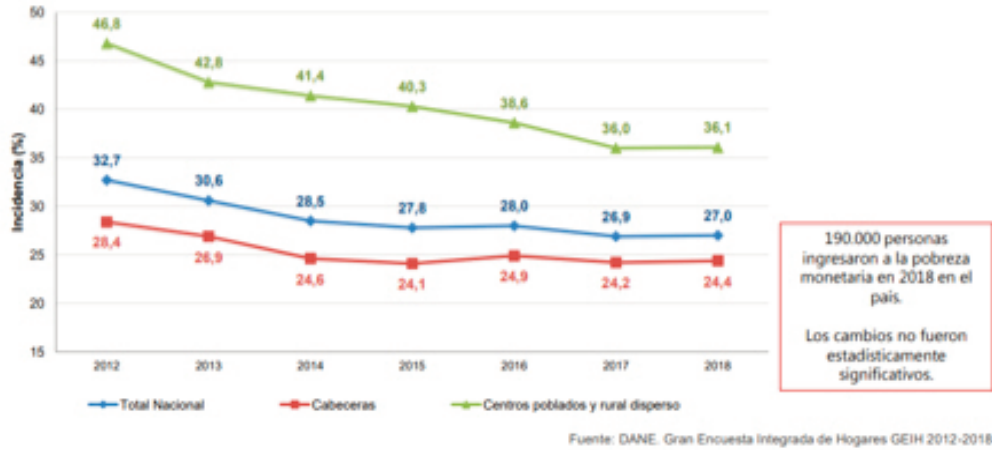
Ahora el panorama es desalentador cuando examinamos la línea de pobreza monetaria, la probabilidad de ser pobre en Colombia (en el mercado legal de empleo) es de 27% y de ser extremadamente pobre del 7,2%.

Gráfico III: línea de pobreza en Colombia



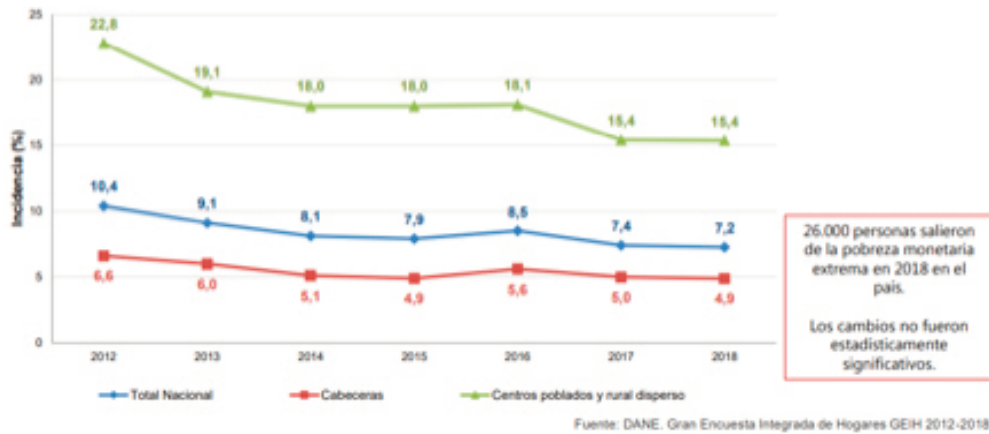
Fuente: DANE

Gráfico IV: incidencia de la pobreza monetaria en Colombia (2012-2018)



Fuente: DANE

Gráfico V: incidencia de la pobreza monetaria extrema en Colombia (2012-2018)



Fuente: DANE

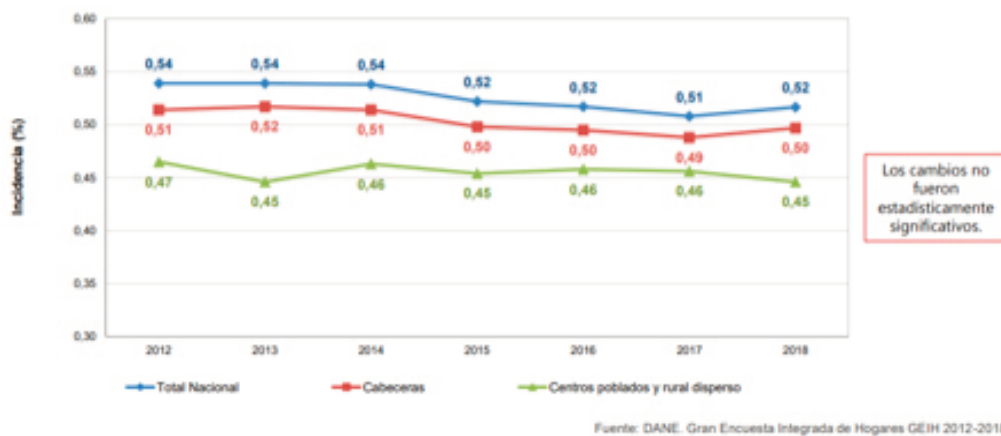
Además, la desigualdad sigue siendo uno de los rasgos característicos de la economía colombiana, este factor es uno de los mencionados





en las causas estructurales del conflicto. El índice de GINI colombiano es uno de los más altos del mundo, este índice mide la desigualdad de ingresos entre los hogares. El índice de GINI se mide en una escala de 0 a 1, siendo 0 perfecta igualdad y 1 la total desigualdad, la desigualdad en Colombia está cerca del 52% porcentaje mayor al de países como Ruanda y República del Congo. Existen grandes desincentivos para participar en el mercado legal de empleo, para unos individuos con fácil acceso al mercado ilegal de empleo.

Gráfico VI: coeficiente de gini para Colombia



Fuente: DANE

Ahora veamos qué pasa con el mercado ilegal, el otro escenario planteado en el proceso de reincorporación de las FARC, y en el cual, según las teorías económicas del crimen y del conflicto, los actores tendrían incentivos a emprender, dada su rentabilidad.

Mercado ilegal de empleo

Para poder determinar las principales dinámicas de este mercado, nos apoyamos en un concepto de Nussio (2009) quien identifica los elementos perturbadores de la paz, las posibilidades de reincidencia, en la persistencia de algunos factores que denomina spoilers, estos son: mercados ilegales, surgimiento de nuevas insurgencias, seguridad de los excombatientes, etc. Me voy a concentrar en el mercado de la cocaína y la seguridad de los excombatientes, como factores de reincidencia e incentivos para que los excombatientes opten por la vía ilegal del lucro:



Gráfico VII: cultivos de coca en Colombia



FUENTE: Observatorio de drogas de Colombia

Vemos que hay una creciente inclinación por el uso de cultivos coca, insumo básico para la producción de cocaína, en la región colombiana. Aceptemos por un instante la teoría de las preferencias reveladas propuesta por los autores de la teoría económica de la guerra, es decir, se revela la preferencia por cultivos ilícitos como forma de ingreso, es un incentivo para unos hombres formados en esta economía como los son los miembros de FARC.



El dólar se ha incrementado y eso es lo que genera el incentivo económico a la producción de cocaína y, por tanto, se incrementa la demanda de uno de sus insumos fundamentales, la hoja de coca:

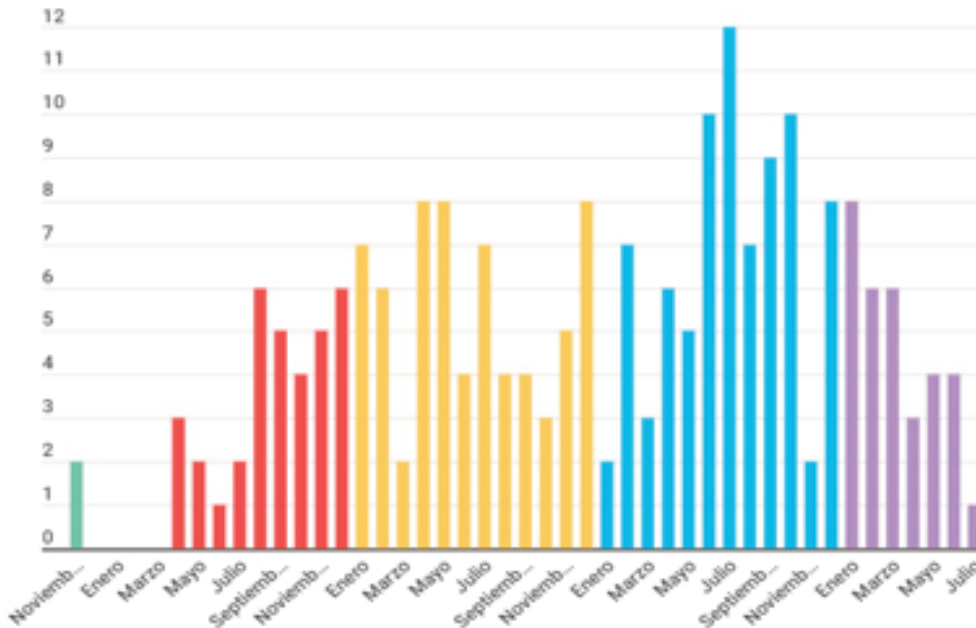
Gráfico VIII: tasa representativa del mercado para Colombia



FUENTE: Banco de la República de Colombia.

Vemos un fuerte incentivo hacia las economías ilegales que han usado los actores armados. Si la teoría de la elección fuera cierta en su totalidad, a este punto hubieran reincidido la totalidad de excombatientes de la FARC, es decir sería una ley que se cumple 100%, pero vemos que no es así. Otro factor que influye en la reincidencia es la seguridad de los excombatientes que dejaron las armas (cifras para el 2019):

Gráfico IX: asesinatos de excombatientes de la FARC



FUENTE: El tiempo, Cifras para julio del 2019.

Con este panorama se enfrentan los excombatientes de FARC, ante la posibilidad de un escenario legal y otro ilegal, con grandes incentivos para reincidir en actividades ilícitas, depredación de recursos, y con desincentivos para elegir un escenario legal. La apuesta de la reincorporación económica de los excombatientes es colectiva, a través de proyectos productivos que deben ser aprobados por el Concejo Nacional de Reincorporación, como apuesta de mantener la estructura de la organización, lo que niega de facto una postura individualista de los excombatientes de FARC, y aparece como una alternativa al panorama de desempleo ya planteado. Además, la reincorporación económica hace parte del punto 3 de lo acordado: Fin del conflicto y es el rubro que menos recibe recursos. La Contraloría General de la República de Colombia en el informe: Ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones presentado en el 2017; menciona





que: “De los cinco puntos del Acuerdo, la Reforma Rural Integral recibe 85,5% del total, drogas ilícitas 6,4%, participación política 3,3%, víctimas 3,3% y fin del conflicto 1,5%” (Contraloría, 2017). Desvirtuando un poco la teoría de la depredación de recursos por parte de los actores del proceso, los excombatientes de las FARC.

Según la Fundación Ideas para la Paz “A la fecha, se han aprobado 24 proyectos productivos colectivos y cerca de 160 individuales, y 1242 excombatientes (9.4%) han podido acceder a un proyecto” (FIP, 2019) esto para Julio del 2019. Mientras que, de los 13.049 exguerrilleros registrados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un 84% ya está recibiendo una renta básica equivalente al 90% del salario mínimo mensual vigente (FIP, 2019) es decir, no se sabe acerca de un 16% de excombatientes. Los que tienen algún registro financiero son los que se tiene certeza, han optado por una reincorporación dentro de la legalidad. Del 16% restante no se tiene certeza de sus actividades financieras, una de ellas podría ser la reincidencia, aunque existen miles de caminos posibles, por ejemplo, hay que tener en cuenta que los y las excombatientes que cuentan con empleo formal no reciben renta básica, lo cual dice todo lo contrario a la posible reincidencia, pero suponiendo (para llevar a cabo los mismos análisis con presupuestos económicos) que sea un 16% de reincidentes (la totalidad de los que no se tiene certeza), tenemos que está entre las cifras normales de los procesos de paz en el mundo según Fisas (2011) experto en proceso de negociación y posconflicto. Además, podemos decir que, solo es un 16% probable que funcionen las teorías de la elección racional, teniendo en cuenta los incentivos para tomar el camino de la ilegalidad.

Para diciembre del 2019 la Agencia para la Reincorporación y la normalización ARN, institución gubernamental que dirige el proceso de reincorporación, registró a 12948 excombatientes en proceso, es decir el 98% del total (ARN, 2019) el dato de la especulación se reduce a un 2% de excombatientes de los que no se tiene certeza, mucho menos del 16% normal de reincidencia en dichos procesos según Fisas (2011). Con esto, el cumplimiento de las teorías de elección racional para la explicación del

conflicto colombiano se reduce a un 2%, que no es estadísticamente significativo. Si los miembros de FARC se mantienen en el proceso no es precisamente porque sea una decisión racional en términos económicos, existe una voluntad política de paz.

Conclusiones

Existen diversas lecturas de lo que ha sido el conflicto armado colombiano. Existen autores que encuentran explicaciones en las denominadas causas objetivas del conflicto, de carácter estructural y con estudios de corte cualitativo, estas causas son: desigualdad social, exclusión política, pobreza, etc. Y existen otros autores que defienden una postura subjetiva, que se apoyan en el levantamiento en armas propiciada por ideales y con degradación en la depredación de recursos, estos estudios se basan en análisis de tipo cuantitativo, pero para ello deben especular sobre el comportamiento y las preferencias de los autores.

En el análisis especulativo de actores de los cuales no se tiene datos muy confiables, se deben hacer unos supuestos teóricos muy fuertes para facilitar el análisis estadístico, lo que proporciona visiones cerradas y reduccionistas de la dinámica real de los territorios colombianos que han sufrido el conflicto. Estas teorías son apoyadas por motivaciones políticas y discursos de diferentes sectores de los gobiernos nacionales, de esta manera se establece una mirada de corto plazo a las soluciones del conflicto, dejando de lado factores estructurales y acentuando la posibilidad de que se reconfiguren nuevos conflictos en nuestro territorio.

La idea de debatir uno de los cimientos de estas teorías: la elección racional, con datos reales tangibles y de los cuales no toca hacer muchos supuestos, resaltando la importancia de comprender los actores involucrados, en este caso la FARC, es poder comprender de manera más compleja el histórico del conflicto colombiano y poder formular de una mejor manera, soluciones que construyan una paz entendida en el sentido po-





sitivo, construida socialmente y en donde no se vuelvan a repetir factores violentos del pasado, que han dejado un sinnúmero de víctimas que no son cuantificables dentro de las mediciones monetarias de la economía. El llamado es a hacer estudios de carácter complejo, en donde no se excluyan de forma sistemática, las convicciones de algunos integrantes de la sociedad colombiana.

Bibliografía

ARN (2019). La reincorporación en cifras (Informe número 19). Disponible en: <http://www.reincorporacion.gov.co/es/reincorporacion/La%20Reincorporacion%20en%20cifras/Reincorporaci%C3%B3n%20en%20cifras%20-%20corte%2030112019.pdf>

Becker, G. (1968). Crimen y castigo: un enfoque económico. *W. Breit & H. Hochman (comps.), Microeconomía*, 272-297. Traducción disponible en: http://www.ebour.com.ar/ensayos_meyde2/Gary%20S.%20Becker%20-%20Crimen%20y%20Castigo.pdf

Bentham, J. (1996). *The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation*. Oxford: Clarendon Press.

Collier, P. (2001). Causas económicas de las guerras civiles y sus implicaciones para el diseño de políticas. *El Malpensante*, 30, 28-53. Disponible en: https://www.comfama.com/contenidos/servicios/Gerenciasocial/html/Cursos/Oxford/documentos%20_estudio/Paul_Collier.pdf

Contraloría General de la República (2017). Ejecución de los recursos y cumplimiento de las metas del componente para la paz del Plan Plurianual de Inversiones. (Informe al Honorable Congreso de la República). Disponible en: <https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/787219/Ejecuci%C3%B3n+de+los+recursos+y+el+cumplimiento+de+las+metas+del+componente+para+la+Paz+del+Plan+Plurianual+de+Inversiones-2017.pdf/bcf7cbb8-e623-4d3d-a6e4-aac1d519c0b3>

Duncan, G. (2015). Exclusión, Insurrección y Crimen. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Estrada, J. (2015). Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Fajardo, D. (2015). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Fundación Ideas para la Paz (2019). La reincorporación económica de los excombatientes de las FARC Retos y riesgos a futuro. *Bogotá: Fundación ideas para la paz*. Disponible en: http://ideaspaz.org/media/website/FIP_NE_Reincorporacion.pdf

Fisas, V. (2011). Introducción al Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de excombatientes. *Quaderns de Construcció de Pau*, 24, 1-20. Disponible en: <https://novact.org/wp-content/uploads/2012/09/Introducci%C3%B3n-al-desarme-desmovilizaci%C3%B3n-y-reintegraci%C3%B3n-DDR-de-excombatientes-por-Vicen%C3%A7-Fisas.pdf>

Giraldo, J. (2015). Política y guerra sin compasión. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Kaldor, M. (2001). *Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global*, Kriterion/Tusquets: Barcelona.

Masullo, J. y Sánchez, L. (2009). El conflicto colombiano como depredación de recursos. Una visión sin futuro. *V Jornadas de Jóvenes Investigadores*. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de





Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Disponible en: <https://www.academica.org/000-089/73.pdf>

Molano, A. (2015). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.* Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Moncayo, V. (2015). Hacia la verdad del conflicto: insurgencia guerrillera y orden social vigente. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.* Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Nussio, E. (2009). ¿Reincidir o no? Conceptos de la literatura internacional aplicados al caso de desarme, desmovilización y reintegración de las Autodefensas Unidas de Colombia. *Pensamiento jurídico*, (26), 213-236. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/peju/article/view/36565>

Pécaut, D. (2015). Una lucha armada al servicio del statu quo social y político. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.* Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Pizarro, E. (2015). Una lectura múltiple y pluralista de la historia. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas.* Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Prebisch, R. (1998). El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas. *En: Cincuenta años del pensamiento de la CEPAL: textos seleccionados-Santiago: Fondo de Cultura Económica/CEPAL, 1998-v. 1, p. 63-129.* Disponible en: <https://repositorio.cepal.org/handle/11362/2039>

Rubio, M. (1999). *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*, Bogotá: Tercer Mundo.

Salazar, B. y Castillo, M. (2001) *La Hora de los Dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*, Bogotá: CIDSE/CEREC.

Torrijos, V. (2015). Cartografía del conflicto: Pautas interpretativas sobre la evolución del conflicto irregular colombiano. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf

Wills, M. (2015). Los tres nudos de la guerra colombiana. *Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas*. Disponible en: http://www.humanas.unal.edu.co/observapazyconflicto/files/5714/6911/9376/Version_final_informes_CHCV.pdf





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Aproximación crítica al estudio de la lucha de clases en el territorio correntino a fines del siglo XX: “Crisis de acumulación y hegemonía”. Las estrategias de los sujetos del conflicto

Critical approach to the study of the class struggle in the territory of Corrientes at the end of the 20th century: "Crisis of accumulation and hegemony". The strategies of the subjects of the conflict.

Marcelo Graciosi*

Recibido: 2 de julio de 2020

Aceptado: 8 de septiembre de 2020

Resumen: El presente trabajo estudia el territorio social de la provincia de Corrientes en los años noventa del siglo XX desde una perspectiva crítica que intenta problematizar la agudización de la crisis del modo de acumulación en aquel momento, la situación hegemónica que se construía en esta particular coyuntura y las diferentes estrategias de poder de los sujetos que resistían a dicha hegemonía.

Palabras clave: Acumulación, crisis, Partido Nuevo, hegemonía, conflictos.

Abstract: The present work studies the social territory of Corrientes province in the nineties of 20th century from a critical perspective that attempts to problematize the exacerbation of the crisis of the way accumulation at that time, the hegemonic situation that was constructed in this particular conjuncture and the different power strategies of the subjects that resisted this hegemony.

Key words: Accumulation, crisis, New Party, hegemony, conflicts.

* Profesor de Sociología. Universidad Nacional del Nordeste. marcgraciosi@hotmail.com

Introducción

Este artículo que constituye un parte de un trabajo de mayor extensión enhebra tres anclajes conceptuales que se corresponden como modos de aproximación a la realidad (no se subsumen, sino que guardan una relación de complementariedad).

Un primer abordaje conceptual plantea una aproximación al modo de acumulación imperante en la "sociedad" correntina en los años noventa (que expresa un proceso de larga duración). Pero observar el movimiento y la conformación de la "estructura social" no es un trabajo que este desligado de un segundo orden conceptual: la investigación de las formas que asume el enfrentamiento entre clases sociales. De hecho, de no establecer esta necesaria conexión entre formación social y las clases sociales -como actores que la dinamizan-; no podríamos entender quiénes son los protagonistas de los hechos históricos, ni cuáles son las condiciones materiales desde las cuales intervienen. De lo que se trata, al fin y al cabo, es de observar esta relación dialéctica entre estructura y "sujeto social" en un recorte espacio temporal. Desplegando los términos contenidos en la anterior proposición; nos proponemos observar las situaciones de conflictividad entre diferentes fracciones de clase y la iniciativa política que posibilita a una fracción constituirse como hegemónica en un periodo tiempo específico en una determinada formación social.

Queda manifiesto entonces, que en este trabajo lejos de considerar a la *lucha de clases* como un operador conceptual perimido; consideramos que la potencia analítica de este enfoque está plenamente vigente en la medida en que las relaciones sociales que permiten la reproducción social de la existencia de los individuos que viven en los diversos ámbitos sociales se continúan *estructurando* a partir del "antagonismo" entre la clase de los propietarios de los medios de producción y el "proletariado" portador de la fuerza de trabajo. Esta proposición teórico básica del materialismo histórico adquiere en cada situación histórica concreta su forma propia de expresarse.





El tercer orden conceptual también supone un nivel un nuevo ángulo de análisis complementario a los anteriores; observar las estrategias de poder puestas en juego por los sujetos en conflicto en este contexto de crisis de acumulación y hegemonía. En este caso, el enfrentamiento se produce entre quienes tienen una posición hegemónica y quienes van articulando diferentes respuestas tanto como sujetos individuales con una determinada extracción social de clase, o como sujetos colectivos que tensionan dicha hegemonía.

Nos planteamos como exigencia metodológica no partir de ningún estereotipo de subjetividad que obre como explicación de la historia de Corrientes.¹ Intentamos de esta manera alejarnos de ciertos estudios que construyen sujetos desde la denominada "dimensión cultural" abstrayéndose de los conflictos materiales que dinamizan la historia.

El interés por realizar una investigación social sobre Corrientes está atravesado por una problemática: la relativa ausencia de investigaciones sociales que indaguen las relaciones sociales que configuran el territorio correntino desde un punto de vista material.

En este sentido intentamos contribuir a un acervo de investigaciones críticas al internarnos en el profuso campo de la "realidad" correntina a partir de un recorte histórico que es la década de los noventa del siglo XX, tomando como proceso social de análisis el llamado régimen de poder del Pacto Autonomista Liberal y su reformulación en el régimen del Partido Nuevo con la figura social de Raúl Rolando Romero Feris "Tato". Dicho régimen político tendría su desenlace en el ciclo de protesta del año 1999. Cabe aclarar que existen algunos estudios sociales críticos sobre la conflictividad social del año 1999 en la provincia de Corrientes, tal es el caso del trabajo realizado por Matías Artese que analiza desde una perspectiva

¹ Como bien lo plantean Ana María Liberali y Omar Horacio Gejo, para muchos investigadores la "subjetividad" de la región se convierte cómodamente en una clave explicativa (Sormani, 2011:7). Es así que constantemente nos vemos tentado a explicar un determinado estado de cosas –las formas operantes de poder en Corrientes– a partir de una supuesta subjetividad –el correntino es pasivo, sumiso, obediente– cayendo en dos errores; dando por sentado dicho supuesto y obviando el examen de los mecanismos de construcción de tales conformaciones subjetivas.

de lucha clases esta etapa de auge de las protestas sociales Artese (2005). Sin embargo, nosotros no dirigimos nuestro análisis a este proceso de alza en las luchas sociales, sino a un proceso inmediatamente previo, a la hegemonía que se consolida en torno a la figura de Raúl Rolando Romero Feris -*Tato*- y el Partido Nuevo, así como a los conflictos y expresiones de resistencias que van emergiendo en este escenario.

Algunos de los interrogantes que delimitan el campo a investigar son ¿Cómo podemos caracterizar las contradicciones estructurales propias de la formación social correntina en los noventa? ¿Qué incidencia tiene la orientación neoliberal que adquiere el país durante esta etapa? ¿Cómo se configura una situación hegemonía en esta etapa? ¿Qué formas de resistencia social aparecen?

Entendemos que el *Tatismo* constituye una nueva hegemonía social y política que vino a desplazar la hegemonía histórica del Pacto Autonomista Liberal en la provincia de Corrientes. La misma figura de *Tato* emerge desde esta hegemonía largamente consolidada en dicha provincia.

La metodología de trabajo utilizado implicó en primer término la construcción de un estado del arte sobre la constitución de la formación social vinculándolo esta elaboración con un marco conceptual anclado en una perspectiva teórica orientada a la crítica social.

En segundo lugar, se trabajó con diversas fuentes bibliográficas que nos permitieron una comprensión el carácter que asumía la crisis del capital como orden social imperante en la Argentina en los años noventa.

La construcción de datos se basó en relevamientos realizados día por día del periodo de mayor tirada de la provincia de Corrientes en aquel periodo (Diario *Época*). Las noticias sobre la vida política correntina que registramos de este diario permitieron el armado de una secuencia de acontecimientos, y no un marco para la interpretación de estos acontecimientos. En este sentido las noticias fueron tomadas de manera crítica, contraponiéndola contras fuentes (Diario el Litoral, Diario de Corrientes), con las voces de los protagonistas.





Al mismo tiempo, se han realizado una serie de entrevistas a diversos actores sociales que hemos considerados claves (aclaramos que si bien era parte de los objetivos de este trabajo entrevistar a Raúl Rolando Tato Romero Feris hasta el presente no se ha concretado dicha entrevista).

Comenzaremos por analizar los rasgos que asume la formación social correntina en los años noventa teniendo en cuenta su matriz histórica.

Los años noventa en Corrientes; la agudización del estancamiento de una formación social periférica

En primer lugar, queremos explicitar los elementos conceptuales que nos habilitan a leer a Corrientes como una formación económico social periférica. La relación centro-periferia fue tematizada por diferentes autores "marxistas" en la segunda mitad del siglo XX (el mismo Marx, al igual que otros clásicos como Lenin y Luxemburgo consideran que el capital tendencialmente subsume a las economías no capitalista que constituyen en este sentido su periferia). Una de las interpretaciones más difundidas es la de Maurice Dobb que subrayaba la obstrucción a la industrialización de la periferia por parte del centro. Este enfoque señalaba que los países desarrollados se apropiaban de las materias primas foráneas y perpetuaban mercados cautivos para sus exportaciones manufactureras. Esa asfixia impedía transformar la descolonización en procesos de desarrollo (Dobb, 1969: 83). Paul Baran reformuló esa visión. Atribuyó la baja tasa de crecimiento de los países atrasados a la sofocación externa, pero advirtió también la existencia de ciertos procesos de expansión fabril en la periferia. De esta forma esa mirada puso de relieve el carácter insuficiente de la vieja contraposición entre países industrializados y agro-mineros (Baran, 1959: 33-34). Baran asignó más relevancia a las causas exógenas (transferencias al exterior) que a las endógenas (predominio terrateniente) en la recreación del subdesarrollo.

Sweezy señaló que la estrechez de la demanda generaba un excedente invendible que empujaba al sistema a la regresión. Posteriormente atribuyó el mismo efecto a la expansión de los monopolios. Sostuvo que el gigantismo de las empresas derivaba en concertaciones de precios, que disuadían nuevos emprendimientos y desembocaban en ciclos recesivos. Por otra parte, las grandes empresas contrarrestaban sus adversidades con mayores exacciones a la "periferia" (Sweezy, 1973a: 33-55; Sweezy 1973b: 12-13). Samir Amin agrega la existencia de formas internacionales diferenciadas de explotación y realzó a los lucros obtenidos en la periferia, como un mecanismo compensatorio de las mejoras concedidas a los trabajadores del centro (Amin, 1976: 128-133).

Tomando nota de las apreciaciones anteriores, concebimos al territorio de Corrientes como una formación social periférica y estancada a fines del siglo XX. Este carácter periférico es un rasgo que lo constituye desde su etapa colonial.

En primer lugar, esta nueva formación social emerge cuando la civilización occidental y cristiana penetra -con su particular modo de vida-, en la región que hoy corresponde a la provincia de Corrientes desde Asunción del Paraguay a fines del siglo XVI, construyendo una nueva territorialidad; es decir, nuevas relaciones de poder en torno a la producción y reproducción de las condiciones sociales de existencia de los sujetos que poblaban este suelo. Cabe destacar que desde un principio la construcción de un nuevo modo productivo con formas de explotación propias va a estar atado a la estructura demográfica existente en la región y al permanente conflicto que se dio entre los pueblos originarios y los grupos sociales recién llegados que se constituyeron en la fracción social dominante: la relación entre el conquistador blanco y los guaraníes fue una relación asimétrica de explotación y dominio ya con anterioridad a la fundación de Corrientes (Graciosi, 2020: 78).

Siguiendo a Sormani (2011) entendemos que el objetivo primario de la fundación de Corrientes es el de una "plaza fuerte" (Corrientes es "fun-





dada" por Juan Torres de Vera y Aragón en 1588). La pretensión era consolidar una estación intermedia entre Asunción del Paraguay con Buenos Aires y con Salta y Tucumán como ruta comercial. En este marco la relación con los nativos guaraníes que habitaban la zona fue de la de un sometimiento que alternó entre medios "pacíficos" y la guerra.

La tesis desde la cual entendemos la implantación de un nuevo modo productivo en el territorio correntino, es que se dio a partir de un proceso de acumulación "originaria" sostenido por una particular actividad productiva: la ganadería. Este proceso implicó la expropiación de los pueblos aborígenes de la propiedad de la tierra que constituía su medio y su modo de vida. Dicha expropiación se imbrica a su constitución como nuevos sujetos. La figura del peón de estancia deviene de esta transformación subjetiva realizado en un proceso de larga duración.

Durante el primer siglo en el territorio correntino la vaquería (la caza del ganado cimarrón) se convirtió en la actividad productiva fundamental, y más tarde, en la principal fuente de los excedentes exportables. La vaquería era una actividad compatible con el bajo desarrollo de las fuerzas productivas, se utilizaba para ello figuras que se tornaron emblemáticas: la del criollo que deambula por los campos, el mestizo baqueano, y el indio reducido cuya destreza y escaso valor en la estructura social lo tornaron indicado para una actividad riesgosa como la vaquería (los esclavos negros no se utilizaban para estas actividades por ser casi inexistente su presencia durante buena parte de la etapa colonial correntina y por ser costosa su reposición).

Estamos así, frente a una débil adscripción de la economía correntina al circuito del capitalismo mercantil a escala mundial en el curso del siglo XVII y XVIII. La formación social correntina, que tiene una casi nula productividad agrícola, y una ganadería que durante casi medio siglo inicial es solo de aprovisionamiento, adopta justamente a la estancia como la forma productiva que permite sostener la ocupación militar del territorio.

La fuerza de trabajo de las estancias estaba compuesta por indígenas guaraníes que constantemente eran forzados a este tipo de trabajo,

mestizos que tenían la misma situación, criollos traídos a tal fin desde la primera etapa colonial y todos aquellos que no encontraban otro medio de subsistencia que aventurarse a la campaña y luego de intentar subsistir de cultivos se convertían en peones.

La estructuración de la formación social correntina entonces se imbrica fuertemente con las formas que asume la ganadería; desde la primitiva caza del ganado cerril, a la estancia cimarrona, pasando por la estancia tradicional hasta las formas de estancia moderna (que se tiende a reproducir como unidad capitalista). Tomando en cuenta los trabajos de Schaller vemos que "El carácter que va a asumir la ganadería en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX continúa siendo la de un capitalismo agrario dependiente, subsidiario de la producción ganadera pampeana" (Schaller, 2014: 6).

Aun para mediados del siglo XX Corrientes seguía presentando una estructura productiva dominada por las estancias ganaderas con escaso peso de las actividades agrarias y con menor desarrollo industrial.

En los años noventa Corrientes mantiene la matriz productiva histórica (con el incremento de algunas de sus actividades agrícolas, principalmente el arroz), con el agregado de que el *escenario nacional* incrementa su deterioro productivo. Corrientes también está condicionada por el crecimiento de la deuda pública, la dependencia del crédito externo y del aporte del tesoro nacional, elementos que entran en contradicción con el aumento del gasto público (principalmente movido por el crecimiento del empleo público) y dan como resultado una fuerte tendencia a la precarización laboral y salarios de pobreza. La estructura productiva correntina ligada a la actividad agropecuaria –históricamente volcada a la ganadería– no generaba una suficiente captación de la masa de trabajadores disponibles en el territorio correntino. Dicha situación sumada a la crónica ausencia de desarrollo industrial concentraba en el estado provincial y en los municipios la demanda de trabajo.²

² La fuente de estos datos consiste en las noticias del Diario el Litoral, así como los datos del Ministerio de Economía.



Al observar las principales actividades agropecuarias notamos la preponderancia actual de la superficie destinada a la ganadería, seguida por el crecimiento de la actividad forestal y el sector arrocero que a mediados de los años noventa se vuelve preponderante:

Cuadro I: Superficie ocupado según actividad agropecuaria

Años	Superficie EAP	Sup. Forestada	Sup. Frutícola	Sup. Agrícola	Sup. Ganadera
1988	7.098.426	123.293	17.976	107.924	5.741.003
2002	6.860.573	283.028	24.775	105.505	5.753.944
Variación 1988-2002	- 237.853	159.735	6.799	- 2.420	12.941

Fuente: INDEC. Censos Nacional Agropecuario: 1988 - 2002.

El crecimiento de la actividad forestal en el periodo observado se da en cierta medida por el asentamiento de capitales extraterritoriales que ven en las características naturales de Corrientes, (y en su superestructura jurídico política) un contexto apropiado para desarrollar este tipo de inversiones. En realidad, el proyecto forestal como actividad productiva en Corrientes ya fue presentado por Navajas Artaza cuando fue gobernador de la provincia en la década del sesenta, cuando intentó instalar dicha iniciativa afín a su propia actividad empresarial (La familia de Navajas Artaza es la propietaria del Grupo *Las Marías* cuyas actividades van desde la explotación yerbatera, ganadera a la forestal en el Nordeste correntino). A su vez el sector arrocero va a estar a la cabeza de los cultivos.

Verificamos que el número de hectáreas destinadas a la ganadería se mantiene, y el tamaño de las mismas expresa una tendencia a la concentración.

Lo que podemos concluir del escenario productivo de la provincia de Corrientes en la última década del siglo XX, es la tendencia a expulsar trabajadores del mercado laboral, ya sea en la producción de bienes primarios o secundarios, creciendo en su peso relativo toda la

denominada producción de servicios, donde está presente la venta de fuera de trabajo informal, como son los denominados servicios comunales, sociales y personales. Esta categoría estaba integrada fundamentalmente por el personal de servicio en casas de familia y trabajadores urbanos no especializados (Changarines de todo tipo). Sectores como el transporte, el comercio, hoteles y restaurantes, junto con la construcción son los que en cierta medida emplean a bajo costo la fuerza de trabajo excedente en la provincia.

El gran empleador que va a crecer en la estructura social de la provincia es el estado. Este empleo se presenta como una forma de dar respuesta a la falta de generación de trabajo por parte de la iniciativa privada, y un mecanismo de poder ligado a las estrategias de los partidos políticos.

Cuadro II: Evolución del empleo público en Corrientes en entre 1984-1999

AÑO	GOBIERNO	N° empleados públicos
1984	José A. Romero Feris (PA)	27.203
1985	José A. Romero Feris (PA)	31.659
1987	José A. Romero Feris (PA)	30.794
1988	Ricardo Leconte (PL)	31.868
1990	Ricardo Leconte (PL)	31.868
1994	Raúl Romero Feris (PA)	36.497
1996	Raúl Romero Feris (PANU)	37.671
1999	Pedro Braillard Pocard (PANU)	38.164

Fuente: Archivos del Ministerio de Economía de la Provincia de Corrientes

La curva evolutiva del empleo público indica que con cada nuevo gobierno provincial se produce un nuevo aumento de personal. Frente a





estos datos "oficiales" debe consignarse información que plantea un crecimiento muy superior del empleo público desde 1993 a 1999 (un total de 66.000 trabajadores).³

Acumulación y "crisis" en los años noventa

Los datos sobre crecimiento del empleo público en la provincia de Corrientes deben ser leídos en el marco de una crisis del capitalismo mundial, que en particular se manifestaba en Latinoamérica, y sobre todo en la Argentina por un crecimiento de la desocupación abierta. El caso argentino es tal vez el más extremo de la región tanto en relación a la intensidad, rapidez y extensión en la adopción de medidas de apertura externa, desregulación económica y privatización de empresas públicas, como en relación al aumento del desempleo abierto. La tasa de desempleo abierto en las zonas urbanas del país prácticamente se triplicó entre 1990 y 1995, pasando del 6.3% al 18.6%. En el Gran Buenos Aires, área que concentra casi al 40% de la población urbana del país, la suba fue aún más pronunciada, ya que pasó del 6.0% al 20.2% (Neffa et al, 1999). El crecimiento de la desocupación, junto con la subocupación y el empleo informal eran la expresión de una agudización de la crisis capitalista que había comenzado a manifestarse desde mediados de los años setenta.

La crisis del noventa reafirmaba los patrones de acumulación que tuvieron lugar con la dictadura militar: concentración del capital en el sector financiero y desguace del estado. Procesos que expulsaban trabajadores del mercado laboral. El análisis realizado por Eduardo Basualdo avanza en esta línea:

El proceso económico que impuso la dictadura militar a partir de 1976, interrumpiendo la industrialización basada en la sustitución de importaciones, constituyó un caso particular, quizás el más profundo y excluyente en América Latina, del nuevo

³ Entrevista Juan García, referente de ATE Corrientes.

comportamiento de la economía mundial. Específicamente, el régimen de valorización financiera (1976-2001) cobró forma a partir de que las fracciones del capital dominante contrajeron deuda externa para luego realizar con esos recursos colocaciones en activos financieros en el mercado interno (títulos, bonos, depósitos, etc.) con el propósito de valorizarlos debido a la existencia de un diferencial positivo entre la tasa de interés interna e internacional, y posteriormente fugarlos al exterior. De esta manera, la fuga de capitales al exterior estuvo intrínsecamente vinculada al endeudamiento externo (Gráfico 3) porque este último ya no constituyó, en lo fundamental, una forma de financiamiento de la inversión o del capital de trabajo sino un instrumento para obtener renta financiera dado que la tasa de interés interna (a la cual se coloca el dinero) era sistemáticamente superior al costo del endeudamiento externo en el mercado internacional (Basualdo, 2010:12).

Las contradicciones de esta forma de acumulación llegaban ya en el año 1.997 a un punto crítico, donde medidas de ajuste sobre los sectores populares eran la receta para intentar oxigenar el déficit fiscal.

La particularidad de la escena del capitalismo argentino en la década del 90' era la saturación de una forma de expoliación basada en la especulación financiera y la concentración del capital que desvalorizaba el salario. El crecimiento de la deuda y el déficit fiscal eran instrumentos de esta política económica.

Astarita pone énfasis en la tendencia decreciente de la ganancia basada en la caída de la plusvalía relativa en este proceso:

Existe una unidad fundamental en la clase dominante acerca de profundizar la orientación económica que se llevó bajo el menemismo. Más en general, afirmamos que esa estrategia enlaza con un modo de acumulación que se ha ido imponiendo a nivel mundial, cuya persistencia se puede advertir en la dirección que tomaron las resoluciones de las diversas crisis en los últimos años. La crisis mexicana (1995), las asiáticas (1997-1998) o la brasileña (1997-1998) no marcaron un giro hacia una acumulación basada en la redistribución progresiva del ingreso y articulada en torno del Estado-nación. Por el contrario, todas ellas se resolvieron profundizando la forma en que el ca-





pital ha estado respondiendo a la caída de rentabilidad desde los setenta: combinación de extracción de plusvalía absoluta (intensificación de los ritmos de trabajo y baja salarial) con plusvalía relativa (aumento de la productividad basada en las tecnologías informáticas y la automatización); exacerbación de los mecanismos de mercado y disciplinamiento del trabajo por medio de la desocupación (en detrimento del control sindical burocrático o vía "Estado de bienestar"); ola de fusiones de grandes empresas internacionalizadas y presión sistemática de los capitales financieros líquidos sobre las políticas económicas (Astarita, 2001: 2).

En la provincia de Corrientes, tenemos cierto correlato de este escenario nacional: crecimiento de la deuda pública, dependencia del crédito externo y del aporte del tesoro nacional, aumento del empleo público combinado con la precarización laboral. Como ya vimos la estructura productiva correntina ligada a la actividad agropecuaria, volcada a la producción ganadera no generaba oferta amplia de trabajo, esta situación sumada a la crónica ausencia de desarrollo industrial concentraba en el estado provincial y en los municipios la demanda de trabajo.

La emergencia de una hegemonía inestable en la Argentina neoliberal de los noventa

¿Cuál es el escenario político correntino a fines del siglo XX? Con el regreso de la democracia a la Argentina en el año 1983; en la provincia de Corrientes se van a suceder dos gobernaciones que responden al Pacto Autonomista-Liberal (una alianza de partidos locales tradicionales de carácter conservador).

En el año 1991 "Tato" Romero Feris es candidato a gobernador por el Pacto Autonomista Liberal junto al Liberal Lazaro Chiappe. *Tato* obtuvo una amplia victoria por voto popular con el 43.86% de los sufragios contra el 33.97% de Alberto Di Filippo (PJ) y el 17.84% de Noel Bread (UCR). Pero el sistema de elección era indirecto por medio de un colegio electo-

ral, y este nunca logró imponer a un ganador. Finalmente, el gobierno nacional intervino la provincia el 7 de febrero de 1992.

La provincia va a tener tres intervenciones federales en clave menemista entre esta fecha y diciembre de 1993. Finalmente, en las elecciones de 1993 (ya con un sistema de elección directa) es electo gobernador Raúl Rolando Romero Feris (con más del 46% de los votos) por el Pacto Autonomista-Liberal, en el cargo de vicegobernador lo acompaña el Liberal Lázaro Chiappe.

En este contexto de estancamiento periférico emerge una nueva hegemonía en Corrientes: El Tatismo o Tatoromerismo que desplaza al mismo tiempo que prolonga en cierta forma la que históricamente detentó el Pacto Autonomista-Liberal.⁴

Estudios como los de Hector Zimmerman o de Valeria Ojeda hacen referencia a esta figura política que transforma la vida social y política correntina en la década de los noventa. Si bien el trabajo de Ojeda (2008) se ocupa de lo que denomina "clientelismo" en el municipio de la capital correntina, la misma hace referencia al surgimiento de la figura de Tato Romero Feris y una nueva fuerza política en torno a esta figura. El análisis de Ojeda menciona la fuerza del aparato mediático del Tatismo. El trabajo de Zimmerman (2001) coloca el énfasis en la emergencia de un nuevo liderazgo basado en su capacidad electoral basada en la atracción sobre las *masas postergadas*. Zimmerman inscribe este análisis en el marco de una serie de estudios sobre el crecimiento de liderazgos personalistas en Latinoamérica en la década del noventa.

Consideramos aquí que la construcción de esta nueva hegemonía que va a constituir el Tatismo o el Tatoromerismo (luego el Partido Nuevo) opera en diferentes campos de lucha, uno de los mecanismos de esta he-

⁴ Tanto el Partido Autonomista, como el Partido Liberal, son partidos provinciales que dominaron el escenario político desde mediados del siglo XIX. Expresaban los intereses de los terratenientes ganaderos y los capitales comerciales de la ciudad. Diversos escritos de María del Mar Solís Carnicer abordan periodos de la primera mitad del siglo XX donde se puede observar el peso que tuvo el Pacto Autonomista Liberal en la vida política de la provincia de Corrientes. La misma sucesión de gobernadores de la Provincia de Corrientes es un listado donde recurrentemente desde el siglo XIX, los miembros del Partido Autonomista y del Partido Liberal tienden a monopolizar los cargos de gobernador y vicegobernador.





gemonía es la imposición sobre las diferentes cúpulas partidarias (incluida la imposición sobre las cúpulas de los propios partidos políticos del Pacto, el Partido Autonomista y el Partido Liberal). Otro campo de lucha va a ser con las fracciones de trabajadores (aquí veremos como el Tatismo establece alianzas favorables con ciertas fracciones de trabajadores y sindicatos, y al mismo tiempo relaciones de dominación sobre aquellos sindicatos que aparecen como adversarias).

Ante la pregunta inicial ¿Cómo se configura esta hegemonía que hemos caracterizado como inestable? En el marco de este trabajo explicitamos una serie de elementos analíticos que tienen como base material los relevamientos mencionados en la introducción.

Cuando afirmamos que la personificación social y política⁵ de *Tato* crece y logra construir un novedoso (e inestable) régimen político en medio de la crisis de acumulación que atravesaba la provincia de Corrientes al igual que el país⁶ tomamos como un indicador nítido de ello las elecciones que se celebran en el año 1997 para la renovación del cargo de gobernador. Tato no acepta el Pacto entre Autonomistas y Liberales por el cual el cargo de gobernador pasaría a corresponder al Partido Liberal, a partir de ello no solo rompe la alianza con este partido, sino que se quiebra tu propia relación con el Partido Autonomista, funda un Partido Nuevo y se impone en las elecciones de segunda vuelta por un 70% de votos. El cargo de Gobernador va a ser ocupado por Pedro Brailard Pocard, ante la imposibilidad constitucional de que Tato ocupe dicho cargo nuevamente.⁷

⁵ "El inicio de una relación social es la personificación de fuerzas materiales. La introducción de una fuerza material que produce esa ruptura de la existencia dual, supone que no se visualiza a ese ámbito como a una fuerza, se ve a otro cuerpo sin su "atribución material", se lo personifica. De aquí parte el hecho de que siempre el carácter material de la fuerza social estará encubierto". (Marín, 1995: 43)

⁶ Siguiendo a Gramsci, entendemos que la hegemonía refiere a una situación de dominación de clase (más frecuentemente de una fracción de clase) que se consolida a partir de una combinación de elementos coactivos y de consenso. Una situación hegemónica significa que la clase o fracción dominante logra imponer su visión (y sus intereses) al conjunto de las clases sociales. Ahora bien, este papel de conducción que realiza este grupo social se afianza en un doble mecanismo, de alianza con los grupos subordinados y de aniquilación con los grupos adversarios. Gramsci va avanzar en el estudio de una serie de mecanismos *culturales* que se ligan a la política para comprender esta hegemonía de clase. Entre otros elementos va a resaltar la fuerza que adquiere la construcción de un sentido común dominante que construye significaciones e identificaciones favorables a ciertas formas de dominio (Gramsci, 1981).

⁷ Para ver una secuencia detallada de estos conflictos en torno a la ruptura del Tatismo con el Pacto y la constitución del Partido Nuevo y su posterior triunfo electoral ver Graciosi (2020).

Par la constitución de esta hegemonía fue clave la *habilidad* para estabilizarla situación financiera provincial. Dicha habilidad se liga a una serie de tácticas que tendían estratégicamente a controlar -desarmar-y conducir (en el sentido de un arte de gobierno planteado por Foucault) a los partidos opositores y a los propios aliados a los efectos de tener su "apoyo" legislativo.⁸ Este apoyo era crucial en una provincia que al igual que el resto de las provincias argentinas dependía de créditos (que debían ser aprobados por la legislatura bicameral de Corrientes) para sostener la cadena de pagos salariales a los trabajadores estatales provinciales.

El régimen construido a partir de la personificación social de Tato Romero Feris sistemáticamente intenta anular (liquidar en un sentido gramsciano) del escenario político a aquellos que se oponen a su plan de gobierno basado en un reordenamiento general y profundo de la administración provincial (este objetivo es reiteradas veces repetidos en actos públicos, generalmente en inauguraciones de obras públicas de todo tipo).

Una larga lista de figuras políticas sufren las consecuencias: el legislador provincial Rodolfo Martínez Llano es destituido, su propio Vice Gobernador Lázaro Chiaper enuncia expresando sentirse avasallado por Tato, el Intendente del Pacto (miembro del Partido Autonomista) Abraham Blugerman renuncia cercado por la amenaza de intervención del Gobierno Provincial de su propio partido, incluso el hermano y líder histórico del Partido Autonomista; Pocho Romero Feris logra retener con dificultad la presidencia del Partido Autonomista, y finalmente se queda sin "gente" cuando en el año 1996 Tato lanza el Partido Nuevo y logra que lo acompañe la mayor masa de adherentes partidarios. Esta es solo una lista acotada de aquellos que tuvieron que correrse del camino luego querer oponerse al gobierno de Tato. Las autoridades partidarias del Pacto Autonomista Liberal sufrirán constantemente estos embates.

⁸ Una táctica constante en la construcción de hegemonía era el debilitamiento de la figura institucional del presidente del Partido Autonomista, su propio hermano Pocho Romero Feris. A su vez presionaba al PA (Partido Autonomista) para que preste consentimiento a sus medidas (tomadas con independencia del mismo). Sobre todo, se mostraba intolerante ante cualquier crítica a su gestión por parte de los convencionales del PA que eran "fieles" a la figura de su presidente José Pocho Romero Feris. De esta manera, la incidencia del PA se iba reduciendo cada vez más en la gestión. La gestión de gobierno poco a poco dejaba de ser una acreencia del Partido Autonomista para ser exclusivamente propiedad de Tato Romero Feris.





El mecanismo por el cual el *Tatismo* logra imponerse a las demás fracciones políticas consiste en una exigencia de alineamiento tras su figura y sus prácticas, pero al mismo tiempo, estos ejercicios de poder a partir de los cuales logra liderazgo generan inestabilidad en su hegemonía; muchos de sus "adversarios" son los que posteriormente van a debilitar su propia posición. El intento de juicio político tuvo que enfrentar en el año 1996, las constantes dificultades que tuvo para lograr obtener la aprobación de créditos de la bicameral del poder legislativo correntino, son indicadores materiales de esta inestabilidad en su hegemonía. El ocaso del Partido Nuevo que va a ocurrir en la segunda mitad del año 1999 es la síntesis de esta inestabilidad subyacente.

La crisis económica que atravesaba Corrientes se puede verificar en el retraso de los salarios de los trabajadores municipales de la capital correntina, que para los primeros días de septiembre todavía no podían cobrar los salarios del mes de julio de 1993. Un retraso salarial, pero de menor grado, también sufrían los jubilados provinciales estatales (Época, 5/09/1993: 9).

¿Cómo afronta esta crisis el nuevo régimen de poder que el *Tatismo* comienza a construir? Desde nuestra perspectiva la figura de *Tato* personifica la fuerza de los partidos provinciales junto a la "firmeza" de los patrones del campo. Pero también se expone como un hombre de acción, un hombre que *más que a las palabras se aferra a los hechos* (este tipo de frases son constantes en su discursividad). El mismo es un estanciero que se ha *entregado* a la política, al igual que su hermano y anterior gobernador, José A. Romero Feris (y como gran parte de su familia). En cierto modo, se lo puede ver como un correntino de "ley" en la medida que su imagen se enlaza con la rusticidad del hombre de campo correntino.⁹ Desde esta personificación social dominante encara un programa de reducción del gasto público.

⁹ Un dato relevante es la conexión directa en Corrientes entre propiedad de los medios de prensa escrita y el poder político. Así Julio Romero elector gobernador de Corrientes en 1973 fue el fundador del Diario Época y Juan Romero (padre de Pocho Romero y Tato Romero, ambos gobernadores) fue fundador del Diario el Litoral. Época y el Litoral fueron durante décadas los diarios de mayor tirada en Corrientes.

La agenda de esta nueva administración para solucionar los problemas financieros va a ser replicar, en cierta medida, la política neoliberal del gobierno de Carlos Menem a nivel nacional. La línea discursiva que despliega pone énfasis en la *gravedad de la crisis financiera* provincial: "la situación financiera es mucho más grave de lo que suponíamos" (Época, 21/10/1993:2).

Una de los mecanismos de ordenamiento del gasto público provincial es "reducir" el Estado por medio del retiro voluntario de los empleados públicos provinciales, aunque el mismo gobernador electo aclara, "no habrá retiros compulsivos" (recordemos que la política de retiros voluntarios como estrategia de reducir el estado, tiene antecedentes ya en plan Prebisch que se intentó implementar con el golpe del 55 en la Argentina (Bonnet, 2008). La nueva ministra de Economía Zunilda Miguez de Ruiz Díaz apunta a reducir el gasto público en el orden del 30 al 40 %. Esta reducción era parte de un plan de reforma y reordenamiento financiero de la provincia "con la supervisión del Banco Mundial" (Época, 12/10/1993:9). La presencia de este organismo internacional nos muestra como el gobierno del Pacto Autonomista Liberal esta signado por el diagrama de poder neoliberal ya mencionado.

El gobierno de "Tato" Romero Feris se inicia entonces con un ahogo "financiero" que lo lleva a gestionar desde el inicio anticipos de coparticipación federal, así como un programa de refinanciamiento de la deuda pública provincial. Para apoyar este plan; el gobierno nacional del Presidente Carlos Menem le exigía la firma del pacto fiscal federal a la provincia. Dicho pacto suponía una progresiva reducción del gasto provincial, así como la privatización de las empresas públicas provinciales y las transferencias de las cajas previsionales (estamos en pleno "ajuste" de los años noventa que luego decantará en procesos abiertos de enfrentamientos entre trabajadores estatales y sectores de trabajadores desocupados con las fuerzas públicas de diferentes administraciones provinciales, como en los casos de la Rioja, Salta, Santiago del Estero, Neuquén, y entre ellas la misma Corrientes en el año 1999 marcando el fin del ciclo del Tatismo).





En este escenario de auge del neoliberalismo menemista Tato implementa una estrategia que le permitió afianzarse; establece una alianza con el gobierno nacional de Menem¹⁰ y "exige" públicamente el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, con el argumento de que ésta era la "única" forma de sostener la cadena de pagos y sobre todo el pago de salarios a los empleados públicos provinciales. Consideramos aquí, que la *habilidad* política de Tato está fuertemente ligada a esta capacidad para condicionar a los miembros del Pacto Autonomista Liberal, como a los opositores a que le presten su apoyo.¹¹ Este mecanismo de exigir públicamente apoyo económico; le permite lograr que se apruebe un crédito de 100 millones de pesos con que el gobierno provincial puede abonar los salarios de diciembre de 1993 incluido el aguinaldo (Época, 26/11/1993).

La aplicación de estas medidas neoliberales de gobierno implicó una fuerte lucha económica y política. Si bien la gestión "económica" por parte del Tatismo se inicia con "éxito" logrando pagar los salarios, el plan de ajuste rápidamente produce conflictos con los trabajadores que se oponen a los retiros voluntarios, a los recortes salariales, a las restricciones en la obra social (conflictos que veremos).

Volviendo nuevamente a su etapa de construcción de poder, podemos visualizar, que, desde una cierta óptica, ser un buen gobernante en aquel periodo implicaba ser un buen gestor de auxilio financiero.

Otra estrategia que guía al gobierno de Tato y luego al Partido que construye el PaNu (Partido Nuevo) es una suerte de pragmatismo. *Una vertiginosa dinámica*, esta frase pronunciada en la asunción de gobierno, expresa la estrategia de constituirse en un gobernador activo, firme, enérgico, un hombre fuerte de Corrientes que venía a superar las anteriores

¹⁰ La alianza con Menem no solo le permitió a Tato obtener fondos, sino también contar con el apoyo del PJ local en diferentes circunstancias, a tal punto de que en 1996 el PJ correntino se opone al juicio político contra Tato Romero Feris (acusado de inconstitucionalidad de sus actos de gobierno).

¹¹ Dentro de los mecanismos coactivos para obtener apoyo Tato logra que la cámara de legisladores desafuere al legislador Martínez Llanos, uno de sus principales adversarios en materia de aprobación crediticias desde la cámara legislativa.

limitaciones. Esta impronta de hombre enérgico que se liga con la "reforma" (de carácter neoliberal):

Adviértase la imprescindible reforma del estado que dejara de ser carga para los ciudadanos retirándose definitivamente de todas aquellas funciones y actividades empresarias donde fracasó sin atenuantes (...) Pero es importante señalar aquí, que las privatizaciones que sean necesarias no se realizarán hasta que no se cumplan las metas de saneamiento de esos sectores (...) No menos importante es la desregulación de la economía que significa emprender el camino de la competencia que pone a prueba de la eficiencia. (Archivo de la Legislatura Provincial de Corrientes).

En este discurso podemos encontrar con claridad los lineamientos de la lógica neoliberal que podemos rastrear en los diferentes procesos sociales que marcaron la historia Argentina. El discurso interpela a la población y a los políticos a partir de un sentido común dominante bajo el neoliberalismo *reformular al estado para que este sea eficiente*.

Ahora bien, esta búsqueda constante de la estabilidad financiera del gobierno de Tato se construye desde una discursividad que apela a hablar *sin vueltas con la gente* (apela a la idea de una verdad anteriormente no dicha). Ante las críticas Tato contesta "mi único compromiso es con la gente" (Época, 9/06/1996:2). El mismo ex gobernador Pedro Brillard Poccard reflexionando sobre las modificaciones que introdujo Tato a la vida política correntina; no duda en afirmar que transformó el estilo de gestión, "Llevaba a todo su gabinete a todas las localidades del interior y mano a mano con la gente se ocupaba de las diferentes necesidades a atender. Todo el tiempo nos exigía acciones, proyectos que no nos quedáramos quietos".¹²

Esta suerte de hiperactividad de la gestión de Tato tuvo dos ejes que permitieron el incremento de sus redes de poder, la constante ejecución

¹² Entrevista a Pedro Brillard Poccard, gobernador de Corrientes entre los años 1997 y 1999. A su vez fue Ministro de Salud desde 1993 a 1997, durante el gobierno de Tato.





de obras públicas de todo tipo y el sostenimiento de la cadena de pagos a estatales por medio de diferentes métodos de ajuste (incluido el aporte solidario por el cual se retenía parte del salario a los estatales que superaban por aquel entonces los 750 pesos de sueldo).

Finalmente, otra de las herramientas de construcción de esta base social de apoyo va a ser que gesta una alianza con las capas más pobres por medio de varios mecanismos, entre ellos la entrega de viviendas, así como todo un despliegue de obra pública y asistencia social.

Conflictos de clases y estrategias de los sujetos sociales en lucha

Lo desarrollado hasta aquí estaba referido a una multiplicidad de ejercicios de poder, de mecanismos por el cual el régimen Tatista materializa una hegemonía que se articula en torno a la capacidad de administrar la crisis financiera provincial y en la capacidad de imponerse a las demás expresiones políticas. Lo interesante del caso es que el ordenamiento económico del estado provincial se presentó para el gobierno de Tato como un desafío totalmente ligado a la necesidad de dominar a los demás partidos políticos (sobre todo, y principalmente, a aquellos que tenían representación parlamentaria).

Desde nuestro marco conceptual, la imposición del programa de gobierno neoliberal, el "ordenamiento" del estado provincial, la alianza con el menemismo, los intentos liquidatorios del Pacto Autonomista Liberal, son parte de una dinámica social y política que expresa también un enfrentamiento de clases. La lectura foucaultiana de observar prácticas discursivas y extradiscursivas en términos de relaciones y dispositivos de poder las consideramos como una escala diferente (un examen capilar de las relaciones sociales) que también constituyen luchas de clases. La lucha de clases es una complejidad que no se reduce a "la frontalidad de una batalla final que determinará un cambio en el régimen imperante ni la lucha económica de una clase demandando condiciones

de trabajo y de vida, como es interpretada, la mas de las veces" (Roze, 2015: 9).

Realizadas estas aclaraciones, en este último apartado analizaremos la conflictividad de clase en términos de la emergencia de sujetos sociales que se enfrentan a este nuevo régimen hegemónico.

Tenemos entonces que en la década de los noventa junto a las formas de acumulación y la hegemonía que tienen lugar bajo el régimen "Tatista" se van a desarrollar experiencias de lucha social llevadas cabo por diversas organizaciones sociales y políticas.

La composición social de clase que tienen estas organizaciones esta en correlación con los principales rasgos de la formación social correntina que vimos en el primer apartado. En primer lugar, observamos la inexistencia de un proletariado urbano industrial significativo. La clase obrera industrial se limita a una presencia reducida de obreros textiles, obreros yerbateros, obreros tabacaleros, obreros de plantas citrícolas, obreros arroceros, obreros de embotelladoras, obreros de curtiembres, obreros metalúrgicos, obreros madereros, obreros de astilleros, obreros mineros no metálicos, obreros gráficos, obreros de maquinarias y equipos, entre otros (Schaller, 2014). Los changarines, el trabajo doméstico, y otras formas de trabajo informal, como el de los vendedores ambulantes, también se suman a estas filas de trabajadores.

La extendida actividad agropecuaria en la provincia de Corrientes, no genera principalmente una masa de obreros rurales formales, sino más bien trabajadores informales que entran y salen del mercado de trabajo.

Hemos visto en el primer apartado, que, en medio de este cuadro, la presión social por conseguir trabajo se tradujo en el crecimiento del empleo público.

Podemos aducir que estas condiciones objetivas constituyen una relación de fuerza desfavorable para la clase trabajadora correntina. En este contexto, las organizaciones sindicales cuya composición estaba basada en una clase trabajadora formal e informal ligada al empleo público son las que principalmente se van a enfrentar a políticas nacionales y provin-





ciales que afectan los intereses objetivos de su posición de clase: Despidos, flexibilización de los contratos, reducción de salarios, incrementos de costos de la obra social, retiros compulsivos, amenaza de privatización, entre otros.

Tenemos entonces un marco de conflictividad en Corrientes donde aparecen diversas organizaciones con acciones de protesta de distinta fuerza, desde comunicados, hasta petitorios, paros y tomas de edificios públicos. Algunos de los actores registrados son:

Cuadro III: Organizaciones que protestan en el periodo 1993-1998.

Organizaciones	Hechos de protesta	Destinatario al que se dirige la protesta
ATE – CTA	Comunicados, Paros	Gobierno nacional y provincial
SITRAJ	Comunicados, Paros, movilizaciones, tomas	Gobierno nacional y provincial
SUTECO	Comunicados, Paros	Gobierno nacional y provincial
62 Organizaciones	Comunicados	Gobierno nacional y provincial
AOEMC	Comunicados, paros, Marchas, tomas	Gobierno municipal y provincial.
ATUN	Comunicados y paros	Gobierno Nacional
ADIUNNE	Comunicado y paros	Gobierno Nacional
ACDP	Comunicados y paros	Gobierno provincial y nacional
JUP de Medicina	Comunicado	Gobierno Nacional
Comisión Interna de Tipoiti (Asociación obrera Textil)	Paros	Dueños de la fábrica textil Tipoiti
Trabajadores de la DEPEC	Comunicado, asambleas, paros	Gobierno provincial
FOECYT	Comunicado	Gobierno nacional
UTA	Comunicados, paros	Gobierno provincial
Gastronómicos	Comunicados, petitorios	Gobierno provincial
Empleados de Farmacia	Comunicado, movilización	Empresarios del sector, gobierno nacional.
Asociación Bancaria	Comunicados, paros	Gobierno Provincial
Desocupados de la capital Correntina	Comunicados, movilizaciones	Gobierno Provincial
Sanitaristas	Comunicados, paros	Gobierno Provincial

Fuente: Diario *Época*¹³

¹³ Registro diario de las noticias del Darío *Época* del año 1993 al año 1998. Este recorte temporal no toma el momento de alza de la lucha social que se produce en el año 1999 donde emergen nuevos sujetos sociales a la lucha y el enfrentamiento social varía notoriamente.

Desde sus inicios la gestión del nuevo gobierno provincial de Corrientes que asume en 1993 conducido por Raúl Rolando Romero Feris se reúne con referentes gremiales con el objetivo de lograr entendimiento y una "sana" convivencia. Una de las primeras reuniones las lleva a cabo con la delegación de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), este gremio venía manteniendo posturas confrontativas con los sucesivos gobiernos en defensa de sus afiliados (Época, 17/12/1993, p. 2).

Esta búsqueda de construir "afinidad" con los sindicatos va a derivar en una doble relación, con algunos sindicatos va a lograr estas relaciones de alianza (podemos pensar en un proceso de cooptación) y con otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas desarrollara enfrentamientos.

Partimos de observar la actuación del sindicato municipal de la capital correntina AOEMC. Dicho sindicato en la segunda mitad del año 1993 llevo a cabo un fuerte proceso de lucha (volanteadas, huelgas, tomas) dado el retraso salarial que sufría este sector de trabajadores. Si bien los reclamos tenían como destinatario principal al Intendente Belascoain del Pacto Autonomista Liberal, el sindicato también señala la responsabilidad del intendente Tato Romero Feris que gobernó entre 1989-1991 por el estado de quiebra en que dejó el municipio.

En septiembre de 1993 los trabajadores llevaban prácticamente tres meses sin cobrar sus salarios y esta organización gremial ya había realizado diferentes tipos de hechos de protesta (Época, 9/09/1993). El conflicto de los trabajadores municipales se soluciona parcialmente con la renuncia de Abraham Blugerman y la intervención provincial del municipio llevada a cabo por un político de "confianza" de Tato: Darío Casco. En los años 1996 y 1997 este sindicato retomaría la lucha cuando nuevamente se retrasan los salarios.

El gremio provincial de los docentes SUTECO (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes), al igual que el gremio docente ACDP (Asociación Correntina de Docentes Provinciales) a lo largo del periodo relevado (1993-1998), reclaman tanto por aumentos salariales, como por transferencias con fondos de las escuelas nacionales a las





provincias, como contra los efectos nocivos de la transformación educativa. La diferencia, sin embargo, es notoria, mientras ACDP termina realizando una alianza con el gobierno de Tato, SUTECO mantiene un claro enfrentamiento que lo lleva incluso a sufrir hechos de represión en manifestaciones callejeras. La línea de acción de SUTECO era realizar alianzas con ATE, ambas eran parte de la CTA que cobraba fuerza en los años noventa por sus luchas contra el neoliberalismo menemista.

Las líneas de acción respecto a las organizaciones gremiales, pero podemos decir sintéticamente que estas oscilaron entre la cooptación (la CGT local y gremios docentes como la ACDP aparecen en momentos críticos aportando su apoyo a la gestión de Tato) y la persecución y represión, en diferentes episodios son reprimidos y detenidos dirigentes locales ligados a la CTA de Corrientes. Estas diferentes posturas gremiales se corresponden la estrategia del régimen Tatista, que va tener posturas conciliatorias por una parte y confrontativas con los sindicatos.

Por medio de los decretos 1730 Y 2361, el gobierno de Tato Romero Feris, no sólo eliminaba el descuento de las mutuales sindicales de los salarios, sino también exigía una reafiliación gremial compulsiva de todos los trabajadores. Esta acción provoca no sólo el vaciamiento financiero de los gremios, sino también un vaciamiento de afiliados, dado que quienes deseen afiliarse deberían pasar por todo un sistema burocrático y coactivo de reafiliación, mientras tanto los sindicatos se quedaban sin aportes de sus afiliados.

Las reacciones de los diferentes sindicatos son dispares. Mientras el gremio de ATSA por medio de su titular Armando Paternó expresa su sorpresa ante estas medidas, *pero apostaba al dialogo*; gremios como ATE, SITRAJ (Judiciales), SUTECO (docentes) manifestaban rechazo y declaraban la ilegalidad de la medida.

La delegación provincial de UPCN (Unión de Personal Civil de la Nación), por ejemplo, se reúne con la administración Tatoromerista para "evaluar" el ajuste. Los mismos hacen de voceros del gobernador al mencionar que "respecto al 25% se estudiara la forma de ir reduciendo el

monto del descuento de los sueldos más bajos en adelante". (El gremio de UPCN alude al 25 % de retención solidaria de los salarios que realiza el gobierno en 1995).

Este mismo papel de apoyo lo tiene el gremio docente ACDP. Destacamos el hecho de que Tato elige los festejos del día del maestro organizado por dicho gremio para anunciar el pago total de los haberes que venían siendo descontados a lo largo del año 1996. Esta gran noticia "sorpresa" genera enorme algarabía de los más de 1500 docentes en el camping de ACDP en Paso de la Patria (Época, 15/09/1996, p. 4).

Por otra parte, Tato ponía en juego otras prácticas discursivas frente al reclamo de los sindicatos que luchaban por la "devolución" de sus salarios: "Son nostálgicos que enarbolan el afiche del Che Guevara y siguen en la joda (...) Los judiciales se quejan de llenos. Ya les he perdido el respeto (...) Por supuesto que ahí se prenden aquellos que andan con la foto del Che. Estos nostálgicos de tiempos superados" (Época, 29/05/1996:2).

Otros sectores de trabajadores que expresaban reivindicaciones de manera activa eran la Asociación de Trabajadores Universitarios no Docentes, reclamaban aumento salarial, punto en el que coincidían con los docentes nucleados en ADIUNNE, estos últimos se pronunciaban contra la flexibilización del trabajo, y la tendencia privatizadora de la esfera pública que entendían amenazaba a la universidad. La JUP, Juventud Universitaria Peronista de la Facultad de Medicina, se pronunciaba contra el arancelamiento de la universidad pública. Los obreros textiles de Tipoiti paraban por aumento salarial. Los trabajadores de la Empresa de Energía Eléctrica provincial DPEC se manifestaban ante el posible cierre de sedes de la empresa y la consiguiente reducción de personal. Luego se van a oponer a los intentos privatizadores. Los trabajadores del correo de FO-ECYT también se pronunciaban por la reducción de las fuentes de trabajo. Los trabajadores gastronómicos, de la UTA, farmacéuticos y sanitaristas luchaban por conseguir mejoras salariales. Finalmente, delegados y desocupados de la capital correntina se movilizaban por la falta de entrega de la ayuda económica.





Todos estos sectores -en mayor o menor grado- unifican reclamos al gobierno provincial con reclamos al gobierno nacional. Dado que entienden que los conflictos que se viven en las provincias tienen un trasfondo en el "ajuste" que vive la mayoría de la población a consecuencia de las políticas del gobierno nacional.

Otras formas puntuales y dispersas de lucha social se desarrollaron por trabajadores de la DPEC, de otras organizaciones docentes, por trabajadores de colectivos, por trabajadores viales, por trabajadores del agua de Corrientes, por lo general fueron medidas sumamente defensivas ante despidos o amenazas de despidos.

Para finalizar esta reseña de las organizaciones de trabajadores que se enfrentaron al régimen Tatista diremos que un arco de partidos políticos de orientación crítica respecto al neoliberalismo nacional acompaña esta lucha (incluso participan en las movilizaciones de manera conjunta con los sindicatos). Algunos de estos partidos políticos (cuya composición es menor frente al Pacto Autonomista Liberal, la UCR o el PJ); ya tenían un protagonismo en la década de los setenta en la etapa de auge de las luchas sociales en la Argentina.

Tomamos someramente aquí la expresión de algunos de ellos, como el PT (Partido de los Trabajadores) que denunciaba ya antes de la asunción de la gestión de Tato Romero Feris, "una nueva componenda" entre el Pacto Autonomista Liberal y la cúpula del Menemismo. Esta componenda se refiere a un acuerdo entre el Menemismo y el Pacto para no realizar una segunda vuelta electoral y garantizar de esta manera la consagración como gobernador de Raúl Tato Romero Feris. El Partido de los Trabajadores expresa a su vez:

Estos hechos y la desastrosa situación en que se halla la provincia, tras ocho años de gobierno del Pacto y tres años de la intervención menemista, no han hecho sino acentuar la corrupción, la ineficiencia, y la aplicación de una política liberal que ha sumido en la marginación, la desocupación, los bajos salarios a los trabajadores a lo que se agrega la destrucción deliberada de la educación y la salud pública (Época, 16/10/1993:3).

En el mismo sentido se expresaba el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Intransigente, el Frente Grande, el Partido Comunista, Patria Libre, El PCR (Partido Comunista Revolucionario), el MAS (Movimiento al Socialismo), entre otros, eran parte de manifestaciones públicas contra las medidas de gobierno que afectaban directamente a los intereses sociales de la clase trabajadora. La estrategia de estos partidos era cuestionar el régimen Tatista a partir de su alianza con el gobierno nacional de Menem de marcado carácter neoliberal que provocaba un aumento de la pobreza y la desocupación.

Reseñamos hasta aquí, algunas de las estrategias de los sujetos que protagonizaron formas de enfrentamiento con el régimen de Tato en una etapa previa a la agudización del conflicto que se va a dar a fines del año 1998 y que tiene en el año 1999 un ciclo de protesta inédita en la historia correntina.

Conclusión

Esta conclusión tiene un carácter provisorio dado que lo desarrollado aquí es parte de una investigación en curso. Realizada esta aclaración, comenzamos por decir que, en el largo proceso de gestación del territorio correntino la relación entre formas de propiedad de los medios de producción y las relaciones sociales de producción que le son inherentes derivaron en la construcción de un sujeto trabajador marcado por la obediencia y la reverencia al "patrón". La construcción de obediencia puede pensarse como un operador constante de las relaciones sociales en el entramado social correntino. Y si bien para fines del siglo XX la clase trabajadora correntina *encuentra* trabajo en ámbitos que ya no se ciñen a la actividad agropecuaria; esta relación social de obediencia subyace bajo las nuevas formas del trabajo.

Como contrapartida hemos observado todo un arco de gremios que no solo defienden las condiciones de vida de los asalariados, sino que





también se oponen al curso de los acontecimientos políticos en tiempos de neoliberalismo menemista a nivel nacional y su correlato en la provincia de Corrientes.

La "crisis" capitalista en Corrientes (al igual que en el país) tensiona sobre la posibilidad de abonar los salarios a la masa de trabajadores estatales. Esta amenaza de no poder pagar el salario a los estatales provinciales, que se convierte en realidad a principios del año 1999 constituyendo el desencadenante final de la "caída" del Tatismo.

Como vimos, la hegemonía que hemos comentado estuvo íntimamente ligada a su habilidad para lograr constante financiamiento. De allí también su debilidad. Podemos hablar de una hegemonía inestable, justamente, por los límites que posee el propio Tato Romero Feris para construir alianzas y apoyo, esto es, para desarrollar un arte de gobierno que conduzca al conjunto de los partidos políticos (y organizaciones gremiales) a partir de esta constante necesidad de contar con apoyo para la refinanciación de préstamos y la obtención de nuevos créditos. La presión que intenta ejecutar este régimen político es doble, aprobar los pedidos de financiamiento y, por otra parte, no cuestionar el uso de dichos fondos. La ruptura de las relaciones sociales establecidas por los partidos políticos tradicionales que realiza el régimen de Tato es tal; que por momentos desconoce la existencia del poder legislativo, y en otros, se mantiene dentro de las reglas de juego del sistema republicano. Este nivel de enfrentamiento produce un fuerte desgaste en la fuerza del régimen Tatista, así durante varios meses del año 1996 está abierto un pedido de juicio político en su contra para destituirlo al gobernador por la inconstitucionalidad de los actos de gobierno. Tato finalmente logra evitar ser destituido por el apoyo nacional de Menem entre otros factores.

Desde el primer momento del gobierno de Tato se visibilizaron posturas críticas: gremios ligados a la CTA como judiciales, docentes como SUTECO, ATE, Trabajadores del INVICO, entre otros, realizaron asambleas, paros, marchas contra las medidas de ajuste con que se inaugura el gobierno de 1993. El desarrollo de esta lucha, sin embargo, se da en

un escenario de adversidad, (el peligro de perder el empleo, de ser reprimido por fuerzas del orden en cualquier manifestación, de ser encarcelado, de sufrir tareas de "inteligencia", ver invadida la privacidad, de sufrir el constante escarnio social, entre otros métodos de control).

El triunfo electoral de Tato en 1997 luego de haber armado el Partido Nuevo a fines de 1996 muestra la fuerza de este régimen que absorbe prácticamente a los militantes del Partido Autonomista, como del PJ, del PL y en mucho menor medida del Radicalismo. El Partido Nuevo logra aparecer como una fuerza transversal que transparenta los intereses populares al mismo tiempo en que Corrientes se presenta como la provincia más obediente a los pactos fiscales de corte neoliberal que impulsa el ministro de economía Domingo Cavallo. Esta contradicción abre frentes de conflictividad que finalmente este régimen no logra contener. Las mismas organizaciones gremiales que durante el año 1997 ven el aplastante triunfo electoral que logra el Partido Nuevo y desarrollan sus luchas en los márgenes de la vida política correntina, pronto se verán desbordadas por la participación social de miles y miles de correntinos cuando finalmente la cadena de pagos salariales a los estatales se corte. Previo a dicho momento de inflexión, los gremios que se opusieron al régimen de Tato y sus políticas de ajuste tuvieron que oscilar entre estrategias de sobrevivencia y acciones reivindicativas puntuales a nivel local, sumándose a las huelgas impulsadas a nivel nacional por la CTA y el MTAY las muy esporádicas huelgas de la CGT que operaba como un aliado del menemismo.

Estas formas de resistencia al régimen, si bien no fueron el factor principal de oposición (la principal oposición de Tato la va a tener desde un principio en los partidos mayoritarios tradicionales a los que intenta controlar y que terminan por retirar todo apoyo legislativo), constituyeron una clara defensa de los intereses de los trabajadores asalariados estatales en particular, defensa que sirvió como eslabón para dar lugar a una nueva etapa de lucha social a comienzos del año 1999. Esta lucha social que se produce en Corrientes en el año 1999 asume la complejidad de la





lucha de masas, pero desde nuestro análisis no conserva la claridad de la caracterización del régimen de Tato como un gobierno neoliberal.

Como comentario final decimos, que la presente aproximación a este periodo histórico nos permite observar la constitución de una nueva hegemonía en un proceso acelerado por medio de nuevos mecanismos de poder que desplazan a los partidos tradicionales correntinos. Pero el nivel de violencia implementada en los diversos enfrentamientos y la misma implementación de un programa de gobierno neoliberal lo constituyen como inestable.

Bibliografía:

Amin, S. (1973). *¿Cómo funciona el capitalismo?* Buenos Aires: Siglo XXI.

_____ (1976). *Imperialismo y desarrollo desigual*. Barcelona: Fontanella.

Artese, M. (2005). *Lucha de clases y enfrentamiento simbólico: Corrientes 1999*. Buenos Aires: RyR, pp. 57 – 73

Astarita, R. *Ciclos económicos en la Argentina de los noventa*. Buenos Aires. Herramienta.

Baran, P. (1959). *Economía política del crecimiento*. México: Fondo de Cultura Económica.

Basualdo, E. (2010). *Desarrollo económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea*. En: AAVV. *Desarrollo económico, clase trabajadora y luchas sociales en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires. IEC. CONADU.

Bonaudo, M. y Songoni, E. (2000). *Cuando disciplinar fue ocupar*. Buenos Aires: Mundo Agrario. Revista de estudios rurales, Vol. 1 N° 1.

Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista*. Buenos Aires: Prometeo.

Dobb, M. (1969). *Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo*. Barcelona: Oikos.

Foucault, M. (2010). *Nacimiento de la biopolítica*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Graciosi, M. (2020) *Hegemonía y Gubernamentalidad en el territorio de Corrientes en el periodo 1993-1999*. Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. UNAM.

Gramsci, A. (1981). *Cuadernos de la cárcel*. México: Era.

Marín, J. C. (1995) *Conversaciones sobre el poder*. Buenos Aires. Oficina de Publicaciones del CBC. Universidad de Buenos Aires.

Neffa, J. C.; Battistini, O. Panigo, D. y Pérez, P. (1999). *Exclusión Social en el Mercado de Trabajo. El Caso de Argentina*. Santiago: OIT, Fundación Ford.

Ojeda, V. (2008). *Empleo Municipal: Trabajo, Clientelismo y Ciudadanía en Corrientes*. V Jornadas de Sociología de la UNLP. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología, La Plata.

Roze, J. P. (2007) *Conflictos agrarios en la Argentina. El proceso liguista*. Buenos Aires. RyR.

Slutzky, D. (2011). *Estructura social agraria del nordeste de la Argentina: Desde la incorporación a la economía nacional al actual subdesarrollo concentrador y excluyente en la actualidad*. Inédito.

Sormani, H. (2011). *El nordeste Argentino: Sociedad y Espacio. El proceso formativo regional 1588- 1970*. Buenos Aires. Centro de Estudios Alexander von Humboldt.

Schaller, E. (2014). *La formación de la economía correntina*. Resistencia. RES GESTA. N° 51

Sweezy, P. (1973a). *Sobre la teoría del capitalismo monopolista*. En: "El capitalismo moderno y otros ensayos". México. Nuestro Tiempo.

Sweezy, P. (1973b). *Teoría del desarrollo capitalista*. México: Fondo de Cultura Económica.

Zimerman, H. (2001). *La Transición democrática y las nuevas formas de hacer política. La aparición del "Tatismo" en Corrientes*. Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades. UNNE.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

El '68 checoslovaco y la intervención militar soviética: el debate en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario

The Czechoslovak '68 and the soviet military intervention: the debate in the origins of the Revolutionary Communist Party.

Juan Manuel Cisilino*

*Recibido: 9 de octubre de 2020
Aceptado: 19 de noviembre de 2020*

Resumen: Este artículo se propone reconstruir y analizar los debates que atravesaron al Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria del Partido Comunista (PC-CNRR), luego Partido Comunista Revolucionario (PCR), en torno a la intervención militar soviética en la convulsionada Checoslovaquia de 1968. Se analiza también la influencia de su posicionamiento en la construcción de una identidad política con perfil propio, tomando en especial consideración la postura de la organización de la cual el PCR provenía, el Partido Comunista de la Argentina (PCA).

Palabras clave: PCR, PCA, Primavera de Praga, Intervención soviética en Checoslovaquia, Movimiento Comunista Internacional.

Abstract: This article aims to rebuild and analyze the debates that underwent in the National Committee for the Revolutionary Recovery of the Communist Party, then called Revolutionary Communist Party (RCP), around the soviet military intervention in the convulsed Czechoslovakia of 1968. It's also analyzed the influence of their positioning in the construction of their political identity with their own profile, attending with special consideration at the position of the organization from which the RCP comes, the Communist Party of Argentina.

Key words: PCR, PCA, Prague Spring, Soviet Intervention in Czechoslovakia, International Communist Movement.

* Profesor de Sociología y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. juanmanuelcisilino@gmail.com

Introducción

El año 1968 se ha erigido como un ícono que condensa esa variedad de fenómenos a escala global que expresaron un auge de la movilización social. El '68 "fue destacado como aquel donde el mundo se sacudió" (Bonavena, 2018: 315) y que "conmocionó al mundo" en tanto "fue el epicentro de una transformación" (Kurlansky, 2004: 485); para las generaciones más jóvenes fue "un gran despertar a un mundo al filo de la revolución" (Hobsbawm, 2013: 3). Incluso se lo ha señalado como el año más turbulento desde finales de la Segunda Guerra Mundial (Caute, 1988).

El proceso conocido como la "Primavera de Praga" en 1968 y su clausura con la intervención soviética fue parte constitutiva de los "60 globales" y tuvo hondas repercusiones a nivel mundial, incluida la Argentina. Como señala Eric Zolov (2018), la idea de que "los 60 fueron globales" permite "comprender el cambio local dentro de un marco transnacional, constituido por múltiples contracorrientes de fuerzas geopolíticas, ideológicas, culturales y económicas" (p. 12). Desde esa perspectiva, el presente trabajo se propone reconstruir y analizar los debates que atravesaron al Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria del Partido Comunista (PC-CNRR), luego Partido Comunista Revolucionario (PCR), en torno a la intervención militar soviética en la convulsionada Checoslovaquia de 1968. Para ello, tomamos en especial consideración también la postura de la organización de la cual el PCR provenía (el Partido Comunista de la Argentina -PCA), e indagamos, a su vez, en la influencia que el posicionamiento del "comunismo revolucionario" ejerció en la construcción de su identidad política con perfil propio.

Cabe destacar que los procesos posteriores a la muerte de Stalin en 1953, especialmente a partir del viraje en el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) en 1956, el ascenso de Nikita Jrushchov al poder en 1957 y las intervenciones en Polonia y Hungría en particular, produjeron una serie de polémicas, replanteamientos, críticas y rupturas que atravesaron al conjunto del llamado Movimiento Comunista





Internacional (MCI) y las diversas corrientes populares y de izquierda que éste influenciaba o con el que debatían. Un punto particularmente agudo fue el llamado “conflicto chino-soviético”, a partir del cual se produjo la emergencia del maoísmo como corriente política diferenciada en el MCI (Rupar, 2018a).

La intervención militar soviética en Checoslovaquia produjo un enorme impacto en la opinión pública y generó grandes debates en los ámbitos políticos e intelectuales. Éstos se expresaron especialmente entre las corrientes intelectuales y políticas de raíz comunista y de izquierda, tal como había ocurrido ya con la intervención en Hungría en 1956 y las polémicas acerca del período soviético bajo la dirección de Stalin luego del “Informe” de Jrushchov en el XX Congreso. En particular, para nuestro trabajo, interesa la recepción de dicha intervención militar en el seno del “comunismo revolucionario”, corriente política que, tan sólo unos meses antes, fue el principal emergente de la fractura más importante en la historia del Partido Comunista oficial.¹

El rol de los soviéticos en la llamada “Primavera de Praga” fue, como veremos más adelante, respaldado por el PCA y condenado por el PCR, lo cual no sólo profundizó la brecha entre ambos partidos, sino que también implicó el comienzo del distanciamiento del “comunismo revolucionario” con la Unión Soviética en un largo proceso hasta su definitiva adhesión al maoísmo en 1974.

Antecedentes: el XX Congreso y la intervención soviética en Hungría

Para abordar los debates que se produjeron en el seno de dichas corrientes comunistas en Argentina a raíz de los sucesos en Checoslova-

¹ Este trabajo pretende, a la vez, contribuir a una investigación en curso que se propone profundizar en el conocimiento de los debates acerca del “camino de la revolución” en Argentina entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda a través de la reconstrucción y análisis de la trayectoria del PCR en tanto experiencia particular en el campo de la nueva izquierda, desde la fractura con el PCA en 1967 hasta el golpe de estado de 1976.

quia, en primer lugar, es necesario comprender, al menos sucintamente, los cambios que se operaron en la política soviética, tanto en lo interno como en lo externo, a partir del XX Congreso; a la vez, la intervención militar soviética en Hungría en 1956 constituyó el antecedente que operó como referencia inmediata, más allá de sus características particulares, para interpretar los sucesos de la llamada “Primavera de Praga”.

El XX Congreso del PCUS, realizado en febrero de 1956, fue un punto de inflexión en la historia soviética y en el MCI. Sus tesis y su impacto exceden los límites del presente trabajo;² nos limitamos a plantear sucintamente algunos de sus postulados, en particular aquellos que produjeron la ruptura entre la Unión Soviética y la República Popular de China, bajo el impulso de Mao Tse Tung. Esta polémica, en principio solapada, entre el PCUS y el PC chino se vinculó principalmente con aspectos esenciales de la línea internacional soviética a partir de su XX Congreso y expresó discusiones de fondo acerca del marxismo y de las experiencias socialistas. Entre Mao y la dirigencia soviética se fueron delineando “dos modos de valorar la etapa mundial y las tareas que el socialismo tenía por delante” (Rupar, 2018a: 582); el disparador inicial fue la valoración de Stalin pero la tensión central se desarrolló en torno a la caracterización de la situación política internacional (atado a lo cual estaba la posibilidad o no de la “coexistencia pacífica”) y a las vías para la toma del poder (pacífica o armada). En ese sentido, las corrientes que asumieron el maoísmo suscribieron a “la defensa de la vía armada para la revolución, la imposibilidad de la coexistencia pacífica con el bloque capitalista hegemónico por Estados Unidos y la continuidad de la lucha de clases” en el socialismo (Rupar, 2018a: 582-583), ejes que terminarían por distanciar a China de la Unión Soviética, especialmente a partir de 1963. Para los partidarios de las tesis de Jrushchov, el principal peligro que debía combatir el movimiento comunista entre sus filas era el dogmatismo; para los comunistas encabezados por Mao, el principal peligro era el re-

² Para un análisis de su recepción por parte del PCA, ver Piemonte, 2013.





visionismo que apuntalaba una línea de “restauración capitalista” y en política exterior practicaba una línea “socialimperialista”.³

Como destaca Geoff Eley (2003), antes de la intervención en Hungría, ya en 1953 se había producido un levantamiento en la República Democrática Alemana, a partir de las protestas de los obreros de la construcción contra el aumento de los índices de producción y exigiendo elecciones libres; también se había desplegado una oleada general de huelgas que afectó a más de cien fábricas en Checoslovaquia, incluido el complejo de fábricas de armas, y que luego se propagaron por Hungría, Bulgaria y Rumania, e incluso en los campos del complejo minero en Siberia, en la propia Unión Soviética.

En 1956, estalló una protesta obrera en Potsdam, por entonces Polonia, aprovechada por Władysław Gomułka (secretario general del Partido Obrero Unificado) para regresar al poder con el apoyo soviético y emprender reformas de liberalización económica, negociaciones con la Iglesia, etc.

En Hungría, ese mismo año, los acontecimientos fueron “más extremos y dieron resultados diferentes” (Eley, 2003: 329): en 1953, Imre Nagy había sido designado primer ministro, pero sus intentos de reforma se vieron bloqueados y fue obligado a dimitir en 1955; se sucedieron luego protestas de escritores, estudiantes y sectores católicos que, entre otras cosas, exigían libertad de prensa, cambios en el sistema y la rehabilitación de Nagy, quien recuperó su cargo en octubre de 1956. En el plano económico, las reformas de Nagy eran más cercanas al conjunto de medidas sancionadas en 1921 y conocido como Nueva Política Económica (NEP), sustituta del “comunismo de guerra” y con fuertes concesiones al campesinado (Carr, 1979), que a la economía planificada y a los planes quinquenales de la época de Stalin.

³ Este concepto hace referencia a la tesis maoísta que considera que a partir de 1956 la Unión Soviética emprendió un proceso de restauración capitalista de manera original hasta convertirse en una potencia que bajo la bandera del socialismo desarrollaba una política imperialista y se disputaba el control del mundo con Estados Unidos, es decir era “socialista de palabra e imperialista en los hechos” (Celentano en Biagino & Roig, 2008: 325-327).

Devuelto al poder, Nagy rápidamente restauró el sistema de partidos múltiples, apoyado por una coalición (formada por el comunista, el de pequeños propietarios agrícolas, el socialdemócrata y el de campesinos nacionales) y el 1° de noviembre retiró a Hungría del Pacto de Varsovia.⁴

En ese contexto, “Budapest se sumió en el caos al unirse en las calles fascistas y saqueadores a los demócratas y partidarios de la reforma” (Eley, 2003: 330). Sólo tres días después, el 4 de noviembre, el Ejército Rojo entró en Budapest y en todas las ciudades importantes. Es interesante destacar que la principal resistencia provino de los consejos obreros, que habían resurgido en Europa por primera vez desde 1917-1923, especialmente después de la caída de Nagy.

El levantamiento húngaro fue objeto de polémicas: los anticomunistas defendían su autenticidad democrática y los partidarios de los soviéticos enfatizaban sus peligros contrarrevolucionarios frente a la aparición de fascistas y “agentes occidentales”. A la vez, la salida de Hungría del Pacto de Varsovia constituyó un peligroso e inadmisibles antecedente para el dominio soviético.

“La primavera de Praga” y la intervención soviética

Para abordar el proceso que derivó en la intervención militar en Checoslovaquia, es imprescindible que primero reconstruyamos sucintamente algunos aspectos claves del contexto histórico a escala internacional, por un lado, y de la situación checoslovaca en particular, por el otro.

Han pasado más de cincuenta años de aquel convulsionado 1968. Como ya hemos consignado, en distintas partes del mundo, se expresaron

⁴ Llamado oficialmente “Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua”, fue una alianza militar con el objetivo de contrarrestar el rearme de la Alemania Occidental y su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Se firmó en Varsovia en 1955 por Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Polonia, Rumania y la Unión Soviética. Establecía el compromiso de ayuda militar durante 20 años en caso de que cualquiera de los países miembro fuera atacado por una potencia extranjera; la alianza estaba dominada por la Unión Soviética, que subordinaba militarmente a los demás países y ejercía un estricto control.





diversas manifestaciones de conflictividad social y política en el contexto posterior a la Segunda Guerra Mundial y en plena “Guerra Fría”. Cabe mencionar algunas de las más destacadas: en Europa, tuvo una enorme repercusión el “Mayo Francés”, esas revueltas estudiantiles con participación de obreros y de otros sectores que pusieron en discusión desde el sistema educativo y los exámenes hasta el capitalismo, las guerras imperialistas y la cultura en el marco de la V República bajo la presidencia del general Charles De Gaulle; la ofensiva del Tet por parte del VietCong contra la invasión estadounidense en las principales ciudades del sur despertó simpatías y esperanzas en amplios sectores juveniles y progresistas de todo el mundo; en Estados Unidos, la resistencia contra la Guerra de Vietnam crecía (en especial entre los jóvenes y en el movimiento hippie), el Movimiento por los Derechos Civiles alcanzaba una gran notoriedad (golpeado a su vez por el asesinato de Martin Luther King, al que se sumaría el del popular candidato a presidente Robert Kennedy) y las protestas antibelicistas durante la Convención Demócrata fueron duramente reprimidas; en China, en pleno conflicto en el seno del MCI, se desarrollaba una feroz y masiva disputa por el poder y por el rumbo del socialismo en la Revolución Cultural Proletaria dirigida por Mao Tse Tung. En América Latina, por su parte, crecía la influencia de la Revolución Cubana en los movimientos revolucionarios; en Cuba, se declaró 1968 como el año del “Guerrillero Heroico” en homenaje al Che Guevara, asesinado en octubre de 1967 en Bolivia; en México, una gran manifestación principalmente estudiantil fue reprimida con dureza por el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En ese contexto se desarrolló el proceso checoslovaco; para abordarlo específicamente, es preciso tener presentes algunas de sus características particulares: durante el período de entreguerras, había sido el mayor partido comunista de Europa y luego de la Segunda Guerra Mundial fue el más fuerte y contaba con una enorme popularidad. Sin embargo, en los primeros años de la década del sesenta, la crisis era grave y se estudiaban reformas orientadas al mercado (Eley, 2003). Algunos datos pueden resultar ilustrativos para caracterizar la situación en la que

se encontraba Checoslovaquia en esos años: en 1960, la Constitución proclamaba haber llegado al “socialismo pleno”; el porcentaje de hijos de clase trabajadora que cursaban estudios superiores había pasado de un aumento del 10% en 1938 a uno de casi el 40% en 1963; históricamente, la minoría eslovaca del sur y del este del país era más pobre y más rural que los checos del noroeste; en 1964 el ritmo de crecimiento del país era el más bajo de todo el “bloque del Este”, cuyas repercusiones impactaron especialmente en la industria pesada de Eslovaquia central (Judt, 2005).

Según Tony Judt (2005), el proceso checoslovaco en 1968 estuvo signado por tres ilusiones: la primera refiere a que los estudiantes, escritores y reformistas que protagonizaron las protestas consideraban que las libertades y reformas impulsadas por el eslovaco Alexander Dubcek (secretario general del PC checoslovaco) podían integrarse al “modelo socialista” sobre la creencia de que era posible un “socialismo democrático”; la segunda consistió en la creencia por parte de los dirigentes del PC checoslovaco (PCCh) de que podían manejar la situación creada a partir de las reformas sin perder el control del país; y la tercera se vincula con la convicción de Dubcek de que podía “mantener a raya” a los dirigentes soviéticos, ya que consideraba que el error de Nagy en Hungría había consistido exclusivamente en retirarse del Pacto de Varsovia.

La dinámica que condujo a la “Primavera de Praga” fue compleja: la lucha interna dentro de la dirección del partido gobernante entre “conservadores” y “reformistas”, el rol activo de intelectuales que se manifestaban a favor de la reforma e interpretaban las protestas populares en ese sentido, y el resurgimiento de partidos que estaban ilegalizados contribuyeron a una situación de radicalización de los estados de ánimos de las masas; expresiones de esto fueron las sucesivas manifestaciones, asambleas estudiantiles, mítines públicos y el rol crítico de la prensa. Fue muy importante el resurgimiento de los consejos obreros, como ya había ocurrido en Hungría.

Desde la Unión Soviética, Leonid Brézhnev (principal dirigente soviético desde 1964 hasta su muerte en 1982) miraba con suma preocu-





pación los acontecimientos y preparaba una intervención militar para clausurar las manifestaciones populares “contrarrevolucionarias”, amenazando con “ocupar todo vuestro país en veinticuatro horas” (Eley, 2003: 355). La llamada “Primavera de Praga”, al igual que los acontecimientos en Hungría en 1956, pusieron en jaque el monopolio político de las dirigencias y especialmente el control de la Unión Soviética sobre estos países europeos. Hay que tener presente que para aquel momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) no controlaba ni China, ni Albania, ni Rumania, ni Yugoslavia, y no estaba dispuesta a perder mayor poder político en un contexto de aguda disputa con los Estados Unidos por las zonas de influencia.

Los cambios estructurales se habían desarrollado en Checoslovaquia durante el corto período de ocho meses: desde enero a agosto de 1968, bajo el gobierno de Dubcek como Primer Secretario del Partido Comunista (hasta ese momento había ocupado ese puesto en Eslovaquia). Su programa “reformista” pretendía sustituir el modelo de la economía centralizada por un modelo de mercado, con planificación descentralizada, flexible y adaptable a las condiciones, y pugnaba por “liberar” la actividad económica de las empresas de las injerencias administrativas y políticas por parte del Estado (Patula, 1993).

Estas medidas, formuladas en el “Programa de Acción del Partido Comunista Checoslovaco”, fueron puestas en práctica por la gestión de Dubcek en oposición a los llamados “conservadores”, como Antonín Novotny, quien se había visto obligado a renunciar a la presidencia a comienzos de 1968. Estos sectores, que también habían sido parte del proceso de “desestalinización” emprendido por Jrushchov, más que críticos de las reformas económicas se oponían a cualquier intento de “liberalización” política y de distanciamiento del control soviético. No obstante, las reformas de Dubcek se desarrollaron en un clima de euforia en la que surgieron diversos grupos de presión sobre los aparatos de poder, tales como el Club de los Comprometidos Sin Partido, la Sociedad de los Derechos del Hombre, entre otros. En el ámbito universitario, se desarrolla-

ron comités obrero-estudiantiles y en la esfera estrictamente gremial surgió el Movimiento Sindical Revolucionario que planteaba la importancia de los consejos obreros para la democracia fabril, la autonomía de los sindicatos, la herramienta de la huelga como último recurso, así como el apoyo al PC y al gobierno en toda medida que favoreciera a la clase obrera (Patula, 1993).⁵

Es interesante destacar que la “profunda movilización social que vivió Checoslovaquia durante la Primavera de Praga, no estuvo dirigida en contra del partido comunista”, aunque “algunos sectores de la población rebasaron los límites aceptados por el partido” (Patula, 1993: 197). De hecho, su autoridad creció a medida que la amenaza de intervención militar se cernía sobre el país. El XIV Congreso partidario funcionó con más de mil delegados provenientes de distintas zonas del país y se desarrolló en una fábrica de equipos electrónicos en las afueras del centro de Praga; su resolución principal fue exigir el retiro de las “tropas invasoras” y la libertad de los dirigentes detenidos.

Es insoslayable comparar el ingreso de los tanques soviéticos luego de la liberación y derrota de los nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial con la intervención militar en agosto de 1968, sin el apoyo popular ni el acuerdo del gobierno: “El primer tanque soviético que entró en la Praga libre llevaba el número 23. Era este mismo tanque, ahora un monumento, al que rodeaban otros tanques rusos en agosto de 1968” (Marker, 1977). Fuentes militares checas estimaron que en su momento cumbre las fuerzas invasoras oscilaron en las 650 mil, casi cien mil más que las que los estadounidenses tenían en Vietnam por aquel entonces; esta comparativa se expresaba en el terreno artístico (muy influyente en la sociedad checoslovaca): algunos de los eslóganes más populares que se pintaron en las paredes de la Praga ocupada fueron “Estados Unidos en Vietnam, Unión Soviética en Checoslovaquia” y “Despierta Lenin, Brezhnev se ha vuelto loco”, entre otros (Chapman, 1969).

⁵ A la vez, proliferaron las radios clandestinas, incluso hubo emisiones televisivas que pudieron realizarse en la Praga ocupada por las tropas del Pacto de Varsovia.





Con la invasión de las tropas soviéticas y de los demás países del Pacto de Varsovia, se clausuró el movimiento “reformador” que el propio Dubcek había propagandizado como un “socialismo de rostro humano”. El mensaje de la dirigencia soviética era claro: la “liberación implicaba *ipso facto* contrarrevolución” (Eley, 2003: 357). Esto profundizó las fracturas, debates y desilusiones en el MCI y en los vastos sectores políticos e intelectuales de las izquierdas en todo el mundo. Como destaca Ferrero Blanco (2004), la actitud soviética produjo una fisura definitiva entre los países del “Bloque del Este” y también entre los partidos comunistas occidentales y la URSS, aunque esto no haya modificado las relaciones económicas y comerciales. En Europa, la intervención dividió los PC, la mayoría de los cuales la condenó en mayor o menor medida, y fue un punto de inflexión importante para los partidos de Europa Occidental que avanzaban en la constitución de lo que se conocería como “eurocomunismo”.

En América Latina, la Revolución Cubana constituía una referencia insoslayable para los comunistas y el campo de las izquierdas. La posición que asumiría la dirección de la isla generaba expectativas en un amplio sector que repudiaba la actitud intervencionista soviética.⁶

Si bien el dirigente cubano apoyó la intervención, planteó una serie de reparos e incluso críticas al “olvido de los ideales comunistas” y al “oportunismo”, preguntándose, entre otras cosas, si los soviéticos “cesarán de apoyar también en la América Latina a esas direcciones derechistas, reformistas, entreguistas, conciliatorias, enemigas de la lucha armada revolucionaria, que se oponen a la lucha de liberación de los pueblos” (Castro, 1968). Esta visión es significativa porque tanto el PC como el incipiente PCR enfatizaron distintos fragmentos del discurso de Castro en

⁶ Poco después de la entrada de los tanques soviéticos, el 23 de agosto, Fidel Castro expresó en un discurso público su posición: “La decisión en Checoslovaquia sólo se puede explicar desde un punto de vista político y no desde un punto de vista legal. Visos de legalidad no tiene francamente absolutamente ninguno. ¿Cuáles son las circunstancias que han permitido un remedio de esta naturaleza? (...) Lo esencial que se acepta o no se acepta es si el campo socialista podía permitir o no el desarrollo de una situación política que condujera hacia el desgajamiento de un país socialista y su caída en brazos del imperialismo. Nuestro punto de vista es que no es permisible, y que el campo socialista tiene derecho a impedirlo de una forma o de otra”. Transcripción del autor a partir de Marker, 1977.

relación a sus respectivas posiciones políticas frente a los hechos y, a la vez, como dirigente de la Revolución Cubana, era indudablemente un punto de referencia para el campo de las izquierdas.

En Argentina, la dictadura de Onganía, por su parte, condenó la intervención soviética considerando que ésta “afectaba seriamente la paz internacional y era clara evidencia de la falta de respeto a los principios de coexistencia entre los estados” y ofreciéndose a apoyar cualquier acción realizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Zourek, 2014: 65-66).

Los debates acerca del '68 checoslovaco en los orígenes del PCR

Para encarar el debate en el seno del comunismo argentino, es fundamental analizar las posiciones políticas de los actores en el contexto histórico en el que las sostuvieron, puesto que de otro modo podríamos caer en un abordaje ahistórico que se abstraería de las condiciones históricas concretas en que dichas posturas se produjeron y se defendieron.

En Argentina, la dictadura del general Juan Carlos Onganía había impuesto una política económica que buscaba desarticular importantes conquistas obreras en un clima de represión. Si bien desde 1966 hasta el Cordobazo en mayo de 1969, desde el punto de vista de la protesta social lo que predominó en diversos sectores fue un estado de confusión y de distintas expectativas, el año 1968 puede ser considerado como una transición o bisagra (Nassif y Rugar, 2016): se fundó la Confederación General del Trabajo (CGT) de los Argentinos, bajo la conducción del obrero gráfico Raimundo Ongaro, configurándose como un polo opositor a la dictadura; se desarrollaron luchas de trabajadores (como la de los petroleros) y de estudiantes como el paro nacional convocado por la Federación Universitaria Argentina; y se produjo la aparición pública de las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), una de las primeras organizaciones guerrilleras. El 6 de enero de 1968, cuando el Partido Comunista de la Argentina cum-





plía cincuenta años de vida, se fundó el poco tiempo después llamado Partido Comunista Revolucionario, formado por miles de afiliados que protagonizaron la fractura más importante de la historia del PCA.⁷

El Partido Comunista argentino frente a la intervención

Para abordar la posición del PCA en torno a los sucesos en Checoslovaquia, es importante tener presente uno de los requisitos básicos propuestos por Perry Anderson (1984) a la hora de analizar a un partido comunista alineado con la Unión Soviética: deben inscribirse su historia y sus posicionamientos en el marco internacional, sin caer en el reduccionismo de concebirlo como una simple marioneta “cuyas extremidades eran manipuladas mecánicamente por Moscú” (p. 157). La caracterización de la relación del PCA con la URSS excede los límites de este trabajo, pero a los fines de nuestro análisis cabe destacar, como lo hace Adriana Petra (2017), que por aquel entonces el “internacionalismo proletario” implicaba “la más absoluta fidelidad” a la Unión Soviética. Esto efectivamente es un aspecto importante que incidió en el apoyo del PC a la intervención militar del Pacto de Varsovia en la capital checoslovaca. Aunque no profundizamos en el análisis exhaustivo del PC acerca del proceso checoslovaco, nos centramos en su posición frente a la intervención militar.⁸

Ya en julio, en una declaración titulada “Sobre los sucesos en Checoslovaquia” (PC, 1968a),⁹ la dirigencia comunista advertía que el proceso

⁷ Véase Cisilino, 2016, 2017 y 2018. Para otros abordajes sobre la trayectoria del PCR en distintos ámbitos, ver: Califa, 2015; Rugar, 2018b y 2019; Laufer, 2018; Lissandrello, 2015 y 2018; Rubio, 2017, 2018a, 2018b y 2020; Siskindovich, 2017 y 2020; entre otros.

⁸ Es interesante el testimonio de Oscar Laborde, quien fuera luego dirigente del Comité Central del PCA hasta mediados de los noventa, porque estuvo viviendo en la Praga ocupada por las tropas soviéticas en 1969. Según su mirada, si bien la reticencia y antipatía por la presencia de tropas soviéticas era mayoritaria en la sociedad checoslovaca, no había una resistencia visible, aunque sí hubo manifestaciones al cumplirse un año de la ocupación. Según Laborde, “para los comunistas de aquella época no estaba bien haber intervenido Checoslovaquia, pero era bajo la misma doctrina que hacía que [los soviéticos] apoyaran a Vietnam en contra del Imperio [estadounidense]”. Entrevista a Oscar Laborde realizada por el autor en mayo de 2019.

⁹ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

en curso constituía un peligro para la base misma del sistema socialista, puesto que la “supuesta liberalización” pretendía en realidad “restaurar el viejo régimen capitalista, empujados con la ayuda del imperialismo internacional”. Para el PCA, ejemplo claro del programa de restauración capitalista era el “Manifiesto de las dos mil palabras” del escritor Ludvík Vaculík, publicado el 27 de junio de 1968 con la firma de académicos, dirigentes de universidades como el rector de Praga, escritores y poetas muy reconocidos, directores de cine y de teatro, atletas olímpicos y campeones deportivos. Este artículo, que a los pocos días contaba con miles de adhesiones, planteaba la necesidad de recuperar los ejemplos de Tomás Masarik (fundador de Checoslovaquia) y de Edvard Benes (presidente checoslovaco entre 1935 y 1948). El PC acusaba al primero de haber participado de la represión en la revolución húngara y al segundo de haberse negado a una alianza con la Unión Soviética en 1938 y de asilarse en Inglaterra luego de que los nazis invadieran Checoslovaquia.

Según el análisis del PCA, los “reformadores” no pretendían en verdad la transformación del “frente nacional en el máximo órgano del país” sino la exclusión de los comunistas de los puestos dirigentes en los movimientos de masas y en los órganos de poder: el objetivo de los “reformistas” sería, entonces, un “socialismo sin comunistas”, como plantearon no sin ironía en su declaración. La táctica de estos “contrarrevolucionarios” habría consistido en “contraponer las organizaciones de masas al Partido; enfrentamiento generacional; oposición de obreros e intelectuales” con el objetivo de sacar a su país del Pacto de Varsovia y “cumplir los pedidos del revanchismo germano-occidental”. En una palabra, lo que estaba siendo amenazado en Checoslovaquia eran los principios socialistas y esto hacía “peligrar los intereses vitales comunes de los demás miembros de la comunidad socialista”.

Hacia agosto el proceso se había agudizado y el riesgo inminente de intervención había tensado la situación. Coincidente con las argumentaciones de la dirigencia soviética, en su “Declaración del Partido Comunista sobre la situación en Checoslovaquia” del 21 de agosto (PC,





1968b),¹⁰ el PCA sostuvo que se había configurado una situación contrarrevolucionaria, en la que las exigencias en las protestas habían pasado de ser de “mayor democracia” a la eliminación de las milicias obreras y la afirmación del “fracaso total del sistema”. Bajo ese enfoque, el PCA concibió la situación como una “ofensiva ideológica del imperialismo internacional contra los comunistas y la URSS”. Por lo tanto, en ese contexto, la intervención militar del bloque soviético constituía, sobre la base de “la profunda comunidad de intereses entre los países socialistas”, una “ayuda fraternal” a la clase obrera y al pueblo de Checoslovaquia para “salvaguardar el régimen socialista amenazado por la contrarrevolución burguesa” y por el pacto entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y el “revanchismo germano-occidental”.

Para Fernando Nadra (1968),¹¹ uno de los principales dirigentes por aquel entonces del PCA, la “ayuda fraternal” soviética a Checoslovaquia frente al “putsch contrarrevolucionario” (p. 115) era correcta porque se amparaba en tratados conjuntos: uno de amistad, ayuda mutua y colaboración suscripto en 1943 y prorrogado en 1963 y el propio tratado de Varsovia que estipulaba la defensa colectiva frente a las agresiones de la OTAN. Para el dirigente argentino, las protestas y la salida de Checoslovaquia del Pacto de Varsovia constituyeron “un episodio más de la política del imperialismo con la OTAN como brazo ejecutor” con el objetivo de “reeditar la 'marcha hacia el este' de Hitler, provocando la invasión lisa y llana a los países socialistas hasta llegar a la URSS” (p. 217), lo cual habría sido “impedido” por la intervención soviética.

Como habíamos adelantado, el antecedente del “'56 húngaro” estuvo presente en los análisis. Según Nadra (1968), en ambos procesos había una búsqueda por parte de esos países socialistas por “mejorarse” y “los errores de dirección cometidos facilitaron el trabajo de la contrarre-

¹⁰ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

¹¹ El análisis de la situación por parte de este dirigente comunista es clave y representativa de la posición oficial del PCA en tanto fue el encargado de seguir de cerca los acontecimientos en Checoslovaquia y de editar en ese mismo año, al calor de los hechos, el libro que aquí se cita y que aborda en profundidad el proceso desde la óptica del PCA.

volución que impulsada por el imperialismo, sus agentes, sus armas y su financiamiento buscaban restaurar el capitalismo”; se diferenciaron, por el contrario, en que en Hungría “la reacción actuó más sorpresiva y resueltamente”, mientras que en Checoslovaquia “apuntaban al golpe armado pero optaron por ganar fuerza desde adentro, por el ‘camino pacífico’” (p. 176-178).

Es decir, según el análisis del PCA, profundizado en la pluma de uno de sus principales dirigentes, el imperialismo, y en especial el estadounidense, pretendía convertir a Checoslovaquia en “una base de operaciones para una vasta labor de propaganda y provocación contra el mundo socialista y particularmente contra la Unión Soviética, con vistas a una eventual agresión armada”, lo cual habría implicado una “guerra mundial átomo-coheteril” y eso justamente fue lo que se impidió con “la oportuna participación de las tropas socialistas aliadas” (Nadra, 1968: 217). En definitiva, la intervención militar fue justificada y “se trató del internacionalismo proletario en acción” (p. 218).

El PC-CNRR frente a la intervención

El PC-CNRR se había fundado formalmente el 6 de enero de 1968 y recién en marzo de 1969 asumiría el nombre de Partido Comunista Revolucionario.¹²

Hasta entonces, si bien ya había constituido su propia estructura orgánica, mantuvieron la definición de “Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria” con el objetivo de disputar militantes y sectores del propio PCA, e incluso elaboraban documentos para discutir internamente de cara al siguiente congreso partidario. Es en ese contexto, a pocos meses de su declaración constitutiva, que se produjo la intervención en Checoslovaquia.

¹² Aquí a los fines de facilitar la lectura empleamos ambas denominaciones de forma indistinta.





Ya en su “Informe sobre la situación Checoslovaca” del 27 de julio de 1968 (PCR, 2003a: 113-117),¹³ señalaban que las causas de aquellos sucesos debían vincularse a un largo proceso de “deformación de la dictadura del proletariado” en el que se habría impuesto “un control administrativo y burocrático del aparato del Partido sobre las masas”; según su análisis, el origen de esas “deformaciones” tenía “su causa inmediata en la desnaturalización del rol del Partido y de su relación con la clase obrera” en un país “en el que subsistían fuertes restos de las clases explotadoras”. Según el PCR, estos “errores” no eran exclusivos del PC checoslovaco, sino que fueron condicionados por las “deformaciones propias del período de dirección de Stalin”; éstas, al haberse considerado como un simple producto del llamado “culto a la personalidad”, no fueron corregidas “a través de un proceso de masas”. Por el contrario, dichas “deformaciones” se habrían combinado con las “desviaciones oportunistas de derecha” endilgadas por el PCR a Jrushchov, de las cuales Novotny habría sido su representante más típico. Según el “comunismo revolucionario”, sobre el amplio repudio a esas deformaciones durante la gestión de Novotny se estaban montando “elementos de la burguesía”, que pretendían forzar un retroceso hacia el capitalismo, y el imperialismo que buscaba modificar la correlación de fuerzas en el centro de Europa. En este último punto puede identificarse una clara coincidencia con el análisis del PCA en el sentido de que había actores internacionales y nacionales que pretendían restaurar el capitalismo y debilitar la influencia soviética en Europa.

A su vez, el PCR cuestionaba que la situación checoslovaca se discutiera entre los soviéticos y otros países sin la participación del PC involucrado, lo cual, sumado a la presencia de tropas de la URSS en el país, era “lesivo” para el internacionalismo proletario y para el prestigio mundial del comunismo. Sin embargo, se diferenciaban de la posición de “no intervención” desde un punto de vista “liberal-burgués”, defendiendo la posibilidad de intervenir si de lo que se tratara fuera de la derrota de la

¹³ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

“intervención contrarrevolucionaria del imperialismo”. Aún así, enfatizaron que, en las condiciones en que se estaban produciendo los acontecimientos en Praga, una intervención militar soviética junto a otros países socialistas sería “*políticamente incorrecta y de gravísimas consecuencias para el proletariado internacional*” en tanto no resolvería los problemas, sino acentuaría las tendencias “oportunistas y nacionalistas”, debilitando la unidad del MCI frente al imperialismo en un contexto de “auge de las luchas antiimperialistas y de clase en el mundo capitalista”.

Este análisis de la situación lo llevó a considerar que el ingreso de las tropas de Hungría, Bulgaria, la República Democrática Alemana y Polonia con la Unión Soviética a la cabeza era una “invasión”. Ese 21 de agosto, en su “Declaración del Partido Comunista (CNRR) ante la invasión a Checoslovaquia” (PCR, 2003b: 119-120),¹⁴ se “condenó” la intervención por considerarla una flagrante vulneración del “principio leninista de la igualdad e independencia de los partidos comunistas”, fragmentando y debilitando a los partidos comunistas del mundo y al “frente antiimperialista y revolucionario mundial”. En ese sentido, plantearon que la “invasión” estaba en contradicción con principios esenciales del internacionalismo proletario, lesionaba los “sentimientos nacionales” del pueblo checoslovaco y favorecía a corrientes “revisionistas que pugnan por vaciar de su contenido proletario y revolucionario a los PC y a los Estados socialistas”. En una palabra, como destaca Rugar (2019), el respeto a la soberanía checoslovaca fue un elemento clave en la argumentación del posicionamiento del PCR, incluso por encima de las intenciones “contrarrevolucionarias” que identificaban como parte del proceso.

Además de estas declaraciones públicas condenatorias, el PCR realizó actos de masas denunciando estos hechos, algunos partidarios y otros convocados desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), dirigida en aquel entonces por Jorge Rocha, miembro del partido. Pocos días después del ingreso de tropas, en el documento “El PC - CNRR ante

¹⁴ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.





la situación de Checoslovaquia y del campo socialista” (PC-CNRR, 1968a)¹⁵ del 27 de agosto de 1968, insistieron en que repudiaban la intervención porque no se debía sustituir a la clase obrera y una acción de este tipo violentaba su voluntad y la del PCCh, distorsionando la imagen del socialismo ante los pueblos del mundo capitalista.

Como el PCA, el “comunismo revolucionario” también recuperaba el antecedente húngaro, pero, a diferencia del PC, lo distinguían del caso checoslovaco. En Hungría, los “gravísimos errores y desviación” del PC húngaro habían sembrado un “descontento en las masas” a partir del cual la “contrarrevolución levantó cabeza”, apoyada por el imperialismo estadounidense, con el objetivo de restaurar el capitalismo. Según los disidentes del PC argentino, los “sectores más conscientes del proletariado y los campesinos húngaros” encabezados por Janes Kadar, secretario general del partido, habían solicitado la ayuda militar y económica de la URSS para enfrentar la “contrarrevolución” y “superar las desviaciones que habían debilitado el poder socialista”. En este caso, la intervención soviética se habría tratado de “solidaridad proletaria internacional”; como hemos visto, no consideraban que éste fuera el caso en Checoslovaquia.

Al igual que el PCA, el CNRR consideraba que sobre los errores reales y el descontento de amplios sectores checoslovacos se montaba la CIA (organismo de inteligencia de Estados Unidos) y “los monopolios germano occidentales”; éstos agravarían los problemas creados por los “errores y la desviación burocrática, igualmente revisionista, de la anterior dirección encabeza por Novotny”. Sin embargo, a pesar de ese proceso en curso, no podía justificarse una intervención militar, porque, además de las razones mencionadas, eso fortalecía las “tendencias revisionistas” en países de Europa y en las direcciones de los partidos comunistas.

Así como destacamos la incidencia del alineamiento del PCA con la URSS (aunque sin volverlo un factor explicativo mecánico), es interesante detenerse en cómo influyó en la posición del PCR la caracterización que

¹⁵ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

tenía de la Unión Soviética en aquel momento. Todavía no había suscripto a las tesis del maoísmo y, por lo tanto, aún consideraba a la URSS como un país socialista, aunque se manifestaban críticos de sus “deformaciones”. Según Otto Vargas, secretario general del PCR hasta su fallecimiento en 2019, la posición condenatoria de la intervención había sido “prácticamente unánime en el partido” (Brega, 2008, p. 40), aunque también se expresaron algunas voces disidentes.¹⁶

Por otra parte, en el seno del PCR, algunas de las corrientes que confluyeron en su fundación eran más críticas en ese momento de la URSS: había sectores que la consideraban el ala derecha del MCI frente al eje “Cuba-Corea-Vietnam”, a partir del cual se esperaba que se restableciera la unidad del MCI en articulación con los procesos de liberación nacional y antiimperialistas en los países del llamado Tercer Mundo.¹⁷

En el marco de esos debates, la intervención en Checoslovaquia es ilustrativa en tanto marcó un punto de inflexión para el PCR en su visión de la Unión Soviética. En aquel momento la defensa de esta última constituía para muchos comunistas una cuestión de principios; en ese sentido, para algunas corrientes disidentes que fundaron el PCR fue una suerte de desgarramiento su condena pública de la actitud soviética. De cierto modo, fue el punto de partida de un proceso que culminaría con su distanciamiento definitivo de la URSS, asumiendo la tesis maoísta de considerar que a partir de la muerte de Stalin, y especialmente con el XX Congreso y el ascenso al poder de los sectores encabezados por Jrushchov y Brezhnev, se había restaurado el capitalismo y el otrora faro revolucionario se había convertido en una potencia “socialimperialista”. Como bien señala Matías Rubio (2020), la adhesión a esta teoría fue central en la construcción de la identidad partidaria del PCR y la dotó de un rasgo distintivo en relación a otras corrientes de la izquierda. Tanto la condena a la “invasión” soviética como la desilusión frente al apoyo de Fidel

¹⁶ Según este dirigente, tal es el caso de Luis María Aguirre, también conocido como “Gervasio Zárate”, quien encabezó una ruptura en el seno del PCR y se incorporó a las Fuerzas Argentinas de Liberación o Frente Argentino de Liberación (FAL). Para una reconstrucción de la corriente “zaratista”, ver Grenat, 2010.

¹⁷ Entrevista a Luis Molinas (dirigente santafesino del PCR) realizada por el autor en octubre de 2017.





Castro fueron factores que arraigaron fuertemente en el recién fundado PC-CNRR e influenciaron, años después, sus denuncias a la URSS como una de las dos superpotencias que se disputaban la Argentina y el mundo.¹⁸

Con respecto a la posición asumida por Fidel Castro, cabe dar cuenta de cómo ésta fue interpretada por ambos partidos del comunismo argentino. Por su parte, el PCA, en ese momento crítico del proceso cubano, rescató la posición cubana, destacando que Castro había “sabido ver dónde estaba el enemigo”. El PC-CNRR, por el contrario, a través de un artículo en su prensa partidaria consideró errónea la “esperanza” atribuida al dirigente cubano de que “esta intervención desaliente tendencias oportunistas de no poco arraigo en la política interna y exterior de la URSS y otros países socialistas” (PC-CNRR, 1968b).¹⁹

A la vez, destacaban las críticas de Castro al “oportunismo”; en ese punto, consideraban su discurso “un importante aporte a la causa antioportunistas y por el forjamiento de una estrategia única de ofensiva en el movimiento comunista internacional”. Aún así planteaban sus discrepancias con la idea de que al “oportunismo de derecha” no se lo podía superar con el “dogmatismo stalinista” ni con “la sustitución de la clase con el aparato”, ya que “nadie puede reemplazar a la clase obrera” y a su partido de vanguardia. Este fue su posicionamiento público frente al discurso de Fidel Castro; sin embargo, testimonios de dirigentes del PCR destacan “la desilusión” que les produjo el apoyo de Fidel Castro a la intervención y con el tiempo consideraron que ése había sido el momento a partir del cual la dirigencia cubana se habría subordinado al “socialimperialismo soviético”.²⁰

¹⁸ Según Vargas (Andrade, 2005), posicionarse frente a la intervención fue el momento más difícil del proceso de ruptura y la sensación que los atravesó frente a la posición cubana fue el de haberse quedado solos desde el punto de vista internacional.

¹⁹ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

²⁰ Entrevistas realizadas por el autor a Otto Vargas (diciembre de 2015), a Luis Molinas (octubre de 2017) y a Rosa Nassif y a Lucila Edelman (septiembre de 2019). Cabe tener presente también que, según Vargas, en aquel momento “todo contacto con Cuba se hacía por intermedio de la URSS” (Brega, 2008: 108) y que para viajar a la isla había que ir a Checoslovaquia primero.

Como dijimos, al momento de la intervención aún consideraban socialista a la Unión Soviética; de hecho, consideraban que la intervención militar era una “desviación” producto de tendencias “oportunistas” (que habrían pasado a predominar en Europa y América Latina luego del XX Congreso) que no alteraba el carácter socialista de la URSS y que ésta seguía siendo la “potencia más avanzada del proletariado triunfante”. En ese momento, consideraban que la principal “desviación” a combatir en el seno del MCI no era el “revisiónismo soviético”, como plantearían más adelante siguiendo a Mao, sino el “oportunismo de derecha” y el “reformismo” cuyo polo identificaban en la Liga de Comunistas Yugoslavos. De hecho, en la citada declaración (PC-CNRR, 1968b)²¹ cuestionaron fuertemente la posición del Partido Comunista de China, considerándolo un enfoque equivocado que “objetivamente hace el juego al enemigo de clase” al calificar a los soviéticos de imperialistas por su intervención en Checoslovaquia y no como parte de una desviación. Según el PCR, no se debía igualar el socialismo al imperialismo por más que en el primero se manifestaran “desviaciones nacionalistas”, ni se debía transformar una polémica entre revolucionarios en un enfrentamiento como si se tratara de un “enemigo principal”. Consideraban que la derrota de la posición china, atribuida al carácter “dogmático” de Mao, era una condición fundamental para la cohesión del MCI.²²

Vale la pena detenerse aún más en este punto porque permite dar cuenta del momento embrionario del PCR, a menos de un año de su fractura con el PCA y a pocos meses de su fundación oficial. Para el “comu-

²¹ Todas las citas corresponden a este documento hasta que se indique lo contrario.

²² Como destaca Rugar (2019), fue muy importante el año 1968 en la difusión del maoísmo como corriente política diferenciada en el seno del MCI, en particular en relación a su posicionamiento contra la “invasión” soviética, ya que fue de los pocos partidos comunistas que se manifestaron resueltamente en ese sentido: el Partido Comunista de China se opuso tajantemente, rechazando los argumentos esgrimidos por los soviéticos; inmediatamente lanzó una campaña propagandística en contra de la “Doctrina Brezhnev”, a la que acusaba de consistir en políticas “fascistas”, “chovinistas” y “socialimperialistas”; ejemplo de este carácter sería entonces esta intervención militar de los países del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, la cual era equiparada al expansionismo de Adolf Hitler en los treinta y a la ocupación estadounidense en Vietnam (Rea, 1975). Con respecto al PCR, podemos ver cómo ya en 1968 su posición empalmaba con la del PC chino en el rechazo a la intervención, pero se distanciaba de ésta en relación a la caracterización de la Unión Soviética. A nivel más general, con respecto al rol de China en el MCI, el PCR consideraba por aquel entonces que la línea de Mao era “nacionalista, antisoviética y divisionista” (PCR, 2003a: 103).





nismo revolucionario”, el rechazo a la “invasión” soviética no implicaba una condena a la URSS. De hecho, consideraban inconcebible que un proceso de liberación nacional pudiera desarrollarse al margen o en contra del mundo socialista, entendiendo por esto el apoyo tácito o explícito de la Unión Soviética. Según Otto Vargas, se opusieron a la intervención porque la concibieron como “la negación del socialismo” en tanto “no puede imponerse el socialismo por medio de las bayonetas de un ejército extranjero” (Brega, 2008: 40); en ese sentido, puede verse nuevamente el peso que tuvo la cuestión del respeto de la soberanía checoslovaca en el posicionamiento de este partido.

Pero al mismo tiempo, este dirigente enfatiza que pocos años después renegarían de esta defensa del carácter socialista de la URSS: en aquel momento criticaban las “deformaciones” del socialismo pero consideraban que la propiedad estatal de los medios de producción implicaba una condición suficiente para definir al modo de producción socialista; bajo la influencia del maoísmo, considerarían erróneo este enfoque.

Vargas atribuye estos virajes de línea a que en aquel momento eran “un *puzzle* teórico-político” (Brega, 2008: 40); esto se vincula con que en el relato oficial de este partido de la nueva izquierda la adhesión al maoísmo aparece como un salto hacia la madurez política, producto de una suerte de “depuración” de algunas de sus anteriores ideas. En ese sentido, coincidimos con Rugar (2018b) en considerar que, además de la defensa de la lucha armada como única vía a la revolución, las críticas a la política soviética, expuestas públicamente por primera vez a raíz del proceso checoslovaco, fueron uno de los elementos fundamentales en el acercamiento del PCR a las tesis maoístas, cuya adopción oficial en 1974 constituiría un punto de inflexión decisivo en la construcción de una identidad política con perfil propio.

Comentarios finales

La intervención militar encabezada por la Unión Soviética en Checoslovaquia en agosto de 1968 tuvo un profundo impacto en la opinión pública y fue objeto de debate no sólo en el seno de los partidos comunistas europeos, sino también en América Latina y en Argentina en particular. Tanto el PCA como el PCR dieron gran importancia a los acontecimientos que se desarrollaban en el país socialista, puesto que, lejos de concebirlo como un problema interno de los checoslovacos, lo consideraban una cuestión de enorme importancia para el Movimiento Comunista Internacional, para la imagen pública de la Unión Soviética y del comunismo, y para todos los comunistas del mundo: se trataba de una polémica de importancia internacional y de profundas implicancias ideológicas y políticas.

Ambas corrientes comunistas coincidieron en determinados puntos del análisis: efectivamente, ambas consideraron, en mayor o menor grado, que las protestas populares expresaban un descontento real. Éste estaba originado por errores, para el PCA, o desviaciones y deformaciones, para el CNRR, llevados a cabo por las direcciones comunistas del partido checoslovaco. Para el PCA, los comunistas en Checoslovaquia se encontraban en un proceso de cambios para corregir sus errores en el camino de lo iniciado por el XX Congreso del PCUS y la línea impulsada desde la Unión Soviética; en ese sentido, no se cuestionaban tanto las reformas económicas como el intento de autonomizarse de la esfera controlada por la URSS. Para el CNRR, eran deformaciones que se habían originado en el período dirigido por Stalin pero que se acentuaron con las tesis del XX Congreso sobre la base de desviaciones oportunistas de derecha que agravaban la situación y favorecían el descontento.

Ambos partidos coincidieron en que sobre esas protestas populares se montaban los intereses de sectores “fascistas”, “de derecha”, partidarios de la “restauración capitalista” y en especial los del imperialismo estadounidense y el “revanchismo” de la República Federal Alemana, a





quienes se les atribuía el financiamiento y la actividad conspirativa para imponer su política y su control sobre Checoslovaquia y modificar de ese modo las relaciones de fuerza en Europa.

Sin embargo, mientras el Partido Comunista se alineó totalmente con la política intervencionista soviética y la consideró una “ayuda fraternal” propia del internacionalismo proletario, el CNRR la condenó por considerarla una violación de dicho principio y un avasallamiento de la voluntad de la clase obrera y del pueblo checoslovacos, así como de su gobierno y de su partido, aunque esto no implicara que la Unión Soviética hubiera dejado de ser socialista. De todas formas, consideraron que esta actitud no sólo dañaba la imagen del comunismo en el mundo, sino que favorecía a los sectores de derecha, a los revisionistas y en particular al imperialismo estadounidense y debilitaba la unidad del Movimiento Comunista Internacional. Para el PCA, en cambio, la condena de la intervención era funcional a la campaña antisoviética y anticomunista y a los intereses del imperialismo capitalista.

Más allá de la caracterización del incipiente PCR sobre la Unión Soviética, cabe destacar que su posicionamiento crítico frente a la intervención en Checoslovaquia operó como el punto de partida de un proceso de distanciamiento con la URSS que se iría profundizando hasta llegar a considerarla la otra superpotencia que se disputaba el control del mundo con los Estados Unidos, incluso antes de que adoptaran oficialmente (y de manera relativamente tardía) el maoísmo en 1974.

A los fines de nuestra investigación en curso sobre la experiencia del PCR desde su origen a fines de los sesenta hasta el golpe de estado de 1976, consideramos relevante destacar una vez más que el análisis de estos debates nos permite dar cuenta del momento particular en que se encontraba esta corriente política a poco de su ruptura y fundación, aún sin las certezas políticas e ideológicas que conformarían su identidad política. Estas posiciones se irían transformando a lo largo de sus primeros años, a partir de un proceso intenso y contradictorio que embarcaría al PCR en una revisión crítica de sus postulados iniciales hasta su defini-

tiva adhesión al maoísmo y su interpretación particular para la realidad argentina.

Bibliografía

Bonavena, P. (2018). Epílogo. En P. Bonavena y M. Millán (Eds), *Los '68 latinoamericanos: movimientos estudiantiles, política y cultura en México, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Colombia* (p. 315-322). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires - Instituto de Investigaciones Gino Germani.

Califa, J. S. (2015). "Del Partido Comunista al Partido Comunista Comité Nacional de Recuperación Revolucionaria en la Argentina de los años sesenta. Una escisión con marca universitaria". *Izquierdas* 24, p. 173-204. Santiago de Chile: IDEA-USACH.

Carr, E. H. (1979). *La revolución rusa: De Lenin a Stalin, 1917-1929*. Madrid: Alianza Editorial.

Caute, D. (1988). *Sixty-Eight: The Year of the Barricades*. Londres: Hamilton.

Celentano, A. (2008). Maoísmo. En H. Biagino y A. Roig, *Diccionario del pensamiento alternativo* (p. 325-327). Lanús: Editorial Biblos.

Chapman, C. (1968). *Agosto 21. La invasión a Checoslovaquia*. Editorial Edisven.

Cisilino, J. M. (2016). Izquierda y nueva izquierda en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario (1967-1969). Ponencia presentada en las IX Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. La Plata, diciembre de 2016.

Cisilino, J. M. (2017). Debates sobre el camino de la revolución en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario (1967-1969). Ponencia presentada en las XVI Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Mar del Plata, agosto de 2017.

Cisilino, J. M. (2018). El Partido Comunista Revolucionario y el camino





de la revolución en Argentina: El debate sobre la lucha armada en los orígenes de un partido de la nueva izquierda (1967-1969). Ponencia presentada en VIII Jornadas de Trabajo sobre Historia Reciente. La Plata, agosto de 2016. Publicada en L. Luciani y C. Viano (Coord) *Actas* (p. 515-530).

Eley, G. (2003). *Un mundo que ganar: historia de la izquierda en Europa, 1850-2000*. Barcelona: Crítica.

Ferrero Blanco, M. D. (2004). "Las reacciones en Europa tras la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968". En , (p. 218-240).

Grenat, St. (2010). *Una espada sin cabeza. Las FAL y la construcción del partido revolucionario en los '70*. Buenos Aires: Ediciones Ryr.

Hobsbawm, E. (2013). "1968, un año inolvidable". En *Historias. Revista de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia*, 8 (p.3-34).

Judt, T. (2005). *Postguerra. Una historia de Europa desde 1945*. España: Taurus.

Kurlansky, M. (2004). *1968: el año que conmocionó al mundo*. Barcelona: Editorial Destino.

Laufer, R. (2018). "Izquierda y clasismo en los 70. Debates frente al Movimiento de Recuperación Sindical - Lista Marrón del SMATA Córdoba". En *Archivos* 12 (p. 121-142).

Lissandrello, G. (2015). "La discusión estratégica en la izquierda argentina en los años '70: Aproximación al debate entre guerrillerismo e insurreccionalismo en el Partido Comunista Revolucionario (PCR), 1967-1972". En *Andes*, vol.26, n° 1 (s/p).

Lissandrello, G. (2018). El maoísmo argentino frente a la cuestión agraria en los '70: el caso de Vanguardia Comunista y el Partido Comunista Revolucionario (1969-1976). Manuscrito no publicado, Tesis de Licenciatura en Historia, FILO-UBA.

Nassif, S. y Rugar, B. (2016). Las luchas de fines de la década de 1960 y principios de la de 1970. En C. Mateu y C. Spiguel (Eds.) *Movimiento obrero argentino. Aspectos y momentos históricos de la lucha política y sindical*. Buenos Aires: Ediciones Revista *La Marea*.

Patula, J. (1993). *Europa del Este. Del Stalinismo a la democracia*. México D.F.: Siglo XXI editores.

Petra, A. (2017). *Intelectuales y cultura comunista. Itinerarios, problemas y debates en la Argentina de posguerra*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Piemonte, V. (2013). "El Informe Secreto al XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética en la perspectiva oficial del Partido Comunista Argentino. Recepción y primeras repercusiones". En *Anuario del Centro de Estudios Históricos "Prof. Carlos S. A. Segreti"* 13 (p. 223-241) Córdoba.

Rea, K. (1975). "Peking and the Brezhnev Doctrine". En *Asian Affairs*, Vol. 3, N°1, septiembre-octubre (p. 22-30).

Rubio, M. (2017). "Estrategia e inserción del Partido Comunista Revolucionario en el SMATA (1979-1985)". En *Archivos* 11 (p. 143-162).

_____ (2018). "El Partido Comunista Revolucionario y la construcción de una interpretación histórico-política en torno a la cuestión agraria (1967-1987)", *Conflicto Social* 20 (p. 61-91).

_____ (2020). "El Partido Comunista Revolucionario y la "integración" de la teoría del socialimperialismo ruso en Argentina (1968-1984)". En *Izquierdas* 49 (p. 2545-2570). Santiago de Chile.

Rupar, B. (2018a). "El debate chino-soviético y la emergencia del maoísmo como corriente política diferenciada en el Movimiento Comunista Internacional". En *Historia Contemporánea* 57 (p. 559-586).

_____ (2018b). El Partido Comunista Revolucionario: de su ruptura con el Partido Comunista Argentino a su adscripción al maoísmo (1967-1974). En B. Calsapeu Losfeld y M. A. Urrego Ardilla (coord.) *La década Roja (1966-1976)*. Morelia, México: IIH/UMSNH.

_____ (2019). "Emergencia y configuración de la corriente maoísta en Argentina. Antecedentes, fundamentos y caracterización (1965-1974)". Manuscrito no publicado, Tesis presentada para obtener el título de Doctora en Historia, Universidad de Buenos Aires.

Siskindovich, S. (2017). Maoísmo e insurrección popular. La confor-





mación del PCR y de VC en una Argentina en ebullición (1967-1972). Manuscrito no publicado, Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional de Córdoba.

_____ (2020). “El Partido Comunista Revolucionario y la construcción de la delimitación con el Partido Comunista argentino (1968-1969)”. En *Izquierdas* 49 (p. 43-57). Santiago de Chile.

Zourek, M. (2014). *Checoslovaquia y el cono sur 1945-1989. Relaciones políticas, económicas y culturales durante la Guerra Fría*. Praga: Editorial Karolinum.

Zolov, E. (2018). “Los 60 fueron globales”. En *Lento* 62.

Fuentes documentales citadas

Andrade, M. (2009). *Para una historia del maoísmo argentino. Entrevista con Otto Vargas*. Buenos Aires: Imago Mundi.

Brega, J. (2008). *¿Ha muerto el comunismo? El maoísmo en argentina. Conversaciones con Otto Vargas*. Buenos Aires: Ágora.

Castro, F. (1968). “Fragmentos del discurso de Fidel Castro”. En *Cristianismo y Revolución* 10, octubre de 1968, Repositorio Digital “Ruinas digitales”.

Marker, C. (director) (1977). *El fondo del aire es rojo*. [Documental]. Francia: Dovidis.

Nadra, F. (1968). *¿Qué pasó en Checoslovaquia?* Buenos Aires: Editorial Polémica.

PC (1968a). “Sobre los sucesos en Checoslovaquia – Declaración del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de la Argentina”. En Archivo del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina, 18 de julio de 1968.

PC (1968b). “Declaración del Partido Comunista sobre la situación en Checoslovaquia”. En Archivo del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina, 21 de agosto de 1968.

PCR (2003a). "Informe sobre la situación Checoslovaca", 27 de julio de 1968. En *Documentos aprobados desde la ruptura con el PC revisionista hasta el 1° Congreso del PCR, Tomo 1* (p. 116-117). Buenos Aires: Publicaciones 35° aniversario del PCR.

PCR (2003b). "Declaración del Partido Comunista (CNRR) ante la invasión a Checoslovaquia", 21 de agosto de 1968. En *Documentos aprobados desde la ruptura con el PC revisionista hasta el 1° Congreso del PCR, Tomo 1* (p. 119-120). Buenos Aires: Publicaciones 35° aniversario del PCR.

PC – CNRR (1968a). "El PC - CNRR ante la situación de Checoslovaquia y del campo socialista", 27 de agosto de 1968. Archivo cedido al autor.

PC – CNRR (1968b). "Oportunismo y Stalinismo". En *Nueva Hora*, 1° quincena de octubre de 1968 (p. 4).

Testimonios citados:

Entrevista a Otto Vargas (secretario general del PCR), realizada por el autor en diciembre de 2015.

Entrevista a Luis Molinas (dirigente santafesino del PCR), realizada por el autor en octubre de 2017.

Entrevista a Oscar Laborde (dirigente del PC hasta mediados de los noventa), realizada por el autor en mayo de 2019.

Entrevista a Lucila Edelman (dirigente del PCR), realizada por el autor en septiembre de 2019.

Entrevista a Rosa Nassif (dirigente del PCR), realizada por el autor en septiembre de 2019.





Revista Conflicto Social - Año 13 N° 24 - Julio a Diciembre de 2020

Vestigios del archivo audiovisual. La Cinemateca del Tercer Mundo en la Universidad de Buenos Aires (1973-1974)

Vestiges of the audiovisual archive. The Third World Cinematheque at the University of Buenos Aires (1973-1974).

Jorge Laplace*

Recibido: 14 de octubre de 2020

Aceptado: 4 de diciembre de 2020

Resumen: En este escrito realizamos una triangulación de dos fuentes documentales primarias y una fuente secundaria (los *Documentos del Comité de Cine del Tercer Mundo*; las *Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo*; y los testimonios fragmentarios de Jorge Giannoni, quien fuera director de esta Cinemateca del Tercer Mundo en la UBA). A partir de este ensamblaje, analizamos algunas de las estrategias poético-políticas de archivación que diferencian a esta cinemateca de los modelos canónicos y de las lógicas de funcionamiento propias de otros archivos cinematográficos. La resignificación de la noción de *patrimonio* que ahí se realiza, y la tensión entre las dimensiones de *conservación* y *producción* frente a sus registros, serán aquí especialmente abordadas.

Palabras clave: Cinetecas, Archivos, Tercer Mundo, Memoria, Política.

Abstract: In this essay we triangulated two primary documentary sources and a secondary documentary source (the *Documents of the Third World Cinema Committee*; the *Resolutions of the Third World Institute*; and the fragmentary testimonies of Jorge Giannoni, who was the director of this Third World Cinematheque at the UBA). Based on this reassemblage, we analyze some of the poetic-political archiving strategies that differentiate this cinematheque from the canonical models and the operating logics typical of other film archives. We will specially address the resignification of the notion of *heritage* that takes place there, and the tension between the dimensions of *conservation* and *production* of its records.

Key words: Cinematheque, Archive, Third World, Memory, Politics.

* Universidad Nacional de las Artes (UNA) - Maestría en Cine de América del Sur (MECAS). Argentina. Red Argentina de Preservadorxs Audiovisuales (RAPA). laplace.jorge@gmail.com

Introducción¹

La Cinemateca del Tercer Mundo configura un espacio cuyo alcance o límite irradiado no se puede precisar con claridad. Su práctica archivística –fundada en un tiempo histórico convulso, el breve intervalo democrático entre una serie de golpes durante la llamada *primavera camporista*– se propuso una transformación radical del territorio político-imaginario. Desde una visión antagonista, articulando un conjunto disímil de fuerzas en tensión,² reivindicó su condición periférica y descentrada dentro de las guerras imperiales de las imágenes a escala global, promoviendo un modelo de archivo alternativo al de las cinematecas de las metrópolis primermundistas; priorizando la creación de redes colaborativas entre países que atravesaban procesos de liberación o descolonización en Latinoamérica, África y Asia; proyectando –a nivel local– circuitos itinerantes de distribución y producción de material cinematográfico desde las bases.

El siguiente escrito tratará de montar una posible imagen en torno a la ausencia de un archivo marcado por su dispersión, un relato no-conclusivo que evite las certezas de una historia que ha relegado esta experiencia al olvido, interrogando –sobre todo en su borradura– lo que algunas de sus huellas puedan llegar a significar para nuestra actualidad.

Por ello, no se tratará acá del uso de materiales o procedimientos de

¹ Agradezco a N. Taccetta, C. Olivares y L. Varela las observaciones sobre este escrito, también a G. Monti, P. Vázquez y M. Mestman por sus orientaciones sobre este tema.

² Su espectro ideológico abarcó desde el peronismo combativo hasta distintos partidos y movimientos de la izquierda marxista (Peña y Vallina, 2000: 151). En términos ahora de movimientos cinematográficos, esa confluencia de fuerzas heterogéneas que se dio durante la época puede ser observada en la conformación de los equipos que registraron los Congresos del FAS (Frente Antiimperialista y por el Socialismo), donde trabajaron en conjunto fracciones del peronismo, con otras de Cine de la Base y algunos elementos del cine experimental o del underground local (como Alberto Fischerman). Al respecto, Jorge Giannoni recuerda: "Creíamos que había que abrir un frente en el cual se incluyera a los sectores revolucionarios del peronismo. Porque siempre entendimos que en el peronismo han coexistido la derecha y la izquierda y siempre ha ganado la derecha [...] A tal punto que a Cámpora lo dejó gobernar sólo tres meses [...]. Siempre nos planteamos un frente en el cual estuviera desde el peronismo que quería la liberación hasta los que venían de otras identidades políticas." (*Ibid.*, p. 142). Si se quisiera remarcar alguno de los momentos previos de porosidad o no-sectarismo entre las distintas corrientes del cine crítico de ese periodo, podría mencionarse, por ejemplo, la colaboración realizada por Raymundo Gleyzer, como camarógrafo, en ciertos pasajes de *La Hora de los Hornos* (Fernando Solanas y Octavio Getino, 1968). Sobre este tema puede verse el documental *Raymundo* (Ernesto Ardito y Virna Molina, 2003) o *Cómo se hizo "La hora de los hornos"* (Fernando Martín Peña, 2007). Gleyzer también trabajó junto a Narcisa Hirsch, Humberto Ríos y Jorge Giannoni con quienes mantuvo una relación de amistad y colaboración por sobre preferencias partidistas.





archivo en el audiovisual latinoamericano contemporáneo, sea éste uso un trabajo de remontaje con *found footage*, colecciones personales o documentos desclasificados de los archivos administrativos del terror –tal como ocurre, por ejemplo, en la Trilogía *Tristezas de la lucha* (Paz Encina, 2014-2016), donde se ponen en juego y combinan estos tres tipos de materiales– pues creemos que sin una política de archivo es imposible que el cine contemporáneo de nuestra región constituya una poética latinoamericana:

Si los vencedores controlan las imágenes ¿Cómo usarlas para no repetir su versión? ¿Cómo extraer del pasado la historicidad de los vencidos? [...] El cine, y por extensión el arte, tenían una "obligación": desarmar las mitologías del pueblo reducido a insignia museal, liberar a los cuerpos de las biopolíticas del neocolonialismo que usaban a las comunicaciones y la publicidad para amoldar la servidumbre y detener la indignación. [...] El cine político podía movilizar a miles de sujetos ignorados a participar de una *arqueología revolucionaria*, el lazo entre la promesa de un origen y la existencia de una ley fundada en la voluntad del pueblo. La alianza entre *arché* y *praxis* dio contenido a un *realismo crítico* que sedimentó la forma estética latinoamericana del período de los años 1960 y 1970 (Ossa, 2013: 191, 156 y 155).

La relación entre *arché* y *praxis* en el terreno del audiovisual no dejó de ser problematizada durante ese período por distintos colectivos y realizadores. Generar el espacio de inscripción y registro para las imágenes del nuevo cine implicó una apelación directa a las prácticas de archivo hasta entonces dominantes y una redistribución o desplazamiento de su ordenamiento tradicional. La posibilidad de la emergencia de una forma cinematográfica crítica implicaba una ruptura con los patrones coloniales de la máquina de la mirada, abriendo también un conflicto con lo que hasta entonces se entendía como la historia –pretendidamente universal– del medio. La necesidad de revertir la exclusión de las imágenes del pueblo en movimiento pasaba por una dislocación generalizada de las jerarquías del dispositivo cinematográfico y su régimen de visibilidad.

En un texto elaborado para la revista *Cine del Tercer Mundo* n° 2,

Buenos Aires, noviembre de 1969, titulado "Apuntes para un juicio crítico descolonizado", Fernando Solanas y Octavio Getino abordan esta problemática en los siguientes términos:

Las neocolonias que somos no podíamos hacer otra cosa que recibir y acatar junto al objeto-filme de consumo, la interpretación, la sustentación analítica y crítica de aquél, también para el consumo. Es discutible si podíamos o no hacer otra cosa, el asunto es que lo hicimos y no es éste el lugar ni el momento de profundizar el por qué. Baste señalar que las ideas proyectadas desde las metrópolis nos alcanzaban, porque habíamos sido incapaces de construir desde el seno de la realidad nacional ideas propias y activas. Carecíamos de propósitos en nuestro espacio y en nuestro tiempo; en suma; carecíamos, como intelectuales neocolonizados, de historia. De esa historia que al intelectual de las naciones dominantes le sobra. (...) Los dueños mundiales del cine, particularmente los grandes capitales norteamericanos, han impuesto gradualmente para el abordamiento del hecho cinematográfico, determinados valores y categorías aparentemente indiscutibles, tanto es lo que han penetrado ya en el consenso. "Cine" gracias a tal disposición, es aquello que se inscribe dentro de las normas previstas por los monopolios de la producción y la comercialización mundial. Es lo que responde a determinadas pautas de consumo y 'distracción', lo que está destinado a las grandes salas de espectáculo, las obras con un metraje, un paso de película y una duración estandarizada, lo fabricado con técnicas, materiales, aparatología, etc., estandarizado, todo aquello universalmente aceptado por las instituciones dominantes reconocidas. "Cine" es lo que los dueños del cine han dispuesto que sea cine. (Solanas y Getino, 1973: 100 y 101).

En este extenso pasaje vemos cómo la disputa sobre lo que puede ser el cine, suponía una interrogación frontal a su construcción institucional y a las ideas dominantes que sobre el medio circulan, remarcando que la posibilidad de acceder a sus *historias* es una condición indispensable para modificar, reinventar o redefinir esta práctica desde una zona disidente.³

³ Posteriormente, en 1993, la UNESCO invitará al entonces diputado Fernando Solanas a integrar la Comisión





Ahora bien, esa historia no sería algo dado universalmente, pudiendo llegar a *faltar* o a *sobrar*, en función de intereses de dominación coloniales, por lo que se requeriría una operación de construcción o activación crítica de ese pasado cinematográfico para garantizar una diversidad de realizaciones y juicios en nuestro presente.

Mediante un montaje de fragmentos de documentos de archivo, los cuales serán reencuadrados e intercalados en diversas series en función de nuestro objeto de estudio, nos proponemos demostrar que las características de esta cinemateca, pese a su carácter experimental o no-conventional, guardan estrecha relación con problemáticas transversales que vivieron los archivos audiovisuales de nuestra región durante ese periodo, siendo una respuesta concreta a las necesidades y posibilidades de su momento (pues no podemos aún hoy seguir pensando en un modelo ahistórico o platónico –idealista y supuestamente eterno– de lo que debe ser un archivo fílmico). Para esto repondremos algunas discusiones teóricas generales en torno al estatuto del archivo, contextualizando luego esta experiencia local dentro de los debates que a nivel internacional se dieron entre los representantes de archivos fílmicos centrales y periféricos. En ellos observamos un disenso en torno a la función social del *patrimonio*, una discusión cuyo eje puede encontrarse en las distintas estrategias de archivación entendidas como una praxis fundamental e inevitablemente política, tendiente a construir una comunidad en torno a un bien común. Esto nos permitirá especificar el amplio campo de estudios del cine político y social de la región mediante un estudio de caso que se aleja de los análisis de un determinado *corpus* fílmico, pero que ahonda en la voluntad

por la Salvaguardia del Patrimonio Cinematográfico. El 6 de junio de 1998 Solanas descubrirá que sus películas se hallan en la basura de los Laboratorios Cinecolor (último laboratorio fotoquímico de la región, hoy desmantelado). Solanas impulsó desde distintos frentes la creación de una Cinemateca Nacional y el cumplimiento de la Ley 25.119. Pese a los esfuerzos de APROCINAIN, Argentina es de los pocos países de nuestra región que aún no cuentan con una Cinemateca Nacional, la cual existe únicamente *en el papel*. Dicho sea esto contra quienes, como Hayek, auto-promocionaban hace unos años su "puesta en funcionamiento" (Cfr. "Presentación", RECAM Revista Mercosur Audiovisual n°1, 2018, p.5). Se estima que un 90% del cine mudo y un 50% del cine sonoro argentino se han perdido, cifra que incluso puede llegar a incrementarse respecto a las realizaciones más contemporáneas en soportes magnéticos o digitales, diseñados *ex profeso* bajo la lógica de la obsolescencia programada (Cfr. Peña, 2012:11-12). Vid. *infra* nota 19.

programática y en las condiciones materiales que lo sostienen como posibilidad, problema que aún hoy sigue sin hallar respuesta.

Deslindes del archivo audiovisual (I): La proyección del acontecimiento

La estructura del archivo, desde hace décadas, ha dejado de ser considerada como la de un simple repositorio de documentos del pasado. En tanto el conjunto de documentos y su disposición— sean estos textuales o audiovisuales— no están estabilizados naturalmente, espontáneamente, para que los historiadores escriban sobre el pasado, sino que son una "construcción" ⁴ basada en mecanismos de exclusión, selección negativa o destrucción; reverso inevitable de las políticas de recolección y conservación de ciertas series: construcción que da las reglas de lo que se podrá ver y decir, pensar y divulgar, en una determinada época —y también en su devenir— delineando de manera determinante nuestras posibilidades de acceso a la información, la memoria y la expresión. En este sentido, para Foucault, el archivo:

(...) es en primer lugar la ley de lo que puede ser dicho, el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares [...] no es lo que salvaguarda, a pesar de su huida inmediata, el acontecimiento del enunciado y conserva, para las memorias futuras, su estado civil de evadido; es lo que en la raíz misma del enunciado-acontecimiento, y en el cuerpo en que se da, define desde el comienzo el *sistema de su enunciabilidad*. El archivo no es tampoco lo que recoge el polvo de los enunciados que han vuelto a ser inertes y permite el milagro eventual de su resurrección; es lo que define el modo de actualidad del enunciado-cosa; es el *sistema de su funcionamiento*. (Foucault, 1979: 219-220)

⁴ Respecto a la "manipulación" inevitable de todo archivo, Cfr. Didi-Huberman (2007): "Solamente un metafísico ignoraría este carácter construido del archivo, procurando afirmar aún que ahora el origen habla por sí solo. Si, por el contrario, se acepta ese carácter construido, solamente un metafísico consideraría por ello descalificado al archivo" (p. 6).





Esta teorización del archivo como dispositivo que define o delimita *a priori* el horizonte de nuestra actualidad –la *legalidad* y la *legibilidad* de imágenes y enunciados en su emergencia– disponiéndola tanto en su creación como en su recepción, excede la triple acepción de la palabra archivo como sección o depósito, institución edilicia o conjunto orgánico de documentos, y si bien la implica, lo hace sólo en un segundo movimiento.

En el caso del archivo fílmico, esa dimensión instituyente y estructurante de nuestros enunciados y de nuestra mirada –esa “dimensión audiovisual”⁵ del archivo– quizá adquiera otro relieve,⁶ marcando una tensión no sólo entre *corpus* y *canon*, si consideramos aquello que Derrida, en referencia directa a las políticas de la imagen mediática, ha denominado la dimensión “productiva” del “archivo archivante”:

(...) el archivo, como impresión, escritura, prótesis o técnica hipomnémica en general, no solamente es el lugar de almacenamiento y conservación de un contenido archivable pasado que existiría de todos modos sin él, tal y como aún se cree que fue o que habrá sido. No, la estructura técnica del archivo archivante determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir mismo y en su relación con el porvenir. La archivación produce, tanto como registra, el acontecimiento. Ésta es también nuestra experiencia política de los media llamados de información (Derrida, 1997: 24).

Explorando una parte del “fenómeno cinematográfico”, como dispositivo o máquina social que rebasa al “fenómeno fílmico” (Albera, 2012: 80), intentaremos ver cómo se pensó, desde una estrategia poético-política situada, un “modelo alternativo de archivación” que extiende y a la vez

⁵Al respecto, Cfr. Tello (2016): “El archivo es siempre un “archivo audiovisual” [...] Así, es de acuerdo a las variaciones de las relaciones de poder que el saber distribuye tanto las palabras como las cosas, lo visible como lo enunciable. En otras palabras, todo un régimen sensorial dispuesto por el archivo. [...] Articulación, en suma, de las formas de lo que se hace ver y lo que se hace decir, que constituye un saber en estrecho vínculo con las relaciones de poder en un momento histórico dado.” (p. 11).

⁶Sobre esta última dimensión, Cfr. Russo (2017): “Es preciso indagar el problema contemporáneo de los archivos cinematográficos como una parte –en cierto sentido un subterritorio– de la problemática más vasta de los archivos en general, pero por otra parte debe ser caracterizado por los rasgos particulares que hacen a cierta especificidad, bajo un abordaje que trascienda fronteras disciplinares y en el que concurran distintas vertientes de los estudios sobre cine.” (p. 60).

excede lo que comúnmente entendemos por el espacio o el funcionamiento propio de una cinemateca. Ello impactaría no sólo en áreas de la cultura o del campo audiovisual (arrastrando en su transvalorización nociones como "autor", "obra", "arte", "espectador", "circuito de exhibición" y otras, hacia zonas críticas en nuestra contemporaneidad impensadas), sino que también –y sobre todo– repercutiría en las condiciones colectivas de existencia y en su representación –más allá de una supuesta autonomía de la esfera cinematográfica, en abierta ruptura con la concepción del arte como práctica elitaria en armonía con un sistema de explotación– generando el espacio para la inscripción y visualización de otras formas de vida.

Caroline Frick, en su libro de 2011 *Saving cinema: the politics of preservation* menciona algunos de los debates que se producían en ese momento histórico entre los distintos representantes de archivos fílmicos a nivel internacional:

En 1973, un delegado de la Cinemateca de Cuba reprendió amablemente a algunos de los miembros europeos de la FIAF [Federación Internacional de Archivos Fílmicos], argumentando que tenía la impresión que ellos no entendían realmente lo que el cine significa para los países latinoamericanos. Sus películas no son rarezas de museo para ser preservadas en el extranjero, sino vehículos vitales de propaganda y descolonización, un medio de cultura, en el sentido más amplio de la palabra, debiendo entonces ser proyectadas todo lo posible" (Frick, 2011: 155, traducción nuestra).

Una de las propuestas que circuló en dicho congreso consistía –precisamente– en reconocer sólo a los países centrales con archivos bien constituidos, según sus propios parámetros, entendiendo que formar cinematecas en la periferia global –o que estas proliferaran en distintas zonas geográficamente alejadas de un mismo país– sería un despilfarro de recursos, instándolas por tanto a transferir estas películas a sus depósitos para fines de "conservación". Algunos de los archivos fílmicos de Latinoamérica eran vistos de manera despectiva por ciertos miembros de la





FIAF –suponemos que sobre todo por los seguidores de la línea conservacionista ortodoxa de Ernest Lindgren– como "*meros proyccionistas de cine-clubes*" (Frick, 2011: 115).

Algo del conflicto en torno al rol del archivo fílmico y su proyección en la vida social alcanza a percibirse en las minutas de la FIAF⁷ cuando el representante de la Cinemateca de Cuba, Saúl Yelín, responde a las objeciones que realizara Jacques Ledoux, representante de la Cinéma-thèque Royale de Belgique (si bien el debate nos llega a través de una transcripción/traducción necesariamente selectiva, sintética y consensuada). Para Ledoux existía "una aparente confusión entre la idea de preservación fílmica que tiene la FIAF y aquella que los archivos latinoamericanos tienen sobre esta labor" (p. 38), en tanto estos no estaban ocupados en la "preservación de cualquier película", sino centrados "prioritariamente en preservar y *hacer* films revolucionarios" (*Ibíd.*). Frente a esto, Yelín –que anteriormente había realizado un breve catastro de la situación de los archivos fílmicos de nuestra región, mencionando que muchos habían sido reducidos, cerrados o destruidos, y que todos atravesaban "grandes dificultades para poder sobrevivir" (p.36)– responde que no existía confusión alguna, sino que esa "prioridad" resaltada por Ledoux era una verdad, argumentando que los problemas que enfrentan estos archivos no encontrarían una solución efectiva hasta que no cambiara la situación social de los países latinoamericanos y se realizaran con urgencia, para contribuir a ello, "films representativos de su verdadera cultura nacional, usándolos para promover su cultura y defenderla del imperialismo" (*Ibíd.*). Cada quien podrá extraer sus propias conclusiones respecto a cuál habría sido la estrategia adecuada a seguir en ese contexto, si bien es evidente que la cultura de las clases dominantes ha logrado, en gran medida, destruir o incorporar desactivadas las manifestaciones de las culturas populares o disidentes (reduciéndolas a mera mercancía o insignia museal en el mejor de los casos).⁸

⁷ *General Meeting Minutes XXIV FIAF Congress, Moskva, Junio 7–12, 1973.*

⁸ Para una visión más matizada sobre el museo como reducto de una real heterogeneidad de imágenes frente

Recordemos que por esa época –mediados de los setentas– la llamada Operación Cóndor, orquestada desde el Departamento de Estado y la CIA, arrasaba con nuestras poblaciones mediante el terrorismo estatal internacional, brindándole al “mecanismo” una mejor “coordinación” (Kornbluh, 2013: 331 y 366). Los llamados a defenderse (también a un nivel cultural y desde los archivos) de la destrucción del imperialismo no eran entonces sólo una pieza de retórica.

Por otra parte, dependiendo de las misiones y funciones de cada institución, “sus políticas de colección, conservación y exhibición pueden diferir en gran medida” (Fossati, 2001: 25). Algo que la designación diferencial –*archivo, museo o cineteca*– trae a un primer plano, sobre todo respecto a la manera en que se exhiben sus películas, la naturaleza u origen de sus colecciones, y las políticas de acceso, circulación y difusión (*Ibíd.*: 24). Una tensión que se hace palpable, por esos años, entre las distintas concepciones sobre los usos del archivo audiovisual, pero también sobre lo que el cine puede ser, en zonas que atravesaban procesos muy diversos (tal como se atisba en las minutas de la FIAF antes citadas). En ese sentido, las configuraciones, lógicas y tecnologías del archivo dependerán de cada momento histórico, variando “su funcionamiento estratégico y las formas de sus articulaciones de acuerdo a la irrupción impredecible de los acontecimientos” (Tello, 2018: 63).

En los años setentas se consideró algo vital la cuestión de la producción y proyección de materiales como parte de las políticas de funcionamiento de los archivos audiovisuales latinoamericanos. Muchas cinematecas fueron un espacio de resistencia frente a regímenes represivos o de potenciación de los breves momentos de apertura a gobiernos populares.

a la aparente “diversidad” de la imaginaria mediática (que sólo encubre la homogeneidad de fondo de un gusto normativizado por los medios de comunicación), lo que posibilitaría un marco comparativo para la memoria histórica, permitiendo discernir la continuidad de la ruptura, véase: Boris Groys: *Art Power*, London, MIT Press, 2008.





Deslindes del archivo audiovisual (II): La cinemateca descentrada

Con excepción de los textos de Mestman (2001, 2014, 2016) y Peña (2000) en los cuales –en ciertos pasajes– se hace referencia directa a la existencia de esta institución, no encontramos escritos sobre este tema y hasta donde sabemos aún no se han realizado estudios específicos sobre esta Cinemateca. Nosotros recurriremos a dos fuentes documentales primarias:

1) Los Documentos de la *Primera Reunión de Argel* (Diciembre de 1973) y la *Segunda Reunión de Buenos Aires* (Mayo de 1974) del *Comité de Cine del Tercer Mundo*. Este documento, editado por la Cinemateca del Instituto del Tercer Mundo “Manuel Ugarte” de la UBA, dirigido por Saad Chedid, fue incluido hace algunos años como anexo en formato PDF del *Cuaderno N°3* de ReHiMe (Red de Historia de los Medios), “Estados Generales del Tercer Cine. Los documentos de Montreal 1974” (2013-2014), investigación y archivo realizados por Mariano Mestman.⁹ También está disponible para su consulta en línea en la página de la Cinemateca de Quebec.

2) Las *Resoluciones* del Instituto del Tercer Mundo. Publicadas en el *Cuaderno 3* del “Programa Historia y Memoria: 200 años de la UBA”, con una Nota Preliminar de Mariano Millán.¹⁰

También utilizaremos otras fuentes secundarias: principalmente ciertos segmentos de la serie de testimonios recolectados en el libro de Fernando Martín Peña y Carlos Vallina: *El cine quema: Raymundo Gleyzer*. Ediciones de la Flor, Buenos Aires, 2000.

No hemos encontrado aún otros materiales –como pueden ser programas de sus ciclos de exhibición (realizados o proyectados), cartas o

⁹ El número de página del archivo PDF no coincide con la numeración impresa al pie de cada hoja escaneada, por lo que las páginas de este documento –cuyos caracteres externos pueden haber sido alterados o reordenados en distintos momentos para su inteligibilidad– serán en adelante referidas de acuerdo a las de esta digitalización. Por otra parte, el orden de este documento digitalizado también difiere del que está disponible en línea en la página de la Cinématèque Québécoise, por lo que la paginación a la que acá haremos referencia corresponde a la del archivo PDF tal como aparece en el *Cuaderno n° 3* de ReHiMe.

¹⁰ Si bien cada Expediente presenta al inicio su fecha, la disposición de estos en el PDF no sigue en todos los casos un flujo cronológico.

telegramas sobre circulación de películas e intercambios con otras instituciones, fichas técnicas, catálogos o inventarios de sus colecciones, el reglamento de la cinemateca, comunicados, fotografías, grabaciones sonoras, filmaciones propias, guiones o afiches-¹¹ que a medida que vayan apareciendo y se promueva su acceso público sin duda reconfigurarán la imagen que hoy podamos vislumbrar sobre este archivo.

Si lo propio del archivo es su *ser horadado*, falta que muchas veces es resultado de censuras, destrucciones o agresiones (Didi-Huberman, 2007: 1), producto de una violencia política que impone el silencio mediante la inexistencia de determinados documentos, controlando el modo en el cual los hechos son o no recuperados (Ramos y Muzzopappa, 2012: 2), la fusión *poético-política* vivenciada en las prácticas archivísticas del periodo podría quedar en el olvido debido al efecto del trauma causado por los regímenes terroristas que las arruinaron (Rolnik, 2008: 21), a menos que se considere una labor urgente reactivar dicha potencia mediante nuevos ensamblajes.

El 11 de Julio de 1973 se crea, durante el rectorado de Rodolfo Puiggrós, el Instituto del Tercer Mundo en la Universidad de Buenos Aires.¹²

En su organigrama aparece una "Discoteca y Cinemateca" a cargo de Jorge Giannoni¹³ (*Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo*, Expe-

¹¹ <http://archivosenuso.org/viewer/1759>

¹² Ciertos autores proponen fechas alternativas para la creación de este Instituto: bien durante el mes de "Agosto de 1973" (Chinchilla, 2015: 55), bien el "25 de Junio de 1973" (Ghilini, 2018: 134, cita las *Resoluciones del Decanato* N° 79 y N° 80). Nosotros mencionamos esta fecha en base al Expediente 29.475/73 de las *Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo*, pues es ésta la fuente que pudimos consultar. Si bien las primeras dos fojas de este expediente están atravesadas en diagonal por la inscripción manuscrita "Derogada", esa *suspensión* no tendría efecto sino hasta el 31 de Diciembre de 1974, fecha en que fue realizada, según consta en el Expediente 35.424/74. Señalamos esto pues creemos que la literal *tachadura* de la fundación de esta institución es un gesto significativo, dando cuenta de una violencia política también reflejada en la práctica burocrático-administrativa de cada intervención, algo que sin duda hace oscilar la génesis de este archivo y nos recuerda de paso su carácter de constructo sobre una zona en disputa.

¹³ Giannoni había trabajado en *La tierra quemada* (Raymundo Gleyzer, 1964), proyecto que abandona por los peligros del contexto represivo brasileño. En Londres realiza la película *Molotov Party* (1969), especie de intersección de ciertas prácticas experimentales ligadas al cine underground con otras más propias del cine de agitación política. Film similar –por su sentido de la parodia corrosiva y por su desmantelamiento del género policial– a *O Bandido da Luz Vermelha* (Rogério Sganzerla, 1968). Por esa misma época, *Sympathy for the Devil* (Jean-Luc Godard, 1968) realizaba referencias cruzadas a ciertos iconos de la industria cultural, a la cultura de izquierdas y a la llamada contracultura de los países capitalistas. Algo que también sucede en Japón (con el modernismo vulgar y contestatario de Masao Adachi y Koji Wakamatsu) o en Cuba (con Nicolás Guillén Landrián y su apropiación de ciertas técnicas de collage o reensamblaje de materiales, relacionadas, en parte, a la cultura *pop*, en parte, a las vanguardias históricas). Giannoni luego participaría en Italia de la creación del *Colletivo Cinema Terzo Mundo* (C3M), junto a Jorge Denti y Renzo Rossellini, a comienzos de los años setenta,





diente 29.475/73.-7-, pp. 1-11). Giannoni después viajará a Argelia como representante de la UBA ante la *Cuarta conferencia de países no-alineados*. En Diciembre de ese mismo año, en la *Primera Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, celebrada en Argel, Giannoni preside la Comisión de "Difusión y Distribución de las películas de los países del Tercer Mundo".

En la *Resolución* nº 4 los cineastas que participan del encuentro:

Preocupados por el estado de alienación cultural de los pueblos del Tercer Mundo. Persuadidos de la necesidad de luchar contra el cine comercial alienante y contra los monopolios imperialistas. Piden a los gobiernos del Tercer Mundo que tienen el control de sus sectores de distribución y explotación cinematográficas den el nombre de "Tercer Mundo" a una o varias salas especializadas en la proyección de películas del Tercer Mundo, de los Movimientos Nacionales de Liberación y de los países y cineastas revolucionarios (*Documentos de la Primera Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, p. 9).

Al año siguiente, la *Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo* es organizada por Giannoni desde la Cinemateca del Instituto y se realiza el 21 de Mayo de 1974,¹⁴ en Buenos Aires. Ahí también se realizan una serie de Ciclos y las *Primeras Jornadas de Cine Universitario*. En estas últimas, la *Resolución* nº 3 del Comité de Difusión propone:

Llevar nuestro cine y el cine de los pueblos latinoamericanos y del Tercer Mundo al conocimiento de nuestro pueblo, por cuanto el cine es un derecho del mismo y tenemos la obligación de acercar esas expresiones al conjunto para su difusión y análisis para que sirvan al proceso de descolonización de nuestras

desde donde realizaría otros dos films para nosotros desconocidos: *Palestina, otro Vietnam* (1971) y *Bolivia, el tiempo de los generales* (1972) (Mestman, 2016: 85).

¹⁴Esta fecha varía de acuerdo a las fuentes consultadas. Así, en el afiche de la 2° *Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, conservado y digitalizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, aparece "del 20 al 25 de Mayo", mientras que en los Expedientes de las *Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo* se mencionan también otras fechas. Esas diferencias podrían llegar a ser significativas. El contrastar estas tres fuentes con otras (como, por ejemplo, registros de prensa de la época), permitiría trazar algunas sincronías con ciertos acontecimientos del período –de creciente represión– que quizá expliquen las postergaciones de estas actividades.

pantallas, de nuestro pueblo y para implementarlas en la lucha antiimperialista que libra nuestro país [...] Las formas de resolver por el momento este aspecto es llevando adelante una política de difusión a través de los cine-móviles, vecinales, circuitos populares, sindicatos, cines universitarios. Debemos plantearnos no obstante la posibilidad de una difusión más masiva por los circuitos de distribución tradicional y por la televisión. (*Documentos de la Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, p.40).

Según el testimonio de Giannoni, desde la UBA se intentó montar una Cinemateca del Tercer Mundo que pretendía retomar lo que fue la Escuela de Santa Fe, logrando solamente recolectar algunas películas y realizar dos *Ciclos* o *Semanas* de "Cine Latinoamericano" y de "Cine Árabe-Africano". Se recorrían para ello distintas zonas de la ciudad, anunciando con un parlante donde iban a ser las proyecciones, para las cuales se montaban pantallas plegables en villas, universidades y sindicatos. Luego se preguntaba a la gente con la presencia del director (llevando la periferia global a la periferia local) cuál era su opinión, utilizando la película como pretexto para saber cuáles eran sus verdaderos problemas y necesidades. Esas problemáticas serían luego derivadas a centros de producción e incluso se entregarían a las propias comunidades equipos de registro y ciertas nociones de realización –una especie de bisagra entre el Tercer Cine y el Cine Comunitario- (Molfetta, 2017), si bien estas últimas acciones, hasta donde sabemos, sólo quedaron en esbozos (Peña y Vallina, 2000: 150). Las labores de esta cinemateca estaban vinculadas, según Giannoni, a una "corriente clasista antiburocrática del movimiento obrero que variaba de tonalidad según los sindicatos y los lugares", situándose a nivel de base o como mucho a nivel de municipio (en la escala de oficialidad), pues creían que "ya para arriba estaba todo putrefacto" (*Ibíd.*, 151).

Nos gustaría destacar algunas características que fue adquiriendo esta cinemateca que la desmarcan de los paradigmas canónicos de archivo fílmico conocidos por nosotros y que en cierta medida también trans-





forman los postulados de la *Primera Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo* –realizada en Argel– al llevar a la práctica algunos de sus objetivos, sin tener el control de los circuitos de distribución y producción: su defensa del *cine-acto*, como oportunidad de dar la palabra e intervenir en el presente, yendo más allá de una supuesta integridad o centralidad de la obra; su propuesta de un *cine-móvil* como forma de desterritorializar los visionados abriendo circuitos cambiantes por fuera de las salas comerciales establecidas; el hecho de abocarse a una misión que excede los marcos de un estado y que se abre en cambio a un territorio mayor, el de los pueblos en lucha por su liberación, lo que ubica a esta cinemateca en un ámbito no-privado, sino público, pero que no responde en sus lineamientos a una política tan sólo nacional; por último, la tentativa de democratizar, dentro de su comunidad, las tecnologías de registro y el consiguiente desplazamiento de la figura del autor.

Visto a la distancia, el proyecto que esbozan y sólo en parte realizan nos puede parecer desmesurado. Sin embargo deberíamos preguntarnos no sólo por el estado de destrucción del patrimonio audiovisual en la actualidad¹⁵, el fracaso de las políticas públicas en esta materia, sino también por las formas de vida imperantes en nuestro tiempo (que nos conducen a la barbarie, a la miseria y a nuestra destrucción como especie),¹⁶ donde el rol que la imagen mediática juega en ellas, en su dimensión archivante de registro y producción, es determinante.¹⁷

¹⁵ Cfr. *Cien años de Cine Argentino*, donde se menciona la "destrucción sistemática del patrimonio audiovisual" como factor que atraviesa distintos gobiernos (Peña, 2012:11); Cfr. España, Claudio: "Crónica de la destrucción del cine argentino": *La Nación*, 14/6/1998.

¹⁶ Paolo Cherchi Usai, director de la Cineteca Nazionale, en la conferencia de apertura del *76 Simposio Internacional de la FIAF*, titulada "Extinction Rebellion to Film Preservation", se refiere a nuestra actual condición, esta etapa de neoliberalismo y retiro del Estado, como a un plan darwinista cínico, donde subyugados al capitalismo del Corona sólo resistirán los más fuertes. Estableciendo un paralelismo con la indiferencia respecto a la desaparición de los soportes físicos de las imágenes, señala que los problemas a los que se enfrentan las filmotecas no son muy diferentes de los que afectan a otras formas de vida y de creatividad humana, en tanto los principales desastres que pueden destruir el patrimonio fílmico no son ya algo que nos sobrepase y no podamos prever racionalmente (como en el caso de terremotos, inundaciones, sequías, ciclones o erupciones volcánicas), sino un producto directo de causas antropogénicas, de los modos político-económicos de manejarse del ser humano: catástrofes completamente predecibles que son indisolublemente ecológicas y sociales. La centralidad de ese tipo de discursos en el seno de la FIAF da cuenta de un progresivo cambio de mentalidad respecto a los desafíos políticos y materiales con que se encuentran los archivos fílmicos.

¹⁷ La restauración conservadora de nuestra época, signada por la expansión de nuevas derechas, guerras de baja intensidad, *fake news*, *lawfares* y golpes blandos, en la que neoliberalismo y neofascismo se tornan por

Es interesante ver cómo se pensaba en ese contexto la noción de "patrimonio", algo cuyo "rescate" era una "necesidad concreta, punto de partida de un proceso de descolonización", considerando al cine "uno de los más importantes medios de comunicación masiva apto para la recuperación del patrimonio cultural nacional" (*Resolución n° 6, Documentos de la Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, p. 41), envolviendo en este movimiento los campos de la soberanía informativa y económica, proponiendo para ello "efectivizar una distribución nacional del cine documental de corto y largometraje" (*Resolución n° 8*, p. 43), disputando así desde la inscripción documental el concepto de patrimonio – antes vinculado a una concepción cristalizada o quietista más bien propia de élites conservadoras, las cuales bajo una supuesta "universalidad" del pasado, de sus gestas, monumentos, cánones y normas, sólo aseguraban la legitimación de su dominación– redefiniéndolo y poniéndolo al servicio de la transformación de su tiempo.

Los registros del archivo: entre conservación y producción

El proyecto de un circuito de distribución de material cinematográfico en pasos de Super 8, 16 y 35 mm contemplaba "formar en cada región filmotecas donde se vayan acumulando aquellas copias del material que cada Universidad considere bueno poseer"; la creación de "vías o canales de contacto entre Extensión Universitaria y las Organizaciones Populares y del estado que permitan relevar las necesidades de cada región y posteriormente derivar esos problemas a los centros de producción" y una propuesta de coproducción entre el Fondo Nacional de las Artes y las Universidades Nacionales que aportaría equipamiento técnico, material virgen y apoyo económico "a las Cinematecas del Tercer Mundo existentes

momentos indistinguibles, no puede entenderse sin considerar ese poderío archivante, esa centralidad y nocividad de la imagen mediática, su capacidad de disponer un régimen de sensorialidad e imponer un imaginario.





en la UBA y la U.N. Litoral y las que se vayan creando en las distintas Universidades" (*Resoluciones* nº 6 y 8, pp. 41-44), buscando en parte retomar –según el testimonio de Giannoni– la tradición de Fernando Birri y la Escuela Documental de Santa Fe. Esa estrategia de ver al archivo audiovisual más allá de su carácter de espacio de almacenamiento, conservación o exhibición, sino también y explícitamente en su dimensión constructiva¹⁸ (donde los usuarios no actuarían sólo como receptores-lectores-espectadores, sino como productores de un patrimonio futuro y de la inscripción de su propia historia), no implicó un abandono del patrimonio cinematográfico del pasado ni una promoción tan sólo del cine contrainformativo, de intervención militante o del Tercer Cine.

En una Moción General de la *Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo* se abordó la destrucción de la Cinemateca Peña Rodríguez: "importantísima colección de películas argentinas y extranjeras, la mayoría de ellas de la época muda, en algunos casos copias únicas en el mundo", un material donado al INA que estaba siendo "utilizado en fragmentadas partes para compendios televisivos", lo que es descrito como un "vandálico acto" [sic], una "afrenta a la cultura cinematográfica y a la conservación del patrimonio artístico nacional", sugiriendo que ese material fuese derivado "a personas idóneas en la materia" e "incorporado al Centro Nacional de Distribución del FNA" (*Documentos de la Segunda Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo*, p. 36).

Hasta donde sabemos, ese material era el producto de una "reducción" de copias de nitrato en 35 mm de la Colección Peña Rodríguez a un soporte acetato, en paso 16 mm. Las copias en nitrato fueron luego quemadas –costumbre de la época adoptada no sólo por razones de in-

¹⁸ Una concepción similar en este punto fue la de Boleslaw Matuszewski quien proponía no sólo "incorporar, precintar, catalogar y proyectar" las colecciones de "imágenes en movimiento" que fueran donadas por los distintos "fotógrafos cinematográficos". Conformar el acervo de un archivo futuro –con imágenes o "vistas" que ya en 1898 eran consideradas por este camarógrafo polaco como "documentos" y "fuentes de pruebas históricas" (Matuszewski, 2012: 3)– suponía contribuir con registros propios de "acontecimientos inesperados e interesantes" (p. 5). Las implicancias políticas e ideológicas de los archivos cinematográficos, ya en esa fase inicial del medio, fueron consideradas relevantes. La creación de un "depósito de cinematografía histórica" implicaba no sólo "guardar" las imágenes, sino "producirlas". Sólo en 1933 se formará la primera cineteca nacional, la Svenska Filmsamfundet, y recién en 1980 la UNESCO considerará las imágenes en movimiento, con independencia de su soporte material y fecha de creación, como parte del llamado "patrimonio histórico".

flamabilidad y seguridad,¹⁹ sino también, en ciertos casos, para extraer el contenido argénteo de la emulsión— y sus reducciones en ese entonces estaban siendo alteradas y recortadas para emisiones televisivas. Las versiones resumidas de esos largometrajes, realizadas para el programa *El Fondo Nacional de las Artes y el Cine*, transmitido por Canal 7, eran duplicados económicos, realizados con una impresora de contacto que torcía, mutilaba, velaba o descentraba la imagen (Varela, 2019: 169 y 174). Parte de lo que queda de esa "colección" está siendo ahora identificada en el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken de Buenos Aires, y —efectivamente— varias de las películas de ese fondo se encuentran cercenadas, con fragmentos de su metraje perdidos, mezclados o repartidos entre distintos contenedores.

La Cinemateca del Tercer Mundo pudo armar una colección de películas, algunas cedidas por sus realizadores "en calidad de préstamo" hasta reunir los fondos necesarios para comprar las copias (*Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo, Expte. 32.987/74*); también contó con "unos treinta proyectores, que no eran propios, sino de entidades vinculadas" (Peña y Vallina, 2000: 151), y sobre todo pudo organizar —con muy poco y en un breve tiempo— una red de colaboración entre zonas y colectivos antes relegados del terreno de la representación. Su trama intermitente abarcó universidades centrales y de provincias, sindicatos,

¹⁹El diacetato de celulosa, un plástico no-autoinflamable, fue el primer soporte de seguridad empleado en películas cinematográficas (llamado por ello *safety*). No obstante, al ser un material estructuralmente inestable, bajo ciertas condiciones adversas de temperatura, humedad y ventilación, puede generar ácido acético y otras emanaciones corrosivas, lo que conlleva una rápida degradación —incluso mayor que la del anterior soporte nitrato— que va desde una deformación por abarquillamiento hasta la destrucción total de la película. Frente a esto, el soporte poliéster presenta enormes ventajas respecto a estabilidad y durabilidad, algo que no ocurre con los llamados "soportes digitales" diseñados bajo la lógica corporativa de la "obsolescencia programada" y de la "caja negra", sea un disco rígido, un DCP o un servidor de las llamadas nubes. Esta caducidad acelerada *ex profeso* también se replica en las cintas LTO (un híbrido de soporte magnético e información digital) y configura sin duda una suerte de dominación a largo plazo o amnesia programada (pues sólo podrán migrar la información de sus documentos audiovisuales aquellos pueblos o grupos de poder que dispongan de un flujo constante de recursos para hacerlo). Como explican Hertz y Parikka (2012): "En referencia al consumo contemporáneo de productos, la obsolescencia programada toma infinitas formas. No es solamente una ideología, o un relato, también se torna en una micropolítica a nivel de diseño. [...] Una caja-negra, no obstante, es un sistema al cual no comprendemos del todo técnicamente o al que no podemos acceder completamente, como resultado de ello, estas tecnologías, son completamente inservibles cuando se rompen o se vuelven obsoletas. Una vez que la relación entrada-salida o función deseada del dispositivo deja de andar, suele volverse irreparable e inaccesible para el común de los individuos" (p. 6).





organizaciones populares y talleres barriales, poniendo en circulación obras de regiones antes consideradas periféricas.

Sin embargo, el 18 de noviembre de 1974 una nueva Intervención plantea restaurar en la Universidad la divisa "Dios, Patria y Ciencia" (Expte. n° 34.799/74 p. 39). El interventor de ese entonces de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Eduardo Ottalagano, un fascista declarado (Ghilini, 2018: 138), se encargará de instaurar un régimen policial al interior de esa institución, diezmando puestos de trabajo mediante despidos masivos, apresando a estudiantes, persiguiendo cualquier disidencia (a la "infiltración marxista" que adoctrinaba al estudiantado, si optamos por utilizar los términos que se desprenden de los mismos documentos), dejando en suspenso el funcionamiento del Instituto hasta "reestudiar los antecedentes" que determinaron su creación. Ya el 27 de Septiembre se había cambiado la denominación del *Instituto del Tercer Mundo* por otra: *Instituto de la Tercera Posición y de la Patria Grande*. Esta sucesión de cambios en la nomenclatura de la institución también nos indica las fuerzas en conflicto que se disputaban la hegemonía de ese espacio. Por otra parte, la *Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires* volvía a recibir entonces su antigua denominación. Así, el 18 de Diciembre de 1974 desaparece la Cinemateca de la estructura orgánica del Instituto (el Expediente 29.475/73, p.48, ya no presenta un organigrama sino un simple listado de secciones reordenadas). Las clases dominantes comenzaban a mostrar su verdadero rostro, primero mediante una violencia política paraestatal más o menos selectiva (encauzada desde la Triple A), que vendría luego en un terrorismo de estado sin límites (ejecutado por las tres armas).

En uno de sus testimonios, Giannoni se refiere al cierre de esta Cinemateca a fines de 1974, luego de aproximadamente un año de funcionamiento, señalando los asesinatos de Ortega Peña y Mario Hernández (abogado de la Universidad que había redactado su reglamento) como punto de quiebre que lo decide a partir al exilio:

El archivo de la universidad lo sacamos porque en esa época

teníamos convenios con distintas universidades y pudimos ir sacándolo. Hay parte en México, en Venezuela, también en la Cinemateca de Cuba. Perderse no se perdió, lo que pasa es que no está agrupado en un solo lugar (Peña y Vallina, 2000: 175).

Consideraciones no-conclusivas

Un tema que abre tantos interrogantes como éste –y que puede ser cotejado también con el estado de la preservación audiovisual en los países latinoamericanos, problemática que sigue sin resolverse, como sucediera en los setentas, aún en nuevas coyunturas históricas– no puede ser agotado en un primer acercamiento. En este breve escrito –en base a la recolección de algunos documentos y testimonios, que podrían ser leídos también como *vestigios*–²⁰ montamos una posible imagen de lo que fue un proyecto inacabado y alterno de archivo fílmico. La dificultad de encontrar vestigios de este archivo, desde coordenadas oficiales o institucionales, es algo que pasa por su borradura, represión o dispersión, pero también por una impugnación del origen y del poder, en tanto archivo menor o contra-archivo, en una inscripción diseminada tendiente hacia una creciente extra-territorialidad. Distintos organismos de Buenos Aires, Cuyo, Comahue y San Juan asumieron como propias las resoluciones del *Primer Encuentro del Comité de Cine del Tercer Mundo* realizado en Argel en 1973, donde se establecía la creación de distintas Cinematecas del Tercer Mundo. La existencia de algunas cinematecas de similares características en otros países, como la C3M fundada durante los años sesentas en Uruguay,²¹ con la cual incluso comparten su logotipo, pone en

²⁰ Utilizamos acá este concepto tal como fuera formulado por Acero, Cáceres y Herrera Pardo (2014): "El vestigio, en sus distintas formas y circunstancias, se presenta como un contrapunto crítico a las diversas categorías de totalidad y unidad. [...] El simple hecho de enfatizar la nada constituye no sólo un cuestionamiento acerca de los fundamentos que sostienen la realidad, sino que también revela el carácter arbitrario e impositivo de ésta, sus condiciones mismas de posibilidad, pasando a descubrir, a contrapelo, todo el régimen de exclusiones que le subyace" (pp. 17-18).

²¹ Clausurada en 1972 con el secuestro, tortura o exilio de varios de sus fundadores (Barriandos y Medici, 2020: 124).





primer plano la necesidad de un análisis comparativo para la posible reconstrucción arqueológica de estos archivos y sus redes de solidaridad. Esperamos que esto sirva para que archivistas, historiadores y preservadores audiovisuales puedan ahondar en esta experiencia, aportando otras lecturas, antes que avance el olvido. Eso implicaría hacer no sólo un trabajo que recupere los testimonios de sus actores directos o concomitantes (como Jorge Denti, Silvia Oroz y otros), memoria oral indispensable para precisar los objetivos y acciones de esta institución o el contexto de los documentos que puedan llegar a encontrarse (pues acá hablamos de series fragmentadas y archivos atomizados, con suerte, en distintas entidades), sino también una búsqueda de los materiales dispersos en diversas cinematecas de nuestro continente.

Bibliografía

Acero, N.; Cáceres, J.; Herrera Pardo, H. (Comps.). (2014). *Vestigio y especulación. Textos anunciados, inacabados y perdidos de la literatura chilena*. Santiago de Chile: Chancacazo.

Albera, F. (2012). "Arquivo, história e cinema". *Revista da Cinemateca Brasileira* nº1, pp.75-89. São Paulo: Cinemateca Brasileira.

Cherchi Usai, P. (28 de septiembre de 2020). "Extinction Rebellion to Film Preservation. Prevention and Management of Natural and Human Disasters in Film Archives". *76 Simposio Internacional de la FIAF*. Filmoteca de la UNAM. Conferencia internacional por streaming. Recuperada de <https://www.youtube.com/watch?v=yVSXO1xTMHA>

Chinchilla, J. (2015). "El Instituto del Tercer Mundo de la Universidad de Buenos Aires (1973-1974)". *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*. nº51, pp. 47-63, Quito: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Derrida, J. (1997). *Mal de archivo. Una impresión freudiana*. Madrid: Trotta.

Didi-Huberman, G. (2007). *El archivo arde*. La Plata: UNLP.

Fossati, G. (2011). *From grain to pixel. The Archival Life of Film in Transition*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Foucault, M. (1979). *La arqueología del saber*. México: Siglo XXI.

Frick, C. (2011). *Saving cinema: the politics of preservation*. Nueva York: Oxford University Press.

Ghilini, A. (2018). "Peronismo y universidad: la intervención de Justino O'Farrell en la Facultad de Filosofía y Letras (1973-1974)". *Conflicto Social*, N° 20, Vol. 11, pp. 124-142. Buenos Aires: UBA.

Hertz, G.; Parikka, J. (2012). "Zombie Media: Circuit Bending Media Archaeology into an Art Method". *Leonardo*, n° 5, Vol. 45, pp. 424-430. MIT Press.

Kornbluh, P (2013). *The Pinochet file: a declassified dossier on atrocity and accountability*. National Security Archive. New York: The New Press.

Matuszewski, B. (2012). "Una nueva fuente de historia: la creación de un archivo para el cine histórico". *Revista Cine Documental*. N°5, Buenos Aires.

Mestman, M. (2001). "Postales del cine militante argentino en el mundo". *Kilómetro 111* n°2, pp. 7-30, Buenos Aires: Santiago Arcos.

_____ (2014). "*Estados Generales del Tercer Cine. Los documentos de Montreal. 1974*", ReHiMe, Cuaderno N°3, Buenos Aires: Prometeo.

_____ (2016). "Argel, Buenos Aires, Montreal: el Comité de Cine del Tercer Mundo (1973 / 1974)". *Secuencias* 43-44 , pp. 73-93.

Molfetta, A. (2017). *Cine comunitario argentino: mapeos, experiencias y ensayos*, Buenos Aires: Teseo.

Ossa, C. (2013). *El ojo mecánico. Cine político y comunidad en América Latina*. Santiago de Chile: FCE.

Peña, F.; Vallina, C. (2000). *El cine quema: Raymundo Gleyzer*. Buenos Aires: Ediciones de la Flor.

Ramos, A.; Muzzopappa, E. (2012). "La relación memoria / archivo entre sentidos enmarcados y sentidos inducidos". *Actas del Tercer Congreso Latinoamericano de Antropología ALA 2012*. Santiago de Chile.





Rolnik, S. (2008). "Furor de archivo". *Revista Colombiana de Filosofía de la Ciencia*, nº18-19, Vol. IX, pp. 9-22. Colombia: Universidad El Bosque.

Russo, E. (2017). "La cuestión de los archivos: presencia y experiencia en el cine". En Rodríguez, Alejandra y C. Elizondo (comps.) *Tiempo archivado: materialidad y espectralidad en el audiovisual*, pp. 57-76. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Solanas, F.; Getino, O. (1973). *Cine, cultura y descolonización*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Tello, A. (2016). "Foucault y la escisión del archivo". *Revista de Humanidades* N°34, pp. 37-61, Santiago de Chile: UNAB.

_____ (2018). *Anarchivismo. Tecnologías políticas del archivo*. Buenos Aires: La Cebra.

Varela, L. (2019). "Testimonios del nitrato: la reducción de la Colección Peña Rodríguez". En Cappa, C. (ed.) *Nitrato argentino, una historia del cine de los primeros tiempos*. Buenos Aires: Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken.

Fuentes

Afiche de la 2° Reunión del Comité de Cine del Tercer Mundo 1974. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales: UBA [on line] Disponible en <http://archivosenuso.org/viewer/1759>

Documentos de la Primera Reunión de Argel (Diciembre de 1973) y la Segunda Reunión de Buenos Aires (Mayo de 1974) del Comité de Cine del Tercer Mundo, Cinemateca del Instituto del Tercer Mundo "Manuel Ugarte" UBA. Investigación y archivo realizados por Mariano Mestman. Disponible en <http://www.rehime.com.ar/escritos/cuadernos/extra/03comite.pdf> Disponible (2) en <http://collections.cinematheque.qc.ca/wp-content/uploads/2015/06/RINCAP1701web.pdf>

General Meeting Minutes XXIV FIAF Congress, Moskva, Junio 7-12,

1973. [on line] Disponible en <https://www.fiafnet.org/images/tinyUpload/E-Resources/Official-Documents/Protected%20Files/Congress-Reports/1973-Moscow%20GA%20MinutesRED.pdf>

Resoluciones del Instituto del Tercer Mundo. Programa Historia y Memoria. 200 años de la UBA. *Cuaderno 3.* Estudio preliminar por Mariano Millán. [on line] <http://www.uba.ar/historia/archivos/ResolucionInstitutodelTercerMundo.pdf>





Con los vientos del Cordobazo. Los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión

María Laura Ortiz.

Córdoba: Editorial de la UNC, 2019. 460 páginas.

Reseña bibliográfica de Francisco Caamaño*

Recibido: 5 de septiembre de 2020
Aceptado: 12 de septiembre de 2020



María Laura Ortiz nos otorga un atractivo estudio sobre la emergencia y la trayectoria del sindicalismo clasista cordobés entre los años 1969 y 1982. En *Con los vientos del Cordobazo. Los trabajadores clasistas en tiempos de violencia y represión*, la autora emprende una exhaustiva labor analítica con el propósito de reconstruir las condiciones de posibilidad de esa experiencia histórica. El libro, publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, aporta

una perspectiva refrescante a un problema ampliamente abordado por la historiografía. Sin desconocer las contribuciones previas realizadas por otros investigadores, Ortiz revitaliza el estudio del problema a partir de distintas herramientas metodológicas provenientes de la historia oral y cultural.

El año de edición de la obra coincide con el quincuagésimo aniversario del Cordobazo. Ese acontecimiento, nos dice Ortiz, fue fundamental para

* Profesor en Historia egresado de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. franciscocaama@gmail.com

catalizar la formación de un sindicalismo clasista en Córdoba. La gestación de este último fenómeno, sostiene, sólo puede entenderse desde una mirada histórica y una correcta articulación entre la dimensión local y la estructural. De ese modo, cada uno de los siete capítulos de su trabajo despliega una exposición convincente del tema desde un enfoque que combina lo sincrónico con lo diacrónico. La narración de Ortiz concede un inevitable protagonismo a los sindicatos de Fiat Concord (Sitrac), Fiat Materfer (Sitram) y al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) cordobés. Sin embargo, la investigación complementa constantemente esos casos emblemáticos con una serie de experiencias clasistas que, pese a no llegar a hegemonizar la dirección de sus respectivos sindicatos, tuvieron una destacada impronta en el mundo obrero. De esta forma, la historiadora describe la cristalización de una identidad clasista en fábricas mecánicas y metalúrgicas, en industrias productoras de vidrio, de calzado y de caucho, en establecimientos lácteos, en obras de construcción y en el área de sanidad.

El libro está dividido en dos partes. En la primera sección, la autora realiza una descripción de Córdoba y sus trabajadores, sus fábricas, sus modelos sindicales, su vida política y cotidiana. Esa presentación nos entrega algunas definiciones claras pero no estáticas. Durante los años abordados, el clasismo constituyó una fracción especialmente politizada de la clase obrera cordobesa. Esta emergió como una propuesta sindical alternativa al modelo peronista tradicional basado en la negociación. Según Ortiz, la identidad clasista es un aspecto heterogéneo y en constante transformación. Su esencia debe pensarse en términos dinámicos y sincréticos. En su dimensión subjetiva, se expresó como una cultura revolucionaria con un discurso altamente radicalizado. Sus representaciones y valores fueron el producto del contacto entre el ejercicio sindical de sus activistas y las tradiciones acumuladas del pasado, reinterpretadas y reinventadas al calor de la realidad coetánea. El origen de la identidad clasista, sostiene la autora, debe buscarse en la cultura obrera local. Allí se encuentran arraigadas las imágenes y los prototipos del trabajador





ideal. Estos valores, sociabilizados y transmitidos generacionalmente, fueron en ese entonces compatibles con un discurso radical e izquierdista que dio sustento a la mentalidad clasista. Fue en ese sincretismo en donde se cristalizaron sus formas básicas de organización: la creación de redes horizontales entre activistas y sindicatos, la defensa de la autonomía obrera y el empleo de la violencia en sus repertorios de confrontación.

Al momento de pensar al clasismo, la autora busca exceder la mera categorización abstracta. Contrariamente, apela a los propios sentidos, mitos y prácticas obreras, sus denominaciones y percepciones expresadas a partir de sus ideas y su lenguaje. Para lograr esa reconstrucción, Ortiz se sirve de archivos y volantes sindicales, fragmentos de prensas y revistas partidarias y, centralmente, de la realización de entrevistas a ex operarios y sus familiares. El empleo de fuentes orales es el punto más original e interesante de la propuesta de Ortiz. Como recurso metodológico, el diálogo con la memoria de los trabajadores permite a la autora regular la intensidad de su descripción teórica. Al entregar y discutir junto al lector los detalles del vocabulario y el pensar obrero, su argumentación gana atractivo, solidez y convocatoria.

En la segunda parte del libro, la investigadora esboza una periodización sobre la trayectoria del clasismo en Córdoba. La primera etapa de esta cronología se sitúa entre los años 1969 y 1971. Ese lapso temporal está marcado por el ascenso y la caída de Sitrac-Sitram. Junto al desarrollo de grandes puebladas populares como el Cordobazo o el Viborazo, diversos núcleos clasistas se posicionaron como una visible alternativa sindical a los dirigentes procedentes del vandomismo o el peronismo ortodoxo. La segunda etapa mencionada por Ortiz se da entre 1972 y 1974. Bajo la dirección del Smata, el clasismo fomentó una política frentista y pluralista, menos radical en sus discursos y métodos, pero más efectiva al momento de crear redes horizontales de solidaridad entre las distintas estructuras fabriles. Esas alianzas permitieron el reforzamiento del clasismo, en un ambiente en donde la mayor parte del activismo sindical tendió a radicalizarse.

El triunfo del Navarrazo en 1974 creó un nuevo periodo signado por la resistencia y la represión. La destitución del gobierno provincial identificado con el peronismo progresista permitió a los sectores de la derecha local hegemonizar las instituciones del Estado y de los sindicatos. Si bien la coerción ejercida contra los ensayos clasistas fue algo constante desde su nacimiento, el golpe policial de Navarro significó una mayor sistematización de los mecanismos represivos, cuyas distintas modalidades fueron absorbidas por las fuerzas de seguridad del Estado. El ataque a los clasistas de primera línea ejercida por el Estado y los distintos sectores civiles (como algunos miembros del peronismo ortodoxo) conllevó a su repliegue general y a su adopción de medidas de lucha más defensivas. Finalmente, el advenimiento del golpe de Estado de 1976 logró desarticular gran parte de las redes organizativas del clasismo cordobés. Las acciones obreras subsistieron en forma de sabotajes y trabajo a desgano hasta el año 1978, año en el que el enfrentamiento obrero al régimen comenzó a disminuir (contrariamente a lo que ocurrió en el resto del país). El horror y la barbarie fueron los artilugios utilizados para lapidar una de las experiencias más valiosas de nuestro pasado histórico, cuya memoria y debate merecen una constante defensa y actualización.



Política editorial e instrucciones para los autores

La revista *Conflicto Social* realiza con antelación a cada número una convocatoria para la presentación de trabajos sobre un tema específico. En ella se establece la fecha de recepción de las colaboraciones.

Conflicto Social recibe para su publicación artículos que respondan al eje temático de la convocatoria y envíos libres que se encuadren en la problemática amplia del conflicto social. También acepta reseñas y críticas de libros.

Los artículos con pedido de publicación deben ser remitidos por vía electrónica a programaconflicto@mail.fsoc.uba.ar. Es requisito indispensable que sean originales, inéditos, expresados en idioma castellano y que no hayan sido presentados simultáneamente a otras revistas ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación.

Toda la información para el envío de colaboraciones, disponible en: <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/CS/about/submissions#authorGuidelines>

Enlaces institucionales

Cuadernos de Marte

Revista latinoamericana de sociología de la guerra

<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte>

Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH)

gespydhiigg.sociales.uba.ar

Programa de Investigación sobre el Movimiento de la Sociedad Argentina

<http://www.pimsa.secyt.gov.ar>

Revista Theomai

<http://www.revista-theomai.unq.edu.ar>

24



Conflicto Social

Año 13 – Número 24 – Julio a Diciembre de 2020 – ISSN 1852-2262
<http://publicaciones sociales.uba.ar/index.php/CS>